PETER KORNBLUH

PINOCHET DESCLASIFICADO

LOS ARCHIVOS SECRETOS DE ESTADOS UNIDOS SOBRE CHILE



Kornbluh, Peter

Pinochet desclasificado

Santiago de Chile: Catalonia, 2023
532 pp. 15 x 23 cm
ISBN: 978-956-415-039-0
historia de Chile
CH 983

Dirección editorial: Arturo Infante Reñasco
Dirección colección "Un día en la vida" y edición: Andrea Insunza y Javier Ortega
Corrección de textos: Hugo Rojas Miño
Diseño de portada: Agencia Drilo
Fotografía de portada: gentileza diario La Tercera
Retrato de autor: Pedro Rodríguez, gentileza diario La Tercera
Composición: Salgó Ltda.

Edición: julio, 2023
ISBN: 978-956-415-039-0

ISBN digital: 978-956-415-042-0
RPI: 2023-A-6989

Published by arrangement with The New Press, New York

Santa Isabel 1235, Providencia
Santiago de Chile

www.catalonia.cl - @catalonialibros

Un día en la vida, 2023
www.undiaenlavida.cl

PARA ELIANA

Dedico este libro con cariño y amor a la memoria de Eliana Teresa Loveluck, la primera y más significativa chilena en mi vida. Fue a través de sus palabras, emociones y corazón que conocí los horrores del golpe y la pérdida de vidas, esperanzas y sueños en Chile. Fue fruto de su compromiso que me uní a la larga lucha por la paz, la justicia y la dignidad en Chile y a los esfuerzos internacionales por poner fin al régimen de Pinochet. Eliana orientó mi vida hacia el rumbo que ha tomado, tanto personal como profesionalmente, en los últimos 50 años. Ella me condujo, literalmente, a Chile, a sus causas, a sus campos y sus playas, y a una comunidad comprometida de gente buena. Durante muchos años, estos versos de Pablo Neruda adornaron el muro de nuestro comedor:

Oh Chile, largo pétalo

de mar y vino y nieve

ay cuándo

ay cuándo y cuándo

ay cuándo

me encontraré contigo

Índice

2. Desestabilización de la democracia: Estados Unidos y el gobierno de Allende

3. Pinochet en el poder: La construcción de un régimen de represión

4. Consolidación de la dictadura: Estados Unidos y el régimen de Pinochet

Ayuda a la consolidación del régimen: Respaldo manifiesto

Ayuda a la consolidación del régimen: Respaldo encubierto

La CIA y la Dina

Escándalos e investigaciones de la CIA

El síndrome de Chile

Derechos humanos: El debate interno

Kissinger y Pinochet

5. Víctimas estadounidenses

Charles Horman

Frank Teruggi

En pos de la verdad

Una última oportunidad perdida

Boris Weisfeiler

6. La Operación Cóndor: Terrorismo de Estado internacional

Operaciones precursoras

Creación del consorcio de la Operación Cóndor

El asesinato de Letelier y Moffitt

El investigador silencioso,

por Mónica González

Difícil que exista otro estadounidense que haya hurgado con tanta perseverancia y rigor en reconstruir la intervención de Estados Unidos en Chile. Primero, siguiendo los pasos que dieron Richard Nixon, el que fuera presidente de ese país, y su brazo derecho, Henry Kissinger, secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos para impedir que Salvador Allende asumiera la presidencia de Chile; luego, cuando esa estrategia fracasó, para minar la gobernabilidad de la Unidad Popular y facilitar el golpe de Estado de 1973, y, finalmente, prestándole un inmediato apoyo a la dictadura que encabezó el general Augusto Pinochet. Segundo, documentando el respaldo de varios otros gobiernos estadounidenses a la dictadura chilena, a sabiendas de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile y de los actos de terrorismo internacional cometidos por la Dina en el extranjero, incluida la ciudad de Washington D.C. Y, por último, registrando el cambio de política de ese país hacia Chile a fines de la década de los 80.

El trabajo sostenido por más de cuatro décadas de Peter Kornbluh, y por otras pocas personas que han dado esa misma batalla, hizo que fueran emergiendo en cascadas intermitentes miles de documentos secretos de la Casa Blanca, el Departamento de Estado, la CIA, el FBI, la embajada de ese país en Chile y otros varios organismos estadounidenses a lo largo de estos 50 años. En ellos están las piezas de un rompecabezas feroz que este libro detalla hora a hora, día a día.

Supe de la existencia de Peter Kornbluh a mediados de los ochenta, cuando yo trabajaba como periodista en la revista Análisis y entendí que conocer la génesis del golpe de Estado, las pruebas de cómo y a quienes les pagaron gobiernos extranjeros para ser parte de la conjura cívico-militar que derrocó al primer marxista que llegaba al poder por el voto popular, era un nudo

maloliente que debía salir a la superficie. Hasta entonces solo conocía extractos de textos de lo que había sacado a la luz el Comité Church del Senado estadounidense que a mediados de los 1970 investigó las operaciones de ese país en Chile (Acción Encubierta en Chile, 1963-1973). De allí surgieron las primeras evidencias de una intervención que fue brutal y tuvo varias fases.

Supe que Peter Kornbluh, director del Proyecto de Documentación sobre Chile desde 1986 del National Security Archive, con sede en Washington, era el hombre que manejaba y analizaba archivos que para mí eran un tesoro. Debo confesar —con vergüenza— que durante un tiempo breve no comprendí la confianza que despertaba esta institución, pues pensaba que era un organismo del gobierno. Luego supe que ese Archivo de Seguridad Nacional era en realidad una ONG albergada por la universidad George Washington, cuya principal función era bregar por la desclasificación de documentos secretos del gobierno de Estados Unidos. Y cuando me informé de que también analizaban esos documentos y los ponían a disposición de los países afectados, debí ensanchar mi universo. A miles de kilómetros un grupo trabajaba con convicción y fuerza para transparentar días, meses y años de las operaciones más siniestras que han sacudido a nuestros países.

Cuando finalmente lo conocí, junto a su gran amiga Isabel Margarita Morel, la viuda de Orlando Letelier —negociador de la nacionalización del cobre que llevó a cabo el gobierno de la Unidad Popular y luego canciller y ministro de Defensa de Salvador Allende—, empecé a descubrir su disciplina para estudiar la política de América Latina, así como su dimensión humana.

Orlando Letelier fue asesinado por la policía secreta de Pinochet el 21 de septiembre de 1976, cuando un comando de la Dina hizo estallar una potente bomba en su automóvil que transitaba por el barrio de las embajadas de Washington D.C.* La bomba le costó la vida a su joven colega Ronni Karpen Moffitt, quien, con su esposo, Michael, estaba en el auto ese día fatal. Y Peter nunca dejó de atar los cabos sueltos para ir al fondo de ese asesinato y su conexión con otras muertes de la Operación Cóndor. Eso me habló de sus valores y su voluntad.

Pero fue el año 2000 cuando nos acercamos. Tras crear, junto con un grupo de talentosos periodistas, la revista Siete+7, empezamos trabajar juntos: él comenzó a escribir columnas sobre la materia que bien conocía, cuestión que más tarde siguió haciendo en el Diario Siete, en una sección que llamamos «Los desclasificados», donde cada domingo publicaba un nuevo documento con su análisis y opinión. Luego de la muerte de ese periódico (nunca tuvimos avisaje estatal y muy poco privado), Peter se mantuvo cerca nuestro y tras la fundación de Ciper, en 2007, volvimos a trabajar juntos. En todos estos medios fui su editora, una tarea que permite hacerle una fotografía humana a los hombres y mujeres con quienes trabajas. Entonces supe de su rigurosidad y disciplina para perseguir documentos y analizarlos haciendo las conexiones que su avezado ojo percibía. Me interioricé de su labor, de cómo había hecho durante décadas un trabajo duro, sistemático, a veces árido, estrellándose contra no pocos muros. Nunca lo vi bajar los brazos. Concluí que fue su obsesión por perseguir la verdad sobre ciertos hitos de nuestra historia lo que lo convirtió en uno de los principales impulsores de la libertad de información, haciendo posible así, en oleadas sucesivas, unas más estremecedoras que otras, la desclasificación de miles de documentos que contienen parte de nuestra historia. Sí, es verdad, Peter Kornbluh es obsesivo, pero qué habría sido de esos archivos sin su obsesión.

El año 2003 marcó un hito en la vida del hombre que dirigía la sección Chile del National Security Archive: acostumbrado a estar tras bambalinas, publicó la primera edición de este libro, tras la desclasificación de más de 24 mil documentos secretos sobre Chile. En septiembre de ese año, cuando se conmemoraban tres décadas del Golpe de 1973, The Pinochet File fue elegido por Los Angeles Times como uno de los «libros del año».

En ese rompecabezas que fue armando Peter Kornbluh, un hito cambió el mapa de la conspiración: las tratativas entre Nixon y Kissinger para derrocar a Allende se habían iniciado el 12 de septiembre de 1970, tres días antes de que Nixon le ordenara a la CIA evitar que Allende asumiera el poder. Peter lo relató así en Ciper:

> Al mediodía del 12 de septiembre de 1970, Kissinger llamó a Helms para agendar una reunión urgente del «Comité de los 40», grupo de

> alto rango que supervisaba las operaciones encubiertas del gobierno de Estados Unidos. 35 minutos más tarde, en medio de un informe verbal que se le entregaba a Nixon sobre un secuestro de avión con rehenes en Amman (Jordania), Kissinger le dijo al presidente: «El gran problema hoy es Chile». «Quiero una evaluación sobre las opciones disponibles», le respondió Nixon a Kissinger. Cuando Kissinger le indicó que la posición del Departamento de Estado era la de permitir que Allende asumiera el poder y entonces ver qué se podía hacer, Nixon inmediatamente replicó: «¿Igual como ocurrió con Castro? ¿Cómo ocurrió en Checoslovaquia? La misma gente dijo la misma cosa. No permitas que lo hagan».

Y así fue. En uno de los últimos documentos desclasificados sobre las conversaciones entre Nixon y Kissinger, incluido en este libro, aparecen cuatro transcripciones de diálogos hasta entonces desconocidos y relatados por Peter Kornbluh. Me quedo con esa transcripción de la llamada de Nixon a Kissinger el 15 de septiembre de 1973, cuatro días después del golpe. Se lamentaron sobre lo que Kissinger calificó como los diarios llorones y la sucia hipocresía de la prensa por concentrarse en la represión de los militares chilenos y las condenas al rol jugado por Estados Unidos. Nixon señala: «Nuestra mano se mantiene oculta en esto». Kissinger replica: «No lo hicimos nosotros... Quiero decir, les ayudamos. [Tachado] creó las máximas condiciones posibles... En tiempos de Eisenhower, nos habrían tratado de héroes».

En 2013, cuando se nos vino encima la conmemoración número 40 del golpe, Peter dictó una conferencia en Chile —que vivía días de vértigo de memoria inéditos—, y afirmó lo siguiente sobre el rol que le cupo al secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger en el golpe:

> Kissinger es la persona individual en el mundo de la política más responsable de la intervención contra Salvador Allende y de apoyar a Pinochet, sin importar el grado de violencia y terrorismo. Otros miembros del Departamento de Estado preferían coexistir con Allende, pero Kissinger en persona fue a hablar con Richard Nixon para advertirle sobre la amenaza que representaba Allende y su elección como presidente de Chile, por su calidad de precedente. Le habló de la

> necesidad de asegurar que el gobierno de Allende fracasara para que no lo imitaran otros países latinoamericanos o de Europa, como Italia. Para él, una imitación del experimento chileno —la elección democrática de un marxista— podía alterar el equilibrio mundial.

Aunque Kissinger insista en negarlo, los documentos desclasificados —muchos de los cuales fueron publicados por primera vez en este libro— prueban no solo que buscó impedir la asunción de Allende y más adelante apoyó el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende, sino que además revelan su simpatía y respaldo hacia Pinochet.

Peter no disimulaba la impotencia que le generaba la falta de reacción de la justicia de nuestros países o incluso el desinterés de periodistas y políticos frente a las revelaciones que nos caían desde «los [documentos] desclasificados». Uno de los casos que le generaron más sensación de impunidad fue el asesinato del comandante en jefe del Ejército chileno general René Schneider, en octubre de 1970. Documentos desclasificados por el National Security Archive mostraron cómo el gobierno de Estados Unidos incluso financió ese asesinato para impedir que Allende asumiera. Peter buscó, analizó, unió datos y recopiló todo lo que se pudo hallar en Estados Unidos sobre la participación de la CIA en ese crimen que marcó a Chile. De manera absolutamente silenciosa, debe ser quien más trabajó desde fuera del país para hacer justicia. En 1999 llegó a Chile con un expediente en mano para hablar con la familia Schneider e incluso les recomendó un abogado para iniciar un juicio en Estados Unidos contra Kissinger, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca cuando el general chileno fue asesinado. Una de las pruebas que casi no se conocen en Chile sobre ese acto de terrorismo la aportó Peter Kornbluh. Allí se describe la reunión que tuvo Agustín Edwards, el empresario y dueño del diario El Mercurio, pocos días después de la elección de Salvador Allende (4 de septiembre de 1970), con el general Camilo Valenzuela, jefe de la Guarnición de Santiago del Ejército, involucrado en el asesinato de su comandante en jefe. Sin embargo, cuando en Chile Edwards fue interrogado por un juez, negó esa reunión y otras con el jefe de la CIA. Y nadie le mostró esos documentos.

Peter me escribió en un correo: «Lo importante del nuevo documento es que Agustín Edwards le dio información a la CIA de que, entre los jefes militares, el general Camilo Valenzuela estaba listo para un golpe. ¡Qué pena la falta de interés! Por qué no haces tu propia investigación para ver la reacción en la oficina del juez, y si él va a aceptar las mentiras de Edwards en su cara».

Recién en 2001 la familia de Schneider demandó a Henry Kissinger por su implicancia en esos hechos, presentando como evidencia los documentos que Peter había desclasificado. Cinco años más tarde, un tribunal federal de Estados Unidos determinó que su responsabilidad era política, no legal. Kissinger quedó libre, pero, usando los documentos del libro de Peter, el prestigioso programa TV «60 Minutes» hizo un reportaje impactante sobre el rol del ex secretario de Estado en el asesinato del general Schneider.

Como este libro muestra, gracias a los documentos que Peter ha descubierto a lo largo de los años, el rol de Agustín Edwards en la desestabilización de Allende y en el golpe fue emergiendo de manera potente en los documentos desclasificados. El rompecabezas tenía en este empresario influyente una de sus piezas esenciales. Desde los memorandos secretos de Richard Helms, el director de la CIA en esos días de 1970, que dan cuenta de una reunión con Agustín Edwards en el Hotel Madison a mediados de septiembre de 1970, pasando por los que relatan la reunión del dueño de El Mercurio con Kissinger y el fiscal John Mitchell, hasta los registros que muestran a Kissinger llamando a Helms, diciéndole: «Hay que hablar con Edwards».

Sobre la reunión, Kornbluh ha dicho:

> Lo importante de este documento, que no ha sido muy analizado en Chile, es que Agustín Edwards habla mal de la idea de una intervención encubierta para comprar votos en el Congreso (para impedir la ratificación de Allende). Dice: «No es posible, hay muchos riesgos, puede no funcionar, ¿y qué va a pasar entonces? El tipo va a ser presidente. Si pagan a los congresistas, ellos pueden decir algo y va a haber protestas en la calle, y el aliado de ustedes, Roberto Viaux [general de Ejército golpista que ya había protagonizado una asonada en 1969 y que, con los años, fue condenado por su participación en el asesinato del general Schneider], realmente no tiene mucho apoyo». Es

> ahí que los [documentos] desclasificados dan cuenta de que empiezan a hablar con el jefe de la CIA, Helms, sobre una posible acción militar en octubre. El memorando termina con una pregunta de Edwards: «¿Podemos arriesgar que el plan de [Jorge] Alessandri funcione?». Obviamente Agustín Edwards estaba impulsando la vía militar.

La evidencia es clara. Agustín Edwards fue una de las personas más involucradas como conspirador y colaborador de la CIA y los militares. Tenemos los documentos desclasificados para probarlo.**

A través de los años el lazo que lo une a Chile se había ido reforzando. Y por ello, al igual que a todos a los que el 11 de septiembre de 1973 nos partió la vida en dos, Peter nunca olvida esa fecha. Ni en el trabajo ni en lo personal. Envía a quienes considera sus amigos un abrazo, una pequeña reflexión: «Hola Moni, en este día histórico y maldito estoy comunicándome con mis amigos chilenos especiales para decirles: Estoy pensando en ustedes».

Vuelvo a revisar mis correos de tantos años con él. Nunca dejaba de alertar cuando partía a la caza. Y uno sabía que siempre vendría con su canasto lleno. Como lo hizo el 18 de diciembre de 2015: «Moni, el Departamento de Estado va a publicar hoy otro volumen de documentos sobre Chile (1973-1976). Incluyen el caso Charles Horman y Orlando Letelier. Puedo trabajar en un artículo para el lunes, si quieres».

Ese año, en parte gracias a los esfuerzos de Peter Kornbluh y el National Security Archive, a los que se sumaron los de la diplomacia chilena, documentos desclasificados confirmaron uno de los secretos largamente guardados sobre Pinochet y el crimen de Orlando Letelier: la existencia de «evidencia convincente» de que Pinochet «ordenó personalmente» el asesinato del ex canciller y ex ministro de Defensa chileno.

Y es que solo es posible entender el persistente trabajo de Peter Kornbluh si se lo inscribe en la tarea mayor, a la que han contribuido diversas personas en distintos lugares del mundo, por encontrar la verdad sobre lo sucedido en Chile y buscar justicia por lo ocurrido.

Al revisar, me percato de cómo los tribunales chilenos se fueron impregnando de sus investigaciones: el juez Juan Guzmán con documentos y relaciones sobre los crímenes de la Operación Cóndor; los asesinatos de Charles Horman y Frank Teruggi en 1973, o la desaparición de científico Boris Weisfeiler en los dominios de Colonia Dignidad, en Parral, en 1985. Aportó peritos, documentos, expertos. Y todo en silencio. Sin estridencia.

Por fin, en septiembre de 2017, justo cuando Peter Kornbluh se preparaba para inaugurar en el Museo de la Memoria una exhibición de los documentos desclasificados («Secretos de Estado»), se supo que se le otorgaba la Orden Bernardo O'Higgins por instrucción de la presidenta Michelle Bachelet. El reconocimiento le fue entregado en una ceremonia en Washington, el 1 de octubre de ese año. Hubo mucha emoción.

Emoción fue también la que me embargó la mañana del 4 de septiembre de 2020, en plena pandemia de Covid-19, cuando se conmemoraban 50 años de la asunción de Allende y hasta mi correo llegó su mensaje:

Mónica querida,

Quería saludarte en este día histórico. Fue un día que cambió tantas vidas, la tuya, la nuestra, tantas, tantas vidas. Hay que recordarlo, y hoy estoy pensando en ti y en todos mis amigos chilenos. Hicimos un pequeño homenaje a este día en nuestro sitio web, para contribuir a que la historia de lo sucedido siga siendo actual. A medida que envejezco y preveo el final de mi vida laboral en estos temas, he pensado mucho en cómo Chile y los eventos que realmente comenzaron hace 50 años llenaron, cambiaron y dominaron dramáticamente mi vida. Agradezco que, de alguna manera, ni siquiera recuerdo claramente cómo, esta experiencia nos haya unido, y que hayamos logrado colaborar en muchos proyectos importantes, y ser colegas y grandes amigos durante tantos años.

Once días después, volvió a escribirme:

Esta tarde hace 50 años, Nixon dio la orden a la CIA de promover un golpe en Chile...

Ahora espero el correo que sé que recibiré para el 50.o aniversario de esa acción infame, atenta a cualquier nuevo documento que Peter pueda descubrir, para seguir llamando la atención sobre este dramático período de la historia de Chile.

Miro este libro y lo que veo es un rompecabezas gigante. Uno que se ha hecho a pulso y con la fuerza y la convicción de hombres y mujeres que, como Peter Kornbluh, saben que faltan piezas y que terminarlo es clave para completar esta historia nuestra y darle vuelo a la esperanza.

---

* El entonces ministro de Defensa Orlando Letelier fue hecho prisionero el mismo 11 de septiembre de 1973 y enviado a un campo de concentración en Isla Dawson, en el extremo sur del país, con otros dirigentes de la Unidad Popular. Fue liberado tras una intensa presión de influyentes personeros de varios países y en 1975 se instaló a vivir en Washington D.C., donde trabajaba como investigador del Institute for Policy Studies (IPS). Era también director del Transnational Institute, otro centro de estudios internacionales liberal con sede en Ámsterdam, y profesor universitario. Desde que fue expulsado de Chile, en 1974, se dedicó a trabajar en la investigación, análisis y estudio de los abusos y crímenes de la dictadura. Daba conferencias en universidades y centros intelectuales, y se convirtió en 1976 en el opositor a Pinochet más agudo e influyente ante gobiernos europeos y entre los opositores a Pinochet en Estados Unidos. Su intervención lograba bloquear o anular cualquier préstamo que en esos días la dictadura pretendiera recibir desde Europa. El 10 de septiembre de 1976 Pinochet dictó un decreto con el que lo despojó de su nacionalidad. Once días más tarde fue asesinado junto a la investigadora estadounidense del IPS, Ronni Moffitt.

** Fajardo, Marco: «Investigador estadounidense Peter Kornbluh y el Golpe Militar: “Kissinger y Edwards deberían dar una disculpa juntos”», El Mostrador, 3 de septiembre de 2013.

Chile: El veredicto de la Historia

Prólogo a la edición por el 50 o aniversario del golpe militar en Chile

Hace ya medio siglo, a pocos días de ocurrido el sangriento golpe militar en Chile con el apoyo de Estados Unidos, el presidente Richard Nixon llamó a Henry Kissinger, su consejero de Seguridad Nacional, y recibió de él un breve resumen de la situación. «La cuestión de Chile se está consolidando», informó Kissinger acerca del violento golpe de Estado que cambió la historia chilena y del mundo, «y por supuesto que los periódicos se están quejando porque un gobierno procomunista ha sido derrocado». «¿No es sorprendente? ¿No es sorprendente?», comentó Nixon, aludiendo a lo que él mismo calificaba como «esa basura de los liberales» y a la ineptitud de la prensa para apreciar el triunfo imperial de su administración en el contexto de la Guerra Fría. Kissinger estuvo de acuerdo: «Es decir que en lugar de celebrar... En tiempos de Eisenhower nos habrían tratado de héroes».

El presidente Nixon quería asegurarse de que el papel de Estados Unidos en el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende, un gobierno elegido democráticamente, permaneciera en el secreto: «Es decir», como dijo él mismo, «que nuestra mano se mantiene oculta en esto». Kissinger resumió cuál fue ese papel: «No lo hicimos nosotros», dijo aludiendo a una participación directa de Estados Unidos en el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. «Quiero decir, los ayudamos. [Referencia tachada a la CIA] creó las mejores condiciones posibles».

Durante más de treinta años, esta extraordinaria conversación entre los dos funcionarios más poderosos de cuantos fueron responsables de la intervención de Estados Unidos en Chile se mantuvo en alto secreto. Su muy sincero, y altamente clasificado, intercambio verbal sobre el golpe militar fue preservado para la posteridad porque tanto Nixon como Kissinger grababan en secreto todas sus conversaciones telefónicas. En el caso de Kissinger, contaba con un equipo de secretarias del gobierno para

que transcribieran las cintas cada día y fueran creando una colección de «telcons»: las transcripciones de todas sus conversaciones por vía telefónica. Luego declaró que esas transcripciones eran «documentos personales» y se las llevó consigo al dejar el gobierno, para emplearlas en la redacción de sus memorias —por las que recibió millones de dólares en pago (no hace falta decir que en ellas no citó esta «telcon» incriminatoria sobre Chile)—. Tan solo las acciones legales emprendidas al amparo de la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos, emprendidas por mi propia organización, el Archivo de Seguridad Nacional con sede en Washington D.C., pudieron forzar a Kissinger a devolver esos documentos de gobierno a su legítimo propietario: el pueblo norteamericano.

El esfuerzo de recuperar y lograr la desclasificación del oscuro registro histórico relativo a Chile se ha prolongado durante cincuenta años. Y hasta hoy existen documentos que aún permanecen en secreto, tanto en Estados Unidos como en Chile. Aun así, Chile tal vez constituya el estudio de caso más documentado acerca de las operaciones clandestinas que Estados Unidos ha puesto en práctica para provocar un cambio de régimen en América Latina, y miles de archivos secretos han sido desclasificados para dejar al descubierto la maquinaria represiva del propio régimen de Pinochet.

El empeño de dejar al descubierto el extenso rastro documental de archivos secretos comenzó en 1974, con las revelaciones en los medios de prensa sobre la campaña de desestabilización encubierta de la CIA en contra del gobierno legítimamente elegido de Salvador Allende y la Unidad Popular. La indignación pública gatilló un escándalo político en Washington que condujo a una investigación del Congreso y a los famosos informes del comité especial del Senado presidido por el senador Frank Church sobre el historial de las operaciones encubiertas en Chile y el papel de la CIA en el asesinato del general René Schneider. El acto de terrorismo orquestado por la Dina en Washington D.C., en septiembre de 1976, el cual les costó la vida a Orlando Letelier y su colega Ronni Karpen Moffitt, generó una investigación a gran escala del gobierno estadounidense y miles de páginas de documentación legal, diplomática y de inteligencia que dejaron al descubierto la Operación Cóndor y, eventualmente, permitieron identificar al general Augusto Pinochet como el cerebro maestro de esta atrocidad terrorista. Como los lectores del presente volumen podrán comprobar, el

asombroso arresto de Pinochet en Londres el 16 de octubre de 1998, al amparo de la Convención Antiterrorista Europea, suscitó una oportunidad para el gobierno del presidente Bill Clinton de desclasificar unos veinticuatro mil documentos no conocidos hasta entonces, de la CIA, el FBI, la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado, documentación que propició avances significativos en la búsqueda de verdad, justicia y la conformación del prolongado registro histórico.

Las decenas de miles de páginas incluidas en esos documentos que fueron desclasificados y difundidos públicamente en 1999 y 2000 generaron infinidad de artículos en la prensa, programas televisivos, películas, documentales, libros —incluyendo este Pinochet desclasificado— y hasta una exposición especial, «Secretos de Estado», en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Santiago. La documentación sirvió además como prueba en los múltiples casos legales que buscaban responsabilizar a Pinochet y sus militares por sus crímenes contra la humanidad. Los documentos desclasificados de Estados Unidos contribuyeron a la condena de Manuel Contreras, jefe de la Dina, y su subordinado inmediato, Pedro Espinoza, por el asesinato de Orlando Letelier y Ronni Karpen Moffitt, en un juicio en Chile que fortaleció la reanudación del poder civil. Yo mismo viajé a Madrid para presentar ante el juez español Baltasar Garzón un expediente de documentos estadounidenses desclasificados relativos a la Operación Cóndor, con miras a que fueran utilizados en su solicitud de extradición de Pinochet, entonces bajo arresto domiciliario en Londres. Tras el regreso de Pinochet a Chile, el juez Juan Guzmán incorporó todos los documentos incluidos en la primera edición de este libro como parte de las pruebas empleadas en el procesamiento del antiguo dictador chileno. Cientos de archivos estadounidenses desclasificados fueron a su vez empleados en las investigaciones judiciales en Chile sobre los tres ciudadanos estadounidenses asesinados en el país: Charles Horman, Frank Teruggi y Boris Weisfeiler. Los documentos de Estados Unidos implicaron a Pinochet en el encubrimiento del caso Quemados, que significó la muerte de Rodrigo Rojas y lesionó gravemente a Carmen Gloria Quintana. Y otros archivos desclasificados dejaron al descubierto los esfuerzos de Pinochet por orquestar un autogolpe de Estado la noche que perdió el plebiscito en 1988. La familia del asesinado general René Schneider incluso se valió de documentos desclasificados para plantear una demanda civil por

«homicidio involuntario» contra Henry Kissinger ante un tribunal federal de Estados Unidos, la que finalmente no prosperó.

Pinochet, Kissinger y otros de los principales responsables de la tragedia de Chile, como Richard Nixon y Agustín Edwards, se las ingeniaron para eludir el ajuste de cuentas con la justicia por sus acciones criminales y su traición. Pero, aunque no hubo un veredicto legal definitivo, queda al menos el veredicto de la historia: un juicio contundente, como una onda expansiva y perdurable, dictado por la evidencia contenida en los documentos anteriormente confidenciales que han configurado el archivo histórico sobre Chile.

En el caso de Henry Kissinger, los documentos con carácter de alto secreto que escribió y los memorandos de sus conversaciones —conocidos como «memcons»—, que capturaron al dedillo sus palabras, brindan todos una clara prueba de su papel como principal arquitecto de la política de desestabilización del gobierno de Salvador Allende, elegido de manera democrática..., precisamente por haber sido elegido de manera democrática. «Allende fue elegido legítimamente, el primer gobierno marxista que ha llegado al poder a través de elecciones libres», señaló el propio Kissinger a Nixon en un memorando decisivo, de carácter confidencial/delicado, fechado el 5 de noviembre de 1970, explicando por qué Estados Unidos no podía permitir que tuviera éxito la pionera «vía pacífica» de Allende a favor del cambio: «Cuenta con legitimidad a los ojos de los chilenos y de la mayor parte del mundo; no hay nada que podamos hacer para negarle esa legitimidad o alegar que no la tiene». Pero, si Allende generaba un ejemplo exitoso de gobernabilidad, «la propagación imitativa de fenómenos similares en todos lados», argüía Kissinger, «afectaría a su vez de manera significativa el equilibrio mundial y nuestra posición dentro de él». El gobierno de la Unidad Popular de Allende representaba un peligro para Estados Unidos, advertía, porque «su efecto en tanto "modelo" puede resultar insidioso». Ese modelo, pues, debía ser destruido.

Luego, cuando el Ejército chileno, con el aliento de Estados Unidos, destruyó efectivamente de manera violenta ese modelo, Kissinger se volvió el adalid propiciador de la implacable represión desencadenada por la Junta Militar, como queda patente en toda la documentación. Cuando los

informes de inteligencia de la CIA sobre el asesinato masivo de los partidarios de Allende en días posteriores al golpe arribaron al escritorio de Kissinger, él instruyó personalmente a sus asesores para que se abstuvieran de formular públicamente cualquier crítica a las violaciones de los derechos humanos por el nuevo régimen militar. «Creo que debe entenderse cuál es nuestra política: Por más desagradable que resulte la actuación [de los militares], este gobierno es mejor para nosotros de lo que era el de Allende», les dijo según las actas desclasificadas de sus reuniones. Tres años después, cuando sus asesores del Departamento de Estado prepararon una nota diplomática para Pinochet y otros líderes de los países del Cono Sur participantes en la Operación Cóndor, a fin de presionarlos para que pusieran fin a las operaciones internacionales que estaban llevando a cabo sus escuadrones de la muerte, Kissinger bloqueó su entrega y dio órdenes de «no tomar ninguna acción adicional en esta materia»; una orden emitida solo cinco días antes de que la bomba colocada por la Dina bajo su vehículo terminara con las vidas de Orlando Letelier y Ronni Karpen Moffitt en Washington D.C. Y cuando el mismo Kissinger tuvo oportunidad de confrontar a Pinochet cara a cara por las atrocidades cometidas, en lugar de ello, el secretario de Estado lo elogió por su «gran servicio a Occidente al haber derrocado a Allende», en conformidad con un «memcon» calificado como confidencial de su reunión privada en Santiago en junio de 1976. «En Estados Unidos, como usted sabe, simpatizamos con lo que usted intenta hacer aquí», le informó al dictador. «Mi propia evaluación me dice que es usted víctima de todas las agrupaciones izquierdistas del planeta y que su mayor pecado fue derrocar a un gobierno que se encaminaba hacia el comunismo».

Kissinger ha sido ensalzado como uno de los grandes «estadistas» de su época, pero Chile será siempre el talón de Aquiles de su reputación. La inmoralidad y criminalidad de sus actos para socavar la democracia y propiciar la dictadura —registradas en sus propios documentos— habrán de perseguir para siempre su legado.

Este es ya el caso de Agustín Edwards, el magnate chileno de las comunicaciones. Cuando este falleció en 2017, los obituarios de los principales diarios de todo el mundo citaban su colaboración personal con la CIA y el papel que su propio diario, El Mercurio, representó en la

orquestación del golpe militar y luego en ayudar a la consolidación de la dictadura militar. Apoyándose en los archivos de la CIA calificados de alto secreto obtenidos para este libro, el obituario de The Washington Post dejaba claro que Edwards fue «el único chileno —civil o militar— del que se sabe que se reunió entonces con Richard Helms, director de la CIA, en un empeño por promover un golpe militar, incluso antes de que Allende asumiera el gobierno». El obituario de The New York Times decía que «el señor Edwards discutió con Helms sobre el momento oportuno para un eventual golpe militar contra Allende, y sobre quienes podían tomar parte en él», citando «archivos del gobierno de Estados Unidos que han sido desclasificados desde entonces» y que documentan lo que se dijo en esa reunión secreta.

Esos archivos de la CIA exponían los embustes que Edwards contó al pueblo chileno, y también bajo juramento al juez Mario Carroza, que investigó sus actos de traición. En su testimonio ante el juez Carroza acerca del encuentro con Helms, que se produjo apenas diez días después de la elección de Allende, Edwards describía su conversación como «una oportunidad donde se comentó la circunstancia de haberse elegido un presidente comunista en un país democrático, pero en ningún caso se pensaba en un golpe de Estado o algo parecido». En rigor, como los documentos de la CIA prueban sin la menor sombra de duda, Edwards destinó la mayor parte de la reunión a abogar por un golpe instigado por la CIA antes de que Allende asumiera el cargo, y a suministrar abundante información —«inteligencia humana», como la designaba la CIA— acerca de potenciales golpistas militares y civiles (advirtiéndole, aun así, a Helms que el presidente Eduardo Frei resultaría un conspirador poco fiable, porque «Frei probablemente se acobardaría en el último minuto»). Incluso después de haberse entrevistado con Helms, Edwards sostuvo una serie de reuniones adicionales con otros altos funcionarios de la CIA para brindarles más información útil con miras a planear un golpe. «Ahora mismo se están manteniendo nuevas conversaciones y detalladas sesiones informativas con el señor Edwards», reportó Helms a Kissinger. Aún más importante: a las 9:15 de la mañana de 15 de septiembre de 1970 —de acuerdo con el reciente descubrimiento de la agenda interna de la Casa Blanca—, el presidente Richard Nixon sostuvo una reunión secreta con Edwards, una cuestión que el magnate chileno nunca admitió durante su vida. Solo seis

horas después de esta conversación en el Despacho Oval, Nixon le ordenó a Helms y a la CIA promover operaciones encubiertas en Chile para impedir la ratificación de Allende y desestabilizar su democracia.

Para asegurarse de que El Mercurio pudiera convertirse en un megáfono de la desinformación y oposición al gobierno de la Unidad Popular, la CIA proporcionó más de dos millones de dólares de fondos secretos al grupo de comunicaciones de Edwards —fondos que fueron autorizados por el presidente Nixon personalmente—. Los informes de la propia CIA posteriores al golpe le atribuían a su programa de propaganda a través de El Mercurio el mérito de haber representado «un papel significativo en preparar el escenario para el golpe militar del 11 de septiembre de 1973». Y, tras el golpe en sí, la CIA continuó inyectando fondos en secreto al grupo de Edwards, de manera que El Mercurio pudiera «presentar a la Junta Militar de la manera más positiva que fuera posible ante el público chileno» y ayudara a consolidar el régimen militar.

Los archivos históricos desclasificados ofrecen evidencia abrumadora e irrefutable de que Agustín Edwards fue el colaborador chileno más destacado de la CIA, y que su imperio mediático se volvió el arma más poderosa, dentro del arsenal clandestino de la CIA, para precipitar un golpe militar en Chile. Con base en esa documentación, lo que la historia habrá de recordar de Edwards es su traición inequívoca a las instituciones democráticas de su país.

El veredicto de la historia acerca del general Augusto Pinochet quedó formulado hace años. Desde la época de su régimen militar, Pinochet se sumó al panteón de los más infames dictadores de la historia —con Franco, Mussolini, Stroessner, entre otros—, esos que serán recordados por su gran brutalidad y la represión que desencadenaron. Y visto que tantos de los archivos chilenos de su régimen han desaparecido, al igual que tantas de sus víctimas, los documentos surgidos en Estados Unidos han aportado detalles inestimables de los vastos crímenes de Pinochet en contra de sus conciudadanos, las instituciones y la humanidad en su conjunto. Por ejemplo, muchos presumían desde siempre que Pinochet era quien había dado a la Dina la orden para asesinar a Orlando Letelier. Pero los documentos tienen mucho más peso que las meras presunciones. Hoy el

registro histórico, basado en los archivos de inteligencia de la CIA, reflejan que Pinochet «ordenó personalmente» este acto de terrorismo internacional, y que luego buscó encubrirlo barajando «la eliminación» de su sicario personal, Manuel Contreras, que bien podía implicarlo en el asunto. Así, además de ser un tirano represivo, la historia habrá de dejar constancia de que Pinochet era un cerebro maestro del terrorismo. Ciertos documentos adicionales también desclasificados, descubiertos paradójicamente en el contexto de una investigación especial de Estados Unidos en el tema del terrorismo y el lavado de dinero, revelaron a su vez la amplitud de su propia corrupción: los 28 millones de dólares ocultos en más de cien cuentas bancarias extraterritoriales, los pasaportes falsos que empleó y un total de 50.000 dólares en cheques enviados por correo.

Además de estar entre los más infames perpetradores de violaciones a los derechos humanos, la historia registrará que Pinochet alentó el terrorismo internacional. Su indiscutible legado es así el de un dictador despiadado, terrorista y corrupto.

En tanto el autoritarismo sigue amenazando a las instituciones democráticas en todo el mundo, la detallada documentación relativa a los manejos internos del régimen de Pinochet nos recuerda la vileza pura y dura de un gobierno dictatorial y la necesidad de enfrentar y derrotar a los militaristas entre nosotros. Es la razón por la que este libro continúa siendo relevante. Algunos de los documentos desclasificados de mayor interés, incluidos en Pinochet desclasificado —ahora en exhibición permanente en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago—, registran los planes detallados de Pinochet para dar un autogolpe si perdía el plebiscito de octubre de 1988, al igual que los esfuerzos de otros por frustrar sus maquiavélicos preparativos con el fin de sostener su régimen violento. La valentía y la fuerza del pueblo chileno para expulsar a un dictador que, según informaba secretamente la CIA, había advertido a sus asesores aquello de que «yo nunca me voy a ir» constituyen la verdadera conclusión histórica de este relato.

Medio siglo después del golpe, la nación tan singular que Pablo Neruda describió como «un largo pétalo de mar, vino y nieve» continúa siendo un símbolo de la lucha por la verdad, la dignidad, los derechos humanos y la

libertad, a la vez que un ejemplo de los oscuros abusos de poder y represión propiciados, de manera encubierta, desde el extranjero. Cincuenta años después, persiste la necesidad de avanzar en este esfuerzo de dejar un registro histórico —de desclasificar, debatir, comprender y recordar las realidades del pasado—, precisamente porque las atrocidades, el autoritarismo y el tema de las responsabilidades siguen siendo hoy tan relevantes en los acontecimientos mundiales. El veredicto de la historia respecto a Chile pervive como algo inestimable para todos nosotros, porque, inevitablemente, la lucha por desvelar el pasado es la misma lucha por alumbrar nuestro futuro.

P. K., enero de 2023

Introducción:

Historia y responsabilidad

No es un capítulo de la historia de Estados Unidos del que estemos precisamente orgullosos.

Respuesta del secretario de Estado Colin Powell ante una pregunta relativa a la validez moral de la intervención estadounidense en Chile,

20 de febrero de 2003.

Poco antes de la medianoche del 16 de octubre de 1998, dos agentes de Scotland Yard recorrieron las dependencias de una selecta clínica privada londinense y tomaron la habitación en la que se recuperaba de una operación de cirugía en la espalda el ex dictador chileno Augusto Pinochet. Con eficiencia británica, desarmaron a sus guardaespaldas privados, desconectaron todos los teléfonos, apostaron a ocho policías ante la puerta y pusieron al general al corriente de la orden de detención de la Interpol que pesaba sobre él. En cuestión de minutos, las autoridades del Reino Unido lograron así lo que se habían negado a hacer los tribunales chilenos desde 1990, año en que concluyó su régimen militar: detenerlo por crímenes de lesa humanidad.

El general Pinochet, cuyo nombre había llegado a convertirse en sinónimo de flagrantes violaciones de los derechos humanos durante los diecisiete años que duró su dictadura, pasó quinientos tres días bajo arresto domiciliario en Londres, y solo eludió ser extraditado a España y enfrentarse a un proceso por delitos que iban de la tortura al terrorismo gracias a la resuelta intervención diplomática del gobierno civil chileno, presionado por los militares pinochetistas, y la hábil campaña

propagandística que pusieron en marcha sus abogados. Tras más de dieciséis meses de arresto, las autoridades británicas dejaron en libertad al general, que a la sazón contaba ochenta y cuatro años, impulsadas por lo que llamaron «razones humanitarias». Al regresar a su país, no obstante, el antiguo dictador se encontró desposeído de la inmunidad que impedía procesarlo y las autoridades nacionales presentaron cargos contra él y lo interrogaron. En un determinado momento, Pinochet hubo de enfrentarse a la ignominiosa perspectiva de tener que imprimir sus huellas dactilares en una ficha policial y posar para una fotografía de frente y de perfil. Finalmente, los tribunales chilenos dictaminaron que padecía demencia senil y, por tanto, no podía ser juzgado por los abusos cometidos durante su régimen. Sin embargo, al momento de su muerte, Pinochet enfrentaba múltiples acusaciones.

El general eludió así el castigo, pero la epopeya del «caso Pinochet» sigue siendo un hito histórico en la persecución de un justo castigo para quien comete crímenes atroces. Su arresto fue un paso importante para que, después de tantos años, se hiciera justicia no solo a las víctimas de Pinochet, sino que también a cuantos han sufrido represión en cualquier parte del mundo. Asimismo, representó un momento decisivo en lo tocante al uso del derecho internacional para perseguir a los represores; un momento que siempre será recordado por haber transformado el movimiento de los derechos humanos y que constituye un punto de referencia tanto en Chile como en Estados Unidos.

En lo que a la causa de los derechos humanos se refiere, la historia de la detención de Pinochet ha establecido un precedente para la internacionalización de la justicia. Ahora que su caso ha conferido autoridad al concepto de jurisdicción universal —el poder de que dispone cualquier Estado de hacer que quienes transgreden la ley se sometan a los códigos internacionales de justicia—, a los tiranos les será imposible salir de su país con la seguridad de sentirse a salvo de la legislación internacional. Para Chile, el arresto del general acabó con su capacidad de reprimir la memoria colectiva de su nación en lo tocante a los horrores de su régimen e impedir que sus víctimas le exigiesen responsabilidades legales en relación con los crímenes cometidos estando él en el poder. Si bien ha eludido la justicia, Pinochet no se ha librado de ser juzgado. De

hecho, algunos de los altos cargos militares de su gobierno han sido acusados, detenidos y encarcelados.

En tanto que los chilenos siguen resucitando y enmendando un pasado sangriento que permanecía enterrado, en Washington la detención de Pinochet ha desembocado en una ingente exhumación de archivos secretos del gobierno estadounidense. Al levantarse el secreto oficial que pesaba sobre los documentos de Pinochet, no solo se ha renovado el interés internacional que despertaba la historia de su régimen, sino que también la atención del público ha vuelto a dirigirse hacia la responsabilidad que tuvo Estados Unidos en el final de la democracia y el advenimiento de la dictadura en Chile.

El otro 11 de septiembre

Durante casi cinco décadas, el 11 de septiembre ha sido un día de infausta memoria para los chilenos, los latinoamericanos en general y la comunidad internacional. Fue el día en que los reactores de la Fuerza Aérea chilena atacaron el Palacio de La Moneda de Santiago de Chile, a modo de preludio del brutal golpe de Estado que elevó al poder a Pinochet. Hoy que tenemos tan reciente el 11 de septiembre de 2001, es más probable que la fecha sea recordada por los conmovedores ataques terroristas perpetrados contra el World Trade Center y el Pentágono, hecatombe que ha hecho que Estados Unidos y Chile compartan esta «fecha atroz», como la ha descrito con gran elocuencia el escritor Ariel Dorfman, «martes de nuevo, de nuevo un 11 de septiembre sembrado de muerte».

Con todo, las historias respectivas de Estados Unidos y Chile convergen en mucho más que en la coincidencia del día elegido por Osama bin Laden, dado el papel fundamental que ha representado Washington en el traumático pasado de Chile. En los albores de los sesenta, los estadistas norteamericanos dieron principio a más de una década de empeños por dirigir la vida política de Chile, lo que culminó en un intento clandestino de «derrocar» —tal como lo expresaban sin tapujos Nixon y los miembros de su gabinete durante sus reuniones— el gobierno legítimo de la Unidad Popular, presidido por Salvador Allende. Pocas horas después de haberlo

logrado, el 11 de septiembre de 1973, la Casa Blanca comenzó a transmitir mensajes confidenciales en los que felicitaba a Pinochet por su llegada al poder y expresaba su «deseo de cooperar con la Junta Militar y ayudar de cualquier modo que se estime oportuno». Hasta septiembre de 1976, fecha en que el general envió a un grupo de asesinos con órdenes de perpetrar un acto de terrorismo internacional en la ciudad de Washington, el secretario de Estado Henry Kissinger se afanó en mantener una postura de respaldo incondicional a su régimen. El asesinato de Orlando Letelier y Ronni Moffitt en las calles de la capital estadounidense dominó las relaciones de ambos países durante la década siguiente, hasta que la dictadura comenzó a desmoronarse a causa de la creciente presión popular chilena, y Estados Unidos abandonó por entero y de forma definitiva a su antiguo aliado anticomunista. El impacto de la política estadounidense se verificó no solo en la modificación del gobierno de Chile en 1973, sino que también en el curso violento que este adoptaría en los próximos diecisiete años.

Y si este influjo sobre los acontecimientos de Chile es innegable, no es menos evidente que estos han regresado ahora para condicionar a su vez el discurso político de Estados Unidos... y del resto del mundo. El país ocupa un lugar especial en los corazones y las mentes de la comunidad internacional. Desde los albores del decenio de 1960, Chile ha atraído la atención internacional en relación con toda una serie de proyectos políticos y experimentos sociopolíticos de naturaleza utópica. En 1964, por ejemplo, se convirtió en el «modelo» designado por la Alianza para el Progreso, programa estadounidense concebido para evitar movimientos revolucionarios en América Latina mediante el fortalecimiento de los partidos centristas, democristianos y de clase media. Sin embargo, la elección de Salvador Allende el 4 de septiembre de 1970 lo convirtió en la primera nación hispanoamericana que elegía de manera democrática a un presidente socialista. La «vía chilena al socialismo», el camino pacífico propuesto en Chile hacia la reforma, cautivó la imaginación de las fuerzas progresistas de todo el planeta, al tiempo que provocaba la consternación de los estadistas de mentalidad imperialista de la Casa Blanca. «Nosotros establecemos los límites de la diversidad», oyeron decir a Kissinger ante sus subordinados cuando el gabinete de Nixon emprendió contra Allende una serie de operaciones encubiertas que, «en el peor de los casos, garantizarán su fracaso», según los memorandos secretos de la Casa Blanca,

«y, en el mejor, propiciarán situaciones que harán más factible su posterior derrumbamiento o derrocamiento».

El marcado contraste existente entre el carácter pacífico del programa elaborado por Allende para conseguir el cambio y el violento golpe de Estado que acabó con su vida y con la larga trayectoria de las instituciones democráticas del país no pudo menos de conmover al mundo. Las inclinaciones dictatoriales del régimen de Pinochet y su pésima actuación respecto de los derechos humanos no tardaron en convertirse en una cuestión política y humanitaria de la que se hablaba en todo el planeta. Cuando salió a la luz la implicación de la CIA en el derrocamiento de Allende y la frivolidad con que había apoyado Washington a la Junta Militar, la opinión pública mundial centró aún más la atención en Chile, hasta el punto de que a los estadistas de la Casa Blanca les resultó imposible seguir haciendo caso omiso de las críticas. «Chile ha asumido la imagen de la España de los cuarenta en calidad de símbolo de la tiranía de derecha —refirió a Kissinger uno de sus ayudantes en un informe secreto —. Se quiera o no, nos identifican con los orígenes del régimen y, por ende, nos atribuyen parte de la responsabilidad de sus actos». La embajada estadounidense señalaba en un escrito estratégico de 1974 clasificado como secreto:

> Chile se ha convertido en una causa célebre tanto en el mundo occidental como en el comunista. Lo que está sucediendo allí es, por lo tanto, una cuestión de especial importancia para Estados Unidos. Por distante y pequeño que sea, el país se ha considerado desde hace mucho tiempo y de forma universal como una zona en la que se puede llevar a cabo experimentos económicos y sociales, y ahora se encuentra, en cierto sentido, en primera línea del conflicto ideológico mundial.

En Estados Unidos, Chile fue a sumarse a Vietnam como motivo primordial de la batalla que se estaba librando en el país en torno a la corrupción de los valores nacionales a la hora de elaborar y poner en práctica la política exterior. A mediados de la década de 1970, lo que sucedía en Chile generó un debate de gran relevancia acerca de los derechos humanos, los actos encubiertos y el lugar en que debían quedar unos y otros en la actuación de

Estados Unidos en el extranjero. La indiferencia de Kissinger ante las atrocidades cada vez mayores de Pinochet consternó al público y llevó al Congreso a aprobar una legislación que sentó precedente destinada a reducir la ayuda que se prestaba al régimen, así como a exigir a toda ayuda económica y militar estadounidense una serie de criterios relativos a los derechos humanos. Por otra parte, cuando se reveló la campaña secreta emprendida por la CIA con el objeto de obstruir la elección de Allende y, después, desestabilizar su gobierno, elegido democráticamente, surgieron no pocos escándalos en relación con los servicios de inteligencia, los que obligaron por vez primera al país «a debatir y determinar si resulta o no conveniente el empleo futuro de operaciones secretas en cuanto instrumento de la política exterior de Estados Unidos», en palabras del difunto senador Frank Church.

De hecho, Chile se convirtió en el acicate de la primera audiencia pública en torno a las acciones encubiertas. El Comité Selecto para el Estudio de Operaciones Gubernamentales Relacionadas con Actividades de Inteligencia —conocido como el Comité Church— se embarcó en la primera investigación de relieve del Congreso acerca de operaciones secretas y publicó los primeros estudios que revelaban los detalles de tales acciones en el extranjero: Covert Action in Chile, 1963-1973 y Alleged Assassination Plots Involving Foreign Leaders. Una vez dada a conocer la campaña encubierta emprendida en Chile por el gobierno estadounidense llevó a que se descubrieran otros excesos, escándalos y casos de corrupción de la política exterior de este último.

Los hallazgos del Comité Church, unidos a la repulsión mostrada por el público ante la asociación de Washington con la brutalidad de Pinochet, propiciaron la aparición de un movimiento generalizado que tenía por objetivo reconciliar la política exterior de Estados Unidos con los preceptos morales de sus habitantes. «Para un buen número de personas de esta nación, Chile no es más que el último ejemplo de que Estados Unidos no está siendo fiel a sus valores», reconocía un memorando interno del Departamento de Estado en junio de 1975. El debate surgido en torno a la conducta reprobable seguida en Chile por el gobierno estadounidense dio lugar, tal como escribió Richard Harris en la revista The New Yorker en

1979, a la siguiente cuestión fundamental: «¿Cómo hemos podido convertirnos en semejante nación?».

La pregunta no ha dejado de ser relevante para el debate mundial acerca del ejercicio del poder estadounidense en el siglo XXI. De hecho, al estudiar desde un punto de vista histórico las relaciones mantenidas entre Estados Unidos y Chile nos encontramos con los mismos aspectos conflictivos a los que hubo de enfrentarse el pueblo estadounidense —así como la comunidad internacional— cuando el gobierno de Bush declaró la guerra a Irak: un cambio de régimen, un ataque unilateral por parte de Estados Unidos, casos de terrorismo internacional, asesinatos políticos, soberanía, derechos humanos y muerte de inocentes. Después de tantos años, Chile sigue siendo un caso de estudio fundamental en lo tocante a la ética —o su ausencia, por ser más exactos— de la política exterior estadounidense. «En lo que concierne a (...) Chile en la década de 1970», admitió el secretario de Estado Colin Powell cuando le preguntaron qué derecho tenía el gobierno estadounidense de sentirse superior a Irak en lo moral cuando Washington había respaldado el derrocamiento de la democracia chilena, «no es un capítulo de la historia de Estados Unidos del que estemos precisamente orgullosos».

Chile desclasificado

A pesar de la importancia y notoriedad que ha tenido Chile en el debate, aún en curso, sobre la política exterior de Estados Unidos, los documentos históricos sobre el particular han permanecido en gran parte fuera del alcance del público. Y, sin embargo, las operaciones clandestinas, los asesinatos, los escándalos, los encubrimientos y las controversias relativas a las violaciones de los derechos humanos dieron lugar a ingentes cantidades de testimonios escritos guardados en el más alto secreto. Aun así, solo se levantó realmente el que pesaba sobre un puñado de los cientos de papeles estudiados por los funcionarios pertenecientes al comité del Senado que investigó los hechos a mediados de la década de 1970. En el proceso legal instruido contra Richard Helms, antiguo director de la CIA, por mentir ante el Congreso sobre las operaciones clandestinas efectuadas en Chile y en los pleitos civiles presentados por las familias de las víctimas más famosas de

Pinochet —Charles Horman, Orlando Letelier y Ronni Karpen Moffitt—, se mencionaron miles de documentos referentes a las relaciones de Estados Unidos con el régimen del general durante el momento de mayor represión. No obstante, el gobierno se negó a hacerlos públicos, y los pocos que se sacaron a la luz estaban tan censurados (hasta el punto de que de muchos de ellos solo eran legibles la fecha y el título) que resultaban inútiles para ser analizados con fines judiciales o históricos.

La detención de Pinochet en Londres volvió a despertar el interés, nacional e internacional, que se había concedido a los numerosos archivos secretos referentes a Chile que guardaba Estados Unidos. Se sabía que los informes confidenciales de la CIA, los cablegramas del Departamento de Estado, los análisis del Departamento de Defensa y los memorandos del Consejo para la Seguridad Nacional, entre otros, contenían una detallada información relativa a las atrocidades de Pinochet, el funcionamiento de las entrañas de su represión interna y los actos de terrorismo internacional cometidos por su régimen, así como las medidas adoptadas por Estados Unidos respecto de este. Toda esta documentación hubiera proporcionado un buen cúmulo de pruebas para procesar al general y sus subordinados de haberse podido persuadir al gobierno de Clinton a levantar el secreto que pesaba sobre miles de expedientes compuestos por decenas de miles de páginas de información secreta recopiladas durante la dictadura militar chilena.

La Casa Blanca ya había encabezado un proceso de desclasificación de documentos estadounidenses en tiempos de Clinton con el objetivo de promover la causa de los derechos humanos. Durante su primer mandato presidencial, Clinton permitió que se hiciesen públicos secretos de gran relevancia sobre El Salvador, Honduras y Guatemala en respuesta a los escándalos suscitados por la censurable conducta y la represión que había protagonizado Estados Unidos en estos países. En lo relativo a Chile, el gobierno hubo de encararse con el coro de voces, tan enérgicas como conmovedoras, de los familiares de las víctimas estadounidenses de Pinochet, así como con la presión ejercida por un Congreso que exigía que se sacasen a la luz los testimonios que pudieran respaldar los esfuerzos que estaba realizando España para llevar al general ante los tribunales. No fueron pocos los grupos, públicos y privados, defensores de los derechos humanos y del derecho a la información —entre los cuales se incluye el

organismo al que pertenezco, el Archivo de Seguridad Nacional—*** que instaron a los funcionarios del gobierno para que hicieran públicos los documentos en nombre de los derechos humanos, la justicia y la historia.

Por diversas razones políticas, el gabinete de Clinton se resistió a emprender cualquier iniciativa que pudiese haber socorrido a España en su aplicación sin precedentes de la jurisdicción universal a los crímenes de Pinochet. El hecho de que se quedara de brazos cruzados, sin embargo, se entendió como un intento de proteger al más abyecto de todos los dictadores latinoamericanos que ha conocido la historia reciente. Por fin, el gobierno consintió en dirigir un «proyecto de Desclasificación de Chile», aunque no con la intención de facilitar a España los documentos que necesitaba, sino por el bien de los ciudadanos chilenos y estadounidenses. Según anunció el Departamento de Estado en febrero de 1999, la investigación respondería «a los deseos explícitos» del Congreso y de las familias de las víctimas estadounidenses de Pinochet, y alentaría «en Chile un consenso capaz de dar un nuevo impulso al proceso de búsqueda de la verdad y la reconciliación».

El gobierno de Clinton hizo todo lo posible por aguijonear al sistema establecido en torno a los secretos de Estado para que se divulgara una cantidad de información nada despreciable, y esto es algo que lo honra. El Departamento de Estado, encabezado por Madeleine Albright, comprendió la necesidad de hacer públicos todos esos secretos de un modo exhaustivo con el fin de favorecer los derechos humanos y la honestidad histórica, y los Archivos Nacionales —encargados de los documentos presidenciales—, el Consejo para la Seguridad Nacional, el Pentágono y el Departamento de Justicia también colaboraron, por orden descendiente, en el proyecto. No obstante, los «segurócratas» de la CIA —el organismo que más documentación reveladora podía ofrecer, pero también el que más secretos deseaba mantener— mostraron una actitud particularmente obstinada. Durante meses, sus integrantes trataron de ocultar todo aquel testimonio que demostrase la implicación encubierta de Estados Unidos en el final de la democracia y el advenimiento de la dictadura en Chile. En 1999 se aprobó una enmienda especial de la Ley de Espionaje que le exigía presentar un informe por escrito ante el Capitolio, sede del Congreso, en el que se detallasen las operaciones encubiertas llevadas a cabo por la Agencia (CIA

Activities in Chile). Con todo, hubo de ser la considerable presión ejercida por el público —grupos de defensa de los derechos humanos, miembros clave del Congreso y funcionarios consagrados del Poder Ejecutivo, entre los que se incluía el propio presidente Clinton— lo que compeliera a la CIA a abrir de forma parcial sus archivos secretos relativos a los lazos clandestinos que mantenía Estados Unidos con la violencia del golpe de Estado y, tras este, con las instituciones militares y de la policía secreta que llevaron a la práctica de forma sistemática los abusos de Pinochet.

El proyecto de Desclasificación de Chile brindó unos dos mil doscientos documentos de la CIA, a los que hay que sumar unos tres mil ochocientos de la Casa Blanca, el Consejo para la Seguridad Nacional, el Pentágono y el FBI, amén de los dieciocho mil del Departamento de Estado. Todo esto arrojó una luz considerable sobre los diecisiete años de dictadura de Pinochet, así como sobre las acciones emprendidas en Chile por Estados Unidos y las posturas adoptadas al respecto entre 1970 y 1990. En total, el proyecto hizo disponibles veinticuatro mil testimonios que nunca se habían mostrado al público, lo que supone la divulgación de documentos más cuantiosa que haya efectuado el Poder Ejecutivo sobre cualquier país o asunto de política exterior.

Todos estos escritos ofrecen una crónica de veinte años dramáticos y densos de política y operaciones estadounidenses en Chile, así como una amplia cronología de la feroz represión ejercida por Pinochet. Entre ellos se hallan —con el sello de secreto/delicado, confidencial, nodis («No distribuir a otros organismos»), noforn («No distribuir a otros países») y roger channel (prioridad máxima; difusión restringida), entre otras categorías de clasificación— memorandos de conversaciones de la Casa Blanca en los que se recogen los comentarios privados de los presidentes de Estados Unidos y sus ayudantes; directrices que habían de seguir Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter y Ronald Reagan a la hora de tomar decisiones e informes elaborados para ellos; minutas de reuniones estratégicas sobre acción encubierta presididas por Henry Kissinger; informes de alto espionaje basados en confidentes de dentro del régimen de Pinochet, y cientos de comunicaciones —muy censuradas, aunque no por ello menos reveladoras— de la Dirección de Operaciones de la CIA con sus agentes

destinados en Santiago, que detallan una intensa actividad secreta concebida para cambiar el curso de la historia de Chile.

De hecho, los documentos contienen información nueva acerca de casi todos los asuntos, episodios y escándalos de consideración que salpican esta controvertida historia. Entre los acontecimientos que aparecen en sus páginas se encuentran el Proyecto FUBELT, plan secreto de la CIA para obstruir la llegada de Salvador Allende al poder en calidad de presidente de Chile a partir de septiembre de 1970; además del asesinato del comandante en jefe del Ejército chileno René Schneider; la estrategia y las operaciones llevadas a cabo por Estados Unidos para desestabilizar el gobierno de Allende; la implicación de los estadounidenses en el golpe de Estado; las ejecuciones de ciudadanos norteamericanos tras el golpe; los orígenes y operaciones de la Dina, la policía secreta de Pinochet; los lazos que unían a la CIA con Manuel Contreras, jefe de la Dina; la Operación Cóndor; el asesinato de Orlando Letelier y Ronni Moffitt en un acto terrorista perpetrado con coche bomba en Washington D.C.; la muerte de Rodrigo Rojas, a quien quemaron vivo, y los intentos finales de Pinochet de frustrar la transición a un gobierno civil. Muchos de los documentos revelan, además de las atrocidades, los nombres de quienes las perpetraron, por lo que se han empleado —y siguen empleándose— para hacer avanzar las investigaciones judiciales relativas a las violaciones de los derechos humanos cometidas por los militares al mando de Pinochet y exigir responsabilidades por sus crímenes a los funcionarios del régimen.

Asimismo, están siendo útiles para revisar los análisis históricos del papel desempeñado por Estados Unidos en Chile. Para quienes estudian este período, los textos revelados ofrecen la oportunidad de conocer, con tanta exactitud como si hubiesen estado presentes, lo debatido por presidentes, consejeros de Seguridad Nacional, directores de la CIA y secretarios de Estado en torno a las decisiones cruciales o las órdenes capaces de cambiar el rumbo de una nación, así como de observar, minuto a minuto, día a día, cómo se pusieron en práctica estas órdenes en Chile. La comparación de lo que se dijo e hizo en secreto con las declaraciones, testimonios y memorias oficiales pone de manifiesto, de un modo tan minucioso que no puede sino sorprendernos, la mendacidad inherente a la actitud política de Estados Unidos.

Los documentos permiten asimismo reexaminar muchas de las preguntas pendientes acerca de esta historia, cuando no todas:

•¿Qué función desempeñó en realidad Estados Unidos en el violento golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que instaló a Pinochet en el poder?

•¿Qué llevó al presidente Nixon y a su asesor de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, a autorizar y supervisar la campaña diseñada para derrocar y socavar la democracia chilena?

•¿Qué respaldo proporcionó la CIA de manera encubierta con el objetivo de ayudar a la consolidación del régimen de Pinochet? ¿Qué apoyo prestó la CIA a la Dina y sus asesinatos?

•¿Fueron los funcionarios estadounidenses negligentes —o tal vez cómplices— en relación con la muerte de Charles Horman, ciudadano norteamericano detenido tras el golpe por los militares chilenos, cuyo caso constituye el tema central de la película Missing (Desaparecido, 1982)?

•¿Qué sabía el servicio de inteligencia estadounidense acerca de la Operación Cóndor, la red de servicios de inteligencia dirigida por Chile, que se extendía por el Cono Sur y organizó actos internacionales de terrorismo amparados por los diversos Estados a fin de acabar con las críticas a sus regímenes?

•¿Podían haber descubierto e impedido los agentes estadounidenses el atentado del 21 de septiembre de 1976, en el que murieron Orlando Letelier y Ronni Karpen Moffitt y que constituyó el acto de terrorismo internacional más atroz cometido en Washington D.C. antes del ataque al Pentágono del 11 de septiembre de 2001?

•Y, por último, ¿cuál fue el papel de Washington en el final de la dictadura del general Pinochet?

El archivo Pinochet

Este libro es un intento de repasar la historia, tan compleja como controvertida, de la política seguida por Estados Unidos en lo referente a la democracia y la dictadura chilenas. Los archivos secretos que se hicieron públicos tras la detención de Pinochet representan todo un hallazgo de pruebas inéditas que van mucho más allá de lo que había revelado el Comité Church a mediados del decenio de 1970 en lo referente a los intentos de desestabilizar al gobierno chileno, elegido democráticamente, por parte de Estados Unidos. Los memorandos de la CIA (entre los que se incluyen títulos como «Chile: Respaldo inicial tras el golpe» o «Reanudación del proyecto de la División del Hemisferio Occidental para el año fiscal de 1975») ponen de manifiesto la larga historia secreta de los empeños clandestinos de Estados Unidos por apoyar a la incipiente Junta Militar. Los informes de espionaje sobre la maquinaria y la represión del régimen proporcionan una cronología clara de qué era lo que sabía Washington sobre la campaña de terror del general Pinochet, llevada a cabo tanto en Chile como en otros países. Asimismo, los archivos revelados muestran, con una cantidad de detalles asombrosa, lo que hicieron y dejaron de hacer los agentes estadounidenses al conocer tales hechos.

Pinochet desclasificado. Los archivos secretos de Estados Unidos sobre Chile se sirve de la abundante información contenida en los documentos desclasificados para ofrecer un relato de investigación y desarrollar una historia que no ha dejado de generar controversia. Al mismo tiempo, trata de narrar lo sucedido en Estados Unidos y Chile a través de una selección representativa de documentos extraídos del largo rastro documental dejado por no pocos organismos y agencias estadounidenses, desde la Casa Blanca hasta el puesto de operaciones de la CIA en Santiago. Reconstituir toda una historia por medio de la compilación de un centenar de reproducciones de documentos es —reconozcámoslo— imposible. Por razones de espacio, me he visto obligado a seleccionar escritos relativamente breves y, en algunos casos, reproducirlos solo de manera parcial. El texto, por otra parte, recoge profusas citas de testimonios decisivos que no han podido ser incluidos. Con todo, el lector puede acceder a la versión íntegra de los documentos que aparecen abreviados en este libro a través de la página del Archivo de Seguridad Nacional en internet: www.nsarchive.org. Quienes estén interesados en explorar un panorama más amplio de testimonios desclasificados sobre Chile podrán

hacerlo consultando el sitio del Departamento de Estado (www.state.gov, en concreto: http://foia.state.gov/SearchColls/Search.asp), donde se recogen los veinticuatro mil escritos publicados en virtud del Proyecto de Desclasificación de Chile.

Los documentos son una herramienta esencial a la hora de reconstruir la historia, aunque no siempre revelan todos sus aspectos. Tal vez los que aún están clasificados como secretos —de los cuales no son pocos los que siguen guardándose en Chile— contengan información adicional o aun contradictoria, y quizá haya elementos que ni siquiera se hayan confiado al papel. Siempre que ha sido posible, he tratado de completar y aclarar la información de los textos con entrevistas realizadas a los estadistas que los elaboraron o leyeron, entre los que se encuentran antiguos vicesecretarios de Estado para Asuntos Interamericanos, altos cargos del Consejo para la Seguridad Nacional (CSN) especializados en América Latina, varios embajadores y numerosos funcionarios del Departamento de Estado, del CSN, el Departamento de Justicia y el servicio de inteligencia. También he intentado determinar cuál es la información que permanece escondida en los fragmentos tachados de algunos de los documentos más importantes. En algunos casos —marcados en el texto mediante la inclusión entre corchetes de los datos suprimidos—, el material que se ha eliminado de un documento puede obtenerse de otro. Sin duda quedan todavía secretos por revelar acerca de Chile, pero el número es menor hoy día.

El hecho de que se haya mantenido durante tanto tiempo semejante sigilo alrededor de Chile y las relaciones de Estados Unidos con Pinochet da idea del carácter controvertido de su pasado, por una parte, y de la relevancia que aún reviste para el debate —actual y futuro— en torno a las intervenciones de Estados Unidos en el extranjero y los fundamentos morales de su política exterior, por la otra. Los documentos que se analizan en las páginas que siguen constituyen, en esencia, un expediente de atrocidades y responsabilidad que no solo afecta al general y su régimen, sino que también al vergonzoso respaldo prestado por Estados Unidos al derramamiento de sangre provocado por la dictadura. «Uno de los objetivos del proyecto —reza la declaración de la Casa Blanca que acompañó a la publicación de testimonios otrora secretos— es mostrar al público los documentos originales, de tal modo que pueda juzgar por sí mismo hasta

qué punto la actuación de Estados Unidos socavó la causa de la democracia y los derechos humanos en Chile». El presente volumen tiene la intención de contribuir a que el lector pueda formar su propio juicio al respecto.

*** El National Security Archive es un instituto de la Universidad George Washington que custodia documentos políticos confidenciales una vez levantado el secreto que pesaba sobre ellos. (N. del T.)

1

La «fórmula del caos»: el Proyecto FUBELT

La matanza podría ser considerable y prolongada
(estamos hablando de una guerra civil). (...)
Nos habéis pedido que provoquemos el caos en Chile (...)
os ofrecemos una fórmula del caos
que es poco probable que no suponga derramamiento de sangre.
Disimular la implicación de EE.UU. será sin duda imposible.

Cablegrama ultrasecreto de la base de operaciones de la CIA en Santiago de Chile,

10 de octubre de 1970.

El 15 de septiembre de 1970, durante una reunión de quince minutos mantenida entre las 15:25 y las 15:40, el presidente Richard Nixon ordenó a la CIA que iniciase una ambiciosa intervención encubierta en Chile. El objetivo era impedir que llegase al poder y se mantuviera en él el presidente electo Salvador Allende, político que gozaba de gran popularidad en Chile y para el que la campaña de 1970 constituía el cuarto intento de hacerse con la presidencia. Un informe secreto de la CIA lo describía como «uno de los políticos parlamentarios más astutos de una nación que tiene por pasatiempo favorito la política de tertulia». La victoria —algo ajustada— que obtuvo el 4 de septiembre en unas elecciones libres y justas lo convirtió en el primer «socialista parlamentario», como él gustaba de definirse, que alcanzaba la presidencia por medios democráticos en el Hemisferio Occidental durante el siglo XX.

En un encuentro mantenido en la Casa Blanca con Henry Kissinger, John Mitchell —fiscal general del Estado— y Richard Helms —director de la CIA—, Nixon dio órdenes explícitas de promover un golpe de Estado que impidiese a Allende ser investido el 4 de noviembre o derrocara a continuación su recién creado gobierno. Las notas manuscritas del director de la CIA recogen las directrices dictadas por el presidente (véase el documento 1):

- 1 posibilidad contra 10, pero ¡salvar Chile!
- El gasto vale la pena
- Sin riesgos
- Sin implicación alguna de la embajada
- US$ 10.000.000 disponibles, ampliables
- Jornada completa: nuestros mejores hombres
- Estrategia
- Hacer saltar la economía
- 48 horas para un plan de acción

El resumen de Helms acabaría por convertirse en el primer documento en que un presidente estadounidense ordena el derrocamiento de un gobierno elegido democráticamente.

La CIA comenzó a actuar con gran rapidez a fin de cumplir las instrucciones recibidas. Durante una reunión celebrada al día siguiente con altos funcionarios de la división de operaciones encubiertas de la Agencia, Helms refirió a sus ayudantes que «el presidente Nixon había decidido que Estados Unidos no podría aceptar la configuración de un régimen encabezado por Allende en Chile», por lo que «había pedido a la Agencia que impidiese la llegada de Allende al poder o lo derrocase una vez allí».[1] Bajo la supervisión del subdirector de operaciones de la CIA, Thomas Karamessines, y el jefe de la División del Hemisferio Occidental, se estableció —y activó— de inmediato un «destacamento especial» constituido por dos unidades operacionales: una centrada exclusivamente en los militares chilenos y encabezada por David Atlee Phillips, especialista veterano en operaciones encubiertas, y otra consagrada a la «ruta política/constitucional» y encaminada a cortar el paso a Allende. A las 8:30 del 17 de septiembre, el nuevo destacamento especial había elaborado ya su

primer informe de situación, completado con un esquema de organización y una lista de «posibilidades» a fin de «estimular el malestar social y otros acontecimientos capaces de provocar acciones militares».[2]

Con el objetivo de proporcionar un sello aprobatorio al destacamento especial, Kissinger obtuvo de Nixon aquel mismo día una autorización firmada para crear un «mecanismo» que permitiese «trabajar en secreto y con rapidez» y «tomar decisiones, marcar directrices, mantener la vigilancia (...) coordinar actividades y planear acciones prácticas».[3] Durante una reunión mantenida la tarde del 18 de septiembre, Kissinger recibió un informe inicial procedente del director de la CIA, Helms, acerca del estado de lo que se iba a convertir en una de las operaciones secretas más tristemente célebres de la Agencia. A esas alturas, la oficina central de esta había enviado a un agente secreto especial a Santiago con el cometido de comunicar instrucciones confidenciales al director del centro de operaciones en la capital chilena referentes a la nueva misión, que había recibido el nombre en clave de «Proyecto FUBELT».[4] Por otra parte, el destacamento especial de la CIA había redactado ya el segundo informe de situación, en el que declaraba: «Ya se ha planteado la posibilidad de un golpe de Estado».

Génesis de una estrategia golpista

Las sucintas directrices que había presentado Nixon en relación con Chile no carecían, de cualquier modo, de precedentes. En la historia de la política estadounidense con respecto a América Latina durante el siglo XIX y los albores del XX había habido con cierta frecuencia presidentes que autorizaron operaciones militares concebidas para deshacerse de gobiernos que la nación consideraba indeseables por motivos económicos o políticos. Una vez firmada en 1948 la Carta de las Naciones Unidas, que hacía hincapié en el no intervencionismo y el respeto a la soberanía nacional, la Casa Blanca comenzó a emplear a fondo la recién creada Agencia Central de Inteligencia para consolidar los designios hegemónicos de Estados Unidos. En tiempos de Dwight Eisenhower, esta acometió una serie de operaciones paramilitares para poner fin al gobierno guatemalteco de

Jacobo Árbenz, y tanto él como su sucesor, John F. Kennedy, dieron luz verde a las acciones clandestinas que pretendían debilitar a Fidel Castro en Cuba. De hecho, fue el gobierno de Kennedy el primero que llevó a cabo operaciones secretas en Chile, nada menos que para obstruir la elección de Salvador Allende.

Este último atrajo por vez primera la atención de Washington cuando su coalición socialista, conocida entonces como Frente de Acción Popular (FRAP), perdió por poco las elecciones de 1958 frente al abanderado de la derecha Jorge Alessandri. El gobierno de este, según un informe redactado por el organismo predecesor de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés), la Administración para la Cooperación Internacional, tenía «cinco años para demostrar al electorado que la suya era la mejor medicina. En caso de fracasar, garantizaría de forma casi automática un claro giro a la izquierda».

De cualquier modo, durante el período que siguió a la revolución cubana de 1959, el gobierno de Kennedy reconoció que, probablemente, el tradicional respaldo prestado por Washington a pequeños partidos oligárquicos como el Partido Nacional fortalecía a la izquierda latinoamericana más de lo que la debilitaba. Entonces se convirtió en objetivo primordial apoyar a partidos políticos reformistas y de centro, que personificaban lo que Kennedy llamaba «una alternativa viable» a los movimientos revolucionarios izquierdistas. «El problema de Estados Unidos es que debe hacer lo que esté en sus manos para acelerar la revolución de la clase media», escribió a Kennedy su ayudante Arthur Schlesinger Jr. en un informe fechado el 10 de marzo de 1961, el que acabaría convirtiéndose en un argumento en favor de la Alianza para el Progreso. «Si las clases propietarias de América Latina impiden la revolución de la clase media, van a hacer inevitable una revolución de obreros y campesinos».

En Chile, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), presidido por Eduardo Frei, parecía hecho a la medida para esta revolución de la «clase media». Haciendo caso omiso de los ayudantes que querían seguir apoyando a Alessandri, Kennedy lo organizó todo para que Frei y Radomiro Tomic, otro dirigente de centro, hiciesen una visita secreta a la Casa Blanca a principios de 1962. El presidente tenía la intención de evaluar en persona a

estos nuevos líderes chilenos y, según asegura cierto informe, «decidir a quién prestarle en secreto ayuda en las elecciones».[5]

Los dos volúmenes que conforman la historia interna de la CIA en torno al respaldo ofrecido de forma encubierta a los democristianos, titulada The Chilean Election Operation of 1964. A Case History 1961-1964, siguen siendo altamente confidenciales. Se sabe, sin embargo, que contienen información relativa a operaciones encubiertas que comenzaron en 1961 —cuando se suministró dinero a pequeños partidos de centro y a organizaciones obreras, estudiantiles, campesinas y mediáticas de relieve, amén de crear mecanismos fundamentales de propaganda— y que culminaron en la onerosa financiación de la campaña de Frei en 1964.

En abril de 1962, el grupo de expertos 5412, como era conocido el equipo de altos cargos de diversas agencias que supervisaba las operaciones encubiertas, aprobó las propuestas de la CIA de «emprender un programa secreto de ayuda económica» a los democristianos.[6] Entre esa fecha y la de los comicios, la CIA destinó unos cuatro millones de dólares a Chile para apoyar la elección de Frei, incluidos 2,6 millones de fondos directos que se destinaron a asegurar más de la mitad del presupuesto de su campaña. Con el objetivo de realzar la imagen del candidato en cuanto centrista moderado, la Agencia financió también de modo encubierto a un grupo de partidos políticos de centroderecha.

Además de la provisión directa de fondos para fines políticos, la CIA llevó a cabo en Chile otras quince operaciones de relieve, entre las que se cuentan la creación y mantenimiento clandestinos de numerosas organizaciones cívicas con la intención de influir y movilizar a sectores de votantes decisivos. La empresa más importante, de cualquier manera, fue la intensa campaña propagandística contra Allende, en la que se invirtieron tres millones de dólares. El informe Covert Action in Chile, 1963-1973, elaborado por el Comité Church, describe la magnitud de estas actividades:

> Se hizo un amplio uso de la prensa, la radio, el cine, panfletos, carteles, octavillas, correspondencia directa, artículos de diario con grandes titulares y pintadas [rayados] durante una «campaña de pavor» que se basaba sobre todo en imágenes de tanques soviéticos y

> pelotones de fusilamiento cubanos e iba dirigida en especial a las mujeres. Las organizaciones democristianas distribuyeron cientos de ejemplares de la pastoral anticomunista promulgada por el papa Pío XI. (...) Asimismo, se recurrió a la «desinformación» y la «propaganda negra» (a partir de material que se presentaba como obtenido de fuentes como el Partido Comunista chileno).[7]

En los meses que transcurrieron hasta las elecciones de septiembre de 1964, las operaciones se hicieron cada vez más activas. Así, por ejemplo, hubo cierto grupo de propaganda de la CIA que distribuyó tres mil carteles políticos anticomunistas y produjo veinticuatro boletines radiofónicos al día, así como veintiséis comentarios semanales de las elecciones. El objetivo de todo esto era alejar a los votantes de Allende y acercarlos a Eduardo Frei. La CIA, tal como señaló el Comité Church, consideraba que esta campaña propagandística era «la actividad más eficaz emprendida por Estados Unidos en nombre de los candidatos democristianos».

«Todas las encuestas sitúan a Eduardo Frei por encima de Salvador Allende», informó el secretario de Estado Dean Rusk en una memoria que ha visto la luz de forma reciente. Llevaba el sello de alto secreto: distribución exclusiva, estaba dirigida al presidente Lyndon Johnson y tenía fecha del 14 de agosto de 1964, tres semanas antes de las elecciones:

> Estamos haciendo grandes esfuerzos en secreto para reducir las posibilidades de que Chile se convierta en el primer país de América en elegir a un marxista declarado como presidente. Nuestro programa, que se mantiene en el más estricto secreto, incluye un respaldo económico especial para garantizar la estabilidad, ayuda a las Fuerzas Armadas y la policía para mantener el orden, y acciones políticas y propagandísticas estrechamente ligadas a la campaña de Frei. (Cursiva en el original.)

La CIA atribuiría más tarde a dichas operaciones encubiertas buena parte de la aplastante victoria con que se hizo Frei el 4 de septiembre de 1964, al obtener el 57 por ciento de los votos, una mayoría inimaginable en las elecciones chilenas, que por lo general se disputaban tres candidatos.

El ascenso de Frei al poder hizo que el gobierno de Johnson declarase a Chile «un modelo para la Alianza para el Progreso». Sin embargo, Washington se encontró con el mismo problema al que se había enfrentado en 1958: si la gestión política de Frei no lograba mantener el desarrollo social y económico del país, los votantes recurrirían a la coalición izquierdista de Allende en los comicios de 1970. En consecuencia, Estados Unidos se embarcó en un amplio programa de sostén económico, militar y político, este último en secreto.

Casi de la noche a la mañana, Chile se tornó en el principal beneficiario de la ayuda que el gobierno estadounidense destinaba a América Latina. Entre 1962 y 1970, su población, de solo diez millones de habitantes, recibió más de mil doscientos millones de dólares en concepto de subvenciones y préstamos, lo que en la época suponía una suma astronómica. Además, la USAID instó a las sociedades anónimas estadounidenses más importantes, y en particular a los dos gigantes de la industria del cobre, Anaconda y Kennecott, que dominaban la economía chilena, a modernizarse y expandir sus inversiones y operaciones. Como quiera que el principal atractivo que poseía Frei para muchos de sus votantes consistía en su política de «chilenización» (nacionalización parcial de la industria del cobre), el gobierno de Estados Unidos ofreció a las empresas lo que el embajador Edward Korry denominó «un trato de favor» que proporcionaba «un seguro contra riesgos políticos» para las inversiones y bienes depositados en Chile. El programa, concebido para movilizar capital privado en ámbitos inciertos de inversión, se administró en un principio por mediación de la USAID, aunque más tarde fue confiado a una nueva organización poco menos que gubernamental que recibió el nombre de Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero (OPIC, por su sigla en inglés). Los cuatrocientos millones de dólares que invirtió esta en Chile en 1969 en concepto de cobertura frente a riesgos políticos no solo eclipsaron los programas que estaba poniendo en práctica en otras naciones, sino que excedieron en gran medida el activo de que disponía. El programa supuso un nuevo incentivo político y económico por parte de Estados Unidos para anular el atractivo de la candidatura de Allende en 1970.

Las iniciativas de apoyo militar por parte de Estados Unidos aumentaron también de forma drástica durante la década de 1960. A pesar de que la

seguridad de Chile no se había visto amenazada ni en el interior ni desde el extranjero, entre 1962 y 1970 se destinaron noventa y un millones de dólares a ayuda militar en un claro intento de estrechar lazos con los generales chilenos. Un estudio del Congreso sobre los programas de ayuda para la seguridad de América Latina determinó que la otorgada a Chile era «de naturaleza política y económica, más que simplemente militar».[8]

Por otra parte, la CIA prosiguió su intervención encubierta mediante la acción política y las operaciones propagandísticas. Entre 1965 y 1970 empleó dos millones de dólares en unos veinte proyectos concebidos para elevar a los democristianos y minar la coalición política de Allende. En febrero de 1965, por ejemplo, la Agencia obtuvo el visto bueno que necesitaba para invertir ciento setenta y cinco mil dólares en la financiación directa de candidatos selectos para las elecciones al Congreso celebradas en marzo. En ellas salieron elegidos nueve de los que contaban con el respaldo de la CIA, en tanto que fueron derrotados trece de los del FRAP, desacreditados por la Agencia. En julio de 1968 se aprobó un presupuesto de trescientos cincuenta mil dólares para influir en las elecciones al Congreso de 1969, en las que ganaron diez de los doce candidatos seleccionados por la CIA. El centro de operaciones de esta en Santiago también se encargó de la financiación subrepticia del partido de Frei durante los dos años que siguieron a su elección, y proporcionó fondos tanto a su gabinete como a los militares. También se beneficiaron de estas ayudas económicas las organizaciones eclesiásticas y los organismos sindicales favorables a Estados Unidos. Se crearon nuevos contactos en el ámbito de los medios de comunicación, incluidos los que «hacían aparecer casi a diario en El Mercurio editoriales inspirados por la CIA», en palabras del informe elaborado por el Comité Church. Los mecanismos de propaganda desarrollados durante la década de 1960, en particular, situaron a la Agencia en una posición muy ventajosa para influir sobre la campaña electoral de 1970, en la que tomaban parte tres candidatos principales, pues la nueva coalición de Allende, la Unidad Popular (UP), se enfrentaba al antiguo presidente Jorge Alessandri y al democristiano Radomiro Tomic.

Llegado 1970, eran muchos los esfuerzos políticos y económicos que había hecho Estados Unidos para evitar que Allende se hiciera con la presidencia de Chile, hasta el punto de que su arribo a dicho cargo iba a suponer un

humillante fracaso para quienes habían seguido una política tan prolongada como decidida a fin de minar su llamamiento socialista. De cualquier modo, lo cierto es que las acciones e inversiones estadounidenses llevadas a cabo a la luz y a la sombra en Chile hicieron mucho más que sentar un precedente para que Nixon decidiera impulsar un golpe de Estado contra Allende: dieron lugar a lo que el embajador Korry llamó una «responsabilidad fiduciaria» —un sentimiento imperial de obligación y derecho— de revocar la decisión del electorado chileno. No tenía sentido «preguntarse si Estados Unidos pensaba intervenir ni cómo lo haría, sino cuándo lo iba a hacer».[9]

El «recurso extremo»: La posibilidad de un golpe

En sus memorias, Henry Kissinger identificaba al millonario chileno Agustín Edwards, propietario y editor de El Mercurio y distribuidor de la compañía PepsiCo, como la persona que llevó a Richard Nixon a ordenar, el 15 de septiembre de 1970, la ejecución de un golpe de Estado. «Por entonces, Nixon había asumido un papel personal», escribe en White House Years. «Lo había impulsado a actuar el 14 de septiembre Agustín Edwards, editor de El Mercurio, el periódico que gozaba de un mayor respeto entre los chilenos, quien había acudido a Washington para advertirlo de las consecuencias que podría tener la llegada de Allende al poder. Se alojaba en casa de Don Kendall, director general de Pepsi-Cola, que por casualidad iba a acompañar a su padre a ver a Nixon aquel mismo día».

Kendall era uno de los amigos más cercanos de Nixon y uno de sus principales donantes; era alguien a quien el presidente escuchaba. «Le mencionaré a Edwards [a Nixon]», le dijo por teléfono Kendall a Kissinger la mañana del 14 de septiembre. «Le diré al presidente que no puede tolerar una Cuba durante su gobierno». «Dile eso», respondió Kissinger.[10] Sus esfuerzos fueron exitosos y lograron canalizar la furia de Nixon para socavar a Allende. Esa misma noche Kissinger habló con el encargado de la agenda de Nixon para fijar una reunión secreta entre el presidente y Edwards para el día siguiente (véase el documento 2).

A las 8 de la mañana del 15 de septiembre de 1970, Edwards y Kendall desayunaron en la Casa Blanca con Kissinger y el fiscal general John

Mitchell (véase el documento 3). Hablaron durante una hora. A las 9:15 AM, disimuladamente Kissinger hizo pasar a Edwards al Despacho Oval para reunirse con el presidente. La reunión —respecto de la cual Edwards diría ante el juez chileno Mario Carroza: «No tengo recuerdos»— nunca se registró en la agenda oficial, pero que sí se consigna en la «Agenda interna del presidente» (véase el documento 4). Lo que ahí se conversó permanece en secreto medio siglo después, pero lo cierto es que, seis horas después de haber estado con Edwards, Nixon llamó a Kissinger y a Helms al Despacho Oval y le ordenó a la CIA «hacer saltar a la economía» en Chile y comenzar con una serie de operaciones encubiertas para obstruir el ascenso de Allende a la presidencia.

En su afán por lograr este objetivo, Edwards sostuvo durante varios días conversaciones con la CIA, comenzando con una extensa reunión con Helms en el Hotel Madison en el centro de Washington (véanse los documentos 5 y 6). El magnate de los medios chilenos buscó explícitamente convencer al director de la CIA de orquestar un golpe militar. Edwards aportó gran cantidad de información sobre los progolpistas como el general Camilo Valenzuela, así como sobre los oficiales constitucionalistas como el general René Schneider, quien se interponía en el camino para derrocar a Allende. «La clave para un golpe sería que el general Carlos Prats, jefe de la Defensa Nacional, se mueva, lo que implicaría neutralizar a Schneider, comandante en jefe del Ejército», aconsejó Edwards al director de la CIA, según consta en el informe catalogado como alto secreto sobre esa reunión.

Según el resumen secreto de su encuentro, Edwards y Helms discutieron largamente sobre el «momento oportuno para una posible acción militar» con miras a evitar que Allende asumiera. Edwards le transmitió al director de la CIA que, «tras discutir la situación posterior a la elección con el [general Camilo] Valenzuela y algunos oficiales clave de la Armada, les preocupaban dos puntos básicos: 1) Si el gobierno chileno era derrocado por una acción militar, ¿sería el nuevo gobierno reconocido diplomáticamente por Estados Unidos?, y 2) ¿recibirían las Fuerzas Armadas chilenas apoyo logístico para una acción contra el gobierno?». Edwards recomendó que Estados Unidos les «transmitiera discretamente» una «palabra de aliento» a los militares chilenos.

Edwards también menospreció al presidente Eduardo Frei como «alguien que típicamente colapsa ante la presión» y que «jamás en su historia política se ha atrevido a cruzar el Rubicón». De acuerdo con el reporte sobre la conversación, «Edwards dijo que Frei era indeciso, siempre vacilante, siempre esperando que otro se mueva primero». En su empeño por instigar a la CIA a la acción, Edwards comentó que el chileno promedio estaba esperando una respuesta clave: «¿Le importa esto a Estados Unidos?».

Para Helms, Edwards fue un catalizador inmediato para que el 15 de septiembre de 1970 Nixon ordenara a la CIA derrocar a Allende y desestabilizar la democracia chilena. «El presidente llamó a esta reunión [del 15 de septiembre, en que dio órdenes de dar un golpe de Estado] debido a la presencia de Edwards en Washington», dijo más tarde Helms en una declaración secreta ante el Comité Especial del Senado que investigaba el rol de la CIA en Chile.[11]

Sin embargo, los documentos revelados demuestran que la Casa Blanca, la CIA, el Departamento de Estado y el Pentágono habían pasado semanas preparando y evaluando las contingencias del golpe de Estado antes de que Nixon diese aquella orden. En una fecha tan temprana como la del 5 de agosto, un mes antes de las elecciones, el vicesecretario de Estado John Crimmins envió al embajador Korry un cablegrama dirigido exclusivamente a su persona en el que hablaba de las posibles medidas que se tomarían en caso de que Allende saliese elegido. En este señala:

> Como puede ver, habrá tres opciones en septiembre. Sin embargo, queremos que considere asimismo una cuarta posibilidad que estamos tratando por separado y conocen muy pocas personas. Se trata de derrocar al candidato ganador o impedir su investidura. Desearíamos saber su opinión acerca de:
>
> a) Los militares y policías chilenos que podrían tomar parte en el derrocamiento de Allende;
>
> b) qué individuos del Ejército y la policía podrían intentar hacer realidad el derrocamiento;

c) las perspectivas de éxito para los militares y policías que tratasen de derrocar a Allende o impedir su investidura, y

d) la importancia de la actitud de Estados Unidos a la hora de poner en marcha la operación y el éxito que esta pueda tener.[12]

La respuesta de Korry, publicada de forma parcial treinta años después, constituía un análisis sumamente detallado de las diversas posibilidades de las elecciones, las opciones de que disponía Estados Unidos y las probabilidades con que contaba. En las trece páginas del cablegrama se identificaban todos los elementos decisivos que figurarían más tarde en los intentos encubiertos para frenar a Allende: el intervalo temporal más propicio para efectuar el golpe, entre la fecha de las elecciones, el 4 de septiembre, y la del 24 de octubre, día en que se investiría al vencedor; el obstáculo que representaba el general René Schneider, comandante en jefe del Ejército, de fuertes convicciones constitucionalistas a las que el autor del informe se refería como «la doctrina de no intervencionismo de Schneider», y la identificación del general retirado Roberto Viaux como la figura militar más dispuesta a levantarse contra Allende.[13]

Esta indagación secreta en torno a las posibilidades de un golpe militar llegó cuando los servicios de inteligencia estaban acabando un «estudio de la política y estrategia de Estados Unidos en caso de una victoria de Allende» destinado a la Casa Blanca. Siguiendo órdenes de Kissinger, los analistas de la CIA, el Departamento de Estado y los de Defensa dirigieron una investigación más abarcadora sobre cuáles serían las implicaciones para el gobierno estadounidense. La evaluación que presentaron a mediados de agosto recibió el nombre de Memorando 97 para el Estudio de la Seguridad Nacional, señalando abiertamente:

En lo referente a posibles amenazas a los intereses estadounidenses, hemos llegado a la conclusión de que:

1. EE.UU. no tiene interés nacional vital alguno en Chile. Sin embargo, habría pérdidas económicas tangibles.

2. El equilibrio de poder militar en el mundo no se vería alterado de modo significativo en caso de que Allende formara gobierno.

3. La victoria de Allende, no obstante, tendría costes políticos y psicológicos considerables; a saber:

a) La cohesión del hemisferio quedaría amenazada por el desafío que supondría su gobierno para la OEA [Organización de Estados Americanos] y por las reacciones a que daría lugar en otros países, si bien entendemos que la paz de la región no tiene por qué verse en peligro;

b) la victoria de Allende representaría un revés psicológico apreciable para Estados Unidos, así como un claro avance del ideal marxista.[14]

«A la hora de examinar la amenaza potencial que encarna Allende —añadía el estudio elaborado para Kissinger—, es importante tener en cuenta que es probable que algunos de los problemas con que se prevé que se encontrará Estados Unidos, en el supuesto de que sea elegido, surjan con independencia de quién sea el próximo presidente de Chile».

El Memorando 97 llegaba a la conclusión de que la elección de Allende no representaría ninguna amenaza militar estratégica o regional para los intereses de Estados Unidos en lo referente a seguridad ni en estabilidad. Sin embargo, el informe contenía un «anexo secreto» nunca antes revelado. Este, redactado por la CIA y titulado «Recurso extremo: Derrocar a Allende», se ocupaba de las diversas eventualidades, ventajas y desventajas que llevaba aparejadas el intento de promover un golpe de Estado. «La elección de esta vía supone que deberá ponerse el mayor empeño en garantizar que en ningún momento se revele la participación de Estados Unidos, por lo que toda acción deberá ser efectuada a través de instituciones y personas chilenas, así como de ciudadanos de terceros países», declara el documento, elaborado por la Agencia el 11 de agosto. Las ventajas eran evidentes: «De prosperar, la implicación de Estados Unidos en un golpe de Estado militar en Chile nos libraría sin lugar a dudas y de forma permanente de la posibilidad de un gobierno chileno presidido por Allende».

No obstante, también existían inconvenientes no menos claros. El informe resumía así el más importante:

> Apenas hay manera alguna de evaluar la posibilidad de que tal intento tenga éxito en caso de que llegue a efectuarse. Un fracaso en este sentido, que con toda probabilidad provocaría que se diese a conocer la intervención estadounidense, tendría graves consecuencias para nuestras relaciones con Chile, y nos causaría problemas en el resto del hemisferio, en Estados Unidos y en cualquier otro lugar del planeta.[15]

Aun en el supuesto de que el golpe se hiciese realidad, existía otro inconveniente, tal como señalaban los analistas en una clarividente observación: «Si se da la circunstancia de que se logra culminar con éxito el derrocamiento, y aun cuando quede encubierta la participación estadounidense (algo que no podemos garantizar), Estados Unidos quedaría convertido en un verdadero rehén de los individuos a los que respaldásemos durante la operación y tal vez aislado durante años de la mayoría de las demás fuerzas políticas del país».[16]

De cualquier modo, casi la totalidad de los miembros de la embajada y los servicios de información compartía la opinión de que promover un golpe de Estado en Chile en los últimos meses de 1970 constituía una operación poco menos que imposible, peligrosa desde el punto de vista diplomático y, por lo tanto, muy poco deseable. Durante la reunión del equipo de altos cargos de Seguridad Nacional conocido como el Comité 40, celebrada el 8 de septiembre, Kissinger y el director de la CIA, Helms, se enfrentaron a los argumentos del Departamento de Estado según los cuales resultaría más efectivo centrarse en la reconstrucción del Partido Demócrata Cristiano para las elecciones de 1976. La minuta de aquel encuentro da fe del reconocimiento, por parte de Helms, de que no existía «ninguna garantía incontestable de éxito [en lo tocante a un posible golpe de Estado], habida cuenta de la tradición apolítica de los militares chilenos», si bien, en cualquier caso, «es muy difícil que prospere un golpe militar contra Allende si no se efectúa pronto».* Kissinger puso también en duda que, «una vez que Allende se haga con la presidencia, haya alguien capaz de organizar una verdadera oposición en su contra». En consecuencia, solicitó «una evaluación implacable de (...) los pros, los contras de organizar un golpe de Estado militar en Chile con la ayuda de Estados Unidos, así como de las posibilidades de éxito».[17]

La respuesta del embajador Korry fue tan rápida como inequívoca. El 12 de septiembre cablegrafió al Departamento de Estado con el siguiente mensaje: [18]

> Ahora creemos que es evidente que los militares chilenos no harán nada en absoluto para evitar la subida de Allende al poder salvo que se dé una improbable situación de desorden nacional y violencia generalizada. (...) Lo que queremos poner de relieve en esta «evaluación implacable» es que no existe oportunidad alguna de poder llevar a cabo cualquier otra acción significativa del gobierno estadounidense con los militares chilenos.

El 25 de septiembre, Korry volvió a enviar un cablegrama a Kissinger para reiterarle: «Estoy convencido de que no podemos provocar [un golpe de Estado] y de que no deberíamos correr el riesgo de incurrir en otra bahía de Cochinos».

El director de base de operaciones de la CIA en Santiago, Henry Heckshher, quien usaba el nombre en clave de Félix, presentó también una valoración negativa. El 9 de septiembre, seis días antes de la decisión de Nixon, Heckshher recibió un despacho especial del director de la División del Hemisferio Occidental de la CIA, William Broe, que da fe de la prontitud con que se dispuso la Agencia, al parecer instada por la Casa Blanca, a tramar una sublevación. «La única acción que presenta posibilidad alguna de éxito es un golpe militar, bien antes, bien inmediatamente después de la toma de poder por parte de Allende», aconsejaba Broe. En consecuencia, dio órdenes al centro de operaciones en Santiago de emprender «la tarea operativa de establecer los contactos directos con los militares chilenos que se requieren para evaluar las posibilidades y (lo que es cuando menos de igual importancia) que pueden emplearse para instigar un golpe si se decide llevarlo a cabo y en el momento en que se decida».[19] El jefe del puesto santiaguino comenzó de inmediato a poner en práctica lo dictado; sin embargo, los informes que enviaba a la oficina central contenían numerosas advertencias acerca de las dificultades con que se iban a encontrar a la hora de cumplir aquella misión. «Olvídense de oscuras operaciones secretas y de acondicionamiento propagandístico de las Fuerzas Armadas: ellos apenas leen», refirió Heckshher en un cablegrama enviado a Langley el 23 de septiembre. «Tengan en cuenta que el ángulo de acción es extremadamente

angosto, y las opciones disponibles, muy limitadas».[20] «No había dejado sombra alguna de duda en la mente de mis colegas y superiores», testificaría más adelante en secreto ante el Comité Church, «de que no consideraba deseable ningún tipo de intervención en el proceso constitucional [de Chile]».

Tampoco faltaron en Washington funcionarios que presentasen argumentos más extensos, si cabe, contra los designios de alguna acción clandestina de Nixon y Kissinger. A finales de septiembre, un miembro de la Dirección de Operaciones de la CIA evaluó la opinión general de los funcionarios estadounidenses con respecto a Chile en el entorno de la Guerra Fría. Según estos, lejos de ser un títere de los soviéticos, «Allende no se va a dejar someter al dominio del Partido Comunista ni de Moscú». Además, tampoco era «un discípulo ciego de Fidel Castro; de hecho, ni ellos ni sus seguidores coinciden siquiera en todo». Las operaciones encubiertas para evitar que Allende accediera a la presidencia serían «peor que inútiles», según preveía su análisis:

> Cualquier indicio que haga suponer que nos hallamos detrás de una artimaña legal o cualquier otra mala jugada no hará sino tensar aún más las relaciones con el nuevo gobierno. Temo que podamos repetir los mismos errores que cometimos en 1959 y 1960, cuando llevamos a Fidel Castro a la esfera soviética. Aunque logremos un éxito momentáneo al privar a la UP de su candidato, podemos ser responsables de una guerra civil mucho más peligrosa en Chile (...) y granjearnos una imagen mucho peor en toda América Latina y en el resto del planeta.[21]

Sobre la mesa de Henry Kissinger se pusieron argumentos similares antes de que Nixon diese órdenes de impulsar un golpe de Estado. La noche del 4 de septiembre, día de la victoria de Allende, Viron Vaky, principal ayudante de Kissinger en lo referente a Latinoamérica, le envió un cablegrama con el sello de alto secreto en el que alegaba que «no está nada claro que la opinión general se muestre a favor de la puesta en marcha de programas de acción encubierta. Las consecuencias serían desastrosas, y la proporción de costes y beneficios no es favorable». El 14 de septiembre, Vaky entregó a Kissinger un memorando secreto en el que resumía un informe de situación

de la CIA respecto a Chile junto con un comentario analítico y una serie de conclusiones y recomendaciones. «Es imposible llevar a cabo una acción militar», aseveraba. «No tenemos la capacidad necesaria para motivar o instigar un golpe de Estado» y «cualquier intento clandestino de incitar la toma del poder por parte de los militares está destinado al fracaso». No era impensable que el éxito de la operación concebida para obstruir la acción del gobierno de Allende desembocara en «actos generalizados de violencia e incluso una insurrección», lo que exigiría una implicación cada vez mayor de Estados Unidos en Chile para sostener a un gobierno suplente. En caso de fracasar, el proyecto podría fortalecer y radicalizar a las fuerzas de Allende hasta el punto de convertirse en «la bahía de Cochinos de este gobierno».

Con una actitud algo más decidida, Vaky preguntaba si los peligros de un gobierno encabezado por Allende tenían más peso que los peligros y riesgos que la posible sucesión de acontecimientos que pondría en marcha Washington por medio de una intervención encubierta, y ofrecía luego su propia respuesta:

> Lo que proponemos no es otra cosa que una patente violación de nuestros propios principios políticos. Dejando a un lado cualquier apreciación moral, el hecho tiene consecuencias operativas prácticas. (...) Si estos principios tienen algún significado, lo normal sería apartarnos de ellos solo en el caso de tener que enfrentarnos a una amenaza de gravedad extrema para nosotros; es decir, para nuestra supervivencia. ¿Supone Allende una amenaza mortal para Estados Unidos? Resulta difícil sostenerlo.[22]

La vía I y la vía II

En Chile, el resto de Hispanoamérica y Washington, la mayoría obtenida por Salvador Allende el 4 de septiembre constituyó un acontecimiento trascendental. Su victoria provocó una reacción frenética al interior del gobierno de Nixon, donde casi puede decirse que se vivía al minuto. El día de la elección, el embajador Edward Korry envió a Washington no menos de dieciocho comunicaciones referentes al recuento de votos, seguidas de

docenas de prolijos cablegramas —«korrygramas», tal como los habían bautizado en el Departamento de Estado, donde se habían hecho célebres por su estilo único y sus poco diplomáticas opiniones— en los que culpaba de los resultados al carácter «torpe, desorganizado, ingenuo e impotente» de los democristianos de centro, así como a la «miopía y la arrogante estupidez» de la clase alta chilena de derecha, toda vez que unos y otra habían dejado que ganase Allende. «El liderazgo, si se me permite expresarlo en español, depende de tres elementos: cabeza, corazón y cojones», escribió con gran desprecio en un despacho del 5 de septiembre titulado "Allende ha ganado". «En Chile han confiado solo en la cháchara».

Durante las semanas siguientes, el embajador envió toda una retahíla de cablegramas con el sello de secreto o noforn y títulos tales como «No hay esperanza para Chile» o «Vislumbres de esperanza para Chile». Cierto número de estos informes de campo identificaba lo que Korry llamó en tono sarcástico «un artilugio de Rube Goldberg», «una operación organizativa clandestina» concebida para impedir «de forma constitucional» la ratificación de Allende por parte del Congreso chileno el 24 de octubre.** El plan consistía en persuadir a esta institución, valiéndose de medios políticos secretos, para ratificar en la citada fecha la candidatura de Jorge Alessandri, quien había obtenido el segundo lugar en las elecciones. Entonces este último habría de renunciar a la presidencia, lo que daría lugar a la convocatoria de nuevas elecciones en las que podría participar de nuevo el presidente democristiano saliente, Eduardo Frei, para, tal vez, derrotar a Allende. Este plan constituía el anteproyecto de lo que la CIA bautizó como «vía I» —la «solución parlamentaria». La vía II se convirtió en la expresión interna con que se designaron las operaciones posteriores a la orden emitida por Nixon el 15 de septiembre de impulsar, por todos los medios posibles, un golpe de Estado militar.

Los orígenes de la vía I se remontan al 18 de junio de 1970, cuando el embajador Korry propuso que el Comité 40 destinase un fondo de doscientos cincuenta mil dólares para sobornar a diversos miembros del Congreso chileno, acto que constituiría la «fase II» de una «operación de deslustre» contra Allende a la que se habían asignado trescientos sesenta mil dólares. Si el día 4 de septiembre no se hacía ningún candidato con la mayoría, el Congreso votaría para ratificar al ganador —el que más votos

hubiese obtenido, por lo general— el 24 de octubre. La Unidad Popular de Allende contaba con unos ochenta y dos votos en el Congreso: para ganar iba a necesitar diecinueve votos adicionales en poder de los democristianos, y quizá pudiese obtener la ratificación aun en caso de ser el segundo más votado. Korry quería asegurarse de que Estados Unidos podía disponer de los votos democristianos suficientes para impedir el triunfo de Allende. Recibió la aprobación que necesitaba para emplear las cantidades mencionadas, pero su distribución se aplazó hasta después de las elecciones.[23]

El 14 de septiembre, el Comité 40 autorizó a Korry a gastar los doscientos cincuenta mil dólares para «respaldar de forma clandestina los proyectos que consideren importantes Frei o su equipo de confianza». Sin embargo, la embajada y la CIA no tardaron en advertir que la posibilidad de que alguien los delatase convertía las operaciones de soborno en algo demasiado arriesgado: la menor filtración podía dar pie a una violenta reacción por parte del elemento nacionalista de los políticos chilenos. En consecuencia, se abandonó la idea del soborno, aunque Estados Unidos siguió presionando de forma encubierta a los militares y los democristianos a fin de organizar el llamado «gambito de la reelección de Frei». Pocos días después de la elección de Allende, el embajador Korry había de reunirse con el general Camilo Valenzuela a fin de proponerle un plan por el que sería ratificado Alessandri, el segundo más votado. Este debía formar un gabinete militar y dimitir, de modo que fuesen los miembros del Ejército quienes supervisaran las nuevas elecciones entre Frei y Allende. No obstante, hubo que reconocer que la idea estaba destinada al fracaso una vez que la CIA determinó que no había modo alguno de desviar los votos del Congreso necesarios para ratificar a Alessandri.

A mediados de septiembre, la embajada y la CIA perseguían un plan que consistía en poco más que un golpe de Estado militar autorizado por Frei. Se trataba de pedir ayuda a este para que garantizase 1) la dimisión de su gabinete; 2) la formación de uno nuevo compuesto en su totalidad por personalidades militares; 3) el nombramiento de un presidente en funciones, y 4) su propia salida del país, de forma que este quedase bajo el control efectivo de los militares. «El éxito de un golpe de Estado como este —

afirmaba un informe de situación de la CIA— dependerá en definitiva de que Frei se comprometa a llegar hasta el final de forma incondicional».

Y fue precisamente aquí donde radicaba el principal problema al que se enfrentó la vía I: la poca inclinación que sentía Frei por la idea de traicionar la larga tradición chilena de gobiernos civiles constitucionales. Korry, quien se reunió en secreto con él y con su intermediario, el ministro de Defensa chileno, Ricardo Ossa, no tenía claro si elogiar al presidente en cuanto «única esperanza para Chile» o despreciarlo por no «llevar bien puestos los calzones». En lo que respecta a la CIA, David Atlee Phillips supo captar las problemáticas posibilidades que ofrecía un golpe de Estado cuya trama se basaba en que los principales políticos civiles de Chile y su presidente estuviesen dispuestos a minar las sagradas tradiciones democráticas de su país. En un cablegrama dirigido al puesto de operaciones en Santiago el 21 de septiembre, escribió:

> El cometido más importante consiste en persuadir a Frei de que emprenda la acción que dará los resultados esperados. Después, todo se tornará incierto para nosotros, por cuanto no tenemos claro qué queremos que haga Frei, aparte de encabezar por sí mismo el golpe de Estado militar, algo que apenas podemos esperar de un alma blanda como la suya. Podemos aspirar ansiosos a que actúe de un modo que no solo propicie el clima necesario para un golpe de Estado, sino que lo precipite de un modo activo.

Según el «Informe sobre las actividades del destacamento especial para Chile de la CIA», desclasificado, la Agencia «puso en marcha una acción política coordinada con una campaña propagandística a fin de tentar y atraer a Frei» para que hiciese realidad el plan de golpe de Estado. Las más superficiales de estas operaciones iban desde sembrar los periódicos de todo el mundo de artículos falsos que asegurasen que los comunistas pretendían «destruir a Frei en cuanto individuo y dirigente político una vez que Allende [se hiciera con] el cargo», y tener a Frei informado de tales infundios de un modo directo, hasta organizar la llegada de una serie de telegramas dirigidos a su esposa por grupos de mujeres ficticios de otros países hispanoamericanos en los que le suplicaban que salvara la región de los horrores del comunismo. (Cierto cablegrama de la CIA referente a la vía

I, con fecha del 19 de octubre, afirmaba que «entre las influencias que mueven a Frei a adoptar una postura más severa se encuentra “el repentino cambio de carácter de la señora Frei”»). La vía II, por su parte, incluía operaciones mucho más siniestras y violentas concebidas para «influir en el estado de ánimo de Frei».

La distinción que se ha establecido tradicionalmente entre las dos vías —según la cual la primera se centraba en una solución constitucional y la segunda, en un golpe de Estado militar contra Allende— peca de inexacta: la vía I no tardó en evolucionar para concentrarse también en la toma del poder por parte del Ejército, lo que el subdirector de operaciones encubiertas de la CIA, Tom Karamessines, llamó «un golpe militar tranquilo y, con suerte, no violento». En un cablegrama fechado el 21 de septiembre relativo a ambas vías, el director del destacamento especial de la CIA, David Atlee Phillips, señaló al jefe de la base en Santiago que el objetivo era «evitar la llegada de Allende al poder. Se han descartado los malabarismos parlamentarios: la solución militar es objetiva».

La diferencia más relevante entre ambas vías consistía en que la I requería la participación de Frei y suponía la actuación del embajador Korry para presionar al presidente chileno a fin de que diese carta blanca a los militares del país, en tanto que la II se centraba en identificar a cualquier oficial militar, activo o retirado, dispuesto a encabezar un golpe de Estado violento, así como en proporcionar los incentivos, razones, dirección, coordinación, equipo y financiación necesarios para provocar con éxito el derrocamiento de la democracia chilena. La vía II del Proyecto FUBELT estaba constituida por numerosas divisiones y subdivisiones, y de hecho eran pocos los miembros del Comité 40 que conocían su existencia. (Tras las sesiones del Comité, Kissinger se reunía con un grupo mucho más reducido de miembros de la CIA y el CSN que estaban al corriente del proyecto). Siguiendo órdenes de Nixon, el embajador Korry y su equipo quedaron excluidos de este conjunto de operaciones.[24]

Las acciones de la vía II comenzaron con el cablegrama de Broe a Hecksher del 9 de septiembre y se aceleraron con la orden de Nixon del día 15. El destacamento especial para Chile, que coordinaba también la vía I, estableció de inmediato un canal especial de comunicaciones con el director

del puesto en Santiago y, según el «Informe de situación Nº 1 del Proyecto FUBELT», se enviaron más agentes a Santiago para «aumentar el poder» de esta. El subdirector de operaciones encubiertas, Karamessines; el director de la División del Hemisferio Occidental de la CIA, Broe, y el jefe del destacamento especial, David Atlee Phillips, comenzaron a reunirse cada día. El destacamento elaboró un diario de actividades y frecuentes informes de situación en los que se detallaba el estado en que se encontraban las operaciones en Chile.[25] Sometido a una «presión mucho más que incesante (...) de la Casa Blanca», en palabras del personal de la CIA, Karamessines mantuvo informados en todo momento a Kissinger y a su subordinado más inmediato, Alexander Haig, de cuanto se iba avanzando en dirección a su objetivo de impeler un golpe militar en Chile.

La Agencia pretendía llevar a término un plan básico de tres pasos: 1) Identificar a los oficiales dispuestos a efectuar el golpe, ponerse en contacto con ellos y recabar toda la información posible al respecto; 2) informarlos de que Estados Unidos se comprometía a proporcionar un «respaldo total para el golpe», siempre que este no exigiese el envío de tropas norteamericanas, y 3) promover la creación de un «clima propicio para el golpe mediante el uso de la propaganda, la desinformación y el terrorismo», a fin de facilitar un estímulo o pretexto para poner en movimiento a los militares.

Aun antes de que Nixon diese la orden relativa al golpe, el director del puesto de operaciones en Santiago había comenzado a ponerse en contacto con miembros selectos del estamento militar chileno. Con todo, la entidad tenía un acceso limitado al cuerpo de oficiales, y sus relaciones con estos no eran muy estrechas. (El segundo informe de situación acerca de la vía II habla de una investigación efectuada por la CIA entre todos sus agentes secretos a fin de localizar a alguno que hubiese tenido contactos previos con miembros del Ejército chileno). Lo cierto es que cuando se inició el Proyecto FUBELT la CIA contaba con tan solo dos «activos» (agentes remunerados) entre los militares del país, y esa fue la razón que la movió a contratar los servicios del agregado militar en Chile de la DIA (sigla en inglés para: Agencia de Inteligencia de la Defensa), el coronel Paul Wimert, quien, según un informe del destacamento especial, «gozaba de relaciones estrechas, francas y confidenciales en grado excepcional» con potenciales

participantes en un golpe de Estado. El 29 de septiembre, Wimert recibió un mensaje secreto del director en funciones de la DIA, Jamie Philpott, a través del destacamento especial para Chile de la CIA, en el que se le ordenaba que trabajase «codo a codo con el jefe de la CIA (...) para localizar y aconsejar a las principales figuras militares capaces de desempeñar un papel decisivo en cualquier acción que, a la postre, pueda privar a Allende de la presidencia. Es de vital importancia que el embajador no sepa nada».[26]

La CIA puso también en movimiento a una pequeña unidad selecta de cuatro agentes especiales —conocidos como agentes «de bandera falsa» o «equipo ilegal»— a los que habían elegido «por su capacidad para asumir una nacionalidad no estadounidense». Según los sumarios internos de la CIA en torno a la vía II, actuaban en el mayor de los secretos, haciéndose pasar por hispanohablantes latinoamericanos, y se encargaban de «los contactos con un mayor potencial de riesgo, es decir, aquellos individuos cuyas credenciales, fiabilidad y grado de seguridad no estén demostrados o sean desconocidos», a fin de salvaguardar al gobierno de ser descubierto. «La oficina central ha propuesto establecer una pequeña plantilla de oficiales de bandera falsa en Santiago que se hagan cargo de las actividades no previstas que comporten un alto riesgo», según recoge la entrada correspondiente al 28 de septiembre del diario que mantenía la Agencia Central de Inteligencia acerca de la vía II.

Juntos, Hecksher, Wimert y los agentes de bandera falsa establecieron contactos con unas dos docenas de integrantes del Ejército y de Carabineros chilenos desde finales de septiembre hasta finales de octubre. El mensaje que les hicieron llegar era que Estados Unidos pretendía interrumpir la ayuda militar a Chile a menos que se levantasen contra Allende, y que deseaba, y estaba dispuesto a respaldar de forma activa, un golpe de Estado. Así también ordenó el destacamento especial de la CIA a Wimert que dijese a los generales chilenos de más interés: «Las más altas instancias de Washington os han autorizado a ofrecer a las Fuerzas Armadas de Chile ayuda material (siempre que esto no implique una intervención armada [de EE.UU.]) a cualquier iniciativa que emprendan para evitar la elección de Allende el 24 de octubre o su investidura el 4 de noviembre, o para llevar a cabo su posterior derrocamiento».

En un principio, la CIA centró su atención en varios oficiales activos, entre los que se encontraban el general Camilo Valenzuela, comandante del cuartel de Santiago; el general de la Fuerza Aérea Joaquín García y un alto mando de los Carabineros, al parecer el general Vicente Huerta, como posibles cabecillas de un golpe de Estado. Asimismo, evaluó la posibilidad de elegir al general retirado Arturo Marshall, extremista fanático consagrado al terrorismo, para que llevase a cabo actos que irían desde la colocación de bombas en Santiago hasta el asesinato de Allende. Sin embargo, en opinión de la base de la CIA en Chile, el «único dirigente militar de renombre nacional [que] parece comprometido a negar la presidencia a Allende por medio de la fuerza» era Roberto Viaux, comandante descontento que había tratado de arrebatar el poder a Frei en 1969.[27]

Con todo, la planificación del golpe de Estado seguía siendo problemática. El general Viaux se había retirado tras su intento de sublevación, por lo que no se hallaba al frente de tropa alguna. Además, cierta fuente de información de lo más alto del escalafón de la CIA lo había descartado por considerarlo «capaz de dirigir un intento de golpe de Estado fallido que acabe en carnicería». El general Marshall, con quien se había reunido la Agencia y a quien esta financiaba, fue considerado enseguida demasiado inestable, y se abandonó todo contacto con él «dadas sus tendencias extremistas», según uno de sus informes. Por otra parte, los oficiales activos se hallaban inmovilizados por su propio comandante en jefe, el general René Schneider, quien había manifestado en público su opinión en favor de un traspaso constitucional del poder. «Aunque Frei ha estado explorando con los militares las posibilidades de intervención y se da cuenta de que el general Schneider es el principal escollo en este sentido», señaló un informe de situación especial de la CIA con fecha del 2 de octubre, «aún no ha sido capaz de reunir el coraje suficiente para neutralizarlo o hacerlo salir del país». Frei, según se quejaba David Atlee Phillips en un cablegrama dirigido aquel mismo día al puesto de operaciones en Santiago, «está esperando a que los militares lo destituyan. Sin embargo, los militares chilenos de ideas constitucionalistas están aguardando a que Frei les ordene dar un golpe de Estado». En otro cable enviado tres días más tarde, el director del destacamento especial predijo que «solo el caos económico o el

surgimiento de serios disturbios civiles pueden alterar la postura de los militares».

El «detonante de la acción»: La creación de un clima propicio para el golpe

Para cumplir las órdenes de promover un golpe de Estado emitidas por Nixon, la CIA debió hacer frente a lo que el director Helms describió como «el imposible» reto de obligar al presidente Frei a alzarse contra las estructuras democráticas de su propia nación; «neutralizar», en caso necesario, al respetado comandante en jefe de Chile, el general Schneider, y vencer lo que los documentos de la Agencia llamaban «la inercia apolítica y constitucionalista del estamento militar chileno». Además, no había razón ni justificación alguna, ni siquiera un pretexto, para que los militares se movilizaran a fin de evitar la subida al poder de la coalición de Allende, la Unidad Popular. En realidad, la inmensa mayoría de los chilenos vivía en paz con el resultado del proceso político de la nación. «No hay excusa alguna para poner en movimiento a los militares», informó la base de operaciones en Santiago el 29 de septiembre, «en vista de la calma total que impera en todo el país».

En la serie de operaciones más siniestra vinculada a las vías I y II, la CIA, con la ayuda de la embajada y la Casa Blanca, se propuso tornar de forma activa la tranquilidad en confusión con el objetivo de promover un «clima propicio para el golpe» en Chile. El fin era instigar una crisis socioeconómica y unas convulsiones tales que obligasen a Frei o los militares a actuar. «Hemos llegado a la conclusión de que nuestra labor consiste en crear un clima tal que proporcione un pretexto sólido para que los militares y el presidente actúen en la dirección deseada», informaron Broe y Phillips al puesto de operaciones santiaguino el 28 de septiembre, en un cablegrama que puede tomarse como un plan secreto de acción del golpe de Estado que trataba de impulsar la CIA en Chile. «Sería recomendable que centrásemos nuestra atención de forma sistemática en los tres frentes de acción principales (entrelazados entre sí) de un programa diseñado para a) obligar a Frei a actuar o salir del país; b) crear una atmósfera en la que

puedan actuar con éxito él u otros, y c) ayudar a crear el detonante de la acción».[28]

Los tres «frentes de acción» para la creación de un «clima propicio para el golpe» eran la guerra económica, la guerra política y la guerra psicológica. Si se lograba «aumentar la tensión» a través de esas tres líneas, en opinión de los estrategas de la CIA, no tardaría en presentarse de un modo u otro un pretexto para el golpe de Estado, un «único acto que forzará una reacción en masa de los comunistas, la indignación pública o ambas cosas», tal como deseaban (y predijeron) Broe y Phillips. «Podemos buscar la oportunidad y, cuando llegue el momento, provocarlo».

Desde el primer día del Proyecto FUBELT se consideró que la presión económica —real y sugerida mediante amenazas— era un componente fundamental de la estrategia relativa al golpe de Estado («hacer saltar la economía», según la frase ahora célebre de Nixon). El primer informe de situación, por ejemplo, solicitaba a la CIA que comenzase a «determinar de inmediato qué tácticas de presión económica pueden emplearse». En un cablegrama especial destinado a Kissinger, quien se hallaba de viaje con el presidente por Europa a principios de octubre, Richard Helms señaló que «el pretexto más lógico para lograr poner en marcha a los militares sería una repentina situación económica desastrosa», y que «el único modo práctico de crear la atmósfera de tensión que lleve a Frei a reunir el coraje suficiente para actuar es asegurarse de que la economía chilena, precaria desde las elecciones, empeore de forma drástica». En palabras de Helms, «se requiere al menos una minicrisis».

Tanto la CIA como los miembros del Departamento de Estado lograron el respaldo de las empresas estadounidenses que tenían intereses en Chile. A finales de septiembre, Korry convocó una reunión en la embajada con un nutrido grupo de representantes de aquellas a fin de exponer la situación. También se encontró con un intermediario de Frei, el ministro de Defensa Ossa, para que le transmitiera una dramática advertencia: «No dejaremos que llegue un solo tornillo o tuerca a Chile si Allende se hace con el poder. Haremos cuanto esté en nuestras manos para condenar al país y a sus habitantes a las privaciones y la pobreza más absolutas. (...) Frei sería un

iluso si creyera que existen muchas alternativas a la miseria más extrema o alguna esperanza de ver a Chile salir adelante».

En cierta conversación mantenida con un funcionario de identidad desconocida, Korry discutió una serie de iniciativas económicas hostiles que podrían contribuir a una rápida desaceleración de la economía y provocar una reacción militar. El 24 de septiembre, el embajador cablegrafió a Washington con todo un repertorio de ideas y propuestas: difundir el rumor de un inminente racionamiento y provocar así una «gran demanda de mercancías alimenticias»; solicitar a los bancos estadounidenses que detuviesen la renovación de los créditos concedidos a Chile; hacer que «las compañías estadounidenses establecidas en el país se demoren tanto como les sea posible (...) que aplacen los pedidos, la entrega de piezas de repuesto...»; propagar el infundio de que las sociedades de crédito chilenas se hallaban casi en bancarrota, e instar a varias compañías de las más destacadas de Estados Unidos a que declarasen públicamente que pretendían cancelar de forma definitiva las transacciones con Chile. Korry volvió a la carga el 25 de septiembre con una lista adicional de recomendaciones, entre las que se incluía presionar al gigante de la industria minera estadounidense Anaconda Copper para que se condujese con severidad en relación con la huelga de trabajadores a la que se enfrentaba a la sazón; hacer circular la idea de que el gobierno que se disponía a formar Allende tenía la intención de impedir que saliesen del país las «personalidades más destacadas de los ámbitos técnico y directivo» —con lo que Estados Unidos lograría espolear en aquel momento un éxodo de tal personal—; acuciar a la compañía Ford para que se retirase de Chile y al Bank of America para que le cerrase sus puertas, lo que, en opinión de Korry, «supondría un duro revés para los círculos bancarios chilenos y agotaría una de sus fuentes crediticias».[29]

Los altos funcionarios del Departamento de Estado, de hecho, llegaron a reunirse con ejecutivos de la Ford y el Bank of America con el objetivo de obtener su respaldo. La CIA, por su parte, intensificó su colaboración con la compañía estadounidense que más se oponía a la elección de Allende: la International Telephone and Telegraph Company (ITT). Esta última poseía participaciones en Chile por valor de ciento cincuenta y tres millones de dólares (era dueña, entre otras, de tres empresas telefónicas, dos hoteles

Sheraton y la Standard Electric), lo que la convertía en el tercer grupo de empresas estadounidenses del país. Sin duda era la más intervencionista de todas. A mediados de julio, semanas antes de la elección de Allende, John McCone, miembro del consejo de la ITT y antiguo director de la CIA, se había puesto en contacto con su sucesor, Richard Helms, y le había sugerido que emplease los contactos ya existentes entre ambos organismos para minar la candidatura de Allende. A esto siguió una serie de encuentros al más alto nivel, según los documentos de la empresa filtrados, que incluía una reunión celebrada el 11 de septiembre con la participación de McCone, Helms y Kissinger, en cuyo transcurso ofreció la ITT un millón de dólares «con el objetivo de servir de ayuda a cualquier plan del gobierno [estadounidense] para parar los pies a Allende».[30] El 29 de septiembre, William Broe, de la CIA, se reunió con Edward Gerrity, vicepresidente primero de la ITT, para «explorar la viabilidad de posibles acciones a la hora de ejercer cierta presión económica sobre Chile». En tanto que la CIA no ha hecho público aún el memorando de lo que se trató en aquel encuentro —que no fue sino uno de los alrededor de cuarenta contactos que mantuvieron altos cargos de la CIA con miembros de la ITT en relación con Chile entre 1970 y 1971—, el informe elaborado por Gerrity para el director general de la compañía, Harold Geneen, afirmaba que el funcionario de la Agencia le había presentado un plan que tenía por objetivo «provocar el derrumbamiento económico» del país.[31] Durante una llamada telefónica efectuada a Geneen ese mismo día, el supervisor del Proyecto FUBELT de la CIA, Tom Karamessines, habló en términos semejantes.

Como parte de la campaña de acoso económico, la CIA instó asimismo que se presionase de forma directa a otros países importantes que mantuvieran fuertes vínculos económicos con Chile. La víspera del encuentro que tuvo en Londres el presidente Nixon con el primer ministro británico Edward Heath, Helms envió a Kissinger un cablegrama referente al «papel [del Reino Unido] en la escena económica chilena». El memorando de cierta conversación mantenida entre Nixon y Heath del día 3 de octubre —clasificado como alto secreto— afirma que el presidente «quería que los británicos no alentasen la idea de que su gobierno [el de Allende] pudiera resultar aceptable hasta que la suerte estuviese echada». Nixon añadió que «tenía la esperanza de que el Reino Unido suspendiese los préstamos y otros asuntos del mismo tipo».[32] En la reunión del Comité 40 celebrada el

6 de octubre, Kissinger señaló que una «autoridad superior» había estado «advirtiendo a los jefes de gobierno de Europa del carácter absolutamente indeseable de un posible régimen de Allende en Chile».

A principios de octubre, el gobierno de Nixon ya había dado una serie de pasos encaminados a la desestabilización de la economía chilena. En el sector financiero, se aplazó un préstamo bancario pendiente relacionado con exportaciones e importaciones al recibir el banco participante instrucciones secretas de rebajar la clasificación crediticia de Chile a fin de restringir futuras transacciones de crédito. De este modo se retrasó también un préstamo de gran importancia para la ganadería, y otro tanto sucedió con todos los empréstitos procedentes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Por otra parte, el Bank of America había accedido a limitar las líneas de crédito adicionales, y a todo esto hay que sumar las conversaciones que se habían planeado con ejecutivos de la ITT con el fin de coordinar y ejercer presión sobre otras compañías estadounidenses para limitar sus operaciones en Chile.[33]

La guerra política, que había adoptado la forma de distribución de propaganda y movilización de organizaciones y recursos controlados por la CIA, también comenzó a acelerarse. Los esfuerzos de la Agencia pretendían aislar la coalición encabezada por Allende, la Unidad Popular, dirigiendo y financiando declaraciones negativas hechas por líderes políticos y cívicos, bien en mítines en contra de Allende, bien en medios de comunicación hostiles a su partido, como periódicos y emisoras de radio y televisión propiedad de la CIA o respaldados por esta. Asimismo, el puesto de operaciones en Chile recibió órdenes de dirigir múltiples acciones de «propaganda negra», consistentes en hacer llegar a la prensa o a los círculos militares información tan falsa como provocadora acerca de los planes de Allende. A principios de octubre, por ejemplo, se dijo al puesto en Santiago que creara e infiltrara informes ficticios fruto de una supuesta labor de espionaje acerca de la futura reorganización de los servicios de inteligencia chilenos «en consonancia con el patrón soviético y cubano, lo que supondría la génesis de la estructura necesaria para crear un Estado policial».

«Lo más importante es la guerra psicológica en Chile», subrayaron los funcionarios de la CIA. «No tiene sentido tratar de prender fuego al mundo si Chile es un remanso de paz. El combustible necesario debe provenir del interior del país. En consecuencia, el puesto santiaguino debería hacer uso de cualquier estratagema, por estrafalaria que parezca, para crear esa resistencia interna».[34] Las tácticas de esta guerra instigada por la CIA eran muy variadas e iban de lo superfluo a lo siniestro. El 7 de octubre, Phillips y Broe dieron órdenes al centro de operaciones en Santiago de «iniciar de inmediato una campaña de rumores, basados siempre que sea posible en hechos tangibles, que ayuden a originar este clima [propicio para un golpe de Estado] [véase el documento 7]. A modo de sugerencia, tal vez pueda asignarse a los oficiales de bandera falsa la labor de salir a los bares y hacer correr al menos tres rumores al día durante diez días seguidos. Pensamos que el puesto de operaciones sabrá sacar de ellos el máximo provecho posible».[35] En otro cablegrama, mucho más siniestro, fechado el mismo día que el anterior, se ordenaba al puesto que considerase la instigación de actividades «terroristas» capaces de provocar a los seguidores de Allende.

Aunque se han eliminado casi todas las referencias al empleo del terrorismo de los documentos de la CIA que han salido a la luz, la información que proporcionan es suficiente para demostrar que este tipo de actos formaba parte de los intentos de crear el clima mencionado. Los diarios del destacamento especial prueban que la Agencia estaba vigilando y financiando con modestas cantidades las acciones del grupo neofascista Patria y Libertad. Un informe de situación de la CIA fechado el día 6 de octubre señalaba que el puesto santiaguino se había puesto en contacto con «el representante de un grupo anticomunista decidido a organizar actividades terroristas» (referencia a la reunión mantenida por un agente de bandera falsa con el general retirado Arturo Marshall) y que «ese grupo cuenta supuestamente con el liderazgo del general Viaux». La entrada del diario correspondiente al 10 de octubre hacía constar que este último pretendía «incrementar el nivel del terrorismo en Santiago durante el fin de semana. El objetivo de esta actividad es el de provocar un contraataque por parte de la UP y disturbios callejeros».[36]

Por paradójico que resulte, quien se opuso de un modo más enérgico a la idea de conspirar con Viaux y otros militares chilenos fue el embajador

estadounidense. El 6 de octubre, Korry tuvo noticias, por mediación de sus propias fuentes, de los planes relativos al golpe de Estado y ordenó de nuevo a Hecksher y Wimert que se mantuviesen alejados de todas las personalidades militares chilenas. «He descubierto horrorizado la existencia de una cooperación para [tachado] planear un golpe de Estado», manifestó iracundo en un cablegrama dirigido a Kissinger. «Los militares no van a hacer un golpe de Estado para hacer que Viaux suba al poder, ni existe un estado general de ánimo entre el pueblo que proporcione la justificación moral necesaria. (...) En resumidas cuentas, creo que cualquier intento por nuestra parte de alentar de forma activa un golpe de Estado acabará por convertirse en un fracaso comparable al de la bahía de Cochinos». Según advertía, un golpe fallido constituiría «un desastre total para Estados Unidos (...) y dañaría sobremanera los intereses que tiene la nación en toda América Latina, cuando no fuera de esta».

En Washington hicieron caso omiso del toque de atención de Korry, y Kissinger no dudó en anular las órdenes que había dictado a la CIA. Durante la reunión del Comité 40 celebrada el 6 de octubre, el secretario de Estado ordenó «rescindir de inmediato» sus instrucciones de cesar todo contacto con el estamento militar chileno.

En aquel mismo encuentro, Kissinger presionó a la CIA para que promoviera el golpe de Estado, y señaló que «quedaban solo dieciocho días y que se hacía necesaria una acción drástica que impulsara a los chilenos a ponerse en movimiento». Debido a su insistencia, al día siguiente llegó a la base en Santiago una orden del destacamento especial chileno redactada sin ambages. Este cablegrama irrepetible, firmado, por concederle una mayor importancia, por el director de la Agencia, Richard Helms, conminaba a la base santiaguina a «respaldar la acción militar» mediante «todas las estratagemas posibles» para crear así el clima propicio para el golpe de Estado. «No hay un solo minuto que perder», afirmaba el cablegrama, que en otro punto hacía constar que «todas las demás consideraciones son secundarias». «Pónganse en contacto con los militares y háganles saber que el gobierno de Estados Unidos quiere una solución militar y que los respaldaremos ahora y en el futuro».[37]

La CIA, sometida a una presión extrema que la apremiaba para plantear un «sobresalto» capaz de instigar convulsiones sociales, llegó a lo que consideró «la única solución viable para obstruir a Allende»: una acción militar protagonizada por Roberto Viaux que recibió, en consecuencia, el nombre de «la solución Viaux». El valor que concedía la Agencia a este general retirado en cuanto persona apta para encauzar el golpe de Estado era evidente desde el comienzo del Proyecto FUBELT: ya en el primer informe de situación del 17 de septiembre, el destacamento especial señaló que un modo de «incitar disturbios» sería «determinar si [podía inducirse al] general Viaux a entrar en acción y provocar así una respuesta violenta por parte de los comunistas y la consiguiente intervención de los militares». Un plan así, en caso de ser ejecutable, serviría asimismo para impulsar a Frei a «coger el toro por los cuernos y actuar», afirmaba cierta propuesta de la CIA. Lo único que había que hacer era comunicar a Frei que «un golpe de Estado encabezado por Viaux desembocaría ineludiblemente en un tremendo derramamiento de sangre», lo que, «aunque preferible para Allende, constituiría una tragedia para Chile».

La CIA se puso en contacto por vez primera con Viaux, a través de un intermediario extranjero, el 5 de octubre. Más tarde se llevó a cabo un segundo encuentro, más productivo, por mediación de un miembro del «equipo ilegal». La entrada del diario de la vía II perteneciente al 9 de octubre exponía que «se ordenó a un agente de bandera falsa que se pusiese en contacto con el general Viaux para ofrecerle respaldo moral, financiero y material (en forma de armas) en nombre de un grupo estadounidense no identificado».

Ahora se sabe que dos de los cuatro miembros del equipo de agentes de bandera falsa que actuaron de enlace con Viaux eran Anthony Sforza y Bruce MacMaster. Este último procedía del puesto de operaciones de la CIA en México D.F., en tanto que el primero era un legendario agente ultrasecreto que había pasado veinte años operando en toda Latinoamérica, Europa y Asia, haciéndose pasar por un contrabandista relacionado con la mafia y ocultando su identidad bajo el pseudónimo de Henry J. Sloman. También había participado, en la capital mexicana, en una operación de alto secreto de la CIA contra el régimen cubano de Fidel Castro conocida por el nombre en clave de JKLANCE. MacMaster entró en Chile con pasaporte

falso de Colombia. En la media docena de contactos que mantuvo con Viaux y sus hombres, según un memorando de la CIA aún sin revelar, se presentó como «un hombre de negocios colombiano» y aseguró estar «representando intereses comerciales estadounidenses como la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller y otros grupos no identificados». Sforza se hizo pasar por un argentino relacionado con empresas latinoamericanas.

Durante los encuentros iniciales que mantuvo con los conspiradores de Viaux, Sforza obtuvo detalles referentes a sus necesidades y su estrategia militar. La ayuda que solicitó el general retirado consistía, entre otras cosas, en armas para controlar disturbios y dispersar multitudes, por un lado, y en el respaldo inmediato por parte de Estados Unidos una vez instalado el nuevo régimen, por el otro. «Viaux calcula que habrá unas 10.000 víctimas en Santiago antes de que pueda sofocarse el levantamiento comunista», informó a Hecksher el agente de bandera falsa. En su análisis de la situación, el director de la base de operaciones en Santiago predijo cuál sería la evolución de los acontecimientos que provocaría el golpe de Estado de Viaux:

> Puede dividir en dos las Fuerzas Armadas, cuando ciertas unidades se pongan de su lado y otras respalden a Schneider, es decir, a Allende. Los militantes de la Unidad Popular se pondrán de parte de las tropas que apoyen el régimen constitucional. El número de combatientes que puede haber en cada uno de los bandos opuestos es demasiado incierto para justificar un esfuerzo serio. Los indecisos se limitarán a observar el desarrollo de la batalla antes de comprometerse con un bando u otro. La matanza podría ser considerable y prolongada (estamos hablando de una guerra civil).

«Nos habéis pedido que provoquemos el caos en Chile», concluía el cablegrama de Hecksher. «Con la solución Viaux os ofrecemos una fórmula del caos que es poco probable que no suponga derramamiento de sangre». [38]

El asesinato del general Schneider

Fue el embajador Korry quien señaló por vez primera, el 21 de septiembre de 1970, que para impedir el ascenso de Allende a la presidencia iba a ser necesario «neutralizar al general Schneider, destituyéndolo si es necesario». El comandante en jefe y su «doctrina de no intervencionismo» en la política chilena constituían «la principal barrera de todo plan que cuente con la toma del gobierno por parte de los militares», según un informe de la CIA. La oficina central cablegrafió al puesto de operaciones el 13 de octubre: «¿Qué tiene previsto hacer el plan de Viaux para neutralizar al Alto Mando*** y evitar así que Schneider haga declaraciones que detengan a aquellos dirigentes militares que de otro modo se unirían al bando de Viaux?». En otro cablegrama, Broe y Phillips solicitaron a Hecksher que los orientase sobre cómo «quitar de en medio» al general Schneider: «¿[Podemos hacer algo] la base de operaciones o nosotros mismos para quitar de en medio a Schneider? Sabemos [que es una] pregunta retórica, pero queremos estimular ideas en ambos extremos sobre este asunto».[39]

La respuesta era secuestrarlo. El 7 de octubre, el coronel Wimert, agregado militar estadounidense, debatió por vez primera esta posibilidad con miembros de la Academia de Guerra del Ejército, institución dirigida por el general Alfredo Canales, quien se convertiría en un conspirador muy activo. El 8 de octubre, el jefe del centro de operaciones chileno de la CIA estudió también la idea del «rapto» de Schneider con un alto cargo de Carabineros. Los agentes de bandera falsa Sforza y MacMaster trataron este plan con los seguidores de Viaux, y, el 13 de octubre, un representante de este último llamó para informar que «se llevará a cabo un intento de quitar de en medio al general Schneider en el plazo de cuarenta y ocho horas» a fin de precipitar un golpe de Estado.

Sobre el papel, el plan para secuestrar a Schneider parecía capaz de matar numerosos pájaros de un tiro: eliminaría del puesto militar más elevado al más poderoso de cuantos se oponían al golpe; su lugar sería ocupado por una figura militar favorable a la acción golpista; la culpa del secuestro recaería en los extremistas de izquierda, lo que no haría sino minar la integridad de Allende, y, por último, la indignación pública resultante crearía el «clima propicio» y la justificación que la CIA estaba buscando para que el Ejército se hiciese con el poder. El problema al que se

enfrentaba la Agencia era determinar si Viaux tenía en verdad la capacidad de consumar un secuestro y un golpe militar.

Durante las primeras reuniones celebradas con Viaux, este pidió que los agentes de bandera falsa —a los que se menciona en los cablegramas con el acertado nombre de «patrocinadores»— demostrasen su buena fe haciendo llegar armas en paracaídas a los miembros del grupo y proporcionando a los conspiradores «de forma inmediata seguros de vida e invalidez», según informó el centro de operaciones en Santiago. (El 10 de octubre pidió, en un segundo encuentro, «cinco pólizas en blanco de hasta 50.000 dólares estadounidenses y veinte más de hasta 25.000»). La oficina central respondió que la entrega de armas sería arriesgada, en particular habida cuenta de los escasos datos de que disponían acerca de la competencia del general retirado. El destacamento especial ordenó a Hecksher que encargara a uno de los agentes de bandera falsa «volver a ponerse en contacto con Viaux y ofrecerle (...) la financiación suficiente para impresionar[lo] con nuestra buena fe. Con ese dinero podrá comprar armas, sobornar a los comandantes encargados de los arsenales para que se las suministren o adquirirlas de cualquier otro modo que encuentre a su disposición». Broe y Phillips ordenaron también al centro de operaciones en Santiago que investigase «si el golpe de Viaux tiene alguna posibilidad de llegar a puerto por sí solo o si podría desencadenar un golpe mayor».[40]

El 11 de octubre, Anthony Sforza, miembro del «equipo ilegal», se reunió en varias ocasiones con Viaux y su grupo. Por la noche consultó con MacMaster en la cafetería del Hotel Carrera —un encuentro que la CIA consideró un incumplimiento grave de las normas de seguridad, dado que se daba por hecho que a los agentes de bandera falsa no se los podía ver juntos—. Al día siguiente, Sforza salió de Santiago en dirección a la oficina central de la Agencia en Langley (Virginia) para celebrar una «sesión informativa» con Broe y Phillips, y ponerlos al corriente de la capacidad y las exigencias del general renegado. «Le hemos pedido informes [a Sforza]», cablegrafiaron el 13 de octubre los directores del destacamento especial. «Parece imprescindible que otro agente se ponga en contacto de nuevo y cuanto antes con Viaux» (MacMaster se había encargado de los contactos de Sforza). Resultaba inviable suministrar las armas y el gas paralizante que había pedido el general, pero los «patrocinadores» podían

prometer doscientos cincuenta mil dólares en pólizas de seguros. La oficina central sugirió que la base de operaciones en Santiago «mantuviese al movimiento de Viaux bien engrasado en lo financiero» en tanto la CIA trataba de coordinar sus actividades con las de otros conspiradores.[41]

«Las posibilidades de que tenga lugar un golpe de Estado pueden haber aumentado de modo significativo durante las últimas veinticuatro horas», afirma la entrada correspondiente al 14 de octubre del diario que mantenía el destacamento especial en relación con la vía II. «La semana pasada, el general Viaux parecía ser el único dirigente militar dispuesto a impedir el acceso de Allende al poder. Ahora estamos empezando a ver indicios de una actividad cada vez mayor de otros sectores militares encaminada a la ejecución de un golpe de Estado». Las investigaciones de la Agencia indicaban que había unidades militares en Concepción y Valdivia «dispuestas a levantarse contra el gobierno», mientras que los contactos que tenía con altos mandos militares activos daban fe de la voluntad de ponerse en movimiento que tenían oficiales como el almirante de las fuerzas navales Hugo Tirado, el general Alfredo Canales y el general de brigada Camilo Valenzuela. Tras una conversación mantenida con uno de estos, que Henry Hecksher describió como «desinhibida» y «totalmente franca», el director de la base en Santiago ofreció a su interlocutor datos recopilados por los servicios de inteligencia estadounidenses acerca de la capacidad de resistencia de quienes respaldaban a Allende («no aguantarían más de dieciséis horas») y le aseguró que, tras el golpe, el gobierno de Estados Unidos tiene la intención de negociar enseguida con la Junta Militar (...) nos mostraríamos muy comprensivos. Obviamente, no podemos consentir que las Fuerzas Armadas se deterioren, por lo que tomaremos sin demora las medidas necesarias para modernizar su maquinaria. Los militares no deberían preocuparse por la imagen que puedan ofrecer en el extranjero ni hacer caso de los lamentos de la opinión pública de las naciones democráticas.

Una vez implicados en la conspiración diversos oficiales activos, el destacamento especial de la CIA comenzó a preocuparse por la posibilidad de que Viaux actuara con precipitación, con lo que reduciría las probabilidades de llevar a cabo con éxito la operación militar. «Se hizo evidente», señaló un balance de la vía II elaborado con posterioridad, «que

Viaux no disponía de la organización ni del respaldo necesarios para llevar a término un golpe con buen resultado, y además podía iniciar una acción prematura que echase a perder las oportunidades, mucho mayores, de hacerlo desde el interior del estamento militar activo».

La CIA, que se enfrentaba a la decisión táctica de si había que mantener a raya a Viaux hasta que estuviesen listos los oficiales en activo, se vio sometida a nuevas presiones por parte de la más alta autoridad del gobierno estadounidense para que entrara en acción. En el transcurso de una reunión secreta con Karamessines y Kissinger celebrada en la Casa Blanca entre las 10:59 y las 11:09 del 13 de octubre —el mismo día que Viaux había comunicado a los agentes en Chile que Schneider sería secuestrado en un plazo de cuarenta y ocho horas—, Nixon volvió a dar órdenes explícitas de impedir que Allende llegase a la presidencia. Según declaró Karamessines recordando el encuentro, el «presidente se desvivió por impresionar a todos los presentes con su convicción de que era del todo indispensable frustrar la elección del señor Allende». Cuando se disponían a salir del Despacho Oval, tal como atestiguó más tarde Karamessines, «el presidente me llamó aparte para reiterarme el mensaje».[42]

Dos días después, Nixon transmitió el mismo mensaje al embajador Edward Korry, a quien habían hecho acudir a Washington para obtener su asesoramiento. «¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta...!», increpó el presidente mientras estampaba un puño contra la palma abierta de la otra mano, según el testimonio de Korry, cuando entró con Kissinger en el Despacho Oval a las 12:54 del día 15 de octubre. Al ver la expresión perpleja del rostro de su invitado, Nixon exclamó: «Usted no, señor embajador. Me refiero a ese hijo de puta de Allende. Vamos a aplastarlo». Durante los veintiún minutos que estuvieron reunidos, Korry —quien desconocía las órdenes dictadas por el presidente a la CIA con respecto a la vía II— compartió con Nixon y Kissinger su opinión de que la ratificación de Allende era un hecho consumado y de que cualquier intento encubierto de instigar un golpe militar no haría sino perjudicar los intereses internacionales de Estados Unidos. «Señor presidente», recuerda haber dicho a Nixon al ver que este no hacía caso alguno a sus consejos, «le estoy diciendo la verdad».[43]

Horas más tarde, a las 16:30, Kissinger se reunió con Karamessines en la Casa Blanca con la intención de ponerse al corriente del desarrollo del Proyecto FUBELT. Para tal objetivo, el oficial de la CIA había redactado un memorando titulado «Probable reacción ante un golpe fallido de Viaux», el que se centraba en las implicaciones que tendría para Estados Unidos —país sobre el que recaería la responsabilidad— la radicalización del futuro gobierno de Allende, entre las que no era la más baladí la disminución de «la probabilidad de efectuar un golpe de Estado tras la investidura».[44] Karamessines aseguró a Kissinger que «Viaux no tenía más de una posibilidad contra veinte (si no menos) de llevar a cabo con éxito un golpe de Estado». Según las minutas de la conversación, Kissinger y Karamessines repasaron juntos las repercusiones que tendría una intentona frustrada y decidieron «que la Agencia debe hacer llegar a Viaux un mensaje que lo advierta de los peligros de cualquier acción precipitada».

Más tarde, una vez publicados los detalles de la operación Schneider y de la vía II, Kissinger afirmaría en repetidas ocasiones haberse mostrado contrario a toda conspiración golpista en ese encuentro del 15 de octubre. En la declaración aún sin revelar que ofreció ante el Comité Church el 12 de agosto de 1975, aseguró que, tras la reunión, «la vía II había acabado para mí», en tanto que en sus memorias, Years of Renewal, escribió: «El 15 de octubre suspendí la vía II antes incluso de que llegara a ponerse en práctica».

Con todo, en los documentos desclasificados que detallan lo sucedido en la reunión no se recoge orden alguna de poner fin a la vía II. Más bien lo contrario, según atestiguan las minutas del encuentro, Kissinger dio el visto bueno a «la decisión de anular la conspiración golpista de Viaux, al menos de forma temporal». (La cursiva es mía). Autorizó que se hiciera llegar al general retirado un mensaje en estos términos: «Conserve sus recursos (...). Ya llegará el momento de que usted y sus amigos puedan hacer algo. Seguirán teniendo nuestro respaldo». En el acta de la conversación del 15 de octubre de 1970 se incluían las indicaciones que Kissinger dio a Karamessines «para mantener en Chile a los agentes de que disponemos, trabajando en la clandestinidad y de forma segura a fin de conservar las posibilidades de que la Agencia actúe en contra de Allende en un futuro» (véase el documento 8). El encuentro concluyó cuando el Dr. Kissinger

advirtió que la Agencia debía seguir manteniendo la presión que estaba ejerciendo sobre cada uno de los puntos flacos de Allende que quedasen al descubierto, en estos instantes, tras el 24 de octubre, después del 5 de noviembre y en el futuro hasta que se den órdenes de ponerse de nuevo en marcha. El Sr. Karamessines aseguró que la Agencia actuaría según lo dispuesto.

Lejos de descartar la vía II, las órdenes de Kissinger no hicieron sino sostener la presión encubierta «sobre cada uno de los puntos flacos de Allende», desde entonces hasta la ratificación del Congreso y la investidura, y también después de estas. Karamessines transmitió estas órdenes reiteradas en un cablegrama enviado al día siguiente al puesto de operaciones en Santiago:[45]

> La política, los objetivos y las acciones [del Proyecto FUBELT] fueron revisadas por altas instancias del gobierno estadounidense la tarde del 15 de octubre. Las conclusiones, que deben servirnos de guía operativa, son las siguientes:
>
> (...) El objetivo firme y vigente es el de derrocar a Allende por medio de un golpe de Estado. Lo más recomendable sería haberlo conseguido antes del 24 de octubre, aunque después de esta fecha deben continuar con gran vigor los empeños encaminados a lograr nuestro propósito. Debemos proseguir generando la mayor presión posible en este sentido, para lo cual nos serviremos de cualquier recurso que resulte adecuado. Es imprescindible que las acciones efectuadas en este sentido se lleven a cabo de modo reservado y seguro, de manera que permanezca en secreto la colaboración de Estados Unidos y su gobierno.

El cablegrama daba órdenes al centro de operaciones en Santiago para que se hiciese llegar a Viaux un mensaje en los mismos términos exactos que se habían empleado en la reunión con Kissinger. El puesto santiaguino debía alentarlo a «desarrollar su plan» y «sumar sus esfuerzos a los de otros conspiradores». Además, la oficina central comunicaba en el mismo escrito la siguiente orden a Hecksher:

> Revise todas sus actividades presentes y las nuevas que puedan acometerse con el fin de incluir propaganda, operaciones secretas de las que no puedan responsabilizarnos, revelación de datos obtenidos mediante espionaje, desinformación, contactos personales y cualquier otra cosa que pueda acudir a su imaginación y le permita seguir ejerciendo la presión necesaria para alcanzar nuestro objetivo [es decir, el del Proyecto FUBELT].

Más allá de los problemas que pudiesen surgir en relación con Viaux, la CIA había informado a Kissinger acerca de las actividades de varios oficiales activos, incluidos el almirante Tirado y el general Canales, que también se hallaban implicados en conspiraciones golpistas. Sin embargo, a pesar de que el secretario de Estado ordenó a la Agencia que mantuviese la presión, lo cierto es que las reuniones que mantuvo el 15 de octubre con Karamessines y Korry lo habían hecho dudar de que fuera posible impedir a Allende hacerse con la presidencia. Aquella tarde, a las 17:58, según el diario del Despacho Oval, Kissinger llamó a Nixon para comunicarle que la principal táctica golpista planeada por la CIA no era viable. Las «telcons» de Kissinger dan fe de que informó al presidente de que, dado que la conspiración de Viaux era demasiado arriesgada para arribar a buen puerto, había decidido «suspenderla». Además, le hizo saber que parecía poco probable que pudiera impedirse a Allende jurar el cargo.[46] Tres días después, el 18 de octubre, Kissinger redactó para Nixon un extenso informe de siete páginas («Asunto: Chile, cuestiones operativas de urgencia») en el que abordaba las decisiones generales y específicas que habían de tomarse para minar un futuro gobierno de Allende. «Ha quedado demostrado que nuestra capacidad para urdir con rapidez el derrocamiento de Allende es muy limitada», escribió refiriéndose de forma indirecta al Proyecto FUBELT. «Ahora parece claro que Allende será elegido presidente de Chile en la segunda vuelta de los comicios que efectuará el Congreso el 24 de octubre». En este escrito confidencial, el secretario de Estado recomendaba al presidente y al CSN que considerasen una «estrategia de adversario» y un «programa de acción» a más largo plazo en cuanto lo permitiese el calendario de trabajo de Nixon.[47]

Por irónico que parezca, los empeños de la CIA en impulsar un ataque preventivo comenzaron al fin a dar algún resultado en el preciso momento

en que Kissinger y Nixon empezaron a proyectar el modo de derrocar al gobierno de Allende tras la investidura. «Por fin, el estamento militar comienza a asociarse para trabajar codo a codo en el intento de negar a Allende la presidencia», señaló el informe especial de situación elaborado por la CIA el 19 de octubre. «Todo apunta a que cierto número de dirigentes militares (el general Valenzuela [el resto de los nombres de los conspiradores está tachado]) se han unido y están decididos a actuar contra el gobierno».

Por entonces ya había tomado forma toda una conspiración golpista encabezada por el general Valenzuela en colaboración con el almirante Tirado y el general retirado Viaux. El 17 de octubre, en el transcurso de una reunión nocturna clandestina con el agregado militar estadounidense Paul Wimert, dos de los subalternos de Valenzuela le pidieron que se las ingeniase para «proporcionarles ocho o diez granadas de gas lacrimógeno», según un cablegrama de la CIA. «En el plazo de cuarenta y ocho horas necesitan tres metralletas del calibre 45 (M-3) con 500 cartuchos para cada una». Cuando cierto agente de bandera falsa se reunió con el grupo de Viaux el 18 de octubre para anular su conspiración, recibió la noticia de que el plan para secuestrar a Schneider iba a ponerse en marcha la noche siguiente y constituiría el «primer eslabón» de toda una «cadena de acontecimientos». En una conversación distinta mantenida a las 22:30 de aquella misma noche con Wimert, Valenzuela refirió que Viaux estaba «al tanto de [la] operación» e informó al agregado militar estadounidense de la sucesión de hechos que culminaría con la toma del poder por parte de los militares.

La noche del 19 de octubre, según declaró Valenzuela, el general Schneider asistiría a una despedida de soltero que reuniría a importantes figuras del estamento militar en el domicilio del comandante en jefe del Ejército, situado en la calle Presidente Errázuriz. Lo secuestrarían cuando acudiera a la fiesta. La operación daría comienzo a la siguiente serie de acontecimientos, encaminada a establecer un régimen militar contrario a Allende:[48]

1. Schneider sería secuestrado tras su llegada a la casa.

2. Sería llevado a un aeroplano que lo trasladaría a Argentina.

3. Valenzuela anunciaría la «desaparición» de Schneider.

4. Los militares atribuirían a la izquierda la autoría del secuestro y emprenderían «la búsqueda de Schneider por todo Chile, lo que servirá de pretexto para llevar a cabo incursiones en las poblaciones**** controladas por los comunistas.

5. Se reorganizaría el mando militar para colocar a los conspiradores en posiciones de poder.

6. Frei dimitiría y abandonaría el país.

7. Se «instalaría» una nueva Junta Militar encabezada por el almirante Hugo Tirado.

8. La Junta disolvería el Congreso.

Para raptar a Schneider, según indicó Valenzuela, los conspiradores habrían de pagar cincuenta mil dólares a un equipo no identificado de secuestradores, un dinero que el puesto de la CIA en Chile autorizó a Wimert para suministrar a continuación.

La intentona de secuestro del 19 de octubre fracasó. Se suponía que el destacamento de policía que brindaba protección a Schneider en la fiesta se retiraría, lo que permitiría actuar a los secuestradores; pero esto no ocurrió. Además, en lugar de montar en su Mercedes oficial, Schneider tomó su coche personal y el equipo de raptores se puso nervioso «debido a la inexperiencia», según cablegrafió el puesto de operaciones de la CIA. El 20 de octubre, el contacto militar de Wimert informó que se había puesto en marcha un nuevo intento de secuestro. La víctima sería interceptada cuando saliese del Ministerio de Defensa en plena hora punta. No obstante, los secuestradores se vieron atrapados en un embotellamiento y perdieron de vista su vehículo.[49] La oficina central ordenó entonces a la base chilena que reiterase a «Valenzuela y los otros con los que ha estado en contacto que el gobierno de Estados Unidos sigue respaldando cualquier acción contra Allende».

A última hora del día siguiente llegaron las seis metralletas y la munición por valija diplomática de la embajada, con un envoltorio especial y etiquetas falsas para ocultar que los remitentes eran funcionarios del Departamento de Estado.[50] A los agentes de la base en Santiago les llevó poco menos de veinticuatro horas organizar una entrega clandestina. A las 2:00 del día 22 de octubre, el coronel Wimert llegó en vehículo a un lugar deshabitado de la capital a fin de dar las armas a un oficial del Ejército chileno que esperaba en su propio coche.

Pocas horas después, a las 8:00, el automóvil en que viajaba Schneider recibió un impacto deliberado, obra de un todoterreno, que lo hizo detenerse en su camino al cuartel general militar de Santiago. Entonces lo rodearon cinco individuos, y uno de ellos destrozó el cristal trasero con ayuda de un mazo. Dispararon tres veces a quemarropa sobre el general, quien, a pesar de una intervención quirúrgica a corazón abierto, murió la mañana del 25 de octubre.[51]

De la primera reacción de la CIA ante el asesinato dan fe los fríos cablegramas que se intercambiaron el puesto de operaciones en Chile y la oficina central. Hecksher remitió un informe en el que indicaba cierto grado de incertidumbre acerca de la identidad del responsable, si bien expresaba sus esperanzas de que se hubiesen creado las condiciones propicias para un golpe de Estado. «Sabemos que el Gral. Valenzuela estaba implicado (...) pero no podemos demostrar ni rebatir que la ejecución del ataque a Schneider se confiase a individuos relacionados con Viaux», escribió. «Lo único que podemos decir es que el atentado ha proporcionado a las Fuerzas Armadas una última oportunidad de impedir la elección de Allende».

Tras informar a Richard Helms, director de la CIA, los máximos responsables del destacamento especial, Broe y Phillips, redactaron un cablegrama de encomio que rezaba: «El centro de operaciones en Santiago ha hecho una labor excelente a la hora de guiar a los chilenos al punto en que se encuentran hoy y en el que por fin puede vislumbrarse la opción de una solución militar. Cabe elogiar al director del centro [y otros implicados] por lograr este objetivo en circunstancias tan delicadas y en extremo difíciles» (véase el documento 9).

«Se ha puesto en marcha el plan golpista del grupo de Valenzuela», señalaban los analistas del destacamento especial en un par de informes especiales acerca del «asalto con metralletas al general Schneider». «La suerte está echada», declaraban en tono optimista, y aseguraban que los conspiradores habían «traspasado el punto en el que es imposible echarse atrás». A su parecer, si Allende llegaba al poder, se haría pública la participación de los militares en la muerte de Schneider. En consecuencia, a los responsables solo les quedaban dos opciones: «Tratar de obligar a Frei a dimitir o... ¡intentar asesinar a Allende!».[52] «Cuando apenas quedan veinticuatro horas para la segunda vuelta del Congreso se ha creado en Chile el clima propicio para un golpe de Estado», proclamaba uno de los informes finales del destacamento especial acerca de la vía II, fechado el 23 de octubre. En opinión de la CIA, comenzaban a darse todos los elementos necesarios para llevar a término el Proyecto FUBELT:

> Se ha eliminado a Schneider, se ha declarado el estado de emergencia, el general Prats ha sustituido al general Schneider, se ha arrestado a los radicales y el general Valenzuela se ha hecho con el control de la provincia de Santiago. [Tachado] Aunque los conjurados pueden pensárselo dos veces antes de ejecutar un golpe de Estado, lo cierto es que no les queda más remedio que culminar la conspiración (aun en el supuesto de que Frei se negara a dimitir), ya que cabe asumir que sus maquinaciones acabarán saliendo a la luz en caso de que Allende lograra hacerse con la presidencia. Por lo tanto, no tienen otra alternativa que seguir adelante. El estado de emergencia y el establecimiento de la ley marcial han mejorado de forma significativa la posición de los conspiradores: ahora Chile está sumido en el clima ideal para un golpe de Estado.

Encubrimiento de la participación estadounidense

El 24 de octubre de 1970, el Congreso chileno ratificó a Salvador Allende como presidente por una gran mayoría. El recuento de votos fue de 153, lo que incluía a la totalidad de los setenta y cuatro senadores y diputados democristianos, frente a los 35 votos de los representantes del Partido Nacional que respaldaban a Jorge Alessandri. Lejos de promover una

atmósfera propicia para un golpe de Estado, el asesinato de Schneider hizo que el pueblo y los políticos repudiasen en masa la violencia y se reafirmaran en la tradición civil y constitucional de Chile. Las interesadas predicciones de la CIA relativas a la obligatoriedad de asesinar a Allende o hacer entrar en acción a los militares para hacerse con el poder resultaron ser bastante incorrectas.

Durante varios días, los informes de la Agencia lamentaron la falta de «indicios de que el grupo de Valenzuela o Viaux estén planeando un golpe anterior al 3 de noviembre», fecha de la investidura de Allende. Con todo, la CIA centró oficialmente su atención tras el asesinato en revisar el Proyecto FUBELT, «por motivos de seguridad», a fin de localizar los puntos más vulnerables por los que podría descubrirse su participación. La documentación que ha salido a la luz da muestras de una considerable preocupación en torno a las noticias de la muerte de Schneider —basadas en testimonios del interior mismo de las filas de los golpistas— que aparecieron en The Washington Post y en la prensa latinoamericana, incluida la exposición, detallada en extremo, que recogió Prensa Latina en La Habana. Cuando se identificó y arrestó a los conspiradores, incluido Viaux, la CIA llevó a cabo una evaluación de las docenas de contactos y comunicaciones establecidos entre los agentes de bandera falsa, Wimert, el personal del puesto de operaciones y la embajada, por un lado, y los confabuladores golpistas, por otro, desde finales de septiembre hasta finales de octubre. El destacamento especial elaboró una serie de listas que recogían, en exhaustivo orden cronológico, los «contactos con militares chilenos», «personas al tanto del intento de golpe de Estado y grado de conocimiento» y «rastreos del puesto de operaciones y de contactos con el grupo de Viaux», con el fin de prever y analizar posibles puntos conflictivos y filtraciones.[53]

Los problemas que abrumaban a la Agencia eran sobre todo dos: en primer lugar, que Viaux no quisiese «convertirse en el chivo expiatorio» del asesinato e implicase a Estados Unidos (de hecho, según valoró el puesto santiaguino, uno de los agentes de bandera falsa había entregado al general retirado un mensaje escrito que quizá pudiese demostrar la participación estadounidense), y en segundo lugar, algo mucho más importante, que uno de los oficiales chilenos tuviese aún en su poder las metralletas y la

munición que les había proporcionado el coronel Wimert y que, al parecer, se hallaban ocultas en su domicilio. El 29 de octubre, la oficina central ordenó a Wimert «arreglárselas para recuperar el material». Con todo, el oficial chileno se resistió, pues, según alegaba, las armas podían ser de utilidad en el futuro. Se comprometió, no obstante, a «tener especial cuidado en mantener oculto el armamento y eliminar todo indicio que pueda revelar su origen, como huellas dactilares», según recoge un informe de la CIA. El 5 de noviembre, Broe envió otro cablegrama por el que reiteraba la preocupación de que las armas proporcionadas por Estados Unidos «pudiesen ser descubiertas en algún momento». Esto obligó a Wimert a recuperarlas por la fuerza. «El equipo fue entonces devuelto a la base de operaciones en Chile», concluía con cierto tono enigmático un informe de la Agencia. Wimert recordó también que se había visto obligado a golpear con una pistola al general Valenzuela para que devolviese los cincuenta mil dólares suministrados para pagar a los secuestradores.[54] Para deshacerse de las armas, según admitiría más tarde, tuvo que dirigirse en automóvil junto con Hecksher «a la población turística de Viña del Mar, a más de cien kilómetros en dirección oeste, para lanzarlas al Pacífico».

Además de destruir las pruebas, los agentes del puesto de la CIA en Santiago recibieron órdenes de negar cualquier acusación de haber estado implicados y mentir incluso a otros funcionarios estadounidenses. Si la prensa o la investigación del gobierno chileno sacaban a relucir el papel desempeñado en secreto por la CIA en el asesinato de Schneider, «la consigna será negarlo todo», advirtió la oficina central en un cablegrama fechado el 28 de octubre que daba fe de la inquietud que se vivía en Washington, «aun ante el embajador y los otros miembros de la embajada».[55] Según Broe y Phillips, la posición de la CIA «consistirá en negarse a contestar en todo momento».

Esta estrategia tuvo éxito durante cuatro años, hasta que las indagaciones del periodista Seymour Hersh sacaron a la luz, en septiembre de 1974, la historia de la vía II y los empeños de la CIA por desestabilizar el gobierno de Allende en la primera plana de The New York Times. Semejantes revelaciones provocaron de inmediato un escándalo político, y cuando el Senado de Estados Unidos puso en marcha una investigación de gran importancia en torno a la intervención encubierta de la CIA en Chile, tanto

la Agencia como la Casa Blanca definieron sus posiciones a fin de controlar los daños. Esta última aseguraría no saber nada, en tanto que aquella declararía que se había limitado a cumplir órdenes. Una y otra aducirían haber desvinculado a Estados Unidos del grupo de Viaux antes del asesinato de Schneider, por lo que no podía culparse de nada a Washington.

En una declaración hecha a puerta cerrada el 12 de agosto de 1975, el secretario de Estado afirmó haber ordenado a la CIA abandonar el Proyecto FUBELT, por lo que el 15 de octubre de 1970 —una semana antes del asesinato de Schneider— se había puesto punto final a la conspiración golpista. Además, aseguró, «no volvimos a recibir informe alguno al respecto». Después de la fecha citada, según manifestó, «la vía II estaba muerta por lo que respecta a mi gabinete».[56] Kissinger, tal como indica el informe del Comité Church, también «testificó que no estaba al corriente de plan golpista alguno que comenzase con el secuestro del general Schneider». Cuando el senador Gary Hart le pidió que dejase bien claro si tenía conocimiento previo de la conspiración contra el general Schneider, el secretario de Estado lo negó de un modo categórico: «Ya he dicho que no sabía nada».[57]

Lo cierto es que Kissinger sabía lo suficiente sobre el complot contra Schneider, al punto de que le contó al presidente Nixon qué había funcionado y qué no. A las 8:50 de la mañana siguiente a la emboscada en la que Schneider fue herido mortalmente, Nixon telefoneó a Kissinger para preguntarle: «¿Qué está pasando en Chile?». Entonces, Kissinger le informó sobre el fracaso de los militares chilenos —los calificó como «un ramillete bastante incompetente»— para implementar el planeado golpe a propósito del atentado a Schneider.

> Kissinger: Ha habido un giro para peor, pero no ha desencadenado nada más. El siguiente movimiento debería haber sido la toma de posesión del gobierno, pero eso no ha ocurrido.
>
> Presidente: ¿Quieres decir que si algo ocurriera la gente se enfurecería tanto que llegaría a tomarse el gobierno?
>
> Kissinger: Eso era la teoría, pero se trata de un ramillete bastante incompetente.

> Presidente: Están fuera de práctica.
>
> Kissinger: La elección [voto del Congreso para ratificar a Allende] es mañana y la toma de posesión es el 3 [de noviembre]. Lo que podrían haber hecho es impedir que se reuniera el Congreso. Pero eso no ha ocurrido. Está cerca, pero probablemente es demasiado tarde.[58]

Pese a haber atestiguado que su ministerio consideraba «muerta» la vía II y que no había recibido informe alguno sobre actividades golpistas tras el 15 de octubre, lo cierto es que el Departamento de Estado estuvo al corriente del aluvión de acontecimientos que se produjo entre el 18 y el 22 de octubre. Los cablegramas que envió la oficina central de la CIA a su base en Santiago se referían repetidamente a la necesidad de estar informados y, en consecuencia, «preparados para avisar a los puestos más elevados». De hecho, el 19 de octubre, entre las 15:30 y las 16:30, Karamessines fue a la Casa Blanca con la intención de poner al día al general Haig, el subordinado más inmediato de Kissinger, que tenía el cometido de comunicar enseguida dicha información al consejero de Seguridad Nacional.[59] Aquella mañana, el subdirector de la CIA había recibido un informe detallado del puesto en Santiago que resumía el extenso plan golpista del general Valenzuela —empezando por el secuestro de Schneider, previsto para aquella misma noche—.[60] En una declaración secreta hecha ante el Comité Church, Karamessines señaló que quiso compartir esa información con Kissinger «de inmediato, aunque no fuese más que para indicar que no teníamos noticias prometedoras que transmitir a la Casa Blanca». Todo apunta a que Haig pidió que lo pusiesen enseguida al corriente de cualquier novedad. En un cablegrama remitido a Santiago aquella noche, el destacamento especial de la CIA solicitó al centro de operaciones en la capital chilena un informe de situación en torno a «cualquier acontecimiento que pueda ocurrir la noche del 19 de octubre», así como que comunicasen a la oficina central si «la operación se anulaba, se aplazaba o sufría cualquier otra modificación». El despacho señalaba: «El centro de operaciones entenderá que la oficina central debe responder durante la mañana del 20 de Oct. a las preguntas formuladas desde escalafones superiores», referencia tradicional al ministerio de Kissinger.

A las 16:00 horas del 22 de octubre, ocho horas después del ataque a Schneider, la agenda de Karamessines da fe de que volvió a reunirse con Haig en la Casa Blanca. Si bien no se ha levantado aún el secreto que pesa sobre las actas de este encuentro y los informes que hubo de entregar Haig a Kissinger, resulta evidente que tenía por objetivo hablar del asesinato del comandante en jefe y de las repercusiones que tendría la conspiración golpista.

El argumento expuesto por Kissinger para proteger a la Casa Blanca presentaba a la CIA como un peligroso elefante solitario que operaba sin autorización alguna mientras el Proyecto FUBELT —que se puso en marcha siguiendo órdenes de Nixon— acababa en un estallido de acciones golpistas y criminales durante la semana del 15 al 22 de octubre. Habida cuenta de los encuentros mantenidos con el presidente y su consejero de Seguridad Nacional, así como de las órdenes dictadas por ambos, la CIA dio por sentado que sus operaciones clandestinas contaban con el respaldo incondicional de la Casa Blanca. Sin embargo, no dejaba de ser cierto que Washington había estado implicado de un modo clandestino en un estremecedor asesinato político en el extranjero que podría considerarse el equivalente chileno del magnicidio de John F. Kennedy.

Con la intención de distanciarse de cualquier culpabilidad por este crimen de Estado, la Agencia elaboró una serie de evaluaciones posteriores, matizadas y calculadas, de la muerte de Schneider. Una visión general secreta, titulada «El asesinato del general René Schneider» y escrita al mismo tiempo que el Senado comenzó a investigar la vía II, aseguraba que este no había sido «planeado ni previsto en absoluto». Tal vez lo primero fuese cierto, pero no puede decirse lo mismo de lo segundo, tal como demuestran los documentos desclasificados. Los conspiradores golpistas de la CIA admitieron en dos ocasiones la posibilidad de que Schneider fuese asesinado. En el transcurso de una conversación que mantuvieron Hecksher y un alto funcionario de Carabineros el 8 de octubre, de acuerdo con el memorando de aquella, se analizaron los «medios disponibles para quitar de en medio» al general. «Tratar de secuestrarlo podría comportar cierto derramamiento de sangre», concluían, y tal como el funcionario militar predijo con clarividencia, «la muerte accidental de Schneider podría hacer que el Ejército se uniese con firmeza en torno a la bandera del

constitucionalismo». En una reunión celebrada con un agente de bandera falsa el 16 de octubre, un representante del grupo de Viaux quiso conocer «la opinión del patrocinador acerca del plan [de] importar a cinco portorriqueños que lleven a cabo el secuestro de Schneider». «Según explicó, a la gente de Viaux no le gustaban los asesinatos, y el secuestro podría comportar violencia».

En un informe secreto fechado en octubre de 1974 y titulado «Mandato especial del presidente en lo referente a Chile», la CIA trató de volver a escribir la historia del Proyecto FUBELT y afirmó con rotundidad que el asesinato lo había cometido «el grupo de Viaux, actuando por la libre». «En resumen, la trágica muerte del general Schneider fue consecuencia de un intento unilateral de secuestro por parte del grupo de Viaux en contra del consejo ofrecido por un representante de la Agencia». Este argumento hacía caso omiso del hecho —del que no faltan pruebas en la documentación de la propia CIA— de que Viaux no actuaba de forma independiente ni unilateral, sino que estaba confabulado claramente con Valenzuela, quien sí contaba con el apoyo incondicional de la Agencia —lo que incluía los cincuenta mil dólares destinados a pagar a los secuestradores contratados por Viaux—.[61] Los documentos de la CIA elaborados en los días que rodearon al ataque sufrido por Schneider se referían a este en repetidas ocasiones como parte del «plan golpista del grupo de Valenzuela».

Viaux había aceptado el consejo de la CIA de «aunar esfuerzos con otros conspiradores para actuar de forma coordinada con ellos». La trama final contaba con que aquel dirigiese el secuestro, empleando para ello a un grupo reducido de civiles de extrema derecha, de tal modo que se ocultase la participación de las Fuerzas Armadas chilenas. Se suponía que, tras la desaparición de Schneider, Valenzuela, el almirante Tirado y los oficiales activos se harían con el control del gobierno. El intento inicial de rapto planeado para el 19 de octubre había sido, según muestran los documentos de los tribunales chilenos, idea de Valenzuela, y comportaba un esfuerzo común, pues mientras este se aseguraba de que los invitados permanecían en el interior tras marcharse Schneider, los secuaces de Viaux debían encargarse de seguirlo. Un jurado chileno determinó que el mismo grupo que trató de secuestrarlo aquel día —como parte del plan que Valenzuela había descrito detalladamente al coronel Wimert a fin de recibir los

cincuenta mil dólares de la Agencia— fue el que lo asesinó el 22 de octubre. Tanto Viaux como Valenzuela recibieron, en consecuencia, el veredicto de culpabilidad por conspirar para causar un golpe de Estado.

Para eludir la responsabilidad de lo que se había convertido en uno de los actos de asesinato político más famoso de la historia de las operaciones secretas de Estados Unidos, la CIA se esmeró en causar ante el Comité Church la impresión de haber cesado todo contacto con las fuerzas de Viaux tras el 18 de octubre, cuando la Agencia trató de anular su conspiración —es decir, cuatro días antes del asesinato—. Sin embargo, los documentos más decisivos en poder de los investigadores del Senado dan fe de no pocos contactos de la CIA con el grupo de Viaux tras el tiroteo, así como de intentos encubiertos de instigar una conspiración a fin de obstruir a la justicia y ocultar la participación de Estados Unidos en el crimen.

Hubieron de transcurrir más de veinticinco años desde que el comité de investigación del Senado publicó su informe, Alleged Assassination Plots Involving Foreign Leaders, para que la CIA se viese obligada a levantar el secreto que pesaba sobre un cablegrama que demostraba que un «representante de Viaux» se había puesto en contacto con el centro de operaciones de la Agencia en Santiago el 24 de octubre para presentar una serie de peticiones «que el grupo quiere ver satisfechas “basándose en las promesas que nos han hecho [ustedes]”». Entre ellas se hallaba la de brindar «ayuda financiera para refugiar a aquellos del grupo que por hallarse vinculados con la conspiración deban abandonar el país». La posibilidad de que Viaux inculpase a Washington ofreció a la Agencia un incentivo para colaborar. A principios de noviembre, según un cablegrama remitido por la base en Santiago el día 9 y revelado recientemente, la CIA recibió información de que Viaux había «depositado una relación detallada de sus actividades (...) a salvo en el extranjero» y advertía que «nadie sabe con seguridad qué va a pasar si [Viaux] tiene que luchar por su vida». En una reunión posterior celebrada en la oficina central de Langley, el agente de bandera falsa de la CIA Bruce MacMaster señaló que varios miembros de la banda de Viaux se hallaban en prisión y habló de «la seria preocupación porque alguno de [ellos] pueda implicar a la CIA en el ataque a Schneider». En un memorando aún sin revelar de la conversación, MacMaster aseguraba haberse reunido poco antes con uno de los hombres de Viaux que estaba

«buscando una cantidad considerable de dinero (cerca de los 250.000 dólares) con la intención de proporcionar ayuda a las familias de los miembros del grupo». A su parecer, la Agencia «podría salir impune si pagase unos 10.000 dólares a cada familia».[62]

La CIA, de hecho, compró el silencio de todos los responsables directos del asesinato de Schneider —y ocultó esta transacción secreta durante más de treinta años—. En un breve párrafo que casi pasa inadvertido en un informe presentado ante el Congreso en septiembre de 2000 (CIA Activities in Chile), la Agencia reconoció:

> En noviembre de 1970, uno de los hombres de Viaux que escaparon a las detenciones retomó el contacto con la CIA y solicitó ayuda financiera en nombre del grupo. Aunque la Agencia no tenía obligación alguna para con el grupo, dado que este había actuado por cuenta propia, le proporcionó 35.000 dólares con la intención de mantener en secreto los contactos anteriores y conservar las buenas relaciones con el grupo, así como por razones humanitarias.[63]

***

En el momento del asesinato de Schneider, solo un puñado de altos oficiales estadounidenses y agentes de la CIA sabía que tal atrocidad había estado motivada por una orden explícita dictada por el presidente de poner en marcha un proyecto encubierto para minar la democracia chilena. Ajeno por completo a los motivos y otros pormenores del atentado contra el general Schneider, el Departamento de Estado recomendó a Kissinger que el presidente Nixon enviase un mensaje de condolencia a Eduardo Frei, presidente saliente de Chile. Se trata del documento más irónico surgido del Proyecto FUBELT:[64]

Estimado Sr. presidente:

El estremecedor atentado contra la vida del general Schneider constituye un borrón en las páginas de la historia contemporánea. Quisiera

transmitirle el pesar que me produce el hecho de que su país haya tenido que ser testigo de tan repugnante acontecimiento. (...)

Atentamente,

Richard Nixon[****]

---

[*] Golpe: aquí y más abajo, en español en el original. (N. del T.)

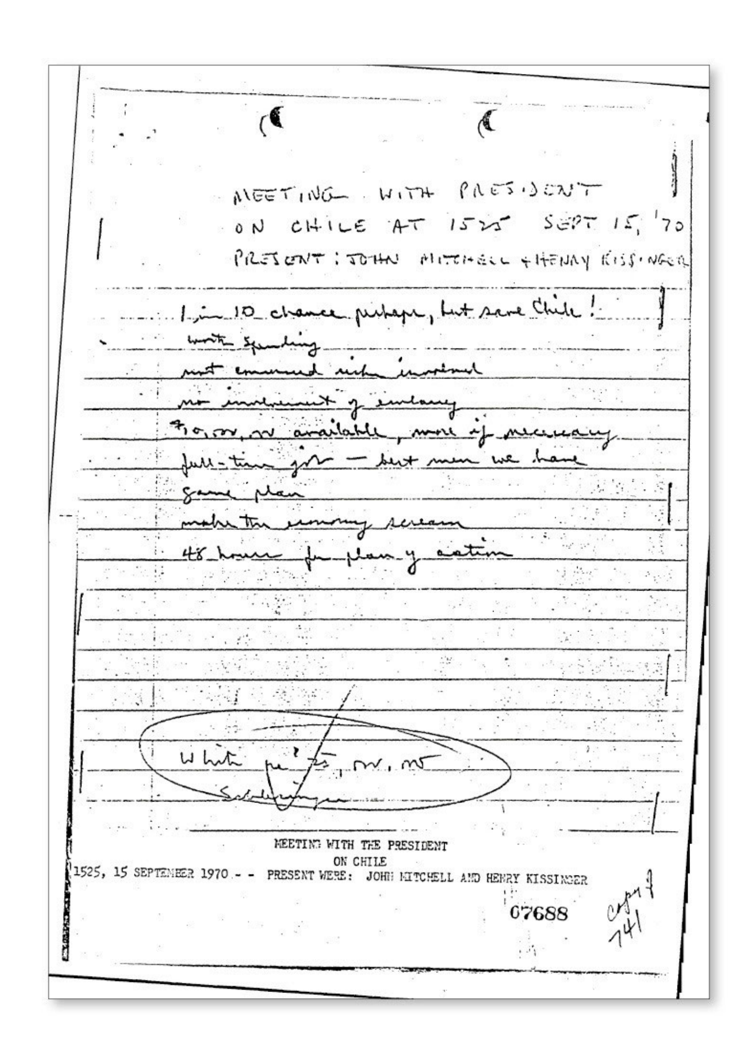
[**] Rube Goldberg (1883-1970) fue el creador de la tira cómica que representaba los disparatados inventos del profesor Butts. Su nombre se emplea, en lengua inglesa, para designar algo que se ha logrado de un modo enrevesado cuando podría haberse hecho de forma sencilla. (N. del T.)

[***] En español en el original. (N. del T.)

[****] En español en el original. (N. del T.)

[*****] La fórmula acostumbrada de despedida en la correspondencia escrita en inglés (sincerely, «sinceramente») subraya la ironía de la que habla el autor. (N. del T.)

Documento 1. CIA, Notas manuscritas de Richard Helms: «Reunión sobre Chile con el presidente a las 15:25», 15 de septiembre de 1970.



MEETING WITH PRESIDENT
ON CHILE AT 1525 SEPT 15, '70
PRESENT: JOHN MITCHELL & HENRY KISSINGER

1 in 10 chance perhaps, but save Chile!
worth spending
not concerned risks involved
no involvement of embassy
10,000,000 available, more if necessary
full-time job — best men we have
game plan
make the economy scream
48 hours for plan of action

MEETING WITH THE PRESIDENT
ON CHILE
1525, 15 SEPTEMBER 1970 - - PRESENT WERE: JOHN MITCHELL AND HENRY KISSINGER

07688

Documento 2. Telcon de Kissinger: Conversación entre el consejero de Seguridad Nacional Henry Kissinger y el asistente especial Stephen Bull (a cargo de la agenda del presidente) sobre la reunión secreta entre Agustín Edwards y Nixon, 14 de septiembre de 1970.

TELCON
Bull/Kissinger
evening 9/14/70

B: You wanted to bring in Schroeder.

K: He is on schedule.

B: It ties in with Edwafds. Does Edwards need more than 15 mins.?

K: Absolutely not.

B: We xxx will schedule you from x 9:15 to 10:00. In that 45 mins. period we will do Edwards at the beginning and then bring in Schroeder.

K: At 9;45. Don't let them meet. Get Edwards xxxx out. We shouldn't have much time.

B: OK. We will show Shroeder for 9:45. That will give you 15 mins. to do your business.

Documento 3. Casa Blanca: Agenda de Kissinger para el 15 de septiembre de 1970, incluyendo una reunión con Agustín Edwards.

Documento 4. Casa Blanca: Agenda del presidente Nixon para el 15 de septiembre de 1970 mostrando una reunión con Agustín Edwards en el Despacho Oval a las 9:15 de la mañana.

Documento 5. CIA, alto secreto, Memorando de conversación entre el director Richard Helms y Agustín Edwards: «Situación política en Chile», 14 de septiembre de 1970. (Páginas 1 a 4).

Documento 6. CIA, secreto, Informe sobre reuniones de oficiales de la CIA con Edwards: «Conversación con Agustín Edwards, dueño de la cadena de diarios chilena El Mercurio», 21 de septiembre de 1970. (Portadilla y páginas 1 a 4).

Documento 7. CIA, Cablegrama secreto: [Instrucción urgente a la Estación de Santiago de parte del director del Destacamento Especial para Chile, David Atlee Phillips, para estimular una solución militar], 7 de octubre de 1970. (Páginas 1 y 2).

Documento 8. CIA, secreto, Memorando de conversación: «Dr. Kissinger, Sr. Karamessines y Gral. Haig en la Casa Blanca, 15 octubre 1970». (Páginas 1 y 2).

Documento 9. CIA, Cablegrama secreto del director del Destacamento Especial: [Parabienes por el asesinato de Schneider], 23 de octubre de 1970. (Página 1).

2

Desestabilización de la democracia:

Estados Unidos y el gobierno de Allende

Lo que más nos preocupa en relación con Chile
es la idea de que [Allende] pueda consolidarse y que
la imagen que se ofrezca al mundo sea la de su éxito.

Richard Nixon, acerca de la razón por la que Estados Unidos tenía que «derribar» a Allende, noviembre de 1970.

Dos días después de la investidura de Salvador Allende, el presidente Nixon convocó al Consejo para la Seguridad Nacional completo con la intención de debatir la forma de «propiciar su caída». «Si tenemos que mostrar una actitud hostil, queremos hacerlo bien y derrocarlo», declaró el secretario de Estado William Rogers en la reunión del CSN celebrada el 6 de noviembre de 1970 para tratar el caso de Chile. El secretario de Defensa, Melvin Laird, se mostró de acuerdo: «Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para herir [a Allende] y derribarlo». Las notas tomadas en la reunión por Richard Helms dejan constancia de que el mandatario dijo a sus principales asesores en seguridad nacional: «Si hay alguna forma de destronar a [Allende], es mejor hacerlo».

El memorando secreto que recoge la conversación del encuentro de este gabinete —un documento fundamental del que no se dejó disponer al Comité Church por causas de «inmunidad del Poder Ejecutivo» y que se mantuvo en secreto durante treinta años— da fe de la inflexible determinación que mostraba la Casa Blanca en lo tocante a minar la

democracia chilena y de la razón que la llevaba a adoptar tal actitud. «Lo que más nos preocupa en relación con Chile», aseguró Nixon, «es la idea de que [Allende] pueda consolidarse y que la imagen que se ofrezca al mundo sea la de su éxito», lo que convierte este aserto en la única explicación franca de su política, encaminada a impedir que la elección democrática de un socialista pudiese hacer que se convirtiese en un modelo para América Latina y el resto del mundo. «No deberíamos permitir que se salga con la suya y dé en Latinoamérica la impresión de que seguir sus pasos es algo seguro, y más ahora que se ha puesto de moda en todo el mundo tratarnos a puntapiés», prosiguió el presidente, para añadir más adelante: «No podemos dejar de hacer patente nuestro desagrado».[1]

Tras el fracaso del Proyecto FUBELT, los estadistas de Washington hubieron de modificar su estrategia, si bien no cambiaron el objetivo de derrocar a Allende. Si antes se había confiado a un grupo reducido de agentes secretos que tratasen de propiciar una insurrección militar en un breve período, desde aquel momento sería la mayor parte del gobierno de Estados Unidos la que estaría implicada en un empeño creciente y duradero de desestabilizar al gobierno chileno en los ámbitos económico, político y militar. «La pregunta», tal como expuso Kissinger en un informe para Nixon previo a la reunión del CSN, «es si podemos emprender acciones (crear presión, aprovechar puntos flacos, hacer mayores los obstáculos...) que, cuando menos, garanticen su fracaso o lo obliguen a modificar su política y, cuando más, desemboquen en situaciones en las que resulten más factibles su caída o su derrocamiento». (La cursiva pertenece al original).[2] Chile, tal como aseguró Kissinger al encargado de la agenda presidencial cuando solicitó una hora para poner a Nixon al corriente antes de la reunión, «podría acabar convirtiéndose en el fracaso más estrepitoso de nuestro gobierno, "nuestra Cuba", llegado 1972».

El contenido de esta conversación puede leerse en «Reunión del CSN, 6 de noviembre: Chile», una exposición de ocho páginas clasificada como confidencial que Kissinger le presentó personalmente al presidente el 5 de noviembre. «La elección de Allende como presidente de Chile supone uno de los desafíos más serios con los que nos hemos encontrado en este hemisferio», recalcó Kissinger al presidente. «La resolución que adopte usted al respecto puede ser la decisión más histórica y complicada de las

que tome este año en asuntos de política exterior». Pese a que la estancia de Allende en el cargo no había llegado aún a superar las cuarenta y ocho horas, el presidente chileno encarnaba, según este informe, «una amenaza muy seria» para los intereses norteamericanos. Así, por ejemplo, cabía la posibilidad de que se perdiesen mil millones de dólares en concepto de inversiones estadounidenses, si bien al secretario de Estado le resultaba más preocupante lo que él llamó el «efecto de imitación» que podía provocar la elección democrática de Allende:

> El éxito de un gobierno marxista elegido por el pueblo constituiría un claro ejemplo (e incluso un precedente) para otras partes del mundo, lo que atañe en concreto a Italia, y la generalización, por imitación, de fenómenos similares en otros países afectaría de modo significativo el equilibrio mundial y, en consecuencia, la posición que ocupamos nosotros en él (véase el documento 1).

Pese a este peligro, el Departamento de Estado estaba convencido, tal como advirtió Kissinger, de que Washington debía mantener una coexistencia pacífica con él por el hecho de haber sido elegido democráticamente y ser el gobernante legítimo de Chile. Por ende, le aconsejó Kissinger a Nixon durante la reunión con el CSN: «Es fundamental que deje bien claro cuál es su posición en este asunto». Según el secretario de Estado, «si los interesados no entienden que lo que usted desea es que nos opongamos a Allende con todas nuestras fuerzas, acabará por adoptarse una clara política favorable a la convivencia con su gobierno».

La ostensible posición del presidente y sus hombres —y de hecho el propósito mismo de la reunión del CSN— contrasta por entero con las numerosas declaraciones públicas hechas por Nixon, Kissinger y otros acerca de la actitud filantrópica adoptada por Estados Unidos para con Chile en tiempos de Allende. Pocos meses después de ordenar que se hiciese todo lo posible por socavar su gobierno, Nixon mintió durante el discurso sobre el Estado de la Unión de 1971 al afirmar que «estamos dispuestos a mantener con el gobierno chileno el mismo tipo de relación que este está dispuesto a mantener con nosotros». En septiembre de 1974, cuatro años después de recomendar la elaboración de un programa de

acción contra Allende que pudiese conducir a «su caída o derrocamiento», Kissinger testificó ante el Comité Senatorial de Relaciones Exteriores que «lo que pretendía Estados Unidos no era desestabilizar o trastornar [a Allende], sino mantener activos a los partidos políticos [de oposición]. (...) Lo que nos preocupaba era las elecciones de 1976, y de ningún modo el Golpe de 1973, sobre el que no sabíamos nada y [con el] que no tuvimos nada que ver». En un testimonio sin precedentes, ya que recoge el reconocimiento, por parte de un presidente de Estados Unidos, de la existencia de una operación secreta de la CIA, Gerald Ford argumentaría que el país había entrado en acción con el propósito de proteger la democracia chilena. «En este caso», refirió a la prensa, «lo que se pretendía era colaborar con el mantenimiento de los periódicos, los medios de comunicación electrónicos y los partidos de la oposición».

Según afirmó el presidente Ford en una de las declaraciones más famosas acerca de la intervención estadounidense contra Allende, todo esto se hizo «por el bien del pueblo chileno y, por supuesto, por el nuestro propio».[3]

Frío pero correcto: El Memorando 93 sobre Seguridad Nacional

«Seremos muy fríos y correctos», informó Nixon a sus ayudantes el 6 de noviembre, «pero haremos lo que haga falta por transmitir un mensaje real a Allende y a otros». Presentar la estrategia estadounidense como un distanciamiento diplomático frente al gobierno de la Unidad Popular, al mismo tiempo que se perseguían acciones hostiles directas encaminadas a su derrumbamiento, fue una decisión deliberada y consciente tomada en los más altos despachos de la Casa Blanca. Tras el fracaso de la operación montada contra Schneider y la investidura de Allende, se había revisado, tal como explicó Kissinger al CSN, la política estadounidense desde los puestos más elevados para llegar a la conclusión de que existían las siguientes opciones: 1) Buscar un modus vivendi con el gobierno de Allende; 2) poner en práctica una estrategia abiertamente hostil, o 3) «adoptar lo que es de hecho una actitud hostil, pero no de forma abierta; es decir, actuar de manera hostil desde una postura discreta». El acuerdo por el que abogaba la primera opción era impensable: Kissinger ya había

predispuesto en secreto al presidente contra esta opción antes del encuentro.[4] Con todo, la hostilidad manifiesta resultaría problemática. «Los acontecimientos de Chile», dijo el secretario de Estado a los funcionarios del CSN, según su orden del día, estaban «tomando un cariz que dificulta en extremo la labor de afrontarlos o contrarrestarlos»:

> a) Allende ha sido elegido de forma legal y constitucional, de modo que goza de legitimidad a los ojos de los chilenos y de la mayor parte del planeta. No hay nada que podamos hacer para obviar su legitimidad o negársela como táctica de debilitamiento.
>
> b) Es poco probable que se conduzca de tal modo que nos sea fácil hacer que el mundo o el hemisferio lo censuren (...) [H]ará que Chile se presente como un país socialista «independiente» y no como un «gobierno comunista» ni un títere soviético.
>
> c) Nosotros mismos hemos promovido siempre los principios de la autodeterminación y hemos hecho hincapié en nuestra oposición al intervencionismo en las relaciones exteriores. Tendríamos, pues, que pagar un precio muy alto si actuáramos de modo que pareciera que estamos vulnerando tales principios.[5]

Por ese motivo recomendó encarecidamente la tercera opción, que Nixon aprobó y que, en el lenguaje inocuo de la burocracia, se describió así: «Mantener una postura correcta en apariencia, aunque sin dejar lugar a dudas sobre nuestra oposición al surgimiento de un gobierno comunista en América del Sur, y actuar con convicción por mantener la iniciativa respecto del de Allende». Una actitud «fría pero correcta» que enmascarase los continuos empeños por subvertir el gobierno chileno lograría, según determinó Nixon, encauzar la política estadounidense en contra de Allende.

«Lo más positivo de la vía no manifiesta», refirió Kissinger al presidente, «es que, aunque pone en juego el mismo tipo de presión y hostilidad, promete incrementar su efectividad al evitar los riesgos inherentes al enfrentamiento público». Entre estos se incluía, al parecer de los estadistas, el peligro de que Washington quedase desacreditado ante sus aliados europeos y latinoamericanos, así como la posibilidad de que sirviese «al

propósito de Allende de congregar a su alrededor al pueblo chileno para hacer frente al "demonio extranjero"», en palabras de un informe redactado para Kissinger. Por otra parte, la política estadounidense se enfrentaba a una realidad muy poco agradable: el gobierno de la Unidad Popular había sido elegido democráticamente. En un documento informativo especial dirigido al secretario de Estado Rogers, la Oficina de Asuntos Interamericanos (ARA, por su sigla en inglés) argumentó que, en caso de violar de forma abierta la política de «respeto por el resultado de las elecciones democráticas» que había anunciado, Washington solo conseguiría

> menguar nuestra credibilidad en todo el planeta (...) promover el nacionalismo dirigido contra la nación (...) algo de lo que se serviría el gobierno de Allende para consolidar su posición ante el pueblo chileno y ganar influencia en el resto del hemisferio (...) y empujar a Allende a mantener con la URSS una relación aún más estrecha de la que se había contemplado en un principio.[6]

La estrategia de Estados Unidos, consistente en presionar al gobierno de Allende de manera discreta en múltiples frentes, aparece expuesta, al menos de un modo parcial, en el Memorando 93 sobre Seguridad Nacional, «Política respecto a Chile». Las directrices clasificadas como ultrasecretas firmadas por Kissinger y distribuidas a la CIA, el Departamento de Estado, el de Defensa, el cuerpo de asesores militares del presidente y la USAID, entre otras entidades, expresaban en un precavido estilo burocrático el objetivo de la estrategia estadounidense: sin abandonar «una postura fría y correcta en público», tratarían de «ejercer la mayor presión posible sobre el gobierno de Allende a fin de evitar su consolidación».[7] Las medidas identificadas en el Memorando 93 no permiten dudar de que la intención de Washington era aislar, debilitar y desestabilizar a Chile hasta hacer de él un país ingobernable.

Entre otras disposiciones, el documento pedía que se efectuasen «decididos esfuerzos» para persuadir a otras naciones latinoamericanas —y en especial a Brasil y Argentina— de unirse a Estados Unidos con el fin de aislar y socavar el experimento sociopolítico de Allende. A modo de incentivo, Nixon autorizó las «relaciones estrechas con dirigentes militares del

hemisferio cercanos a nuestra causa» dispuestos a unirse en contra de la izquierda, incluidos los militares chilenos.

El Memorando 93 exponía asimismo toda una serie de medidas económicas diseñadas para sostener los esfuerzos de Estados Unidos encaminados a «hacer saltar la economía», tal como había ordenado Nixon con anterioridad. Se afirmaba que era «necesario entrar en acción» con el objetivo de reducir y poner fin a la financiación de las exportaciones estadounidenses y a las garantías que se brindaba a la inversión de las compañías establecidas en Chile, tanto entonces como en el futuro; presionar a los inversores privados para que redujesen las actividades económicas; «ejercer la mayor influencia posible» sobre los bancos multilaterales a fin de que limitaran sus préstamos a Chile, y poner fin a los programas bilaterales de ayuda económica. El Memorando 93 daba también órdenes para la elaboración de un estudio por parte de la Oficina de Preparación para Emergencias en torno a las «acciones dirigidas a eliminar las reservas» de cobre, pues Nixon tenía la idea de vender una parte considerable de estas en el mercado internacional con la intención de socavar con gran rapidez el precio mundial del recurso natural más importante de Chile. «De aquí a una semana quiero información sobre cómo podemos vender las reservas», ordenó el presidente a Kissinger y a los demás asistentes a la reunión del CSN celebrada el 6 de noviembre. «La reducción de las reservas hará mucho daño a Chile. Se trata de algo muy importante: quiero que lo estudien el Departamento de Estado, el de Defensa y todos los demás. Puede que sea lo más importante que podemos hacer».[8]

El bloqueo invisible

Los esfuerzos de aislar Chile y socavar en silencio el respaldo económico bilateral y multilateral del que se beneficiaba representaron un verdadero «bloqueo invisible» a un país cuya economía dependía sobremanera de las relaciones financieras, industriales y comerciales con Estados Unidos. Las empresas de este último generaban dos tercios de los mil seiscientos millones de dólares que suponía la inversión extranjera en Chile. El 80 por

ciento de la industria chilena del cobre —responsable de cerca de los cuatro quintos de los ingresos debidos a la exportación— estaba en manos de dos compañías estadounidenses: la Anaconda y la Kennecott. Durante el gobierno de Frei, Chile había acumulado poco menos de mil millones de deudas con bancos estadounidenses, y las operaciones financieras dependían en gran medida de los créditos comerciales concedidos por Estados Unidos para costear la maquinaria y el material que necesitaban las industrias básicas de Chile y sus transportes (camiones, autobuses, taxis y aviones).

Durante años, los funcionarios estadounidenses, y los intelectuales que los respaldaban, achacaron a los programas socialistas de Allende y a la nacionalización de empresas estadounidenses la drástica disminución del apoyo financiero bilateral e internacional que estaba sufriendo Chile. Según las poco sinceras versiones oficiales, no existía ningún «bloqueo invisible»: el presidente chileno era el único responsable de su propio ocaso. «Han sido los programas del gobierno de Allende, su obstinación en forzar el ritmo más allá de lo que podía permitir el mercado, y no tanto nuestra política», declaró Henry Kissinger en el Capitolio al día siguiente del golpe de Estado, «lo que ha contribuido al caos económico». Sin embargo, los documentos del CSN relativos a Chile que han visto la luz de forma reciente demuestran sin lugar a dudas que el gobierno de Nixon actuó de forma rápida, silenciosa y con todos los medios políticos a su alcance para cercenar la ayuda multilateral y bilateral de que se beneficiaba el país mucho antes de que Allende tuviese oportunidad alguna de poner en práctica sus propias medidas económicas o de que se hubiese puesto en tela de juicio la solvencia de Chile.

En lo tocante al Banco Interamericano de Desarrollo, la Casa Blanca hizo cuanto estuvo en su mano por «provocar la salida prematura del presidente titular», de quien se consideraba que no era lo bastante manejable, tal como revela un memorando secreto escrito por el subordinado directo de Kissinger, Alexander Haig.[9] Asimismo, la Casa Blanca hizo saber al representante estadounidense que no tenía permiso para votar a favor de la concesión de préstamos a Chile. Un escrito titulado «Informe de situación sobre la postura de Estados Unidos con respecto a los préstamos del BID a Chile» —documento secreto elaborado por Kissinger pocas semanas

después de la investidura de Allende— expone esta subrepticia limitación de los créditos:

> El director ejecutivo estadounidense del Banco Interamericano de Desarrollo entiende que no recibirá órdenes hasta nuevo aviso en lo referente a los préstamos a Chile pendientes. Dado que (...) se requiere un voto afirmativo por parte de Estados Unidos para que se apruebe un préstamo, esta iniciativa impedirá, de hecho, su concesión.

«Hemos ordenado a nuestro representante que posponga cualquier acción relativa a los préstamos a Chile que están pendientes ante el Banco Interamericano de Desarrollo», comunicó Kissinger a Nixon en un "Informe de situación acerca de Chile" de mediados de noviembre de 1970 marcado como secreto/delicado. «Estamos tratando de lograr la cooperación del BIRD [Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, parte del Banco Mundial] para que demore de igual manera los préstamos a Chile».[10]

En el Banco Mundial también había estadounidenses trabajando entre bastidores a fin de asegurarse de que se le negaba un crédito pendiente de veintiún millones de dólares destinados a efectuar mejoras en el sector ganadero, así como futuros préstamos. Como quiera que Estados Unidos no tenía poder de veto en esta entidad, la Oficina de Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado preparó una serie de cuestiones que habría de plantear una delegación del banco a las autoridades de Santiago para intentar así demostrar que el programa económico de Allende no cumplía los requisitos necesarios para obtener los créditos. «El director ejecutivo [estadounidense] transmitirá estas preguntas de forma despreocupada y discreta al personal del banco», señalaba otro informe de situación del CSN remitido a Kissinger, «de tal manera que garantice que el equipo que visite Chile y otros miembros del personal de la entidad le prestarán la atención adecuada, pero sin que en el proceso pueda adivinarse la participación del gobierno de Estados Unidos».

Por otra parte, el CSN distribuyó «órdenes secretas» en el Banco de Exportaciones e Importaciones y la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo

Internacional de aplazar «cualquier nuevo compromiso de ayuda bilateral de Estados Unidos a Chile, incluidos los préstamos y avales para la inversión concedidos por la [US]AID, así como los empréstitos y garantías a la exportación del Banco de Exportaciones e Importaciones». Esta última entidad, de la que dependía Chile para obtener créditos con los que comprar equipamiento industrial de relieve, piezas de repuesto y demás maquinaria imprescindible para las industrias más importantes, en particular la de la minería del cobre, se limitó a extender la rebaja de la clasificación crediticia que había puesto en práctica durante la ejecución de la vía II, cuando el ministerio de Kissinger había ordenado al director del banco que lo cambiase de la categoría B a la D. La primera víctima de esta medida fue un préstamo de veintiún millones de dólares proyectado desde hacía mucho y destinado a la compra de reactores Boeing para mejorar el servicio de líneas aéreas nacionales (LAN Chile). Dado que la clasificación D influía en bancos, empresas e inversores privados estadounidenses, tal como señaló el informe del Comité Church, «agravó las dificultades de Chile a la hora de atraer y retener la afluencia necesaria de capital a través de la inversión particular extranjera».[11]

Se mire como se mire, el recorte de la ayuda y los créditos destinados a Chile fue espectacular. En 1970, los préstamos del BID aprobados antes de la elección de Allende sumaban un total de 46 millones de dólares, en tanto que tras su investidura y hasta después del golpe de Estado tan solo se autorizaron dos —de los que fueron beneficiarias las universidades chilenas—, que ascendían a 2 millones de dólares en total. El Banco Mundial, que había proporcionado US$ 31 millones al gobierno de Frei entre 1969 y 1970, no aprobó crédito alguno entre 1971 y 1973. La ayuda bilateral de Estados Unidos, administrada a través de la USAID, llegó a los US$ 110 millones entre 1968 y 1970, mientras que de 1971 a 1973 la cifra cayó hasta rondar los 3 millones de dólares. El Banco de Exportaciones e Importaciones, que concedió a Chile préstamos y créditos comerciales por valor de unos US$ 280 millones entre 1967 y 1970, no otorgó un solo centavo en concepto de financiación o préstamos en 1971.[12]

Como era de esperar, hubo un sector en el que sí creció el respaldo brindado por Estados Unidos durante los años en que gobernó Allende: las ventas y ayudas militares. Los programas de adiestramiento, entre otros, se

duplicaron entre 1971 y 1972, período en que su financiamiento pasó de 1 a 2,3 millones de dólares. Entre 1967 y 1970, las ventas de pertrechos militares por parte de Estados Unidos ascendieron a US$ 6 millones, cifra que alcanzó más del triple de su valor entre 1970 y 1973 hasta llegar a los 19 millones de dólares. «En lo tocante al estamento militar chileno, estamos manteniendo la intensidad acostumbrada en las actividades de nuestra misión», escribió Kissinger en un informe para Nixon, «con el fin de conservar el mayor número posible de contactos con el personal chileno».[13]

Kissinger comunicó también al presidente que, «en el aspecto económico», los funcionarios estadounidenses habían «puesto al corriente a los dirigentes empresariales y sindicales estadounidenses de nuestra desalentadora visión de los acontecimientos de Chile». Toda vez que los sindicatos chilenos iban a desempeñar un papel fundamental en la campaña emprendida en contra de Allende, el 12 de noviembre de 1970, los funcionarios de Estados Unidos hicieron entrega de un informe extraoficial a George Meany, presidente de la central sindical estadounidense (AFL-CIO), en el que, según cabe suponer, se hablaba de la influencia que podía ejercer esta poderosa organización en Chile y el respaldo que podía prestar por mediación de sus filiales internacionales y el Instituto Americano de Desarrollo del Sindicalismo Libre, que había mantenido una estrecha colaboración con la CIA en lo tocante a las operaciones contra Allende puestas en marcha durante el decenio de 1960. Los funcionarios de la Agencia siguieron celebrando «comidas de negocios» y otros encuentros secretos con altos ejecutivos de la ITT aun después de que la prensa revelase su colaboración secreta en contra de Allende y provocase así el primer gran escándalo sobre Chile en marzo de 1972. Por otra parte, el gobierno de Nixon trató de prestar asistencia a las empresas estadounidenses del cobre, que se esforzaban por obtener una compensación por las instalaciones mineras nacionalizadas en Chile, vinculando a la nueva programación para los pagos de la deuda externa del país la indemnización adecuada.

Siguiendo instrucciones personales del presidente Nixon, Washington trató de obstruir la capacidad con que contaba Allende para renegociar la cuantiosa deuda nacional heredada de los democristianos. A mediados de

enero de 1972, Nixon montó en cólera al leer un memorando secreto en el que el secretario del Tesoro, John Connally, se quejaba de que la burocracia del Departamento de Estado no cooperaba lo suficiente a la hora de «sostener la presión ejercida sobre Chile» y de que planeaba permitir al país iberoamericano que renegociase las deudas contraídas con diversas naciones europeas. Pidió que se eligiese a su ministerio para encabezar la delegación que se enviaría a la conferencia que se iba a celebrar en París, a fin de dar a conocer «nuestro propósito principal [de] obtener un amplio respaldo de los acreedores para aislar a Chile».[14] En una serie de anotaciones marginales al texto, Nixon hizo constar su aprobación con las iniciales «RN» y apuntó en letra corrida: «Esa es nuestra política». Acto seguido envió un mensaje calificado como ultrasecreto a Connally por el que lo autorizaba personalmente para representar a Estados Unidos en París. En cuanto a la cuestión de los préstamos chilenos, el presidente escribió:

> Cualquier sugerencia, tácita o explícita, de que estoy a favor de un intento por parte de Estados Unidos de renegociar los créditos solicitados por Chile se contradice por completo con lo expresado por mí en varias ocasiones durante las reuniones celebradas al respecto. (...) Espero que repare en que todas las agencias del gobierno coinciden sin excepción con mi postura.

En consonancia con este mandato presidencial, Estados Unidos adoptó una posición inflexible en las negociaciones acerca de las deudas entabladas en 1972 y 1973 en el Club de París. Asedió a los acreedores europeos más importantes para que se negasen también a secundar una revisión de la deuda externa chilena, y cuando los demás países de Europa se dispusieron a hacerlo a pesar de la presión estadounidense, el gobierno de Nixon rompió filas y se rehusó volver a negociar los pagos de los más de mil millones de dólares que debía Chile a su gobierno y a una serie de acreedores del sector privado.

El gobierno de Nixon trató también de aislar al de Allende del resto del mundo en lo diplomático. Kissinger recibió a principios de diciembre de 1970 una serie de documentos de estrategia con el sello de secreto/nodis sobre las «conversaciones entabladas por el gobierno de Estados Unidos

con determinadas administraciones latinoamericanas (...) con el objetivo de que compartan nuestra preocupación en torno a Chile». Cuando informó al presidente, el secretario de Estado manifestó que se estaban realizando «esfuerzos concretos para dialogar con países clave, como Brasil o Argentina, a través de los canales diplomáticos y militares». La Casa Blanca también contempló la idea de expulsar a Chile —al igual que había sucedido con Cuba— de la Organización de Estados Americanos. Las veintiséis páginas del documento titulado «Estudio de las opciones con que cuenta la estrategia de Estados Unidos en lo que respecta a la futura participación de Chile en la OEA» sopesaban seriamente la posibilidad de obligar a los chilenos a salir de ella si no querían ser expulsados. No obstante, según la conclusión de los redactores, todo apuntaba a que semejante estrategia podía «volverse en contra de nosotros», tornarse «objeto de divisiones (...) ofender a muchos de los que nos respaldan en Latinoamérica» y echar a perder la fachada «fría pero correcta» adoptada por la política estadounidense.

Desestabilización encubierta

El estrangulamiento económico y el aislamiento diplomático eran dos de las tres columnas que sostenían las medidas de desestabilización propuestas por el Memorando 93: la tercera —que, debido a su carácter comprometedor, no aparece identificada en las directrices presidenciales— era la intervención encubierta de la CIA. En un documento secreto anexo a un importante informe redactado por el CSN acerca de las opciones existentes en relación con Chile, como parte de lo expuesto en el memorando sobre seguridad nacional, la Agencia presentó su anteproyecto de sabotear el gobierno de Allende a finales de octubre. Aguijoneada de forma explícita por Kissinger a ampliar «el alcance de las operaciones encubiertas», la Agencia elaboró a mediados de noviembre un «programa de acción secreta para Chile» de ocho páginas —junto con un presupuesto operativo de siete millones de dólares— «adaptado al Memorando 93».[15]

Para la CIA resultaba preferible dejar que el gobierno de Allende se asentase, situación que le proporcionaría mayores oportunidades que el

período de transición de los últimos meses de 1970. Cierto informe secreto especial titulado «Allende tras la investidura» señalaba que «las posibilidades de ejecutar un golpe de Estado en el período posterior» a la toma del cargo mejorarían sensiblemente una vez que el presidente hubiese de arrostrar «los extraordinarios problemas administrativos y gubernamentales propiciados por la decadencia económica continuada y el aumento de las luchas intestinas surgidas en su propia coalición». Esto haría que fuese tomando cuerpo el clima necesario para el golpe, situación en la que «los militares tendrían una justificación para intervenir. En consecuencia», predecía el escrito, «cabe esperar que el gobierno de Allende tenga una vida corta».[16]

Con las miras puestas en este final, la CIA concibió operaciones secretas con las cuales crear y agudizar tensiones económicas, políticas, gubernamentales y militares destinadas a «dividir y debilitar a Allende y sus seguidores». El «Programa de acción encubierta para Chile» que presentaron a Kissinger el 17 de noviembre estaba «dirigido al gobierno de Allende, las Fuerzas Armadas de Chile, la oposición no marxista, el público chileno y otros países latinoamericanos, con el fin de aumentar cuanto sea posible la presión ejercida sobre el primero». En un resumen destinado exclusivamente al presidente Nixon, su consejero para la Seguridad Nacional bosquejó los «cinco elementos principales» del «Programa de acción encubierta: Chile» (véase el documento 2):

> 1. Emprender acciones políticas para dividir y debilitar a la coalición de Allende;
>
> 2. mantener y ampliar los contactos con el estamento militar chileno;
>
> 3. brindar respaldo a los grupos y partidos de oposición no marxistas;
>
> 4. ayudar a ciertas publicaciones periódicas y emplear otros medios de comunicación chilenos que puedan propagar información contraria al gobierno de Allende, y

> 5. emplear canales selectos de comunicación (de Latinoamérica, Europa o cualquier otro lugar del mundo) para fingir la subversión del proceso democrático por parte de Allende y la intervención de Cuba y la Unión Soviética en Chile.

El director de la División del Hemisferio Occidental de la CIA, William Broe, propuso este plan secreto al Comité 40 el 19 de noviembre, y Kissinger, asumiendo funciones más propias de un cargo elevado del servicio de inteligencia que de consejero para la Seguridad Nacional, quiso dirigir hasta el menor de los detalles de la operación. Haciendo el «papel de abogado del diablo», señaló que las acciones políticas emprendidas por la CIA en contra de la coalición de Allende se centraban en ofrecer respaldo a los moderados, y dado que este se estaba «presentando como moderado», se preguntaba «por qué no apoyar más bien a los extremistas». Esto colocaría en una posición ventajosa a los grupos más radicales —como el militante Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), según cabe suponer— y, con arreglo a la lista de asuntos que llevaba consigo para que fuesen tratados en la reunión, lograría «desbaratar la estrategia de Allende (o sea, mantener una imagen moderada respetable)». En su orden del día también se apuntaba la necesidad de hacer hincapié en que el objetivo de no perder los contactos ni la influencia sobre los militares chilenos constituía, «obviamente, un elemento muy importante», «no solo para los servicios de información, sino que también para posibles actuaciones futuras». Cuando Broe afirmó que la CIA había obrado en consonancia con la propuesta práctica presentada por Kissinger durante las últimas deliberaciones del Comité 40 (según la cual debían tomarse «medidas urgentes a fin de procurar los escudos necesarios para los gastos futuros» que debieran hacerse en Chile), Kissinger cuestionó la cuantía de los fondos.[17] «El Sr. Kissinger se refirió a la reserva propuesta de [cantidad tachada] escudos y observó que no parecía una suma muy cuantiosa para tener disponible en caso de que se impusiesen controles monetarios estrictos», señala la sección d (tachada), de las minutas del encuentro del 19 de noviembre, sometidas a una profusa censura.[18] [19] Kissinger «planteó esta pregunta porque no estaba dispuesto a que más tarde se adujera el problema de la falta de fondos con los que operar en Chile a modo de justificación por no haber podido llevar a cabo las acciones deseadas».

Entre 1970 y 1973, la CIA invirtió millones de dólares y escudos en importantes operaciones secretas diseñadas para socavar el gobierno de Allende. Así, se dedicaron más de tres millones y medio de dólares a los partidos de la oposición y a diversas organizaciones aliadas, no solo con el fin de influir en las elecciones municipales y del Congreso, sino que también para «fortalecer y alentar» a quienes se oponían al gobierno de la Unidad Popular, tal como indicaba un documento de conversación de la CIA, y para provocar campañas de consideración en contra de Allende. Los miembros del puesto de la Agencia en Santiago llevaron a cabo un programa propagandístico por un valor de dos millones de dólares centrado en el principal periódico de Chile, El Mercurio. Por otra parte, se destinó un millón y medio de dólares para las organizaciones empresariales, sindicales, cívicas y paramilitares que emprendían protestas, manifestaciones y actos violentos en contra del gobierno. Cierto programa de operaciones psicológicas y de penetración encaminado a reconstruir el acceso a las Fuerzas Armadas de Chile y la influencia ejercida sobre ellas proporcionó a la CIA, a la DIA y a Washington estrechos contactos entre los militares golpistas. Estos se hicieron cada vez más importantes a medida que las convulsiones económicas y políticas dirigidas por Estados Unidos creaban de forma inevitable el ansiado «clima propicio para un golpe de Estado», indispensable para derrocar al gobierno electo de Chile.

Operaciones políticas

El Partido Demócrata Cristiano, que desde 1962 había sido uno de los principales beneficiarios de las operaciones políticas de la CIA en Chile en cuanto abanderado de la democracia, recibió tras la investidura de Allende cuantiosos fondos suministrados por la Agencia a fin de convertirlo en un organismo favorable al golpe de Estado. Siguiendo la recomendación del embajador Korry, Kissinger convocó el 13 de noviembre un encuentro especial del Comité 40 con la intención de aprobar los fondos —cuya cuantía aún no ha sido revelada— destinados a influir en la convención política del partido programada para principios de diciembre. A Washington no le preocupaba tanto la amenaza que suponía Allende para la existencia del PDC, pero sí el que el ala izquierda del partido, encabezada

por el antiguo ministro de Relaciones Exteriores Gabriel Valdés, pudiera eclipsar la preponderancia de la facción centrista y debilitar así lo que el gabinete de Kissinger tenía por «la mejor fuente en potencia de oposición a la consolidación del gobierno de Allende». «Como sabrá», informó al secretario de Estado su ayudante Arnold Nachmanoff el 12 de noviembre, «[Valdés] representa al grupo del PDC que está dispuesto a adaptarse a Allende y colaborar con él». Si resulta «factible influir en la decisión del PDC en favor del grupo de Frei», escribió Nachmanoff, «yo recomendaría aprobar la propuesta de Korry».

Basándose en las conversaciones mantenidas con las fuentes de que disponía en el interior del bando de Frei, Korry resolvió por lo tanto que «no se requieren fondos ni acciones algunos» para la convención que iba a celebrarse. No obstante, aún sería necesaria «financiación externa». El partido arrastraba una deuda de veinticinco mil millones de escudos desde la campaña de 1970, y tenía «necesidades para los gastos operativos de 1971», tal como lo expresó Korry en un cablegrama muy censurado con sello de secreto/restringido/delicado y fecha del 4 de diciembre destinado a William Broe y al vicesecretario Charles Meyer. Según fragmentos del despacho aún censurados, el embajador recomendó que la CIA ayudase de manera encubierta al PDC a comprar un periódico que actuara de portavoz del partido contra el gobierno de Allende.[20]

En diciembre de 1970, el director del puesto santiaguino de la CIA, Henry Hecksher, tuvo que acudir a la oficina central de Langley con el fin de desarrollar una serie de planes para colaborar con integrantes del PDC. La CIA envió asimismo a algunos de sus agentes con la misión de reunirse con un representante del partido «para examinar en profundidad ciertas propuestas y peticiones de grandes cantidades en concepto de ayuda». También se mantuvieron encuentros similares con representantes del derechista Partido Nacional (PN). A finales de enero de 1971, la Agencia presentó una extensa propuesta de catorce páginas acerca del «respaldo financiero a los partidos chilenos de oposición para las elecciones de abril de 1971 y [compra de medios de comunicación]» al Comité 40 para que la aprobase. En ella se solicitaba un millón doscientos cuarenta mil dólares para financiar de forma clandestina las campañas de los candidatos del PDC y el PN, así como la de otro más pequeño (el Partido Democrático

Radical), para los comicios municipales que se celebrarían el 4 de abril. Estos tenían «una importancia fundamental. (...) No hay duda de que una posible victoria electoral de la UP tendrá repercusiones considerables no solo en Chile, sino que también en toda Latinoamérica», argumentaba la CIA.

> Si tomamos en consideración los soberbios resultados políticos obtenidos por Allende durante los dos primeros meses de su gobierno y la velocidad y eficacia con que se ha conducido la UP para poner en práctica los aspectos más populares de su programa, es evidente que el partido puede alcanzar su objetivo de obtener una mayoría electoral popular en los comicios de abril. Tal victoria no haría sino alentar a los movimientos de unidad popular que están empezando a surgir por todo el hemisferio y abatir a la oposición y a las fuerzas institucionales al interior de Chile.

El 28 de enero, el Comité 40 de Kissinger dio el visto bueno a estas operaciones. Poco después, la CIA proporcionó a los tres partidos arriba citados cuantiosos fondos, así como el dinero suficiente para que el PDC y el PN adquirieran sus propios periódicos y emisoras de radio, a fin de dar voz a sus campañas en contra de Allende. Los días 22 de marzo, 20 de mayo, 6 de julio y 5 de noviembre de 1971, el Comité 40 autorizó la concesión de fondos secretos adicionales al PDC y a otros partidos de oposición. Por su parte, la CIA solicitó —y recibió— 1.427.666 dólares más el 26 de octubre de 1972 con la intención de financiar de modo encubierto las campañas de oposición, y no tuvo que pasar mucho tiempo antes de que se aprobase una nueva asignación por un valor de 175.000 dólares, de modo que antes de que acabase el año se había invertido un total de 1.602.666 dólares en previsión de las elecciones al Congreso de marzo de 1973. Además, el 20 de agosto de 1973 se dio el visto bueno a la entrega de otro millón de dólares con el objetivo de «proseguir las actividades encubiertas destinadas a fortalecer a los partidos de oposición y las organizaciones del sector privado contrarias al gobierno de UP de Allende».[21]

La Agencia empleó cientos de miles de dólares de estas asignaciones para financiar en secreto las operaciones de organismos privados dedicados a minar la capacidad del gobierno de Allende. Los funcionarios de la CIA testificarían más tarde que «el respaldo financiero brindado al sector privado se limitaba a actividades específicas (...) como campañas de inscripción y concienciación de los votantes». En realidad, según se reconoció en el informe de septiembre de 2000 acerca de las «Actividades de la CIA en Chile», la Agencia «prestó ayuda a los grupos militantes de derecha con la intención de debilitar al presidente y originar una atmósfera de tensión». Algunas de las agrupaciones que se beneficiaban del respaldo de la CIA —entre las que se incluían importantes asociaciones de empresarios grandes y pequeños, organizaciones paraguas y grupos de oposición— brindaron su apoyo de forma directa y se unieron de un modo estrecho a sectores fundamentales que fomentaban el malestar económico y social, como fue el caso de los propietarios de camiones y los huelguistas que paralizaron Chile en 1973. La CIA había ocultado documentos relativos a los transportistas, incluidos algunos procedentes de su base en Santiago, que demostraban que cierta organización privada que recibía dinero de la Agencia había proporcionado dos mil ochocientos dólares directamente a quienes se habían declarado en huelga. Sin embargo, según los investigadores del Senado que sí revisaron algunos de estos documentos, «es evidente que los huelguistas que se levantaron en contra del gobierno recibían el apoyo activo de varios de los grupos del sector privado que percibieron fondos de la CIA».[22]

La Agencia sabía muy bien que «una porción sustancial del estamento empresarial» estaba colaborando con grupos consagrados a promover violentos desórdenes diseñados para «construir una atmósfera política que pudiese dar lugar a un golpe de Estado militar». En un cablegrama remitido el 29 de agosto de 1972, el puesto de operaciones en Santiago informó de los «esfuerzos llevados a cabo por Patria y Libertad y los dirigentes empresariales con la intención de provocar un golpe de Estado». (Durante el período en que estuvo activa la vía II, la Agencia había proporcionado 38.500 dólares a Patria y Libertad (PyL) —reconocido grupo paramilitar neofascista responsable de numerosos actos de terrorismo perpetrados entre 1970 y 1973—, financiación que no cesó, aunque sí disminuyó, durante todo 1971). PyL y una «amplia porción» de la comunidad empresarial,

según refirió el puesto santiaguino, «están llevando a cabo acciones ideadas para hacer mayor el malestar y más numerosos los incidentes violentos, sobre todo en la zona de Santiago, con el fin de crear en Chile una atmósfera que pueda dar lugar a un golpe militar. Los dirigentes empresariales implicados están tratando de promover huelgas y conflictos laborales, en tanto que PyL pretende provocar incidentes violentos». La colaboración de estas organizaciones para fomentar el caos no cesaría hasta el momento en que se dio por fin el golpe de Estado.

Proyecto El Mercurio

La operación secreta que, según los propios documentos internos de la CIA, desempeñó uno de los papeles más importantes a la hora de ocasionar un golpe de Estado fue la financiación clandestina del llamado Proyecto El Mercurio. Durante todo el decenio de 1960, la Agencia proporcionó dinero al mayor periódico de Chile (El Mercurio), acérrimo defensor de la derecha; colocó a reporteros y editores en nómina; escribió artículos y columnas, y suministró fondos adicionales para gastos operativos. Después de que Agustín Edwards, propietario del periódico, acudiese a Washington en septiembre de 1970 para instar a Nixon a que actuara contra Allende, la CIA empleó el diario como medio de distribución de la ingente campaña propagandística que formaba parte de las vías I y II.

Durante toda la malograda presidencia de Allende, el periódico prosiguió una inflexible campaña mediante incontables artículos y editoriales virulentos e incendiarios con los que inducía a la oposición a luchar en contra del gobierno de la Unidad Popular, a cuyo derrocamiento llegó a incitarla en varias ocasiones. «El Mercurio sigue practicando una oposición activa al régimen», hizo saber la CIA a la Casa Blanca a principios de 1971, «publicando ataques contra Allende, [por] sus intentos de nacionalizar las entidades bancarias, sus violaciones de la libertad de prensa y sus confiscaciones de tierras». Si bien los informes de la Agencia hacen pensar que el imperio mediático de Edwards conservó su independencia durante la época de Allende, lo cierto es que El Mercurio hubo de enfrentarse a serias dificultades financieras que iban desde la mala administración de que adolecía y sus problemas de crédito y solvencia,

hasta recortes en los anuncios, escasez de papel y disturbios laborales de los que Edwards y la CIA no dudaron en culpar al gobierno de la Unidad Popular.

En septiembre de 1971, un representante del grupo mediático de Edwards solicitó «respaldo confidencial por un valor de US$ 1.000.000» a la Agencia, petición que dio pie a un agitado debate interno entre los estadistas de la nación. En un informe secreto de la CIA elaborado para poner a Kissinger al corriente de las distintas opciones de que disponía y entregado al secretario de Estado el 8 de septiembre, la Agencia sugería que el diario afrontaba «restricciones económicas» y se hacía eco de la opinión del propietario, según la cual «el diario necesita no menos de un millón [de dólares] si quiere sobrevivir uno o dos años más». Washington tenía dos «opciones básicas»:[23]

a) Suministrar una amplia financiación al periódico, entendiendo que puede no ser suficiente para impedir que el gobierno de Allende lo cierre de todos modos (mediante el control del papel, por ejemplo, o la paralización del trabajo). Se hace necesaria una inversión inicial de al menos US$ 700.000.

b) Dejar que se hunda y dedicar todos nuestros esfuerzos a una campaña propagandística en favor de la libertad de prensa.

La CIA advertía de lo arriesgado de la opción b, ya que «Allende podría contraatacar demostrando que el cierre del periódico no es sino una consecuencia de la ineptitud financiera de quienes lo dirigen». El jefe de la base en Santiago y el embajador Korry se inclinaron por la primera, aunque no faltaron en el gobierno de Nixon quienes pensasen que un millón de dólares era «un precio demasiado elevado para obtener tan poco tiempo extra» si el periódico iba a cerrar de todos modos.

De hecho, cuando se preguntó la opinión de los miembros del Comité 40, cada uno de ellos adoptó una postura diferente. El ayudante de Kissinger, Arnold Nachmanoff, era partidario de «tomar ambas opciones y unirlas». De este modo, El Mercurio recibiría setecientos mil dólares con la condición de que «emprendiese un ataque público a los empeños del gobierno de Allende en llevarlo a la ruina». El fiscal general John Mitchell, según un resumen del debate, pensaba que debían «mantener con vida una

voz potente, pero no vale la pena hacer lo mismo por una débil». Por su parte, el almirante John Moorer, representante del Pentágono, aseguró que se estaban «jugando con un perdedor (...) una cantidad (...) descabellada», en tanto que el director de la CIA, Richard Helms, opinaba que «las perspectivas no eran buenas ni a corto ni a largo plazo».[24]

Ante tal desacuerdo en lo referente a la puesta en marcha de una operación específica contra Allende, Kissinger optó por «presentar el asunto a una autoridad más alta». El 14 de septiembre, Nixon autorizó personalmente el pago encubierto de los setecientos mil dólares —y de una cantidad mayor en caso de que fuera necesaria— al diario, lo que constituye un ejemplo muy poco frecuente de intervención presidencial en detalles tan concretos de una operación secreta. Aquella noche, Kissinger llamó a Helms para hacerle saber que:

a) El presidente acababa de dar su visto bueno a la propuesta de respaldar a El Mercurio con la cantidad de US$ 700.000, y b) deseaba que el periódico siguiese funcionando, por lo que la cantidad estipulada podría sobrepasarse con el fin de alcanzar este objetivo.

Tal como dictaba la decisión del presidente, Helms dio carta blanca a la División del Hemisferio Occidental para que rebasase «los US$ 700.000 autorizados hasta la cantidad de US$ 1.000.000, y aún más si eso garantiza la continuidad del diario» (véase el documento 3). Los setecientos mil dólares iniciales se enviaron de inmediato, y en octubre fue Kissinger quien autorizó personalmente los trescientos mil adicionales.

Siete meses más tarde, la CIA solicitó que se pusiesen «a disposición de El Mercurio US$ 965.000 adicionales», lo que hizo que se destinase en secreto un total de casi dos millones de dólares al diario en menos de un año.[25] En una propuesta redactada por el nuevo director de la División del Hemisferio Occidental, Theodore Shackley, la CIA argumentaba que la decisión de seguir financiando el diario debía basarse «en un juicio valorativo de la importancia de tratar de garantizar la continuidad del diario por motivos políticos».[26] El periódico ya no corría peligro de ser clausurado por el gobierno de Allende, pero no podía decirse lo mismo de

sus medios económicos. La nueva asignación, según se informó a Kissinger en un memorando calificado de ultrasecreto, se emplearía para:

> amortizar un préstamo, cubrir el déficit operativo mensual que pueda generarse hasta marzo de 1973 y crear un fondo de contingencia de [cantidad tachada] con el objetivo de satisfacer necesidades crediticias, nuevos impuestos y otras deudas bancarias que podrían surgir en breve.[27]

Según exponía el argumento presentado por la Agencia con el fin de obtener este dinero, El Mercurio se consideraba «esencial» para ayudar a los candidatos respaldados por la CIA a ganar los comicios para el Congreso de marzo de 1973, que constituirían una prueba electoral de gran trascendencia para la popularidad de Allende. Y tal como reconoció William Jorden, ayudante de Kissinger, en un memorando de acción calificado de ultrasecreto remitido a la Casa Blanca, todos estaban de acuerdo en la importancia del periódico: «Es una espina para Allende, y ayuda a insuflar valor a las fuerzas de la oposición». Asimismo, si se iba «al cuerno», recordó Jorden al secretario de Estado, «nos proporcionará un pretexto inmejorable para hablar de falta de libertad de prensa allí y en el resto del hemisferio».[28] El 11 de abril, el Departamento de Estado dio su visto bueno a la cantidad solicitada.

El Mercurio recibió dinero adicional por mediación del principal colaborador empresarial del que disponía la CIA en Chile: la ITT. Existe un memorando con fecha del 15 de mayo de 1972 que recoge la conversación mantenida entre el agente de la CIA Jonathan Hanke y Hal Hendrix, empleado de la ITT, en torno a un depósito bancario de cien mil dólares que iba a hacer en secreto la compañía a Agustín Edwards. «Me dijo que el dinero destinado al grupo de Edwards debía ir a través de una cuenta en Suiza», informó Hanke a sus superiores.

Sostenido por una considerable afluencia de capital clandestino, el imperio mediático de Edwards se convirtió en uno de los principales agentes que propiciaron la caída de la democracia chilena. Lejos de ser una fuente de noticias, su periódico se erigió en la voz de la agitación organizada en contra del gobierno. A mediados de 1973, la base de operaciones de la CIA

en Santiago lo identificó, junto con el grupo paramilitar Patria y Libertad y ciertos militantes del Partido Nacional, como una de las principales organizaciones privadas que «han adoptado por objetivo la creación de conflictos y confrontaciones capaces de desembocar en algún tipo de intervención militar». La división de acción clandestina de la CIA en el Hemisferio Occidental le atribuyó una función esencial a la hora de crear la ansiada atmósfera propicia a un golpe de Estado. Los miembros de la Agencia recalcaron en un memorando de renovación del proyecto con fecha de enero de 1974 —muy censurado— la necesidad de mantener la financiación, a fin de recompensar y sostener la fuente propagandística que suponía El Mercurio, dada la importancia que había cobrado en el derrocamiento de Allende.

Antes del golpe de Estado, los medios de comunicación con que contaba el proyecto vertieron un incesante aluvión de críticas en contra del gobierno, para lo cual explotaron cualquier posible punto de fricción entre el gobierno y la oposición democrática e hicieron hincapié en los problemas y conflictos que se estaban desarrollando entre aquel y las Fuerzas Armadas. [29]

La CIA reconoció que las operaciones encubiertas de Estados Unidos habían contribuido de manera directa al derrocamiento de Allende, al afirmar que las actividades propagandísticas, que contaron con El Mercurio en cuanto principal vocero, «desempeñaron un papel fundamental a la hora de crear el escenario que haría posible el golpe militar del 11 de septiembre de 1973».

El proyecto militar

El estamento militar chileno siguió siendo el artífice esencial del futuro de Chile, según las diversas evaluaciones que enviaron a Washington los agentes de la CIA en el país. La base en Santiago subrayó hasta la saciedad la importancia de las operaciones clandestinas dirigidas a las Fuerzas Armadas. Durante el primer año que siguió a la elección de Allende, la Agencia invirtió un tiempo y un esfuerzo nada desdeñables a la reconstrucción de su red de contactos al interior del Ejército, diezmada a

raíz de los arrestos y las purgas de quienes habían estado implicados en el asesinato de Schneider. El puesto santiaguino de la CIA reclutó a una serie de nuevos agentes entre los militares con la intención de acceder a grupos destacados de oficiales y establecer comunicaciones con dirigentes golpistas reales y potenciales, toda vez que dio por hecho que «el objetivo último del programa [tachado], la búsqueda de una solución militar al problema chileno, debe alcanzarse mediante unas pautas de cuidada elaboración». «Entendemos que nuestra misión debe consistir en caminar de forma consciente y deliberada en dirección a un golpe de Estado», cablegrafió la base en Santiago en noviembre de 1971. La oficina central advirtió que tal posición dependía de que se diesen las circunstancias favorables necesarias. Habida cuenta del espectacular fracaso de la vía II, tanto Langley como el puesto de operaciones coincidieron en que debía «haber cierta predisposición por parte de los militares a tomar por sí mismos la iniciativa, y [en] que una acción precipitada estimulada de forma artificial o mal planeada sería contraproducente».[30]

En la primera mitad de 1971, la base en Santiago se hallaba dirigiendo una «operación de engaño» concebida para persuadir a los generales chilenos de que Allende estaba conspirando en secreto con Castro con la intención de socavar el poder del Alto Mando del Ejército. El objetivo no era otro que «incitar a los militares» a «actuar contra [Allende] si era necesario». A principios de 1972, la CIA estaba financiando un boletín informativo opuesto a Allende dirigido a las Fuerzas Armadas, y la estación santiaguina comenzaba a compilar listas de arrestos, instalaciones que constituían objetivos y otros datos operativos necesarios para planear las posibles eventualidades de un golpe de Estado.

En agosto de 1971, el puesto en Santiago comenzó a enviar a Washington relaciones detalladas de oficiales que mostraban una «oposición radical al régimen existente». El primer informe especial de inteligencia relativo a la confabulación golpista, dirigido a Helms y a Kissinger, estaba fechado el 9 de noviembre de ese año y llevaba por título el de «Planificación preliminar de una futura acción militar contra el gobierno chileno». En él, la CIA informó que los «altos oficiales del Ejército de Tierra, la Armada y de Carabineros han decidido derrocar al gobierno chileno durante la primavera [boreal] de 1972». Para esas fechas, según esperaban los conspiradores, la

economía chilena se habría deteriorado lo bastante para provocar un estado de emergencia durante el que pudiesen actuar los militares.[31] En marzo del citado año, el FBI hizo llegar a Kissinger un informe prioritario de inteligencia relativo a varios regimientos, oficiales del Ejército, comandantes y coroneles convencidos de que «podría hacerse realidad [un golpe de Estado] en un futuro próximo». Los cuñados del general Roberto Viaux estaban, según informó el FBI al secretario de Estado, «participando de forma activa» en la coordinación de acciones en contra de Allende llevadas a cabo por exiliados de derecha en todas las naciones del Cono Sur y deseaban «transmitir esta información al gobierno de Estados Unidos».[32]

La recogida de información acerca de los oficiales chilenos partidarios de un golpe de Estado llevó a la CIA, de forma inevitable, hasta el general Augusto Pinochet. Pese a que este se unió a la conspiración golpista pocos días antes de su culminación, ocurrida el 11 de septiembre de 1973, lo cierto es que los servicios de información estadounidenses lo tenían en su lista de posibles cabecillas nada menos que desde mediados de 1971. Haciendo uso de cierto informante que asistió a un banquete con Pinochet el 5 de agosto, la base en Santiago comunicó a la oficina central su condición de «militar apacible, amigable e intransigente (...) totalmente embebido en los nuevos ámbitos de seguridad, orden público y acontecimientos políticos; al que le gusta, sin lugar a dudas, sentirse importante». Su esposa, según este informe, se oponía al gobierno de Allende, en tanto que su hijo estaba casado con la hija de un miembro del Partido Nacional que esperaba «empujar a Pinochet a efectuar [un] golpe de Estado». El documento señalaba, sin embargo, que otros conspiradores lo consideraban una persona «incapaz de encabezar un golpe de cualquier tipo».[33]

Pinochet era a la sazón comandante de la guarnición de Santiago, aunque también tenía el cargo de jefe de plaza en la capital de Chile, lo que lo hacía responsable del control de multitudes ante una emergencia. «Al parecer, desempeñaría funciones importantes a la hora de dominar cualquier convulsión militar o civil de cierta envergadura en Santiago», señalaba una de las muchas fichas de oficiales chilenos de las cuales disponía la CIA en septiembre de 1971, que para marzo del año siguiente había sido

actualizada e indicaba que Pinochet se hallaba «implicado en los preparativos golpistas» del general Alfredo Canales, jefe de Estado Mayor, con quien la Agencia había colaborado durante el Proyecto FUBELT.

No faltan informes del servicio de inteligencia en los que diversos oficiales chilenos califiquen a Pinochet de persona poco comprometida y, por ende, poco fiable. Según aseguró cierto informante a los miembros del puesto santiaguino, Pinochet «daría su aprobación, pero querría cerrar los ojos a lo que sucediese». El 27 de septiembre de 1972, sin embargo, un confidente de la CIA cercano a él hizo saber que el general se estaba volviendo a plantear la necesidad de derrocar a Allende. Según creía entonces, había que «obligarlo a dejar el puesto o eliminarlo»: esas eran, en sus propias palabras, «la única alternativa». Cuando viajó a Panamá aquel mismo mes para negociar la entrega de carros de combate estadounidenses al Ejército chileno, Pinochet «se sintió», según informó un miembro de su entorno a un agente de la CIA, «muy bien tratado». De acuerdo con esta misma fuente, los oficiales del Ejército estadounidense pertenecientes al Comando Sur hicieron llegar a la delegación del general un mensaje importante: «Estados Unidos respaldará un golpe de Estado contra Allende "con todos los medios necesarios" cuando llegue el momento» (la cursiva es mía).[34]

Cuando la CIA comenzó a elaborar informes más insistentes acerca de la posibilidad de una actuación militar, los funcionarios de Washington se centraron en la cuestión de cómo y con qué medios podrían respaldarla. En octubre de 1972 se reunió en la oficina central de Langley un equipo de «elementos apropiados de la CIA» formado por agentes y analistas que «pusieron sobre la mesa sus ideas en torno a la situación de Chile desde cualquier perspectiva posible», tras lo cual sopesaron «varias vías de actuación (...) para acelerar los acontecimientos que pueden desembocar en un golpe de Estado», tal como comunicó Shackley al Comité Superior de Análisis (SRG, por su sigla en inglés) el 17 de octubre. El equipo de la CIA llegó a la conclusión de que «ninguna de las vías de actuación que puedan emprenderse ayudará de forma decisiva a alcanzar el objetivo de apartar a Allende del poder». Durante una reunión del Departamento de Estado «sobre la situación actual en Chile» celebrada aquel mismo día, los participantes, miembros del Departamento, la CIA y el CSN, evaluaron cuál sería la postura de Estados Unidos en caso de que los conspiradores

golpistas solicitasen ayuda concreta para derrocar al gobierno de Allende o exigiesen garantías de que tras el golpe podrían contar con su apoyo como condición indispensable para llevarlo a cabo. Tal como se señala en las actas de este encuentro, mutiladas por la censura, el SRG determinó que, dado que no era necesaria la ayuda directa de Estados Unidos para que se efectuase con éxito el golpe militar, no valía la pena correr los riesgos políticos que conllevaba brindarla.[35] Según las minutas de la reunión, «el grupo llegó por fin al siguiente acuerdo»:

a) En caso de que los militares chilenos decidieran emprender un golpe de Estado, no necesitarían asistencia ni apoyo del gobierno de Estados Unidos para hacerlo con éxito, y tampoco parece probable que vayan a solicitarlos. Es más, dada la aptitud del estamento militar chileno para llevar a cabo un golpe sin ayuda, debería evitarse cualquier intervención estadounidense al respecto.

b) [Página y media de texto tachado en las que se trataba de si era o no conveniente que Estados Unidos garantizara a los conspiradores golpistas chilenos su respaldo al gobierno que se instauraría tras el golpe].[36]

Intervención multilateral encubierta

Cierto número de funcionarios estadounidenses sabía a su vez que Estados Unidos no estaba solo en su intromisión en los asuntos internos de Chile. Luego de la reunión celebrada el 6 de noviembre de 1970 por el Consejo de Seguridad Nacional tras la asunción de Allende, Nixon ordenó «establecer estrechos contactos con gobiernos clave de América Latina, en particular Brasil y Argentina, para coordinar esfuerzos para oponerse a los movimientos chilenos que puedan ser contrarios a nuestros intereses mutuos» y para «mantener relaciones cercanas con líderes militares amistosos en el continente». La función que los militares argentinos desempeñaron en Chile, si hubo alguno, sigue siendo hasta hoy un misterio, pero el régimen brasileño sí reconoció la amenaza que el modelo de Allende representaba para su propia influencia militar en el Cono Sur y lanzó un programa concertado y encubierto para promover y apoyar un

golpe. Allende sería derrocado, «en buena medida, por las mismas razones que [João] Goulart lo había sido en Brasil», informó el general brasileño Emilio Médici al presidente Nixon durante una reunión celebrada en la Casa Blanca en diciembre de 1971, según un resumen catalogado como alto secreto sobre esa conversación. Médici «dejó claro que Brasil estaba trabajando con ese fin».[37]

Entre las acciones encubiertas que emprendieron los servicios de inteligencia del Ejército brasileño estuvo la de abrir canales de comunicación de ida y vuelta con oficiales militares chilenos que se oponían a Allende, y la de llevar en secreto a algunos de ellos a Brasil para debatir la trama de un eventual golpe de Estado. A principios de 1971, como informaba el periodista investigador Roberto Simon en su libro El Brasil de Pinochet,[38] la embajada chilena en Brasilia recibió múltiples informes de planes de los militares brasileños para instigar una insurrección contra Allende. El embajador chileno en Brasil, Raúl Rettig, transmitió un cable alarmante y «estrictamente confidencial» rotulado como «Estudios que estaría realizando el Ejército brasileño sobre el establecimiento de guerrillas en Chile», en el cual se informaba que oficiales del Ejército brasileño habían creado una «sala de guerra» con mapas y modelos de la cadena montañosa de los Andes a lo largo de la frontera chilena, para planear operaciones de infiltración. «Con la intención de acopiar mayores antecedentes sobre las eventuales regiones en que podría actuar un movimiento de guerrillas, el Ejército de Brasil habría enviado a nuestro país a diversos agentes secretos, quienes habrían entrado a Chile como turistas», según las fuentes de Rettig. «Por el momento no habría planes para determinar la fecha aproximada en que se podría iniciar un movimiento armado», señalaba un informante (véase el documento 4).

Archivos brasileños desclasificados y obtenidos por Simon revelaron a su vez que agentes brasileños que operaban en Chile establecieron nexos con el grupo Patria y Libertad y que, luego de un fallido intento de golpe en junio de 1973, Brasil brindó protección y asilo a destacados miembros de esa organización proterrorista.[39] Cuando el golpe finalmente tuvo lugar, agentes brasileños participaron en interrogatorios de prisioneros políticos, y el régimen brasileño ayudó activamente a la consolidación de la dictadura

militar en Chile. De hecho, Brasil fue el primer país del mundo en reconocer oficialmente a la Junta Militar encabezada por Pinochet.

En la reunión con el general Médici en la Casa Blanca, el 9 de diciembre de 1971, el presidente Nixon le ofreció su aprobación y apoyo a la intervención de Brasil en Chile. «El presidente indicó lo muy importante que era que Brasil y Estados Unidos trabajaran mancomunadamente en este campo. No podíamos asumir la dirección del tema, pero si los brasileños sentían que podíamos ser útiles en algo dentro de esta área, quería que el presidente Médici se los hiciera saber. Si lo que se requería era dinero u otra forma discreta de ayuda, nosotros podíamos lograr que eso estuviera disponible», le indicó Nixon, según el memorando de la conversación sostenida en esa reunión calificado de alto secreto. Nixon informó a Médici que «esperaba que pudiéramos cooperar íntimamente, visto que había muchas cosas que Brasil como país sudamericano podía hacer y EE.UU. no». Ambos acordaron nombrar sendos representantes dentro de una vía secreta —Kissinger por parte de EE.UU., y Gibson Barbosa, ministro de Exteriores, y el coronel Manso Netto por el lado de Brasil— para comunicarse con discreción en esa modalidad de cooperación futura. Estados Unidos y Brasil, como le dijo Nixon al general Médici, «deben lidiar y prevenir nuevos Allendes y Castros y lidiar donde sea posible para revertir estas tendencias».[40]

Algunos oficiales del Ejército brasileño de graduación intermedia, como informó consiguientemente la CIA, creían que Estados Unidos estaba intentando reclutar a Brasil para que «haga el trabajo sucio» en el Cono Sur. De hecho, Médici y sus generales buscaban favorecer sus propios intereses de seguridad y defensa con independencia de Washington, por la vía de socavar a Allende y apoyar a nuevas juntas militares aliadas en la región. Sin embargo, la CIA sí reclutó de manera activa a otro país para que colaborara e instigara el «trabajo sucio» en Chile —una nación de la que nadie sospecharía que realizó acciones encubiertas para desgastar a Allende —.

Ese país era Australia y, habiendo transcurrido más de cincuenta años desde ello, su papel sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de las operaciones clandestinas de Estados Unidos para desestabilizar al gobierno

de la Unidad Popular. Preocupada de que el servicio de inteligencia de Allende fuera capaz de interferir en la habilidad de los agentes estadounidenses —operando bajo la cobertura diplomática— para reunirse con sus activos en Chile y obtener inteligencia de ellos, la CIA determinó que necesitaba un equipo complementario de operadores extranjeros encubiertos. En el otoño de 1970, funcionarios del más alto nivel dentro de la CIA formularon un requerimiento secreto al ASIS, el servicio de inteligencia de Australia —aludido por su nombre en clave, «MO9», en la documentación—, para que ayudara a las operaciones encubiertas de EE.UU. estableciendo su propia estación clandestina en Chile. La respuesta a la petición fue aprobada en secreto por William McMahon, ministro de Exteriores, del Partido Liberal, en diciembre de 1970. «El ministro ha dado su aprobación para que el MO9 abra una estación en Santiago, Chile», decía un memorando cuidadosamente redactado del ASIS. «[Nombre tachado] ha sido escogido como comandante de estación y se trasladará a Santiago tan pronto como se completen los aspectos administrativos y [tachado]». Durante la primera mitad de 1971, el ASIS envió agentes y equipo a Chile, encargando a su personal que alquilara oficinas, adquiriera amoblado y comprara algunos vehículos, entre los demás requerimientos administrativos de abrir una estación clandestina. «[Tachado] señala que la caja fuerte y máquina de escribir para nuestra estación llegará a Valparaíso aproximadamente el 11 de septiembre y aconseja que ellas sean despachadas al [tachado] dentro de una semana», indicaba un informe secreto de los avances a mediados de 1971.[41]

En los siguientes dieciocho meses, agentes del ASIS condujeron operaciones encubiertas que involucraron el manejo de varios activos chilenos reclutados por la CIA en Santiago, y completaron informes de inteligencia para la CIA. Pero, a principios de 1973, Gough Whitlam, el nuevo primer ministro del Partido Laborista, ordenó al ASIS terminar con sus operaciones en Chile. Whitlam estaba «incómodo» por el involucramiento de Australia, porque, en caso «de que esos temas recibieran cualquier forma de publicidad, a él le resultaría en extremo difícil justificar nuestra presencia allí», según establecía un memorando desclasificado de la conversación escrito por William Robertson, el entonces Director General del ASIS. «El primer ministro dijo», según otro resumen desclasificado de la reunión celebrada en abril de 1973, que «él

era muy consciente de la importancia de esta [operación] para los estadounidenses y le preocupaba mucho que ellos interpretaran su decisión como un gesto antinorteamericano. (...) Dijo estar preocupado de que los estadounidenses no llegaran a pensar que él, en lo personal, desaprobaba necesariamente lo que estaban haciendo en Chile» (véase el documento 5). [42]

En sus instrucciones a sus agentes en Chile, Robertson hacía notar que Whitlam había ordenado que el MO9 cesara «nuestra actividad clandestina lo antes posible», y que al primer ministro «le preocupaba muchísimo que la CIA no interpretara esta decisión como un gesto inamistoso hacia EE.UU. o hacia la CIA en particular».

Parece ser que la estación del ASIS australiano fue cerrada en julio de 1973, aunque un agente del ASIS permaneció presuntamente en Santiago hasta después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973. «Todos los archivos, etc., que quedaban de la estación han sido destruidos», avisaba un cable del MO9 enviado desde Santiago al cuartel general tras cerrar sus operaciones de espionaje en julio de 1973. «... la estación ha sido cerrada como estaba planeado».

El escándalo de la CIA y la ITT

Tal como el primer ministro australiano, los funcionarios estadounidenses también estaban preocupados por la exposición de las operaciones encubiertas en Chile. De hecho, cuando los funcionarios del gobierno de Nixon sopesaron el grado de implicación que debían asumir de forma directa en el golpe de Estado, su actitud cautelosa estuvo influida por la tremenda polvareda que había levantado la intervención de Estados Unidos en Chile y que constituyó el primero de una serie de escándalos relativos a operaciones encubiertas que atormentaron a la CIA durante la década de 1970. El 21 de marzo de 1972, el columnista Jack Anderson reveló la existencia de «documentos secretos que la International Telephone and Telegraph no ha logrado destruir» y que demostraban que la compañía tenía «tratos regulares con la Agencia Central de Inteligencia y que contempló, en determinado momento, la posibilidad de desatar un golpe de Estado

militar capaz de cortar el paso a la elección de Allende».[43] «La acusación resulta asombrosa —exclamaba The Washington Post en un editorial aparecido al día siguiente—. ¿Cómo es posible, si es que es cierto, que, en 1970, un presidente estadounidense haya considerado intervenir para evitar que jure el cargo el presidente electo de un país democrático con el que supuestamente mantenemos buenas relaciones?». Los archivos de la ITT —veinticuatro documentos secretos conformados por un total de setenta y nueve páginas de exposiciones de estrategias, memorandos de conversaciones y actas de reuniones que presentaban una profusión de detalles sin precedentes— desvelaban con gran franqueza la intriga de la colaboración secreta mantenida por la empresa con la CIA, la Casa Blanca y los funcionarios de la embajada a fin de provocar el caos económico y subvertir la democracia chilena en 1970 y principios de 1971.

En Chile, estas revelaciones dieron lugar a una súbita explosión de indignación nacionalista. Los documentos filtrados no hicieron sino confirmar las sospechas que había albergado la izquierda chilena en relación con el imperialismo económico de Estados Unidos y los intentos que estaba realizando Washington en secreto de frustrar el experimento socialista chileno. Asimismo, la publicación de tales archivos dio al traste con la fachada que constituía la postura diplomática «fría pero correcta» adoptada por el gobierno de Nixon con respecto a Chile. El de Allende, que había mantenido durante todo un año extensas conversaciones con representantes de la ITT en lo tocante al valor y la adquisición de los intereses mayoritarios que tenía la empresa en la Compañía de Teléfonos de Chile, concluyó las negociaciones y anunció la expropiación de las participaciones de la ITT a través de una votación del Congreso chileno.

En Estados Unidos, el artículo de Anderson hizo que se pusiera en marcha la primera de una larga serie de investigaciones del Congreso en torno a la intervención encubierta en Chile, la que se amplió finalmente para abarcar el total de las operaciones llevadas a cabo por la CIA en el extranjero. Cuarenta y ocho horas después de su publicación, el influyente senador William Fulbright, presidente del Comité Senatorial de Relaciones Exteriores, recibió de su principal ayudante un memorando privado por el que se requería una investigación completa al respecto. Pat Hold escribió, refiriéndose a los artículos de Anderson:

> Ponen en evidencia un comportamiento escandaloso por parte de los representantes de la ITT y también del gobierno de EE.UU. No creo que baste con que el secretario de Estado niegue, tal como hizo ayer, la existencia de una conducta incorrecta por parte del gobierno. Si dejamos las cosas como están, el Comité acabará por ser acusado de participar en un encubrimiento. En consecuencia, se hace necesaria una mayor intervención de nuestra parte.[44]

Al día siguiente, Fulbright autorizó la formación del Subcomité sobre Empresas Multinacionales, y nombró presidente de esta comisión especial a Frank Church, senador procedente de Idaho poco conocido a la sazón. Al organismo recién creado se le encomendó la misión de investigar en general las actividades e influencia de este tipo de compañías en relación con la política exterior de Estados Unidos. Sin embargo, Church supervisó, por otro lado, una serie de pesquisas independientes en torno a la implicación de la ITT en las operaciones llevadas a cabo contra Allende, lo que dio lugar a las primeras comparecencias relativas a la intervención y el primer informe oficial extenso sobre el particular: The International Telephone and Telegraph Company and Chile, 1970, 1971.[45]

Todas estas trascendentales revelaciones constituyeron un duro golpe para la clandestinidad en que se hallaba envuelta buena parte de la política que estaba poniendo en práctica en aquellos momentos Estados Unidos con respecto a Chile e hicieron al gobierno de Nixon ponerse en guardia para evitar una crisis mayor. En efecto, corría el riesgo de que saliesen a la luz pública la vía I —en la que había participado de forma activa la ITT— y la II, así como el resto de incesantes esfuerzos encubiertos concebidos para perturbar a un gobierno que habían elegido los chilenos democráticamente. La exposición de la verdad podría ser, tal como aseguró al director de la CIA el asesor legal de la Casa Blanca John Dean, «muy explosiva».

El Departamento de Estado, la CIA y el CSN se negaron a hacer ningún comentario público al respecto durante dos días. Fue el tiempo que, según revelan los documentos desclasificados, emplearon sus representantes en redactar una engañosa refutación de las operaciones de Estados Unidos para obstruir o derrocar a Allende. La primera versión del Departamento de

Estado aseguraba que el gobierno estadounidense había «sopesado varias posibilidades» tras la elección de Allende, aunque no había «pretendido el derrocamiento del gobierno electo de Chile ni emprendido acción alguna para conseguir tal objetivo, ni en aquel momento ni desde entonces». El segundo borrador se cerraba con la siguiente afirmación: «Esta administración rechazó de plano cualquier idea de frustrar los procesos constitucionales de Chile durante el período electoral de 1970». La versión final, presentada por el portavoz del Departamento de Estado, Charles Bray, en una rueda de prensa el 23 de marzo, introducía un sutil cambio para quedar así: «Esta administración rechazó de plano cualquier idea de frustrar los procesos constitucionales de Chile tras las elecciones de 1970».

«¿Y antes de los comicios?» fue la primera pregunta que se formuló durante la rueda de prensa del 23 de marzo. Los periodistas bombardearon a Bray para que aclarase si habían existido o no las operaciones de la CIA descritas en los documentos de la ITT. Pusieron gran empeño en que se les indicase si era cierto que, tal como se citaba en un memorando «personal y confidencial» de la empresa fechado el 28 de septiembre de 1970, se había dado al embajador Edward Korry «carta blanca para actuar en nombre del presidente Nixon (...) con el fin de hacer todo lo posible (excepto una acción semejante a la llevada a cabo en la República Dominicana) para evitar que Allende llegase al poder». En sus respuestas, Bray adoptó una postura evasiva, recurrió a la desinformación o dio información falsa sin más, según el momento. «El principal propósito de mi comparecencia de hoy —declaró— es dejar claro que el gobierno de Estados Unidos no ha estado envuelto en ningún tipo de actividad deshonesta en Chile». Pocos minutos después, repitió: «No existe actividad deshonesta alguna en la que se hayan visto implicados la embajada, la delegación de Santiago o nuestros representantes en Chile».[46]

El presidente Nixon, que había instigado personalmente las operaciones emprendidas contra Allende, se mantuvo bien informado de los esfuerzos realizados por su gobierno para contener el escándalo de la CIA y la ITT. Apenas unas horas después de concluida la rueda de prensa, recibió un informe telefónico de Ron Zeigler, secretario de prensa de la Casa Blanca. Su conversación quedó registrada gracias al sistema secreto de grabación del Despacho Oval:

> Zeigler: Ellos [el Departamento de Estado] lo han negado [la implicación de Estados Unidos y la ITT], pero han tenido mucho cuidado a la hora de hablar de la declaración de Korry por temor a que les saliera el tiro por la culata.
>
> Nixon: ¿Por qué? ¿Qué ha dicho Korry?
>
> Zeigler: Pues... ha dicho que recibió órdenes de hacer cualquier cosa menos algo parecido a lo de la República Dominicana... O, al menos, eso es lo que aseguran que ha dicho.
>
> Nixon: ¿Y es cierto?
>
> Zeigler: Sí.
>
> Nixon: Y ¿cómo diablos se ha sabido?
>
> Zeigler: Se ve que Anderson lo ha sacado de alguna de sus fuentes. Tengo aquí a Al Haig.
>
> Nixon: ¡Bien! Es cierto: Sí que se le ordenó [a Korry] que lo hiciera. Pero fracasó, el muy hijo de puta. Ese era el principal problema al que tenía que enfrentarse: Debía haber evitado que Allende se hiciera con la presidencia.[47]

La respuesta inicial al escándalo de la CIA y la ITT, propia de una novela de Orwell, proporcionó el marco adecuado para un encubrimiento prolongado que pudo hacerse realidad merced a una verdadera exhibición de mendacidad oficial que apenas cuenta con parangones en los anales de la política exterior. Se mintió descaradamente —al público, al Congreso y aun a otros sectores del gobierno de Estados Unidos— a fin de que la administración pudiera encubrir la realidad de las vías I y II. La CIA, el Departamento de Estado y el CSN trataron de entorpecer la investigación del Subcomité del Senado sobre Empresas Multinacionales: limitaron en gran medida su colaboración, ocultaron pruebas e hicieron cometer perjurio a los testigos del gobierno y la compañía. Su afán por ocultar la verdad y contener las investigaciones llevó a la administración de Nixon a prestar su ayuda a la ITT para que estafase a la Corporación para la Inversión Privada

en el Extranjero —y, por extensión, al contribuyente estadounidense— y consiguiese los noventa y dos millones de dólares que reclamaba la empresa por concepto de seguro de riesgos políticos por los bienes que le habían sido expropiados en Chile.

Las inversiones chilenas de la ITT estaban aseguradas por la OPIC en cerca de cien millones de dólares. Sin embargo, el contrato del seguro contenía una cláusula que excluía la cobertura de «expropiaciones derivadas de la “provocación” por parte del inversor», a no ser que se tratase de «acciones emprendidas de acuerdo con una petición específica de Estados Unidos», tal como advirtió el vicesecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Charles Meyer, en un informe secreto. Para la dirección de la OPIC, los documentos de la ITT que se habían hecho públicos daban a entender —de un modo por lo demás evidente— que la expropiación de su compañía de teléfonos en Chile se había visto provocada por la actuación encubierta de la propia empresa.

La revelación al completo de la documentación relativa a la vía I demostraría que la ITT había «provocado» de hecho su expropiación al intervenir de manera ilícita e ilegal en la política interna de Chile. La compañía se había puesto en contacto con la CIA en julio de 1970 para ofrecerle un «fondo electoral» secreto con el que respaldar al candidato conservador Jorge Alessandri; había dirigido sus propias operaciones clandestinas en el ámbito de la política chilena al interior del país, incluido el suministro de fondos a Alessandri a través de un canal secreto facilitado por la CIA; había instado a la embajada a adoptar una postura más activa a la hora de obstaculizar al candidato de izquierda, y había conspirado con miembros de la Agencia para desestabilizar la economía y «detener el avance de Allende». Tras los comicios, los representantes de la ITT habían hecho llegar a una cuenta secreta en Suiza decenas de miles de dólares destinados a El Mercurio para sostener una operación propagandística clandestina de la CIA. Con todo, el afán de los hombres de Nixon por ocultar el escándalo hacía imposible compartir toda esta información con la OPIC, y se temía que, de ver denegada su reclamación, la ITT arremetiera contra el gobierno de Estados Unidos y declarara que su intervención en Chile se había debido a una petición oficial. «Nuestro interés principal —escribió Meyer— consiste en evitar o disminuir al máximo las revelaciones

que puedan comprometer de un modo serio a las fuerzas de oposición chilenas y avergonzar al gobierno [de EE.UU.]».

En consecuencia, cuando la OPIC solicitó que el Departamento de Estado le entregase «toda la información fiable de que dispongan los servicios de inteligencia acerca de las actividades de la ITT que hayan podido constituir una “provocación”», el Departamento negó poseer ninguna. «Hemos revisado detenidamente nuestros archivos», aseguraba la carta firmada el 29 de noviembre de 1972 por el vicesecretario Meyer, quien había enviado personalmente una serie de cablegramas secretos al embajador Korry relativos a las reuniones mantenidas con representantes de la ITT y otras empresas estadounidenses cuando aún estaba vigente la vía I. «No tenemos material alguno que pueda añadir nada a la información [ordinaria] que ya hemos puesto a disposición de ustedes».

La CIA engañó también a la OPIC al mentir con descaro a sus funcionarios acerca de la naturaleza de la colaboración entre la Agencia y la ITT, y de los conocimientos de que disponían al respecto, así como al negar la existencia de documentos relevantes. Una investigación posterior de los archivos dirigida por el inspector general de la Agencia trató de determinar si esta había proporcionado «información correcta y adecuada a la Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero con vistas a su uso a la hora de considerar la reclamación de la ITT». Los documentos demostraron que «las primeras respuestas de la Agencia a las preguntas de la OPIC en relación con las actividades de la ITT no eran correctas y, aun así, se mantuvieron durante cierto tiempo».[48]

El Departamento de Estado puso a Kissinger al corriente del problema de la OPIC el 16 de marzo de 1973, en un memorando secreto que llevaba el título de «Declaraciones ante el Comité Church acerca de las empresas multinacionales: Chile-ITT»:

> Todo gira en torno a una cuestión central: la OPIC debe decidir si pagar o no los US$ 92.500.000 que solicita la ITT. La dirección de la OPIC propone desestimar la reclamación alegando que las actividades de la ITT reveladas por los llamados «papeles de Anderson» suponen un incumplimiento del contrato y afectan a

> los derechos de la OPIC. Es de suponer que la compañía se resista a aceptar tal resolución, niegue haber protagonizado acción deshonesta alguna en Chile y asegure haber rechazado las proposiciones que dirá haber recibido por parte de ciertos funcionarios del gobierno de EE.UU. o, en el peor de los casos, afirme haberlo hecho todo a petición del gobierno estadounidense. La OPIC ha programado una reunión de su consejo de administración para el 19 de marzo con el objetivo de tomar una decisión definitiva sobre el particular.

Tras una serie de apelaciones por parte de la empresa —y tal vez de alguna sutil intervención de la Casa Blanca—, la OPIC acabaría por conceder a la ITT noventa y cuatro millones de dólares a modo de compensación por los bienes expropiados en Chile.

El Subcomité sobre Empresas Multinacionales del senador Church fue objeto de engaños similares. «Es evidente que la Agencia no proporcionó al subcomité de Church toda la información relevante de que disponía», fue la conclusión a la que llegó más tarde la investigación emprendida por la propia CIA respecto de sus archivos internos. (...) «[La Agencia n]o colaboró demasiado». El Departamento de Estado decidió no hacer públicos los cablegramas que daban fe de las comunicaciones establecidas entre Korry y Washington, cuya existencia había negado frente a la OPIC. «No tenemos intención de dar a conocer al Comité el archivo de cablegramas», comunicaba el memorando secreto remitido a Kissinger por Theodore Elliot, secretario de la dirección del Departamento de Estado, el 16 de marzo de 1973.

Tanto la CIA como el Departamento de Estado hicieron cuanto estaba en sus manos por limitar la capacidad del Subcomité senatorial para investigar la colaboración entre la Agencia y la ITT. El Departamento de Estado empleó todo tipo de maniobras para impedir que el Comité llamase a declarar a Viron Vaky —ayudante de Kissinger en el CSN durante 1970, al tanto de todos los detalles de la vía I y las deliberaciones del Comité 40— y amenazó con apelar a la inmunidad del Poder Ejecutivo. La CIA se mostró intransigente con el Subcomité cuando este pretendió hacer que William Broe, antiguo director de la División del Hemisferio Occidental, se

convirtiese en el primer agente secreto que testificara ante una comisión del Congreso, y trató de limitar su testimonio a una serie de respuestas escritas a preguntas restringidas a «la cuestión de las relaciones mantenidas por la CIA con la ITT durante las elecciones chilenas de 1970».

Finalmente, Broe testificó en sesión cerrada el 27 de marzo. Su testimonio, según anunció al día siguiente el senador Church, «permite al Subcomité tener ante sí un registro completo de los hechos». En realidad, el declarante no hizo otra cosa que engañar a la comisión, como también hicieron otros testigos fundamentales de la CIA, el Departamento de Estado y la ITT, en ocasiones hasta extremos descarados. Tras una «detenida revisión» efectuada en septiembre de 1974, Jerome Levinson, integrante del Comité Church, hizo saber en un memorando confidencial al senador Church que, si la declaración de Broe —según la cual no existía política alguna de intervención en los comicios chilenos de 1970 por parte de Estados Unidos— no incurría en perjurio, era tan solo «técnicamente». La revisión de sus archivos internos efectuada por la propia CIA llegó a la conclusión de que había «razones para creer que hubo perjurio [por parte de varios testigos] y que la Agencia lo sabía».

De hecho, la CIA conspiró con los representantes de la ITT bajo supervisión del director de la División del Hemisferio Occidental, Theodore Shackley, para mentir ante el Comité Church. A principios de mayo de 1972, el vicepresidente primero de la compañía, Raymond Brittenham, viajó a Washington para discutir «con la Agencia lo que debía decir la ITT al declarar ante el Senado, así como lo que debía decir la CIA, etc.», según recoge un memorando de la conversación. David Corn afirma en su biografía de Shackley, Blond Ghost, que este ordenó a su subordinado inmediato, Jonathan Hanke, que se reuniera con Hal Hendrix, de la ITT, para seguir tratando sobre la información que debía mantenerse oculta. El 11 de mayo de 1972, Hanke recogió a Hendrix en una esquina a las ocho en punto de la mañana para desayunar «en el Hotel Marriott de Rosalyn [Virginia] tras recorrer diversos lugares», según informó el primero. El resumen que hizo del encuentro afirma que Hendrix lo puso al día de los esfuerzos que estaban realizando los ejecutivos de la ITT para evitar que los documentos comprometedores relativos a la transferencia clandestina de fondos efectuada en Chile pudiesen llegar a manos del Senado. «Si

finalmente se entregan al Comité los tres documentos más delicados», le hizo saber Hanke, «deberán tacharse todos los nombres de las personas y los bancos implicados, y también los mecanismos de financiación».[49]

Todos los representantes de la ITT, entre quienes se encontraban el director general de la compañía, Harold Geneen; el vicepresidente primero, Edward Gerrity, y el director del Cono Sur, Robert Berellez, mintieron ante el Subcomité. Geneen aseguró que la empresa no había «tomado ninguna iniciativa para obstaculizar la elección de Salvador Allende»; Gerrity, que el millón de dólares que la ITT había ofrecido a la CIA para ayudarla a impedir su llegada a la presidencia estaba destinado a «la fabricación de viviendas de bajo coste [y] programas agrícolas». Por su parte, Berellez engañó una y otra vez a Church y sus subordinados al negar que la empresa hubiese mantenido contacto alguno con los agentes de la CIA en Chile.[50]

Charles Meyer, testigo principal del Departamento de Estado, también presentó falso testimonio ante el Subcomité. Pese a no ser particularmente partidario de sus propuestas, Meyer había desempeñado un papel importante en las deliberaciones del Comité 40 estando aún vigente la vía I y en las decisiones relativas a la financiación clandestina de partidos políticos y medios de comunicación a fin de poner en práctica lo dispuesto por el Memorando 93, declaró bajo juramento ante el senador Church:

> El gobierno, señor presidente, se mantuvo fiel a la postura de no intervenir en la realidad política de Chile. En consecuencia, no financiamos a ningún candidato ni partido político antes o después del 8 de septiembre, o más bien el 4 de septiembre (...) Estados Unidos era muy consciente de que el problema de Chile era problema de los chilenos, y eran ellos quienes debían resolverlo.

A las preguntas del senador Charles Percy, respondió:

> Permítame decir sin más, senador Percy, y con orgullo (y no quiero insistir sobre esto), que el gobierno de EE.UU. mantuvo siempre una política de no intervencionismo a pesar de la tensión que podía palparse en la atmósfera en todo momento. Ni

> financiamos a los candidatos ni financiamos a los partidos ni financiamos las maniobras de Alessandri. (...) Tampoco tratamos de precipitar el caos económico ni promovimos golpe de Estado alguno, civil o militar. La política relativa al futuro de Chile estuvo siempre en manos de los chilenos.[51]

Con todo, el intento más notorio de engañar al Senado —y al público estadounidense— lo protagonizó el antiguo director de la CIA Richard Helms, tal vez el funcionario que más información poseía acerca de las operaciones secretas destinadas a desestabilizar Chile.[52] En noviembre de 1972, tras una larga trayectoria profesional en la Agencia, Nixon lo relevó del cargo para nombrarlo embajador en Irán.[53] El 7 de febrero de 1973, durante una comparecencia poco metódica ante el Comité Senatorial de Relaciones Exteriores, el senador de Misuri, Stuart Symington, allegado a la CIA, formuló dos preguntas a Helms: «¿Trataron ustedes, en calidad de representantes de la Agencia Central de Inteligencia, de derrocar al gobierno chileno?»; «¿Hicieron llegar dinero alguno a quienes se oponían a Allende?». Para ambas tuvo el interrogado la misma respuesta: «No, señor». Tal como admitiría más tarde la propia Agencia, «algunas de las declaraciones del testimonio del señor Helms (...) parecen no concordar del todo con los hechos». Según informó Jerome Levinson, miembro prominente del Subcomité sobre Empresas Multinacionales, al senador Fulbright en un documento secreto, Helms «no había sido precisamente franco; además, quedaron por plantear algunas preguntas importantes». Levinson recomendó que se volviera a hacer comparecer a Helms, toda vez que «el mejor modo de conocer lo que sucedió de verdad es por mediación de un interrogatorio cara a cara».[54]

En consecuencia, el 6 de marzo citaron de nuevo a Helms ante el Comité de Relaciones Exteriores al completo, reunido en sesión cerrada, y el antiguo director de la CIA juró «decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad». El senador Fulbright encomendó el interrogatorio a Church, cuyo equipo había preparado docenas de preguntas específicas en extremo. Como quiera que al declarante le iba a resultar imposible eludirlas mediante su expediente habitual de responder con evasivas, según recuerda Levinson, el senador Symington se las arregló para suspender su comparecencia, aunque no antes de que Helms hubiese asegurado no

recordar los hechos y lo hubiese negado todo en general. La sesión dio lugar a momentos como este:

> Senador Church: Señor Helms: ¿Trató la CIA en algún punto de impedir que Salvador Allende Gossens fuese elegido presidente de Chile en 1970?
>
> Helms: No, señor.
>
> Senador Church: Y después de las elecciones, y hasta el momento en que el Congreso de Chile ratificó con su voto a Allende en calidad de nuevo presidente, ¿trató la CIA de influir de algún modo en la votación?
>
> Helms: ¿Qué votación?
>
> Senador Church: La del Congreso [chileno].
>
> Helms: No, señor.

«El señor Helms no tenía por qué habernos mentido», manifestaría más tarde el senador Church. «Nadie lo coaccionó para que cometiera perjurio. Podía haberse limitado a alegar: “No tengo nada que decir al respecto”».

Cuando, a mediados de 1974, volvió a estallar el escándalo en torno a Chile a raíz de una serie de revelaciones relativas al Proyecto FUBELT, el Departamento de Justicia del gobierno de Gerald Ford se vio obligado a emprender una investigación seria en torno a los «posibles cargos de perjurio y obstrucción a la justicia» contra Helms. La administración de Carter heredó tan polémica causa y, con tal de evitar que saliesen a la luz más detalles embarazosos acerca de la intervención secreta de la CIA en Chile, hizo cuanto pudo por reducir al mínimo el proceso. El 31 de octubre de 1977, Helms entró en la historia al convertirse en el primer director de la CIA acusado formalmente de un delito. El Departamento de Justicia lo inculpó de una infracción doble al negarse a contestar preguntas concretas formuladas por el Subcomité del Senado y mentir ante este. Finalmente, alegó haber mentido por ocultar secretos más importantes, y recibió una multa de dos mil dólares.

Helms había quedado en evidencia, pero no recibió castigo o escarmiento algunos proporcionales a sus faltas. «Llevo esta condena como una insignia de honor», declaró ante la prensa, en tanto que sus compañeros de la CIA le organizaron una fiesta para celebrar la victoria e hicieron una colecta para obtener la cantidad estipulada por el juez. El afán que demostró el gobierno de Carter por librar a Helms y a la CIA de la picota hizo que pasaran inadvertidas la importancia de su crimen y su repercusión: el director de la Agencia y otros integrantes del gabinete de Nixon habían logrado mantener encubierta toda una serie de operaciones secretas en un momento muy delicado en lo tocante a los intentos estadounidenses de socavar el gobierno de Allende, y burlaron con éxito a la opinión pública hasta mucho después de perpetrado el golpe de Estado.[55]

La cuenta regresiva para el golpe

Al día siguiente de que los militares se hicieran con el poder por medio de la violencia, se reunieron los miembros del Departamento de Estado con el objetivo de discutir las pautas que debía seguir Henry Kissinger a la hora de responder ante la prensa acerca del «grado de conocimiento previo que teníamos sobre el golpe». Jack Kubisch, vicesecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, señaló que cierto militar chileno —que resultó ser nada menos que el mismísimo Pinochet— había comunicado a la embajada que los conspiradores habían ocultado a quienes los respaldaban en Estados Unidos la fecha exacta en la que actuarían contra Allende. Con todo, Kubisch declaró que no tenía claro «si el Dr. Kissinger debería usar esta información, dado que pondría de relieve lo estrecho de nuestros contactos con los cabecillas del golpe».[56]

Durante los meses que antecedieron al golpe de Estado, la CIA y el Pentágono mantuvieron una amplia relación con los conspiradores chilenos gracias a la actuación de varios agentes e informantes, de tal modo que supieron la fecha exacta en que se harían con el poder los militares con al menos tres días de antelación. Las comunicaciones procedían de algunas operaciones secretas en busca de candidatos del Ejército a las que habían vuelto a recurrir tras las elecciones al Congreso chileno de marzo de 1973.

Los pésimos resultados de los comicios llevaron a muchos integrantes de la CIA a convencerse de que las acciones políticas y propagandísticas no habían dado los frutos deseados y de que la solución definitiva para el problema de la Unidad Popular se hallaba, según sugerían los documentos de la Agencia, en manos del estamento militar de Chile.

Hasta los primeros dos meses de 1973, las operaciones políticas y la propaganda generada por El Mercurio y otros medios financiados por la CIA se centraron en una campaña activa de oposición destinada a ganar de forma incontestable las elecciones al Congreso del 4 de marzo, a las que se habían presentado para la reelección todos los representantes chilenos y la mitad de los senadores. El objetivo de la CIA consistía, cuando más, en lograr una mayoría de dos tercios para la oposición para poder así someter a Allende a un proceso de destitución y, cuando menos, en impedir que la Unidad Popular obtuviese una clara mayoría de los sufragios. De los 3.600.000 votos escrutados, el 56 por ciento correspondió a la oposición, en tanto que los candidatos de la Unidad Popular se hicieron con el 43 por ciento, lo que les supuso la obtención de dos escaños en el Senado y seis en el Congreso. «Las acciones emprendidas por la CIA con respecto a las elecciones de 1973 han contribuido a hacer más lento el avance de Chile hacia el socialismo», declaraba un documento titulado: «Informe acerca de las elecciones chilenas» escrito en la oficina central de Langley.

La realidad, sin embargo, era bien diferente, tal como entendieron tanto la oficina central de la CIA como su puesto de operaciones en Santiago. De hecho, en la primera prueba nacional a la que se vio enfrentada la popularidad del partido de Allende desde su llegada al gobierno, su administración no había hecho sino incrementar su poder electoral, pese a la actividad política de la CIA, la ambiciosa campaña propagandística secreta emprendida en su contra y el plan de desestabilización socioeconómica dirigido por Estados Unidos. «El programa de la UP sigue resultando atractivo a buena parte del electorado chileno», lamentaba en un cablegrama el puesto santiaguino. La Agencia, por lo tanto, se vio obligada a reconsiderar toda su estrategia clandestina en Chile. «Las opciones futuras», cablegrafió la oficina central el 6 de marzo, «se están revisando a la luz de unos resultados electorales decepcionantes que permitirán a Allende y a la UP aplicar sus programas con mayor vigor y entusiasmo».

El centro de operaciones en Santiago, a la sazón al mando de un nuevo director, Ray Warren, adoptó una posición firme acerca de cuáles de estas «opciones futuras» serían necesarias. En un examen retrospectivo de las elecciones al Congreso llevado a cabo el 14 de marzo, el puesto santiaguino expuso una serie de planes concebidos para centrarse aún más en el programa militar.

> Pensamos que, en un futuro próximo, la base en Santiago debería hacer hincapié en las actividades [clandestinas] destinadas a ampliar los contactos, la información y la capacidad de que disponemos con el fin de suscitar una de las siguientes situaciones:
>
> a) Un consenso entre los dirigentes de las Fuerzas Armadas (tanto si permanecen en el Gob. como si no) acerca de la necesidad de sublevarse contra el régimen. La base en Santiago opina que deberíamos tratar de inducir al mayor número posible de militares, si no a todos, a hacerse con el poder y desbancar al Gob. de Allende. (...)
>
> b) Una relación segura y estrecha del puesto de operaciones en Santiago con un grupo serio de militares golpistas. En caso de que nuestra nueva evaluación de los grupos existentes en las Fuerzas Armadas indique que quienes albergan planes de una conspiración tienen intenciones serias y la capacidad necesaria para llevarla a cabo, el puesto desearía establecer un canal único seguro con sus integrantes que permitiese el diálogo, y, una vez reunidos los datos básicos sobre su capacidad colectiva, buscar la autorización de la oficina central para asumir una función [tachado] más amplia.[57]

Al mismo tiempo, la base santiaguina de la CIA reafirmaba también la necesidad de volver a concentrarse en la creación de un clima propicio al golpe de Estado, eterno objetivo del gobierno estadounidense.

> Mientras el puesto en Santiago espera conferir a nuestro programa [militar] un ímpetu adicional (...) [o]tros centros de poder político (partidos, empresas, medios de comunicación...)

> desempeñarán un papel esencial a la hora de crear la atmósfera política que nos permitirá alcanzar los objetivos a o b antes expuestos. Teniendo en cuenta los resultados electorales, el puesto opina que es imprescindible reavivar el clima de malestar político y dar pie a una crisis controlada para lograr que los militares consideren seriamente la posibilidad de una intervención.

La posición en extremo combativa y entusiasta del centro de operaciones en Santiago, que influyó sin duda en su actuación en Chile, recibió el apoyo del sector duro de la División del Hemisferio Occidental, partidario de un enfoque más decidido y violento que, obviamente, no tenía entre sus objetivos el de «salvar la democracia» chilena. El 17 de abril, cierto grupo de agentes de la CIA envió un memorando a Shackley, director de la División del Hemisferio Occidental, en torno a los «objetivos de la política respecto de Chile», un desafío escueto y sin ambages dirigido desde el interior a la estrategia favorable a las operaciones políticas en el que se solicitaba acabar con el respaldo secreto a los principales partidos de oposición. Tal apoyo, en su opinión, hacía que estos creyesen erróneamente que podrían sobrevivir hasta los comicios de 1976. Además, si la CIA ayudaba a la oposición democristiana a ganar en esta fecha, la suya no sería más que una victoria «pírrica», ya que el PDC adoptaría «políticas colectivistas» de izquierda.

En lugar de eso, la Agencia debía tratar directamente «de desarrollar las condiciones que pudiesen desembocar en una acción militar». Esto implicaba brindar «respaldo a gran escala» a los grupos terroristas chilenos, como Patria y Libertad o los «elementos militantes del Partido Nacional», durante un período determinado (entre seis y nueve meses), «durante el cual se haría cualquier esfuerzo necesario para promover el caos económico, agravar las tensiones políticas y dar pie a un clima de desesperación en el que tanto el PDC como el público en general acaben por desear una intervención militar. Lo ideal sería que con esto se indujese a los militares a tomar el gobierno por entero».[58]

No obstante, la postura que compartían la base santiaguina y el sector duro de Langley no coincidía con la del Departamento de Estado ni con la de los

altos cargos de la CIA que temían las consecuencias de una acción militar precipitada y creían en la necesidad de actuar con prudencia, dada la investigación que estaba efectuando el Comité del Congreso en torno a la ITT y las operaciones encubiertas que se habían puesto en marcha en Chile. Existían desacuerdos en algunas cuestiones fundamentales y estratégicas:

• ¿Podía contarse con que los militares chilenos se rebelasen contra Allende?

• ¿Era prudente que la CIA alentara manifestaciones violentas a través de la financiación secreta de grupos militantes sin saber con seguridad que los militares no actuarían para reprimir a los manifestantes?

• Habida cuenta de la investigación que había emprendido el Congreso con respecto a la actuación de la CIA en Chile, ¿eran mayores los riesgos de ser descubiertos que las posibles ganancias que reportaría el trabajar directamente con los militantes del sector privado y los militares chilenos a fin de patrocinar un golpe de Estado?[59]

Estos puntos fueron objeto constante de discusión, por cuanto, dentro de la Agencia, el proceso de elaboración de las propuestas y el presupuesto destinado a las operaciones encubiertas para el año fiscal 1974 se convirtieron en motivo de un importante debate interno —mantenido en secreto durante veintisiete años— acerca de los matices estratégicos de la intervención estadounidense en Chile.

El Departamento de Estado se opuso, guiado por el nuevo vicesecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Jack Kubisch, al deseo expresado por el puesto de operaciones en Santiago de fomentar un golpe de Estado mediante el respaldo directo a los militares chilenos o la colaboración con grupos extremistas del sector privado. Al igual que el embajador Nathaniel Davis, quien sustituyó a Edward Korry a mediados de 1971, Kubisch prefería centrar las operaciones secretas en la victoria de la oposición en las elecciones de 1976. Por otra parte, algunos funcionarios de la oficina central de la CIA, como el antiguo director del destacamento especial para Chile, David Atlee Phillips —quien en junio volvería a actuar en Chile en

calidad de director de la División del Hemisferio Occidental—, tenían bien presente el estrepitoso fracaso de la operación Schneider y no pudieron menos de mostrar su escepticismo ante la idea de que los militares chilenos pudiesen ejecutar un golpe de Estado. Los cablegramas enviados a Santiago desde la oficina central dan fe de sus dudas acerca de que los militares chilenos fuesen a mostrarse más dispuestos a actuar contra el gobierno que contra los manifestantes y los huelguistas a quienes pretendía prestar su respaldo el puesto de operaciones de la capital chilena. Un cablegrama enviado desde Langley el 6 de marzo advertía de la necesidad de evitar fomentar «protestas a gran escala, como, por ejemplo, una huelga (...), así como cualquier otra actividad capaz de provocar una reacción militar contra la oposición». En una propuesta presupuestaria del 31 de marzo de 1973, «Opciones de intervención secreta en Chile para el año fiscal de 1974», la oficina central argumentaba:

> Si bien hemos de dejar abiertas todas las opciones, incluido un posible golpe de Estado en el futuro, debemos reconocer que es poco probable que se materialicen los ingredientes necesarios para que este se dé, con independencia de la cantidad de dinero invertida. En consecuencia, deberíamos evitar animar al sector privado a emprender acciones que puedan dar lugar bien a un golpe de Estado fallido, bien a una sangrienta guerra civil. Sería recomendable que dejásemos claro que no respaldaremos ningún intento de golpe de Estado a no ser que se haga evidente que contará con el apoyo de la mayor parte de las Fuerzas Armadas y de los partidos democráticos de oposición chilenos, incluido el PDC.

El 1 de mayo llegó de Langley un cablegrama dirigido a Warren, director de la base en Santiago, con el siguiente texto: «Deseamos posponer cualquier consideración relativa a todo programa de acción diseñado para estimular una intervención militar hasta poseer indicios más definitivos de que los miembros del Ejército están dispuestos a actuar y la oposición, incluido el PDC, lista para secundar un golpe de Estado». En su respuesta, el director del puesto de operaciones solicitó a la oficina central que aplazase su petición relativa a la financiación del año fiscal de 1974 hasta que pudiese volver a redactarse la propuesta de modo que reflejara la

realidad chilena de aquellos momentos. «Las partes más militantes de la oposición», incluidas algunas organizaciones respaldadas por la CIA, como El Mercurio o el Partido Nacional, se estaban movilizando, según la información ofrecida por la base santiaguina, para promover un golpe de Estado.

> Los planes elaborados por las fuerzas de oposición no se centran tanto en 1976 como en un futuro inmediato. Si queremos hacer que nuestra influencia sea lo más marcada posible y ofrecer a los opositores la ayuda que necesitan, deberíamos seguir esta línea de actuación más que tratar de oponernos a ella y contrarrestarla intentando hacer que la oposición se centre en el objetivo distante y tenue de las elecciones de 1976. En resumen, creemos que la orientación y el enfoque de nuestros esfuerzos operativos deberían basarse en la intervención militar.

El día 10 de abril, la División del Hemisferio Occidental se procuró la aprobación del director de la CIA, James Schlesinger, para realizar «esfuerzos acelerados contra el objetivo militar». Según un memorando remitido a Schlesinger con fecha del 7 de mayo por Theodore Shackley, director de la división, estas operaciones secretas estaban «concebidas para vigilar con mayor precisión cualquier conspiración encaminada a dar un golpe de Estado e influir en los comandantes del Ejército de mayor importancia con el fin de que desempeñen un papel decisivo al lado de las fuerzas golpistas cuando los militares chilenos decidan por sí mismos actuar en contra de Allende» (véase el documento 6). La oficina central autorizó al puesto santiaguino para «avanzar hacia el objetivo militar con la intención de hallar fuentes adicionales» y prometió buscar financiación para un programa militar ampliado cuando dispusiesen de «indicios mucho más sólidos de que el Ejército está preparado para actuar y tiene posibilidades razonables de éxito».[60]

El Alto Mando chileno demostró que tal situación no se daba aún el 29 de junio, cuando varias unidades independientes del Ejército de Chile se desplegaron con la intención de tomar el palacio presidencial de La Moneda. En su «Informe de situación Nº 1» dirigido al presidente Nixon, Kissinger comunicó que el Ejército chileno había «efectuado una intentona

golpista contra el gobierno de Salvadore [sic] Allende».[61] Ese mismo día, el secretario de Estado envió a Nixon otro memorando, «Fin del intento de rebelión en Chile», en el que le hacía saber que «la intentona no ha sido más que un conato aislado y falto de coordinación» y que los mandos superioresde las tres ramas de las Fuerzas Armadas «permanecieron leales al gobierno».[62] El golpe frustrado otorgó la razón a los estadistas que se oponían a que la CIA brindase su apoyo a los militares chilenos de un modo más directo y activo.

Este debate interno provocó un retraso en la aprobación del presupuesto destinado en 1974 a las operaciones encubiertas de la CIA mientras la Agencia y el Departamento de Estado llegaron a un acuerdo sobre el empleo de las autorizaciones de financiación en lo tocante a Chile. Finalmente, el 20 de agosto, el Comité 40 dio su visto bueno, por vía telefónica, a la asignación de un millón de dólares destinado a la financiación de partidos de oposición y organizaciones privadas, si bien designó un «fondo de contingencia» para las operaciones de estas últimas al que solo podría recurrirse previo consentimiento del embajador Davis. Apenas habían pasado tres días cuando el puesto en Santiago comenzó a instar su aprobación para emplear ese dinero en la organización tanto de huelgas y manifestaciones como de una toma del poder desde el interior, lo que implicaba aguijonear a los militares para que ocupasen puestos de relieve en el gabinete de Allende, desde donde ejercer el poder real del Estado y reducir al presidente a una mera figura decorativa. «Los acontecimientos se están sucediendo a gran velocidad y es muy probable que la postura que adopten los militares en estos momentos resulte decisiva», indicaba la base de operaciones santiaguina en un cablegrama el 24 de agosto, para añadir después refiriéndose a Allende: «Ahora mismo, cualquier suceso o presión importante puede determinar su futuro».

Al día siguiente, en Washington, el director de la CIA, William Colby, hizo llegar a Kissinger un memorando en el que exponía, palabra por palabra, los argumentos de la base en Santiago y solicitaba autorización para avanzar con los fondos. El documento, «Propuesta de respaldo financiero encubierto al sector privado de Chile», señalaba con un estilo dirigido a calmar a los miembros del Departamento de Estado: «El puesto en Santiago no tiene intención de colaborar de forma directa con las Fuerzas Armadas

para propiciar un golpe de Estado, ni su respaldo a las fuerzas de oposición en general persigue este resultado». Sin embargo, Colby se apresuraba a añadir la siguiente advertencia: «Siendo realistas, eso sí, hemos de reconocer que una mayor presión sobre el gobierno de Allende por parte de la oposición podría desembocar en un golpe de Estado».[63]

A esas alturas, la CIA disponía de un buen número de informes prometedores acerca de conspiraciones golpistas. A mediados de agosto, David Atlee Phillips había enviado a un agente veterano a Santiago con el cometido de evaluar la situación. Según informó este en un cablegrama, «durante las últimas semanas hemos vuelto a recibir un número mayor de informes que hablan de confabulaciones y hemos visto toda una lista de posibles fechas para un golpe de Estado». Uno de estos documentos señalaba que los conspiradores habían elegido el 7 de julio para llevar a cabo otra intentona, fecha que, no obstante, se había empezado a posponer dadas la oposición del comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, y la dificultad que implicaba el reunir a «los regimientos más importantes de la zona de Santiago». De acuerdo a la fuente de la CIA:

> El principal problema al que se enfrentan los militares conspiradores es superar el obstáculo del mando vertical. Un modo de hacerlo consistiría en que los generales partidarios de un golpe de Estado se reunieran con el general Prats, lo advirtieran de que ya no goza de la confianza del Alto Mando del Ejército y, en consecuencia, lo relevaran de su cargo. El hombre elegido para reemplazar a Prats en el momento del golpe es el general Manuel Torres, comandante de la quinta división y tercer general del Ejército por orden de graduación. Los conspiradores no consideran al general Augusto Pinochet, el segundo oficial de más alto grado del Ejército, un sustituto idóneo para Prats en las condiciones actuales.

A finales de julio, la CIA informó de la existencia de un plan golpista «a punto de culminar». Los conspiradores seguían tratando de resolver el problema que suponía Prats. Según señaló la base santiaguina, parecía no haber otro modo de librarse de él diferente del secuestro o el asesinato. Sin embargo, «el recuerdo de lo sucedido al antiguo comandante en jefe del

Ejército, René Schneider, indeleble en sus mentes, va a hacer muy difícil que los conspiradores se decidan a llevar a cabo una acción semejante».

La Agencia informó también que los militares estaban tratando de coordinar su toma del poder con la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, que estaba a punto de emprender una huelga generalizada de camioneros. Aquel violento paro inmovilizó el país durante el mes de agosto y se convirtió en un factor fundamental en la creación del clima propicio para el golpe que con tanto ahínco había perseguido la CIA en Chile. Entre otros elementos importantes se hallaba la decisión que había tomado la cúpula democristiana de abandonar las negociaciones con el gobierno de la Unidad Popular y centrar sus esfuerzos, por el contrario, en la consecución de un golpe de Estado. En un informe de la CIA con fecha de primeros de julio, el puesto de operaciones en Santiago señaló que se había producido «una aceptación cada vez mayor por parte de los dirigentes del PDC de que la intervención de los militares puede ser el único modo de impedir que los marxistas se hagan con el poder absoluto en Chile. Si bien la cúpula del PDC no admite que sus decisiones y estrategias políticas están encaminadas a crear las circunstancias necesarias para dar pie a la actuación del Ejército, los confidentes [secretos] del puesto santiaguino han informado que, en el ámbito privado, este es un hecho político aceptado en general».[64] La postura de los democristianos llevó al Partido Comunista chileno, tradicionalmente moderado, a concluir que había dejado de ser viable el consenso político con la oposición y a adoptar una actitud más militante que dio lugar a profundas divisiones con respecto a la coalición de Allende. También la negativa del sector duro del Ejército a aceptar algunas de las carteras ofrecidas por Allende contribuyó a acelerar las tensiones políticas. «Cada vez parece estar más extendida la sensación de que debe hacerse algo», observaba cierto documento de la oficina central de la CIA relativo a las «consecuencias de un golpe de Estado militar en Chile».

La dimisión, a finales de agosto, del comandante en jefe Carlos Prats, acaecida tras una intensa campaña de difamación pública dirigida por El Mercurio y la derecha chilena, eliminó el único obstáculo que impedía a esas alturas la realización de un golpe de Estado. Al igual que su predecesor, el general Schneider, Prats había representado al sector constitucional de los militares chilenos y había obstruido a los oficiales más

jóvenes que deseaban intervenir en el proceso político de Chile. En un informe de espionaje del 25 de agosto que llevaba el sello de alto secreto, la Agencia de Inteligencia de la Defensa observaba que la renuncia de Prats había «alejado el más importante de los factores que podían disuadir de efectuar un golpe de Estado». El 31 de agosto, las fuentes de que disponía Estados Unidos en el Ejército chileno informaron que este estaba «unido en torno a la idea de un golpe, y algunos eminentes comandantes de regimientos de Santiago han prometido prestar su apoyo. Se dice que han comenzado a ponerse en marcha iniciativas para hacer efectiva la coordinación entre las tres ramas armadas, aunque aún no se ha fijado una fecha para el atentado golpista».

Por entonces, los militares chilenos habían establecido un «equipo especial de coordinación» formado por tres representantes de cada una de las ramas y por civiles de derecha elegidos con gran cuidado. En una serie de reuniones secretas celebradas durante los días 1 y 2 de septiembre, el equipo presentó un plan completo para derrocar al gobierno de Allende a los mandos superiores del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de Chile. La recién creada Junta Militar aprobó el plan y determinó que la fecha del golpe sería el 10 de septiembre. Según un examen de la confabulación golpista obtenido por la CIA, el general que reemplazó a Carlos Prats en calidad de comandante en jefe, Augusto Pinochet, era el «elegido como cabecilla del grupo» y debía decidir a qué hora comenzaría el golpe.[65]

El 8 de septiembre, tanto la CIA como la DIA pusieron a Washington sobre aviso de la inminencia del golpe de Estado y confirmaron la fecha del 10 de septiembre. Un informe de la DIA clasificado como alto secreto comunicó que «las tres ramas armadas han acordado, al parecer, levantarse contra el gobierno el 10 de septiembre, y todo apunta a que la iniciativa va a contar con la ayuda de grupos de derecha y de terroristas civiles».[66] La CIA advirtió que la Armada chilena se pondría «en marcha para derrocar al gobierno» a las 8:30 del día citado y que Pinochet «ha dicho que el Ejército no se opondrá a la acción de la Armada».

El 9 de septiembre, la base de operaciones en Santiago actualizó la cuenta regresiva. Uno de sus agentes secretos, Jack Devine, recibió la llamada de un colaborador que huía del país y que le confió: «Va a efectuarse el día

11». Su informe, remitido a la oficina central de Langley el día 10, manifestaba:

> El atentado golpista tendrá lugar el 11 de septiembre. En esta acción están implicados los ejércitos de Tierra, Mar y Aire y Carabineros. El día del golpe, a las 7:00, se leerá, en Radio Agricultura, una declaración. Carabineros tiene la responsabilidad de arrestar al presidente Salvador Allende.

Según Donald Winters, uno de los más altos agentes de la CIA que operaban en Chile en esa época, «se había acordado que [los militares chilenos] lo llevarían a cabo cuando estuviesen preparados y nos comunicarían en el último momento lo que iba a suceder».[67] La víspera del golpe, sin embargo, al menos un sector de los conspiradores comenzó a ponerse nervioso pensando lo que ocurriría si se prolongara la lucha y la toma del poder no se daba como habían previsto. La noche del 10 de septiembre, mientras los golpistas tomaban con discreción posiciones para hacerse con el poder de forma violenta al día siguiente, un «oficial de relieve del grupo de militares chilenos responsables de planificar el derrocamiento del presidente Allende», como lo describía la oficina central de la Agencia, se puso en contacto con un funcionario de Estados Unidos (aún no está claro si se trataba de un miembro de la CIA, el Departamento de Defensa o la embajada) y «le preguntó si el gobierno estadounidense acudiría en ayuda de los militares chilenos si la situación se complicaba». Le aseguraron que «se transmitiría de inmediato a Washington» su consulta, según un memorando altamente secreto enviado por David Atlee Phillips a Henry Kissinger el 11 de septiembre, cuando el golpe ya había empezado.[68]

En el momento del golpe, tanto el Departamento de Estado como la CIA estaban elaborando planes de contingencia relativos al respaldo que prestaría Estados Unidos en caso de que la acción militar empezara a dar señales de fracaso. El 7 de septiembre, el vicesecretario Kubisch comunicó a los integrantes de ambos organismos que los altos funcionarios habían determinado lo siguiente tras discutir la cuestión chilena: «Si se da una intentona golpista que, desde nuestro punto de vista, lleve trazas de acabar con éxito y de un modo satisfactorio, nos mantendremos al margen»; en

cambio, si «parece favorable, pero corre peligro de fracasar, tal vez deseemos tener competencia para intervenir». Kubisch pedía a la Agencia que se encargase de que se prestara «atención a este problema».[69]

La cuestión, sin embargo, resultó ser irrelevante. «El golpe de Estado de Chile ha sido poco menos que perfecto», anunció en un informe de situación enviado a Washington el teniente coronel Patrick Ryan, al frente del grupo militar estadounidense apostado en Valparaíso. A las 8:00 del 11 de septiembre, la Armada chilena había tomado esta ciudad portuaria antes de anunciar que se estaba derrocando al gobierno de la Unidad Popular. En Santiago, el cuerpo de Carabineros debía detener al presidente Allende en su residencia, pero este logró llegar hasta el Palacio de La Moneda y, desde allí, emitir mensajes radiofónicos en los que instaba a obreros y estudiantes a defender al gobierno frente al ataque de las Fuerzas Armadas. Mientras los carros de combate rodeaban el edificio y disparaban contra sus muros, los reactores Hawker Hunter lanzaron sobre el mediodía un ataque con cohetes de precisión sobre los despachos de Allende que acabó con la vida de muchos de sus guardias. Minutos después se produjeron otras acometidas aéreas con cañones, al tiempo que las fuerzas terrestres trataban de tomar el patio interior del palacio.

Durante la lucha, los militares no cesaron de conminar al presidente Allende a rendirse ni de ofrecer de manera mecánica una salida segura del país por aire para él y su familia. En una grabación magnetofónica hoy famosa que recoge las instrucciones del general Pinochet transmitidas por radio a sus subordinados el 11 de septiembre, puede oírsele asegurar: «Pero el avión se cae, viejo, cuando vaya volando», comentario que suscita la risa de su interlocutor. Como si vaticinara el carácter feroz de su régimen, había señalado la necesidad de «matar la perra y se acaba la leva». Alrededor de las 14:00 horas encontraron en su despacho interior a Salvador Allende, sin vida a causa de un arma de fuego.[70] A las 14:30, la emisora radiofónica de las Fuerzas Armadas anuncia que La Moneda «se ha rendido» y que todo el país se halla bajo control militar.

La reacción internacional fue inmediata, generalizada y abrumadoramente condenatoria. Numerosos gobiernos denunciaron el golpe militar, y en toda América Latina tuvieron lugar protestas multitudinarias. Como cabía

esperar, muchos dedos acusadores señalaron al gobierno de Estados Unidos. En la comparecencia que hizo en calidad de secretario de Estado tan solo un día después del golpe, Kissinger se vio acribillado a preguntas relativas a la implicación de la CIA. La Agencia, según su respuesta, «estuvo envuelta, en grado mínimo, en 1970, y desde entonces nos hemos mantenido alejados por completo de cualquier plan golpista. Respecto a Chile, no hemos intentado otra cosa que fortalecer a los partidos democráticos y proporcionarles cierta solidez para ganar las elecciones de 1976».

«Sostenimiento de la democracia chilena», resumía la versión oficial, fraguada tras lo ocurrido a fin de encubrir la intervención estadounidense en contra del gobierno de Allende. El 13 de septiembre, Colby, director de la CIA, envió a Kissinger un informe general de dos páginas en torno al «programa de acción encubierta de la CIA en Chile desde 1970», concebido para proporcionar algunas directrices en torno a las cuestiones relativas al papel desempeñado por la Agencia.[71] «La política adoptada por Estados Unidos ha consistido en mantener la mayor presión encubierta posible para impedir la consolidación del gobierno de Allende», exponía sin ambages. Tras repasar de forma selectiva las operaciones secretas llevadas a cabo en los ámbitos de la política, los medios de comunicación y el sector privado, Colby concluía: «Si bien la intervención de la CIA ha sido fundamental para permitir la subsistencia de los partidos y medios de comunicación de la oposición, así como el mantenimiento de su resistencia activa al régimen de Allende, lo cierto es que la Agencia no ha participado de forma directa en los hechos que han desembocado en el establecimiento de un nuevo gobierno militar».

Si entendemos en un sentido estricto la definición de participar «de forma directa» —colaborar en la planificación y proporcionar equipo, ayuda estratégica y una serie de garantías—, la CIA no parece haber estado envuelta en las violentas acciones acometidas por los militares chilenos el 11 de septiembre de 1973 (véase el documento 7). La Casa Blanca persiguió, respaldó y aceptó el golpe de Estado durante la presidencia de Nixon, pero los riesgos políticos que implicaba una colaboración directa tenían más peso que cualquier necesidad real de éxito. Los militares chilenos, sin embargo, no albergaban duda alguna acerca de la posición de

Estados Unidos. «No estuvimos implicados en la planificación», recordó el agente de la CIA Donald Winters, «pero los contactos de que disponíamos entre los militares de Chile les hicieron saber que no nos sentíamos especialmente atraídos por el gobierno [de Allende]». Además, la CIA y otros sectores del gobierno estadounidense se hallaban mezclados de forma directa en operaciones diseñadas para crear la atmósfera capaz de provocar un golpe de Estado que echara abajo la democracia chilena. El memorando de Colby parecía omitir el proyecto de la Agencia que tenía por objetivo engañar a los militares, las actividades clandestinas de propaganda negra que pretendían sembrar la discordia en el seno de la coalición de la Unidad Popular, el respaldo brindado a grupos extremistas como Patria y Libertad y los incendiarios logros del proyecto El Mercurio, al que los documentos de la CIA reconocen «una función significativa en la creación del escenario» en que se produciría el golpe, por no hablar del marcado efecto desestabilizador del bloqueo económico invisible. El argumento de que todas estas operaciones estaban orientadas a mantener las instituciones democráticas de Chile no pasa de ser un ardid de las relaciones públicas que ha quedado al descubierto por el peso de la documentación histórica. De hecho, el colosal apoyo prestado por la Agencia a los supuestos adalides de la democracia chilena (los democristianos, el Partido Nacional y El Mercurio) facilitó su transformación en protagonistas —y principales partidarios— de la violenta interrupción de los procesos democráticos de Chile por parte de los militares.

«Recordará usted la discusión sostenida en torno a la vía II a finales de 1970, que no se ha incluido en este resumen», escribió Colby a Kissinger en la hoja en la que figuraban los nombres de quienes habrían de leer su memorando del 13 de septiembre. El que la CIA hubiese tratado de instigar de forma directa un golpe de Estado tres años antes influyó de un modo fundamental en el hecho de que los generales chilenos diesen por sentado que podían contar con el apoyo de Washington. «La vía II, en realidad, nunca se dio por concluida», testificó en 1975 Thomas Karamessines, el alto funcionario de la Agencia que se hallaba a cargo de las operaciones secretas en contra de Allende. «Lo único que nos dijeron fue que continuásemos con nuestra labor, permaneciéramos alerta e hiciésemos cuanto estuviese en nuestras manos para contribuir a los objetivos y propósitos de la vía II. Estoy persuadido de que las semillas que se

plantaron en aquel empeño de 1970 tuvieron su repercusión en 1973. No albergo duda alguna al respecto».[72]

«La política que hemos seguido en relación con Allende ha ido a pedir de boca», comentó a Kissinger el vicesecretario Kubisch el día que siguió al del golpe de Estado. De hecho, en septiembre de 1973, los hombres de Nixon habían alcanzado el objetivo planteado de un modo manifiesto por el presidente en noviembre de 1970: crear las condiciones capaces de propiciar la caída o el derrocamiento de Allende. En la primera reunión del Grupo de Acciones Especiales de Washington, celebrada la mañana del 12 de septiembre a fin de tratar el modo de apoyar el régimen militar chileno, Kissinger comentó burlón:

—Al presidente le preocupa que queramos mandar a alguien al funeral de Allende. Le he dicho que dudo que ninguno de nosotros vaya a plantear esa opción.

—No —respondió uno de sus colaboradores—, a no ser que quiera ir usted.

El 16 de septiembre, el presidente Nixon llamó a Kissinger para que lo pusiera al día. Su conversación quedó registrada gracias al sistema oculto de grabación del secretario de Estado. «El asunto chileno se está consolidando», aseguró este último, «y, por supuesto, los periódicos se están quejando porque un gobierno comunista ha sido derrocado». Los dos lamentaron que la prensa no les prodigara alabanzas por la destitución de Allende (véase el documento 8):

—En tiempos de Eisenhower —aseveró Kissinger, refiriéndose al derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala gracias a la acción encubierta de la CIA—, nos habrían tratado de héroes.

Los dos abordaron entonces sin tapujos la función de Estados Unidos.

—No hace falta que diga que, oficialmente, nosotros no hemos tenido nada que ver —señaló el presidente.

—Nosotros no hemos hecho nada —respondió Kissinger, con lo que se refería a la participación directa en el golpe propiamente dicho—. Quiero

decir que los hemos ayudado. [*Palabra omitida*] creado las condiciones necesarias en la medida de lo posible.

—Eso es verdad —convino el presidente.[73]

Documento 1. Casa Blanca, secreto, Memorando para el presidente: «Reunión del CSN, 6 de noviembre – Chile», 5 de noviembre de 1970. (Páginas 1, 2 y 3).

MEMORANDUM

THE WHITE HOUSE

WASHINGTON

SECRET/SENSITIVE November 5, 1970

MEMORANDUM FOR THE PRESIDENT

FROM: Henry A. Kissinger

SUBJECT: NSC Meeting, November 6 -- Chile

This meeting will consider the question of what strategy we should adopt to deal with an Allende Government in Chile.

A. DIMENSIONS OF THE PROBLEM

The election of Allende as President of Chile poses for us one of the most serious challenges ever faced in this hemisphere. Your decision as to what to do about it may be the most historic and difficult foreign affairs decision you will have to make this year, for what happens in Chile over the next six to twelve months will have ramifications that will go far beyond just US-Chilean relations. They will have an effect on what happens in the rest of Latin America and the developing world; on what our future position will be in the hemisphere; and on the larger world picture, including our relations with the USSR. They will even affect our own conception of what our role in the world is.

Allende is a tough, dedicated Marxist. He comes to power with a profound anti-US bias. The Communist and Socialist parties form the core of the political coalition that is his power base. Everyone agrees that Allende will purposefully seek:

-- to establish a socialist, Marxist state in Chile;

-- to eliminate US influence from Chile and the hemisphere;

-- to establish close relations and linkages with the USSR, Cuba and other Socialist countries.

The consolidation of Allende in power in Chile, therefore, would pose some very serious threats to our interests and position in the hemisphere, and would affect developments and our relations to them elsewhere in the world:

-- US investments (totaling some one billion dollars) may be lost, at least in part; Chile may default on debts (about $1.5 billion) owed the US Government and private US banks.

DECLASSIFIED/RELEASED ON 4/16/02 by NARA on the recommendation of the NSC under provisions of E.O. 12958

SECRET/SENSITIVE

-- Chile would probably become a leader of opposition to us in the inter-American system, a source of disruption in the hemisphere, and a focal point of support for subversion in the rest of Latin America.

-- It would become part of the Soviet/Socialist world, not only philosophically but in terms of power dynamics; and it might constitute a support base and entry point for expansion of Soviet and Cuban presence and activity in the region.

-- The example of a successful elected Marxist government in Chile would surely have an impact on--and even precedent value for--other parts of the world, especially in Italy; the imitative spread of similar phenomena elsewhere would in turn significantly affect the world balance and our own position in it.

While events in Chile pose these potentially very adverse consequences for us, they are taking a form which makes them extremely difficult for us to deal with or offset, and which in fact poses some very painful dilemmas for us:

a. Allende was elected legally, the first Marxist government ever to come to power by free elections. He has legitimacy in the eyes of Chileans and most of the world; there is nothing we can do to deny him that legitimacy or claim he does not have it.

b. We are strongly on record in support of self-determination and respect for free election; you are firmly on record for non-intervention in the internal affairs of this hemisphere and of accepting nations "as they are." It would therefore be very costly for us to act in ways that appear to violate those principles, and Latin Americans and others in the world will view our policy as a test of the credibility of our rhetoric.

On the other hand, our failure to react to this situation risks being perceived in Latin America and in Europe as indifference or impotence in the face of clearly adverse developments in a region long considered our sphere of influence.

c. Allende's government is likely to move along lines that will make it very difficult to marshal international or hemisphere censure of him--he is most likely to appear as an "independent" socialist country rather than a Soviet satellite or "Communist government."

Yet a Titoist government in Latin America would be far more dangerous to us than it is in Europe, precisely because it can move against our policies and interests more easily and ambiguously and because its "model" effect can be insidious.

SECRET/SENSITIVE - 3 -

A. Dimensions of the Problem (continued)

Allende starts with some significant weaknesses in his position:

-- There are tensions in his supporting coalition.

-- There is strong if diffuse resistance in Chilean society to moving to a Marxist or totalitarian state.

-- There is suspicion of Allende in the military.

-- There are serious economic problems and constraints.

To meet this situation, Allende's immediate "game plan" is clearly to avoid pressure and coalescing of opposition prematurely, and to keep his opponents within Chile fragmented so that he can neutralize them one by one as he is able. To this end, he will seek to:

-- be internationally respectable;

-- move cautiously and pragmatically;

-- avoid immediate confrontations with us; and

-- move slowly in formalizing relations with Cuba and other Socialist countries.

There is disagreement among the agencies as to precisely how successful Allende will be in overcoming his problems and weaknesses, or how inevitable it really is that he will follow the course described or that the threats noted will materialize.

But the weight of the assessments is that Allende and the forces that have come to power with him do have the skill, the means and the capacity to maintain and consolidate themselves in power, provided they can play things their way. Logic would certainly argue that he will have the motivation to pursue purposefully aims he has after all held for some 25 years. Since he has an admittedly profound anti-US and anti-capitalist bias, his policies are bound to constitute serious problems for us if he has any degree of ability to implement them.

SECRET/SENSITIVE

Documento 2. Consejo para la Seguridad Nacional, secreto, de Henry Kissinger para el presidente Nixon: «Programa de acción encubierta – Chile», 25 de noviembre de 1970.

(un-log)

UNCLASSIFIED

SECRET/SENSITIVE/EYES ONLY

INFORMATION

MEMORANDUM FOR THE PRESIDENT

FROM: Henry A. Kissinger

SUBJECT: Covert Action Program -- CHILE

In addition to the actions outlined in my memorandum of November 25 (subject: Status Report on Chile), the 40 Committee has been reviewing a covert action program keyed to the overall policy towards Chile which you established at the NSC Meeting on November 5. The program has five principal elements:

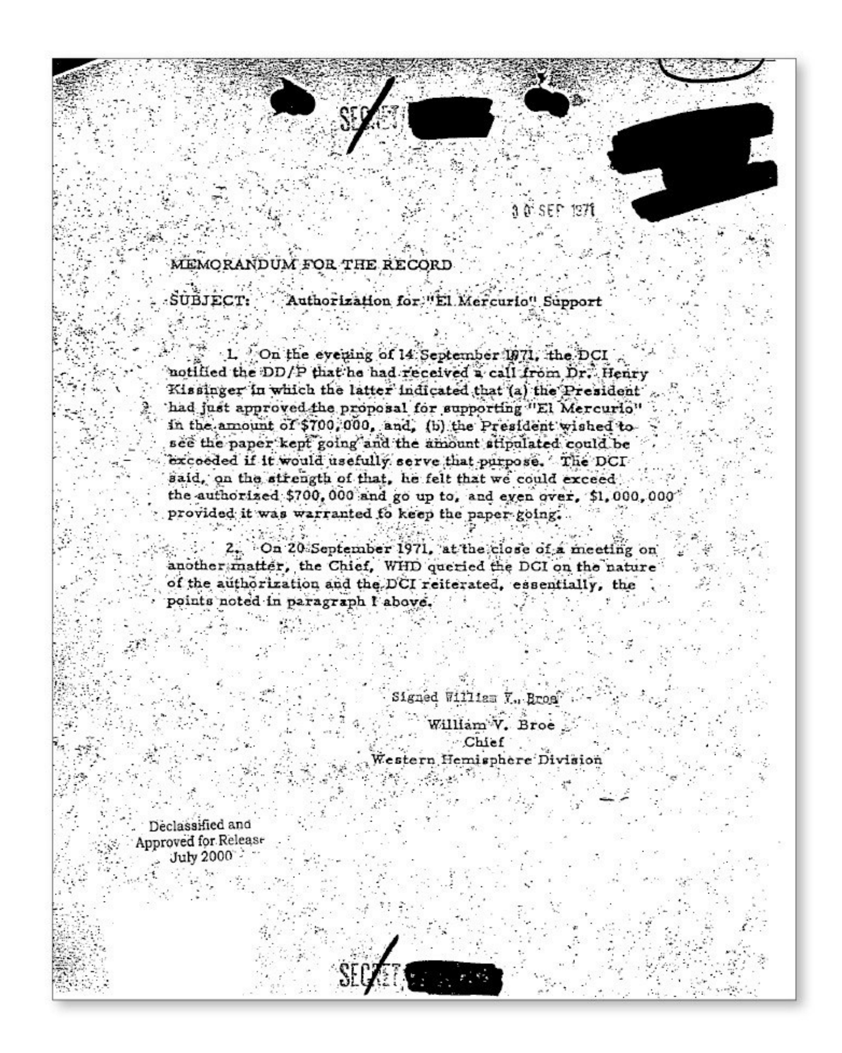
1. Political action to divide and weaken the Allende coalition;
2. Maintaining and enlarging contacts in the Chilean military;
3. Providing support to non-Marxist opposition political groups and parties;
4. Assisting certain periodicals and using other media outlets in Chile which can speak out against the Allende Government; and
5. Using selected media outlets [redacted] to play up Allende's subversion of the democratic process and involvement by Cuba and the Soviet Union in Chile. 25X(1)

The Committee approved development of the general plan proposed by CIA and a contingency budget, but will review each specific operation on a periodic basis.

Nachmanoff/vmr 11-25-70 SECRET/SENSITIVE/EYES ONLY

UNCLASSIFIED

Documento 3. CIA, secreto: «Autorización de apoyo para El Mercurio», 30 de septiembre de 1971.



SECRET [redacted]

[redacted]

30 SEP 1971

MEMORANDUM FOR THE RECORD

SUBJECT: Authorization for "El Mercurio" Support

1. On the evening of 14 September 1971, the DCI notified the DD/P that he had received a call from Dr. Henry Kissinger in which the latter indicated that (a) the President had just approved the proposal for supporting "El Mercurio" in the amount of $700,000, and, (b) the President wished to see the paper kept going and the amount stipulated could be exceeded if it would usefully serve that purpose. The DCI said, on the strength of that, he felt that we could exceed the authorized $700,000 and go up to, and even over, $1,000,000 provided it was warranted to keep the paper going.

2. On 20 September 1971, at the close of a meeting on another matter, the Chief, WHD queried the DCI on the nature of the authorization and the DCI reiterated, essentially, the points noted in paragraph 1 above.

Signed William V. Broe

William V. Broe
Chief
Western Hemisphere Division

Declassified and
Approved for Release
July 2000

SECRET [redacted]

Documento 4. Embajada chilena en Brasilia, Cable estrictamente confidencial del embajador Raúl Rettig: «Estudios que estaría realizando el Ejercito brasileño sobre el establecimiento de guerrillas en Chile», 23 de marzo de 1971. (6 páginas).

EMBAJADA DE CHILE
REG

DIRECCION GENERAL
Departamento de Coordinación y Análisis

Ref: Estudios que estaría realizando el Ejército brasileño sobre el estableci-miento de guerrillas en Chile.-

0912

ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL DG No. 18.-

Brasilia, 23 de Marzo de 1971.-

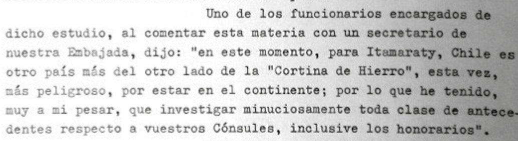
SEÑOR MINISTRO:

- 6 ABR 1971

Desde la llegada al Gobierno de Chile del Presidente Salvador Allende, ha existido una actitud de permanente preocupación de parte de las autoridades brasileñas respecto a las alternativas por que ha ido pasando el proceso político chileno. Esta posición de desconfianza ha podido apreciarse, en un plano más concreto, en ciertas decisiones de política exterior adoptadas por Itamaraty, tales como el reciente apoyo brasileño para que Ciudad de México fuera designada como sede para la III UNCTAD.

En el plano de las actividades internas de esa Cancillería, y de acuerdo a informaciones dadas reservadamente a funcionarios de esta Misión, se ha reflejado esta actitud en un endurecimiento respecto al trato de los asuntos relacionados con Chile. Es así como cuando nuestro Gobierno, debido al traslado de la Embajada de Río de Janeiro a la capital, decidió crear en la primera un Consulado General, de inmediato se ordenó por el Ministro Gibson Barbosa una investigación confidencial sobre nuestro Servicio Consular acreditado en este país.





Uno de los funcionarios encargados de dicho estudio, al comentar esta materia con un secretario de nuestra Embajada, dijo: "en este momento, para Itamaraty, Chile es otro país más del otro lado de la "Cortina de Hierro", esta vez, más peligroso, por estar en el continente; por lo que he tenido, muy a mi pesar, que investigar minuciosamente toda clase de antecedentes respecto a vuestros Cónsules, inclusive los honorarios".

Esta actitud, al parecer, y siempre de acuerdo a lo que se ha dicho por funcionarios de Itamaraty, obedece a instrucciones perentorias emanadas de las Fuerzas Armadas; en

AL SEÑOR
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
SANTIAGO

especial del Servicio Nacional de Informaciones, SNI. de dichos Institutos Armados. Al indicar esta apreciación, debo en todo caso hacer presente a US. que en los últimos meses no ha habido ningún pronunciamiento público de los militares respecto a Chile.

Sin embargo, a mediados del mes de febrero un funcionario de nuestras Fuerzas Armadas informó a esta Embajada que un periodista chileno lo había visitado para ./. contarle que un general brasileño amigo, recordando que el periodista en las últimas elecciones presidenciales había votado por el señor Jorge Alessandri, le habría ofrecido ayuda para organizar en Chile un movimiento de resistencia armada contra nuestro Gobierno, que estructurado en forma de guerrillas, procurara combatir el que llamó "peligro rojo".

A comienzos del presente mes, un Secretario de esta Embajada, recibió, en Río de Janeiro, la visita de un abogado brasileño, quien se refirió nuevamente a este asunto, participando al Secretario que deseaba comunicarle diversos antecedentes al respecto, recogidos de un oficial del Ejército brasileño que le había pedido que los diera a conocer a esta Misión Diplomática.

Al respecto, le dijo que en la sede del Ministerio de Ejército en Río de Janeiro se habían acondicionado varias salas, con maquettes "a escala" de la Cordillera de Los Andes, en toda la extensión de la frontera de Chile con Argentina, Bolivia y Perú; agregando que junto a la reproducción de nuestra frontera natural, así como a diversos juegos de mapas, se estaban reuniendo numerosos oficiales del Ejército, los que se dedicaban a estudiar con toda detención esa región geográfica, procurando determinar aquellas zonas que podrían ser aptas para desarrollar una lucha de guerrillas. En los estudios que se efectuaban, se hablaba de la utilización de elementos civiles, excluyéndose expresamente la participación de elementos militares.

Por otra parte, dicho abogado hizo presente al Secretario que el oficial que le había dado estas informaciones se había comprometido a ampliarlas, por lo que le gustaría volver a conversar con dicho funcionario de la Embajada después del 15 del presente mes.

Anexo al presente oficio remito copia del Memorandum de fecha 2 de marzo, preparado por ese Secretario.

En vista del interés que podía tener una más detallada información al respecto, autoricé al Secretario para que viajara a Río.

El secretario viajó a Río el día jueves 18 de marzo, regresando a esta capital el lunes 22 del presente. Por oficio confidencial DGA No. 19, de esta misma fecha, solicito

a US. se dicte el respectivo decreto de cometido funcional para cubrir los gastos de viaje y permanencia de ese funcionario en Río de Janeiro.

En Río, a través de amigos comunes, el referido Secretario citó al abogado para una reunión que se realizó en una de las salas de nuestro Consulado General en esa ciudad, sin que haya participado a nadie el objetivo de dicha conversación.

El profesional brasileño le comunicó que se había reunido nuevamente con el oficial del Ejército de este país, quien le había dado a conocer nuevos antecedentes respecto a los estudios que se estaban realizando en el Ministerio de Ejército.

En primer lugar, el abogado le hizo presente que no podía darle el nombre del militar informante, porque no estaba autorizado para ello, pero que se trataba de un miembro del Sérvicio de Informaciones de ese Instituto Armado, que respondía al nombre técnico de "S-2", que había tenido muchos contactos anteriores con él, siempre de manera reservada, respecto a diversos asuntos de política interna del Brasil, oportunidades en que le había dado informaciones que con posterioridad había podido verificar. Por otra parte, se trataría de un hombre de ideas políticas de izquierda, quien habría visto con dolor cómo sus colegas de armas preparaban la organización de una lucha de guerrillas contra nuestro Gobierno.

Con la intención de acopiar mayores antecedentes sobre las eventuales regiones en que podría actuar un movimiento de guerrillas, el Ejército de Brasil habría enviado a nuestro país a diversos agentes secretos, quienes habrían entrado en Chile como turistas.

Asimismo, y con ocasión del canje de 70 presos políticos por el Embajador suizo, el Ejército habría retardado esa operación, con el objeto de enviar dos agentes militares entre ellos, los que actualmente estarían realizando dichas investigaciones "en el terreno". Nuestro informante no sabía los nombres de los dos espías, pero se ofreció a averiguarlos discretamente en el futuro.

Por el momento no habría planes para determinar la fecha aproximada en que se podría iniciar un movimiento armado, pero el informante se había comprometido a dársela

a conocer al abogado carioca, apenas tuviera novedades al respecto, para que éste, a su vez, la hiciera llegar a nuestra Embajada.

Finalmente, agregó que se había acordado que la eventual guerrilla no contara con la participación de elementos brasileños, sino de otras nacionalidades, de preferencia chilenos.

El abogado pidió al Secretario que estas informaciones tuvieran una divulgación limitada, porque en caso de cualquier filtración, podía correr riesgo tanto su vida como la de su informante, quien era "un adherente de gran importancia para las fuerzas de izquierda brasileñas".

COMENTARIOS:

a) Como US. podrá apreciar del Memorandum del Secretario, el abogado carioca que proporcionó a esta Embajada tales informaciones es un hombre que ha tenido relaciones con anterioridad con esta Misión. Por lo demás, ha actuado y sigue actuando en el ejercicio de su profesión, en una actividad que fuera de hablar muy en alto de su dignidad como hombre de derecho, permite explicarse la razón por la que tiene relaciones de amistad con personas tales como el oficial que le pidió que conversara con nuestra Embajada.

b) En cuanto a los agentes brasileños enviados a Chile, creo que puede ser de ayuda para nuestras autoridades recordar que de conformidad a informaciones de la prensa chilena, en el grupo de los 70 asilados que se encuentran en Chile, se ha dicho que tres de ellos serían agentes provocadores enviados por el Gobierno brasileño para vigilarlos.

Es así como el día 19 de enero, llegaron a Río, procedentes de Santiago dos señoras, al parecer parientes de algunos de los 70 asilados (una de ellas de apellido Viveiros de Castro), las que traían cartas de gran cantidad de exilados políticos brasileños para sus familiares y amigos. En el aeropuerto fueron presas por la policía de seguridad de la Aeronáutica, permaneciendo en prisión, en la base aérea de Galeao durante 30 días. Entre la correspondencia, venía una carta del asilado señor Almino Afonso para el ex-diputado Rubens Paiva. El día 20, el señor Paiva fue detenido, y hasta el día de hoy, se ignora si está vivo.

Es probable que los agentes que avisaron a las autoridades brasileñas el viaje de ambas señoras sean los

mismos mencionados por la persona que informó a esta Embajada respecto a los estudios que se estarían efectuando para organizar guerrillas en nuestro país.

c) De acuerdo a informaciones dadas en Río de Janeiro por una persona amiga de Chile al Secretario, estaría en Santiago un ex-mayor del ejército brasileño, de apellido Cerveiras, quien habría figurado en la nómina de presos políticos que fueron canjeados por el Embajador de Alemania y enviados a Argelia, desde donde viajó a Chile, vía Cuba. El señor Cerveiras estaría preparando su vuelta clandestina al Brasil, conjuntamente con dos ex-sargentos que serían parte del grupo de 70 presos canjeados por el Embajador de Suiza. Uno de los dos ex-sargentos, sería un agente militar.

d) En Río, el Secretario tuvo oportunidad de conversar con un ciudadano chileno que merece toda fé, y reside en Sao Paulo, quien le dijo que en los medios paulistas existía el rumor que los mandos paulistas superiores del Cuerpo de Ejército con sede en dicha ciudad estarían procurando encontrar algunos voluntarios chilenos para emprender una aventura bélica en nuestro país. Dicho señor le dijo que de ser efectivo ese rumor, los más probables aspirantes provendrían de los círculos ultra-reaccionarios de "Fiducia", que han llegado a instalarse en Sao Paulo.

Manifestó además que varias personas, al parecer "fiducianos", se habían acercado al Consulado de Chile, preguntando sobre renovaciones de pasaporte y otros trámites consulares.

Como en esta Misión se desconoce la identidad de los miembros de "Fiducia" que han viajado al Brasil, y considerando además el hecho que se trata de ciudadanos que en alguna medida podrían servir de "carne de cañón" para una aventura armada en Chile, sin desconocer los derechos y garantías individuales de esas personas, pareciera conveniente que esta Embajada cuente con antecedentes respecto a los "fiducianos" que han abandonado el país, por lo que agradeceré a US., si lo estima adecuado, disponer el envío a esta Embajada de una lista de los mismos, con sus nombres, fecha de salida de Chile, documentos con que salieron, países de destino, informaciones recibidas al respecto de otras Embajadas o reparticiones, etc.

EMBAJADA DE CHILE

- seis -

Con el objeto de colaborar con US. al respecto, remito anexa una lista de las personas que han solicitado pasaporte a nuestro Consulado General en Río de Janeiro, así como la nómina de pasaportes extendidos por ese Consulado durante el presente mes. Sería de interés saber si alguna de las personas incluídas en dicha nómina ha tenido o tiene vinculaciones con "Fiducia" u otras agremiaciones o sectores de ultra-derecha en Chile.

./.

CONCLUSIONES:

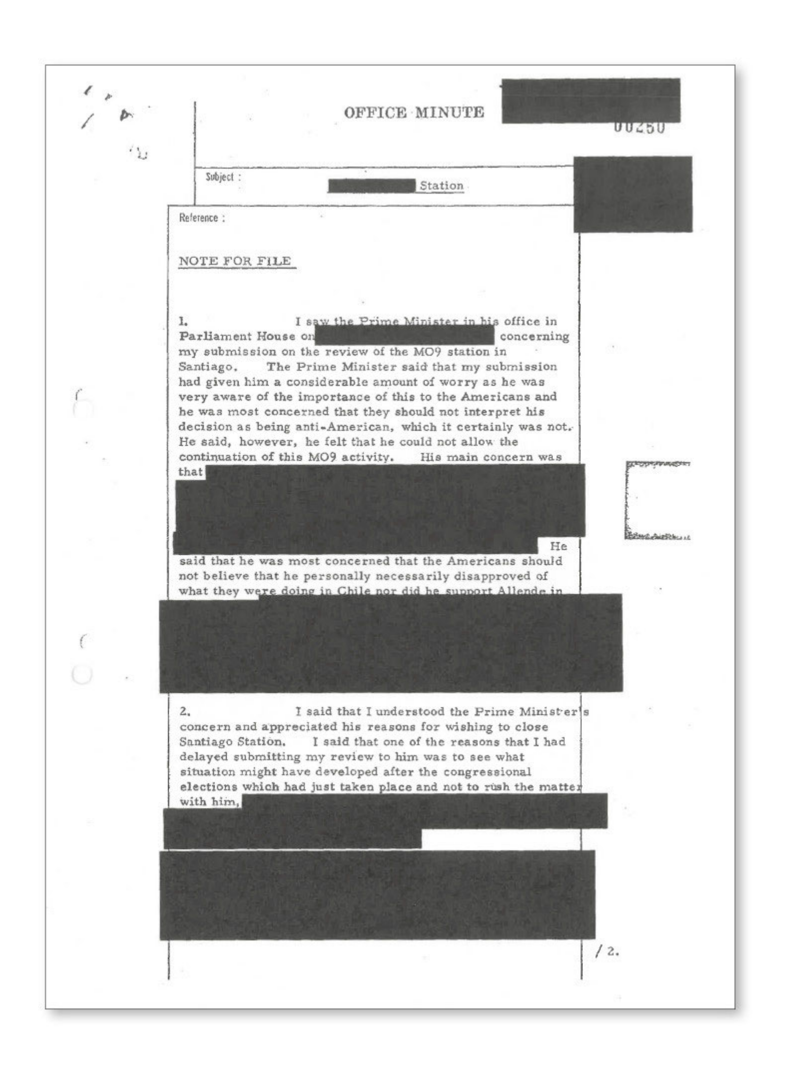
Hasta el momento, las informaciones recibidas respecto a los estudios para organizar o promover la organización de guerrillas en Chile, solo han sido verbales, y como es obvio, por ahora no existe forma de obtener por esta Embajada antecedentes escritos sobre la materia. Tanto la información recibida por un funcionario de nuestras Fuerzas Armadas, como las entregadas al Secretario de esta Embajada aludido más arriba, son pruebas "de oídas", aunque las dadas a este último, tanto por la calidad de la persona que ha conversado con él, como por su reiteración, tienen características de mayor verosimilitud.

Desde luego que la materia en cuestión, en nuestro criterio, no requiere, por su interés para Chile, mayores pruebas para ser estudiada con detención. Ha quedado abierta la posibilidad que en el futuro próximo, y a instancias de esta Misión, como del abogado carioca que nos ha informado, procuremos ampliar los antecedentes y nuestro conocimiento al respecto, pero creemos que sin embargo, justamente por el interés que tiene, debería coordinarse un trabajo de investigación al respecto, entre los diversos sectores que, en el elevado criterio de US. podrían comprobar, tanto en Chile como en este país, la veracidad de los antecedentes hasta ahora recibidos por esta Misión.

Dios guarde a US.

Raúl Rettig
Embajador de Chile

Documento 5. Servicio Secreto de Inteligencia de Australia, alto secreto. Nota para archivar: «[Tachado] Estación», 6 de abril de 1973. (2 páginas).



OFFICE MINUTE [redacted]

00250

Subject : [redacted] Station [redacted]

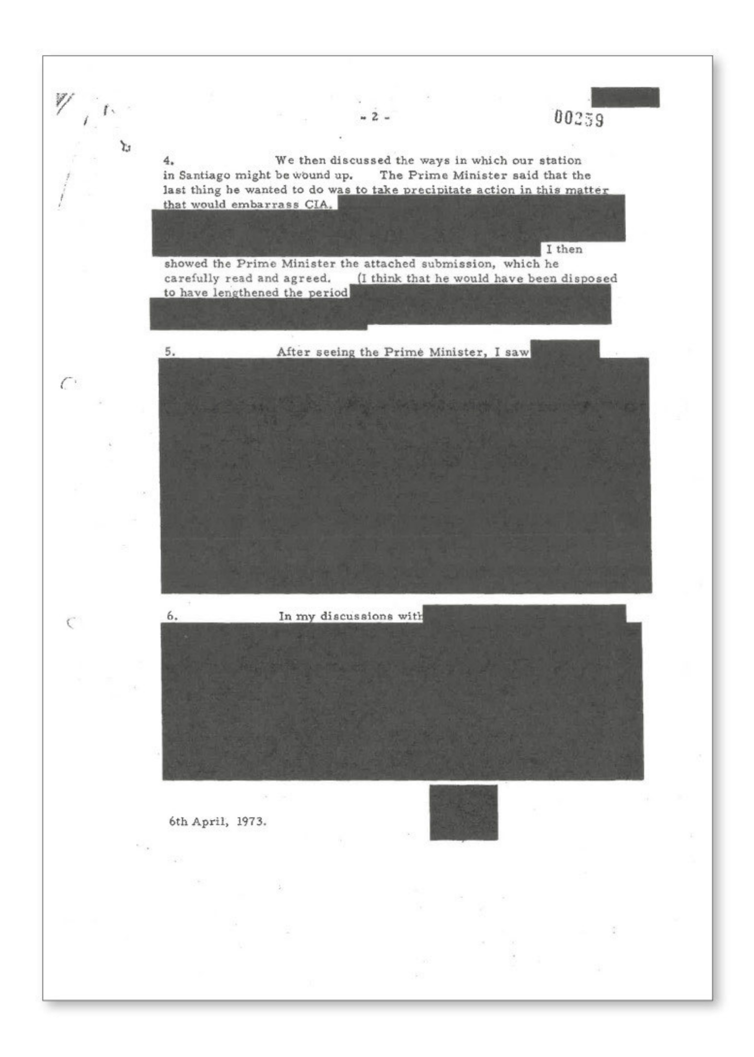
Reference :

NOTE FOR FILE

1. I saw the Prime Minister in his office in Parliament House on [redacted] concerning my submission on the review of the MO9 station in Santiago. The Prime Minister said that my submission had given him a considerable amount of worry as he was very aware of the importance of this to the Americans and he was most concerned that they should not interpret his decision as being anti-American, which it certainly was not. He said, however, he felt that he could not allow the continuation of this MO9 activity. His main concern was that [redacted] He said that he was most concerned that the Americans should not believe that he personally necessarily disapproved of what they were doing in Chile nor did he support Allende in [redacted]

2. I said that I understood the Prime Minister's concern and appreciated his reasons for wishing to close Santiago Station. I said that one of the reasons that I had delayed submitting my review to him was to see what situation might have developed after the congressional elections which had just taken place and not to rush the matter with him, [redacted]

/2.



- 2 -

[redacted] 00259

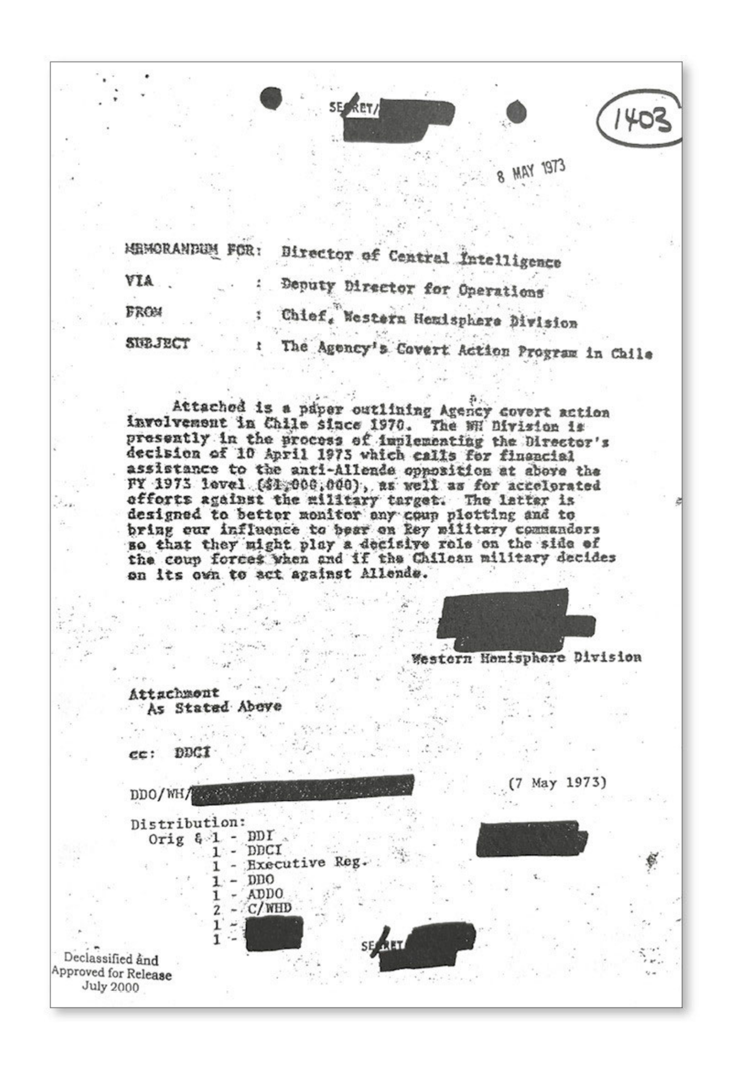
4. We then discussed the ways in which our station in Santiago might be wound up. The Prime Minister said that the last thing he wanted to do was to take precipitate action in this matter that would embarrass CIA. [redacted] I then showed the Prime Minister the attached submission, which he carefully read and agreed. (I think that he would have been disposed to have lengthened the period [redacted]

5. After seeing the Prime Minister, I saw [redacted]

6. In my discussions with [redacted]

6th April, 1973. [redacted]

Documento 6. CIA, secreto, Memorando: «Programa de acción encubierta de la Agencia [CIA] en Chile», 8 de mayo de 1973.



SECRET/[redacted]

1403

8 MAY 1973

MEMORANDUM FOR: Director of Central Intelligence
VIA : Deputy Director for Operations
FROM : Chief, Western Hemisphere Division
SUBJECT : The Agency's Covert Action Program in Chile

Attached is a paper outlining Agency covert action involvement in Chile since 1970. The WH Division is presently in the process of implementing the Director's decision of 10 April 1973 which calls for financial assistance to the anti-Allende opposition at above the FY 1973 level ($1,000,000), as well as for accelerated efforts against the military target. The latter is designed to better monitor any coup plotting and to bring our influence to bear on key military commanders so that they might play a decisive role on the side of the coup forces when and if the Chilean military decides on its own to act against Allende.

[redacted]
Western Hemisphere Division

Attachment
As Stated Above

cc: DDCI

DDO/WH/[redacted] (7 May 1973)

Distribution:
Orig & 1 - DDI
1 - DDCI
1 - Executive Reg.
1 - DDO
1 - ADDO
2 - C/WHD
1 - [redacted]

[redacted]

SECRET/[redacted]

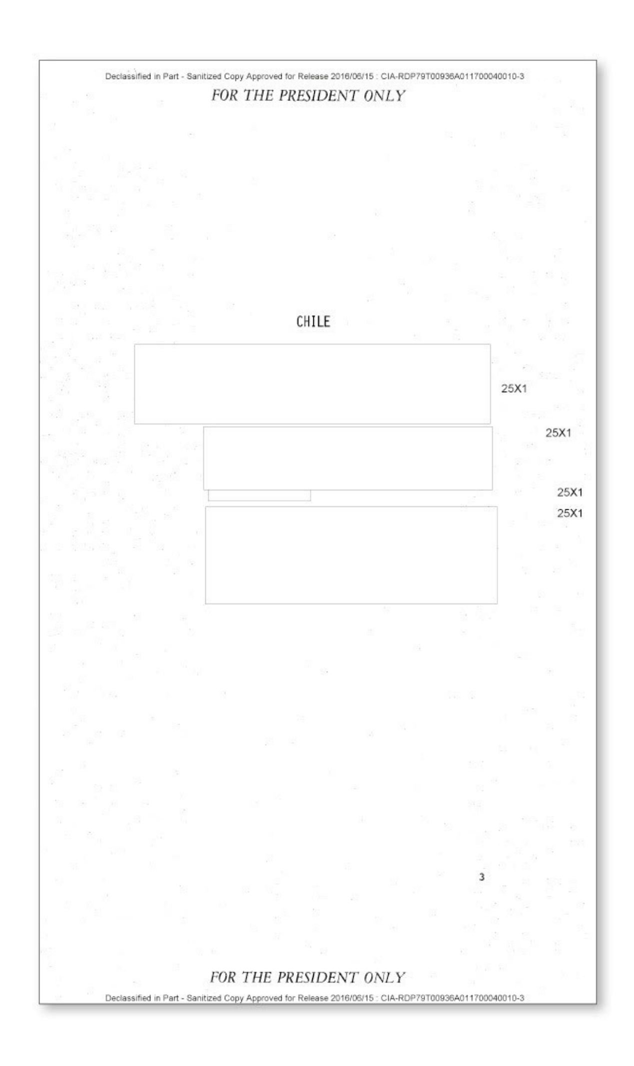
Declassified and Approved for Release July 2000

Documento 7. CIA, alto secreto: Resumen diario para el presidente, 11 de septiembre de 1973. (Páginas 1 y 6).

The President's Daily Brief

11 September 1973

45
~~*Top Secret*~~ 25X1


Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2016/06/15 : CIA-RDP79T00936A011700040010-3

FOR THE PRESIDENT ONLY

CHILE

25X1

25X1

25X1

25X1

3

FOR THE PRESIDENT ONLY

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2016/06/15 : CIA-RDP79T00936A011700040010-3

Documento 8. Telcon de Kissinger: Transcripción telefónica de la conversación entre Richard Nixon y Henry Kissinger sobre el derrocamiento de Allende, 16 de septiembre de 1973. (Página 1).

*

TelCon:9/16/73 (Home) 11:50
Mr. Kissinger/
The President:

K: Hello.

P: Hi, Henry.

K: Mr. President.

P: Where are you. In New York?

K: No, I am in Washington. I am working. I may go to the football game this afternoon if I get through.

P: Good. Good. Well it is the opener. It is better than television. Nothing new of any importance or is there?

K: Nothing of very great consequence. The Chilean thing is getting consolidated and of course the newspapers and bleeding because a pro-Communist government has been overthrown.

P: Isn't that something. Isn't that something.

K: I mean instead of celebrating - in the Eisenhower period we would be heros.

P: Well we didn't - as you know - our hand doesn't show on this one though.

K: We didn't do it. I mean we helped them. _______ created the conditions as great as possible(??)

P: That is right. And that is the way it is going to be played. But listen, as far as people are concerned let me say they aren't going to buy this crap from the Liberals on this one.

K: Absolutely not.

P: They know it is a pro-Communist government and that is the way it is.

K: Exactly. And pro-Castro.

P: Well the main thing was. Let's forget the pro-Communist. It was an anti-American government all the [illegible] way.

3

Pinochet en el poder: La construcción de un régimen de represión

En Chile hay tres fuentes de poder: Pinochet, Dios y la Dina.

Oficial del servicio chileno de información al agregado militar estadounidense, 6 de febrero de 1974.

El advenimiento del régimen de Pinochet fue tan violento como despiadado. El derramamiento de sangre por parte de los militares fue tan extendido en los días que siguieron al golpe de Estado que ni siquiera las fuentes de la CIA pudieron determinar con exactitud el número de víctimas. «Hasta el momento, la operación golpista del 11 de septiembre y las posteriores de limpieza han provocado 4.000 muertos», informó el puesto de operaciones en Santiago el día 20 del mismo mes. Cuatro días más tarde, sus cálculos ofrecían cifras que iban «de los 2.000 a los 10.000» muertos civiles. El recién constituido gobierno militar se confesó autor de solo 244 muertes, pero los servicios secretos estadounidenses sabían que esta cantidad era falsa. «Nadie va a registrar estos números y, en consecuencia, no habrá nunca un recuento exacto del total de muertos», advirtió el puesto santiaguino en relación con las acciones de represión que siguieron a la toma del poder por parte de los militares. «Solo los miembros de la Junta Militar podrán tener una idea clara de la verdadera cifra de víctimas, algo que, probablemente, mantendrán en secreto».[1]

Lo cierto es que, a finales de octubre, la CIA recibió una exposición secretísima sobre la represión posterior al golpe preparada por la nueva Junta. El documento se convirtió en la base para un informe secreto especial

titulado «Ejecuciones en Chile», preparado por el secretario de Estado Henry Kissinger (véase el documento 1).[2] Según este texto, tras el golpe, los militares habían masacrado a unos mil quinientos civiles, de los que entre trescientos veinte y trescientos sesenta fueron ejecutados de forma sumaria por pelotones de fusilamiento mientras se encontraban detenidos, cuando no habían sido abatidos sin más en la calle.

El resumen estimaba que se había llevado a cabo la detención de más de trece mil quinientos ciudadanos chilenos mediante redadas y arrestos en masa de integrantes del depuesto gobierno de la Unidad Popular, activistas políticos, sindicalistas, trabajadores de las fábricas y habitantes de campamentos. Los recluyeron en una veintena de campos de confinamiento repartidos por toda la nación de los que «solo unos cuantos», según informó la CIA, «son conocidos del público en general».[3] Los dos más grandes y de más triste memoria fueron, sin lugar a dudas, dos edificios deportivos de Santiago: el Estadio Nacional y el Estadio Chile, de dimensiones más reducidas. Las estadísticas recogidas en el informe secreto de la Agencia referente a la nueva Junta Militar hablan de un total de 7.612 prisioneros procesados a través del centro de detención del Estadio Nacional entre el 11 de septiembre y el 20 de octubre.[4] Todos se hallaban incomunicados, y muchos de ellos estaban sometidos a intensos interrogatorios en vestuarios y lujosos palcos que los militares habían transformado en cámaras de tortura.

Un buen número de estos prisioneros fue ejecutado tras sufrir salvajes abusos. Los cadáveres fueron enterrados en lugares secretos, lanzados al río Mapocho, arrojados al mar o abandonados por la noche en las calles de la ciudad. El celebrado cantautor Víctor Jara corrió una suerte semejante tras ser recluido en el Estadio Chile. Su cuerpo, descubierto en un inmundo canal «con manos y rostro muy desfigurados, presentaba 44 orificios de disparos», según la investigación dirigida por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en 1990.[5] También perdieron la vida ejecutados de un modo similar dos ciudadanos estadounidenses, Charles Horman y Frank Teruggi, a quienes arrestaron los soldados en sus domicilios tras el golpe para encerrarlos en el Estadio Nacional.[6]

Durante diecisiete años de despiadada dictadura, los militares chilenos serían responsables del asesinato —mediante tortura o ejecución— y la desaparición de unos 3.197 ciudadanos, a los que hay que sumar miles de víctimas de brutales abusos, como la encarcelación arbitraria o el exilio forzoso, amén de la citada tortura y otras formas de terror estatal.[7] La mayoría de las muertes y desapariciones se produjo durante los primeros años del régimen, período en que este consolidó e institucionalizó su represivo gobierno. Semanas después del golpe, Pinochet creó un cuerpo secreto de policía con licencia para eliminar a todos y cada uno de sus enemigos. La Junta Militar prohibió de inmediato toda actividad política, clausuró el Congreso, suprimió los partidos políticos, anuló las normas electorales, ocupó las universidades y cerró todos los medios de comunicación excepto los más derechistas, defensores del golpe de Estado, con la clara intención de imponer una dictadura militar. «Tienen planeado ejercer una dura represión», comunicó sin ambages el centro de operaciones de la Agencia en Santiago el 21 de septiembre. «Nada, en absoluto, parece indicar que los militares pretendan renunciar en breve al pleno poder político que ejercen en Chile en estos momentos».

El ascenso de Pinochet

Augusto Pinochet fue el último general en unirse a la conspiración golpista. Sin embargo, tras el 11 de septiembre no tardó en situarse como dirigente supremo de Chile. En un principio, la Junta Militar —formada por los jefes de los ejércitos de Tierra, Mar y Aire y del cuerpo de Carabineros— estaba concebida como una comisión de iguales cuyos integrantes se irían alternando en la presidencia. Conforme al protocolo, la Junta nombró a Pinochet, miembro de más edad y cabeza del Ejército, para presidirla en primer lugar. «Yo fui elegido presidente por ser el más viejo», refirió a la prensa poco después del golpe, y añadió: «Pero no solo seré yo presidente de la Junta; después de un tiempo lo será el almirante Merino, luego el general Leigh y así sucesivamente». Asimismo, negó ser un hombre ambicioso y dijo no querer parecer un usurpador del poder.[8]

En realidad, Pinochet actuó de un modo metódico para distinguirse del resto de los miembros de la Junta Militar y usurpar poderes que los conspiradores

tenían la intención de compartir. Ser a un mismo tiempo comandante del Ejército y presidente de la Junta le proporcionó un respaldo institucional fundamental y una concentración de poder que él supo manejar para obtener una gran ventaja autocrática. Se sabía secundado por las Fuerzas Armadas, por lo que no tardó en desechar la idea de ceder la presidencia. Llegado junio de 1974, ya había logrado mediante presiones que los otros miembros de la Junta firmasen el Decreto Ley 527, por el que se le nombraba «jefe supremo de la nación». El 18 de diciembre de 1974 asumió la dignidad de «Presidente de la República», título que ostentaría hasta marzo de 1990, fecha del final de su dictadura.[9]

Tanto los servicios secretos como el Departamento de Estado estadounidenses dan la sensación de haber subestimado la crueldad individual de Pinochet.[10] Un documento de la DIA en que se recogían datos biográficos del general chileno tras el golpe de Estado lo describía así:

> Tranquilo, sosegado, muy serio. Muy honesto, trabajador, aplicado. Padre y marido tolerante y cariñoso de vida muy modesta. Bebe whisky escocés y pisco sour, fuma cigarrillos y le gustan las fiestas.[11]

En un cablegrama enviado a Washington el 12 de octubre de 1973, el embajador Nathaniel Davis describió un diálogo privado, «alegre y elocuente», mantenido con el dictador en ciernes. Este, deseoso de obtener ayuda económica y militar de Estados Unidos, le aseguró «que, si el gobierno de la Junta fracasa, la tragedia de Chile será permanente». Cuando Davis mencionó los problemas políticos a que estaban dando lugar algunas cuestiones relativas a los derechos humanos —y entre las que destacaban, por encima de todas, las muertes de Horman y Teruggi—, Pinochet respondió que «el gobierno chileno comparte por entero nuestra preocupación [la de los estadounidenses] por los derechos humanos, y está haciendo todo lo posible por evitar la violación de estos y la pérdida de vidas».[12] [13]

Tres días después de esta conversación, Pinochet puso en marcha un rosario de ejecuciones que recibió el nombre de «la Caravana de la Muerte». Encomendó al general Sergio Arellano Stark —uno de los cabecillas del

golpe de Estado y el primero a la hora de hacer cumplir los dictados del nuevo régimen— la labor de «acelerar» el curso de la justicia en relación con los prisioneros políticos de las provincias septentrionales —representantes regionales del gobierno de la Unidad Popular, alcaldes, jefes de policía, sindicalistas destacados y dirigentes municipales—. Entre el 16 y el 19 de octubre, Arellano viajó acompañado de un escuadrón de la muerte de cinco oficiales a los centros provinciales de La Serena, Copiapó, Antofagasta y Calama en un helicóptero Puma.[14] El general dedicaba cada una de las escalas a identificar prisioneros, de los cuales la mayoría se había entregado tras una citación oficial. Los sacaban de sus celdas, se los llevaban y, tras tratarlos con gran brutalidad y herirlos con la bayoneta, los mataban. En La Serena fueron quince los muertos; en Copiapó, dieciséis; en Antofagasta sacaron a catorce de entre rejas para ejecutarlos en plena noche, y en Calama, al día siguiente, abatieron a tiros o a puñaladas a veintiséis.[15] En el transcurso de cuatro días, la Caravana dejó un reguero de muerte de sesenta y ocho personas. En su mayoría, las víctimas fueron arrojadas sin más ceremonia a varias fosas comunes, y a sus familias se les negó el derecho de enterrarlas. Catorce de estos cadáveres no llegaron a recuperarse jamás, por lo que se encuentran entre los primeros grupos de desaparecidos a manos del nuevo régimen militar.*

Los servicios secretos estadounidenses tenían noticia de estas matanzas, pero informaban al respecto de forma vaga e incompleta. En el documento en que se recogían los datos biográficos del general Arellano, la DIA señalaba que estaba «considerado uno de los hombres de confianza del Gral. Pinochet» y parte del «sector duro imperante durante los meses que siguieron al golpe de Sept. de 1973 debido a sus ejecuciones sumarias de militantes de izquierda». La base de la CIA en Santiago se mostró generosa al describir las operaciones de Arellano como parte de una campaña concebida para «neutralizar a los extremistas», a pesar de que la mayor parte de las víctimas de la Caravana de la Muerte eran destacados funcionarios municipales y reconocidos miembros de sus respectivas comunidades. «Los militares seguirán actuando contra cualquiera que muestre una actitud beligerante frente a la ley y el orden», según exponía un informe de la CIA sobre las severas medidas adoptadas por Pinochet redactado el 25 de octubre, cuyo texto se ha desclasificado en forma muy censurada:

> A modo de ejemplo de este tipo de acción, el general Sergio Arellano dio órdenes, durante un viaje reciente al sur de Chile, de actuar de manera implacable con los extremistas. En consecuencia, se capturó y ejecutó a tres de estos. En el norte ordenó otro tanto, y allí las ejecuciones han sido quince.

Arellano, a su vez, no hacía sino cumplir órdenes de su superior. De hecho, los testigos y las pruebas de que se disponen vinculan a Pinochet a esta matanza de un modo más directo que a cualquier otra atrocidad de las cometidas durante su régimen. Cuando el general Joaquín Lagos, comandante provincial responsable de la región de Antofagasta, a quien no habían revelado cuál era la verdadera misión de la delegación, se encaró con Arellano y denunció lo que consideraba «un crimen tan monstruoso como cobarde», este le mostró un documento con firma de Pinochet por el que lo nombraba oficial delegado para «estudiar y acelerar» el proceso judicial de los prisioneros políticos del norte. Cuando Lagos se quejó directamente a Pinochet, este lo hizo comparecer en Santiago el 1 de noviembre y, al leer el informe en el que atribuía docenas de muertes al «delegado del comandante en jefe del gobierno», envió a su asistente para que diese a Lagos la orden de volver a escribir el documento y eliminar cualquier referencia a la implicación de Arellano.[16]

En cuanto operaciones de salvajismo oficial, estas ejecuciones en masa reflejaban con claridad el carácter del régimen que pretendía instaurar Augusto Pinochet. La Caravana de la Muerte respondía a la decisión tomada por el más alto cargo de la Junta para vengarse de los civiles que secundaban, aun de un modo no violento, las formas democráticas de gobierno. Al mismo tiempo, parecía estar encaminada a eliminar a los comandantes «blandos» —como el general Lagos, a quien se obligó a retirarse pocos meses después— y transformar el cuerpo de oficiales chileno, constitucional y observante de la ley por tradición, para hacerlo participar en una guerra sucia. Según observó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación: «No cabe discutir que este viaje al norte, con su carácter oficial y extraordinario, con la altísima autoridad (emanada de la Comandancia en Jefe) que lo presidía, con su secuela de impactantes ejecuciones sin proceso y con su ostentosa impunidad, no pudo dar a los

oficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden sino una sola señal: que el mando era uno solo y había que ejercerlo duramente».[17]

La Dirección de Inteligencia Nacional (Dina)

La misión homicida de la Caravana de la Muerte y el mensaje que transmitía presagiaron la creación de un órgano policial secreto en Chile: la Dina. En cierto sentido, esta supuso la institucionalización de la Caravana, un instrumento itinerante de represión que no había de rendir cuentas sino a Pinochet, concebido para eliminar a los enemigos del Estado, burlar las normas civiles y legales, e infundir terror al pueblo y a los sectores menos agresivos del Ejército. La plantilla inicial provenía del equipo de la Caravana. Según averiguaron los servicios de información estadounidenses, el general Arellano Stark fue designado para formar una comisión militar selecta a la que Pinochet encomendó la preparación de un plan dirigido a reorganizar el espionaje chileno que culminó en la fundación de la Dina.[18] Una vez autorizado en secreto el nuevo servicio de inteligencia, se trasladó a sus filas a cuatro miembros del citado escuadrón de la muerte. Uno de ellos, el coronel Pedro Espinoza, no tardó en convertirse en subdirector y asumir la labor de supervisar las operaciones de represión llevadas a cabo al interior del país y los actos de terrorismo perpetrados en el extranjero. Otro de los integrantes del equipo de Arellano, Armando Fernández Larios, desempeñó un papel fundamental en la acción externa más tristemente célebre de la Dina: el asesinato, en Washington D.C., de Orlando Letelier y Ronni Moffitt. La Agencia se convirtió en el puntal más importante —después del mismísimo Augusto Pinochet— del poder de la dictadura militar, así como en su símbolo más representativo y duradero.

La Dina se creó oficialmente el 14 de junio de 1974, por el decreto número 521 de la Junta Militar. Este lo describía como una entidad especializada capaz de facilitar al gobierno de manera «sistemática y debidamente procesada la información que requiera para adecuar sus resoluciones en el campo de la Seguridad y Desarrollo Nacional». Los ocho artículos publicados del decreto hablaban de «un organismo militar de carácter técnico y profesional», compuesto por personal procedente de las Fuerzas Armadas y, en caso necesario, por funcionarios civiles. Con todo,

permanecieron en secreto tres secciones finales —los artículos 9, 10 y 11—, que conferían a la Dina el poder de efectuar redadas, arrestos y detenciones clandestinas para lograr sus objetivos en el ámbito de la represión. Los servicios de espionaje estadounidenses reconocieron que el decreto suponía la fundación estatutaria de una «fuerza policial semejante a la Gestapo» destinada a suplantar a las diversas unidades de inteligencia de las Fuerzas Armadas chilenas. «Entendido de forma literal», informó a la DIA Gerald Breschta, agregado naval estadounidense, aquella disposición otorgaba «amplios poderes de investigación al director de la Dina».

> Además (y esto no es menos relevante), no parece haber restricción alguna a las operaciones de inteligencia que pudiera emprender el director. En resumen, la ley supone la aprobación legal y oficial a una organización que se encuentra ya en plena actividad, y representa potencialmente un golpe muy dañino a los empeños de las organizaciones de espionaje en consolidar y mejorar sus respectivas posiciones.[19]

Antes de su constitución oficial, la Dina había estado actuando como una policía secreta de métodos brutales durante más de seis meses. Sus orígenes se remontaban a la comisión creada tras el golpe y dirigida por el teniente coronel Juan Manuel Contreras Sepúlveda, administrador del Ejército situado en una posición no muy elevada, pero unido al general Pinochet por estrechos lazos personales. Con el beneplácito de este, Contreras presentó ante los directores de espionaje del Ejército de Tierra, la Armada, la Fuerza Aérea y el cuerpo de Carabineros el anteproyecto de la Dirección de Inteligencia Nacional. Algunos funcionarios militares supieron ver en esta un instrumento que aumentaría a sus expensas el poder de Pinochet. No obstante, el documento de Contreras no tardó en ser aprobado.[20] El 17 de noviembre, según señaló más tarde la CIA, el general autorizó en secreto la creación formal de este nuevo cuerpo policial.

La Dina estaba concebida para centralizar tanto la recogida de información como la administración de medidas represivas, algo que por entonces dirigían diversos órganos adscritos a las distintas Fuerzas Armadas y la policía. El Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA) había adquirido un renombre considerable en lo tocante a la tortura y las

desapariciones. La Armada disponía también de su Servicio de Inteligencia Naval (SIN), en tanto que el Ejército de Tierra administraba el Servicio de Inteligencia Militar (SIM) y la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine), y la policía nacional, el Servicio de Inteligencia de Carabineros (Sicar). A finales de 1973 se constituyó el Centro de Contrainteligencia de las Fuerzas Armadas (Cecifa), con la intención de coordinar e intensificar las operaciones de las distintas fuerzas del Ejército, que en 1975 crearon un «Comando Conjunto» para localizar y eliminar a los miembros del Partido Comunista chileno. Con todo, y a pesar de sus incontables atrocidades, las actividades de todos estos organismos palidecieron en comparación con las de la Dina, que, entre 1974 y 1977, se convirtió en el servicio de espionaje por antonomasia vinculado a la represión política.

La Dirección de Inteligencia Nacional comenzó a actuar como una unidad oculta de la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (Sendet), entidad administrativa fundada en diciembre de 1973 con el aparente cometido de organizar a la multitud de civiles arrestados y retenidos por el nuevo régimen militar bajo el estado de sitio. Se presentó como un mecanismo diseñado para prestar una «atención regular, permanente y coordinada» a la grave situación de miles de encarcelados chilenos, aunque, en realidad, la Sendet no hacía sino proporcionar amparo clandestino a la Dina, su supuesto «departamento de inteligencia». Este último órgano tenía, según el decreto por el que se constituyó la Sendet, las siguientes responsabilidades: establecer las normas para «los interrogatorios o reinterrogatorios de los detenidos, determinar el grado de peligrosidad de estos y mantener una coordinación permanente con los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, de Carabineros e Investigaciones, con el fin de intercambiar y mantener al día las informaciones de que disponen».[21]

La Dina adquirió, desde el principio, fama por su brutalidad, aun entre los otros servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas chilenas, que no carecían de métodos violentos. Los agentes, lejos de limitarse a coordinar y dirigir los interrogatorios, llevaban a cabo redadas y detenciones clandestinas de modo sistemático, al tiempo que construían una red de centros secretos de detención y tortura con el fin de arrancar información a los seguidores del régimen de Allende antes de acabar con ellos y hacerlos desaparecer. A finales de enero de 1974, la CIA comunicó que la Dina

estaba provocando «incidentes que han puesto al Ministerio de Defensa en una situación embarazosa», incluidas ciertas detenciones secretas de las que este no tenía noticia y, por lo tanto, había negado. «[T]al como se predijo en un principio», anunció a Washington el coronel William Hon, agregado estadounidense de Defensa, «da la impresión de que [la Dina] se está convirtiendo en una organización semejante al KGB». Los servicios rivales se referían a ella como «el monstruo», según otro cablegrama de Hon, fechado el 5 de febrero de 1974, «lo que da idea de la preocupación que les producen su poder y su tamaño, cada vez mayores».[22]

Llegado aquel momento, se calcula que la Dina disponía de setecientos agentes y demás funcionarios extraídos de las filas de Carabineros, el Ejército y las legiones paramilitares del grupo civil neofascista Patria y Libertad. En abril de 1975, había «florecido», tal como expresaba el peculiar estilo de los informes de la DIA, «hasta llegar a los dos mil integrantes regulares, poco más o menos», a los que había que sumar los dos mil cien miembros del personal civil desplegados por todo el país. En 1975, Pinochet aprobó fondos para que la Dina construyera, en su cuartel general de calle Belgrado, un nuevo centro de operaciones de veinticuatro pisos para albergar el masivo crecimiento que había experimentado. La construcción, sin embargo, no se llevó a cabo.

Su misión fue más allá de diezmar la izquierda chilena. La Dina infiltró, asimismo, toda una red de espías al interior del gobierno militar con la intención de garantizar la total lealtad de este al régimen pinochetista y colocó a sus propios agentes en cargos políticos a fin de influir en la dirección que tomaba. El hecho de actuar en todos los círculos del régimen le permitió aumentar su poder de represión, algo que Contreras puso en práctica de un modo extrajudicial al evadir los tribunales y hacer caso omiso de normas y reglamentos legales. «Ningún juez de tribunal alguno, ningún ministro del gobierno va a formular una sola pregunta sobre un caso concreto si la Dina anuncia que se hace cargo [de él]», refirió cierta fuente a Hon a principios de febrero de 1974.[23] La CIA la describió como «una organización de espionaje ubicua, semejante a una gendarmería militar». Sin embargo, acabaría por convertirse, con la bendición de Pinochet, en un gobierno dentro del gobierno. «En Chile hay tres fuentes de poder», afirmó el informante del coronel Hon: «Pinochet, Dios y la Dina».[24]

A pesar de su extensión, sin embargo, el personal de la policía secreta, su estructura organizativa, sus recursos y sus operaciones siguieron siendo desconocidos para el público chileno, aunque no para los servicios de información estadounidenses. La CIA comenzó a colaborar con la Dina poco después de que se crease en la clandestinidad, en tanto que la DIA elaboró con asiduidad informes relativos a su progresiva institucionalización.[25] En junio de 1975, cierta fuente importante entregó a un oficial del grupo militar de Estados Unidos (unidad de oficiales norteamericanos en la embajada, más conocida como MilGroup) un detallado organigrama del «servicio de inteligencia más amplio e influyente» de Chile (véase el documento 2). El esquema de su estructura revelaba un complejo mecanismo conformado por numerosas divisiones operativas, tanto dentro como fuera del país. Entre las más relevantes se hallaban la brigada de inteligencia metropolitana (BIM), que efectuaba todas las redadas y los arrestos llevados a cabo en Santiago; la brigada económica, «responsable de las operaciones de campo relacionadas con el seguimiento de las actividades del sector económico y empresarial», y la brigada ciudadana, integrada por informantes de toda la nación. En el diagrama también aparecía una «brigada secreta», cercana al director, cuya función sigue sin conocerse.

El coronel Contreras diseñó y supervisó todas estas operaciones. A finales de 1973, Pinochet lo seleccionó para el puesto de director de la Dina, y los servicios de inteligencia estadounidense fecharon su nombramiento el día 24 de febrero del año siguiente. Contreras no tenía formación militar oficial en el campo del espionaje: había pasado gran parte de su carrera profesional en calidad de profesor y administrador de diversas academias chilenas de ingeniería militar (de septiembre de 1966 a septiembre de 1967 asistió a la Escuela de Oficiales de Carrera del Ejército del fuerte Belvoir, en Virginia, donde, al parecer, recibió clases de ingeniería). Sin embargo, la ficha biográfica elaborada sobre su persona por el Departamento de Defensa estadounidense señalaba que había sido instruido en «estrategia e inteligencia» a mediados del decenio de 1960 en la Escuela Militar del Ejército de Chile, de la que era subcomandante el entonces teniente coronel Augusto Pinochet. Todo apunta a que ambos entablaron una gran amistad que permitió a Contreras convertirse en el consejero de más confianza de Pinochet y en su mayor aliado tras el golpe.

Una reseña biográfica elaborada por la DIA describiría así a Contreras unos años más tarde:

> Hombre de mucho carácter que profesa una intensa lealtad al presidente Pinochet. En apariencia, diseña las políticas más severas del régimen, que sin duda se encarga de poner en práctica. (...) Oficial muy inteligente y observador que goza de un agudo sentido del humor. (...) Acérrimo anticomunista y antimarxista, hasta el punto de imaginar una confabulación de izquierda tras cada una de las acciones que considera contrarias a los intereses chilenos. (...) Agente capaz en extremo, al que muchos, tanto superiores como iguales, profesan una intensa aversión debida a los despiadados métodos empleados por la Dina. Si bien dispone de habilidad para alcanzar posiciones más elevadas, lo cierto es que solo lo hará gracias al respaldo personal del presidente Pinochet, y puede darse por hecho que acabará por perder cualquier cargo de responsabilidad sin este apoyo.[26]

En el momento del golpe de Estado, Contreras presidía la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, cerca de la ciudad portuaria de San Antonio, situada a unos cien kilómetros de Santiago. El 11 de septiembre, transformó el establecimiento en el centro de detención conocido como el «Campamento de Prisioneros Nº 2», prototipo de las instalaciones de la Dina destinadas a torturar y ejecutar a los detenidos.[27] Contreras no tardó en destacarse a la hora de extraer confesiones y deshacerse de sus víctimas, y este hecho le hizo saltar por encima de todo el escalafón militar para convertirse en persona de confianza de Pinochet y jefe de su servicio de inteligencia, al tiempo que le otorgaba una reputación de hombre sanguinario que él institucionalizó a través de la Dina.

Bajo su mando, la Dirección de Inteligencia Nacional se tornó tristemente célebre a causa de tres tipos definidos de descaradas violaciones de los derechos humanos: una red de campos secretos de confinamiento, la práctica sistemática e inhumana de la tortura y la desaparición de cientos de chilenos.

Además de Tejas Verdes, la Dina disponía de al menos otras doce instalaciones secretas de detención en Santiago y el resto del país.[28] Entre

ellas destacan las siguientes:

• Villa Grimaldi: Finca amurallada construida en 1835 y situada en una zona residencial cercana a Santiago que hacía las veces de cuartel central de la BIM. Este centro —que los militares conocían como «cuartel Terranova»— era el recinto más importante de que disponía la Dina en la capital y, como tal, se hallaba activo las veinticuatro horas del día, durante las cuales no dejaban de llegar camiones con prisioneros encapuchados que eran sometidos a las vejaciones de diversos turnos de torturadores. Allí se introducía a las víctimas en pequeños compartimentos de madera, de los cuales algunos no eran mayores que un armario. En el interior de un depósito de agua de escasas dimensiones que se erigía en la propiedad, los guardias de la Dina construyeron diez espacios diminutos en los que se encerraba a los prisioneros tras la tortura y antes de ser ejecutados. «La Torre» fue el último lugar que visitaron muchos de cuantos desaparecieron a manos de los agentes de la BIM.[29]

• La Discothèque o La Venda Sexy: Casa situada en la calle santiaguina de Irán que servía también de centro de tortura a la Dina. Su nombre se derivaba de la música que, según los testimonios de los prisioneros, podía oírse a todas horas mientras se perpetraban diversos tipos de tormento y del hecho de que los agentes de este edificio mostrasen una clara inclinación por la tortura sexual. No fueron pocas las víctimas que desaparecieron tras sufrir vejámenes de esta índole.

• Londres 38: Centro instalado en la antigua sede del Partido Socialista de la región de Santiago. La Dina retenía en su interior a unos sesenta prisioneros antes de enviarlos a campos de concentración de peores condiciones.

• Cuatro Álamos: Situado en una sección del campamento de detenidos de Tres Álamos, en el centro de la capital chilena. Allí dirigía en secreto la Dina una serie de celdas para prisioneros que, en su mayoría, esperaban allí a que los trasladasen de un centro de tortura a otro.

• Colonia Dignidad: Uno de los lugares más secretos de que se servía la Dina fuera de Santiago. Se trataba de una organización alemana

> semejante a una secta fundada por antiguos oficiales de la Luftwaffe procedentes de la Alemania nazi en la provincia meridional de Parral. La brigada regional de la Dina actuaba a partir de una casa que poseía la Colonia en el municipio. Según el Informe Rettig, «un cierto número de personas detenidas por la Dina efectivamente fueron conducidas a Colonia Dignidad, mantenidas cautivas allí por un tiempo, y algunas de ellas sometidas a tortura».

Todos estos recintos obraban de un modo similar: recibían, vendadas, a las víctimas, después de que hubiesen sido detenidas sin contemplaciones en sus domicilios o en plena calle por agentes vestidos de lugareños y montados en un Ford Falcon sin distintivo oficial alguno —lo que constituía el sello inconfundible de la Dina—, para someterlas allí a terribles vejaciones. Cierto oficial del Ejército chileno hizo saber al agregado estadounidense de Defensa que la Dirección de Inteligencia Nacional se servía, en sus interrogatorios, de métodos «sacados directamente de la Inquisición española». Cada uno de los centros se especializaba en formas concretas de tortura. Los agentes de Londres 38, por ejemplo, acostumbraban a secuestrar a familiares de un preso y violarlos ante este para extraerle información. Villa Grimaldi era conocida por sus «casas Chile», cámaras de aislamiento hechas de madera de un tamaño tan reducido que los allí recluidos no podían arrodillarse ni tumbarse.

Había formas de tortura que eran comunes a todas las instalaciones de la Dina. El Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación catalogó los horribles métodos por los que sentían predilección los profesionales de la Dirección de Inteligencia Nacional a la hora de obtener información de sus prisioneros:

- La parrilla: Se ataba a los prisioneros a un bastidor de cama metálico y se aplicaba corriente eléctrica a las zonas más sensibles del cuerpo, incluidos los genitales.

- Colgamientos: Se suspendía a las víctimas por las muñecas o por estas y las rodillas durante prolongados períodos. Mientras estaban así colgadas, recibían palizas y descargas eléctricas.

• El submarino: Inmersión forzosa en una tina con orina y excrementos o agua helada.

• El submarino seco: Se envolvía con una bolsa la cabeza de la víctima hasta que esta se encontraba a un paso de morir asfixiada. A menudo se causaban a los detenidos quemaduras de cigarrillo para acelerar la pérdida de aire.

• Golpes: Asestados con culatas, puños y cadenas. Uno de los métodos, llamado «el teléfono», consistía, según un superviviente, en azotar los oídos de la víctima con palmadas violentas y rítmicas hasta dejarla sorda.[30]

En algunos campos se llevaba el sadismo a extremos inefables de forma habitual. En Villa Grimaldi trasladaban a los prisioneros obstinados a un estacionamiento, donde los agentes de la Dina les aplastaban las piernas pasando por encima con un coche o un camión. Los reclusos del recinto recordaban a un joven al que golpearon con cadenas y abandonaron para que muriera lentamente a causa de las heridas internas. La violación era otra forma de tortura a la que se recurría con frecuencia. Los oficiales de la Dirección de Inteligencia Nacional sometían a las detenidas a grotescas formas de tormento sexual, incluidas la introducción de roedores y, tal como se describe con gran tacto en el Informe Rettig, «la realización de actos aberrantes, con el empleo de perros».

De los prisioneros a los que se infligieron castigos graves, fueron pocos los que vivieron para aportar pruebas de tales atrocidades. Los agentes de la Dina asesinaron a cientos de víctimas y aún sigue sin conocerse el paradero de muchas de ellas. Durante los diecisiete años que duró la dictadura desaparecieron mil cien chilenos —y un ciudadano estadounidense—, la mayoría por obra de la Dina. Algunos fueron asesinados y enterrados en fosas secretas; otros, llevados en helicóptero y arrojados al océano después de abrirles «el vientre con un arma blanca, para impedir que los cuerpos flotaran», según declara el Informe Rettig. Hacer desaparecer sin más los cadáveres de las víctimas constituía un método particularmente cruel de infundir temor a la oposición e infligir daños psicológicos a los supervivientes de sus familias, al tiempo que se evitaban las limitaciones

legales y se eliminaban las pruebas de la responsabilidad criminal de quienes cometían tales actos.[31]

Sin embargo, buena parte de las familias, las personas que trabajaban por los derechos humanos en Chile y la comunidad internacional en general consideraron responsables al régimen militar y su policía secreta. La implicación de la Dina en las detenciones encubiertas, la tortura y las desapariciones la hizo merecedora de condenas procedentes de todo el planeta. «El régimen de Pinochet atraviesa la escena internacional como un pato de metal en una galería de tiro», se lamentaba un informe secreto de la CIA titulado "Chile: A correr baquetas" y fechado a principios de 1976. «A quienes disparan contra él les sobra la munición, procedente de los excesos que acompañaron al derrocamiento de Salvador Allende y los presuntos abusos que se atribuyen aún a las prácticas empleadas por Chile en los ámbitos de la seguridad y las detenciones».[32] De cualquier modo, no fue tanto Pinochet como Contreras quien se convirtió en el blanco de casi todas las críticas. Los analistas estadounidenses de inteligencia lo declararon «el obstáculo número uno» para que mejorase la situación de los derechos humanos en Chile. En el transcurso de una reunión privada con miembros de la CIA, el vicesecretario de Estado para Asuntos Interamericanos William D. Rogers confió a los demás asistentes algo que ningún funcionario estadounidense debía reconocer en público: el cabecilla de la Dina se había convertido en «el peor símbolo de la represión chilena».[33]

Pinochet y la Dina

El decreto de junio de 1974 que disponía la fundación de la Dirección de Inteligencia Nacional manifestaba, sin dejar lugar a dudas, su condición de «organismo militar (...) dependiente directamente de la Junta de Gobierno». Durante años, Pinochet se encargaría de propagar este mito. «[Yo] no podía decir que en realidad estaba dirigiendo la Dina», alegó en la última entrevista que concedió mientras se hallaba detenido en Londres. «Ellos estaban bajo órdenes, bajo la supervisión de [los cuatro miembros de] la Junta».[34]

En realidad, esta última no llegó jamás a supervisar las operaciones de la Dirección de Inteligencia Nacional: desde que se creó hasta que dejó de existir, la única persona de la que recibió órdenes Contreras fue el propio Pinochet. Tal como señaló el agregado estadounidense de Defensa pocas semanas después de su fundación, estaba «subordinada de forma directa al presidente de la Junta, el general Pinochet».[35] Otro informe de la DIA fechado en abril de 1975 insistía en el mismo hecho: «El coronel Contreras no ha tenido que dar explicaciones a nadie que no fuera el presidente Pinochet ni ha recibido órdenes de ningún otro oficial». Dos años más tarde, cierto documento de la CIA relativo a la responsabilidad de la Dina en el «reciente aumento de los casos de tortura, detenciones ilegales y “desapariciones” carentes de toda explicación» declaró que «Contreras responde directamente ante el presidente, y resulta improbable que pueda haber actuado sin el conocimiento y la aprobación de su superior» (véase el documento 3).

Pinochet ejerció el mando exclusivo de la Dina porque debía a este órgano gran parte de cuanto necesitaba para consolidar su autoridad. Los agentes de Contreras no se limitaron a reprimir de forma implacable cualquier oposición proveniente de la izquierda, sino que también espiaron e intimidaron a todo aquel que osaba mostrar su desacuerdo con Pinochet desde el interior del estamento militar. Cuando el director del Centro de Contrainteligencia de las Fuerzas Armadas, el teniente comandante Raúl Monsalve, se quejó acerca de las operaciones de la Dirección de Inteligencia Nacional y la relación que mantenía Contreras con Pinochet, no faltaron los oficiales de alto rango que le aconsejasen «moderar» sus objeciones o «afrontar la posibilidad de que el personal de la Dina se sacara de la manga cualquier incidente capaz de destruir su carrera profesional y lograr que dejase de ser un obstáculo para ellos», según refirieron algunos testigos a los funcionarios estadounidenses. Este tipo de amenazas no fue infrecuente durante el reinado de la Dina, como tampoco lo era que llegaran a hacerse realidad. «La Dirección de Inteligencia Nacional constituye una de las principales fuentes de poder con que cuenta Pinochet. Este organismo, que tiene por objetivo primordial el mantenimiento de la seguridad interna, está extendiendo su influjo a ámbitos de actividad cada vez mayores», cablegrafió la embajada estadounidense al Departamento de

Estado a mediados de 1975. «Los informes de la Dina llegan directamente a Pinochet, quien en definitiva es el único que tiene control sobre ella».[36]

Con todo, el presidente no se limitó a ejercer su autoridad sobre la Dirección de Inteligencia Nacional, sino que apoyó su rápida expansión en detrimento de otros sectores del estamento militar. Otorgó a Contreras carta blanca para establecer el escalafón de la Dina y respaldó su decisión de tomar agentes y demás personal de otros servicios, en tanto que obligaba a estos a seguir pagando las nóminas de aquellos. En enero de 1975, Contreras redactó una orden, que Pinochet no dudó en firmar, por la que se otorgaba a la Dina toda la responsabilidad de perseguir al MIR, objetivo número uno del régimen en lo referente a la lucha contra las sublevaciones. El presidente exhortó también a disolver el servicio de espionaje de la Fuerza Aérea, que Contreras tenía por su rival particular, para confiar todas sus operaciones a la Dina.

A medida que se hacían más numerosas las protestas internacionales por las flagrantes violaciones de los derechos humanos en Chile, Pinochet se sirvió de ellas para ampliar el poder orwelliano de la Dirección de Inteligencia Nacional. En septiembre de 1975, el centro de operaciones de la CIA en Santiago supo que el general había «emprendido una investigación personal en torno a las prácticas y violaciones de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas» para acabar por determinar que los prisioneros de algunos de los servicios de inteligencia estaban siendo víctimas de abusos. Entonces ordenó al ministro del Interior y al de Defensa que hicieran llegar «a los directores de todos los servicios un decreto secreto que expusiese de forma clara la autorización y los procedimientos necesarios para llevar a cabo las detenciones en todo el país».

Esta disposición secreta de Pinochet, que trataba supuestamente de mejorar el historial chileno respecto de los derechos humanos, no hizo, en realidad, sino ampliar la libertad de acción del órgano responsable de la mayor parte de las atrocidades. La orden del 22 de septiembre, obtenida por agentes de la CIA, convertía a la Dina en la única organización capaz de efectuar detenciones sin verse obligada a informar de sus actividades a los tribunales ni a entidad militar alguna:

> La Dirección de Inteligencia Nacional, o Dina, está autorizada a llevar a cabo los arrestos de personas sospechosas de subversión o activismo político en todo el país. En cualquier caso, y sea cual fuere la zona de Santiago en la que las Fuerzas Armadas, Carabineros o [tachado] arresten, mientras patrullan, a individuos relacionados con actividades subversivas, los detenidos deben ser entregados de inmediato a la Dina. (...) La Dina actuará a modo de coordinador central de todas las órdenes de arresto.[37]

El espectacular crecimiento de la Dirección de Inteligencia Nacional dio origen a intensas rivalidades y tensiones en el seno del régimen a medida que otros miembros del estamento militar trataron de hacer valer su influjo en relación con el futuro del país. No faltaron oficiales que, sintiéndose amenazados por el poder de Contreras y preocupados por las prácticas «bárbaras» de la Dina, se pusiesen en contacto con funcionarios de la CIA y el Departamento de Estado con el objetivo de hablarles del afán con que habían tratado de persuadir a Pinochet para que pusiera freno a las operaciones de dicha organización. En abril de 1975, varios de ellos trataron de «convencer al presidente de que la Dina debería someterse a la dirección y la supervisión de una autoridad semejante al Consejo para la Seguridad Nacional y no solo a la jefatura del gobierno», según un informe de la DIA. «Hasta la fecha, el presidente no ha acogido tales sugerencias con demasiado entusiasmo».

También los oficiales del Ejército estadounidense comenzaron a mostrarse preocupados por las implicaciones que llevaba aparejado el poder creciente de la Dina. En los comentarios añadidos a un informe detallado de los servicios de inteligencia en torno a su expansión, el capitán J. R. Switzer, agregado estadounidense de Defensa, describió el desarrollo de la organización como «un fenómeno particularmente inquietante»:

> La aprensión de muchos militares destacados del Ejército chileno en relación con la posibilidad de que la Dina se convierta en una Gestapo de nuestros tiempos está más que fundada: este órgano posee una autoridad autónoma considerable, que además no deja de crecer. Los miembros de la Junta Militar, al parecer, no tienen potestad para influir en modo alguno en las decisiones del presidente Pinochet con respecto

> a sus actividades. En lo tocante a su organización, estrategias y operaciones, la autoridad del coronel Contreras es poco menos que absoluta, sometida como está exclusivamente a un improbable veto presidencial.[38]

Hasta finales de 1975, el grupo militar estadounidense entendió este fenómeno como una prueba evidente de que Contreras había logrado dominar al mismísimo Pinochet. «Dado el veloz crecimiento de la Dina en casi todos los ámbitos del gobierno, este Departamento ha tenido en ocasiones la sensación de que la organización y sus dirigentes han acabado por salirse de madre y ahora es la cola la que menea al perro en Chile», aseguró el agregado de Defensa en un cablegrama remitido a Washington. No obstante, en el transcurso de un banquete celebrado con «un funcionario de muy alto rango de la Dina» —tal vez el propio Contreras—, el teniente coronel Lawrence Corcoran, agregado estadounidense de la Fuerza Aérea en Santiago, reunió información acerca de la implicación personal de Pinochet en las operaciones de su policía secreta. Contreras, según supo Corcoran, se reunía con el general todos los días a las 7:30 para ponerlo al corriente en privado de «las actividades futuras de la Dina y la situación en que se hallan las que ya están en marcha. El presidente le da órdenes al respecto: conoce sus operaciones y, de hecho, dirige la organización» (la cursiva es mía).

La Brigada Exterior

Mientras aumentaba el afán de la Dina por aniquilar cualquier oposición al régimen, Pinochet y Contreras decidieron ampliar las competencias de la policía secreta chilena. Así, lejos de limitarse a mantener la seguridad interna, su labor se extendería a un ámbito operativo extraterritorial con el fin de neutralizar las amenazas provenientes del exterior —en particular, las del vociferante entramado de organizaciones de solidaridad internacional y derechos humanos, que estaba logrando que todo el mundo centrase su atención en las atrocidades del general—. El organigrama de la Dirección de Inteligencia Nacional obtenido por los servicios estadounidenses recogía una «Brigada Exterior», sección que, según informó cierta fuente chilena,

estaba constituida por «agentes de la Dina que llevan a cabo operaciones tradicionales de espionaje en países extranjeros» (véase el documento 2).

Las actividades de la Brigada Exterior, sin embargo, distaban de ser «tradicionales». En lugar de recoger información sobre la capacidad militar y la actitud de gobiernos hostiles en potencia que supusiesen una amenaza para la seguridad nacional, la sección de la Dina en el extranjero se centraba en tres misiones fundamentales: forjar alianzas con otros cuerpos secretos de policía, así como con grupos violentos anticomunistas y neofascistas, en el Cono Sur, Estados Unidos y Europa; seguir la pista de quienes se mostraban críticos con Pinochet fuera del país, y organizar actos de terrorismo internacional contra exiliados de relieve (véase el capítulo 6). A fin de espiar los movimientos y actividades de estos, la Dina colocó agentes en las embajadas chilenas de todo el mundo, así como entre el personal que trabajaba para las aerolíneas nacionales y en los aeropuertos internacionales, incluidos los de Nueva York. Basándose en el modelo organizativo de la CIA, Contreras ordenó la creación de bases de la Dina en el extranjero a fin de hacer viables estas operaciones. Los agentes que las integraban actuaban tras tapaderas civiles más que militares.

La primera base se estableció en Buenos Aires en la primavera de 1974. Allí, según el Informe Rettig, se trasladaron los agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional «con el objetivo de conocer, controlar, detener y aun eliminar a opositores chilenos asilados» en Argentina. Más tarde, se infiltró en la embajada chilena de Madrid un agente encargado de la Europa occidental. Contreras trató asimismo de introducir representantes de la Dina en Francia, el Reino Unido y la República Federal de Alemania, con la intención de seguir los movimientos de los políticos chilenos exiliados y de los grupos de militantes que actuaban en el continente. Todo apunta a que, en 1976, la Dina trató de establecer, en colaboración con los servicios secretos de las policías de Argentina y Uruguay, una base en Miami (Florida).[39]

Los agentes de la Dina empleaban, en sus contactos y llamadas confidenciales, el nombre clave de Luis Gutiérrez para referirse a la división internacional. Esta disponía de un sistema de comunicaciones e informático único, separado del resto de la Dirección de Inteligencia

Nacional. El comandante Raúl Iturriaga Neumann se encargaba de supervisar las operaciones del departamento exterior, si bien Contreras ejercía un estrecho control sobre esta unidad especial por mediación de su subordinado inmediato, Pedro Espinoza. La mayoría de sus integrantes pertenecían al personal militar de Chile, aunque la brigada reclutó también a civiles procedentes de las filas de violentos grupos de derecha como Patria y Libertad.

De cualquier modo, lo cierto es que el miembro más famoso del departamento exterior de la Dina no era chileno, sino un estadounidense de Waterloo (Iowa) llamado Michael Vernon Townley. Hijo de un directivo de la Ford Motor Company en el extranjero, Townley se había trasladado con su familia a Chile a la edad de catorce años. Cuatro años después, contrajo matrimonio con Mariana Inés Callejas, una chilena de veintiséis años que tenía tres hijos de corta edad. A principios de los sesenta obtuvo su primer trabajo en Chile como vendedor de enciclopedias. En 1967 se mudó a Miami con su familia, y allí entró en contacto con el sector duro —y a menudo violento— de la comunidad de exiliados anticastristas. Tras la victoria electoral de Allende en septiembre de 1970, sus amigos anticomunistas cubanos lo instaron a contactarse con la CIA y volver a Chile para colaborar con quienes trataban de socavar el nuevo gobierno del país.[40]

Mientras preparaba su regreso, Townley se dirigió en efecto a la CIA en diciembre de 1970 para ofrecer sus servicios en calidad de informante en contra del gobierno de Allende. Dos meses más tarde, según los archivos de la Oficina de Seguridad de la Agencia, la Dirección de Operaciones (DO) solicitó una «aprobación preliminar de seguridad para emplear al Sr. Townley con fines operativos». No está del todo claro cómo se sirvió la CIA de él en el transcurso del siguiente año, si es que llegó siquiera a hacerlo; sin embargo, el 21 de diciembre de 1971, la DO advirtió a la Oficina de Seguridad que la base santiaguina ya no tenía interés alguno por Townley en calidad de agente.[41]

Llegado aquel momento, se había convertido ya en un elemento permanente de la embajada en Santiago —un «percebe de embajada», como lo definió cierto diplomático—. De hecho, su nombre, número de teléfono y

dirección, en el 1454 de Oxford Street, aparecen escritos a mano en la solapa interior de la guía telefónica de la embajada. Pasaba horas conversando con distintos agregados y funcionarios estadounidenses (Frederick Purdy, David Stebbing y Jeffrey Davidow, entre otros), a quienes ponía al corriente de sus actividades en contra del régimen de Allende.

Y, en ese sentido, Townley tenía mucho que contar. Por entonces actuaba para Patria y Libertad, grupo militar de declaradas tendencias fascistas que se inspiraba en los camisas pardas de Hitler. Encabezaba un comando responsable de colocar bombas y de actos de sabotaje para los que empleaban cócteles molotov. Asimismo, aplicaba sus conocimientos de experto autodidacta en electrónica en el diseño de equipos de vigilancia que permitían a Patria y Libertad interceptar transmisiones de radio establecidas entre Allende y sus guardias o los miembros de su partido —cuyas grabaciones entregaban después a la embajada estadounidense—. Townley adquirió un considerable renombre entre la oposición extremista por construir y desplegar emisoras móviles de radio y canales ilegales de televisión contrarios a Allende. Cuando el gobierno trató de obstaculizar estas actividades, Townley dirigió una incursión, en marzo de 1973, para inutilizar el mecanismo que estaba produciendo interferencias en la estación transmisora de Concepción. Durante la operación, amordazó e inmovilizó a un vagabundo que se había refugiado en las instalaciones y al que hallaron muerto por asfixia al día siguiente. Entonces, convertido en fugitivo, Townley huyó de Chile a Miami.

Como quiera que en Chile lo buscaban por asesino, se limitó a esperar a que el gobierno de Allende hubiese sido derrocado para regresar a su país de adopción y volver a reunirse con sus compañeros de Patria y Libertad con el fin de celebrar la victoria anticomunista. El 3 de octubre consiguió un permiso falso de conducción de Florida a nombre de Kenneth Enyart, y el día 5 de aquel mes recibió un nuevo pasaporte estadounidense con el mismo nombre. Cinco semanas después del golpe de Estado, volvió a Santiago.

Antes de dejar Miami, sin embargo, se reunió con un viejo amigo de la embajada estadounidense, David Stebbing, y le proporcionó información relevante. En una carta dirigida al funcionario del Departamento de Estado encargado de los asuntos relativos a Chile, Stebbing le hizo llegar un

informe de Townley que giraba en torno al golpe de Estado, Patria y Libertad y el homicidio cometido en Concepción. Antes del acto golpista, según aseguraba, «se había creado un escuadrón de aniquilamiento integrado por exiliados chilenos» a fin de asesinar hasta a veinticinco miembros del gobierno de Allende.

> Si no hubiese sido por el golpe de Estado, habrían entrado en acción en octubre. El plan consistía en hacer entrar en Chile a un grupo de seis u ocho personas, solo dos o tres días antes de la fecha señalada, para que abatiesen en un plazo de tres o cuatro horas al mayor número de los objetivos que no tuviesen guardaespaldas.

Una vez logrados los planes golpistas, sin embargo, los miembros de Patria y Libertad fueron «saliendo a la luz», según señaló Townley, «en calidad de altos funcionarios o consejeros del nuevo gobierno». «A muchos de sus amigos», informó Stebbing, «no les importa en absoluto que los tachen de fascistas». «Mike» esperaba regresar a Chile en cuestión de días, y «probablemente, volverá a ponerse en contacto con la embajada». Tal como intuyó Stebbing, «antes o después, volverá a meterse en líos».

En efecto, a su retorno a Santiago, Townley recuperó de inmediato su afán por trabajar para Estados Unidos en calidad de agente o informante. Los archivos de la embajada dan fe de los numerosos contactos que estableció con el personal estadounidense. A pesar de su condición de fugitivo, debida al homicidio cometido en Concepción, el cónsul de Estados Unidos, Fred Purdy, no vaciló en recibirlo con los brazos abiertos y proporcionarle un pasaporte nuevo, en blanco, con su nombre verdadero. En diciembre de 1973, Townley telefoneó al agregado Jeffrey Davidow y le hizo saber que estaba «trabajando con los mismos tipos de Patria y Libertad que conoció antes del golpe, y que el grupo está llevando a cabo misiones encomendadas por los servicios de inteligencia militar». Townley dijo a Davidow que estaba «deseando cooperar con la embajada en el ámbito del espionaje». En un informe biográfico redactado en junio de 1974, Davidow lo describió como un «ciudadano estadounidense con un pasado bastante desagradable con grupos chilenos criptofascistas» y recomendó «mantenerlo a una distancia prudencial».[42] Sin embargo, dos meses más tarde, otro oficial de la embajada, Michael Lyons, aceptó una invitación para cenar con Townley

y su esposa, Mariana, y comunicó que el expatriado norteamericano seguía interesado en actuar como «conducto de información» para Estados Unidos.

Por entonces, Townley era agente de la Dina tras haber sido reclutado, en el otoño chileno de 1974, por el subordinado inmediato de Contreras, el coronel Pedro Espinoza. En cuestión de meses, este le había proporcionado un nombre falso, el de Juan Andrés Wilson, una amplia residencia que podía emplear como base de operaciones y un equipo de cuatro miembros.[43] En cuanto ciudadano estadounidense comprometido hasta el fanatismo con la causa anticomunista, Townley supuso para la Dina una fuente inestimable de recursos y oportunidades. «No estoy sugiriendo que mi esposo imitaba a James Bond», escribiría más tarde su esposa en una prolija narración manuscrita de la trayectoria de Townley en la Dirección de Inteligencia Nacional:

> Pero, ciertamente, puedo decir que la Dina encontró muy útiles sus conocimientos en electrónica, inglés y comercio. A esto se agrega el hecho de que, en su calidad de norteamericano, tenía libre acceso a Estados Unidos en cualquier momento, sin necesidad de solicitar visa, algo tan difícil de conseguir. Además, mi esposo tenía cualidades que lo hacían destacarse en el mundo del espionaje: mente despierta, increíble memoria, férrea determinación y lealtad. Estaba absolutamente convencido de que el gobierno militar y el señor Pinochet eran lo mejor que podía haberle sucedido a Chile.[44]

Townley se convirtió en el principal asesino de la Brigada Exterior. En septiembre de 1974 llevó a término su primera misión importante: el ataque a sangre fría al antiguo comandante en jefe chileno Carlos Prats y su esposa, muertos en Buenos Aires por una bomba colocada bajo su vehículo. A comienzos de 1975, sus superiores de la Dina lo enviaron a México D.F. con el cometido de hacer volar un centro de convenciones repleto de exiliados que habían pertenecido al gobierno de Allende. Sin embargo, el atentado fracasó. En septiembre de ese mismo año, organizó un plan criminal en Roma que dejó gravemente heridos al dirigente del Partido Demócrata Cristiano Bernardo Leighton, y a su esposa. Y en septiembre de 1976 planificó y llevó a cabo la operación de más infausta memoria de la Dina: el coche bomba que acabó con la vida del exministro chileno Orlando

Letelier y la estadounidense Ronni Karpen Moffitt en pleno centro de Washington D.C. Si bien su nombre aún no era conocido, a mediados de la década de 1970, Michael Townley se encontraba entre los terroristas internacionales más activos —y peligrosos— del mundo.

El Proyecto Andrea

Desde el laboratorio instalado en el sótano de la mansión que le había cedido la Dina en el barrio santiaguino de Lo Curro, Townley dirigió otra operación altamente secreta de la Dina con un tremendo potencial en el ámbito del terrorismo: la creación de un arma biológica de destrucción masiva. El proyecto, que recibió el nombre en clave de Andrea, pone de relieve el deseo que albergaba el régimen de Pinochet de poseer un instrumento bélico secreto que pudiese emplear en caso de guerra con Perú o Argentina. Junto con un equipo de químicos, Townley desarrolló, fabricó y almacenó metilfosfonofluoridato de O-isopropilo, más conocido como gas sarín.

Este gas nervioso es mortal en extremo. Unas cuantas gotas pueden provocar una muerte dolorosa a cientos de personas, en tanto que un sistema militar de distribución sería capaz de causar miles de víctimas. Según un informe del FBI acerca del proyecto Andrea que hizo circular el entonces director William Webster, el gas «se vaporiza al ser expuesto a la atmósfera y produce gotitas que penetran a través de la piel o los pulmones e inhiben la actividad neuroquímica que hace que funcionen los músculos respiratorios».[45] La secta japonesa Aum Shinrikyo lo empleó en el metro de Tokio, en un ataque que acabó con la vida de doce personas y dejó quinientos heridos en marzo de 1995. El gobierno de George H. W. Bush, por su parte, daba por hecho que este gas formaba parte del nutrido arsenal de armas químicas de Saddam Hussein en Irak.

La misión de Townley, tal como escribieron en su Laberinto Taylor Branch y Eugene Propper, consistía en «desarrollar un arma que sea extremadamente letal para grandes masas, pero cuyos efectos puedan circunscribirse a una zona relativamente pequeña».[46] Tras estudiar la obra de químicos alemanes durante las operaciones efectuadas en Europa en

1975, Townley se hizo con un equipo de laboratorio y componentes de la compañía británica de ingeniería química Gallenkamp, y, en Miami, compró un horno microondas de gran tamaño y alquiló recipientes adecuados para el almacenamiento del gas. El dinero necesario para pagar todo esto salió de una cuenta especial que poseía la Dina, oculta tras la empresa ficticia Prosin, S. L., en el Southeast First National Bank de Miami (Florida).

En la época en que se puso en marcha la operación para asesinar a Letelier en Washington, la Dina había fabricado grandes cantidades de gas sarín y Townley estaba trabajando en un sistema militar de distribución que permitiese su empleo en un escenario bélico. Con todo, también había abierto su laboratorio de gas nervioso a representantes del Movimiento Nacionalista Cubano (MNC), violenta organización anticastrista que colaboró en varias misiones asesinas de la Dirección de Inteligencia Nacional, incluida la que culminó con la muerte de Letelier. Los miembros del MNC, tal como reconoció más tarde Townley ante los agentes del FBI que lo interrogaron, pidieron que suministrase a su organización «cierta cantidad de gas nervioso para emplearlo en sus actividades terroristas».[47]

El propio Townley consideró la posibilidad de emplear sarín en una misión de este tipo. Mientras preparaba el asesinato de Orlando Letelier, tomó una pequeña cantidad del gas, lo introdujo en un frasco de Chanel Nº 5 y lo llevó consigo en un vuelo de LAN Chile con destino a Estados Unidos. Más tarde admitiría haber acariciado la idea de que una agente de la Dina pudiese acercarse lo bastante al exministro para exponerlo al gas, o la de que él mismo pudiese lanzar el frasco al interior del vehículo de la víctima en un semáforo en rojo o cualquier otra señal de detención. Una vez en Washington, sin embargo, recurrió al arma con la que solía firmar sus crímenes —el coche bomba— y acabó por devolver el gas a una instalación de almacenamiento segura de la Dina en Santiago.[48]

La Central Nacional de Informaciones (CNI)

Al mismo tiempo que alcanzaba los objetivos perseguidos por Contreras, la operación destinada a acabar con la vida de Letelier propició la disolución de la Dina. La sombra que proyectó sobre el estamento militar chileno en

cuanto institución hizo más fuertes a los enemigos del coronel en el Alto Mando, hasta tal punto de que fueron capaces de persuadir a Pinochet a acabar con la Dirección de Inteligencia Nacional y reorganizar los servicios secretos del país. El 13 de agosto de 1977, la Junta Militar hizo público el decreto ley 1.876, por el que se abolía la Dina y se ponía de relieve la necesidad de reestructurar las funciones de un órgano creado durante una situación de conflicto interno que ya se consideraba superada. Un segundo decreto, el 1.878, promulgado el mismo día, establecía la fundación de la Central Nacional de Informaciones y autorizaba al nuevo organismo a incorporar en su plantilla al personal de la Dina y hacer otro tanto con sus bienes y su presupuesto. Si la Dirección de Inteligencia Nacional respondía ante Pinochet, según señalaba la DIA en un cablegrama titulado «Disolución de la Dina», la CNI habría de hacerlo ante el Ministerio del Interior y no poseía la potestad de la que había gozado su predecesora a la hora de efectuar detenciones.[49] No obstante, Contreras se mantuvo en el puesto de director, lo que hizo que el cambio de estructura de la policía secreta fuese tan solo nominal.

Entre los meses de agosto y septiembre, los agentes chilenos llevaron a cabo, a instancia de Contreras, todo un rosario de atentados con bombas, robos, secuestros y asesinatos que la CNI atribuía a grupos «extremistas». En realidad, tal como comunicaron de inmediato los servicios de inteligencia estadounidenses, los militares chilenos estaban tratando de organizar un clima de caos y terrorismo concebido para exagerar la amenaza de la izquierda. En el transcurso de una operación coordinada, la policía secreta hizo volar por los aires dos viviendas clandestinas y achacó a los izquierdistas la responsabilidad de las explosiones, que se saldaron con varias muertes. «Los arrestos y las persecuciones pueden “llevar varios meses”», refirió un funcionario chileno al agregado militar estadounidense, «[mientras que] una bomba imparte justicia de un modo mucho más rápido».[50]

A principios de noviembre, los comandantes de la cúpula militar volvieron a reunirse con Pinochet y le pidieron que apartase a Contreras de la dirección de la CNI, pues, según adujeron, la imagen que ofrecía Chile al resto del mundo en lo referente a los derechos humanos no iba a mejorar mientras el coronel se mantuviera en dicho cargo. El día 4 de noviembre,

Pinochet trasladó de improviso a Contreras —lo ascendió de coronel a general de brigada y le asignó un puesto en la Escuela de Ingenieros— para reemplazarlo por uno de los oficiales que se mostraban críticos con la Dina, el general Odlanier Mena. Según una comunicación de la CIA archivada el 9 de noviembre, Pinochet se dio cuenta de que «mientras la cúpula de la CNI siga siendo, en lo básico, la misma que la de la organización que la ha precedido, la Dina, no serán pocos los miembros del gobierno chileno que insistan en que no se ha producido ningún cambio real». Los informantes de la CIA aseguraban que Contreras estaba «completamente sorprendido» por su destitución. Uno de ellos comparó a quien había sido la persona más temida y odiada de Chile con «el marido cornudo que es el último en enterarse de que su mujer le es infiel».[51]

Según la DIA, era muy probable que el general Mena «atienda de un modo adecuado a las voces que piden que se haga limpieza en los cuerpos de seguridad». Sin embargo, la CNI resultó ser, cualitativa, si bien no cuantitativamente, tan represiva como su predecesora. El número de asesinatos políticos disminuyó entre 1978 y 1980, pero, a medida que se intensificaron las protestas organizadas contra el régimen, lo hicieron también los actos de represión de la CNI. Sus agentes, de hecho, serían procesados por algunas de las atrocidades más espantosas perpetradas cuando la dictadura tocaba a su fin, incluidos el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez, en febrero de 1982. En marzo de 1985, agentes de Carabineros degollaron a tres profesionales comunistas. Entre 1978 y 1985, según estimaciones de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, hubo un total de ciento sesenta personas muertas a consecuencia de las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen. «En este informe se atribuye la mayor parte de ellas a la CNI».[52]

---

* Desaparecidos: en español en el original. (N. del T.)

Documento 1. Departamento de Estado, secreto, Memorando para Henry Kissinger: «Ejecuciones en Chile» y «Hoja informativa sobre derechos humanos en Chile», 27 de noviembre de 1973. (Páginas 1, 2 y 5).

Documento 2. Agencia de Inteligencia de Defensa, Reporte: «Organigrama de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina)», 17 de junio de 1975. (4 páginas).

Documento 3. CIA, secreto: Reporte «Chile: Violaciones a los derechos humanos», 24 de mayo de 1977. (2 páginas).

4

Consolidación de la dictadura: Estados Unidos y el régimen de Pinochet

Puede documentarse que el régimen actual de Chile es militarista, fascista, tiránico y asesino.

Memorando de disensión interno del Departamento de Estado, febrero de 1974.

En Estados Unidos, como sabe, secundamos lo que está tratando de hacer. (...) Queremos ayudarlo, y no obstruir su labor.

Henry Kissinger, conversación privada con Augusto Pinochet 8 de junio de 1976.

«El gobierno de Estados Unidos desea expresar su deseo de cooperar con la Junta Militar y respaldarla de cualquier modo que se estime necesario», declara un cablegrama confidencial de la oficina de estrategia de la Casa Blanca fechado el 13 de septiembre de 1973. «Hemos recibido con agrado el deseo expresado por la Junta y transmitido por el general Pinochet de estrechar los lazos entre Chile y Estados Unidos».[1] Con este mensaje secreto, el gobierno de Nixon se adhirió de forma oficial al sangriento golpe de Estado perpetrado en Chile. La Casa Blanca ordenó al embajador Nathaniel Davis que hiciese conocer su postura al general insurrecto «tan pronto se ofrezca la oportunidad». Davis respondió al día siguiente.

«Pinochet», rezaba el cablegrama, «ha expresado su más sincero agradecimiento y su deseo de mantener el contacto en privado».

De cara al público, la Casa Blanca calificó de neutral su posición con respecto al golpe. «Tomamos la decisión de no decir nada que pudiese indicar apoyo ni rechazo, de tratar de evitar algo semejante a lo sucedido en Brasil en 1963, cuando nos precipitamos a la hora de reconocer al nuevo gobierno», alegó Kissinger ante el Comité Senatorial de Relaciones Exteriores durante la comparecencia en que se ratificó como secretario de Estado el 17 de septiembre. Sin embargo, en privado, tal como corroboran los diversos cablegramas desclasificados, los funcionarios estadounidenses garantizaron a los dirigentes militares de Chile el respaldo total de Washington en relación con su violenta toma del poder. El aluvión de cadáveres que llegaba a los depósitos, la condena nacional e internacional del derramamiento de sangre, las severas críticas procedentes del Congreso de Estados Unidos y las acusaciones generalizadas de implicación clandestina en el golpe dirigidas al gobierno estadounidense llevaron a la administración de Nixon a encubrir la cálida bienvenida brindada al nuevo régimen militar chileno y evitar por todos los medios que se identificase con él a la Casa Blanca.

En un principio, el gobierno de Nixon mantuvo sus comunicaciones con Pinochet a través de un intermediario de la embajada: el oficial del grupo militar estadounidense Carlos Urrutia. Este se reunió en secreto con el general chileno al mediodía del 12 de septiembre y recibió un informe del estado en que se hallaban las operaciones de limpieza, se puso al corriente de los planes políticos de la Junta y supo de la necesidad que tenía esta de ayuda económica y militar estadounidense. Durante el encuentro hablaron también de «lo delicado de la cuestión de ponerse en contacto» y de la demora del reconocimiento formal del nuevo régimen por parte de Washington. Tras la reunión, Urrutia comunicó el contenido de la conversación al embajador Davis, quien cablegrafió a la Casa Blanca para informar que Pinochet se había mostrado «comprensivo y relajado en relación con el asunto del reconocimiento, y ha admitido que, obviamente, no deberíamos ser los primeros en hacerlo».[2]

De hecho, Washington esperó dos semanas para reconocer formalmente —y de un modo discreto— al régimen de Pinochet el 24 de septiembre, una vez que lo habían hecho más de una docena de naciones diferentes. «Tenemos el firme convencimiento de que no faltan consideraciones nacionales e internacionales que hagan muy recomendable este breve retraso por el interés del nuevo GC [gobierno de Chile] y por el nuestro propio», comunicó a Davis un cablegrama procedente de Kissinger y su subordinado más inmediato en el CSN, Brent Scowcroft, cuando el embajador preparaba un encuentro furtivo, «extraoficial», con el ministro de Relaciones Exteriores del régimen una semana después del golpe de Estado. «Entre tanto», proseguía, «queremos que el GC conozca nuestro ferviente deseo de cooperar estrechamente con él y asentar una base firme para una relación cordial y fecunda»[3].

A raíz del golpe de Estado, la estrecha colaboración de la que hablaba Kissinger adoptó la forma de un respaldo diplomático entre bastidores, así como de una postura favorable a la prestación de la ayuda necesaria para proseguir los actos de represión. El 14 de septiembre, la delegación estadounidense en las Naciones Unidas recomendó encarecidamente al nuevo gobierno chileno que enviase a «un representante de altura, presencia y carácter despierto a Nueva York sin dilación», con el objetivo de que ofreciese una justificación convincente del derrocamiento de Allende y rebatiera las duras críticas de soviéticos y cubanos. Los funcionarios estadounidenses en la ONU trabajaron codo a codo con los diplomáticos chilenos a fin de presentar el golpe como algo sumamente positivo. En Santiago, el embajador Davis instó a los miembros de la recién establecida Junta Militar a «reclutar» la ayuda de los democristianos con el fin de solventar «el problema de imagen» surgido con respecto al resto del mundo. La idea desembocó en una gira de los integrantes más destacados del Partido Demócrata Cristiano de Chile por América Latina y Europa concebida para justificar el golpe en público y financiada en secreto por la CIA.

El 15 de septiembre, el agregado estadounidense de la Fuerza Aérea recibió una solicitud del director de logística de la aviación chilena relativa a la provisión de mil bengalas «para ser utilizadas como iluminación durante las operaciones militares emprendidas contra los grupos extremistas», así como

otros tantos cascos de acero para los soldados. «Estimamos conveniente satisfacer esta petición, del modo más discreto posible», cablegrafió el embajador Davis a Washington.[4] En otro cablegrama con fecha del mismo día, argüía que el hecho de proporcionar el equipo solicitado constituiría una prueba de respaldo indudable. «Es evidente que el nuevo gobierno chileno está sometido a grandes tensiones y en este momento está decidiendo con qué aliados puede contar. Una negativa por nuestra parte podría tener serias repercusiones y establecer un modelo de actitud que deberíamos evitar, a pesar de los riesgos que pueda traer consigo el hacerlo».[5] Dos semanas más tarde, Davis advirtió al Departamento de Estado que los militares chilenos habían pedido un «consejero especialista en centros de detención» y necesitaban respaldo técnico, así como tiendas y demás alojamientos portátiles, dado que estaban explorando nuevos emplazamientos para el traslado de miles de prisioneros procedentes del Estadio Nacional. El embajador reconocía que «enviar asesores que ayuden a establecer campos de detención puede dar lugar a evidentes problemas políticos», pero recomendó a Washington el envío del equipo necesario para la creación de alojamientos temporales sin especificar su uso. «El Departamento puede querer considerar la viabilidad de ofrecer ayuda material en forma de tiendas, mantas, etc.», aconsejó, «que no tiene por qué estar destinado de un modo público y específico a un uso penitenciario».[6]

Desde un primer momento, Washington hubo de enfrentarse a las presiones políticas que comportaba la vinculación de la política externa de Estados Unidos a un régimen despiadado. A medida que los medios de comunicación importantes como The New York Times empezaron a hablar de miles de víctimas mortales, los integrantes del gobierno de Nixon se vieron enfrentados a interrogatorios cada vez más severos procedentes tanto de la prensa como del Congreso. «En algunas de estas comparecencias ante el Congreso me preguntaban cosas como: “¿Cuántas personas han muerto asesinadas?”, o: “¿Es verdad lo que se rumorea?”», confió a Kissinger el vicesecretario Kubisch durante una reunión de su gabinete celebrada el 1 de octubre. Con todo, el nuevo secretario de Estado dejó bien clara cuál era su postura: Estados Unidos no defendería las atrocidades cometidas por el nuevo régimen, pero tampoco debía «respaldar movimientos contrarios a él y dar la impresión de que nos estamos desvinculando de los chilenos». «Creo», amonestó a sus subordinados, «que deberíamos mostrarnos más

comprensivos con nuestra política: por desagradables que puedan resultar sus actos, este gobierno es preferible al de Allende para nosotros».[7]

Ayuda a la consolidación del régimen: Respaldo manifiesto

El gobierno de Nixon se movilizó con rapidez para ayudar a los militares chilenos a afianzarse en el poder. Tres días después del golpe, el Grupo de Acción Especial de Washington (WSAG, por su sigla en inglés, destacamento integrado por miembros de diferentes organismos) se reunió para evaluar las «necesidades de ayuda a Chile a corto, medio y largo plazo», según un informe secreto elaborado para el secretario de Estado. La CIA tampoco tardó en comenzar a reunir datos acerca de las reservas monetarias y deudas pendientes del país latinoamericano. Una semana después del golpe estuvieron listos los programas de acción concebidos para satisfacer las necesidades económicas, monetarias y militares de Chile. El 20 de septiembre, Kissinger presidió una reunión del WSAG en la que se decidió dar la orden al embajador Davis de «hablar con la Junta Militar (...) para expresarle nuestra buena voluntad (...) nuestra intención de reconocer [el régimen] y cuándo lo haremos, y la fecha en que se hará llegar la provisión de alimentos, así como autorizar al embajador para que discuta con la Junta las necesidades de Chile a medio y largo plazo».[8]

Casi de la noche a la mañana, Washington volvió a abrir el grifo que hacía posible la ayuda económica bilateral y multilateral a Santiago. Como la ayuda militar, la económica —directa o indirecta— aumentó de un modo espectacular y en todos los aspectos tras el golpe de Estado, lo que supuso el fin del «bloqueo invisible» que habían impuesto Nixon y Kissinger para acabar con el gobierno de Allende. «Es evidente que Chile va a necesitar una ayuda considerable», declaró el vicesecretario Kubisch al Congreso el 29 de septiembre, «y, si adopta un gobierno sensato, doy por hecho que le será concedida».

El 6 de octubre, el Departamento de Agricultura estadounidense otorgó al régimen de Pinochet veinticuatro millones de dólares en concepto de créditos para la compra de trigo y así aliviar la escasez de alimentos, algo que se había negado con anterioridad al gobierno de Allende y que, en el

caso de Pinochet, volvió a repetirse en noviembre. «El 14 de noviembre anunciamos el segundo crédito de la CCC [Commodity Credit Corporation (Sociedad de Crédito a la Producción Agrícola)] a Chile, consistente en US$ 24.000.000 destinados a la obtención de maíz para piensos», según informaron a Kissinger sus ayudantes en un documento secreto adjunto al memorando secreto «Ejecuciones chilenas», aún sin revelar, en el que se le alerta de los cientos de asesinatos perpetrados por el régimen durante sus primeras semanas de existencia.

Estos créditos se completaron con espectaculares asignaciones del programa de Alimentos para la Paz de la USAID, conocidos como títulos I y II de la Ley Pública (LP) 480. Durante los tres primeros años de gobierno militar, Chile recibió 132 millones de dólares en concepto de ayudas de dicho programa, frente a los 14,7 millones que se le otorgaron durante los tres años anteriores al golpe. El gobierno de Pinochet no solo obtuvo una ayuda mucho más cuantiosa por parte de Estados Unidos, sino que también un claro tratamiento preferente en comparación con el resto de los países latinoamericanos. Durante los años fiscales de 1975 y 1976, Chile se benefició del 80 por ciento de la ayuda concedida para toda Hispanoamérica en virtud del título I de la Ley Pública 480, aun a pesar de que el país tan solo poseía el 3 por ciento de la población de la región. «En lo tocante a la LP 480, tengo entendido que Chile está recibiendo dos tercios del total destinado a Latinoamérica», declaró Kissinger al ministro de Relaciones Exteriores chileno Patricio Carvajal en el transcurso de una reunión celebrada el 29 de septiembre de 1975.[9] Durante este mismo período, el país se benefició de más de treinta millones de dólares de la USAID por concepto de garantías para la construcción de viviendas, frente a los cuatro millones que se repartieron entre el resto de Centroamérica y Sudamérica.[10]

Libres de la obstrucción estadounidense, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo volvieron a poner en marcha sus programas crediticios con Chile. Mientras que entre 1971 y 1973 el BID prestó a Chile un total de 11,6 millones de dólares, durante los tres primeros años del gobierno de Pinochet esa cifra ascendió a 237,8 millones de dólares. El Banco Mundial, que no había concedido crédito alguno al de Allende, autorizó entre 1974 y 1976 préstamos por un valor de 66,5 millones de

dólares. Cuando Manuel Trucco, embajador del general en Washington, se quejó ante Kissinger y el vicesecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, William Rogers, de que «estamos experimentando ciertos retrasos con el Banco Mundial», este último le garantizó que Chile «no debería tener ningún problema. Estamos presionando bastante a la burocracia».[11]

Los préstamos de la banca multilateral obtenidos gracias a la insistencia de Estados Unidos ascendían a «cientos de millones», según escribió a Rogers el embajador David Popper a finales de julio de 1975. A esto hay que sumar «los cientos de millones que hemos ahorrado a Chile merced a nuestra participación en los planes de reestructuración de la deuda». Tras desaconsejar con encarecimiento toda negociación de esta durante la presidencia de Allende, Estados Unidos alentó una tras otra después de que llegara al poder Pinochet. «Hemos encabezado la renegociación de la deuda del Club de París», señalaba cierto memorando secreto enviado a Rogers. En 1975, el gobierno estadounidense accedió a reestructurar los casi cien millones de dólares que debía Chile a los bancos de la nación.

Estados Unidos, tal como puede constatarse en los archivos del Departamento de Estado que se han hecho públicos, había adoptado la política de «mantener y fortalecer» el nuevo régimen de Pinochet. De hecho, la generosidad de Washington permitió a la Junta Militar superar con gran rapidez la escasez de alimentos que había atormentado a Chile en tiempos de Allende, estabilizar la economía y congraciarse con las clases media y alta —todo lo cual contribuyó a que se consolidara en el poder—. Estados Unidos había prestado una «ayuda vital en extremo a los chilenos», observó el embajador Popper en un importante documento de julio de 1975 en el que abordaba la política seguida por su gobierno. «Ellos son muy conscientes de ello, y no dudan en expresar su agradecimiento».[12]

La prodigalidad económica de Washington permitió la adquisición de armamento del exterior. Una vez en el poder, los militares chilenos comenzaron a comprar tales mercancías de forma compulsiva y alcanzaron acuerdos con Estados Unidos con el objetivo de acelerar la entrega de las armas que se habían encargado antes del golpe, amén de otras nuevas cuyo coste ascendía, junto con el de las piezas de repuesto, a más de cien

millones de dólares. Solicitaron tanques M-60 y cazas supersónicos F-5, así como complejos sistemas de defensa antiaérea, misiles TOW y diferentes tipos de munición. Asimismo, pidieron equipos que podían ser empleados de forma directa en sus actos de represión, como vehículos blindados para el transporte de personal, fusiles sin retroceso, vehículos todoterreno, camiones, equipos antidisturbios y sistemas de comunicación. Por otra parte, pidieron una solicitud de doce millones de dólares en créditos militares al extranjero, a fin de comprar «el equipo necesario para organizar veintitrés “unidades básicas” especiales de contrainsurgencia», pero tuvieron que retirarla a continuación.[13] Sin embargo, el 28 de diciembre de 1973, el Departamento de Estado comenzó a conceder licencias de exportación para la venta comercial de armas mortíferas, incluidos 2.500 fusiles M-16, 1.600 metralletas y 2,2 millones de cartuchos que los chilenos pagaron en efectivo. Tres años después del golpe de Estado, el Chile de Pinochet se había convertido en el quinto cliente más importante del mundo —después de Israel, Arabia Saudí, Jordania e Irán, compradores difíciles de superar— de Estados Unidos en lo referente a la compra de material militar.[14]

Ayuda a la consolidación del régimen: Respaldo encubierto

El respaldo secreto brindado por Estados Unidos ayudó también a Pinochet a mantener el violento control que ejercía sobre el poder. La base de la CIA en Santiago, que contaba con no pocas conexiones con los grupos militares y civiles que se hallaban tras la Junta, se encontraba en una situación idónea para ofrecer un apoyo decisivo al régimen, toda vez que podía extender y configurar de nuevo los proyectos de acción encubierta diseñados en contra del gobierno electo antes del 11 de septiembre para contribuir así a la consolidación del nuevo régimen militar. Pasado el día del golpe, la CIA comenzó lo que sus cablegramas llamaban un «esfuerzo para fortalecer el nuevo Gob. y hacerlo eficaz».[15] Entre otras iniciativas se incluían la de corregir las operaciones políticas y propagandísticas secretas y la de conseguir nuevos «agentes de influencia» al interior de las estructuras de poder surgidas tras el golpe. La base santiaguina estableció también estrechas relaciones con los cuerpos de seguridad de Pinochet, y

proporcionó formación y respaldo organizativos a la Dina una vez que esta comenzó a operar.

En el momento del golpe de Estado, el puesto de operaciones en Santiago tenía a su disposición una nutrida plantilla formada por numerosos funcionarios veteranos y una serie de agentes nuevos enviados poco antes del derrocamiento de Allende. Entre otros se hallaban el director del puesto, Raymond Warren, que residía en el número 952 de la avenida Américo Vespucio y se hacía pasar por funcionario político de la embajada; el subdirector, Donald Winters, residente en el número 1275 de Tobalaba, que también fingía ser funcionario de la embajada, y John Devine, agente encargado de las operaciones mediáticas y propagandísticas de la CIA en Chile.[16] Por su parte, James Anderson, también miembro de la Agencia, trabajaba de vicecónsul, y como tal, por irónico que pueda parecer, tenía que manejar los casos de ciudadanos estadounidenses detenidos, maltratados y hechos desaparecer por los militares chilenos tras el golpe de Estado.

Después del 11 de septiembre, la base santiaguina se apresuró a ofrecer ayuda material a la Junta; sin embargo, el aluvión de acusaciones que recibió la Agencia con respecto a su implicación en la toma del poder por parte de los militares hizo que la oficina central de Langley pospusiera toda colaboración directa. «Por desgracia, [tachado] ya ha tratado de esta cuestión con la Junta Militar», observó el director de la División del Hemisferio Occidental de la CIA, David Atlee Phillips, en un cablegrama enviado a Santiago el 3 de octubre. «Las actividades operativas de la Agencia en Chile se han convertido en estos momentos en el principal objetivo de las investigaciones del Congreso, y suponemos que los interrogatorios no van a cesar en algún tiempo, en vista, sobre todo, del interés y la hostilidad cada vez mayores con que se ocupa la prensa de las medidas represivas adoptadas por la Junta». La CIA, según añadió, «debe ofrecer respuestas sinceras a las preguntas que se le hagan acerca de las operaciones actuales y, por lo tanto, no puede brindar su apoyo a la Junta Militar».[17]

En lugar de eso, la Agencia se centró en ayudar a limpiar la imagen sangrienta que ofrecía la Junta en el exterior y mejorar su popularidad

dentro de Chile. El 19 de septiembre, el embajador Davis aprobó una solicitud de la base en Santiago relativa a la adquisición de lo que David Atlee Phillips describió como una «pequeña red» de medios de comunicación, cuya labor sería crucial «en la organización de una campaña propagandística dirigida a hacer populares los programas de la Junta».[18] Dos colaboradores de la Agencia ayudaron a la cúpula militar del régimen a redactar el Libro blanco del gobierno de Chile, obra orientada al público que fue objeto de una amplia distribución entre la prensa y los políticos de Estados Unidos y otras naciones.[19] Por otra parte, la CIA siguió asegurando su medio más importante, el imperio periodístico de El Mercurio, convertido en la voz principal de la propaganda favorable al régimen en Chile. Por norma, este diario concedía la mayor importancia a las «reformas» militares y reducía a la mínima expresión las noticias referentes a las actividades represivas.

Antes del golpe, el presupuesto de que disponía para el año fiscal 1974 el proyecto propagandístico de la CIA en Chile incluía lo que la Agencia llamaba «un aluvión de críticas contra el gobierno» de Allende encaminado a explotar «cualquier posible punto de fricción». En él se aprobó la financiación secreta de El Mercurio y sus «mecanismos de propaganda» hasta abril de 1974. Tras la llegada al poder de los militares, sin embargo, el centro de operaciones en Santiago y la División del Hemisferio Occidental consideraron necesario ampliar el presupuesto para incluir una «cuantiosa» subvención hasta finales de junio que permitiría al principal portavoz del régimen militar una transición tranquila una vez que se interrumpiese el respaldo económico secreto por parte de Estados Unidos. La financiación encubierta resultaba «esencial para mantener la confianza y la colaboración continuada de los [confidentes] y, a través de ellos, nuestra capacidad para influir en la Junta y en la opinión pública chilena», según un informe contrario al establecimiento de una fecha límite para poner fin al proyecto propagandístico.[20] Este no solo había «desempeñado un papel significativo en la creación del ambiente necesario para el golpe militar», recordó a sus superiores David Atlee Phillips en un memorando con fecha del 9 de enero de 1974, sino que también resultaba fundamental a la hora de promover la propaganda nacional e internacional propicia al régimen de Pinochet. «Desde el golpe de Estado», escribió, «estos medios de comunicación han prestado su apoyo al nuevo gobierno militar. Han tratado

de presentar a la Junta del modo más positivo ante el público chileno y han ayudado a los corresponsales extranjeros en Chile a obtener datos relativos a la situación del país. (...) El proyecto, por lo tanto, resulta de vital importancia para permitir a la base en Santiago influir en la opinión pública chilena en favor del nuevo gobierno» (véase el documento 1).

Ante la presión recibida por parte del Departamento de Estado para que pusiese fin a los proyectos secretos emprendidos antes del golpe de Estado, la División del Hemisferio Occidental solicitó —y obtuvo— una suma adicional de 176.000 dólares para «ofrecer a las múltiples caras de este mecanismo de propaganda la oportunidad de establecer fuentes alternativas de financiación» y garantizar a los agentes de propaganda captados por la CIA en Chile un incentivo para seguir colaborando con el puesto santiaguino. Esta cantidad adicional ayudó a amortiguar el revés que hubiese supuesto de otro modo la progresiva retirada de la financiación clandestina de Estados Unidos al imperio mediático de Agustín Edwards. A finales de febrero de 1974, los agentes del puesto de operaciones se reunieron con representantes de El Mercurio para ponerlos al corriente de que las circunstancias existentes tras el golpe «hicieron imposible que continuásemos subvencionando los medios [tachado] y que deseábamos dejar de asumir toda responsabilidad en lo referente a ellos». De este modo, se informó a los chilenos que, cuando el año fiscal tocase a su fin, «cesaría (...) todo respaldo en forma de subvención». Para estos colaboradores chilenos que tanto tiempo llevaban trabajando para la CIA, «la noticia supuso un verdadero golpe y una gran decepción», tal como declara un cablegrama secreto remitido a Phillips el 1 de marzo de 1974.

A través de sus programas de acción política, la CIA también promovió de un modo clandestino la imagen del nuevo régimen. En octubre de 1973, la base santiaguina financió en secreto la visita a distintos lugares del mundo de un grupo de democristianos destacados con el fin de justificar el derrocamiento militar. En este viaje, que duró más de un mes, participaron dirigentes del partido como Enrique Krauss, Pedro Jesús Rodríguez, Juan de Dios Carmona y Juan Hamilton.[21] «El partido concibió el plan de enviar un "escuadrón de la verdad" a cierto número de capitales latinoamericanas y europeas con el fin de exponer las circunstancias que provocaron el golpe de Estado en Chile y explicar la asociación del PDC

con la Junta Militar en tal situación», manifestaba la Dirección de Operaciones de la CIA en un memorando secreto destinado al Comité 40, presidido por Kissinger. «Por desgracia, el partido no ha tenido tiempo para recuperarse de la sequía financiera sufrida en tiempos de Allende, y por lo tanto», era necesario proporcionar a sus integrantes ayuda monetaria de modo clandestino.

La ayuda que recibieron en secreto los democristianos y otros proyectos de acción política dio pie a un debate largo y, en cierto modo, extraordinario entre los altos funcionarios estadounidenses de la CIA y el Departamento de Estado. En el momento del golpe, el puesto en Santiago había suministrado solo trece mil dólares del millón autorizado el 20 de agosto el Comité 40 para sufragar tales operaciones. En un principio, la CIA y el embajador Davis creían seguir teniendo autoridad para distribuir el resto, aun después de lo sucedido el 11 de septiembre. Sin embargo, en Washington, la CIA y el Departamento de Estado determinaron anular la vigencia de la autorización del 20 de agosto. La «situación ha cambiado de un modo tan drástico desde la aprobación del Comité 40 que se hace necesario empezar desde cero», tal como cablegrafió la oficina central de Langley a la base santiaguina el 21 de septiembre. En consecuencia, había que revisar y volver a considerar los proyectos que se hallaban en marcha, así como aprobar de nuevo los gastos posteriores al golpe. A principios de octubre, la CIA presentó al Comité 40 su primera solicitud de «Ayuda inicial tras el golpe de Estado» (véase el documento 2).

El 15 de octubre, el Comité 40 dio el visto bueno a la financiación provisional de los proyectos propagandísticos diseñados para mejorar la imagen de la Junta. Entonces, la CIA procedió a renovar y rectificar las subvenciones destinadas a los partidos políticos a los que había ayudado a derrocar a Allende. El 26 de diciembre, la Agencia propuso reestructurar el presupuesto para el año fiscal 1974 a fin de respaldar al Partido Nacional —descrito como «el partido del gobierno»— con 580.666 dólares. Según la propuesta de la CIA, el PN «considera que, si logra convertirse en el abanderado del gobierno, no necesitará más respaldo financiero de Estados Unidos».

La Agencia también sugirió reanudar la financiación encubierta del Partido Demócrata Cristiano, incluidos los pagos prometidos antes del golpe de Estado, junto con una subvención clandestina que permitiese al partido, rayano en la bancarrota, subsistir durante el año siguiente al golpe. A finales de noviembre, la CIA trató de ajustar el presupuesto para el programa de acción política del PDC durante el año fiscal 1974 a 685.150 dólares y solicitó otros ciento sesenta mil para asegurar al partido desde diciembre de 1973 hasta abril de 1974.[22] Ante la reserva que mostraba el Departamento de Estado respecto de la continuación de los proyectos de acción política en Chile, la Agencia remitió algunas semanas más tarde al Comité 40 una propuesta secreta titulada: «Solicitud de [ciento sesenta mil dólares] para el Partido Demócrata Cristiano chileno». En ella se pedía financiación para al menos tres meses y un «pago final» que permitiera al PDC pagar su nómina a principios de 1974 e independizarse tras doce largos años de ayuda secreta por parte de Estados Unidos.[23]

El debate establecido en torno a la mencionada cantidad en lo más alto del escalafón del Departamento de Estado presidido por Kissinger da fe de que la determinación de Estados Unidos de respaldar un régimen militar brutal se hallaba por encima incluso del hecho de prestar una ayuda mínima al partido que, para Washington, había encarnado la mayor esperanza para la democracia chilena desde tiempos de la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy. Muerto Allende, las razones que justificaban la intervención secreta para «preservar las instituciones democráticas de Chile» parecieron dejar de importar a los estadistas norteamericanos, aun a pesar de que el régimen que lo derrocó no estuviese haciendo otra cosa que desmantelar de forma sistemática esas mismas instituciones.

Solo un funcionario del Departamento de Estado —un analista de la Oficina de Inteligencia e Investigación (INR, por su sigla en inglés) llamado James Gardner, que trabajaba de enlace con la CIA en las operaciones secretas— pareció captar la clara hipocresía de la postura estadounidense. «Hay pruebas de sobra de que el régimen actual de Chile es militarista, fascista, tiránico y asesino», declaró en febrero de 1974 en un memorando secreto con el que pretendía persuadir a sus superiores de la INR de respaldar la ayuda secreta al PDC chileno, y agregaba:

> También creo que no es menos evidente que el PDC es una organización política decididamente democrática, tal vez la única de toda Latinoamérica. El coste financiero que nos piden que paguemos para tratar de hacer que el partido sobreviva es pequeño. (...) La asistencia prevista solo trataría de fortalecer un elemento de la sociedad chilena que quizá sea capaz de moderar los excesos del régimen. Me es imposible creer que nuestra aceptación de la Junta Militar debe comportar nuestra identificación pasiva con sus más grotescas aberraciones.

Gardner aducía asimismo una razón histórica:

> Con la excepción de la ayuda que hemos brindado en el pasado a los elementos democráticos chilenos, no conozco ningún caso en el que nuestra intervención [encubierta] haya tenido otro efecto que el de favorecer a los sectores más conservadores o reaccionarios. Jamás hemos hecho nada en contra de la derecha, por extremista que esta fuese. Si nos negamos a ayudar al PDC chileno (...) habremos conservado intacto un récord en el que me complacería ver al menos un fallo, más aún si con ello se viesen beneficiados nuestros intereses. [24]

Hubo otros funcionarios estadounidenses que secundaron la solicitud de una ayuda secreta mínima para el PDC. En una reunión con la CIA celebrada en noviembre de 1973, el vicesecretario Harry Shlaudeman arguyó que una subvención clandestina permitiría que los democristianos respaldasen el nuevo régimen, aunque «debería concederse entendiendo que, en una fecha u otra, el partido estará acabado». Hubo de reconocer que, si se ponía fin a la ayuda en aquellos momentos, «no lograríamos otra cosa que causarnos problemas a nosotros mismos, ya que parecería que lo único que nos interesaba era derribar a Allende». La postura de la CIA, por otra parte, resultaba muy convincente: se hacía necesario respaldar al PDC si se quería que este pudiese competir en lo político con los partidos de izquierda en el supuesto de que Pinochet devolviese el poder a la sociedad civil. De lo contrario, «el cese súbito de la ayuda financiera prestada por el gobierno de Estados Unidos agotaría los ya mermados recursos del PDC antes de que tuviese la oportunidad siquiera de encontrar fuentes de ingresos alternativas», señalaron los miembros de la Agencia, «y, lo que es quizá

más importante, afectaría de un modo muy negativo a las relaciones que mantiene nuestro gobierno con el partido».[25] Tampoco carecía de peso el argumento del embajador Popper, según el cual el respaldo que se prestase a los democristianos no haría sino dar amparo a la Junta Militar. Tal como expuso en un cablegrama, la financiación encubierta «ayudaría a influir al PDC para que fortaleciese su política de mantener relaciones correctas con la Junta, secundar sus objetivos constructivos y evitar por todos los medios una ruptura declarada con el gobierno».[26]

Sin embargo, a los más altos ayudantes de Kissinger les preocupaba que Pinochet pudiese entender como un insulto cualquier ayuda secreta prestada a las fuerzas políticas con las que el régimen estaba tratando de acabar. Por vez primera tras más de un decenio de decidido intervencionismo clandestino, los funcionarios estadounidenses aseguraban tener miedo de que se acusara a Washington de «entrometerse» en los asuntos internos de Chile. En un encuentro entre la ARA y la CIA celebrado el 23 de noviembre, el vicesecretario Kubisch expresó su oposición, «en principio», a las operaciones políticas secretas, en especial dado que «ahora nos hallamos ante una situación diferente en Chile». Las actas de la reunión dan fe de cuál fue su postura:

> La cuestión, en estos momentos, era si resultaba en verdad imprescindible, dado el abrupto cambio experimentado por Chile y los problemas de seguridad del país, ajustar la situación política con el mero objeto de ejercer un influjo moderador y ayudar a la oposición a mantenerse con vida. Le parecía difícil encontrar razones de peso para hacer tal cosa, más aún cuando daba la impresión de que estuvieran surgiendo problemas entre la Junta Militar y el PDC, y habida cuenta de que el secretario había dejado bien claro que el cambio de régimen nos beneficiaba en gran medida y que deberíamos hacer cuanto estuviese en nuestras manos por ayudar a la Junta a desempeñar con éxito su labor. Teniendo en cuenta los comentarios del secretario, no consideraba oportuno recomendar el respaldo de ningún elemento chileno que no se identificase por entero con la Junta.[27]

En opinión de Kubisch, si los militares descubrían que Estados Unidos seguía brindando apoyo en secreto a los partidos democráticos, «se

preguntarían, naturalmente, qué diablos estamos haciendo», tal como hizo saber a sus colegas el 23 de noviembre. «Si pudiésemos decir que nuestro programa terminó con el derrocamiento de Allende», concluyó, «nuestra postura sería segura». En un cablegrama enviado por la oficina central de la CIA a Santiago para informar de la reunión, los miembros de la Agencia se quejaban de que Kubisch siguiese «invocando al fantasma de los serios problemas que surgirían en caso de que la Junta descubriese que estábamos financiando el PDC», y pedían a la base santiaguina que enviara «cualquier argumento nuevo o en particular convincente en favor de la propuesta, ya que es obvio que vamos a necesitar contar con la mejor munición posible».

El debate interno planteado entre la CIA y el Departamento de Estado en torno a la financiación secreta de los democristianos se prolongó hasta bien entrado el otoño chileno de 1974 sin que llegara a resolverse. El 4 de abril, el director de la Oficina de Inteligencia e Investigación (INR), William Hyland, elaboró un memorando en el que se oponía a lo que llamó «un asunto sucio (...) propiciado por el impulso de la acción burocrática y encubierta». En su opinión, debía informarse a Kissinger de que cualquier pago efectuado al PDC «nos expondría a la reacción del Congreso ante tan continuada "intromisión" en Chile». «No entiendo», añadía, «por qué seguimos respaldando a un partido político que, en efecto, se opone al gobierno que, según doy por hecho, estamos secundando nosotros». Sin embargo, después de que el ex presidente chileno Eduardo Frei tratara el delicado asunto de la financiación clandestina con el embajador Popper durante una reunión celebrada el 18 de abril, la embajada envió —a través de la CIA— un cablegrama especial por el que se solicitaba el reembolso de los fondos que había gastado el PDC «durante los días culminantes de la lucha de la oposición civil contra el gobierno de Allende». Popper aducía que «nos conviene mantener una relación mínimamente satisfactoria con el PDC y evitar que se nos acuse de obrar de mala fe. Nos han hecho ver», añadía, «que si no cumplimos con nuestro compromiso [tachado], tal vez hagamos que se deterioren los contactos de que disponemos en el presente». [28]

La intercesión del embajador propició, al menos, un acuerdo: dado que la CIA había prometido financiar al PDC antes del golpe y el partido había adquirido ciertos compromisos basados en dicha promesa, la Agencia iba a

efectuar en secreto un último desembolso —ajustado, teniendo en cuenta la inflación— para que los democristianos pudiesen cumplir los contraídos entre el 1 de julio y el 10 de septiembre. De ese modo, los funcionarios estadounidenses podrían negar haber llevado a cabo operaciones políticas clandestinas tras el golpe si el Congreso de Estados Unidos o la Junta Militar chilena les preguntaban al respecto. «En mi opinión», recomendó el vicesecretario Kubisch a Joseph Sisco, ayudante de Kissinger, el 7 de mayo, «deberíamos autorizar el pago de los [cincuenta mil dólares], entendiendo, claro, que tal cosa supondrá el final de nuestra ayuda encubierta al PDC». En un memorando de acción secreto del 11 de junio titulado «Liquidación de las cuentas pendientes con Chile» —al que se había añadido la anotación «Fuera del sistema», para mantenerlo oculto a la burocracia del CSN—, el gabinete de Kissinger daba su visto bueno al «acuerdo entre el Departamento de Estado y la CIA» en relación con los compromisos clandestinos adquiridos con anterioridad al golpe de Estado en Chile.[29] El 24 de junio, el Comité 40 autorizó este último desembolso.[30]

Oficialmente, el programa de intervención clandestina emprendido por la CIA doce años antes con el objetivo de apoyar a los democristianos concluyó el 30 de junio de 1974, cuando la Agencia puso en marcha diversos «planes de liquidación» para cerrar viviendas clandestinas, cuentas bancarias y otros mecanismos secretos empleados en esta operación de financiación. Otro tanto puede decirse de las operaciones encubiertas concebidas para respaldar a otros grupos políticos, como el Partido Nacional, el Partido Democrático Radical y el Partido de Izquierda Radical. Hacia finales de junio, la CIA había dado también por terminadas las «actividades de propaganda encubierta» llevadas a cabo en torno a El Mercurio, proyecto que está considerado como el más próspero e influyente de los emprendidos en secreto en Chile con el fin de secundar la toma del poder por parte de los militares.

Una vez bien instaurado el régimen de Pinochet, la Agencia se replanteó la función que había de desempeñar con respecto a Chile. Fue entonces cuando la base en Santiago dejó de «centrar sus actividades operativas y presupuestarias en la intervención clandestina para decantarse por otras que no seguían esta orientación», tal como describían los documentos internos de la CIA la transformación experimentada tras el golpe. Para la segunda

mitad de 1974, la Agencia centró sus operaciones en las «relaciones de enlace» con los cuerpos de seguridad de Chile y en particular con la policía secreta, la Dirección de Inteligencia Nacional.

La CIA y la Dina

«Tras el golpe de Estado, la CIA reanudó sus relaciones de enlace con las fuerzas de seguridad e inteligencia del gobierno chileno», declaró el Comité Church en su informe Covert Action in Chile, 1963-1973. Durante más de dos décadas, esta alusión indirecta constituyó el único reconocimiento oficial del respaldo brindado por la Agencia Central de Inteligencia a la Dina y a otros órganos de inteligencia responsables de la represión ejercida durante los años iniciales del régimen. En su propio Covert Activities in Chile, publicado en septiembre de 2000, la Agencia amplió de un modo somero la descripción de estos «enlaces» con el gobierno de Pinochet: «La CIA ofreció a estos cuerpos asistencia en lo referente a la organización interna y al adiestramiento para combatir los actos de subversión y terrorismo procedentes del exterior». La ayuda clandestina, según cierto funcionario de los servicios de inteligencia, consistía en manuales, soporte técnico, metodología organizativa y programas de acción detallados.[31] De cualquier modo, lo cierto es que los lazos establecidos con la Dina iban mucho más allá de esta ayuda básica.

La CIA concibe estas relaciones de «enlace» con los servicios de inteligencia extranjeros como uno de sus secretos más sagrados, de modo que los detalles del respaldo que ofreció a la Dirección de Inteligencia Nacional continúan clasificados. Pero es claro que la CIA brindó una asesoría significativa para que la Dina se volviera la temida fuerza represiva en que se convirtió durante los primeros años de la dictadura. Para demostrar el compromiso de Estados Unidos con la consolidación del régimen militar, el general Vernon Walters, legendario subdirector del organismo, viajó a Santiago a mediados de febrero de 1974 para ofrecer ayuda encubierta de manera «discreta» a Pinochet de dicho respaldo. «Transmití los saludos del presidente [Nixon] y el secretario [Kissinger], al igual que nuestra amistad y apoyo, junto con nuestra comprensión de la importancia que tenía el éxito de sus esfuerzos para asegurar la

recuperación de Chile. Manifesté nuestro anhelo de ayudarle... y nuestro deseo de que fuera de manera discreta», informó Walters en un cable secreto «personal» a Kissinger.[32] «El general Pinochet dijo que le alegraba mucho escuchar esto, y oírlo de boca de un viejo amigo». Y agregó que «estaba encantado de que el liderazgo de Estados Unidos no compartiera las visiones que tenían de Chile The New York Times y The Washington Post» (véase el documento 3).

Pinochet informó entonces a Walters sobre la creación de «un nuevo servicio de inteligencia nacional [la Dina]», indicando al subdirector de la CIA que «su hombre clave en esto era un tal coronel [Manuel] Contreras». Pinochet «apreciaría nuestra ayuda durante el período de formación [de la Dina]», informó Walters a Kissinger, «y le dije que nosotros estaríamos muy contentos de recibir a Contreras o a quien fuera que nos visitara para determinar en qué podíamos ayudarlos». Poco después de esta reunión, la CIA invitó a Contreras a viajar secretamente a su cuartel general de Langley, Virginia.

El 4 de marzo, la CIA organizó un almuerzo al que asistieron Contreras, Walters y algunos funcionarios de la División del Hemisferio Occidental. El informe del prolongado encuentro que se remitió al centro de operaciones en Santiago constaba de un total de tres páginas, en las que se hacía constar cuáles eran los aspectos en que estaba dispuesta a colaborar la Agencia Central de Inteligencia. Sin embargo, años después, esta no haría público más que un párrafo en el que se señala que sus agentes insistían al coronel chileno en que le proporcionarían adiestramiento y respaldo, pero no si estaban dirigidos a «actividades que puedan ser interpretadas como "represión política interna"».[33] En agosto de 1974, según Contreras, llegó a Santiago un grupo de ocho especialistas de la CIA que tenía por objetivo adiestrar a oficiales de la Dina. Sin embargo, aún sigue sin revelarse cuánto tiempo permanecieron en el país y cuál era la naturaleza de su misión instructiva.

La CIA prestó asistencia a la Dina aun a pesar de que sus miembros tenían claro que no existía distinción alguna entre el respaldo ofrecido para hacer frente a los ataques externos y el brindado para llevar a cabo la represión interna. En ciertos documentos estudiados por el Comité Church aunque

nunca desclasificados, los funcionarios de la Agencia reconocían que, «aunque la mayor parte de la ayuda de la CIA a varios organismos chilenos estaba diseñada para contener la subversión procedente del exterior, no cabe duda de que podía adaptarse asimismo al control de las rebeliones internas».[34] En más de una ocasión, los funcionarios estadounidenses invocaron el fantasma de las atrocidades cada vez mayores perpetradas por la Dirección de Inteligencia Nacional contra los derechos humanos y se mostraron preocupados ante la posibilidad de que se acusara a la CIA de contribuir a la represión de la Dina. «Los estadistas y la CIA», manifestó la investigación de la propia Agencia, Covert Activities in Chile, «reconocían que tales relaciones exponían a la CIA a ser identificada con las operaciones internas de los servicios de enlace vinculadas a violaciones de los derechos humanos; sin embargo, determinaron que dicho contacto era necesario para llevar a cabo la misión de la CIA».

A causa de esta «misión», los agentes de la Agencia Central de Inteligencia se mantuvieron estrechamente vinculados a Contreras durante el período en que este dirigió la Dina, entre 1974 y 1977. La CIA calificó su relación de «correcta», pero «no cordial ni exenta de problemas». De cualquier modo, el Departamento de Estado y los miembros de la embajada la interpretaron de un modo diferente. Según el funcionario político de la embajada estadounidense John Tipton, la Agencia y la Dina «guardaban una estrecha relación», más aún desde la llegada del nuevo director del puesto en Santiago, Stuart Burton, quien fue a sustituir a Ray Warren a partir del otoño chileno de 1974. «Burton y Contreras solían organizar comidas campestres los domingos con sus respectivas familias», comunicó Tipton en una entrevista concedida a la periodista Lucy Komisar, durante la cual recordó también que la íntima armonía establecida entre ambos «se había extendido por toda la base» santiaguina.[35] En Washington, los memorandos de la sección chilena del Departamento de Estado tampoco ignoraban los estrechos lazos que unían al director de la Dina y al subdirector Vernon Walters. «El coronel Manuel Contreras se considera amigo del alma del general», informó el oficial de dicha sección.

Pinochet y Contreras se servían de este vínculo siempre que les era posible. Cuando, en julio de 1975, se intensificó la controversia política en torno a las violaciones de los derechos humanos cometidas por su gobierno después

de que el régimen suspendiese de improviso la visita de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, Pinochet autorizó a Contreras a solicitar a Burton el permiso necesario para reunirse con el subdirector de la CIA, Vernon Walters, en Washington. Tal como señalaba el cablegrama enviado por Burton a la oficina central, el mensaje de Contreras declaraba que «el general Pinochet desea que el general Walters reciba a un emisario con la intención de informar a través de su persona al secretario Kissinger de la posición de Chile con respecto a los derechos humanos». El viaje tendría que mantenerse en el más estricto de los secretos, ya que, tal como advirtió a Burton el embajador Popper, «toda publicidad sería contraproducente».

> [Popper] reconoce la importancia de mantener buenas relaciones con el presidente Pinochet, a quien no deberíamos hacer creer que rechazamos su intención de ponerse en contacto con nosotros. En consecuencia, opina que valdría la pena que el general Walters concediese a Contreras cierto tiempo para poder desahogarse en lo tocante al asunto de los derechos humanos y permitiera así relajar las tensiones de la cúpula.[36]

Kissinger recibió noticia de que «el Investigador», como llamaban a Contreras sus ayudantes, tenía intención de viajar a Washington, en tanto que Brent Scowcroft, subordinado inmediato del secretario de Estado en relación con la seguridad nacional, autorizó la visita desde la Casa Blanca.

La mañana del sábado 5 de julio, Contreras se reunió en secreto con Walters en una oficina de la CIA en Fort Myer (Arlington, Virginia). Según un informe del encuentro, proporcionó al subdirector de la Agencia un expediente de la Dina sobre los cinco miembros de la Comisión de Derechos Humanos con el propósito de demostrar su carácter «claramente izquierdista y parcial» y dijo que «quería que los altos cargos del gobierno de Estados Unidos lo supiesen».[37] En un memorando posterior enviado a Scowcroft, Walters señaló que Pinochet estaba buscando «comprensión» respecto de su propósito de obstruir a la Comisión de Derechos Humanos y buscaba «el respaldo estadounidense ante cualquier intento de expulsar a Chile de las Naciones Unidas». Walters también aseguró, y esto es quizá más importante, que Contreras abordó la cuestión de cómo burlar las

sanciones impuestas por el Congreso al abastecimiento militar estadounidense: «Los chilenos son conscientes de que no pueden obtener ayuda directa debido a la oposición del Congreso y se preguntan si hay algún modo de que puedan recibirla, indirectamente, a través de España, Brasil o la República de Corea».[38]

El coronel pasó otros cuatro días en Estados Unidos antes de regresar a Santiago, cosa que hizo, para gran alivio de los miembros del Departamento de Estado, el 9 de julio. En la reunión de la CIA y la ARA celebrada el 11 de julio, el vicesecretario Rogers expresó su preocupación acerca de la posibilidad de que alguien hubiese visto al jefe de la Dina asistir a la cena organizada para él en Washington. Contreras, según declaró Rogers, era un hombre «tristemente célebre» por su represión, y su misión de encontrarse con el subdirector de la CIA «daría mucho que hablar en caso de salir a la luz».

Con todo, no habrían de transcurrir muchas semanas antes de que este individuo de «fama nefasta» se encontrara de nuevo en Washington, para volver a reunirse con el general Walters y allanar el camino en el ámbito de la diplomacia y la política al régimen de Pinochet frente a quienes condenaban a coro desde el Congreso y el resto del mundo las violaciones de los derechos humanos que estaba perpetrando. El 23 de agosto, Contreras partió hacia Nueva York, en teoría para reunirse con la delegación de la embajada chilena ante las Naciones Unidas y ponerla al corriente de la estrategia adoptada por Pinochet para apaciguar el escándalo surgido a causa de la Comisión de Derechos Humanos; pero, al mismo tiempo instó con discreción al general Kurt Waldheim a visitar Chile o enviar a una delegación de hombres escogidos en lugar del grupo de trabajo. El propósito principal de los encuentros mantenidos en Nueva York, sin embargo, parecía ser el de tantear si era o no conveniente que Pinochet viajase a la ONU para defender en persona su régimen.

El 24 de agosto, Contreras regresó a Washington, donde se reunió, en primer lugar, con el responsable de la sección del Departamento de Estado encargada de Chile, Rudy Fimbres, a quien garantizó que el régimen no tardaría en liberalizar sus prácticas de seguridad interna. Según las cuatro páginas del memorando de la reunión, el coronel argumentó que el único

problema radicaba en que Pinochet había sido malinterpretado. «Admitió que Chile no gozaba de una buena imagen en el exterior», escribió Fimbres, «y, si bien esto se debía en buena parte a los comunistas, estaba convencido de que había dirigentes sinceros y moderados en Estados Unidos que no habían tenido la oportunidad de apreciar los avances positivos del gobierno de Pinochet».[39] Contreras se reunió con el equipo del diputado Donald Fraser, uno de los principales críticos del general chileno, al que aseguró que «[n]o se dan casos de tortura en estos momentos ni se han dado muchos con anterioridad».[40]

El 25 de agosto, Contreras volvió a reunirse con el general Walters, con quien comió en esta ocasión en la oficina central de Langley. «El almuerzo tendrá en esencia una función protocolaria», afirmaba un memorando remitido al director de la CIA, William Colby. «Después, se celebrará una conversación privada entre el subdirector de la Agencia Central de Inteligencia y el coronel Contreras para que este exponga las medidas que ha adoptado de forma reciente el gobierno chileno para mejorar su imagen en relación con los derechos civiles [tachado]» (véase el documento 4). Antes del encuentro, hubo una reunión de funcionarios de la CIA y del Departamento de Estado en torno a la «visita actual del coronel Contreras a Estados Unidos» en la que se acordó una serie de puntos («Chile y los derechos humanos») a los que debería aludir el general Walters durante su conversación con el militar chileno. Sin embargo, no existe prueba alguna de que Walters lo hiciera, y toda información relativa a las razones que pudieron llevar al estadounidense a reunirse con Contreras dos veces en cuestión de siete semanas sigue estando clasificada.[41]

En aquellos momentos, la CIA estaba guardando el más oscuro, el mejor guardado de todos sus secretos relacionados con los contactos que mantenía con Contreras; a saber, que el jefe de la Dina era un informante a sueldo de la Agencia. A finales del otoño chileno de 1975, mientras la CIA informaba de que sobre el coronel pesaba gran parte de la responsabilidad de las atrocidades que estaba cometiendo el régimen de Pinochet contra los derechos humanos, el director del puesto de operaciones en Santiago, Stuart Burton, comenzó a instar su inclusión en la nómina de la Agencia. «En mayo y junio de 1975», reconocería esta años después, «algunos miembros de la CIA recomendaron que se estableciese una relación remunerada con

Contreras, a fin de obtener información única merced a su posición privilegiada y su acceso a Pinochet».

La cercanía al jefe del Estado, sin embargo, no era la única razón por la que la Agencia estaba interesada en incluir al coronel en su nómina. «Había una operación concreta en la que la CIA necesitaba su ayuda», recordaba un antiguo oficial del servicio de inteligencia.[42] El puesto de operaciones en Santiago había creado en secreto una serie de cuentas bancarias con el objetivo de hacerle llegar las cantidades necesarias por su colaboración. Según confió el agente de la Dina Michael Townley en una carta privada remitida a un colega chileno, Contreras —al que se refería por su apodo de «el Mamo»— tenía al menos una cuenta abierta conjuntamente con la CIA a fin de efectuar los reembolsos correspondientes a los trabajos hechos para la Agencia o en colaboración con ella.[43] Contreras mantenía dos cuentas bancarias en el Riggs Bank de Washington D.C. —una personal y otra para las operaciones de la Dina—, abiertas a nombre de la empresa ficticia Benito Vilar Construction, según la información proporcionada por Townley al FBI. A mediados de 1975, la CIA depositó en una cuenta secreta una suma aún sin revelar a modo de pago al coronel.[44] Los archivos del Riggs Bank dan fe de que el 21 de julio de dicho año se efectuó en la cuenta personal de Contreras un ingreso de seis mil dólares «de procedencia desconocida».[45]

La base santiaguina esperaba poder hacer ingresos semejantes cada mes, pero en la oficina central de la CIA, Ray Warren, director de la División del Hemisferio Occidental (y predecesor de Burton en Chile), anuló la contratación de este agente informante. En la época en que se incluyó a Contreras en la nómina de la CIA, la implicación de la Dina en la desaparición de cientos de chilenos se había convertido en un escándalo internacional, y pocos ignoraban que los altos cargos del Departamento de Estado estaban involucrados en los contactos de la CIA con los servicios de inteligencia chilenos. Asimismo, en ese momento la Agencia estaba siendo objeto de un riguroso examen por parte del Congreso por su intervención clandestina en Chile. Cuando llegaron a su mesa los papeles relativos a la contratación de Contreras, Warren no pudo menos de reaccionar de la siguiente manera, según recordaría en una conversación mantenida más tarde con un diplomático estadounidense: «Exclamé: "¡Por Dios bendito!

¡Este tío no va a cansarse de perseguirnos!”, y me negué a consentirlo».[46] Burton recibió órdenes de hacer saber a Contreras que «no era popular» en Washington y que la oficina central había rechazado la idea de convertirlo en un confidente secreto a tiempo completo. En consecuencia, ya no habría más pagos.[47]

Escándalos e investigaciones de la CIA

Los días 14 y 15 de julio de 1975, casi a la vez que la oficina central de la CIA y la base de esta en Santiago incluían a Manuel Contreras en su nómina de agentes secretos, el director de la Agencia, William Colby, recibía una citación para testificar en sesión cerrada ante el Comité Selecto del Senado de Estados Unidos para el Estudio de las Operaciones Gubernamentales Respecto a las Actividades de Inteligencia, presidido por el senador Frank Church. Colby hubo de someterse a un minucioso interrogatorio en torno a las órdenes dadas por el expresidente Nixon de fomentar un golpe de Estado en Chile en 1970, la vía II y el asesinato del general René Schneider. Sus respuestas —en las que negaba la implicación de la CIA en la conspiración de asesinato, si bien admitía que la Agencia había tratado de promover una sublevación golpista— no tardaron en filtrarse a The New York Times. «Fue muy desalentador», declaró el enlace de la Agencia con la ARA, George Lauder, al vicesecretario Rogers refiriéndose a las revelaciones. «La CIA tenía que proteger sus fuentes». Hecho una furia, Rogers repuso que lo más importante era que el Departamento de Estado «tenía que proteger al [improperio tachado] hemisferio. Pagarán por la filtración. La CIA se ha librado de las acusaciones de asesinato reconociendo haber tomado parte en un intento golpista». «[E]l confesar haber planeado un golpe de Estado es casi tan negativo como un asesinato desde el punto de vista diplomático», siguió diciendo Rogers. «Ese acto de reconocimiento, el más explícito hasta la fecha, ha hecho un daño terrible».[48]

Era la segunda vez que el testimonio secreto de Colby con respecto a Chile había dado pie a un gran escándalo después de que la prensa conociera sus revelaciones de manera subrepticia. El 22 de abril de 1974, el director de la

CIA había comparecido en sesión cerrada ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes para informar acerca de las operaciones clandestinas que había dirigido la CIA en Chile entre 1970 y 1973. «Las actividades llevadas a cabo en Chile por la Agencia», señaló Colby según un resumen de su testimonio, «se concibieron como un prototipo, un experimento de laboratorio ideado con el fin de probar las técnicas de inversión financiera de gran envergadura diseñadas para desacreditar y derrocar un gobierno».[49]

Tales confesiones parecían contradecir de un modo significativo las declaraciones juradas en las que altos funcionarios como Kissinger o el ex director de la CIA Richard Helms negaban que la Agencia hubiese tratado de minar el gobierno de Allende. Así, cuando Michael Harrington, diputado por Massachusetts, leyó en julio cierta transcripción clasificada, se dio cuenta de que los funcionarios estadounidenses habían engañado de modo inaceptable al Congreso cuando comparecieron ante él el año anterior para declarar acerca del escándalo de la CIA y la ITT. No dudó en ponerse en contacto de inmediato con los presidentes del Comité Senatorial de Relaciones Exteriores y el Subcomité sobre Empresas Multinacionales, J. William Fulbright y Frank Church, respectivamente, pero estos se mostraron reacios a volver a suscitar la polvareda que había levantado el caso. Jerome Levinson, miembro prominente del Comité Church, recuerda en sus memorias inéditas que los miembros del Congreso «quisieron saber mi opinión acerca de lo que debió hacer Harrington» y que él recomendó que «volviese a intentarlo a través de los conductos regulares. Sugerí que enviase a Fulbright una carta en la que detallara el motivo de su preocupación y solicitara una investigación especial». Harrington aceptó el consejo. El Congreso y el pueblo americano, concluyó en el escrito en que resumía el testimonio de Colby, «tienen derecho a saber lo que se hizo en Chile en nuestro nombre».

Como era de esperar, Levinson recibió en su mesa una copia de la carta, y resumió las revelaciones de Colby en un informe confidencial remitido al senador Church:

> a) El gobierno de Nixon autorizó la concesión de más de ocho millones de dólares a la Agencia para que efectuase actividades

> encubiertas en Chile entre 1970 y 1973 «con el objetivo de hacer imposible gobernar al presidente Salvador Allende Gossens», y b) todas estas actividades disponían de la autorización explícita del Comité 40, el grupo integrado por miembros de distintos departamentos y presidido por el secretario de Estado Kissinger, que debe aprobar las operaciones clandestinas de la CIA. El objetivo de estas era «desestabilizar» el gobierno de Allende y fueron concebidas como un «experimento consistente en emplear cuantiosas sumas de dinero con el fin de derrocar un gobierno considerado contrario a Estados Unidos».

El testimonio de Colby, en opinión de Levinson, demostraba de un modo evidente que algunos altos funcionarios estadounidenses habían mentido durante parte de las declaraciones ofrecidas ante el Congreso en 1973. «Parece que, en el transcurso de la audiencia que lo ratificó en el cargo, el secretario de Estado Kissinger engañó al Comité [de Relaciones Exteriores] en lo concerniente a la amplitud y el objetivo de la intervención de la CIA en Chile». Richard Helms, por su parte, «cometió perjurio».[50]

El afán de Levinson por hacer que las revelaciones del testimonio aún secreto de Colby no pasasen inadvertidas no quedó aquí: a principios de septiembre, tras almorzar en Jean-Pierre’s, un distinguido restaurante francés del centro de Washington, entregó con discreción la carta de Harrington al intrépido reportero de The New York Times Seymour Hersh, y la filtración dio lugar al mayor escándalo relacionado con operaciones encubiertas que jamás hubiesen tenido que afrontar los servicios de inteligencia.

El 8 de septiembre de 1974, el periódico publicó en primera plana el artículo de Hersh bajo el siguiente título: «El director de la CIA revela a la Cámara de Representantes la campaña de ocho millones organizada en contra de Allende entre 1970 y 1973». El escrito exponía con todo detalle las operaciones efectuadas en Chile y su encubrimiento por parte de los miembros del gobierno de Nixon. Gerald Ford, que había asumido la presidencia solo seis semanas antes, habló con Kissinger a la mañana siguiente, tras leer el artículo. «He visto lo de Chile —le dijo—. ¿Tendrá

repercusiones?». Según un memorando secreto de conversación, el secretario de Estado respondió: «No creo».

Lo cierto es que el artículo y una serie de continuaciones escritas por Hersh sí que tuvieron consecuencias serias para el gobierno de Ford, Kissinger, la CIA y la dirección de operaciones secretas en el extranjero. Las revelaciones del periodista en torno a Chile provocaron, junto con la publicación de más datos acerca de la implicación de la Agencia en conspiraciones asesinas contra dirigentes extranjeros y la llamada Operación Caos (un programa nacional de espionaje que pretendía desorganizar a los grupos antibelicistas), provocaron un gran escándalo político. Este, a su vez, desembocó en la primera investigación relevante emprendida por el Congreso en torno a los abusos del Poder Ejecutivo, la mala conducta de los servicios de inteligencia y el uso por parte de la presidencia de la guerra clandestina a modo de arma de la política exterior. Los artículos de Hersh, que fueron a sumarse al escándalo Watergate y a la caída de Saigón, «tuvieron —tal como reconoció Kissinger en sus memorias, Years of Renewal— el efecto de una cerilla lanzada a un depósito de gasolina».[51]

En Chile, la estación local de la CIA se apresuró a contactar a sus agentes y activos chilenos en riesgo de quedar expuestos por el papel que habían jugado en acciones encubiertas para socavar al gobierno de la Unidad Popular, y en las operaciones psicológicas y de propaganda que la Agencia seguía desarrollando a favor de la Junta Militar —activos cuyo nombre en clave era «Fuomen»—. El máximo agente de la CIA en el Partido Demócrata Cristiano, cuyo nombre en clave era «Fuermine-1», estaba «preocupado», según informó la estación local de la CIA en un cable secreto fechado el 12 de septiembre, «pero aliviado de que no se mencionaran nombres». Otro activo en el PDC, «Fuermine-5», que había recibido miles de dólares de la CIA para financiar el viaje a Europa de una delegación especial de miembros del PDC que buscaba promover, después del golpe, una imagen positiva del nuevo régimen militar, creía que las revelaciones eran demasiado vagas para identificarlo a él, incluso dentro del partido. Otro agente político, «Fupocket-1», estaba «visiblemente alterado» con la revelación de la adquisición que la CIA hizo, por 25.000 dólares, de una estación de radio destinada a reforzar las operaciones de propaganda

contra Allende, dado que él había sido el conducto a través del cual habían circulado esos fondos. «Fubrig-2», un activo de la CIA al interior de El Mercurio, «estaba muy preocupado por el efecto e implicaciones que tendrían las revelaciones», según el cable secreto en cuestión, «y manifestó su opinión de que Washington debía hacer cambios en el sistema para evitar esas filtraciones». La reacción del general Pinochet, como reveló a su contacto un activo de alto rango dentro de la cúpula militar, fue que hacer la desclasificación «parecía una tontería». Con el nombre en clave de «Fubargain-1», el alto oficial de Ejército informó a la CIA que algunos oficiales chilenos de menor rango estaban «cada vez más molestos y preocupados ante lo que percibían como un fallo de EE.UU. en su comportamiento como un “buen amigo” de Chile», y que «la mayoría de los oficiales chilenos veían las revelaciones y el momento en que se dieron como un intento deliberado de un sector del gobierno de EE.UU. (...) de dañar en forma premeditada a la Junta Militar y transmitir falsas dudas acerca de su independencia y el papel jugado en la caída de Allende» (véase el documento 5).

El artículo publicado por Hersh el 8 de septiembre dio pie a una gran polvareda de modo casi inmediato. Dirigentes del Senado y la Cámara de Representantes denunciaron al Poder Ejecutivo de cometer irregularidades en el extranjero y mentir a la nación. Ford se reunió entonces con su gabinete, en medio de un aluvión de críticas, para discutir lo que llamó «el pacto de Chile» y defender a la CIA. «Necesitamos una Agencia de investigación y no podemos pasar sin operaciones clandestinas», comunicó a sus consejeros más cercanos antes de llamar a Kissinger para que lo informara de «los detalles». Este aseguró que Estados Unidos no estaba haciendo otra cosa que defender la democracia. Omitió toda alusión a la vía II y negó con cinismo que el país hubiese acometido una campaña de desestabilización económica en contra de Allende. «Tal vez existiese cierta predisposición a la guerra económica», admitió, «pero nunca llegó a plantearse tal posibilidad. Lo que ocurrió no se debió a otra cosa que a [la] mala administración [de Allende], así como a la nacionalización y las expropiaciones que llevó a cabo». Las decisiones adoptadas en lo tocante a Chile «se tomaron en conformidad con la ley», según afirmó Ford. «Quería que todos ustedes conociesen lo sucedido».[52]

Esta fue la postura que mantuvo el presidente de cara al público. En el transcurso de una rueda de prensa histórica celebrada el 16 de septiembre —y centrada sobre todo en esta polémica indulgencia para con Richard Nixon—, Ford se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos que reconoció —y defendió— las operaciones secretas contra un gobierno elegido democráticamente —operaciones, por lo demás, diseñadas para ser «negadas de forma verosímil»—. Cuando uno de los periodistas presentes quiso saber si su administración había tratado de desestabilizar las de otras democracias, el presidente respondió:

> Creo que esa es una cuestión muy importante. En este caso particular, tal como lo veo yo sin la menor sombra de duda, nuestro gobierno no ha tenido nada que ver en el golpe de Estado contra Allende. Por lo que sé, nadie lo ha acusado de tal cosa. Lo cierto es que no hemos estado implicados, en modo alguno, en el propio golpe.

En determinado momento, hace tres o cuatro años, el gobierno de Allende mostró cierto afán por destruir los medios de comunicación de la oposición, lo que incluye tanto a la prensa escrita como a la electrónica, y acabar con los partidos políticos contrarios a él.

En este caso, nuestros empeños se centraron en propiciar y respaldar la conservación de periódicos, medios electrónicos y partidos de la oposición.

Soy de la opinión de que todo esto revierte en interés del pueblo chileno y, en definitiva, en el nuestro propio.

Los funcionarios de la CIA, conscientes de que la declaración del presidente pecaba de inexacta, no dudaron en alertar a la Casa Blanca. En un memorando redactado para ser leído exclusivamente por Ford, el consejero de la Casa Blanca Jack Marsh lo advertía de que su respuesta no era «del todo consecuente con los hechos, dado que no se le ha informado de la totalidad de estos».[53]

La interpretación que ofreció el presidente de las operaciones llevadas a la práctica en Chile no logró menguar la indignación del público y el Congreso respecto de las revelaciones de la conducta negativa de la CIA. A principios de enero, cuando el corresponsal de la CBS Daniel Schorr sacó a

la luz los esfuerzos de la Agencia por asesinar a dirigentes extranjeros como Fidel Castro, Patrice Lumumba o al general René Schneider, la intensidad del escándalo aumentó de un modo espectacular. «Estamos peor que en tiempos de McCarthy», se quejó Kissinger a Ford en una reunión de emergencia a primera hora de la mañana del sábado 4 de enero. «Helms ha dicho que todas estas historias no son más que la punta del iceberg. Si sale a la luz el resto, correrá la sangre», advirtió. «El asunto chileno», prosiguió, refiriéndose al asesinato de Schneider, «no aparece en ningún informe. Parece un chantaje a mi persona».[54]

Durante el encuentro del 4 de enero, Ford y sus consejeros coincidieron en la conveniencia de anunciar la creación de una comisión de alto nivel —que estaría presidida por el vicepresidente, Nelson Rockefeller— para investigar las actividades de la CIA y tratar así de conjurar la amenaza de una investigación independiente por parte del Congreso. No obstante, el día 27, el Senado decidió, por ochenta y dos votos contra cuatro, establecer el Comité de Investigación para el Estudio de Operaciones Gubernamentales Relacionadas con Actividades de Inteligencia, que con el tiempo acabaría por conocerse como el Comité Church. El 19 de febrero, la Cámara de Representantes aprobó también la formación de un grupo encargado de investigar las «transgresiones de la CIA», encabezado por el representante de Nueva York, Otis Pike.

El gabinete de Ford entendió estas investigaciones como «un ataque», en palabras de Kissinger, «al servicio de inteligencia» y a «la esencia de la política exterior» puesta en práctica por Estados Unidos durante el turbulento período de mediados de los setenta. «Después de todo lo que había sufrido la nación», escribió en sus memorias, «las numerosas investigaciones emprendidas en todos los aspectos de sus actividades de información no dejaban de ofrecer una perspectiva preocupante en la atmósfera morbosa que imperaba en aquel momento».[55] En el Departamento de Estado, el vicesecretario Rogers se mostró contrario a un «reconocimiento oficial» de las operaciones encubiertas contra Allende, algo que no haría sino «destruir a personas e instituciones importantes para Chile y para nosotros», amén de dañar el respeto a Estados Unidos en todo el hemisferio. En un memorando secreto remitido a Kissinger, Rogers hizo patente su oposición a la acción encubierta por considerarla un «mal

principio y peor práctica», aunque no por ello dejó de advertir: «No es difícil que, de quedar al descubierto, estas cuestiones afecten, durante años y de un modo grave, a nuestras relaciones con Latinoamérica».[56]

La administración de Ford adoptó, bajo la dirección de Kissinger, una estrategia evasiva con respecto a los grupos de investigación del Congreso. Los funcionarios estadounidenses se resistieron con desdén a cooperar con quienes integraban el Comité Pike, a los que Colby calificó de «majaderos inmaduros en busca de publicidad», una «pandilla de críos sedientos de sensacionalismo». Kissinger evocó la inmunidad del Poder Ejecutivo para ocultar los documentos del Departamento de Estado, y cuando supo que los comités estaban buscando todos los cablegramas posibles relacionados con Chile que se hubiesen transmitido entre 1964 y 1970, no se mostró muy dispuesto a colaborar, según la transcripción secreta de la reunión que mantuvo el 14 de julio de 1975 con sus ayudantes. «¿Debemos informar de forma directa al comité de que no vamos a...?», preguntó uno de sus subordinados. «No», respondió él. «Responsabilizad a la Casa Blanca, y que sea ella la que lo niegue. Yo me encargaré de que lo haga».[57] En cierto momento, el Comité Pike hizo públicas tres citaciones al secretario de Estado por desacato al Congreso al rehusar entregar los documentos que se le solicitaban.

La investigación de la Cámara de Representantes fue controvertida y estuvo plagada de conflictos. La del Senado, en cambio, obtuvo mejores resultados. Durante varios meses, la Casa Blanca, la CIA y el Departamento de Estado dilataron la presentación de los documentos que tantas veces se les había solicitado, para lo que alegaron estar faltos de personal. En realidad, «la Casa Blanca nos había ordenado que no cooperásemos», recordaría más tarde Colby. «Lo cierto era, sencillamente, que no querían entregar los documentos». Al final, el personal del Comité logró un acuerdo por el que se le permitía acceder a versiones mutiladas de los documentos de la CIA, en tanto que la Casa Blanca entregó algunos —y solo algunos— de los miles de documentos necesarios para la investigación del Senado. Este paso «de la intransigencia a la colaboración —tal como lo describió Loch Johnson, miembro del Comité Church— se hizo efectivo con la misma velocidad con que se desliza un glaciar».[58]

A medida que la investigación se aproximaba a su punto culminante, durante la segunda mitad de 1975, aumentaba el empeño de la Casa Blanca en obstruir su avance y proteger y ocultar así el polémico pasado de intervención encubierta que estaba sacando a la luz el Senado. El 31 de octubre, el presidente Ford envió una carta de estilo implacable a todos los integrantes del Comité en la que pedía que, a fin de proteger la seguridad nacional, mantuvieran en secreto el informe que estaban elaborando en relación con las cinco conspiraciones de asesinato emprendidas en Cuba, el Congo, la República Dominicana, Vietnam y Chile. Al mismo tiempo, su gabinete dio inicio a un resuelto plan de presión al Senado con miras a impedir la publicación del documento. Al día siguiente, Ford firmó una orden presidencial secreta por la que se oponía a los planes del Comité de Investigación de celebrar una audiencia pública en torno a las operaciones encubiertas en Chile, pues, en sus propias palabras, «sentaría un precedente al que podría acogerse el Congreso en el futuro» con el fin de revelar acciones secretas y, por otra parte, «tendría un efecto atroz sobre la buena voluntad de partidos y políticos extranjeros a la hora de cooperar en el futuro con este tipo de operaciones».[59]

El Comité Church se las arregló para burlar todas estas trabas ingeniadas por el Poder Ejecutivo. El 20 de noviembre, tras un amargo debate a puerta cerrada en torno a la aprobación de los descubrimientos del Comité en el que el Senado no llegó a conclusión alguna, el senador Church se limitó a entregar a la prensa el informe Alleged Assassination Plots Involving Foreign Leaders, el que, a la sazón, suponía la revelación más extensa que jamás se hubiese publicado del lado sórdido y oscuro de la política exterior estadounidense. El 4 de diciembre, el Comité dio a conocer un segundo estudio, no menos espectacular. Se trataba de Covert Action in Chile, 1963-1973, libro en el que se detallaba toda una década de intervención clandestina de la CIA a fin de dirigir la política chilena, impedir a Allende la llegada a la presidencia y socavar su gobierno una vez que fue elegido para el cargo.

Por fin, y a despecho de las objeciones de la Casa Blanca y la CIA, el Comité acabó por convocar la primera audiencia pública sobre operaciones encubiertas jamás celebrada. Se centraría en el caso de Chile, que, como explicó el senador Church en sus comentarios iniciales, constituía un

«ejemplo de toda una serie de operaciones secretas» que «permite al Comité, el Senado y el resto del país debatir y decidir sobre la conveniencia del uso futuro de la acción encubierta como instrumento de la política exterior de Estados Unidos». La Comisión había dado aquel «paso poco común», señaló Church, «conducida por el convencimiento de que el pueblo estadounidense debe saber qué actividades emprendió en Chile su gobierno y ser capaz de emitir un juicio al respecto. La naturaleza y extensión del papel representado por Estados Unidos en el derrocamiento de un gobierno chileno elegido democráticamente», concluyó, «son cuestiones que conciernen a la población en gran medida. De todo esto debe quedar constancia cuanto antes».[60]

El síndrome de Chile

El escándalo surgido a raíz de las operaciones llevadas a cabo en Chile para minar su democracia, unido a la aceptación por parte de los gobiernos de Nixon y Ford del violento régimen de Pinochet ocasionaron una espectacular revaluación nacional de la política exterior de Estados Unidos. Por vez primera, la intervención de la Agencia Central de Inteligencia se veía sometida a un debate público sobre lo acertado de tales prácticas, polémica que, lejos de extinguirse, acabaría por influir en las operaciones llevadas a cabo por la nación en países como Angola, Nicaragua o Irak a lo largo del último cuarto del siglo XX. Por otra parte, las atrocidades cometidas por Pinochet con la ayuda continuada de Washington llevaron a actuar a grupos religiosos y solidarios que transformaron los derechos humanos en todo un movimiento y en una cuestión política nada despreciable en el Capitolio. Al síndrome de Vietnam, marcado por la renuencia a la intervención militar de Estados Unidos en tierras distantes, fue a sumarse el de Chile como muestra de que la opinión pública exigía, con una fuerza cada vez más acusada, que la política exterior estadounidense regresara a los preceptos morales tradicionales de la nación. «La cuestión surgió en Estados Unidos en el peor momento posible», se quejó Kissinger en sus memorias. «Después de la guerra de Vietnam y en pleno caso Watergate, la idea de que teníamos que ganarnos el derecho de dirigir la política exterior a fuerza de pureza moral (de que podíamos

imponernos gracias a la rectitud más que al poder) poseía un atractivo inevitable».[61]

Pese a las objeciones del secretario de Estado —o quizá más bien debido a ellas—, Chile se convirtió en el campo en que se libró la primera de las más intensas batallas que protagonizaron el Poder Ejecutivo y el Congreso en torno a los derechos humanos y la política exterior estadounidense. Entre 1974 y 1976, el Congreso aprobó un número nada despreciable de leyes sobre dichos derechos, una legislación que sentó precedentes y que pretendía obstruir de manera directa o indirecta el respaldo brindado a Pinochet por el gobierno de Ford, así como institucionalizar los derechos humanos como un componente más de las relaciones bilaterales de Estados Unidos con otras naciones. Algunos de los miembros de la Cámara de Representantes, como Donald Fraser, quien presidió las primeras vistas relacionadas con los derechos humanos, Michael Harrington, Tom Harkin, Toby Moffett o George Miller, encabezaron la denuncia de las atrocidades perpetradas en Chile, al mismo tiempo que promovían leyes innovadoras para penalizar a Pinochet y a otros gobiernos que violaban los derechos de sus ciudadanos. El Senado, encabezado por Edward Kennedy, James Abourezk y George McGovern, llamó a capítulo a Kissinger y sus ayudantes en reiteradas ocasiones por haber apoyado al régimen, y comenzó a hacer gestiones para restringir la ayuda económica y militar que se estaba prestando a Chile.

Al senador Kennedy corresponde el mérito de ser el crítico más franco del Congreso en lo tocante a Pinochet y el respaldo estadounidense a su régimen. Poco después del golpe de Estado, censuró el «silencio continuado del gobierno de Estados Unidos, que no ha hecho pública una sola demostración de remordimiento en relación con el golpe militar que echó abajo un gobierno elegido democráticamente o con las muertes, palizas, brutalidad y represión sufridas en aquel país». Fue él quien convocó las primeras audiencias del Senado en torno a Chile cuando solo habían pasado diecisiete días del golpe. El 2 de octubre de 1973, ofreció una resolución por la que el Congreso instaba al presidente a «negar al gobierno de Chile toda ayuda militar y económica, a excepción de la humanitaria, hasta obtener la garantía de que está protegiendo los derechos humanos de todos los individuos, tanto chilenos como extranjeros». En diciembre de 1974,

Kennedy logró que se impusiese un límite de veinticinco millones de dólares en la parte destinada a Chile del proyecto de ley relativo a los presupuestos de ayuda exterior, algo de lo que el gabinete de Ford hizo, sin más, caso omiso. Por otra parte, patrocinó las primeras limitaciones al respaldo y el adiestramiento ofrecidos por Estados Unidos a la Junta Militar chilena. En julio de 1976, el Congreso aprobó la llamada «Enmienda Kennedy», más compleja, que prohibía cualquier tipo de ayuda militar, crédito o venta de armas a Chile. Aquella fue la primera vez que el Congreso estadounidense puso fin al respaldo brindado a otro gobierno a causa de la violación de los derechos humanos.

El Congreso sancionó también la llamada «Enmienda Harkin», que hacía depender la asistencia económica estadounidense de la actuación de los gobiernos beneficiarios en relación con los derechos humanos. La enmienda, vinculada a la Ley de Ayuda para el Desarrollo Internacional y el Suministro de Alimentos de 1975, se debió a una propuesta de Tom Harkin, entonces diputado del Congreso por Iowa. La nueva ley exigía la interrupción de toda asistencia económica a cualquier país que violase de forma sistemática y evidente los derechos humanos. El objetivo originario de tal disposición era Chile, según recuerda Joseph Eldridge, miembro de la oficina encargada de los asuntos latinoamericanos en Washington, quien se encargó, junto con Edward Snyder, del Comité de Amigos para la Legislación Nacional, de la redacción del documento. El gobierno de Ford tampoco hizo caso de esta ley, aunque la Enmienda Harkin convirtió los derechos humanos en un criterio legal en el ámbito de la política exterior estadounidense.

Las restricciones impuestas por el Congreso obstruyeron las relaciones entre Estados Unidos y Chile y fueron objeto de consternación tanto en Washington como en Santiago. «Algún día Estados Unidos entenderá que Chile es probablemente el mejor y acaso el único amigo verdadero con que cuenta en el hemisferio», se quejó Pinochet al embajador Popper después de que el Congreso aprobara las primeras restricciones a la ayuda militar. «Chile es mejor amigo de Estados Unidos de lo que Estados Unidos es de Chile».[62] Las sanciones relativas a las adquisiciones militares menoscabaron la reputación de que gozaba la Junta Militar ante los oficiales más jóvenes, en tanto que el creciente aislamiento internacional al que se

estaba viendo sometido el régimen suponía una amenaza para sus relaciones económicas con el mundo occidental. A medida que aumentaban las críticas y presiones procedentes del extranjero, el régimen de Pinochet trataba con más ahínco de dejar atrás la reputación de gobierno despótico que se había granjeado en Estados Unidos sin abandonar sus prácticas represivas. Con tal fin, el general puso en marcha allí una operación encubierta de presión y propaganda.

La iniciativa más importante emprendida por el régimen a fin de influir en los medios de comunicación y el Congreso se debió a un programa ilícito e ilegal dirigido, con toda probabilidad, por la Dina. La campaña, organizada entre marzo de 1975 y diciembre de 1978 por un «comité público» ficticio llamado Consejo Chileno-Norteamericano (CCN), fue obra de William Buckley, destacado columnista conservador, y Marvin Liebman, cabildero veterano en favor de las causas de la derecha:

> Por el bien de las relaciones futuras entre Chile y Estados Unidos, es de vital importancia que el pueblo norteamericano conozca la situación de Chile [—escribió el segundo en una carta secreta remitida al primero después de que ambos recibiesen una petición de ayuda del embajador de Chile ante la ONU—] y el único modo de hacerlo es, según me dicen mis muchos años de experiencia, por mediación de un programa de propaganda internacional planeado de modo minucioso, además de, cuando sea necesario, la movilización de la acción pública.

El proyecto propagandístico del CCN consistía en pagar a L. Francis Bouchey, agente de presión que en aquel momento no se hallaba legalmente adscrito a ningún grupo de interés, para que «rebatiese las acusaciones comunistas acerca de las violaciones de los derechos humanos en Chile». Con este objetivo, publicaría una serie de panfletos concebidos para presentar el gobierno de Allende como un agente de la Unión Soviética, así como un estudio informativo quincenal sobre Chile dirigido a miembros del Congreso, grupos de interés y estadistas, y financiaría viajes de expertos conservadores a Santiago.[63]

Todas estas actividades se hacían posibles gracias a las donaciones privadas de ciudadanos estadounidenses preocupados por la situación, o al menos eso era lo que aseguraban los folletos del CCN, cuando lo cierto es que el

régimen de Pinochet era, según los archivos del Departamento de Justicia estadounidense, el «verdadero poderdante extranjero» que hacía llegar de modo clandestino, por mediación de un agente de la delegación chilena ante las Naciones Unidas en Nueva York, cientos de miles de dólares al despacho de Marvin Liebman, sito en la avenida Madison, a fin de financiar las actividades del CCN. El citado Departamento terminó por poner fin a estas operaciones y acusó a Liebman de trabajar para Pinochet como agente extranjero encubierto. A su parecer, la organización estaba envuelta «en una campaña propagandística secreta e ilegal diseñada para hacer a miembros del Congreso, periodistas, académicos y público estadounidense en general más favorables a la dictadura militar de Chile».[64]

Derechos humanos: El debate interno

En tanto que el régimen de Pinochet presionaba al Congreso con métodos ilegales, el gabinete de Ford adoptó una postura de obedezco pero no cumplo* con respecto a las restricciones económicas y militares.[65] Lejos de respetar el tope de veinticinco millones de dólares fijado para el año fiscal 1975, el gobierno destinó a Chile más de ciento doce millones en concepto de alimentos, material y préstamos, mientras que, a fin de poder exceder la cantidad al año siguiente, los abogados de la USAID proporcionaron a los estadistas una enrevesada redefinición de la expresión «hacer disponible» en las leyes para el año fiscal 1976. El gabinete de Ford decidió, asimismo, pasar por alto la intención de la Enmienda Harkin. «El Departamento de Estado está convencido de que cabe poner en tela de juicio la afirmación de que Chile es un “país implicado en una violación constante y evidente de los derechos humanos”», escribió Kissinger al diputado Fraser en abril de 1976, a pesar de las docenas de informes que le habían proporcionado sus ayudantes en relación con las atrocidades perpetradas de modo sistemático por el régimen de Pinochet.

En el ámbito del Poder Ejecutivo, el secretario de Estado encabezó personalmente los intentos de burlar las restricciones del Congreso y mantener la ayuda prestada a la Junta Militar. En una reunión celebrada en la Casa Blanca el 3 de diciembre de 1974, Kissinger abordó directamente la cuestión con el presidente Ford: «Si cortamos el suministro armamentístico,

el gobierno militar tiene los días contados. Son repugnantes, pero no podemos dejar de apoyarlos». El 20 de diciembre, volvió a tratar del asunto con el presidente. «La interrupción de la ayuda a Chile resulta desastrosa», aseveró Kissinger según las notas tomadas por el ayudante de la Casa Blanca Brent Scowcroft. «Quiero hacer todo lo posible por conseguirles armas».[66]

En el transcurso de las numerosas reuniones que mantuvo con su gabinete, el secretario de Estado repitió de manera enérgica la misma idea. Durante el mes de diciembre de 1974, mientras el Congreso trabajaba en el primer intento del senador Kennedy de reducir la ayuda militar a la Junta, Kissinger reprendió a sus subordinados por capitular ante el Poder Legislativo, mostrar una actitud blanda respecto del asunto de los derechos humanos y socavar el futuro de la política exterior estadounidense. «Kennedy ha tomado el testigo y está tratando de correr con él», hizo saber al secretario Carl Maw, uno de sus ayudantes, el 3 de diciembre. «Todo gira alrededor de esa estupidez de los derechos humanos». Kissinger respondió: «Si no somos capaces de defender nuestros intereses, si cada vez que arremeten contra nosotros acabamos buscando componendas, estaremos cediendo y, por lo tanto, nos hallaremos en un gran apuro». El 20 de diciembre recordó a sus ayudantes hecho una fiera: «Tenemos que echar toda la carne en el asador en lo que concierne a asuntos de interés nacional. Para eso estamos aquí, ¿no? No podemos echar un país por la ventana solo para satisfacer el ego de Kennedy. Mi postura», seguía diciendo en su filípica, «es la siguiente: No pienso claudicar ante el Congreso en cuestiones de principio. (...) Y no voy a tolerar que el Departamento de Estado haga concesiones al respecto».

Las transcripciones secretas —por lo demás reveladoras— de las sesiones informativas que mantuvo a diario con sus vicesecretarios y directores de las secciones regionales dan fe de los distintos asuntos que subrayó el secretario de Estado. En primer lugar, aseveró que el régimen de Pinochet era víctima de una injusta condena. Durante el encuentro celebrado el día 3 de diciembre con su gabinete, se encaró repetidas veces con el vicesecretario Rogers a este respecto:

> Secretario de Estado Kissinger: Me gustaría saber si el problema que hay en Chile con los derechos humanos es mucho peor que el que existe en otros países de Latinoamérica o si el principal crimen que ha cometido el país ha sido reemplazar a Allende, y si se está penalizando al pueblo por haberse deshecho de un gobierno antiestadounidense. ¿Es peor que en otros países latinoamericanos?
>
> Sr. Rogers: Sí.
>
> Secretario de Estado Kissinger: En todo caso, estoy convencido de que las consecuencias serán muy serias si los privamos de la ayuda militar.
>
> Pocos minutos más tarde volvió al mismo tema:
>
> Secretario de Estado Kissinger: El peor crimen que ha cometido este gobierno es mantener una postura proestadounidense a los ojos de muchos de los que respaldan el cese de las ayudas. ¿Es peor este gobierno que el de Allende? ¿Supone una amenaza mayor para los derechos humanos que el de Allende?
>
> Sr. Rogers: Yo no soy quién para decirlo, señor secretario. En lo que se refiere a la libertad de asociación, Allende no acabó con el partido de la oposición, y respecto a la libertad de prensa, tampoco cerró todos los periódicos.

Kissinger alegó también una y otra vez que, si dejaban de suministrarle armamento, el régimen militar chileno acabaría por derrumbarse o ser derrocado, o, lo que era aún peor, trataría de adquirir armas de China u Oriente Medio. «¿Me equivoco cuando digo que esta situación supondrá la destrucción de su gobierno?», preguntó en el transcurso de la reunión del día 3. «Y si el Ejército termina por desmoralizarse por completo, será el futuro de la política el que se vea más afectado. Si se hace evidente que el Ejército no podrá volver a entrar en acción, la izquierda cobrará una fuerza nunca vista. ¿Me equivoco?». El 20 de diciembre espetó a Rogers: «Sabe usted que el único resultado al que puede llevar esta situación es un gobierno de extrema izquierda en Chile, o bien que el gobierno chileno acabe por buscar el respaldo de los árabes... o los chinos».[67]

Con todo, lo que más le preocupaba era que el Congreso pudiera sentirse con más autoridad si lograba su propósito en lo tocante a Chile y decidiese aplicar a otras naciones los mismos criterios con respecto a los derechos humanos. «Si ahora sucede en Chile», se lamentó el 23 de diciembre ante sus subordinados más inmediatos, «el año que viene le tocará el turno a Corea, y es poco probable que acabe aquí. Además... todo esto acabará por dejarnos en una posición increíblemente precaria en la que ningún país podrá permitirse establecer vínculos con nosotros».[68] Aquí radicaba, en su opinión, el «problema fundamental». «Se trata de un problema que concierne a toda la política exterior, que, sometida como está a severas críticas, ha de afrontar una tras otra las amenazas que se le presentan con cualquier pretexto. Y no deja de ser un argumento absurdo afirmar que Chile no es diferente».

A William Rogers correspondió la poco envidiable tarea de exponer ante Kissinger las realidades políticas del movimiento de derechos humanos. Cuando el secretario de Estado tachó de «demenciales» las restricciones impuestas a la ayuda militar por el Poder Legislativo, Rogers presentó la siguiente evaluación:

> Sí, son demenciales. Pero no hacen sino reflejar, señor secretario, el firme convencimiento que, como sabe, existe entre los miembros del Congreso. Puede, si lo desea, poner toda la carne en el asador, y le advierto que, llegado enero, se encontrará con una batalla de mil demonios en sus manos. (...) En el Capitolio no faltan demócratas dispuestos también a echar, este año que entra, toda la carne en el asador en lo referente a los derechos humanos y luchar si es necesario. Resulta muy difícil elaborar un argumento sobre Chile basado en el interés nacional. (...) [L]a cuestión de los derechos humanos ha hecho volar la imaginación de los miembros del Capitolio, como bien sabe usted, señor secretario, y del resto del pueblo estadounidense.

«En cuanto a por qué se han ceñido [al] Departamento de Estado en este caso», siguió diciendo, «mi opinión es que no creen que hayamos sido sinceros en lo tocante al asunto de los derechos humanos».[69]

De hecho, la postura adoptada por el gobierno de Ford frente al Congreso y el régimen chileno ponía de relieve una falta abismal de franqueza en este particular. Más que hacer un uso diplomático de la legislación sobre derechos humanos para presionar al régimen y hacer que cesasen las violaciones, su gabinete parecía compadecerse de los chilenos. «El Poder Ejecutivo, desde el presidente Ford hacia abajo, se ha opuesto de manera constante a toda legislación restrictiva con respecto a Chile», hizo saber el embajador Popper a Pinochet en enero de 1975. «Tanto el Departamento de Estado como la embajada han hecho todo lo que estaba en sus manos por respaldar a Chile en este sentido», y «trabajaremos para cambiar la legislación restrictiva».[70] En sus entrevistas a puerta cerrada con funcionarios chilenos, Kissinger daba la impresión de dedicar más tiempo a menospreciar la preocupación de sus subordinados en lo referente a los derechos humanos que a criticar al régimen por las atrocidades que estaba cometiendo. «He leído el orden del día de esta reunión y no he visto otra cosa que derechos humanos», confió en privado al ministro de Relaciones Exteriores chileno, Patricio Carvajal, en 1975. «El Departamento de Estado está integrado por gente con vocación para el sacerdocio, pero como no hay iglesias para todos, acaban ingresando en mi gabinete».[71] En el transcurso de otra de sus conversaciones, el secretario de Estado le aseguró: «Tengo el firme convencimiento de que la de los derechos humanos no es una cuestión pertinente en el ámbito de la política exterior». Washington, según comunicó a Carvajal, «no tenía intención de hostigar a Chile en este sentido».[72]

Cada vez era mayor el número de funcionarios intermedios del Departamento de Estado que reconocían lo disparatado de la actitud de Kissinger con respecto a las atrocidades de Pinochet. La aceptación del régimen por parte de Washington no solo no había logrado suavizar la represión ejercida en Chile, sino que también estaba costando cara a los intereses nacionales de Estados Unidos, por cuanto propiciaba rupturas con sus aliados occidentales, ponía en peligro la cooperación en el seno del Congreso en lo relativo a otros programas de ayuda internacional y dañaba el liderazgo moral que había adoptado el país en el Tercer Mundo. La amistad con Pinochet se estaba convirtiendo en un verdadero lastre. Según el parecer de estos funcionarios, la defensa de los derechos humanos debía elevarse a la categoría de objetivo primordial de la política exterior

estadounidense y primero de los intereses nacionales. En consecuencia, fueron cada vez más los que alzaron su voz en un acalorado debate interno sobre el rumbo cambiante de los acontecimientos en Chile.

Las diferentes posiciones de quienes participaron en esta controversia se pusieron de manifiesto durante la redacción del informe «Análisis de país y documento de estrategia» (CASP, por su sigla en inglés), el análisis sobre Chile y la estrategia que debía seguirse al respecto elaborado por la embajada estadounidense en Santiago. El documento, entregado el 18 de mayo de 1975 con firma del embajador Popper, reflejaba la postura de Kissinger: «El mejor modo de favorecer los intereses de Estados Unidos consiste en sostener y dar vigor al gobierno actual de Chile. En términos políticos y económicos básicos, se trata, sobre todo, de un gobierno amigo en alto grado». En lo tocante a los derechos humanos, Estados Unidos debía dar a conocer cuáles eran sus «preferencias», según Popper, y «alentar» y «ofrecer incentivos» a los militares para que pusiesen fin a las violaciones. Con todo, el informe CASP rechazaba las «tácticas de presión directa», que, tal como reconocía el embajador, contribuirían a imprimir en el régimen cierta «mentalidad de asedio».[73]

Los planteamientos de Popper provocaron algo semejante a un motín en la embajada. Cuatro de sus integrantes —John Tipton, alto funcionario de asuntos políticos; sus subordinados Robert Steven y Michael Lyons, y el agregado para asuntos laborales Arthur Nixon— redactaron y firmaron un documento en el que expresaban su desacuerdo con el informe CASP y que titularon «Política de Estados Unidos frente a Chile: Propuesta alternativa». Los autores de este primer desafío interino manifiesto a la actitud positiva de Kissinger con respecto a Pinochet argumentaban que «la política de persuasión amistosa no ha funcionado», y proponían «un modelo de actuación que incluye medidas tangibles y que tiene muchas posibilidades de fomentar los intereses de Estados Unidos y, al mismo tiempo, propiciar cambios reales en el comportamiento del GC». La cuestión de los derechos humanos era, de acuerdo con su contundente crítica, de suma importancia en las relaciones de Estados Unidos y Chile.

> En Chile, en estos momentos, es y debe ser el factor dominante. No existe interés alguno allí, ya sea en lo individual o en lo colectivo, de

> mayor peso que este. Es más: el coste que supone a EE.UU. que lo identifiquen de forma continuada como el principal sostén del presente GC sobrepasa en gran medida los beneficios que reporta.

Perseverar en nuestro respaldo al GC es, dadas las serias y continuas violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen, despilfarrar el capital del Poder Ejecutivo y su credibilidad frente al Congreso en un asunto de importancia relativamente menor cuando están en juego otros mucho más relevantes. De hecho, al actuar en calidad de abogados y protectores del GC en los foros internacionales y en sus protestas ante otros gobiernos, no hacemos más que malgastar nuestra influencia y eficacia respecto de nuestros aliados tradicionales en una cuestión que no tiene para nosotros una importancia vital.

Los funcionarios de la embajada recomendaban que el país adoptase la política de «informar al GC de que no emprenderemos ninguna otra acción para ayudar a Chile en el terreno político, económico o militar hasta que su comportamiento en relación con los derechos humanos haya alcanzado un nivel aceptable», con lo que rechazaban de forma explícita la postura del embajador Popper y el secretario de Estado Kissinger.[74]

No obstante, fue esta última la que prevaleció en una serie de reuniones celebradas para discutir las futuras relaciones con el régimen de Pinochet. De cualquier modo, siguió existiendo cierto «desconcierto» en lo tocante a la política que debía seguirse con respecto a Chile, tal como expresa el título elegido por Stephen Low para el memorando remitido al general Scowcroft, subordinado de Kissinger en la Casa Blanca.[75] La onda expansiva del constante apoyo brindado al régimen comenzó a afectar de forma creciente a otras secciones del Departamento de Estado y el Pentágono, lo que fue a sumarse a la oposición burocrática surgida al interior del gobierno. La abrupta suspensión por parte de Pinochet de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU el día 5 de julio, un intento palmario de encubrir las atrocidades de su régimen, no hizo sino dar fuerza a los argumentos de los que se oponían a la política de Estados Unidos respecto de Chile, incluidos los que lo hacían desde el seno mismo del gobierno. El debate interno continuó durante buena parte de 1975, y la

división entre estadistas, diplomáticos y directores de las diversas secciones se hizo cada vez más aguda.

Mientras que la Oficina de Asuntos Interamericanos se preparaba para celebrar un encuentro de gran importancia sobre Chile en julio, el embajador Popper defendía el statu quo en una exposición de veintiséis páginas llamada «La situación en Chile y las perspectivas de la política estadounidense», en la que enumeraba las posibilidades de éxito de los incentivos frente a los correctivos en lo referente al asunto de los derechos humanos. Este, según venía a decir, había recibido más atención de lo que podía justificarse. En lo que a los intereses nacionales de Estados Unidos se refería, este problema era «secundario y ha alcanzado la importancia que se le concede en estos momentos debido, principalmente, a la influencia que tiene en nuestra maniobrabilidad en otras áreas». El embajador se oponía a efectuar una maniobra diplomática de alto nivel ante el régimen, convencido de que Estados Unidos debía limitarse a «mantener nuestra postura general de desaprobación».

En la oficina de planificación política de la ARA, los argumentos de Popper llevaron al analista Richard Bloomfield a redactar uno de los documentos más directos y francos que hubiese escrito un funcionario del gobierno acerca de Estados Unidos y los derechos humanos en Chile. «¿Cómo pretendemos que la Junta Militar entienda que el gobierno estadounidense "desaprueba" su comportamiento?», se preguntaba en las dos páginas enviadas al vicesecretario Rogers. «Como dice el refrán, obras son amores, y no buenas razones».[76] De hecho, a esta afirmación había antepuesto toda una lista de las «obras» con las que había demostrado Estados Unidos su respaldo al régimen:

• Nos mostramos solícitos ante el problema de la deuda chilena y hacemos uso de nuestra diplomacia para promover su reestructuración.

• Empleamos nuestra influencia sobre las IFI [instituciones financieras internacionales] para garantizar que los préstamos a Chile no sufren demora alguna.

• Votamos en contra de las resoluciones propuestas en las organizaciones internacionales que condenan la actuación del GC con

respecto a los derechos humanos, o nos abstenemos sin más.

• Aseguramos al GC que queremos venderle armamento y que lamentamos las restricciones impuestas por el Congreso.

Bloomfield rechazaba la proposición defendida por Popper y Kissinger, según los cuales el régimen de Pinochet se desmoronaría sin el sostén estadounidense y tal contingencia haría resurgir algún tipo de gobierno de izquierda contrario a Estados Unidos. «La idea de aceptar la ausencia de derechos humanos en Chile con la intención de impedir el resurgimiento de un gobierno hostil», escribió, «constituye, a mi parecer, una consideración a todas luces secundaria». Las heridas que se estaba infligiendo a sí misma la política estadounidense, sin embargo, eran para él algo mucho más importante. El apoyo que brindaba Washington a Pinochet había dañado su imagen en el ámbito nacional e internacional hasta el punto de mermar la credibilidad del gobierno de Estados Unidos. «Todos los países del mundo consideran que estamos en estrecha asociación con la Junta Militar y, por lo tanto, trabajamos codo a codo con fascistas y torturadores», afirmaba Bloomfield, para añadir más adelante: «Razón de más para que buena parte de la juventud del país se encuentre distanciada de su gobierno y la política exterior de este. Chile, para muchos de nuestros conciudadanos, es solo el ejemplo más reciente de que Estados Unidos no está siendo fiel a sus valores».

Kissinger y Pinochet

La creciente presión del público y el Congreso, así como la procedente del interior del propio Departamento de Estado, desembocó en una escena tan extravagante como inesperada: la de Henry Kissinger pronunciando un discurso internacional sobre los derechos humanos en Santiago de Chile. El viaje que hizo en 1976, ahora famoso, formaba parte de un recorrido por buena parte de Latinoamérica que William Rogers, vicesecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, consideraba prioritario. Se había programado, en un principio, para febrero de 1975, pero los viajes diplomáticos del secretario de Estado a Oriente Medio provocaron una demora de dos meses. Luego, en abril, la caída de Saigón y el caótico final

de la guerra de Vietnam llevaron a suspenderlo. Un año más tarde, cuando la Organización de Estados Americanos convocó para junio de 1976 una asamblea general en Santiago, Kissinger accedió a asistir. Así, al parecer de Rogers, mataría varios pájaros de un solo tiro: haría que muchos centrasen su atención en aquella región latinoamericana, apaciguaría a los gobiernos iberoamericanos que se sentían desairados y respondería al escepticismo que albergaba el Congreso acerca del interés del Departamento de Estado por los derechos humanos.

El punto más importante que tenía previsto tratar la OEA era el nuevo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una crítica inflexible a las atrocidades del régimen de Pinochet. Según denunciaba este documento, el gobierno chileno seguía pasando por alto con frecuencia el derecho a la libertad física de la persona, y aunque no dejaban de «promulgarse decretos destinados a tranquilizar o confundir a la opinión pública mundial, la práctica de encarcelamientos arbitrarios, persecuciones y torturas no ha cesado hasta el presente». Kissinger no pretendía centrar su participación en la OEA en los derechos humanos, pero el vicesecretario Rogers y la embajada lo persuadieron de que no había modo alguno de evitar el asunto, dado que «si el secretario visitara Chile y no tratase la cuestión de los derechos humanos», argumentó el subdirector de la embajada, Thomas Boyatt, en un cablegrama remitido a Washington el 21 de abril, «daría pie a un aluvión tal de críticas que excluiría por completo la opción de no implicación». Además, según seguía diciendo, «desde el golpe no ha pisado el país ningún funcionario estadounidense de una altura comparable a la del secretario de Estado, ni parece probable que se efectúe una visita semejante estando en el poder el presente GC. Todos van a estar pendientes de las palabras del secretario, y su visita nos brinda quizá una de las mejores oportunidades que se nos van a presentar para lograr una mejora significativa de las condiciones en que se encuentran en Chile los derechos humanos».[77] Por consiguiente, la embajada recomendó a Kissinger que mantuviese una reunión privada con Pinochet.

En lo referente a la estrategia diplomática, el equipo del embajador Popper consideraba que el único modo de hacer comprender al general el mensaje relativo a los derechos humanos era plantearlo de un modo directo y sin concesiones. «Pinochet es tan estrecho de miras y está tan convencido de su

rectitud que hará falta un buen mazazo para hacer que fije su atención en ciertos hechos desagradables de la vida», advirtió Boyatt. «El anticomunismo de Pinochet tiene un carácter evangélico y de santurrón», reiteró el embajador Popper en un cablegrama biográfico concebido para poner a Kissinger al corriente del perfil psicológico de la persona con la que se iba a encontrar. «Lo más probable es que las normas tradicionales de la fraseología diplomática no surtan efecto alguno con el presidente: necesita que se lo trate de un modo más directo, con afirmaciones claras y específicas. Si empleamos lugares comunes, Pinochet no entenderá nunca qué es lo que nos molesta ni reaccionará ante nuestras recomendaciones». [78]

A fin de prepararlo para la reunión, el vicesecretario Rogers entregó a Kissinger un informe básico dos semanas antes del viaje, «Objetivos generales de su visita a Santiago de Chile». El objetivo del secretario de Estado consistía en, según el documento, «dejar fuera de toda duda que»:

- El problema de los derechos humanos en Chile tiene una importancia vital no solo para el Congreso y el público, sino que también para el conjunto de nuestras relaciones.

- Somos muy conscientes de la existencia de una campaña propagandística internacional, y nuestra postura al respecto es de rechazo.

- Pero el problema (...) no es la propaganda, y la respuesta no está en las «relaciones públicas».

- Las iniciativas fundamentales encaminadas a mejorar la situación de los derechos humanos redundarían en beneficio de Chile y en el nuestro propio.

La labor del secretario de Estado consistía en «convencer a los chilenos de una serie de hechos rudimentarios de la vida que no han querido aceptar de ningún otro pero que podrían estar dispuestos a aceptar de usted». Kissinger debía hacer entender al general que «solo un cambio básico en las prácticas relativas a los derechos humanos tiene alguna posibilidad de acabar con toda intención de»:

- Inmovilizar las líneas secretas de comunicación con los militares;

- prohibir futuras ventas de material militar;

- reducir o suspender las ventas de trigo con condiciones privilegiadas y garantías para la construcción de viviendas, o

- poner fin a los préstamos de bancos internacionales.

A semejanza de la España franquista de la década de 1940, Chile se había convertido en «un símbolo de la tiranía de derecha», según advirtió Rogers al secretario de Estado. «Querámoslo o no, se nos identifica con los orígenes del régimen y, en consecuencia, se nos acusa de ser, en parte, responsables de sus acciones. Este hecho hace aún mayor nuestro interés por que el GC adopte una actitud aceptable en lo concerniente a los derechos humanos».[79]

En sus memorias, Years of Renewal, Kissinger decía haber seguido este consejo al sacar a relucir el tema de la democracia y los derechos humanos durante una reunión celebrada el 8 de junio, a mediodía, en el despacho presidencial del general. «Dediqué buena parte del diálogo que mantuve con Pinochet a los derechos humanos», escribió. «Resumí los principales puntos del discurso que pronunciaría ante la OEA». Citando lo que había dicho a Pinochet, afirmaba que este debía entender que los derechos humanos eran «un problema que complica nuestras relaciones».

> Esta tarde, en la asamblea general, voy a tratar el tema de los derechos humanos, y he querido posponer mi exposición hasta haber podido hablar con usted. Quiero que comprenda mi postura: nosotros preferimos emplear la persuasión moral a las sanciones legales.[80]

Con todo, el relato público que ofrece el secretario de Estado contrasta por completo con el texto del memorando secreto de la conversación secreta con Pinochet, que no revela empeño alguno concerniente a la «persuasión moral» ni menciona la democracia y expresa una preocupación mínima por los derechos humanos. Tal como indica la transcripción desclasificada, Kissinger no tenía otra intención que comunicar a Pinochet con antelación el contenido de su discurso y hacerle saber que, lejos de ir dirigido al

gobierno chileno, estaba concebido para aplacar al Congreso estadounidense. «No puedo hacer otra cosa sin provocar una reacción de Estados Unidos que desembocaría en restricciones legislativas», indicó al general tras esbozar algunos puntos de su intervención (véase el documento 6). Sea como fuere, dejó bien claro lo siguiente: «El discurso no va dirigido a Chile: quería que lo supiera. En mi opinión, está usted siendo víctima de todos los grupos de izquierda del mundo, y su mayor pecado no ha sido otro que el de derrocar un gobierno demasiado cercano al comunismo» (la cursiva es mía).

En la versión selectiva que recoge en Years of Renewal, Kissinger refiere que Pinochet se quejó de que Estados Unidos tenía «un sistema punitivo para sus amigos». «Yo volví a insistir», prosigue, «en que cualquier ayuda importante procedente de nosotros dependería en realidad de los progresos que se diesen en el ámbito de los derechos humanos». Lo cierto es, según la transcripción secreta, que Kissinger respondió lamentando ante el general las presiones del Congreso en torno a dicho particular y garantizándole el respaldo de Washington. «Hay mucho de cierto en su afirmación. Corren tiempos extraños para Estados Unidos. (...) Por desgracia, hemos tenido que superar Vietnam y el Watergate. (...) Acogimos con agrado el derrocamiento del gobierno de inclinaciones comunistas que se había establecido aquí y no tenemos intención alguna de debilitar la posición de usted».

Verdad es que el secretario de Estado mencionó brevemente la cuestión de los derechos humanos al hablar de la necesidad de arrebatar «las armas con que cuentan nuestros enemigos», con lo que se refería al Congreso estadounidense. «Sin duda sería de gran ayuda que nos pusiese al corriente de las medidas que está adoptando en el ámbito de los derechos humanos», dijo, tras lo cual se apresuró a añadir: «No lo digo con la intención de socavar su gobierno. Deseo que salga adelante y me gustaría mantener la posibilidad de serle de ayuda».

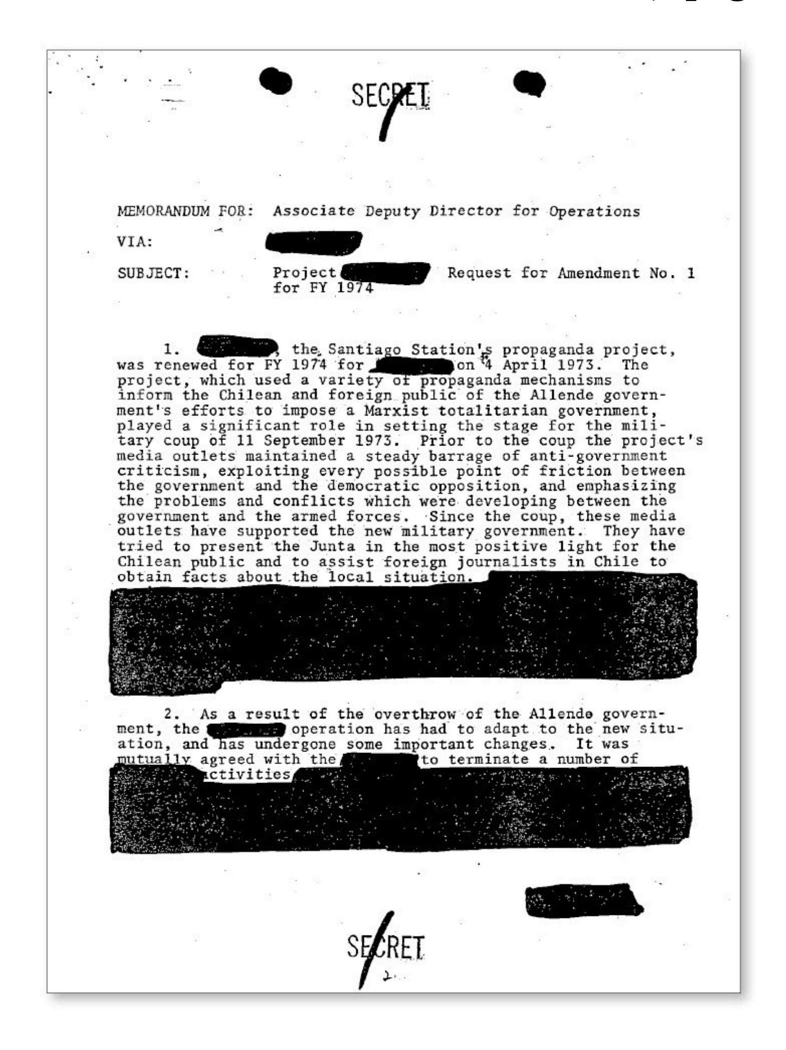
Kissinger, en consecuencia, hizo caso omiso de los consejos de sus principales ayudantes, quienes lo instaban a presionar a los chilenos para que llevasen a cabo «cambios fundamentales» en sus prácticas relativas a los derechos humanos. Asimismo, durante el encuentro pasó por alto la advertencia de la embajada de no enturbiar con lugares comunes su limitado

mensaje sobre el particular. «En Estados Unidos, como sabe, secundamos lo que está tratando de hacer. (...) Deseamos que el suyo sea un gobierno próspero», aseguró el secretario de Estado a Pinochet al principio de la conversación, para reiterar, cuando esta tocaba a su fin, el respaldo de la administración de Ford al régimen militar chileno: «Queremos ayudarlo, y no obstruir su labor. Hizo usted un gran servicio a Occidente al derrocar a Allende».

---

* En español en el original. (N. del T.)

Documento 1. CIA, secreto: «Proyecto [Tachado] Solicitud de enmienda N°1 para el A[ño] F[iscal] 1974», 9 enero de 1974. (2 páginas).



SECRET

MEMORANDUM FOR: Associate Deputy Director for Operations

VIA: [redacted]

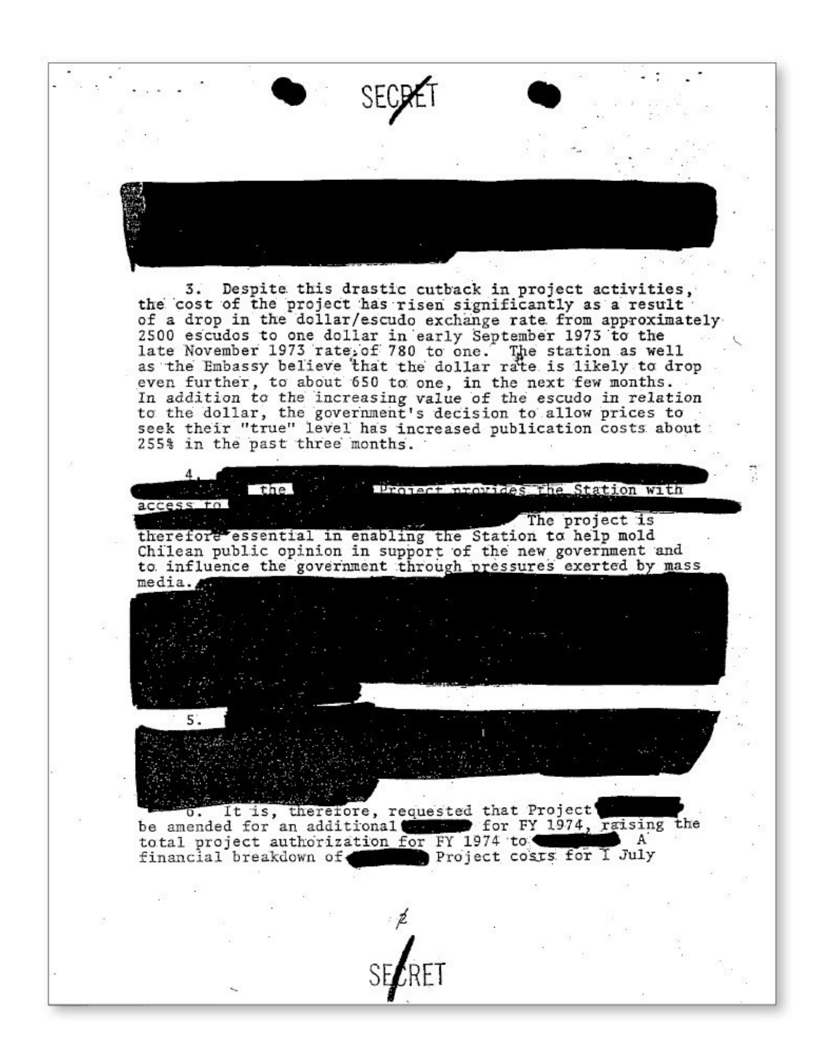
SUBJECT: Project [redacted] Request for Amendment No. 1 for FY 1974

1. [redacted], the Santiago Station's propaganda project, was renewed for FY 1974 for [redacted] on 4 April 1973. The project, which used a variety of propaganda mechanisms to inform the Chilean and foreign public of the Allende government's efforts to impose a Marxist totalitarian government, played a significant role in setting the stage for the military coup of 11 September 1973. Prior to the coup the project's media outlets maintained a steady barrage of anti-government criticism, exploiting every possible point of friction between the government and the democratic opposition, and emphasizing the problems and conflicts which were developing between the government and the armed forces. Since the coup, these media outlets have supported the new military government. They have tried to present the Junta in the most positive light for the Chilean public and to assist foreign journalists in Chile to obtain facts about the local situation. [redacted]

2. As a result of the overthrow of the Allende government, the [redacted] operation has had to adapt to the new situation, and has undergone some important changes. It was mutually agreed with the [redacted] to terminate a number of [redacted] activities [redacted]

[redacted]

SECRET



SECRET

[redacted]

3. Despite this drastic cutback in project activities, the cost of the project has risen significantly as a result of a drop in the dollar/escudo exchange rate from approximately 2500 escudos to one dollar in early September 1973 to the late November 1973 rate of 780 to one. The station as well as the Embassy believe that the dollar rate is likely to drop even further, to about 650 to one, in the next few months. In addition to the increasing value of the escudo in relation to the dollar, the government's decision to allow prices to seek their "true" level has increased publication costs about 255% in the past three months.

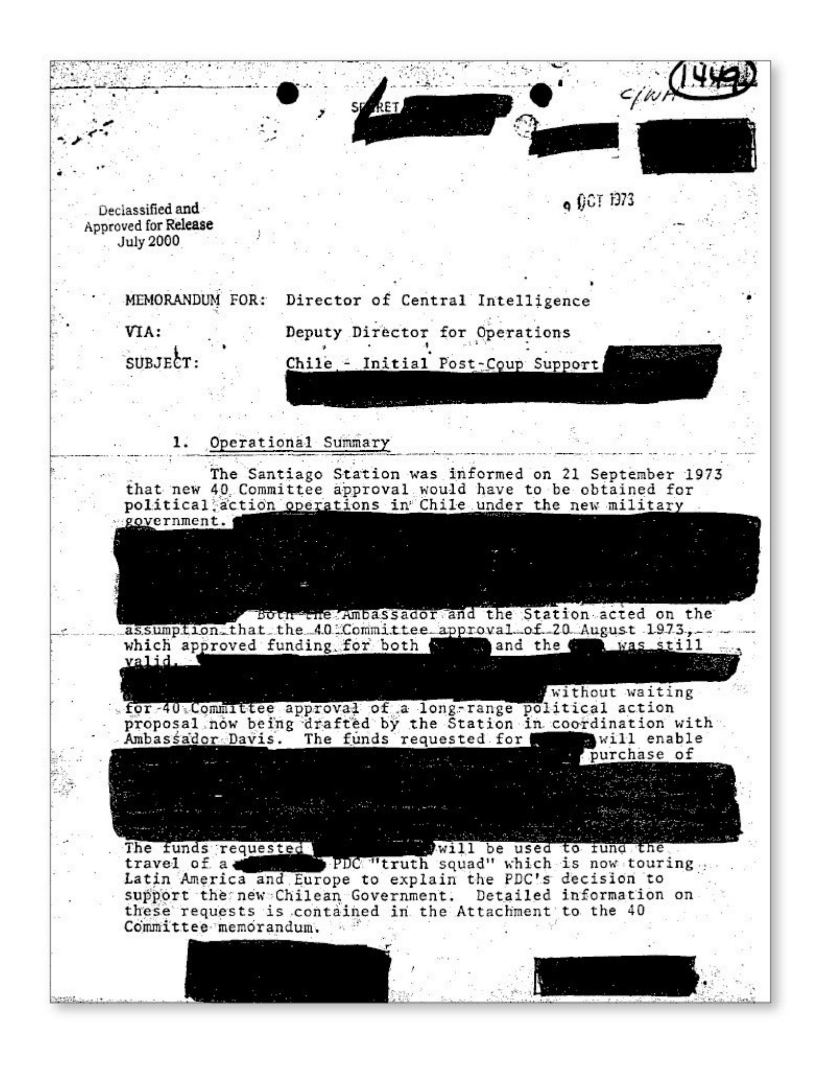
4. [redacted] the [redacted] Project provides the Station with access to [redacted] The project is therefore essential in enabling the Station to help mold Chilean public opinion in support of the new government and to influence the government through pressures exerted by mass media. [redacted]

5. [redacted]

6. It is, therefore, requested that Project [redacted] be amended for an additional [redacted] for FY 1974, raising the total project authorization for FY 1974 to [redacted]. A financial breakdown of [redacted] Project costs for 1 July

SECRET

Documento 2. CIA, Memorando secreto para William Colby: «Chile – Respaldo inicial posgolpe», 9 de octubre de 1973.



S[redacted]RET [redacted]

C/WH (1449) [redacted]

9 OCT 1973

Declassified and
Approved for Release
July 2000

MEMORANDUM FOR: Director of Central Intelligence

VIA: Deputy Director for Operations

SUBJECT: Chile - Initial Post-Coup Support [redacted]

1. Operational Summary

The Santiago Station was informed on 21 September 1973 that new 40 Committee approval would have to be obtained for political action operations in Chile under the new military government. [redacted] Both the Ambassador and the Station acted on the assumption that the 40 Committee approval of 20 August 1973, which approved funding for both [redacted] and the [redacted] was still valid. [redacted] without waiting for 40 Committee approval of a long-range political action proposal now being drafted by the Station in coordination with Ambassador Davis. The funds requested for [redacted] will enable [redacted] purchase of [redacted] The funds requested [redacted] will be used to fund the travel of a [redacted] PDC "truth squad" which is now touring Latin America and Europe to explain the PDC's decision to support the new Chilean Government. Detailed information on these requests is contained in the Attachment to the 40 Committee memorandum.

[redacted] [redacted]

Documento 3. CIA, secreto: Reporte «Personal para Henry Kissinger» sobre la reunión entre el subdirector de la CIA, Vernon Walters, y el general Augusto Pinochet, 14 de febrero de 1974. (3 páginas).

c 14 Feb. 1974 ɔ

******* S E C R E T *******S COPY

OP IMMED
OF [redacted] #0223 0451721 25X1
O 141718Z ZYH FEB 74
FM SANTIAGO

TO THE WHITE HOUSE

S E C R E T 141557Z FEB 74 [redacted] 25X1

PERSONAL TO DR. HENRY A. KISSINGER.
[redacted] SANTIAGO 223 25X1
[redacted] I SAW GENERAL PINOCHET ALONE AT HIS OFFICE
IN THE DEFENSE MINISTRY. [redacted] HE SAID 25X1
HE WAS DELIGHTED TO SEE ME AGAIN. HE WAS RELAXED AND MOST CORDIAL AND RECALLED OUR LUNCH TOGETHER IN QUITO IN 1959.

"I CONVEYED GREETINGS FROM THE PRESIDENT AND SECRETARY AS WELL AS OUR FRIENDSHIP AND SUPPORT, TOGETHER WITH OUR UNDERSTANDING OF THE IMPORTANCE OF THE SUCCESS OF HIS EFFORTS TO ENSURE CHILE'S RECOVERY. 25X1

"I EXPRESSED OUR DESIRE TO BE OF ASSISTANCE WITHIN THE LIMITS OF THE CONSTRAINTS PLACED UPON US BY CONGRESS AND OUR WISH TO BE HELPFUL IN A DISCREET WAY. GENERAL PINOCHET SAID HE WAS VERY HAPPY TO HEAR THIS AND TO HEAR IT FROM AN OLD FRIEND. HE HAD A VERY DIFFICULT TASK AHEAD AND NEEDED ASSISTANCE TO INSURE THE ECONOMIC AND POLITICAL RECOVERY OF CHILE AND ITS DEFENSE.

"I NOTED THAT WE HAD NO CURRENT PLANS TO CHANGE OUR POLICY TOWARDS CUBA. HE EXPRESSED GREAT SATISFACTION ON HEARING THIS. HE SAID THAT CASTRO WAS STILL WORKING HARD AT EXPORTING THE REVOLUTION. THE CHILEANS HAD FOUND EVIDENCE HERE THAT ARMS ORIGINALLY SHIPPED TO CHILE FROM CUBA HAD BEEN TRANSSHIPPED TO EXTREMIST GROUPS IN ARGENTINA AND OTHER NEIGHBORING COUNTRIES. TODAY LARGE QUANTITIES OF SOVIET ARMS WERE BEING SHIPPED TO PERU AND THIS WAS A CAUSE OF SERIOUS CONCERN TO CHILE. IT WOULD BE DIFFICULT TO SUSTAIN BOTH ECONOMIC RECOVERY AND ARMS RACE. CHILE DID NOT WANT THE LATTER. THEY ONLY WANTED SECURITY.

"GENERAL PINOCHET SAID HE WOULD TELL ME TWO THINGS HE HAD NOT TOLD ANY FOREIGNER. HE WAS GOING SHORTLY TO BRAZIL AND WOULD SPEND SEVERAL DAYS THERE. BRAZIL HAD BEEN AND WAS BEING VERY HELPFUL TO HIM. I SAID THAT WE WOULD WORK WITH THE BRAZILIANS IN TRYING TO BE OF ASSISTANCE TO HIM; SECONDLY, HE SAID THAT PRIOR TO THE "MOVEMENT" OF 11 SEPT HE HAD HAD SOME DOUBTS ABOUT THE FIBRE OF THE CHILEAN SOLDIER, SINCE CHILE HAD NOT BEEN AT WAR FOR NEARLY A CENTURY. THE CONDUCT OF THE CHILEAN ARMED FORCES DURING ALLENDE'S OVERTHROW HAD CMPLETELY REASSURED

* * * * * * * * * * * * * * * *WHSR COMMENT * * * * * * * * * * * * * * *

HAK, SCOWCROFT, MCFARLANE, RODMAN

******* S E C R E T *******S COPY

HIM AS TO THEIR FIBRE AND DISCIPLINE.

"I SAID THAT AT THE MEXICO CITY CONFERENCE WE WOULD HAVE NO GREAT SURPRISES AND WOULD NOT ENGAGE IN CONFRONTATION WITH ANYONE.

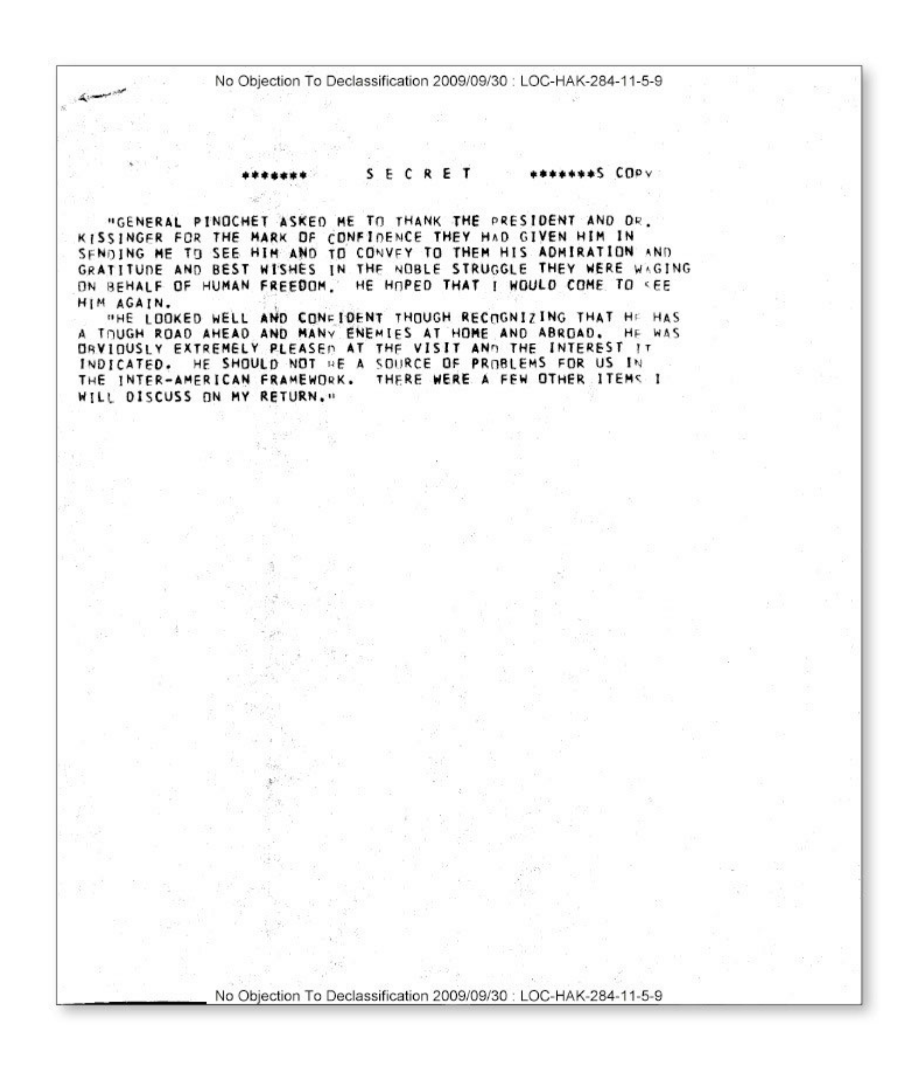
"GENERAL PINOCHET EXPRESSED ADMIRATION FOR THE WAY IN WHICH THE PRESIDENT HAD HANDLED OUR RELATIONS WITH THE USSR AND PRC WITHOUT MAKING COSTLY CONCESSION TO EITHER AND FOR THE SKILLFUL WAY IN WHICH WE HAD LEFT VIETNAM WITHOUT LOSING IT. HE EXPRESSED UNDERSTANDING FOR THE PRESIDENT'S INTERNAL PROBLEMS SAYING THAT A GREAT MAN WAS ALWAYS BITTERLY OPPOSED. I ASSURED HIM THAT THE PRESIDENT WAS TOUGH AND NOTED THAT I HAD BEEN WITH HIM IN VERY DANGEROUS SITUATIONS ON SEVERAL OCCASIONS AND HAD SEEN THE KIND OF COURAGE HE DISPLAYED WHEN UNDER PRESSURE OR IN DANGER.

"GENERAL PINOCHET SAID HE WAS DELIGHTED TO KNOW THAT THE LEADERSHIP OF THE UNITED STATES DID NOT SHARE THE VIEWS ON CHILE OF THE NEW YORK TIMES AND THE WASHINGTON POST. HE KNEW THAT HE MUST RECONCILE CHILEANS IN ORDER TO RESTORE THE COUNTRY AND TO DO THIS HE WOULD USE THE BEST CIVILIAN BRAINS IN THE COUNTRY. HE CITED SAEZ, LENIZ AND THE MINISTER OF JUSTICE. HE KNEW THAT THERE WERE SOME TOUGH TIMES AHEAD AND HE WOULD HAVE TO TAKE SOME UNPOPULAR ECONOMIC MEASURES TO MOVE THE COUNTRY TOWARDS RECOVERY. CHILE HAD GOOD PEOPLE AND ADEQUATE RESOURCES. HE INTENDED TO USE THEM TO BEST ADVANTAGE.

"I NOTED THE THE U.S. WAS SENDING HIM AN OUTSTANDING AMBASSADOR WHO WAS A GOOD FRIEND OF AND HAD GOOD ACCESS TO THE SECRETARY OF STATE. GENERAL PINOCHET SAID HE APPRECIATED THIS VERY MUCH AND LOOKED FORWARD TO MEETING THE AMBASSADOR SOON.

"PINOCHET SAID HE WAS SETTING UP A NEW NATIONAL INTELLIGENCE SERVICE AND THAT HIS KEY MAN IN THIS WAS A COLONEL CONTRERAS. ANOTHER WOULD BE THE TITULAR HEAD BUT CONTRERAS WAS HIS MAN. HE WOULD MUCH APPRECIATE OUR HELP IN THE FORMATIVE PERIOD AND I TOLD HIM WE WOULD BE GLAD TO HAVE CONTRERAS OR ANYONE ELSE COME UP TO SEE US TO SEE WHAT WE COULD DO TO BE OF ASSISTANCE TO THEM.

"PINOCHET EXPRESSED ADMIRATION FOR DR. KISSINGER'S TIRELESS QUEST FOR PEACE AND HOPED THE SECRETARY WOULD COME TO LATIN AMERICA. I SAID I BELIEVED HE WOULD AS HE UNDERSTOOD THE IMPORTANCE OF THIS PART OF THE WORLD. GENERAL PINOCHET LOOKED FORWARD TO MEETING HIM. WE SHOULD KNOW THAT THE CHILEANS WOULD NOT CREATE ANY PROBLEMS FOR US. AS WE KNEW THEY HAD STAGED THEIR REVOLUTION BY THEMSELVES AND HAD DONE IT WITHOUT ANY OUTSIDE HELP, BUT THEY DID NEED ASSISTANCE TO REBUILD THEIR ECONOMY. HE AGAIN EXPRESSED CONCERN ABOUT THE INTRODUCTION INTO PERU OF SOVIET ARMS, TECHNICIANS AND DEPENDENT FAMILIES. HE STRONGLY FELT THAT THE USSR AND CUBA INTENDED TO USE PERU AS A PLATFORM TO OPERATE IN THE CONTINENT. CHILE HAD NO AGGRESSIVE INTENTIONS AND ONLY WANTED DEFENSIVE WEAPONS. GENERAL PINOCHET SAID HE FELT THAT PERON WAS MOVING IN A MODERATE DIRECTION IN ARGENTINA.

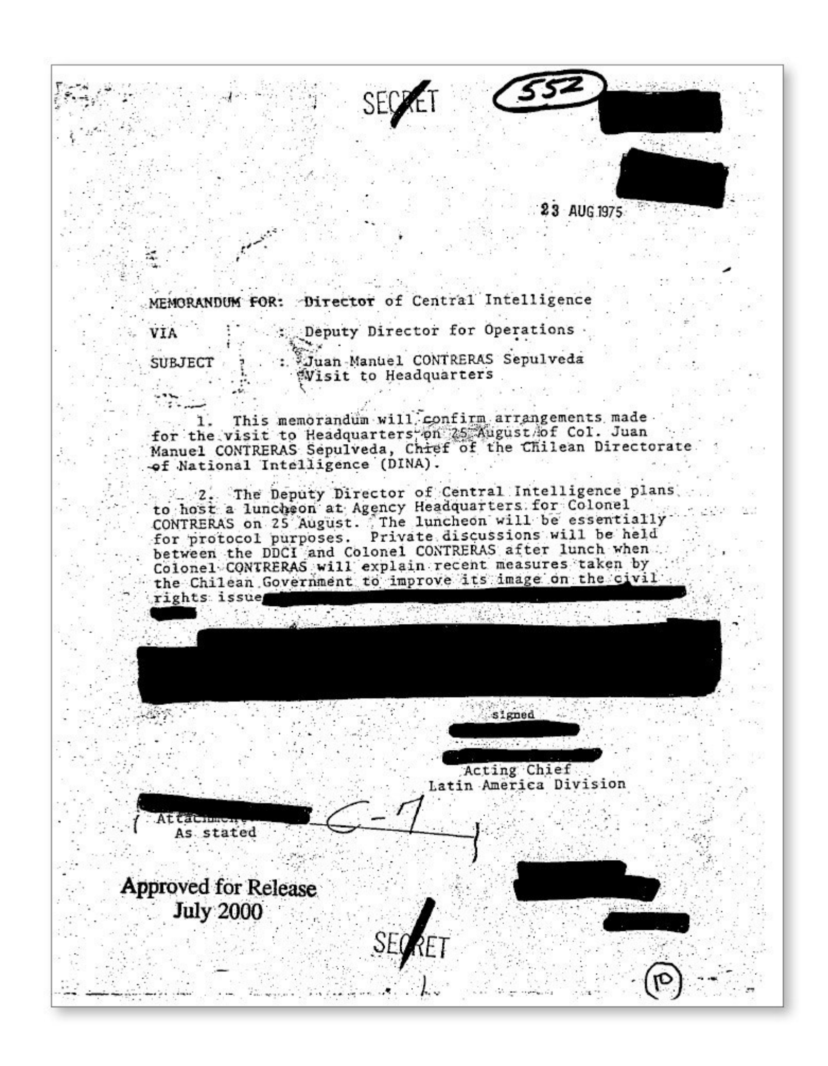


******* S E C R E T *******S COPY

"GENERAL PINOCHET ASKED ME TO THANK THE PRESIDENT AND DR. KISSINGER FOR THE MARK OF CONFIDENCE THEY HAD GIVEN HIM IN SENDING ME TO SEE HIM AND TO CONVEY TO THEM HIS ADMIRATION AND GRATITUDE AND BEST WISHES IN THE NOBLE STRUGGLE THEY WERE WAGING ON BEHALF OF HUMAN FREEDOM. HE HOPED THAT I WOULD COME TO SEE HIM AGAIN.

"HE LOOKED WELL AND CONFIDENT THOUGH RECOGNIZING THAT HE HAS A TOUGH ROAD AHEAD AND MANY ENEMIES AT HOME AND ABROAD. HE WAS OBVIOUSLY EXTREMELY PLEASED AT THE VISIT AND THE INTEREST IT INDICATED. HE SHOULD NOT BE A SOURCE OF PROBLEMS FOR US IN THE INTER-AMERICAN FRAMEWORK. THERE WERE A FEW OTHER ITEMS I WILL DISCUSS ON MY RETURN."

Documento 4. CIA, secreto, Memorando para William Colby: «Visita de Juan Manuel Contreras Sepúlveda al cuartel general», 23 de agosto de 1975.



SECRET 552 [redacted]

23 AUG 1975

MEMORANDUM FOR: Director of Central Intelligence

VIA : Deputy Director for Operations

SUBJECT : Juan Manuel CONTRERAS Sepulveda
Visit to Headquarters

1. This memorandum will confirm arrangements made for the visit to Headquarters on 25 August of Col. Juan Manuel CONTRERAS Sepulveda, Chief of the Chilean Directorate of National Intelligence (DINA).

2. The Deputy Director of Central Intelligence plans to host a luncheon at Agency Headquarters for Colonel CONTRERAS on 25 August. The luncheon will be essentially for protocol purposes. Private discussions will be held between the DDCI and Colonel CONTRERAS after lunch when Colonel CONTRERAS will explain recent measures taken by the Chilean Government to improve its image on the civil rights issue [redacted]

signed
[redacted]
Acting Chief
Latin America Division

[redacted]
Attac[redacted]
As stated

C-7

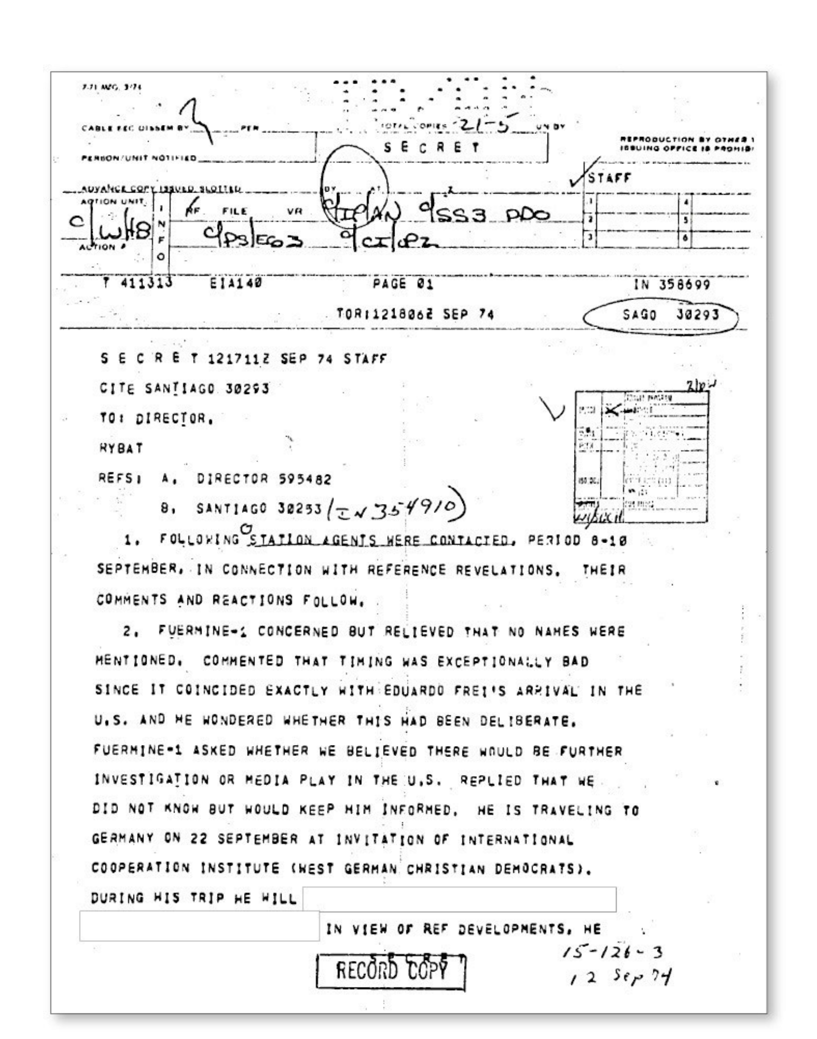
Approved for Release
July 2000

[redacted]

SECRET

10

Documento 5. CIA, cablegrama secreto: [Contactos con agentes chilenos después de revelaciones de prensa sobre el rol de la CIA en la desestabilización del gobierno de Salvador Allende], 12 de septiembre de 1974. (5 páginas).



CABLE SEC DISSEM BY ___ PER ___ TOTAL COPIES 21-5 RUN BY ___

REPRODUCTION BY OTHER THAN ISSUING OFFICE IS PROHIBITED

PERSON/UNIT NOTIFIED ___

S E C R E T

ADVANCE COPY ISSUED SLOTTED ___ BY ___ AT ___

STAFF

ACTION UNIT C/WH8

ACTION #

INFO RF FILE VR C/IDAN C/SS3 PDO C/PS/EG3 C/CI/OPS

T 411313 EIA140 PAGE 01 IN 358699

TOR:1218062 SEP 74 SAGO 30293

S E C R E T 121711Z SEP 74 STAFF

CITE SANTIAGO 30293

TO: DIRECTOR.

RYBAT

REFS: A. DIRECTOR 595482

B. SANTIAGO 30253 (IN 354910)

1. FOLLOWING STATION AGENTS WERE CONTACTED, PERIOD 8-10 SEPTEMBER, IN CONNECTION WITH REFERENCE REVELATIONS. THEIR COMMENTS AND REACTIONS FOLLOW.

2. FUERMINE-1 CONCERNED BUT RELIEVED THAT NO NAMES WERE MENTIONED. COMMENTED THAT TIMING WAS EXCEPTIONALLY BAD SINCE IT COINCIDED EXACTLY WITH EDUARDO FREI'S ARRIVAL IN THE U.S. AND HE WONDERED WHETHER THIS HAD BEEN DELIBERATE. FUERMINE-1 ASKED WHETHER WE BELIEVED THERE WOULD BE FURTHER INVESTIGATION OR MEDIA PLAY IN THE U.S. REPLIED THAT WE DID NOT KNOW BUT WOULD KEEP HIM INFORMED. HE IS TRAVELING TO GERMANY ON 22 SEPTEMBER AT INVITATION OF INTERNATIONAL COOPERATION INSTITUTE (WEST GERMAN CHRISTIAN DEMOCRATS). DURING HIS TRIP HE WILL [redacted] IN VIEW OF REF DEVELOPMENTS, HE

15-126-3
12 Sep 74

RECORD COPY

7-71 MPG 1-74

CABLE SEC DISSEM BY ____ PER ____ TOTAL COPIES ____ RUN BY ____

PERSON UNIT NOTIFIED ____

SECRET

REPRODUCTION BY OTHER THAN ISSUING OFFICE IS PROHIBITED

ADVANCE COPY ISSUED SLOTTED ____ BY ____ AT ____

ACTION UNIT ____ I N F O RF, FILE VR

ACTION # ____

STAFF 1 2 3 4 5 6

T 411313 EIA140 PAGE 02 IN 358692

TOR:1218062 SEP 74 SAGO 30293

DOES NOT PLAN TO [redacted] HE RETURNING CHILE VIA NEW YORK AND CHICAGO AND PLANS TO MEET WITH FREI 15 OCTOBER IN NEW YORK. FUERMINE-1 EXPRESSED THE OPINION THAT THE JUNTA WILL NEITHER RAISE THE MATTER WITH EMBASSY NOR PURSUE FURTHER SINCE IT IS NOT IN THEIR INTEREST TO DO SO.

2. FUBRIG-2 RECEIVED NEWS CALMLY BUT WAS MOST CONCERNED ABOUT IMPLICATIONS OF EFFECTS OF THE REVELATIONS AND EXPRESSED OPINION THAT SYSTEM IN WASHINGTON SHOULD BE CHANGED TO ~~O~~PREVENT SUCH LEAKS. HE WAS RELIEVED THAT EL MURCURIO WAS NOT MENTIONED BY NAME (BUT WE ARE SKEPTICAL THAT IT WILL NOT BE EASILY IDENTIFIED IN ANY SUBSEQUENT COMMENTARY). FUBRIG-1 THOUGHT IT QUITE POSSIBLE JUNTA MAY WONDER IF USG STILL NOT IN SOME WAY SUPPORTING PDC, WHICH OF COURSE JUNTA WOULD FIND MOST UNACCEPTABLE.

4. FUERMINE-5 ALSO TOOK THE NEWS CALMLY ABOUT REVELATION OF $9,000 ITEM FOR TRAVEL OF PDC LEADERS. WHILE SHAKING HIS HEAD ABOUT THE LEAKING OF SUCH MATTERS, HE BELIEVES THAT THE REVELATION, UNLESS IT IS MADE MUCH MORE SPECIFIC BY SUBSEQUENT INVESTIGATIONS AND PUBLICITY, WILL NOT CAUSE HIM A PROBLEM.

SECRET

CABLE SEC DISSEM BY ___ PER ___ TOTAL COPIES ___ RUN BY ___

SECRET

REPRODUCTION BY OTHER THAN ISSUING OFFICE IS PROHIBITED

PERSON/UNIT NOTIFIED ___

ADVANCE COPY ISSUED/SLOTTED ___ BY ___ AT ___ Z

ACTION UNIT ___ RF FILE VR

ACTION # ___

STAFF

T 411313 EIA140 PAGE 03 IN 358699

TOR:1218062 SEP 74 SAGO 30293

CONSIDERS THE FAILURE TO IDENTIFY THE DELEGATION AS BEING PDC AND (INCORRECTLY) AS MAKING A TOUR OF LATIN AMERICAN RATHER THAN EUROPEAN CAPITALS WILL LEAD AWAY FROM PROPER IDENTIFICATION. SINCE THE FUNDS THAT PASSED THROUGH HIS HANDS WERE APPROXIMATELY $4,000 AT THE THEN LOCAL FREE MARKET RATE (AS OPPOSED TO STATION SPENDING RATE), HE FEELS THAT THIS WILL ALSO HELP HIDE PROPER IDENTIFICATION EVEN WITHIN THE PDC OF THIS FUNDING.

5. FUPOCKET-1 WAS INFORMED OF DISCLOSURE OF $25,000 FOR PURCHASE OF RADIO STATION ON 8 SEPTEMBER. WAS VISIBLY DISTURBED UPON HEARING NEWS AND COMMENTED "YOU PEOPLE NEED TO CHANGE YOUR SYSTEM SO THAT SUCH NEWS DOES NOT GET OUT." STATED THAT NO ONE WITHIN HIS GROUP KNEW THAT HE GAVE MONEY ON THE SIDE TO PURCHASE THIS RADIO STATION AND THAT NO RECORDS WERE MADE OF HIS PART IN THE DEAL. HE REMARKED THAT THE FORMER OWNER OF THE STATION IS A SOCIALIST AND UNLIKELY TO DISCUSS THE TERMS OF THE SALE SINCE ILLEGAL MONEY TRANSACTION INVOLVED. FUPOCKET-1 PROMISED TO KEEP US ADVISED OF ANY BLOW-BACK.

6. ON 10 SEPTEMBER? FUBARGAIN-1 SAID THAT GENERAL PINOCHET

SECRET

CABLE SEC DISSEM BY ____ PER ____ TOTAL COPIES ____

PERSON/UNIT NOTIFIED ____

SECRET

REPRODUCTION BY OTHER THAN ISSUING OFFICE IS PROHIBITED

ADVANCE COPY ISSUED/SLOTTED ____ BY ____ AT ____ Z

ACTION UNIT

INFO: RF FILE VR

ACTION #

STAFF

T 411313 EIA142 PAGE 04 IN 358699

TOR:121802Z SEP 74 SAGO 32293

DID NOT SEEM VERY UPSET BUT COMMENTED IN FUBARGAIN-1'S PRESENCE THAT THE DISCLOSURE "SEEMED TO BE A DUMB THING TO DO." FOR THE FIRST TIME IN OUR RELATIONSHIP WITH FUBAEGAIN-1, HE SHOWED HIS UNHAPPINESS AT WHAT HE FEELS IS GROWING EVIDENCE OF USG INCOMPREHENSION OF GOC. SAID HE AND OTHER SENIOR OFFICERS WHO HAVE TRAVELED TO STATES AND ARE MORE FAMILIAR WITH THE WAY USG FINCTIONS COULD PARTIALLY UNDERSTAND CURRENT U.S.G. ATTITUDES AND ACTIONS. SAID MOST JUNIOR OFFICERS, HOWEVER, ARE INCREASINGLY UPSET AND CONCERNED ABOUT WHAT THEY FEEL IS U.S. FAILURE TO BE A "GOOD FRIEND" OF CHILE DESPITE THE IMPORTANT SACRIFICES THAT HAVE BEEN MADE HERE IN THE WORLD ANTI-COMMUNIST STRUGGLE.

7. ACCORDING TO FUBARGAIN-1, MOST CHILEAN OFFICERS VIEW THE REVELATIONS AND THEIR TIMING AS A DELIBERATE ATTEMPT BY A SECTOR OF U.S.G. (ALBEIT THE LEGISLATIVE BRANCH) TO DELIBERATELY DAMAGE JUNTA AND FALSELY CAST DOUBT ON THEIR INDEPENDENCE AND ROLE IN BRINGING DOWN ALLENDE. OFFICERS HAVE ADDED THIS LATEST BLOW TO WHAT THEY CONSIDER TO BE U.S. FOOT-DRAGGING ON SUPPLYING CHILE ARMS URGENTLY NEEDED FOR DEFENSE

SECRET

CABLE SEC DISSEM BY ______ PER ______ TOTAL COPIES ______ RUN BY

SECRET

REPRODUCTION BY OTHER THAN ISSUING OFFICE IS PROHIBITED

PERSON/UNIT NOTIFIED ______

ADVANCE COPY ISSUED/SLOTTED ______ BY ______ AT ______ Z

STAFF

ACTION UNIT

INFO RF FILE VR

ACTION #

T 411313 EIA140 PAGE 05-05 IN 358699

TOR:121806Z SEP 74 SAGO 30293

AGAINST PERU AND U.S, FAILURE NOT ONLY TO ASSIST, BUT ACTUALLY TO CONTRIBUTE TOWARDS, PROBLEMS OF CHILEAN IMAGE ABROAD. SUM IS THAT CHILEAN OFFICER CORPS BECCHING INCREASINGLY BAFFELED AND RESENTFUL ABOUT U.S. ACCORDING TO THIS SOURCE.

8. FILE: DEFER. E2 IMPDET

SECRET

Documento 6. Departamento de Estado, secreto, Memorando de conversación entre Henry Kissinger y Augusto Pinochet: «Relaciones EE.UU.-Chile», 8 de junio de 1976. (Páginas 1, 2 y 3).

6-8-76

UNCLASSIFIED

SECRET/NODIS

DEPARTMENT OF STATE

Memorandum of Conversation

R

DATE: June 8, 1976
TIME: 12:00 noon
PLACE: Santiago, Chile (President Pinochet's Office)

SUBJECT: U.S.-Chilean Relations

PARTICIPANTS: Chile

Augusto Pinochet, President
Patricio Carvajal, Foreign Minister
Manuel Trucco, Ambassador to United States
Ricardo Claro, OAS/GA Conference Coordinator for Chilean Government

United States

The Secretary
William D. Rogers, Assistant Secretary for Inter-American Affairs
Anthony Hervas (Interpreter)

DISTRIBUTION:

UNCLASSIFIED

The Secretary: This is a beautiful building. The conference is well organized. Are you meeting with all the delegations?

Pinochet: Yes. Two or three a day. I want to tell you we are grateful that you have come to the conference.

The Secretary: It is an honor. I was touched by the popular reception when I arrived. I have a strong feeling of friendship in Chile.

Pinochet: This is a country of warm-hearted people, who love liberty. This is the reason they did not accept Communism when the Communists attempted to take over the country. It is a long te[rm]

ARA:WDRogers:cjs
(Drafting Office and Officer)

FORM DS-1254
1-65

SECRET/NODIS
XGDS

UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED

SECRET/NODIS

struggle we are a part of. It is a further stage of the same conflict which erupted into the Spanish Civil War. And we note the fact that though the Spaniards tried to stop Communism 40 years ago, it is springing up again in Spain.

The Secretary: We had the Spanish King recently, and I discussed that very issue with him.

Pinochet: I have always been against Communism. During the Viet-Nam War, I met with some of your military and made clear to them my anti-Communism, and told them I hoped they could bring about its defeat.

The Secretary: In Viet-Nam, we defeated ourselves through our internal divisions. There is a world-wide propaganda campaign by the Communists.

Pinochet: Chile is suffering from that propaganda effort. Unfortunately, we do not have the millions needed for counter propaganda.

The Secretary: I must say your spokesman (Sergio Diez) was very effective in this morning's General Assembly session in explaining your position. In the United States, as you know, we are sympathetic with what you are trying to do here. I think that the previous government was headed toward Communism. We wish your government well. At the same time, we face massive domestic problems, in all branches of the government, especially Congress, but also in the Executive, over the issue of human rights. As you know, Congress is now debating further restraints on aid to Chile. We are opposed. But basically we don't want to intervene in your domestic affairs. We can't be precise in our proposals about what you should do. But this is a problem which complicates our relationships and the efforts of those who are friends of

SECRET/NODIS

UNCLASSIFIED

Chile. I am going to speak about human rights this afternoon in the General Assembly. I delayed my statement until I could talk to you. I wanted you to understand my position. We want to deal in moral persuasion, not by legal sanctions. It is for this reason that we oppose the Kennedy Amendment.

In my statement, I will treat human rights in general terms, and human rights in a world context. I will refer in two paragraphs to the report on Chile of the OAS Human Rights Commission. I will say that the human rights issue has impaired relations between the U.S. and Chile. This is partly the result of Congressional actions. I will add that I hope you will shortly remove those obstacles.

I will also call attention to the Cuba report and to the hypocrisy of some who call attention to human rights as a means of intervening in governments. I can do no less, without producing a reaction in the U.S. which would lead to legislative restrictions. The speech is not aimed at Chile. I wanted to tell you about this. My evaluation is that you are a victim of all left-wing groups around the world, and that your greatest sin was that you overthrew a government which was going Communist. But we have a practical problem we have to take into account, without bringing about pressures incompatible with your dignity, and at the same time which does not lead to U.S. laws which will undermine our relationship.

It would really help if you would let us know the measures you are taking in the human rights field. None of this is said with the hope of undermining your government. I want you to succeed and I want to retain the possibility of aid.

5

Víctimas estadounidenses

[El vicesecretario] abordó este asunto
[de los estadounidenses asesinados]
al hablar de la necesidad de evitar que
cuestiones de importancia menor en nuestras relaciones
pudiesen dificultar nuestra cooperación.

Memorando de la conversación mantenida por el vicesecretario de Estado Jack Kubisch e Ismael Huerta, ministro de Relaciones Exteriores de la Junta Militar, en febrero de 1974.

El 8 de junio de 1976, el mismo día que Henry Kissinger elogió al general Pinochet por el «servicio» que prestaba a Occidente, un oficial del servicio de inteligencia chileno se reunió con reporteros de la CBS News y The Washington Post para hablarles de la ejecución de un ciudadano estadounidense a manos del régimen tras el golpe de Estado. El encuentro tuvo lugar en una habitación pequeña y oscura de la embajada italiana, donde el citado oficial, Rafael González, había buscado asilo con la intención de abandonar el país. En un inglés aceptable, González hizo saber a los periodistas que, pocos días después del golpe, habían solicitado su presencia en la planta novena del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) a fin de que hiciese de intérprete durante el interrogatorio de un prisionero de Estados Unidos llamado Charles Horman. «Me dijo (...) que aquel tipo sabía demasiado», observó, recordando la conversación que mantuvo con su superior, el general Augusto Lutz, «y que debía desaparecer». Según la transcripción de la grabación de la entrevista, González añadió que creía que uno de los hombres que habían estado presentes durante el interrogatorio de Horman debía de ser estadounidense, por «el modo de comportarse, su vestimenta, los zapatos que llevaba... No sé: todo». «No

digo que fuese la CIA la que apretara el gatillo», comunicó a los periodistas, «pero sí que tuvo algo que ver en todo el asunto. Fueron los chilenos quienes se [deshicieron] de él, pero la CIA estaba detrás de todo». [1]

Veintisiete años más tarde, González sufriría arresto y sería acusado de ser «cómplice de homicidio» en la muerte de Charles Horman. En enero de 2004 se desdeciría de cuanto había afirmado de la presencia de un estadounidense durante el interrogatorio de Horman. Aun así, su espectacular revelación de 1976 convirtió a Charles Horman en la víctima estadounidense más célebre del régimen de Pinochet. Con el tiempo, de hecho, Hollywood transformó su caso en una película, Desaparecido, ganadora de un Oscar y protagonizada por Jack Lemmon, en el papel del padre de Charles, y Sissy Spacek, en el de la esposa de este último. El guion giraba en torno a la dolorosa búsqueda que emprende su familia en Santiago de Chile y los numerosos obstáculos que han de sortear por culpa de desalmados funcionarios estadounidenses y de la política gubernamental de respaldo al golpe de Estado.[2]

Horman, de cualquier modo, no fue sino el primero de los cuatro ciudadanos estadounidenses asesinados por los militares chilenos. Nueve días después del golpe, las fuerzas de seguridad arrestaron a su compatriota Frank Teruggi en su domicilio de Santiago, desde donde lo llevaron, como a Horman, al Estadio Nacional, donde lo ejecutaron tras interrogarlo. En enero de 1985, una patrulla militar detuvo a un profesor de matemáticas de la Universidad de Pensilvania llamado Boris Weisfeiler, que se hallaba de excursión por la zona meridional del país y que desapareció a continuación. En septiembre de 1976 murió, en la ciudad de Washington, Ronni Karpen Moffitt víctima de un atentado con coche bomba perpetrado por agentes de la policía secreta de Chile, y se convirtió así en la víctima estadounidense del acto de terrorismo internacional de más infausta memoria cometido por el régimen pinochetista. Años después, todos estos terribles crímenes seguirían sin resolver a causa del encubrimiento descarado por parte del gobierno de Pinochet y la ocultación de pruebas, la negligencia o el mero desinterés de la administración estadounidense.

Charles Horman

Cuando The Washington Post hizo públicas las declaraciones de Rafael González acerca de Charles Horman, estas no tardaron en dar lugar a un nuevo escándalo sobre la posible mala conducta de Estados Unidos. Se trataba del asesinato premeditado de un compatriota, perpetrado, en presunta connivencia con su propio país, por un estamento militar influido y respaldado por la Casa Blanca durante el gobierno de Nixon o Ford. Durante poco menos de tres años, el régimen de Pinochet había insistido en que tanto la muerte de Horman como la de Teruggi habían sido obra de «extremistas» de izquierda que, haciéndose pasar por militares, habían cometido los crímenes con la intención de poner en un aprieto a la nueva Junta Militar. Pese a que la embajada disponía de numerosas pruebas que demostraban su falsedad, el gobierno estadounidense aceptó y aun hizo suya tan fabulosa explicación. Pocos días después de que las autoridades chilenas hubiesen reconocido ante su padre la ejecución de Charles en el Estadio Nacional, cierta portavoz del Departamento de Estado refirió a la prensa que Horman pudo haber sido asesinado por grupos de izquierda disfrazados de soldados, «gente depravada que acabó con su vida con el único objetivo de hacer quedar mal al estamento militar».[3] Las revelaciones de The Washington Post llevaron a la familia de Horman a exigir, una vez más, que el gobierno rindiese cuentas de su fallecimiento —para lo cual entabló un pleito de muerte por negligencia y una serie de reclamaciones judiciales a fin de que se desvelasen todos los documentos relacionados con el caso— y provocó un aluvión de cartas iracundas procedentes del Capitolio, así como acusaciones públicas de encubrimiento oficial. «Ahora parece [que] los diplomáticos estadounidenses ocultaron a la familia del Sr. Horman información de crucial importancia sobre las circunstancias que rodearon su muerte», afirmaba el editorial de The Washington Post correspondiente al 27 de junio de 1976.

El gobierno de Estados Unidos calló, en efecto, buena parte de lo que sabía del caso ante la familia, antes de junio de 1976 y también durante más de veinte años tras esta fecha. A raíz de las revelaciones de González, dos miembros de la Sección para América Latina del Departamento de Estado revisaron de manera superficial los archivos y descubrieron sin esfuerzo un buen número de irregularidades: durante la búsqueda desesperada de la

víctima que emprendió su familia en Santiago de Chile tras el golpe de Estado, ningún funcionario de Estados Unidos les hizo saber que cierta fuente fiable había comunicado a la embajada, pocos días después de su ejecución, que a Horman lo habían matado en el Estadio Nacional, ni que el gobierno estadounidense no había emprendido acción alguna de importancia en respuesta a esta información. En lugar de eso, prefirieron hacer circular el infundio de que Charles se hallaba escondido o estaba tratando de salir del país a través de un «conducto clandestino» de la izquierda. La familia ignoraba, por otra parte, que al menos uno de los empleados del consulado estadounidense que habían proporcionado esta noticia, James Anderson, era en realidad un agente de la CIA que se hacía pasar por diplomático. La embajada no informó jamás a la familia que todo apuntaba a que los militares chilenos disponían de numerosos datos relativos a las actividades izquierdistas de Horman y Teruggi, ni que el gobierno de Estados Unidos no había hecho nada para saber cómo ni dónde había obtenido el régimen esa información.

De hecho, a pesar de que el gobierno no se cansó de repetir que estaba investigando de forma activa ambos asesinatos, los funcionarios del Departamento de Estado llegaron a la conclusión de que tal afirmación era falsa. «Seguimos asegurando a la familia y a la prensa que estamos analizando con diligencia todas las pistas de que disponemos y haciendo cuanto está en nuestras manos para determinar cuáles fueron las circunstancias que rodearon a la muerte de estos dos compatriotas», señaló Rudy Fimbres, funcionario de la sección chilena, en una memoria dirigida al vicesecretario para Asuntos Interamericanos, Harry Shlaudeman. «Esto es exagerar».[4]

Tras un estudio inicial de los archivos, los funcionarios intermedios de la ARA llegaron a la conclusión de que los militares chilenos habían ejecutado a Horman y no juzgaron descabellado suponer que los agentes de inteligencia estadounidenses hubiesen tenido algo que ver en su muerte. «El caso no deja de ser molesto», afirmaron tres de ellos en un memorando secreto remitido a Shlaudeman el 25 de agosto de 1976. «Las implicaciones que esto tiene para el Poder Ejecutivo no son nada positivas. El Capitolio, la comunidad académica, la prensa y la familia Horman nos acusan de negligencia o, lo que es peor, complicidad en su muerte». A continuación,

relacionaron en estos términos las conclusiones a las que los habían llevado los datos de los archivos:

> • El GC persiguió a Horman y se sintió lo bastante amenazado para ordenar su ejecución inmediata, persuadido tal vez de que podría acabar con él sin provocar una reacción negativa por parte de nuestro gobierno.
>
> Disponemos de pruebas circunstanciales que sugieren que:
>
> • El servicio estadounidense de inteligencia puede haber tomado parte, por desgracia, en la muerte de Horman. En el mejor de los casos, se limitó a proporcionar o confirmar la información que desembocó en su ejecución por parte del GC; en el peor, era consciente de que este lo consideraba un elemento peligroso y no hizo nada por evitar un resultado que podía esperarse de la paranoia del GC.

El Departamento de Estado ocultó de forma deliberada estas conclusiones a la familia. Ningún funcionario de Estados Unidos informó a los Horman a la sazón y, cuando este documento trascendental se dio al público por vez primera a principios de 1980, a causa del litigio tramitado por los familiares contra los funcionarios estadounidenses, fue con su contenido censurado. Más tarde, en 1982, cuando el Departamento de Estado volvió a levantar el secreto que pesaba sobre el memorando instado por los constantes empeños legales relativos al caso de Horman, se eliminó el fragmento citado, así como cualquier otra referencia a la CIA, para lo cual se invocó la inmunidad del Poder Ejecutivo y el carácter de secreto de Estado de la información contenida en el escrito (véase el documento 1).[5] La familia del fallecido hubo de esperar aún diecisiete años más para saber —en octubre de 1999, cuando el gobierno de Clinton reveló su contenido íntegro entre miles de otros documentos relacionados con Estados Unidos y Chile — que, en 1976, al menos algunos de los hombres que trabajaban para la administración habían compartido sospechas relativas a la posible intervención de los agentes secretos estadounidenses en el asesinato de Charles Horman[6] (véase el documento 2).

Charles Horman y Frank Teruggi se convirtieron en dos de los dos mil ochocientos ciudadanos de Estados Unidos que, según se calcula, se

encontraron en medio del fuego cruzado provocado por el golpe militar en Chile. La mitad aproximada de los estadounidenses que vivían allí pertenecía a la comunidad empresarial y diplomática y estaba a favor del golpe de Estado. Sin embargo, muchos otros eran estudiantes universitarios, como Teruggi, que habían viajado al país para investigar la revolución social chilena, o activistas sociales, como Charles y Joyce Horman, que querían conocer de cerca el experimento de Allende. Cuando la recién constituida Junta Militar los catalogó, al igual que a otros cientos de personas llegadas de fuera estando Allende en el poder, de «extremistas extranjeros» y comenzó a detenerlos en bloque, apenas recibieron muestras de solidaridad por parte del gobierno de Nixon, que tenía por objetivos primordiales apoyar al nuevo régimen y evitar que la atención mundial se centrase en el derramamiento de sangre que este estaba propiciando.

Los altos funcionarios estadounidenses de Washington eran muy conscientes de que los extranjeros iban a estar en el punto de mira de la represión. El 20 de septiembre, Kissinger presidió una reunión del Grupo de Acción Especial de Washington en la oficina de estrategia de la Casa Blanca, convocada con el fin de determinar en qué fecha debía dar Estados Unidos su reconocimiento al nuevo régimen y disponer la ayuda de emergencia. Las actas secretas del encuentro dan fe de que el vicesecretario Jack Kubisch lo puso al corriente de lo desesperado de la situación en que se encontraban los extranjeros que trataban de salir de Chile:

> Muchos son ciudadanos de un tercer país que huyeron de sus lugares de nacimiento y han quedado atrapados allí. El gobierno tiene a unos cinco mil retenidos en el Estadio [Nacional]. Han sido muy francos al respecto: pretenden tratarlos en consonancia con las leyes militares. Si son inocentes, los dejarán [libres]; si son culpables, la Junta tiene la intención de actuar con toda severidad.[7]

«Hay unos pocos estadounidenses confinados allí», aseguró Kubisch al secretario de Estado. El documento que recoge la conversación no hace constar ningún otro comentario sobre su situación antes de que los funcionarios pasasen a evaluar la petición, por parte de los militares chilenos, de mil bengalas y cascos destinados a las operaciones de limpieza.

La embajada «hizo un esfuerzo supremo para garantizar el bienestar de [los] estadounidenses en Chile»; al menos, eso fue lo que aseguró el Departamento de Estado al Congreso en diciembre de 1973. No obstante, mientras que otros países, y en especial Francia, Suecia, Holanda, Bélgica y Venezuela, abrieron de par en par las puertas de sus embajadas con el objetivo de ofrecer refugio a sus ciudadanos y trataron por todos los medios de garantizar su seguridad en caso de que sufriesen arresto, Estados Unidos no hizo ni lo uno ni lo otro. Una investigación extraordinaria dirigida por la Oficina de Contabilidad del Gobierno (GAO, por su sigla en inglés) estadounidense, bajo el título de «Evaluación de iniciativas emprendidas por la embajada y el consulado para asistir y proteger a ciudadanos estadounidenses en el extranjero en el transcurso de crisis y emergencias», determinó que los edificios de la embajada y el consulado erigidos en Santiago por Estados Unidos se habían diseñado y equipado para albergar a cuatrocientas cincuenta personas durante un período de tres días con el fin expreso de responder ante una situación idéntica a la provocada por el golpe de Estado chileno. Sin embargo, las citadas entidades negaron toda solicitud de asilo con el pretexto de que «las instalaciones no son adecuadas para permitirles pernoctar aquí». Los funcionarios estadounidenses dieron también largas explicaciones frente a la idea de interceder de forma enérgica con las nuevas autoridades militares chilenas a fin de garantizar que sus compatriotas detenidos no sufriesen abusos, y, lejos de respetar los acuerdos de la Convención de Viena en lo tocante a las relaciones consulares, no presentaron una protesta formal ni exigieron un trato seguro hasta que la información adversa surgida en los medios de comunicación los obligó a hacerlo. Tal como indicaban las conclusiones de la investigación de la GAO sobre Chile:

> Los altos funcionarios estadounidenses no siempre han tramitado quejas inmediatas y efectivas en relación con los compatriotas arrestados y detenidos, tal como se dispone en la Convención de Viena sobre relaciones consulares. (...) Las protestas formales por escrito solo se tramitaron en respuesta a la publicidad de la prensa y el interés del Congreso.

En los días siguientes al golpe de Estado fueron arrestados y encarcelados unos veintinueve ciudadanos estadounidenses, y al menos quince fueron

confinados en el principal centro de detención, tortura y ejecución de Chile: el Estadio Nacional. Uno de ellos, un pastor metodista de nombre Joseph Doherty, fue detenido junto con un correligionario Francis Flynn, el 16 de septiembre, y pasó allí once días horribles. El día 19, Doherty, que dejó constancia de forma minuciosa en su diario de las palizas, los actos de tortura y los asesinatos que se sucedían a su alrededor, pidió a un funcionario de la embajada holandesa, que había logrado acceder al lugar en que se hallaban los prisioneros, que se pusiese en contacto con el cónsul de Estados Unidos, Frederick Purdy, «ya que ninguno de nosotros había tenido noticia alguna» de su oficina.[8] Sin embargo, Doherty no logró hablar con él hasta el 26 de septiembre, cuando lo liberaron, como a Flynn y a otros seis compatriotas, y quedó bajo custodia de los funcionarios estadounidenses. «El Sr. Purdy nos informó que nos habían puesto en libertad a condición de que abandonásemos el país», escribió el sacerdote. «Nos hizo saber que, si no aceptábamos, no podríamos hacer otra cosa que regresar al estadio, en cuyo caso el consulado no se haría responsable de nosotros».

Charles Horman, de treinta y un años, detenido la tarde del 17 de septiembre y ejecutado, según todos los indicios, hacia el día 20, fue uno de los estadounidenses que se encontraron «atrapados» en medio del golpe militar. Sus amigos lo describían como una «persona muy inteligente, liberal, sosegada y encantadora». Había llegado a Santiago de Chile con su esposa, Joyce —con la que no hacía mucho había contraído matrimonio—, a mediados de 1972, tras licenciarse con excelentes calificaciones en la Universidad de Harvard, y tenía la intención de dedicarse a la escritura y al cine. Durante el último año de su vida trabajó, al igual que Frank Teruggi, en calidad de editor de un pequeño grupo de prensa llamado Fuente de Investigación Norteamericana, que seleccionaba, traducía y distribuía artículos periodísticos estadounidenses sobre Chile en un pequeño folleto progresista que llevaba por nombre FIN. Asimismo, produjo películas infantiles de dibujos animados y estaba escribiendo un libro sobre los empeños del gobierno de Allende por transformar la sociedad política chilena. Según su esposa, en el momento del golpe de Estado estaba investigando el asesinato, en octubre de 1970, del general René Schneider.

Las misteriosas circunstancias de su ejecución en medio del derramamiento de sangre que supuso el golpe de Estado chileno se recogen en el convincente libro de Thomas Hauser The Execution of Charles Horman: An American Sacrifice. El 11 de septiembre de 1973, Horman se hallaba de paseo en la pintoresca playa de Viña del Mar con Terry Simon, amiga de la familia que pasaba allí las vacaciones procedente de Nueva York. Ambos se encontraron atrapados en el hotel, sin acceso alguno a las noticias, sin teléfonos disponibles ni medios de transporte con que regresar a Santiago de Chile. Buscando a otros estadounidenses que pudieran informarlos de la situación, tropezaron con un ingeniero de las fuerzas navales de su país llamado Arthur Creter. «Estoy aquí con la Armada estadounidense», les dijo. «Hemos venido a cumplir una misión y lo hemos hecho».[9]

Horman y Simon se encontraron también con uno de los superiores de Creter, el teniente coronel Patrick Ryan, segundo al mando de la misión naval estadounidense en Valparaíso y uno de los agregados militares de Estados Unidos que con más ardor abrazaron la causa del golpe de Estado. Los dos amigos lo apremiaron para que les proporcionara información acerca de este y de la posibilidad de regresar a Santiago. «Se acercaron a mí dos sujetos que se identificaron como turistas estadounidenses para solicitar un informe de la situación», escribió Ryan, el 5 de octubre de 1973, en un documento en el que daba cuenta de sus contactos con Horman. «Les revelé lo que me pareció oportuno y di órdenes de que los mantuviesen al tanto y les proporcionasen dinero en caso de que su estancia en Viña del Mar hubiera de prolongarse. También les indiqué que no salieran del hotel».[10]

Los obligaron a permanecer en el edificio cuatro días, hasta que el teniente coronel Ryan dispuso que los llevasen de nuevo a Santiago con el jefe del grupo militar estadounidense, el capitán Ray Davis —uno de los pocos funcionarios de Estados Unidos que estaba autorizado a moverse con libertad por Chile durante el período que siguió al golpe de Estado—. En la embajada, Davis les hizo saber que Estados Unidos no disponía de los medios necesarios para hacer salir a sus ciudadanos de Chile. Cuando Horman y Simon regresaron allí la tarde del 17 de septiembre con la intención de lograr que les garantizasen, a ellos dos y a Joyce, un modo seguro de volver a su país, no recibieron otra cosa que la respuesta negativa de una secretaria que, de muy malos modos, les comunicó que no era tarea

de la embajada ayudar a los estadounidenses a salir de Chile, y que, para ello, tenían que dirigirse al consulado, situado a más de un kilómetro de allí. Para entonces ya se había hecho tarde y Charles decidió que lo más prudente sería volver a su domicilio para evitar que lo sorprendiese el toque de queda. Simon, que sí visitó el consulado, recordó más tarde que el funcionario que la atendió le hizo saber también que tendrían que esperar hasta que se abriese la frontera y añadió: «No nos hacemos responsables de quienes quieran salir del país ni tenemos información alguna de cuáles son los procedimientos necesarios».[11]

Horman llegó a su domicilio de Vicuña Mackenna alrededor de las 17:00 horas.[12] (Su esposa no estaba en casa, pues, sorprendida en la calle por el toque de queda, se había visto obligada a pasar una noche espantosa acurrucada para combatir el frío en un portal del otro extremo de la ciudad). Un informe del Departamento de Estado da cuenta de lo sucedido entonces:

> Según testimonio de los vecinos, entre las 16:00 y las 17:00 [horas] del 17 de septiembre, un camión no militar llegó al número 4126 de Vicuña Mackenna. De él bajaron entre diez y quince hombres con uniforme del Ejército chileno comandados por un hombre que llevaba insignia de capitán o teniente y, al comprobar que la entrada estaba cerrada, saltaron la valla y rompieron la cerradura. Entraron en la casa y, tras sacar a Horman y una caja de libros y papeles, regresaron al vehículo. A las 23:00 [horas], aproximadamente, regresó el mismo camión acompañado de otros dos para cargar algunas maletas y una caja de gran tamaño antes de salir de nuevo en dirección al centro de Santiago.

Desde un primer momento existió un número abrumador de pruebas que indicaban que habían detenido a Charles para someterlo a un interrogatorio por parte del Servicio de Inteligencia Militar chileno, dirigido por el general Augusto Lutz. Un testigo del barrio había visto el camión llevárselo al Estadio Nacional.[13] A las 8:00 de la mañana siguiente, una antigua vecina había recibido la llamada de un oficial del servicio de inteligencia que, según el informe del Departamento de Estado, le comunicó que «el SIM había detenido a un gringo con barba». Además, el oficial le preguntó si «sabía que el gringo trabajaba en el cine y si le constaba que era extremista

de izquierda».[14] También llamaron a casa de un amigo de Horman, Warwick Armstrong, y le dijeron que un estadounidense que «hace películas» había pedido que hablase en su nombre, por lo que le ordenó que se apersonara en una comisaría local de policía.

Gracias a los informes de ambas llamadas, la embajada estadounidense tuvo noticia de la detención de Horman y de las indagaciones que hizo el SIM el 18 de septiembre.[15] El cónsul estadounidense, Fred Purdy, elaboró una exposición cronológica del caso en la que se recogía la siguiente información:

> 18 de septiembre. El consulado tuvo conocimiento de la detención de Horman a través de uno de sus empleados nativos, que tenía un familiar que conocía al arrestado. Pocos detalles más.

Más tarde, se recibió también llamada del Sr. Armstrong, quien afirmó que Horman se hallaba desaparecido desde última hora del 17 de septiembre, cuando fue arrestado, al parecer, por los militares.[16]

El 19 de septiembre, Joyce habló con uno de los subordinados inmediatos de Purdy, John S. Hall, y le comunicó que los militares habían registrado su casa de arriba abajo y se habían llevado a su esposo. Él quiso saber qué tipo de información podían haber estado buscando los soldados en su domicilio y ella lo puso al tanto de la investigación que estaba haciendo su marido sobre el asesinato del general Schneider.[17] Ese mismo día, Terry Simon llamó al capitán Davis y le pidió que la ayudase a localizar a Charles. Tanto el consulado como los funcionarios del Ejército estadounidense hicieron, durante los días siguientes, una serie de pesquisas informales en los despachos de la policía, los militares y los servicios de inteligencia chilenos. Sin embargo, todos negaron haber arrestado o estar reteniendo a Horman. Purdy fue varias veces al Estadio Nacional a fin de comprobar las listas de los detenidos, pero «el nombre de Horman no aparecía como tal ni con ninguna otra de diversas variantes», cablegrafió el embajador Nathaniel Davis el 25 de septiembre. «La embajada sigue tratando de localizarlos a él y a otros ciudadanos estadounidenses con todos los medios de que dispone».

Aun así, al día siguiente, el embajador rechazó la petición de Joyce Horman de intensificar los esfuerzos hasta el punto de tratar de encontrar a Charles visitando personalmente el recinto. «Le pidió que la acompañase al estadio», señalaba un informe del comandante del MilGroup, quien estuvo presente durante la conversación. «Él respondió que no y razonó su negativa».[18] Según declaró más tarde Joyce Horman, el embajador Davis le dijo: «No podemos hacer tal cosa. De veras. Si pedimos favores especiales a las autoridades en el poder, todos los demás querrán hacer lo mismo, y eso dañaría nuestras relaciones con el nuevo gobierno».[19]

Al interior de la embajada, no faltaban funcionarios estadounidenses que hubieran llegado ya a la conclusión de que Horman estaba muerto. «En aquel tiempo estaban matando a muchos», recordó el vicecónsul Dale Shaffer. Por su parte, Judd Kessler, jefe de la delegación de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional, declaró: «Pensábamos que Horman había muerto. Habíamos pedido a los chilenos que nos dijesen dónde estaba y no lo habían hecho, por lo que dimos por sentado que trataban de ocultar su desaparición con evasivas». El 30 de septiembre, aproximadamente, cierto confidente chileno llamado Enrique Sandoval informó a Kessler que, en efecto, Horman había sido ejecutado en el Estadio Nacional.

Sandoval, empleado del Ministerio de Educación en el gobierno de Allende que había sufrido una breve reclusión en el Estadio Chile tras el golpe de Estado, se entrevistó dos veces con Kessler. Durante el primer encuentro, que se produjo en torno al 23 de septiembre, el funcionario estadounidense le pidió información acerca de las atrocidades contra los derechos humanos que se estaban cometiendo e hizo saber a Sandoval que entre los desaparecidos había dos estadounidenses: Horman y Teruggi. Pocos días después, Kessler —tal como apuntó él mismo en una memoria del 19 de julio de 1976 destinada a la sección chilena del Departamento de Estado— volvió «a hablar con Sandoval, y me comunicó que alguien a quien conocía entre los militares chilenos le había dicho que Horman había visitado el Estadio Nacional y bien "lo habían matado allí", bien "estaba muerto"». En lugar de elaborar un memorando formal sobre esta conversación, Kessler refirió su contenido al principal representante del consulado, Fred Purdy, en el transcurso de una charla informal mantenida por ambos en el vestíbulo de

la embajada estadounidense.[20] «Apuesto a que es cierto», respondió este último, según recuerda Kessler.[21] El cónsul general, cuyo deber es velar por el bienestar de sus compatriotas, no hizo nada más para ampliar la investigación: por inexplicable que resulte, no solo obvió las pistas que parecían ofrecer Sandoval y sus fuentes, sino que además rehusó protestar ante las autoridades chilenas y ocultó la información relativa al caso a Joyce Norman y también al padre de la víctima, que llegó al país desde Nueva York el 5 de octubre con el fin de buscar a su hijo.

Cuando Ed Horman aterrizó en Santiago, el cuerpo de Frank Teruggi ya había sido hallado en el depósito de cadáveres, y no gracias a la embajada, sino merced al empeño de un amigo que había insistido en buscarlo allí. El gobierno de Chile aseguró que Teruggi había sido aprehendido por violar el toque de queda, tras lo cual lo llevaron al Estadio Nacional y lo liberaron al día siguiente, después de lo cual apareció muerto en la calle por herida de bala. El 3 de octubre, el ministro de Relaciones Exteriores proporcionó a la embajada un pretexto semejante en relación con Horman: lo habían retenido en el Estadio Nacional el 20 de septiembre por violar el toque de queda, pero volvieron a soltarlo el día 21 por falta de motivos para procesarlo y los militares estaban tratando de averiguar su paradero.[22] Todo esto proporcionaba a los funcionarios estadounidenses más motivos aún para descartar las negativas del régimen en lo tocante al caso Horman. No obstante, en la reunión que mantuvo con Edmund Horman el mismo día de su llegada, el embajador Davis no mencionó en ningún momento que el régimen hubiese reconocido haber retenido a su hijo en el estadio. Por el contrario, no solo repitió que este negaba los hechos, sino que además propuso una teoría que confería credibilidad a los militares chilenos. Según el testimonio del padre de la víctima, «Davis aseguró que, en opinión de la embajada, lo más probable era que Charles estuviese escondido».[23]

Entre el 5 y el 18 de octubre, Ed y Joyce Horman protagonizaron una búsqueda desesperada de Charles. Durante esas dos semanas, emprendieron —junto con la embajada, conminada por aquel— una serie de averiguaciones que los funcionarios estadounidenses no habían abordado: investigar centros de detención diferentes del Estadio Nacional, visitar todas las embajadas extranjeras en las que Charles pudiese haber buscado asilo, comprobar las huellas dactilares de todos los cuerpos que estuviesen

aún sin identificar en el depósito de cadáveres, enviar un comunicado de prensa a todos los periódicos chilenos y hacer pública una recompensa a todo aquel que proporcionase información acerca del paradero de Charles Horman. (Sin embargo, cuando Ed solicitó que se exhortase a la base de operaciones de la CIA en Santiago a emplear sus recursos para dar con su hijo, el embajador Davis negó de un modo tan categórico como mendaz que existiese tal cosa en Chile). Ed y Joyce recorrieron de punta a punta la capital, registraron hospitales y centros de refugiados, se entrevistaron con todo aquel que pudiese ser de ayuda y soportaron los inútiles interrogatorios a que los sometieron, por pura formalidad, funcionarios chilenos de lo más bajo del escalafón. Con la ayuda de la embajada, lograron acceder al interior del estadio, donde se valieron de un micrófono para llamar a Charles (una escena dramática, desgarradora, reconstruida en la película Desaparecido).

Entrada la tarde del 16 de octubre, Purdy los invitó a la embajada para reunirse con James Anderson, vicecónsul —y agente del puesto de operaciones de la CIA—, y un periodista británico de nombre Timothy Ross. Este dijo tener un contacto que aseguraba que Charles estaba «vivo y en buen estado de salud», tratando de salir del país a través de un «conducto de huida» clandestino. En esos momentos, según afirmó, se encontraba en el norte de Chile, y no tardaría en cruzar la frontera. Al final del encuentro, y «siguiendo instrucciones del embajador», Anderson apartó a Ed Horman para decirle: «Si concede usted alguna credibilidad a esta información, tal vez desee considerar que cualquier presión ejercida por la embajada desde este momento al respecto de este caso puede tener un doble filo».[24]

El carácter extravagante, improbable y aun contradictorio de la información proporcionada por Ross —habida cuenta de los testigos que habían visto a los militares llevarse a Horman, los funcionarios del servicio militar de inteligencia que lo habían interrogado y habían telefoneado a sus vecinos y amigos al día siguiente, y el hecho de que hubiese estado desaparecido todo un mes sin dar señal alguna de vida— pareció pasar inadvertido a los funcionarios de la embajada que juzgaron al periodista lo bastante digno de confianza para someter a los Horman a tal entrevista. Al día siguiente, durante una visita a la oficina en Santiago de la Fundación Ford, Ed Horman recibió una explicación mucho más verosímil de la suerte que

había corrido su hijo, según la cual Charles «había muerto a tiros en el Estadio Nacional el 20 de septiembre o antes de esta fecha». Esta información sí parecía convincente, pese a no ser siquiera de segunda mano: la había recibido uno de los empleados de la fundación, Lovell S. Jarvis, de un funcionario de la embajada canadiense en Santiago que conocía a un chileno que, a su vez, la había obtenido de un militar chileno de alta graduación.

Si bien los Horman no lo sabían, quien había proporcionado esta información no era otro que Enrique Sandoval, el mismo que la había compartido con la embajada estadounidense casi tres semanas antes. Deseoso de salir de Chile y buscar refugio para su familia en Canadá, Sandoval se había puesto en contacto, a primeros de octubre, con el primer secretario de la embajada canadiense, Mark Dolguin, a fin de obtener ayuda, y le había hecho la misma revelación que al funcionario de la USAID a finales de septiembre.[25] Aunque en su momento Purdy había pasado por alto esta información, cuando Ed Horman lo instó a verificarla, la embajada necesitó menos de veinticuatro horas para confirmar que Charles Horman había muerto. En un cablegrama tan seco como escueto enviado a Washington que tenía por asunto: «Muerte de Charles E. Horman», el embajador Davis escribió:

> Embajada comunicó la tarde del 18 octubre 1973 que el cadáver de varón sin identificar que se envió a depósito el 18 septiembre 1973 y al que se practicó autopsia Nº 2663 ha sido identificado por huellas dactilares como Charles E. Horman. Cuerpo sin identificar enviado a cementerio de Santiago el 3 octubre y, al parecer, enterrado. Causa de la muerte: herida de bala.[26]

El despacho acababa con la siguiente frase: «Embajada informará a esposa y padre».

A su regreso a la ciudad de Nueva York, Edmund Horman y su nuera escribieron, entre el enojo y la aflicción, informes muy negativos sobre su experiencia en Santiago de Chile dirigidos a William Fulbright, presidente del Comité Senatorial de Relaciones Exteriores. El primero acusó a la embajada de haber llevado con gran dejadez el caso de su hijo.

> La embajada estadounidense no hizo nada en absoluto por verificar los indicios que le habían proporcionado el 18 de septiembre y que resultaron ser, finalmente, decisivos para el esclarecimiento de la verdad. Desde el día 5 de octubre hasta el final, sus «esfuerzos» no dieron resultado alguno más allá de su trillada afirmación de que se había puesto en contacto con el gobierno chileno, hasta llegar al mismísimo general Pinochet, y que las autoridades del país le habían asegurado no saber nada de Charles o de su paradero.

«No sé cuál es el motivo que subyace tras esta actitud negligente, pasiva e inútil de la embajada de Estados Unidos», rezaba la conclusión de Horman. «Sea cual sea, incompetencia, indiferencia o algo peor, su proceder me parece escandaloso, indignante y aun indecente».

Lo cierto es que, en la búsqueda de un estadounidense desaparecido, la embajada no aportó información alguna más allá de lo que la Junta Militar decidió revelar. En un principio, sus funcionarios efectuaron un buen número de visitas e indagaciones, informales y no muy exhaustivas, en comisarías de policía, en el Estadio Nacional, en los servicios de inteligencia del Ejército y entre funcionarios del régimen, y aceptaron con facilidad la declaración de todas estas entidades, que rechazaron una y otra vez ser responsables de su desaparición. «Ya que los organismos de inteligencia militares habían negado saber nada de Horman, no vimos razón alguna para seguir insistiendo», explicó Purdy cuando le preguntaron por qué no había emprendido una investigación en torno a los convincentes indicios de que la víctima se hallaba bajo el control del SIM.[27] Una semana después de la detención de Horman, Washington solicitó que se buscara su rastro con más ahínco. «Dado el interés del Congreso y otras instituciones de alto nivel», cablegrafió el equipo de Kissinger el 24 de septiembre, «sería de agradecer que la embajada doblase sus esfuerzos para localizar a Horman, sin olvidar la posibilidad de que se encuentre detenido por las autoridades chilenas». Solo entonces elevó el embajador el caso a la categoría de una cuestión bilateral que había que tratar con el ministro de Relaciones Exteriores del régimen y otros funcionarios ministeriales. «Puse de relieve los casos de Teruggi y Horman, y señalé las implicaciones que tendría en el ámbito de las relaciones públicas el hecho de que se prolongase la actual situación, en la que siguen sin aclararse las

circunstancias de sus desapariciones», informó Davis a Washington tras reunirse, el 27 de septiembre, con el nuevo embajador chileno ante Estados Unidos. El 3 de octubre, por otra parte, hizo saber a un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores: «Sería de gran ayuda que el GC fuera capaz de aclarar el misterio que envuelve los casos de los dos ciudadanos estadounidenses desaparecidos o muertos».[28] Durante una reunión mantenida con el mismísimo Pinochet el 12 de octubre con el fin de hablar de la nada despreciable ayuda de Estados Unidos al nuevo régimen, sin embargo, David aludió a los «problemas políticos a los que nos enfrentamos», entre los que se encontraban la enmienda propuesta por Kennedy y los casos de Horman y Teruggi.

Washington prefirió no hacer uso del considerable poder y la influencia que tenía a su disposición. En un momento en que el gobierno de Nixon estaba echando los cimientos del reconocimiento formal del recién instaurado régimen, acelerando el suministro de millones de dólares a Chile en concepto de ayuda económica de emergencia y amparando en secreto la formación de su aparato de espionaje, los estadistas que se hallaban a las órdenes del secretario de Estado Kissinger optaron por abstenerse de respaldar la resolución satisfactoria y justa de estos casos. Hubo que esperar a que los medios de comunicación hiciesen patente su oposición a esta actitud y el Congreso diera muestras de su indignación ante el modo como se estaba llevando el caso de Horman para que el gobierno de Estados Unidos se decidiese a presionar al de Chile con el fin de que abordase la muerte de los dos norteamericanos. El vicesecretario para Asuntos Interamericanos de entonces, Jack Kubisch, puso de relieve cuál era la actitud del gobierno al mencionar estos casos durante un encuentro celebrado en febrero de 1974 con Ismael Huerta, ministro de Relaciones Exteriores de la Junta Militar. «Kubisch abordó este asunto», declara el memorando de la conversación, «al hablar de la necesidad de evitar que cuestiones de importancia menor en nuestras relaciones pudiesen dificultar nuestra cooperación».[29]

Fue el Congreso, y no el Poder Ejecutivo, el que, finalmente, se sirvió de la ayuda estadounidense para hacer que los militares chilenos colaborasen en el caso de Horman. Cuando la familia de este abandonó Chile, el 20 de octubre, pidió la pronta repatriación de sus restos. «Nuestra intención»,

recordaría su padre al Departamento de Estado, «era verificar su identidad, determinar el momento y la causa de la muerte, [y] encontrar cualquier posible indicio de tortura».[30] Sin embargo, mientras el gobierno estadounidense fingió no poder hacer nada, el régimen de Pinochet estuvo cinco meses valiéndose de maniobras dilatorias para no entregar el cuerpo e imposibilitar así que pudiese practicársele una autopsia que relacionara a los militares chilenos con su muerte.[31] A principios de marzo de 1974, cuando la Armada chilena trataba de conseguir misiles TOW de Estados Unidos, el senador por Nueva York Jacob Javits, hombre de gran poder, hizo gestiones para retener todos los cargamentos de material militar destinados a Chile hasta que se repatriara el cadáver. Y, de manera casi inmediata, un funcionario del servicio chileno de contraespionaje informó al grupo militar estadounidense que «estaba autorizado a hacer efectivo el retorno», según el resumen del caso elaborado por el Departamento de Estado.[32] «Tuvimos que sacarlo de aquí a la carrera, porque el senador Javits había dicho que no pensaba aprobar [el envío de equipo militar] en el Congreso», declaró Rafael González a los periodistas que lo entrevistaron en junio de 1976. El 21 de marzo, González se dirigió al Consulado estadounidense y pidió a James Anderson —el funcionario de la embajada que, según hizo saber el chileno, actuaba a un mismo tiempo como miembro del consulado y agente de la CIA— que lo acompañase al Cementerio General a fin de localizar y exhumar los restos de Horman. González no tenía duda alguna de por qué lo habían elegido a él para esta tarea: «Yo podía (...) identificar su cadáver porque lo había visto cuando estaba vivo».

Aún quedaba sortear otro obstáculo —otra muestra más de la insensibilidad oficial de Estados Unidos—: obtener de los Horman el dinero necesario para repatriar el cuerpo (en una caja de embalaje hecha de listones de madera). A partir del 22 de marzo de 1974, el Departamento de Estado estuvo telefoneando y enviando cablegramas con insistencia a los padres y la viuda de la víctima para que satisficiesen los costes del transporte. El día 23 llegó a casa de los primeros un telegrama que decía:

> Recordarán que, con el objetivo de que la embajada estadounidense en Santiago de Chile pueda organizar el traslado, es necesario que abonen novecientos dólares (900), que serán destinados a cubrir el coste

resultante de preparar los restos y transportarlos a la ciudad de Nueva York. Por otra parte, les rogamos que nos hagan saber el nombre de la funeraria a la que desean que remitamos los restos. Tanto la cantidad señalada como esta información deberán enviarse a la Oficina de Servicios Consulares Especiales del Departamento de Estado. Acepten, por favor, nuestra más sincera condolencia por tan trágico suceso. (...)

Kissinger[33]

Cuatro días más tarde, la viuda de Horman recibió un cablegrama que le advertía: «Hasta la fecha no hemos recibido ni información sobre el lugar de destino ni la cantidad necesaria para cubrir los costes estimados» y «necesitamos de manera urgente (...) US$ 900 para cubrir los gastos». El Departamento de Estado la puso sobre aviso de la posibilidad de que, «en caso de no recibir en breve instrucciones al respecto, el gobierno de Chile ordene que vuelvan a inhumarse los restos por motivos de salubridad». A la mañana siguiente, recibió la llamada de un burócrata de la Oficina de Servicios Consulares que le comunicó que tenía de plazo hasta la mañana del 30 de marzo para hacer efectivo el pago. Desde el punto de vista de la familia, la determinación de que daba muestras el gobierno y el carácter acuciante de su petición contrastaban en extremo con la comedida respuesta de la oficina de Kissinger ante la desaparición de Charles, seis meses antes. «Ya he dicho», comunicó Ed Horman al funcionario del consulado que llamó de nuevo para solicitar los novecientos dólares, «que, si ciertos empleados del Departamento de Estado se hubiesen mostrado tan apremiantes en el momento oportuno, mi hijo aún seguiría con vida».[34]

Frank Teruggi

El personal del gobierno de Estados Unidos consideraba que los asesinatos de Charles Horman y Frank Teruggi guardaban una «estrecha relación». Los casos poco comunes de los dos únicos estadounidenses muertos por el régimen inmediatamente después del golpe de Estado presentan numerosas similitudes. Ambos trabajaban en la publicación del pequeño boletín radical FIN; a ambos los apresaron en sus respectivos domicilios militares chilenos que registraron sus casas de arriba abajo para requisar libros y documentos

que constituían, en su opinión, pruebas de su inclinación por el gobierno de Allende; ambos fueron llevados al Estadio Nacional, y las autoridades chilenas trataron de ocultar su estancia allí excluyendo sus nombres de las listas que mostraron a los funcionarios de la embajada estadounidense. Y los puntos en común no acaban aquí: tal como señalaba una memoria interna del Departamento de Estado, «no hay duda de que la Junta Militar poseía, o había adquirido con gran rapidez, información en contra de Horman y Teruggi, cosa que mencionaban con frecuencia sus integrantes ante el personal de la embajada».

La principal diferencia que salta a la vista entre un caso y otro era que Teruggi no se había cruzado nunca en el camino de militares estadounidenses o funcionarios del servicio de inteligencia. La experiencia de Horman, y en particular lo sucedido en Viña del Mar, permitía sospechar que tal vez había sido «señalado» ante los militares chilenos por personal estadounidense. En cambio, no hay prueba alguna que demuestre que Teruggi hubiese estado en algún momento en el punto de mira de Estados Unidos. Al menos, eso fue lo que hicieron pensar a su familia durante más de veinticinco años.

En el momento del golpe de Estado, Frank Teruggi tenía veinticuatro años y estaba estudiando la transición económica experimentada por Chile bajo el gobierno de Allende. En octubre de 1971, tras licenciarse en el Instituto Tecnológico de California, se matriculó en la Escuela de Economía Política de la Universidad de Chile, en Santiago. Vivía, junto con un compañero, David Hathaway, en el 2575 de la calle Hernán Cortés, lugar frecuentado por militantes chilenos.

Según un resumen del caso titulado «Ciudadano estadounidense fallecido», que consta de una sola página, la noche del 20 de septiembre, a las 21:00 horas aproximadamente, un grupo de carabineros arrestó a Teruggi y Hathaway en su domicilio:

> Los llevaron a la Escuela de Suboficiales de Macul, donde pasaron la noche retenidos antes de que los trasladaran, la mañana del 21 de septiembre de 1973, al Estadio Nacional. Los agentes no alegaron motivo alguno de la detención. Una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores con fecha del 3 de octubre aseguraba que el Sr. Teruggi

> había sido apresado el 20 de septiembre por violar el toque de queda para ser liberado al día siguiente por falta de motivos para formalizar una acusación. (...) Según testimonio del Sr. Hathaway, la tarde del 21 de septiembre, un oficial separó al Sr. Teruggi del resto de ciudadanos estadounidenses detenidos de acuerdo con una lista que llevaba. Nunca más se lo volvió a ver con vida al Sr. Teruggi.[35]

La prometida chilena de Hathaway, Irene Muñoz, se encontraba en su domicilio y presenció el arresto. En una entrevista con James Anderson, vicecónsul y agente de la CIA, le relató la llegada de una unidad de quince o veinte carabineros. Antes de entrar, los agentes se dirigieron a una vecina, que había delatado a Teruggi y su compañero como «extranjeros». También reveló a Anderson que, durante el registro del dormitorio de Teruggi, los carabineros encontraron las obras completas de Karl Marx y lo acusaron de estar «contaminando su mente» con ellas. Tras incautarse de los libros y otros documentos, se llevaron a los dos estadounidenses.

La embajada de Estados Unidos tuvo conocimiento de la detención el 24 de septiembre, cuando uno de sus amigos íntimos, Steve Volk, comunicó su desaparición. Una «Exposición cronológica de la información relativa a Frank Randall Teruggi», elaborada por el Departamento de Estado, sugiere que a Purdy le habían asegurado aquel día las autoridades chilenas que Teruggi se hallaba «retenido en el Estadio Nacional» y, durante la visita que hizo a la mañana siguiente al recinto, un voluntario que realizaba labores humanitarias le dijo que el interrogatorio de Teruggi había «finalizado». Entrada la tarde del 25 de septiembre, sin embargo, Purdy recibió una llamada del depósito general de cadáveres según la cual «el cuerpo de Frank Randall Teruggi, nacido el 14 de marzo de 1949 en Estados Unidos, había sido llevado al depósito muerto por heridas de bala el 22 de septiembre».[36] El cónsul llevó allí a David Hathaway, compañero del difunto, el 27 del mismo mes, un día después de que lo liberasen del estadio. El joven se vio obligado a examinar más de ciento cincuenta cadáveres dispuestos en hileras, aunque fue incapaz de identificar con toda seguridad el que llevaba el nombre de Teruggi en una etiqueta. El Departamento de Estado se puso entonces en contacto con su familia, residente en Des Plaines (Illinois), y comunicó a sus padres que había cierta

«confusión» acerca de la suerte que había corrido su hijo. Finalmente, el 2 de octubre, Steve Volk lo identificó sin lugar a dudas.[37]

En la nota diplomática número 15.136, con fecha del 3 de octubre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile anunció a la embajada que Teruggi había sido detenido por violar el toque de queda el 20 de septiembre —declaración que se contradecía abiertamente con los hechos— y liberado al día siguiente por falta de pruebas. En cuanto al motivo de su muerte, «podría haber recibido una herida mortal infligida por las patrullas encargadas de hacer respetar el toque de queda o por criminales civiles, tras lo cual había sido encontrado y trasladado al depósito». Durante una reunión celebrada el 15 de octubre con el coronel William Hon, el general Augusto Lutz se mostró mucho menos diplomático. «Él tiene la teoría», informó el primero en un memorando de la conversación, «de que a Teruggi lo recogieron sus amigos para después deshacerse de él».[38] En cuanto al caso de Horman, Lutz señaló «que en las fechas en que desapareció había grupos de ladrones o extremistas vestidos con uniformes de soldado que registraban y saqueaban las casas en las que se sabía que habitaban norteamericanos y demás extranjeros con el fin de encontrar dólares o cualquier tipo de mercancía que pudiesen vender».

El general Lutz informó también a Hon de que los militares de su país habían obtenido información comprometedora referente a las actividades de Teruggi, de quien sabían que se había trasladado a Chile «con la intención de hacer llegar al extranjero falsos rumores relativos a la situación» del país.[39] Este fue el argumento dominante en la única declaración sustancial que recibió Estados Unidos de parte de los hombres de Pinochet en cuanto atañe a los casos de Horman y Teruggi. El 30 de octubre, Lutz envió al agregado estadounidense de Defensa la traducción al inglés de una memoria sin firmar titulada «Antecedentes sobre fallecimiento de 2 ciudadanos norteamericanos» (véase el documento 3). Por «deferencia especial a la embajada de EE.UU.», el SIM había investigado con gran detenimiento la suerte que habían corrido:

> Los antecedentes que se tienen, de ambas personas, permiten deducir que se encontraban vinculadas con movimientos de extrema izquierda de nuestro país, a los cuales apoyaban material e ideológicamente.

> (...) Se considera necesario, además, indicar que existen antecedentes fundados que establecen que una organización vinculada a residentes N. A. [norteamericanos] en nuestro país, con conexiones en el resto de los países del continente y dirigida desde EE.UU., se ha lanzado en una ofensiva [contra la Junta Militar]. (...)
>
> Esta situación, está relacionada con los ciudadanos Horman y Terrugi [sic], ya que existen concretos motivos para estimar que, por lo menos el último de los nombrados, pertenece a dicha organización.

Los funcionarios estadounidenses no compartieron entonces esta acusación con las familias de las dos víctimas. Sin embargo, más tarde, no faltaron miembros del Departamento de Estado que se centrasen en estas supuestas actividades subversivas y las considerasen una posible pista para la resolución de sus asesinatos. Se preguntaron, en consecuencia, si era cierto que existían las pruebas a las que se había referido el general Lutz y, en caso de serlo, de dónde las habían obtenido los militares: cuáles eran, en resumen, los fundamentos sobre los que habían basado tales conclusiones. En un compendio de las pruebas de que se tenía noticia y las preguntas que aún quedaban sin responder elaborado por la Oficina de Asuntos Interamericanos, a mediados de 1976, con el título de «Gleanings» («Espigueos»), se señalaba que «la memoria remitida el 30 de octubre por el Servicio de Inteligencia Militar al coronel Hon puede estar basada en información proporcionada por el servicio de inteligencia de Estados Unidos».

En el caso de Horman, tal suposición se debía a un aserto de Enrique Sandoval, principal confidente del caso, según el cual el informante con el que contaba entre los militares chilenos había visto un abultado expediente sobre las actividades de Horman en Estados Unidos.[40] En el de Teruggi, cuyos actos parecían atraer aún más la atención del régimen que los de Horman, las conjeturas resultaron estar inspiradas en un documento de inteligencia ultrasecreto guardado bajo siete llaves.

En marzo de 1975, Frank Teruggi padre apeló a la FOIA (Ley de Libertad de Información) a fin de solicitar de la CIA todos los documentos relacionados con su hijo y con la muerte de este. «Nuestro representante en Santiago de Chile nos ha hecho saber que no hay documento alguno en

torno a su hijo en sus archivos», respondió la Agencia en mayo. En cambio, sí reconoció haber encontrado, en la oficina central de Langley, «un único documento referente a su hijo», que, sin embargo, no podía hacerse público por motivos de seguridad nacional. Después de más de un año, la CIA informó a la abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles que representaba a la familia de que sus agentes habían recibido el documento «del servicio de inteligencia de cierto país extranjero» que no era «Chile ni ningún otro Estado sudamericano. Por otra parte, no contiene información comprometedora sobre Frank Randall Teruggi ni guarda relación alguna con su muerte en septiembre de 1973».[41]

Lo cierto, no obstante, es que el documento en cuestión sí recogía datos delicados acerca de Teruggi y, lo que es aún peor, la dirección de su domicilio, en el número 2575 de la calle santiaguina Hernán Cortés. En julio de 1972, uno de los órganos de espionaje de la República Federal de Alemania (RFA) hizo llegar a Estados Unidos un informe sobre el seguimiento de cierto estadounidense residente en Heidelberg que se hallaba envuelto, presuntamente, en actividades concebidas para promover la deserción y el disentimiento entre los militares estadounidenses destinados en Europa. El sujeto en cuestión publicaba una serie de boletines clandestinos y buscaba colaboradores y editores procedentes de otras partes del planeta, y los agentes de la RFA habían sabido, por mediación de un informante, que había recibido el nombre y la dirección de Frank Teruggi en Santiago en calidad de «contacto importante» para formar parte de su red de boletines.[42]

Los alemanes compartieron también esta noticia con el 66º grupo de inteligencia militar del Ejército de Estados Unidos, con base en Múnich, y los integrantes de este enviaron un informe sobre el particular al FBI en octubre de 1972. «Según la información recibida de cierta fuente», apuntaba el memorando del FBI, «Teruggi es un ciudadano estadounidense residente en Chile que mantiene una estrecha relación con el Grupo de Chicago para la Liberación de las Américas» (véase el documento 4). La Oficina Federal de Investigaciones abrió entonces un archivo con su nombre (el N° 10.053.422), en el que se lo califica de subversivo, y ordenó al personal de Chicago que llevase a cabo «las investigaciones pertinentes para identificar al sujeto» y enviasen los resultados de un modo que

resultara «adecuado para divulgarlos».[43] Llegado diciembre, los agentes ya estaban completando informes sobre sus filiaciones y asistencia a congresos, sin dejar de lado las investigaciones relativas a sus antecedentes y las entrevistas con antiguos amigos y conocidos.

El que difundiera la información de estos documentos no quiere decir que el FBI transmitiese a Chile su contenido: la cuestión principal era, y sigue siendo, si lo hizo la CIA. Cuando esta se negó a desclasificar el documento que poseía sobre el caso, el Comité Selecto del Senado hizo cuanto estuvo en sus manos por acceder a él, hasta que por fin le fue mostrada una copia que habían censurado de manera estratégica. En una memoria secreta remitida en noviembre de 1976 a la división sudamericana de la Dirección de Operaciones, el consejo legislativo de la CIA señaló que los integrantes del Comité habían formulado la pregunta que parecía obvia: «¿Pasó la CIA, o el servicio de inteligencia que lo obtuvo en un principio, el documento a [la policía secreta chilena] o a cualquier otro organismo secreto latinoamericano que pudiese haberlo hecho llegar a [la policía secreta chilena]?». La Dirección de Operaciones respondió que había llevado a cabo una «investigación exhaustiva que no ha proporcionado prueba alguna de que la Agencia Central de Inteligencia hubiese comunicado la información relativa a Frank Teruggi hijo (...) a ningún servicio de enlace latinoamericano, incluido [el chileno]», según un memorando interno de la CIA. Con todo, la Agencia siguió negándose a hacer pública siquiera una versión descafeinada del informe de los alemanes, ni tampoco la hoja en la que figuraban los nombres de los destinatarios del documento, que debía de llevar anexa y que hubiese permitido verificar tal declaración.

En pos de la verdad

Hasta mediados de 1976, momento en el que el testimonio de González dio pie a un nuevo alboroto público y político, el gobierno de Estados Unidos apenas hizo nada por resolver los asesinatos de Horman y Teruggi. La embajada, presionada por las familias de los fallecidos y por el Capitolio, presentó una serie de notas diplomáticas de tono moderado en las que se enumeraban preguntas sin respuesta y se solicitaba una investigación que determinase la causa de sus muertes —peticiones que el régimen militar

pasó por alto, atendió con ambigüedades o se limitó a rechazar—. En una carta enviada al Congreso el 24 de julio de 1974 en relación con el caso de Horman, el Departamento de Estado hizo saber que las autoridades «competentes» de Chile «consideran muy probable que la muerte se debiera a la acción de francotiradores o extremistas con uniformes militares» y que Estados Unidos no había logrado encontrar «una base legal para culpar al gobierno chileno de un agravio internacional por la muerte del Sr. Horman».[44] Durante el período en que la nación estadounidense ejercía una mayor influencia sobre las relaciones bilaterales con el régimen de Pinochet, no expresó en ningún momento la convicción de que aquellos dos compatriotas habían sido asesinados de forma deliberada por los militares ni exigió que los chilenos identificaran, procesaran o extraditaran a los oficiales al mando y demás personal responsable.

Las familias de ambas víctimas, por el contrario, pusieron todo su empeño en mantener con vida la investigación. En febrero de 1974, el padre de Teruggi viajó a Santiago con un grupo (llamado Comisión de Investigación de Chicago) con el propósito de reunirse con funcionarios de la embajada estadounidense y militares chilenos. «¿Está cerrado el caso?», apremió Teruggi padre al nuevo embajador, David Popper. Su respuesta quedó registrada en las actas de la reunión, cuyo contenido se ha hecho público:

> Embajador Popper: Hemos tratado repetidamente de determinar los hechos que atañen al caso y seguiremos haciendo cuanto esté en nuestras manos para resolver las discrepancias existentes. Para serle del todo sincero, no debemos albergar muchas esperanzas de obtener, a estas alturas y transcurrido todo este tiempo, una versión más completa de los hechos.
>
> Sr. Teruggi: (...) a [mi] familia le resulta difícil entender cómo puede estar ayudando el gobierno de EE.UU. al de Chile cuando este ni siquiera se digna contestar nuestras preguntas.

Tal como pusieron de relieve los funcionarios del Departamento de Estado, la resolución de este asesinato no constituía un hecho prioritario en el conjunto de las relaciones entre ambos países. Tanto la embajada como la Oficina de Asuntos Interamericanos «han señalado», comunicaba cierto memorando interno en junio de 1974, «que insistir en este particular no va a

llevar a ningún lado, si no es a hacer aún más tensas nuestras relaciones bilaterales, lo que no sería de ninguna ayuda».

En veinticinco años, ni el gobierno de Estados Unidos ni el de Chile facilitaron una sola prueba nueva en relación con la muerte de Frank Teruggi. El único dato digno de mención surgido en ese tiempo provenía de una fuente externa a Estados Unidos: en noviembre de 1975, un funcionario del gobierno de Bélgica llamado André van Lancker presentó una declaración jurada ante el consulado estadounidense en Bruselas en torno a la pavorosa reclusión que sufrió en el Estadio Nacional desde el 17 de septiembre hasta el 8 de noviembre de 1973. Entre el 20 y el 23 de septiembre, «supe que había entre nosotros un ciudadano estadounidense, un universitario llamado Frank al que habían detenido». Durante un brutal interrogatorio a manos de carabineros de uniforme, Van Lancker recibió graves heridas que obligaron a sus torturadores a trasladarlo al hospital de campaña del recinto, donde el personal sanitario de la Cruz Roja logró salvarle la vida. Al regresar a su celda, «los compañeros me contaron lo que le había sucedido al señor Frank»:

> Los militares se lo llevaron para interrogarlo los mismos días que a mí, esto es, en torno al 20 de septiembre, y hasta el día 23, aproximadamente, al caracol, una especie de pasillo del velódromo (la pista situada al lado del estadio de fútbol donde no podían entrar las personalidades). Un oficial identificado como Alfa-1 o Sigma-1, ya no lo recuerdo, se hallaba al mando del interrogatorio en el que torturaron a Frank de un modo cruel a fuerza de golpes y descargas eléctricas. Frank acabó en tan malas condiciones que el oficial reconoció haber ido demasiado lejos y lo mató con la metralleta, como solía hacerse en esos casos. Por lo que me dijeron los compañeros, los militares comentaron después entre ellos que temían tener problemas, por aquello, con el gobierno de Estados Unidos [y] por eso no quisieron reconocer que Frank había estado recluido en el estadio.

El escándalo surgido a consecuencia de las declaraciones de Rafael González sobre el asesinato de Horman hizo que se reavivase el interés del público por ambos casos, lo que obligó al Departamento de Estado a adoptar, cuando menos de forma temporal, una postura más activa. Para

llegar a la verdad sería necesaria, según advirtió Rudy Fimbres, una amplia investigación y el acceso a pruebas guardadas en los archivos de los organismos estadounidenses de espionaje, de los que cabía pensar que sabían más del caso de lo que parecían dispuestos a admitir. La sección estaba «poco convencida de que los documentos de que dispone el Departamento de Estado den cuenta, de un modo franco y preciso, de cuál fue la participación de Estados Unidos», según comunicó Fimbres al vicesecretario Harry Shlaudeman, de quien se sabía que guardaba una estrecha relación con la Agencia Central de Inteligencia.[45] En agosto le escribió junto con sus colegas: «Nos resulta difícil creer que los chilenos no dijesen nada [al puesto de operaciones de la CIA] en relación con los dos estadounidenses detenidos. (...) [Y] la falta de franqueza que ha demostrado [el puesto] para con nosotros en lo tocante a otros asuntos no hace sino acentuar nuestras sospechas».[46]

El vicesecretario Shlaudeman prometió al Comité Senatorial de Relaciones Exteriores que el Departamento de Estado haría «todo lo posible» por investigar los asesinatos aún sin resolver de Horman y Teruggi, y determinar si algún funcionario había provocado la detención y ejecución de Horman, si las había consentido o había cometido cualquier otra negligencia al respecto. Sin embargo, se limitó a asignar a un único diplomático de carrera —Frederick Smith Jr., quien se hallaba casualmente en Washington a la espera de saber a qué embajada lo destinaban— la labor de «examinar a fondo» los archivos del Departamento de Estado. Así, durante los últimos meses de 1976, Smith pasó varias semanas cribando el contenido de diversos expedientes para redactar por fin un detallado informe de veintiséis páginas titulado «Muerte en Chile de Charles Horman».[47]

Al igual que sus colegas, Smith llegó a la conclusión de que las respuestas al misterio de la suerte corrida por Horman debían de hallarse en otro lugar. «Estoy persuadido de que no hay otra solución, si queremos tener la satisfacción de haber hecho cuanto estaba en nuestras manos por determinar la verdad de este asunto», escribió en un memorando secreto dirigido a Shlaudeman, «[que] recurrir a lo más alto del escalafón de los servicios de inteligencia de Estados Unidos». Tal como señalaba en este documento: «A quien concluya, como yo he hecho, que el GC fue responsable directo de la

muerte de Horman (y de la de Teruggi) le resultará difícil creer que aquel tuviese la seguridad necesaria para llevar a término tan drástica acción contra dos ciudadanos estadounidenses sin razón alguna (razón que bien podría haber sido deducida de un modo injustificable o dada sin la menor intención), para creer que podía hacerlo sin enfrentarse a graves consecuencias adversas por parte del gobierno de Estados Unidos».[48] El párrafo final del informe recomendaba

> emprender una investigación de alto nivel en los organismos de inteligencia, y en particular de la CIA, con el objetivo de determinar hasta qué punto pueden haberse iniciado acciones o suministrado datos, de modo formal o informal, a los representantes de las fuerzas que conforman ahora el GC, bien antes, bien después del golpe de Estado, que puedan haber llevado a la Junta Militar a creer que podía asesinar a Charles Horman y a Frank Teruggi sin esperar repercusiones serias por tales actos.

Ni los archivos del Departamento de Estado que se han hecho públicos ni los de la CIA dan a entender que se llegase siquiera a abordar dicha investigación de alto nivel. Todo parece apuntar a que —a diferencia del Pentágono, que ordenó realizar un informe por escrito a todo el personal militar de Estados Unidos que hubiese tenido contacto con Horman o participado en su búsqueda— la CIA no interrogó de manera oficial a los principales agentes del centro de operaciones en Santiago (James Anderson, Ray Warren, John Devine y Donald Winters, entre otros) acerca de las relaciones mantenidas con militares chilenos durante los días que siguieron al golpe o cualquier conversación que pudiesen haber tenido en torno a los estadounidenses residentes en Chile. Por otra parte, los documentos desclasificados tampoco recogen ninguna información sobre cuáles fueron las iniciativas que adoptó la Agencia Central de Inteligencia —el organismo que mejores contactos tenía entre los militares chilenos— para precisar qué sucedió a Horman y a Teruggi tras su detención. La falta de documentos al respecto parece indicar que no se hizo gran cosa por resolver estas cuestiones.

El Departamento de Estado, por su parte, sí siguió dos líneas de investigación: volvió a interrogar a Rafael González, con el fin de averiguar

«si sabe», en palabras de Smith, «de la existencia de algún tipo de información proporcionada (antes o después del golpe) por fuentes estadounidenses [a Chile] en relación con Horman, Teruggi o cualquier otro ciudadano norteamericano», y trató de encontrar a Enrique Sandoval, quien había dado la primera noticia del asesinato de Horman en el Estadio Nacional. El 2 de agosto de 1976, Fimbres localizó a Sandoval, que vivía exiliado en Montreal (Canadá). «Confirmó que había dicho a Judd Kessler que "Horman estaba muerto y era inútil buscarlo con vida"», tal como comunicó Fimbres a la embajada estadounidense. Sin embargo, se negó a revelar la fuente de esta información:

> Le hice saber que estaba convencido de que había que seguir esta línea de investigación, por el hecho de que la información por él proporcionada había resultado ser correcta. Más vale tarde que nunca. Él contestó que, a estas alturas, no tenía sentido ahondar en este asunto, pero yo le hice saber que, por una simple cuestión de justicia para con los padres de Horman y como respuesta a las muchas preguntas que se habían formulado en torno a las circunstancias que rodearon a las muertes de estos dos estadounidenses, debíamos seguir todas y cada una de las pistas de que disponemos. Dijo sentirse amenazado por tal hecho. (...) Me confió que las «personas de uniforme» que constituían sus fuentes primarias [sic] se encontraban en la cárcel, y dio a entender que quedarían a merced de los cuerpos de seguridad chilenos si llegara a saberse que nos habían proporcionado información sobre Horman.

El Departamento de Estado había llegado, correctamente, a la conclusión de que la fuente de Sandoval era su hermano, pero, por desgracia, lo identificaron de forma equivocada como «el coronel Guillermo Sandoval Velásquez, casi con toda certeza».[49] Esta es la razón por la que Fimbres confesó haber quedado confundido ante las reiteradas referencias que hizo su interlocutor a la existencia de varias fuentes. «El que hable de "personas de uniforme", en plural, resulta equívoco», escribió, «y tal vez lo haga a propósito. Sin embargo, no fue esta la única vez que dio a entender durante la conversación que contaba con más de una fuente».[50]

De hecho, Sandoval intentó una y otra vez confundir a sus interlocutores sobre la procedencia de su información. Durante una entrevista concedida a Hauser en 1976 dijo tener tres fuentes distintas, entre ellas un «familiar cercano» que trabajaba al interior del estadio y un oficial del Ejército que afirmaba haber estado presente cuando se llevaron a Horman para ejecutarlo.[51] En una reunión privada mantenida en Manhattan con Joyce Horman en enero de 1975, Sandoval le confió que tenía dos fuentes: un familiar y un «fiscal castrense» que trabajaban en el recinto. La verdad, sin embargo, es que Sandoval tenía solo una: su hermano, un fiscal militar a quien durante treinta años intentó proteger.

El confidente de Sandoval era el único testigo directo capaz de identificar a los oficiales chilenos responsables de la muerte de un norteamericano. Sin embargo, los funcionarios estadounidenses, que habían acertado al identificar a su informante como su hermano, comenzaron a preocuparse por la seguridad personal de dicha fuente y decidieron abandonar esta vía. Tal como escribieron Fimbres y dos colegas a Shlaudeman, cualquier contacto que se llevase a cabo en Chile tendría «que hacerse con la mayor discreción» y debía ser «delicado en extremo. Dudamos que podamos lograr nada positivo si seguimos esta línea de investigación». En el informe final que envió a Shlaudeman en diciembre, Frederick Smith recomendaba también que se dejase a un lado la pista de Sandoval. «De lo contrario, pondríamos a su confidente (es decir, su hermano) en un serio peligro, de tal modo que la confirmación de que Horman estuvo en el Estadio Nacional o cualquier otra información que pudiésemos obtener de él parecería, llegados a este punto, insignificante comparada con nuestra principal preocupación».[52] Por su parte, el embajador David Popper se mostró contrario a emprender la búsqueda de las fuentes de Sandoval o iniciar cualquier otra pesquisa encaminada a identificar a los asesinos de Horman. «Estados Unidos no puede llevar a cabo una investigación completa en territorio de otra nación soberana», escribió a Fimbres. «En algún momento, tendremos que admitir que hemos llegado tan lejos como nos ha sido posible».[53]

Una última oportunidad perdida

Quedaba todavía un ejemplo más de la irresponsabilidad del gobierno de Estados Unidos respecto del caso Horman —desconocido por el público hasta la desclasificación de junio de 2000—, que fue a sumarse a sus múltiples muestras de falta de disposición —o simple incapacidad— para poner fin legal e histórico al crimen más famoso perpetrado en Chile contra un ciudadano estadounidense. El 11 de marzo de 1987 se presentó en la embajada de Estados Unidos cierto informante vinculado a la policía secreta chilena y pidió hablar con el embajador Harry Barnes o con el subdirector de la embajada, George Jones. En vez de eso, sin embargo, se le puso en contacto con un funcionario político de menor importancia, David Dreher. El confidente —cuyo nombre fue borrado en los archivos desclasificados, pero en el libro Terrorismo de Estadio, de Pascale Bonnefoy, fue identificado como Raúl Meneses, un sargento del Servicio de Inteligencia Militar que investigaba la ejecución de Horman— afirmó durante ese primer encuentro que conocía la suerte que había corrido Charles Horman y quería revelarlo. «Sabe quién mandó matar a Horman; algunos de los que lo hicieron son ahora altos funcionarios», comunicó Dreher. «Dice estar dispuesto a dar nombres».[54]

La sección del Departamento de Estado encargada del Cono Sur, a las órdenes de David Cox, calificó de «fascinante» tal revelación, si bien mostró una postura extraordinariamente reservada a la hora de investigarla. «Se nos ha pasado por la cabeza, al igual que debe de haberle ocurrido a usted, que podría tratarse de una trampa, tendida por la extrema izquierda o por el propio GC», hizo saber Cox al embajador Barnes. Y en lugar de recomendar que enviaran al confidente a tratar con un oficial de alta graduación o aun con el FBI, el Departamento de Estado hizo todo lo contrario. «Usted es quien mejor puede juzgar quién debería reunirse con él», escribió Cox, «aunque desde nuestra posición estratégica consideramos que lo más pertinente en estos momentos es tratar el asunto como una cuestión consular».

El 20 de abril, Meneses regresó a la embajada y pasó noventa minutos refiriendo la suerte corrida por Horman. Durante ese tiempo se facilitaron por vez primera nuevos nombres de oficiales del Ejército chileno implicados en su detención y muerte. Según narró Dreher:

> Horman fue arrestado por unidades del servicio de inteligencia que habían recibido información del general Hugo Salas, a la sazón director de la CNI. Lo llevaron a la Escuela Militar para interrogarlo y de ahí lo trasladaron al Estadio Nacional para proseguir el interrogatorio. Los documentos requisados en su domicilio demostraban que era un «extremista», hecho que, unido a su condición de extranjero, desembocó en la orden de ejecutarlo. [El confidente] declaró que Horman no hablaba demasiado español y que los soldados que lo aprehendieron desconocían el hecho de que fuese estadounidense (pensaron que sería brasileño, italiano, etc.). El documento que indicaba su nacionalidad llegó al estadio después de su ejecución. Lo obligaron a cambiarse de ropa y le dispararon tres veces. Después dejaron su cadáver en la calle para que pareciese que había muerto en un enfrentamiento. La noticia de su muerte pasó inadvertida por la confusión imperante en aquellos días y más tarde se silenció al conocerse que era estadounidense.[55]

Meneses aseguró que Horman se encontraba entre los «varios centenares de personas que perdieron la vida en el estadio». El que «tomaba la decisión de quién debía morir» era el coronel Pedro Espinoza, que no tardó en unirse a la Dina.[56] «[T]iene la impresión de que la embajada no hizo gran cosa por asistir a la familia Horman», comunicó Dreher en un cablegrama dirigido a la oficina de estrategia de la Casa Blanca. «[S]e mostró muy crítico con quien era entonces cónsul general y con el grupo militar estadounidense por no tratar de ayudar a un compatriota. También dijo tener la sensación de que la embajada seguía sin estar demasiado interesada en el caso».[57]

De hecho, la embajada trató a Meneses con la misma ambivalencia que había mostrado desde un principio el conjunto de quienes trabajaban para el gobierno de Estados Unidos a la hora de buscar resueltamente la verdad sobre el caso Horman. El Departamento de Estado tenía ante sí a un testigo en potencia del controvertido asesinato —el primero que había surgido desde las declaraciones, en 1976, de Rafael González— y, sin embargo, parecía más interesado en saber qué lo movía a declarar que en evaluar el testimonio que quería ofrecer. «No logro comprender lo que pretende. ¿Por qué ha esperado», se quejó Dreher en el informe en que detallaba el segundo encuentro, «catorce años para revelar lo que sabe?». La tercera vez

que Meneses acudió a la embajada fue el 24 de abril. Durante esta reunión fundamental dijo estar convencido de que su familia estaba amenazada e «insistió» en la necesidad de salir de Chile y trasladarse a Estados Unidos con los suyos. En un resumen muy completo de estos encuentros, la embajada señaló que «[nombre tachado] podría formar parte de una conspiración gubernamental diseñada para comprometer a los funcionarios de la embajada (...) Por otra parte, podría estar hablando en serio y tener información útil» (véase el documento 5).

Estados Unidos se vio atrapado en un dilema. Si no hacía nada, empeoraría la situación en que se encontraba el caso, pues, tal como expuso Dreher, Meneses podía morir asesinado en circunstancias misteriosas. Si ocurría tal cosa, no tardaría en saberse «que recurrió a nosotros para que le prestásemos ayuda a cambio de nueva información sobre el caso Horman [y que] nosotros reaccionamos tomando a la ligera los datos por él proporcionados y negándole cualquier protección o respaldo. La prensa no dudaría en crucificarnos». Sin embargo, tampoco podían entretenerlo ya con evasivas. «Vamos a tener que decidir lo que hacer con este tipo».[58]

Tras un debate interno, los funcionarios de la embajada decidieron, sin más, rechazar al informante. Cuando regresó por cuarta vez, el 27 de abril, en busca de alguna clase de asilo, se le comunicó que «Estados Unidos no pensaba aceptar su solicitud de que se le enviase junto con su familia a Norteamérica y se le buscase un modo de subsistencia para un período indefinido». Al oír esto, se marchó.[59]

Dieciocho días después, y tras consultar con el Departamento de Justicia y el FBI, el Departamento de Estado cambió, en parte, de opinión. Sus funcionarios afirmaron entonces tener «un gran interés en determinar las circunstancias que han rodeado a las muertes de ciudadanos estadounidenses en el extranjero, aun trece años después de los hechos». Asimismo, «nos parecería una cuestión muy seria que los altos funcionarios del gobierno de Chile hubiesen tenido noticia sobre la muerte de Horman y trataran de ocultar esta información al gobierno de Estados Unidos y a la familia de la víctima». De cualquier modo, lo cierto es que el Departamento de Estado no tenía intención de enviar un equipo de investigación a

Santiago con el objetivo de determinar la buena fe de Meneses. En lugar de eso, se ordenó a la embajada que informara de lo siguiente:

> Antes de poder considerar la posibilidad de hacerlo viajar a Estados Unidos, tendríamos que entrevistarlo con más detenimiento. Dado que no podemos hacerlo en Chile, si [Meneses] estuviera dispuesto a viajar a Montevideo y correr con los gastos, los funcionarios estadounidenses allí destinados se encargarían de hablar con él y formarse un juicio sobre su credibilidad. [Meneses] debe comprender que el gobierno de Estados Unidos no puede ofrecerle ayuda especial, financiera o de cualquier otro tipo. (...) Si consideramos que (...) es digno de toda nuestra confianza tras interrogarlo en Montevideo y someterlo a la prueba del polígrafo, estaremos dispuestos a contemplar la posibilidad de que viaje luego a Estados Unidos.

Esta oferta —tan poco atractiva, por otra parte— nunca llegó a plantearse, con lo que la nueva información relativa al caso Horman tampoco llegó a investigarse. La embajada había identificado a Meneses y poseía datos biográficos sobre su persona («hemos verificado que es quien dice ser», señalaba un memorando interno), pero los representantes estadounidenses dijeron haber sido incapaces de encontrarlo. «Pese a que el funcionario de la embajada pidió [al informante] que se mantuviese en contacto, este no ha vuelto a intentar comunicarse», se quejaban.[60] «Nosotros, por otra parte, no tenemos cómo localizarlo, ya que se negó en redondo a proporcionarnos dirección o número de teléfono alguno», según indicó el embajador Barnes al Departamento de Estado el 17 de junio de 1987. Poco satisfecho con la pasividad de la embajada, el Departamento ordenó el 14 de julio emplear todos los medios posibles, lo que incluía también a los agentes del servicio de inteligencia estadounidense. Un mes más tarde, aquella envió un escueto informe final: «Imposible localizar a[l informante]».

Boris Weisfeiler

En junio de 1987, mientras la embajada de Estados Unidos en Santiago esperaba a que reapareciese el confidente del caso de Horman, surgió una segunda fuente perteneciente al estamento militar chileno la que los

cablegramas secretos norteamericanos describieron como un «asombroso informe» en torno a la suerte corrida por otro compatriota: un excursionista desaparecido cuyo nombre era Boris Weisfeiler. Se trataba de un ciudadano estadounidense de cuarenta y tres años nacido en la Unión Soviética que ejercía de profesor de matemáticas en Pensilvania. Se le había perdido la pista mientras recorría en solitario el sur de Chile en enero de 1985. Tras una somera investigación, el gobierno chileno anunció que se daba por hecho que se había ahogado mientras trataba de atravesar las turbulentas aguas del río Ñuble —en la provincia de Parral, a cuatrocientos kilómetros al sur de Santiago—, en cuya orilla apareció la mochila de Weisfeiler. Su cadáver, en cambio, no pudo recuperarse.

La versión que expuso el confidente, que se identificó como Daniel, era mucho más oscura y, según informó la embajada, podía «arrojar luz sobre la desaparición de Weisfeiler». A principios de enero de 1985, Daniel había formado parte de una unidad del Ejército chileno compuesta por siete hombres que se encargaba de vigilar el perímetro de Colonia Dignidad, lugar situado en las estribaciones de los Andes, en la zona sureste del país, que los documentos secretos del Departamento de Estado describían como «un asentamiento impenetrable de inmigrantes alemanes a los que se atribuyen tendencias neonazis».[61] La colonia mantenía una estrecha colaboración con el régimen chileno y se empleaba en calidad de centro clandestino de tortura y detención. De hecho, el confidente se refirió a algunas visitas efectuadas por Manuel Contreras, director de la Dina, y por el mismísimo Pinochet a aquel vasto enclave agreste de quince mil hectáreas. Habida cuenta de las medidas de seguridad que rodeaban a «la Dignidad», como la conocen en la región, y su proximidad a la frontera con Argentina, la citada patrulla tenía órdenes de arrestar a todo aquel que anduviese por sus inmediaciones.

La unidad a la que pertenecía Daniel recibió una llamada de radio procedente de dos soldados que hacían guardia en un andarivel cercano a la confluencia de los ríos Ñuble y Los Sauces. «Habían echado a un individuo que trataba de usar[lo]» para cruzar de una orilla a otra. La patrulla salió entonces en busca de aquel presunto subversivo y se encontró con un excursionista que lavaba algo en el río. En una confesión registrada en una cinta, Daniel describió lo que ocurrió a continuación:

> El sospechoso, al que vieron al llegar a la unión de los dos ríos, apenas hablaba español y no ofreció resistencia alguna. Le dijeron que no debía haber entrado en aquella zona y, al registrarlo, hallaron una serie de documentos que llevaron al oficial al mando a determinar que el sujeto era un espía soviético. Tras un registro más concienzudo, aparecieron un pasaporte estadounidense y una carta que atestiguaba su condición de profesor universitario en Estados Unidos. Entonces, los soldados le quitaron los zapatos, lo ataron y lo llevaron a Colonia Dignidad, donde lo entregaron al jefe de seguridad.

En posteriores entrevistas mantenidas con oficiales de la embajada, el confidente, que decía haber sido destinado a la CNI, ofreció toda una serie de truculentos detalles acerca de las vejaciones a las que fue sometido el prisionero. Incluso hizo un croquis rudimentario en el que reflejó dónde encontraron a Weisfeiler, dónde lo desnudaron y dónde lo interrogaron, y que coincidía en buena medida con los mapas bosquejados por los investigadores consulares en 1985.[62] [63] Según su relación, llevaron al detenido río abajo y, tras caminar unos cinco kilómetros, lo desnudaron para llevar a cabo el segundo registro. El comandante de la patrulla volvió a acusarlo de ser un espía y comenzó a darle patadas y culatazos, así como a sumergirle la cabeza en el río. Weisfeiler comenzó entonces a gritar su nombre y a pedir a gritos que se pusieran en contacto con su embajada. En una garita situada en la zona meridional de la colonia, lo dejaron en manos del jefe de seguridad. Este entró en el recinto acompañado del comandante de la patrulla e interrogó al detenido durante dos horas aproximadamente, tras lo cual el comandante volvió a salir para comunicar a sus hombres que Weisfeiler no era ningún espía ruso ni de la CIA, sino un espía judío.

Daniel se había sentido obligado, por motivos de conciencia, a revelar la suerte que había corrido el norteamericano, según aseguró a quienes escucharon su narración. Había decidido romper su silencio con la esperanza de que la información proporcionada pudiese servir para localizar cuanto antes a la víctima. Dijo haber estado en contacto hacía poco con un antiguo compañero de patrulla a quien habían destinado de nuevo a Colonia Dignidad y «acababa de ver a Weisfeiler con vida». «Nuestra fuente», señaló la embajada, «tiene información de un testigo ocular que asegura que

Weisfeiler se hallaba aún en la colonia en una fecha tan reciente como principios de junio de 1987».[64]

En junio de 2000, más de quince años después de la desaparición del excursionista, el Departamento de Estado levantó el secreto que pesaba sobre el informe de trece páginas en que se recogen los datos facilitados por Daniel («Caso de Boris Weisfeiler, Colonia Dignidad: Nuevas revelaciones»), junto con otros 436 documentos relacionados con el caso. Ninguno de estos se había puesto nunca a disposición de su familia, pese a que muchos de ellos contenían información extraordinaria acerca de qué era lo que sabía la embajada y cuándo lo supo. Algunos daban fe de que, cuando apenas habían pasado unas semanas de la supuesta desaparición de Weisfeiler, los funcionarios estadounidenses oyeron rumores de que no se había ahogado y seguía con vida. De hecho, en abril de 1985, los funcionarios del consulado comenzaron a sospechar de la implicación de Colonia Dignidad, si bien no hicieron nada porque los dejasen visitar el recinto. Según estos archivos, después de las declaraciones de Daniel, el personal de la embajada apenas tomó medidas inmediatas para tratar de localizarlo, y a pesar de que el consulado quiso abrir una investigación oficial con el fin de poner en evidencia lo que estaba encubriendo el régimen, el Departamento de Estado no se pronunció hasta pasado un año, tras lo cual se negó a autorizar siquiera una financiación mínima para los gastos legales.

La sombra de Charles Horman estuvo presente desde un principio en este nuevo caso de estadounidense desaparecido sin dejar rastro. «No quería que volviera a suceder lo que se narra en la película Desaparecido», recordaría más tarde la entonces cónsul general, Jayne Koblisha.[65] Cuando la Universidad de Pensilvania informó que Weisfeiler no se había incorporado a su puesto para comenzar el semestre, el consulado comenzó a buscarlo de manera decidida, y el 23 de enero, un día después de que los carabineros comunicasen a la embajada que habían encontrado su mochila verde en la orilla del río Ñuble, envió al lugar a Edward Arrizabalaga. Este viajó, primero en coche y luego a caballo, hasta la aldea ribereña de Los Mayos con la intención de rastrear los pasos del desaparecido, entrevistar a los campesinos que pudiesen haberlo visto y pedir a las autoridades locales que iniciasen una investigación especial. El funcionario del consulado comenzó

a recelar cuando comprobó que el contenido de la mochila estaba seco —«sin rastro de humedad o de olor a enmohecido», tal como se lee en sus notas manuscritas— y no mostraba signo alguno de haber estado nunca en el agua. El pasaporte, el billete de avión y un diario que siempre llevaba consigo habían desaparecido con él. Aun así, en palabras de Arrizabalaga, «la muerte accidental es, en realidad, la explicación más probable de su desaparición».

Los investigadores de la embajada, sin embargo, no tardaron en averiguar que, en el preciso instante de su desaparición, Weisfeiler llevaba tras de sí a una unidad de carabineros y una patrulla del Ejército que lo consideraban sospechoso de subversión. El 4 de enero, Luis López, uno de los lugareños que lo habían visto recorrer la zona, acudió a la policía local y habló de él como un «posible extremista». Todos los que vivían en las inmediaciones «tenían», según el resumen que hizo la embajada de su declaración inicial, «órdenes de informar de inmediato a los carabineros de la presencia de cualquier extraño»:

> Luis López dio aviso de la presencia del extranjero al comandante del puesto de El Roble, el sargento segundo Jorge Cofré Vega. Todo apunta a que, tras recibir esta noticia, los carabineros salieron a buscarlo a lomos de caballo. (...) Según el testimonio del sargento Cofré, los carabineros recibieron la ayuda de una patrulla militar procedente del regimiento militar apostado en Concepción que, casualmente, se hallaba en la zona el 4 de enero de 1985. Luis López es, al parecer, la última persona que vio a Boris Weisfeiler.[66]

No obstante, cuando los funcionarios de la embajada volvieron a la región, no lograron entrevistar a los carabineros que habían participado en la búsqueda, ya que todos habían recibido nuevos destinos y se hallaban en puntos dispersos del país. El sargento Cofré Vega, por su parte, se había retirado de improviso y no pudieron ponerse en contacto con él. Los militares chilenos, por otro lado, se negaron a identificar a los miembros de la patrulla del Ejército. La embajada envió un cablegrama a Washington para informar de «una serie de indicios» que hacían pensar que los testigos se encontraban «sometidos a una presión considerable por parte de los carabineros para que confirmasen la versión oficial y trataran lo menos

posible con los funcionarios del consulado». En mayo de 1986, el testigo principal, Luis López, apareció muerto en circunstancias que la embajada calificó de «misteriosas»; a saber, colgado de la infraestructura del andarivel que atravesaba el río, a poca distancia de donde desapareció Weisfeiler.[67]

Este encubrimiento resultaba en particular desconcertante, dado que, de acuerdo con los documentos desclasificados, solo unas semanas después de su desaparición, la embajada tenía ya «un indicio» de que Weisfeiler no se había ahogado. Cierto contacto, cuyo nombre aún no se ha revelado, se comunicó con Lawrence Penn, funcionario de la embajada, y «sugirió que W. estaba aún con vida», según un críptico memorando clasificado de secreto y escrito el 21 de febrero de 1985 por el subdirector de la embajada, George Jones. Este preguntó a Penn si tenía modo alguno de volver a comunicarse con dicho contacto, ya que el embajador James Theberge estaba considerando aceptar el veredicto oficial de muerte accidental. «El embaj. ha dicho que le preocupa cerrar el expediente relativo a la desaparición de W., dado que existe un indicio de que pueda estar vivo».

El caso se mantuvo abierto, lo que se debió en gran medida a la indignación personal de Jayne Koblisha ante las respuestas evasivas ofrecidas por el estamento militar chileno a las preguntas de Estados Unidos. En abril de 1985, la cónsul general descubrió que la embajada había recibido información incorrecta acerca de la línea que delimitaba el extenso territorio montañoso de Colonia Dignidad. En un memorando confidencial, titulado «Situación/paradero de Boris Weisfeiler», hizo constar que, «en el momento de su desaparición, Weisfeiler se hallaba dentro de la propiedad de la colonia o muy cerca de esta» y recomendó que se transmitiese esta información a Washington a través de «un teléfono seguro». Después de otro año sin que los «acercamientos informales» de Estados Unidos obtuvieran resultado alguno de parte de los funcionarios militares chilenos, Koblisha envió al nuevo embajador, Harry Barnes, una memoria escrita sin ambages y le pidió que adoptase medidas definitivas para dar prioridad al caso y lograr respuestas en torno a la suerte que había corrido Weisfeiler. «La falta de acción está resultando muy dañina», le advirtió, y más adelante añadió: «El verdadero peligro que amenaza a este caso es que aplacemos nuestra intervención hasta que sea demasiado tarde para salvar la vida de

Weisfeiler o determinar las circunstancias reales de su muerte» (véase el documento 6).[68] Después de otro año de evasivas diplomáticas por parte del régimen de Pinochet, Koblisha volvió a instar al embajador para que adoptara una actitud más enérgica. «La poca seriedad de que hemos dado muestras ante este caso y ante este gobierno resulta vergonzosa», escribió, «y pese a que estaba convencida de que debíamos haber actuado con más firmeza hace mucho tiempo, lo cierto es que no se ha hecho nada».

A mediados de 1987, cuando se preparaba para regresar a Washington a fin de que se le asignase un nuevo destino, Koblisha comenzó la redacción de un informe detallado sobre el caso de Weisfeiler. Las catorce páginas del documento recogían «contradicciones dignas de consideración» en lo referente a las pruebas de que se disponía, así como indicaciones de que la policía había intimidado a los testigos para dar falso testimonio y asegurar haber visto las huellas del desaparecido en el lugar en el que, supuestamente, se introdujo en el río y se ahogó. Weisfeiler era un excursionista semiprofesional, que había hecho en solitario recorridos a pie en Siberia, Alaska, China y Perú. Sin embargo, «aún no se ha ofrecido una respuesta satisfactoria a la pregunta de qué motivo pudo haber llevado a un viajero con experiencia como Weisfeiler a tratar de atravesar un río en un lugar tan evidentemente peligroso». Una posible explicación citada por la embajada era que la mochila hubiese sido «colocada en un lugar [cercano al río] con la intención de fingir una muerte accidental».[69]

Cuando se cablegrafió este informe a Washington, a finales de junio, los funcionarios de la embajada ya habían comenzado a entrevistar al informante conocido como Daniel, quien declaró que la patrulla había enviado la mochila al cuartel central de la CNI para que la analizasen antes de volver a colocarla en la orilla del río.[70] De ser cierta, esta versión «arrojaría una luz completamente nueva sobre el caso, amén de poner en tela de juicio buena parte de la información relativa a la desaparición de Weisfeiler que hemos recibido hasta ahora», indicó un despacho enviado por la embajada a la Oficina de Asuntos Interamericanos. No cabía duda de que el relato de Daniel era extrañísimo, pero tampoco podía negarse su total verosimilitud. «Su narración es tan detallada y encaja con tal perfección con la información proporcionada por otras fuentes sobre el paradero de Weisfeiler, su descripción física y las pertenencias que llevaba», admitieron

los funcionarios de la embajada que se reunieron con él, «que nos parece probable que participase de verdad en su detención y su entrega a la colonia».[71]

La posibilidad de que el desaparecido siguiera con vida planteaba, de nuevo, «un dilema»:

> Si Weisfeiler está vivo y se encuentra preso en la colonia o en cualquier otro sitio con conocimiento del GC, corremos el riesgo de que, si emprendemos una investigación, lo asesinen para encubrir los hechos. Por otra parte, no intervenir equivaldría a abandonar a un ciudadano estadounidense en manos de personas a las que, siendo muy amables, podríamos calificar de paranoicas.

Esta previsión, unida a una clara inercia burocrática y a la pusilánime ambivalencia de los altos funcionarios del Departamento de Estado, anuló cualquier intento enérgico de determinar el paradero de Weisfeiler y la situación en que se encontraba. Cierto es que Philip Antweiler, funcionario del consulado, propuso una investigación en torno a lo que él llamó las siete piedras del caso a las que nadie había dado la vuelta. Sin embargo, la confesión de Daniel no resultó en iniciativa alguna, inmediata y directa, por parte de Estados Unidos a fin de resolver su desaparición.

En agosto de 1987, el Departamento de Estado informó a la embajada que Washington «se muestra más partidario de abrir una investigación judicial independiente que de cualquier reactivación de las pesquisas administrativas, las cuales, tal como ha hecho saber la embajada, no han logrado resolver las discrepancias del caso».[72] Sin embargo, los «pasos siguientes» se dejaron en manos de los funcionarios de la embajada, que seguían esperando ayuda del régimen con respecto a sus investigaciones. Las autoridades, no obstante, respondieron de nuevo a todas sus peticiones con dilatorias, maniobras de obstrucción y promesas vanas de nuevos análisis de lo sucedido. En enero de 1988, un funcionario consular obtuvo al fin permiso para viajar a Parral y entrevistarse con los carabineros que habían emprendido en un primer momento la búsqueda de Weisfeiler. En el transcurso de la conversación que mantuvo con ellos, el sargento Cofré Vega facilitó una lista de los miembros de la unidad del Ejército que los

habían ayudado a encontrar al excursionista. Con todo, el gobierno de Estados Unidos no solicitó formalmente un encuentro con los soldados que «puedan tener información de relieve en lo tocante a los acontecimientos que rodearon a la desaparición del Sr. Weisfeiler» hasta agosto de 1988, cuando había transcurrido más de un año de la primera confesión de Daniel.[73] En diciembre, casi cuatro años después de la desaparición, el ministro de Relaciones Exteriores rompió por fin su silencio y manifestó que solo la autoridad local, el Tribunal de San Carlos, tenía poder para disponer legalmente tales interrogatorios. Este, por su parte, solo actuaría si se entablaba el proceso judicial pertinente y se estimaba justificado por la existencia de pruebas inéditas y convincentes.

El año de 1989 marcó el inicio de la retirada progresiva del régimen pinochetista. Chile entró en un prolongado proceso de transición al poder civil que llevó a los funcionarios del consulado a considerar la idea de contratar a un abogado y emprender las diligencias legales necesarias para acometer una investigación completa y autorizada por el tribunal en torno a la suerte de Weisfeiler, lo que parecía una acción tan lógica como prometedora. «¿Quién sabe lo que puede suceder durante los próximos años? Y más aún, teniendo en cuenta la llegada de un nuevo gobierno y un clima político diferente», escribió el cónsul general William Barkell el 3 de enero, fecha en que recomendó recurrir a Alfredo Etcheberry, el destacado abogado chileno que representaba a Estados Unidos en el juicio sobre el asesinato de Letelier y Moffitt.[74] Etcheberry, que había hecho ya una labor considerable sin recibir remuneración alguna en lo tocante al caso de Weisfeiler, solicitó un pago moderado de varios miles de dólares por adelantado por representar al consulado estadounidense a la hora de exigir que se reabriera una investigación judicial. A mediados de marzo, la embajada cablegrafió al Departamento de Estado a fin de pedir «la aprobación necesaria para obtener servicios legales que permitan a los funcionarios del consulado cumplir con su deber respecto a la protección de ciudadanos estadounidenses» y «contratar a un abogado local entendido (...) Alfredo Etcheberry».

Tras varios meses sin respuesta alguna, la embajada volvió a comunicarse con Washington el 29 de agosto para indicar que, «a pesar de las numerosas tentativas de obtener más detalles (...) no hemos recibido respuesta alguna»

fuera de la que aseguraba que «el Departamento de Estado está estudiando la propuesta». Esta nueva solicitud «desapareció en un agujero negro, como ha sucedido con todas las demás», se quejó Barkell en un comunicado interno de la embajada con fecha 3 de octubre. Tres días después, cablegrafió a la oficina legal del Departamento el siguiente mensaje: «Habida cuenta del carácter delicado de un caso como este, que ha suscitado el interés del Congreso, no podemos entender semejante demora en la respuesta a nuestras peticiones».[75]

Hubo que esperar a que regresara a Washington Charles Gillespie, embajador de Estados Unidos en Chile, y planteara en persona la cuestión para que el Departamento de Estado respondiese al fin. El 20 de noviembre, el secretario de Estado James Baker firmó un despacho por el que hacía saber que, finalmente, se habían investigado los antecedentes del asunto. Su gabinete no tenía «objeción alguna a la idea de que se contrate a un abogado local para preparar y tramitar, ante el tribunal pertinente, una petición en nombre de la embajada para que el gobierno de Chile reanude las pesquisas». Había una condición: el Departamento de Estado no procuraría dinero alguno; de modo que los servicios legales habrían de correr a cargo de la embajada.

La incapacidad de esta a la hora de decidir si podía destinar varios miles de dólares para contratar a un abogado supuso más dilaciones en el caso Weisfeiler. El 28 de noviembre de 1989, Barkell pidió a la oficina de administración que comprobase «si había fondos disponibles». Reiteró su solicitud en diciembre y en enero, pero no recibió más respuesta que: «Se está investigando». Finalmente, en febrero de 1990, más de un año después de haber expuesto por vez primera el plan de recurrir a los servicios de Etcheberry, Barkell presentó un memorando formal, «Financiación para contratar a un abogado para reabrir la causa de Weisfeiler», en el que declaraba: «Agradecería enormemente una respuesta definitiva. Quiero poner manos a la obra y reabrir la causa».

Al final, la oficina de la embajada encargada de los recursos monetarios determinó que no había suficiente dinero, de modo que Barkell recibió una escueta comunicación de tan solo una frase que aseveraba: «En estos

momentos no hay fondos disponibles en el presupuesto de la embajada para este proyecto».[76]

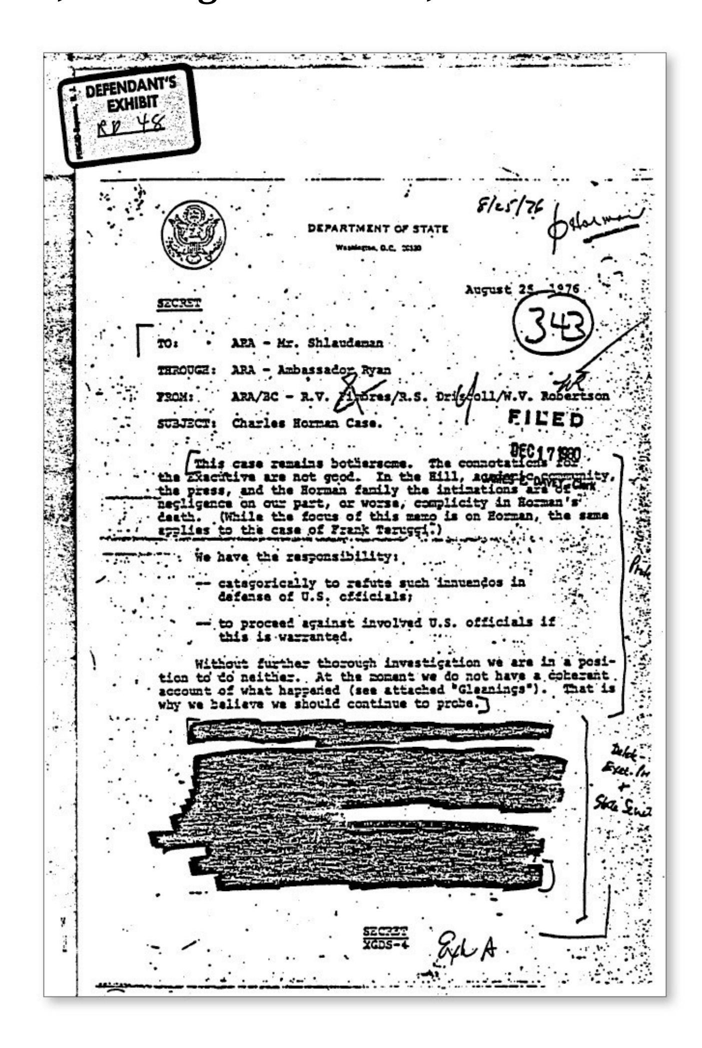
***

Toda una década después, el 3 de enero de 2000, los tribunales chilenos accedieron a acometer una investigación en torno al caso, no a instancias de la embajada, sino como consecuencia de una demanda legal presentada por la hermana de Boris Weisfeiler, Olga. Los archivos del Departamento de Estado relativos a este asunto aún no habían sido puestos a disposición del público, pero la familia de la víctima citó como nueva prueba una declaración de Daniel, quien había vuelto a aparecer en octubre de 1997. Durante un programa de radio sobre Colonia Dignidad, hizo una llamada a la emisora y volvió a referir la historia de la detención de Weisfeiler y su posterior traslado al recinto alemán. El presentador, Ricardo Israel, lo convenció para mantener con él una reunión privada. En ella, el informante le entregó una exposición, escrita a mano y sin firmar, que Israel hizo llegar a la prensa chilena y la embajada estadounidense. Si bien diez años antes había hablado de la posibilidad de que Weisfeiler siguiese con vida, confinado en la colonia, en aquel texto aseguraba que había sido ejecutado. Sus compañeros y él habían recibido la noticia de que, tras someterlo a un salvaje interrogatorio, lo habían hecho hincarse para matarlo de un disparo en la nuca. En la traducción del informe de Daniel remitida al Departamento de Estado, la embajada de Estados Unidos señaló que consideraba «el caso abierto y sin resolver».[77]

A inicios de 2023, Boris Weisfeiler seguía siendo el único ciudadano estadounidense que se contaba entre los 1.109 chilenos «desaparecidos» a manos del régimen de Pinochet. Charles Horman y Frank Teruggi forman parte de las más de tres mil cien víctimas cuyos asesinos aún no han sido identificados y siguen, por lo tanto, en libertad. Sus casos fueron a sumarse a las atrocidades sistemáticas, arbitrarias y brutales sufridas por la sociedad chilena desde el día del golpe de Estado hasta el final del gobierno de Pinochet. Asimismo, hicieron que la atención de todo el planeta se centrase en la indiferencia mostrada por el gobierno de Estados Unidos con respecto a los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen aun cuando las víctimas eran norteamericanas. Sin embargo, la suerte corrida por una

cuarta estadounidense, Ronni Karpen Moffitt, supuso la extensión de estas atrocidades más allá de las fronteras de Chile para cometer un crimen de categoría muy diferente: el terrorismo internacional.

Documento 1. Departamento de Estado, secreto: Memorando «Caso Charles Horman», 25 de agosto de 1976, versión censurada. (2 páginas)



DEFENDANT'S EXHIBIT RD 48

8/25/76

DEPARTMENT OF STATE

Washington, D.C. 20520

August 25, 1976

343

SECRET

TO: ARA - Mr. Shlaudeman

THROUGH: ARA - Ambassador Ryan

FROM: ARA/BC - R.V. Fimbres/R.S. Driscoll/W.V. Robertson

SUBJECT: Charles Horman Case.

FILED DEC 17 1980

This case remains bothersome. The connotations for the Executive are not good. In the Hill, academic community, the press, and the Horman family the intimations are of negligence on our part, or worse, complicity in Horman's death. (While the focus of this memo is on Horman, the same applies to the case of Frank Teruggi.)

We have the responsibility:

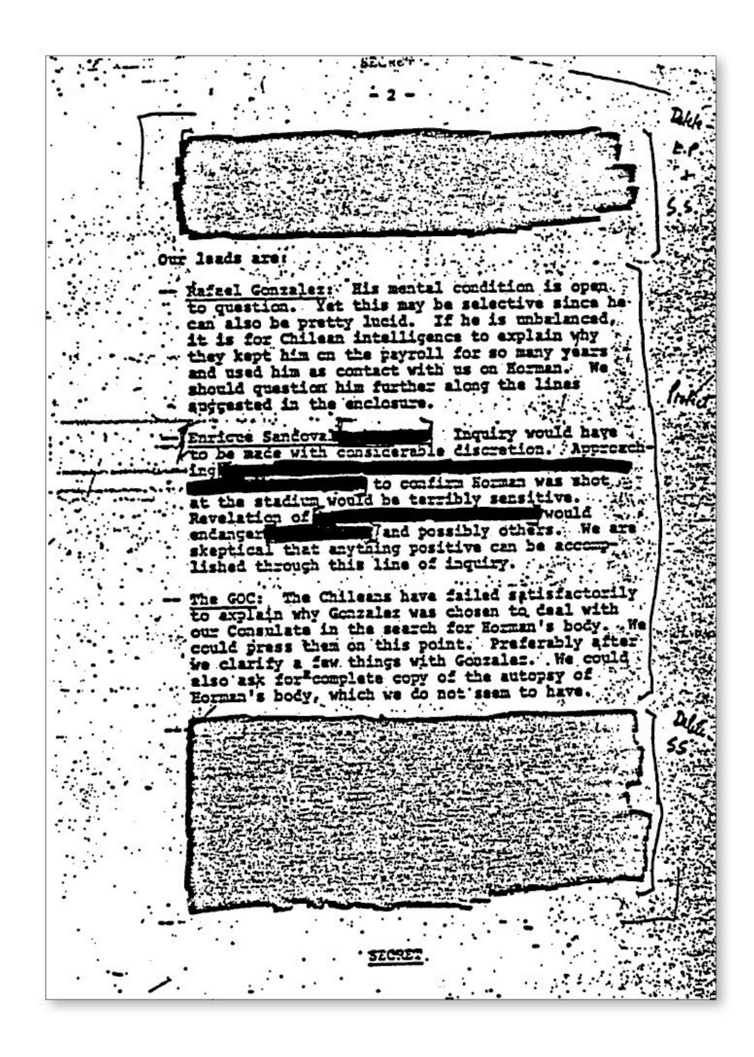
-- categorically to refute such innuendos in defense of U.S. officials;

-- to proceed against involved U.S. officials if this is warranted.

Without further thorough investigation we are in a position to do neither. At the moment we do not have a coherent account of what happened (see attached "Gleanings"). That is why we believe we should continue to probe.

[redacted]

SECRET
XGDS-4



SECRET

- 2 -

[redacted]

Our leads are:

— Rafael Gonzalez: His mental condition is open to question. Yet this may be selective since he can also be pretty lucid. If he is unbalanced, it is for Chilean intelligence to explain why they kept him on the payroll for so many years and used him as contact with us on Horman. We should question him further along the lines suggested in the enclosure.

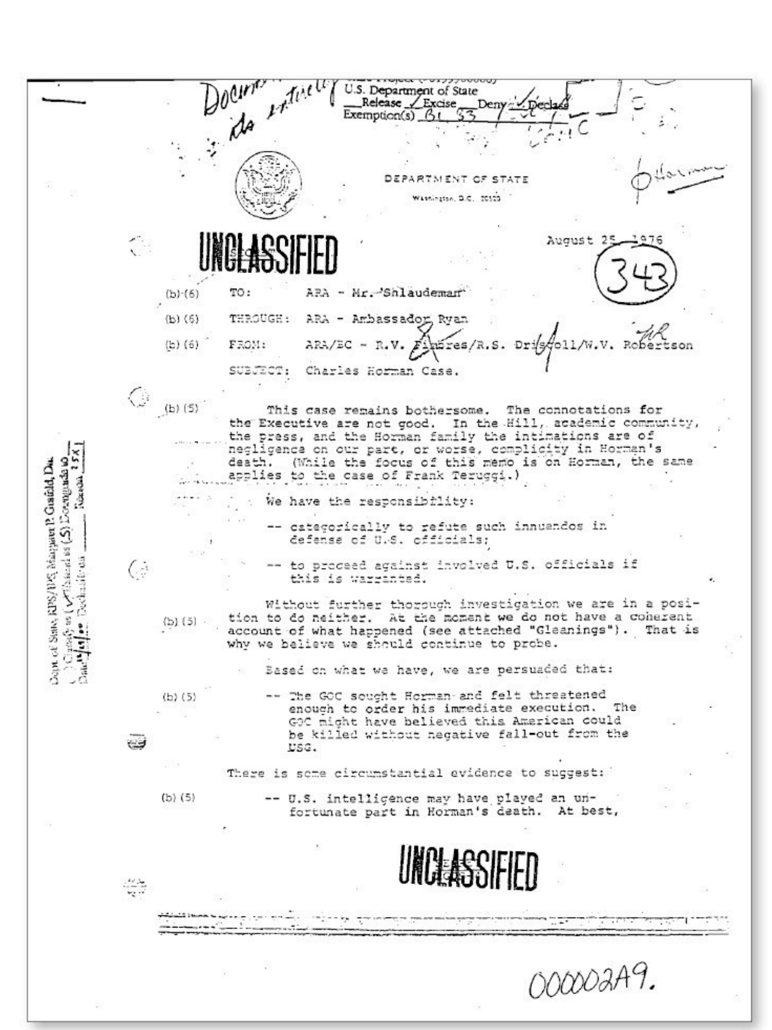
— Enrique Sandoval [redacted]. Inquiry would have to be made with considerable discretion. Approaching [redacted] to confirm Horman was shot at the stadium would be terribly sensitive. Revelation of [redacted] would endanger [redacted] and possibly others. We are skeptical that anything positive can be accomplished through this line of inquiry.

— The GOC: The Chileans have failed satisfactorily to explain why Gonzalez was chosen to deal with our Consulate in the search for Horman's body. We could press them on this point. Preferably after we clarify a few things with Gonzalez. We could also ask for complete copy of the autopsy of Horman's body, which we do not seem to have.

[redacted]

SECRET

Documento 2. Departamento de Estado, secreto: Memorando «Caso Charles Horman», 25 de agosto de 1976, versión sin censura. (2 páginas)



U.S. Department of State
Release ✓ Excise ___ Deny ___ Declass ✓
Exemption(s) B1 B3

DEPARTMENT OF STATE

Washington, D.C. 20520

UNCLASSIFIED

August 25, 1976

(343)

(b)(6) TO: ARA - Mr. Shlaudeman

(b)(6) THROUGH: ARA - Ambassador Ryan

(b)(6) FROM: ARA/BC - R.V. Fimbres/R.S. Driscoll/W.V. Robertson

SUBJECT: Charles Horman Case.

(b)(5) This case remains bothersome. The connotations for the Executive are not good. In the Hill, academic community, the press, and the Horman family the intimations are of negligence on our part, or worse, complicity in Horman's death. (While the focus of this memo is on Horman, the same applies to the case of Frank Teruggi.)

We have the responsibility:

-- categorically to refute such innuendos in defense of U.S. officials;

-- to proceed against involved U.S. officials if this is warranted.

(b)(5) Without further thorough investigation we are in a position to do neither. At the moment we do not have a coherent account of what happened (see attached "Gleanings"). That is why we believe we should continue to probe.

Based on what we have, we are persuaded that:

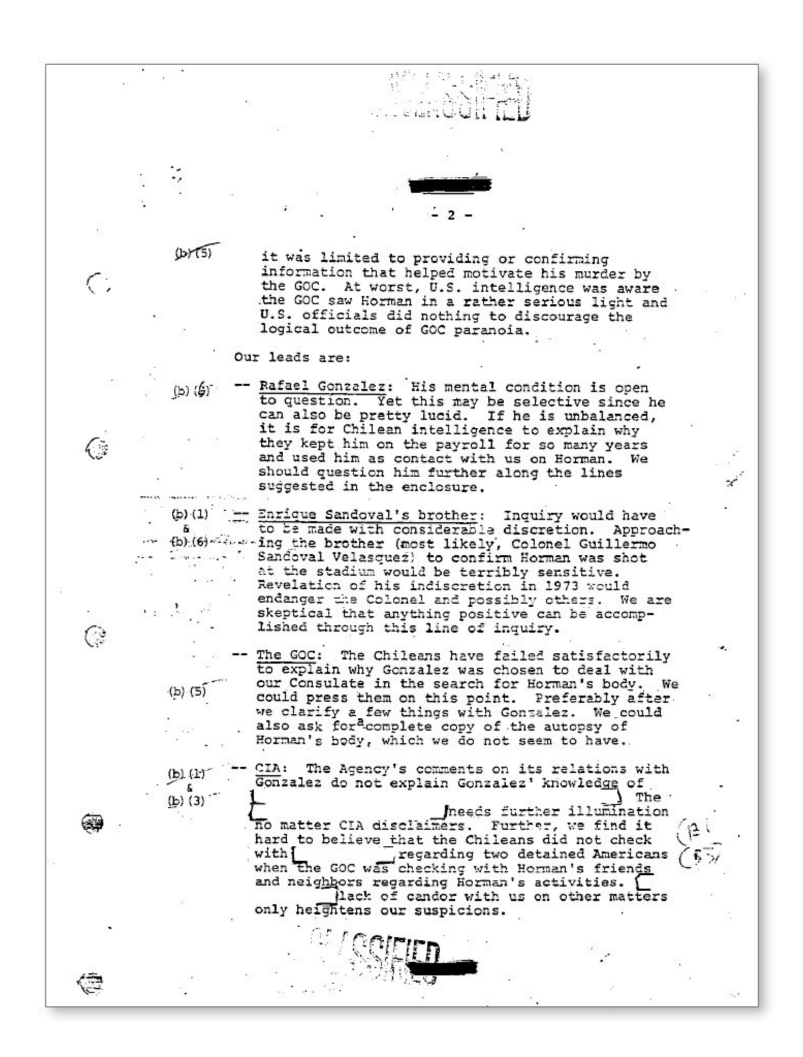
(b)(5) -- The GOC sought Horman and felt threatened enough to order his immediate execution. The GOC might have believed this American could be killed without negative fall-out from the USG.

There is some circumstantial evidence to suggest:

(b)(5) -- U.S. intelligence may have played an unfortunate part in Horman's death. At best,

UNCLASSIFIED

000002A9.



UNCLASSIFIED

[redacted]

- 2 -

(b)(5)

it was limited to providing or confirming information that helped motivate his murder by the GOC. At worst, U.S. intelligence was aware the GOC saw Horman in a rather serious light and U.S. officials did nothing to discourage the logical outcome of GOC paranoia.

Our leads are:

(b)(6)

-- Rafael Gonzalez: His mental condition is open to question. Yet this may be selective since he can also be pretty lucid. If he is unbalanced, it is for Chilean intelligence to explain why they kept him on the payroll for so many years and used him as contact with us on Horman. We should question him further along the lines suggested in the enclosure.

(b)(1) & (b)(6)

-- Enrique Sandoval's brother: Inquiry would have to be made with considerable discretion. Approaching the brother (most likely, Colonel Guillermo Sandoval Velasquez) to confirm Horman was shot at the stadium would be terribly sensitive. Revelation of his indiscretion in 1973 would endanger the Colonel and possibly others. We are skeptical that anything positive can be accomplished through this line of inquiry.

(b)(5)

-- The GOC: The Chileans have failed satisfactorily to explain why Gonzalez was chosen to deal with our Consulate in the search for Horman's body. We could press them on this point. Preferably after we clarify a few things with Gonzalez. We could also ask for a complete copy of the autopsy of Horman's body, which we do not seem to have.

(b)(1) & (b)(3)

-- CIA: The Agency's comments on its relations with Gonzalez do not explain Gonzalez' knowledge of [ ] The [ ] needs further illumination no matter CIA disclaimers. Further, we find it hard to believe that the Chileans did not check with [ ] regarding two detained Americans when the GOC was checking with Horman's friends and neighbors regarding Horman's activities. [ ] lack of candor with us on other matters only heightens our suspicions.

(B)(5)

UNCLASSIFIED [redacted]

Documento 3. Ministerio de Defensa: Memorando secreto e informe de los militares chilenos acerca de Frank Teruggi y Charles Horman, 30 de octubre de 1973. (2 páginas)

TRANSLATION

MEMORANDUM

OCT 30, 1973

(Antecedents on two Northamerican citizens' decease)

A. BACKGROUND

1. American citizens FRANK RANDALL TERRUGI BOMBATCH and CHARLES HORMAN LAZAR, were accurately investigated by officials of the Military Intelligence Service, in order to establish cause of their death as a special deference to the American Embassy.

2. Available information on both persons leads to the conclusion that they were involved in extreme leftist movements in our country, which they supported both materially and ideologically.

3. It is necessary, furthermore, to indicate that available and well supported data evidence existence of an organization linked to Northamerican residents in our country, with connections in the rest of the countries in the Continent and led from the U.S., which has undertaken an offensive campaign tending to obtain the following fundamental objectives:

a. Help extremists and political leaders of the former government leave the country.

b. Carry out a campaign to discredit the Junta de Gobierno, intending through these actions, to impede economic or any other assistance from the U.S. to our country.

c. Discredit diplomatic procedures of the American Embassy in Chile, alleging that these have been weak and have permitted military action against Northamerican citizens residing in Chile.

This situation is related with the citizens HORMAN and TERRUGI, since there are concrete reasons to believe that at least the latter belongs to said organization.

4. On the participation of armed forces in the cases referred to, the following has been proved:

a. That FRANK TERRUGI was actually detained and taken to the National Stadium but subsequently he was set free and that his decease occurred while he was out of military or police control.

b. In the case of HORMAN, it has not been possible to prove the effectiveness of his detention by military or police forces, as no registration appears

- 2 -

on him in the pertaining Units, nor on any list of arrested people in any circumstances in the National Stadium.

c. To this respect, it can be stated that his classification during the investigations performed was "disappeared" and efforts to locate him were based on this fact.

d. Available information shows that Mr. Horman may have been detained by military personnel at his domicile located in what has been named "Belt Vicuña Mackenna", but this situation is connected with elements that present an abnormal picture of the situation since these uniformed persons supposedly arrived in a civilian truck, without identifying themselves and without leaving any documentation on searchings, thus clearly transgressing regulations in this respect.

5. In view of the above, action of the Service, which in all times contacted the parents and wife of Mr. Horman, was aimed at finding this citizen since he was classified as "disappeared". Thus, his decease was finally proved after accurate studies on identification by means of fingerprint tests and after finding that his corpse belonged to one of the non-identified persons turned into the Legal Medical Institute on 18 Sep 1973.

8. <u>CONCLUSSIONS.</u>

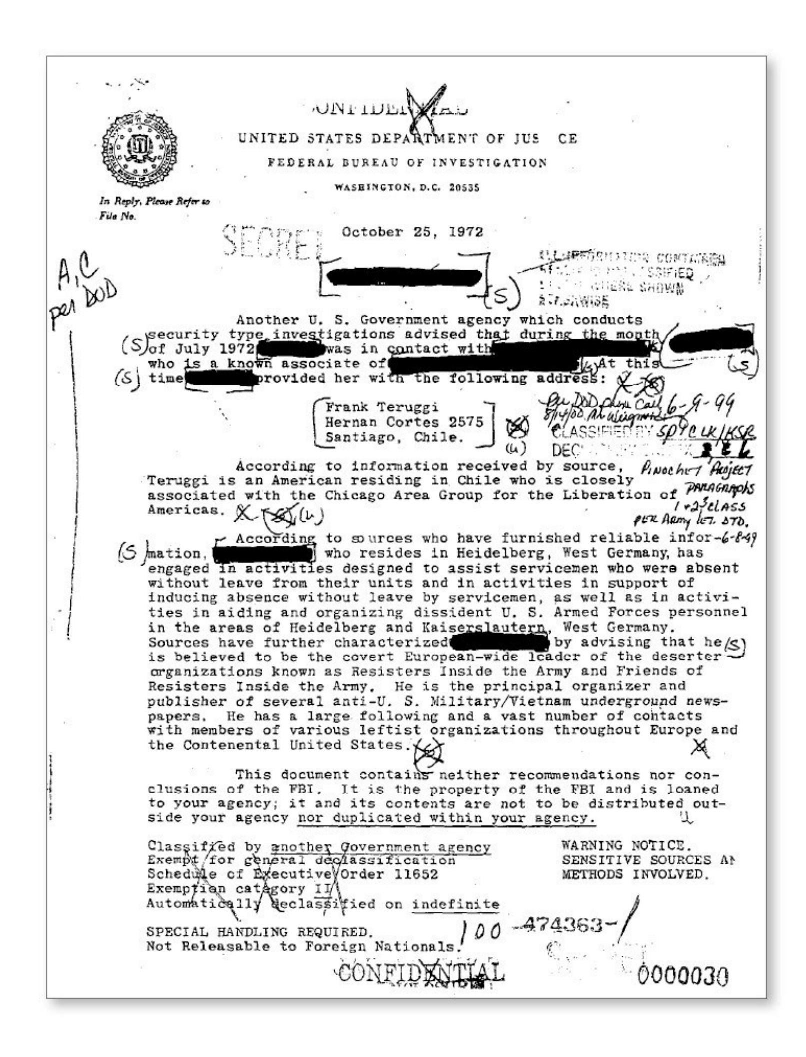
1. In accordance with the above data, it can be concluded that both American citizens died while out of military control.

2. It can also be concluded that during period 11 to 20 September, snipers and guerilla actions in Santiago had to be suppressed by force, during those actions it was verified that extremists fighting against civilians were responsible for killing people with weapons of a similar or equal caliber to those used by military forces, and therefore this fact must not be dismissed as a possible cause for death of both American citizens under reference.

3. Control on persons during those days, especially on people who had been detained, escape to the responsibility of Military Authorities and presumptions on any criminal action by these forces must be discarded, as they were under command of responsible officials with strict instructions in this respect.

SANTIAGO, 30 October 1973.

Documento 4. FBI, secreto: Memorando de inteligencia sobre Frank Teruggi, 25 de octubre de 1972.



CONFIDENTIAL

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

WASHINGTON, D.C. 20535

In Reply, Please Refer to File No.

SECRET

October 25, 1972

[redacted] (S)

Another U. S. Government agency which conducts security type investigations advised that during the month of July 1972 [redacted] was in contact with [redacted] who is a known associate of [redacted] At this time [redacted] provided her with the following address: (U)

Frank Teruggi
Hernan Cortes 2575
Santiago, Chile. (U)

According to information received by source, Teruggi is an American residing in Chile who is closely associated with the Chicago Area Group for the Liberation of Americas. (U)

According to sources who have furnished reliable information, [redacted] who resides in Heidelberg, West Germany, has engaged in activities designed to assist servicemen who were absent without leave from their units and in activities in support of inducing absence without leave by servicemen, as well as in activities in aiding and organizing dissident U. S. Armed Forces personnel in the areas of Heidelberg and Kaiserslautern, West Germany. Sources have further characterized [redacted] by advising that he is believed to be the covert European-wide leader of the deserter organizations known as Resisters Inside the Army and Friends of Resisters Inside the Army. He is the principal organizer and publisher of several anti-U. S. Military/Vietnam underground newspapers. He has a large following and a vast number of contacts with members of various leftist organizations throughout Europe and the Contenental United States.

This document contains neither recommendations nor conclusions of the FBI. It is the property of the FBI and is loaned to your agency; it and its contents are not to be distributed outside your agency nor duplicated within your agency.

Classified by another Government agency
Exempt for general declassification
Schedule of Executive Order 11652
Exemption category II
Automatically declassified on indefinite

WARNING NOTICE.
SENSITIVE SOURCES AND METHODS INVOLVED.

SPECIAL HANDLING REQUIRED.
Not Releasable to Foreign Nationals.

100-474363-

CONFIDENTIAL

0000030

Documento 5. Embajada de Estados Unidos, Cablegrama: «Reporte de [Raúl Meneses] sobre la intervención del gobierno de Chile en la muerte de Charles Horman, pide ayuda y asilo a la embajada», 28 de abril de 1987. (2 páginas)

~~CONFIDENTIAL~~ HORMAN

WHITE HOUSE SITUATION ROOM

137

PRT: FLOWER
SIT: EOB VAX

<PREC> IMMEDIATE <CLAS> CONFIDENTIAL <DTG> 282129Z APR 87

EXDIS

FM AMEMBASSY SANTIAGO

TO RUEHC/SECSTATE WASHDC IMMEDIATE 1168

~~C O N F I D E N T I A L~~ SECTION 01 OF 03 SANTIAGO 03859
EXDIS
DEPT PLEASE PASS TO DEPTJUSTICE
DEPT FOR LEGAL ADVISOR KOZAK; FBI FOR SSA CORNICK
E.O. 12356: DECL:OADR
TAGS: PREL, PHUM, CI
SUBJ: [redacted] REPORTS ON GOC INVOLVEMENT IN DEATH OF CHARLES HORMAN, ASKS EMBASSY FOR ASYLUM AND AID
REF: (A) SANTIAGO 2448 (EXDIS)

PRA 1; FOIA B-1 EO12958 1.5c 3.4 b1+b3

\-

1. ~~CONFIDENTIAL~~ - ENTIRE TEXT.

\-

>BEGIN SUMMARY>

2. SUMMARY: EMBOFF HAS HAD SEVERAL MEETINGS WITH [redacted] ACCOUNT OF HORMAN'S DEATH CORRESPONDS WITH WHAT WE KNOW ABOUT THE CASE AND THE GOC ATTEMPT TO COVER UP THEIR INVOLVEMENT. [redacted] INSISTS THAT HE IS IN VERY REAL DANGER FROM THE CNI (CHILEAN INTELLIGENCE) AND IS NOW SEEKING EMBASSY PROTECTION AND AID. HE HAS COMPARED HIS SITUATION TO THAT OF FERNANDEZ LARIOS AND WANTS TO GO TO THE U.S. FOR SAFETY. CLEARLY [redacted] COULD BE PART OF A GOC PLOT TO COMPROMISE EMBASSY OFFICIALS, ESPECIALLY IN THE WAKE OF THE FERNANDEZ DEFECTION. [redacted] ON THE OTHER HAND, HE COULD BE ON THE LEVEL AND HAVE USEFUL INFORMATION ABOUT COLONEL ESPINOZA, ONE OFTHOSE UNDER INDICTMENT IN THE LETELIER CASE.

PRA 1; FOIA B-1 EO12958 1.5c 3.4 b1+b3

\-

EMBASSY WOULD LIKE TO EXPLORE FURTHER WHAT [redacted] MIGHT KNOW, BUT IT WOULD BE HELPFUL FIRST TO HAVE AN INDICATION FROM WASHINGTON AS TO WHETHER ANYTHING HE SAID IS NEW, OR POTENTIALLY USEFUL IN LETELIER CASE. END SUMMARY.

PRA 1; FOIA B-1 EO12958 1.5c 3.4 b1+b3

>END SUMMARY>

\-

THE EMBASSY IN LATE FEBRUARY WHEN HE CALLED AND ASKED FOR AN APPOINTMENT WITH THE POLITICAL SECTION. HE SUBSEQUENTLY MET WITH A POLITICAL OFFICER ON MARCH 11, APRIL 20, AND APRIL 24. IN MID-MARCH HE ALSO MET WITH THE CONSUL GENERAL. HE RELATED THE FOLLOWING STORY. !

\-

4. HE IS [redacted] ACCORDING TO [redacted] HORMAN WAS DETAINED ON SEPTEMBER 18 BY A UNIT STATIONED AT THE MILITARY SCHOOL DURING A ROUTINE ACTION AGAINST A HOME REPUTED TO HOUSE EXTREMISTS. MATERIALS WERE FOUND AT THE HOUSE WHICH WERE CONSIDERED "EXTREMIST" IN CONTENT. HORMAN WAS INTERROGATED AT THE MILITARY SCHOOL AND THEN TRANSFERRED TO THE NATIONAL STADIUM FOR FURTHER QUESTIONING. HE WAS ORDERED SHOT AND KILLED THE EVENING OF SEPTEMBER 19. ACCORDING TO [redacted] THE AUTHORITIES AT THE STADIUM DID NOT KNOW THAT HORMAN WAS AN AMERICAN SINCE HIS PAPERWORK ARRIVED AFTER HIS DEATH, AND HIS POOR KNOWLEDGE OF SPANISH MADE IT DIFFICULT FOR HIM TO UNDERSTAND AND ANSWER QUESTIONS. THEY ONLY KNEW THAT HE WAS A FOREIGNER AND AN "EXTREMIST". THE BODY WAS TAKEN FROM THE STADIUM AND LEFT AT A LOCATION TO CREATE THE IDEA THAT HE HAD BEEN KILLED IN A FIREFIGHT WITH THE MILITARY. HOWEVER, IN THE CONFUSED DAYS FOLLOWING THE COUP, AND AFTER IT WAS KNOWN THAT HE WAS AN AMERICAN, THE MILITARY SOUGHT TO HIDE THE FACT THAT HE WAS DEAD. [redacted] CONFIRMED THAT HORMAN WAS REQUIRED TO CHANGE CLOTHES SHORTLY BEFORE HE WAS EXECUTED. ACCORDING TO [redacted] PEDRO ESPINOZA WAS THE ONE AT THE STADIUM WHO APPROVED THE KILLING OF HORMAN. HE ADDED THAT SEVERAL HUNDRED WERE SHOT AT THE STADIUM BUT THAT MANY MORE WERE KILLED IN VALPARAISO, WHERE THE BODIES WERE DUMPED AT SEA.

PRA 1; FOIA B-1 EO12958 1.5c 3.4 b1+b3

DECLASSIFIED
Authority FBI, State, CIA, NSC, DAT
By ___ NARA, Date ___

\-

5. [redacted] WAS VERY CRITICAL OF THE ROLE OF EMBASSY OFFICERS IN THE DAYS FOLLOWING THE DEATH OF CHARLES HORMAN. HE SAID THAT EMBASSY OFFICERS SHOWED LITTLE INTEREST IN THE CASE AND DID NOT HELP THE FAMILY. [redacted]

PRA 1; FOIA B-1 EO12958 1.5c 3.4 b1+b3

BT
#3859
BT

~~C O N F I D E N T I A L~~ SECTION 02 OF 03 SANTIAGO 03059
EXDIS
E.O. 12356: DECL:OADR
TAGS: PREL, PHUM, CI

[redacted] IN RESPONSE TO A DIRECT QUESTION, [redacted] SAID THAT, TO HIS KNOWLEDGE, NO U.S. OFFICIAL PLAYED ANY ROLE IN THE DEATH OF CHARLES HORMAN SINCE HE WAS DEAD BEFORE ANYONE IN THE EMBASSY WOULD HAVE KNOWN OF HIS DETENTION.

PRA 1; FOIA B-1 EO12958 1.5c 3.4 b1+b3

\-

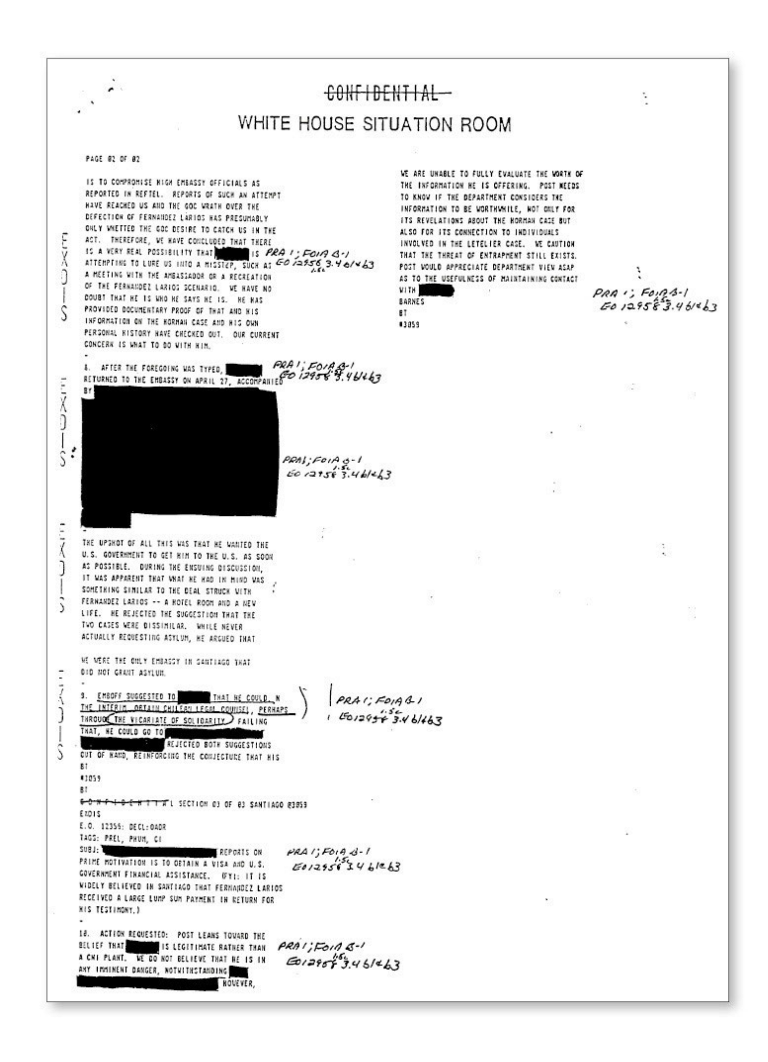
6. IN HIS EARLIER MEETINGS WITH EMBASSY OFFICIALS, [redacted] INSISTED THAT HIS ONLY WISH WAS THAT THE TRUTH BE KNOWN. HOWEVER, HE LATER IMPLIED THAT HE WOULD HAVE TO LEAVE CHILE ONCE THE TRUTH WAS KNOWN THOUGH HE DENIED THAT MONEY WAS INVOLVED IN HIS MOTIVATION. DURING HIS MOST RECENT VISIT, [redacted] HE BECAME VERY EMOTIONAL WHILE REPORTING THIS STORY AND STATED THAT THE EMBASSY WAS HIS ONLY HOPE AND THAT WE HAD TO HELP HIM. HE COMPARED HIS PLIGHT TO THAT OF FERNANDEZ LARIOS.

PRA 1; FOIA B-1 EO12958 1.5c 3.4 b1+b3

\-

7. POST HAS BEEN HANDLING [redacted] WITH GREAT CAUTION BECAUSE HE MAY BE A CNI PLANT WHOSE JOB

PRA 1; FOIA B-1 EO12958 1.5c 3.4 b1+b3



~~CONFIDENTIAL~~

WHITE HOUSE SITUATION ROOM

PAGE 02 OF 02

IS TO COMPROMISE HIGH EMBASSY OFFICIALS AS REPORTED IN REFTEL. REPORTS OF SUCH AN ATTEMPT HAVE REACHED US AND THE GOC WRATH OVER THE DEFECTION OF FERNANDEZ LARIOS HAS PRESUMABLY ONLY WHETTED THE GOC DESIRE TO CATCH US IN THE ACT. THEREFORE, WE HAVE CONCLUDED THAT THERE IS A VERY REAL POSSIBILITY THAT [redacted] IS ATTEMPTING TO LURE US INTO A MISSTEP, SUCH AS A MEETING WITH THE AMBASSADOR OR A RECREATION OF THE FERNANDEZ LARIOS SCENARIO. WE HAVE NO DOUBT THAT HE IS WHO HE SAYS HE IS. HE HAS PROVIDED DOCUMENTARY PROOF OF THAT AND HIS INFORMATION ON THE NORMAN CASE AND HIS OWN PERSONAL HISTORY HAVE CHECKED OUT. OUR CURRENT CONCERN IS WHAT TO DO WITH HIM.

8. AFTER THE FOREGOING WAS TYPED, [redacted] RETURNED TO THE EMBASSY ON APRIL 27, ACCOMPANIED BY [redacted]

THE UPSHOT OF ALL THIS WAS THAT HE WANTED THE U.S. GOVERNMENT TO GET HIM TO THE U.S. AS SOON AS POSSIBLE. DURING THE ENSUING DISCUSSION, IT WAS APPARENT THAT WHAT HE HAD IN MIND WAS SOMETHING SIMILAR TO THE DEAL STRUCK WITH FERNANDEZ LARIOS -- A HOTEL ROOM AND A NEW LIFE. HE REJECTED THE SUGGESTION THAT THE TWO CASES WERE DISSIMILAR. WHILE NEVER ACTUALLY REQUESTING ASYLUM, HE ARGUED THAT

WE WERE THE ONLY EMBASSY IN SANTIAGO THAT DID NOT GRANT ASYLUM.

9. EMBOFF SUGGESTED TO [redacted] THAT HE COULD, IN THE INTERIM, OBTAIN CHILEAN LEGAL COUNSEL, PERHAPS THROUGH THE VICARIATE OF SOLIDARITY. FAILING THAT, HE COULD GO TO [redacted] REJECTED BOTH SUGGESTIONS OUT OF HAND, REINFORCING THE CONJECTURE THAT HIS

BT

#3059

BT

~~CONFIDENTIAL~~ SECTION 03 OF 03 SANTIAGO 03059

EXDIS

E.O. 12356: DECL:OADR

TAGS: PREL, PHUM, CI

SUBJ: [redacted] REPORTS ON PRIME MOTIVATION IS TO OBTAIN A VISA AND U.S. GOVERNMENT FINANCIAL ASSISTANCE. (FYI: IT IS WIDELY BELIEVED IN SANTIAGO THAT FERNANDEZ LARIOS RECEIVED A LARGE LUMP SUM PAYMENT IN RETURN FOR HIS TESTIMONY.)

10. ACTION REQUESTED: POST LEANS TOWARD THE BELIEF THAT [redacted] IS LEGITIMATE RATHER THAN A CNI PLANT. WE DO NOT BELIEVE THAT HE IS IN ANY IMMINENT DANGER, NOTWITHSTANDING [redacted] HOWEVER,

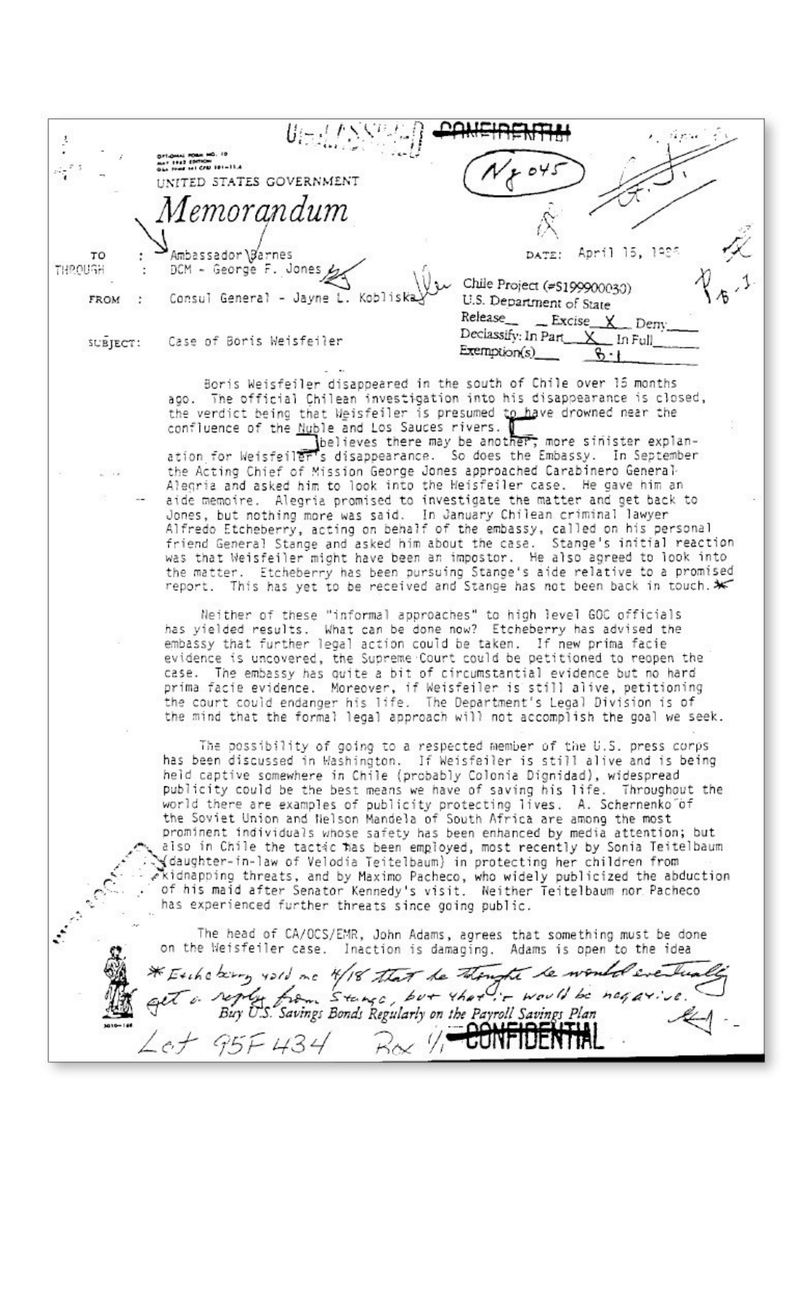
WE ARE UNABLE TO FULLY EVALUATE THE WORTH OF THE INFORMATION HE IS OFFERING. POST NEEDS TO KNOW IF THE DEPARTMENT CONSIDERS THE INFORMATION TO BE WORTHWHILE, NOT ONLY FOR ITS REVELATIONS ABOUT THE NORMAN CASE BUT ALSO FOR ITS CONNECTION TO INDIVIDUALS INVOLVED IN THE LETELIER CASE. WE CAUTION THAT THE THREAT OF ENTRAPMENT STILL EXISTS. POST WOULD APPRECIATE DEPARTMENT VIEW ASAP AS TO THE USEFULNESS OF MAINTAINING CONTACT WITH [redacted]

BARNES

BT

#3059

Documento 6. Embajada de Estados Unidos, Memorando del cónsul general: «Caso de Boris Weisfeiler», 15 de abril de 1986. (2 páginas)



UNCLASSIFIED ~~CONFIDENTIAL~~

OPTIONAL FORM NO. 10
MAY 1962 EDITION
GSA FPMR (41 CFR) 101-11.6

UNITED STATES GOVERNMENT

Memorandum

Nz 045

TO : Ambassador Barnes
THROUGH : DCM - George F. Jones
FROM : Consul General - Jayne L. Kobliska
SUBJECT: Case of Boris Weisfeiler

DATE: April 15, 1986

Chile Project (#S199900030)
U.S. Department of State
Release__ __Excise X Deny___
Declassify: In Part X In Full___
Exemption(s)___ B-1

Boris Weisfeiler disappeared in the south of Chile over 15 months ago. The official Chilean investigation into his disappearance is closed, the verdict being that Weisfeiler is presumed to have drowned near the confluence of the Nuble and Los Sauces rivers. [redacted] believes there may be another, more sinister explanation for Weisfeiler's disappearance. So does the Embassy. In September the Acting Chief of Mission George Jones approached Carabinero General Alegria and asked him to look into the Weisfeiler case. He gave him an aide memoire. Alegria promised to investigate the matter and get back to Jones, but nothing more was said. In January Chilean criminal lawyer Alfredo Etcheberry, acting on behalf of the embassy, called on his personal friend General Stange and asked him about the case. Stange's initial reaction was that Weisfeiler might have been an impostor. He also agreed to look into the matter. Etcheberry has been pursuing Stange's aide relative to a promised report. This has yet to be received and Stange has not been back in touch.*

Neither of these "informal approaches" to high level GOC officials has yielded results. What can be done now? Etcheberry has advised the embassy that further legal action could be taken. If new prima facie evidence is uncovered, the Supreme Court could be petitioned to reopen the case. The embassy has quite a bit of circumstantial evidence but no hard prima facie evidence. Moreover, if Weisfeiler is still alive, petitioning the court could endanger his life. The Department's Legal Division is of the mind that the formal legal approach will not accomplish the goal we seek.

The possibility of going to a respected member of the U.S. press corps has been discussed in Washington. If Weisfeiler is still alive and is being held captive somewhere in Chile (probably Colonia Dignidad), widespread publicity could be the best means we have of saving his life. Throughout the world there are examples of publicity protecting lives. A. Schernenko of the Soviet Union and Nelson Mandela of South Africa are among the most prominent individuals whose safety has been enhanced by media attention; but also in Chile the tactic has been employed, most recently by Sonia Teitelbaum (daughter-in-law of Velodia Teitelbaum) in protecting her children from kidnapping threats, and by Maximo Pacheco, who widely publicized the abduction of his maid after Senator Kennedy's visit. Neither Teitelbaum nor Pacheco has experienced further threats since going public.

The head of CA/OCS/EMR, John Adams, agrees that something must be done on the Weisfeiler case. Inaction is damaging. Adams is open to the idea

*Etcheberry told me 4/18 that he thought he would eventually get a reply from Stange, but that it would be negative.

Buy U.S. Savings Bonds Regularly on the Payroll Savings Plan

5010-108

~~CONFIDENTIAL~~

Lot 95F434 Box 1/1

of a calculated press leak, but he is uncertain whether this would be the best way to protect Boris Weisfeiler's life, if he is still alive. May I suggest that you telephone Adams while you are in the States to discuss our options on the Weisfeiler case and to hopefully reach a conclusion about what course of action should be taken. You can reach Adams at his office phone (202) 647-5225.

I have suggested to Adams that I be authorized to contact my personal friend George Will about the matter. Will has good access to the White House and solid conservative credentials. If he broke the case his credibility would not be challenged, and his report would be sure to reach the highest levels of attention which could bring strong pressure against the Chileans to act.

The real danger in this case is that we will delay action until it is too late to either save Weisfeiler's life or to determine the true circumstances of his death. The consulate has doggedly pursued a definitive resolution to the case, but one by one our options have been limited. On November 12th we forwarded copies of the entire Weisfeiler file to the Department due to a Freedom of Information Act request by an attorney probating his estate. The release date of these documents is not known but when these are sent to the lawyer, we will lose control of the case and in all probability be accused of inaction if we don't do something now. Thus, we have three remaining possible choices. We could petition the Supreme Court. This probably would not save Weisfeiler's life, nor would it lead to a confession of guilt on behalf of the GOC but would save the reputation of the Department of State and its' officers. Second, there is the option of going to the press and selectively leaking what we know. It is this option which I believe has the best chance of securing our goal of protecting his life if Weisfeiler is alive or determining the cause of his death. This is a calculated risk. Finally, the Weisfeiler case could be discussed at even higher levels of the Department in hopes that another option may be developed that could be successful in solving this matter.

jlk/

6

La Operación Cóndor: Terrorismo de Estado internacional

En el ámbito internacional consideran que los generales latinoamericanos son amigos nuestros.
En especial, se nos identifica con Chile y eso no puede hacernos ningún bien.

Informe secreto dirigido al secretario de Estado Henry Kissinger en torno a la Operación Cóndor, agosto de 1976.

En octubre de 1975, el coronel Manuel Contreras, director de la temida policía secreta de Chile, convocó a sus homólogos del resto de países del Cono Sur a la Primera Reunión Interamericana de Inteligencia Nacional, un encuentro con todos los gastos pagados que, según la carta de invitación, tendría «carácter de Estrictamente Secreta» y el objetivo de convertirse en «la base de una excelente coordinación y un mejor accionar en beneficio de la Seguridad Nacional de nuestros respectivos países» (véase el documento 1). Se pretendía crear un organismo semejante a la Interpol de París, pero centrado en la represión de los movimientos revolucionarios.

La convención secreta se celebró en Santiago de Chile entre el 25 y el 28 de noviembre. En el «Acta de clausura» oficial, los participantes aprobaron la definición y estructura de un nuevo órgano de seguridad conjunto. Según el documento, firmado por los delegados de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, los servicios de inteligencia de sus respectivos países iniciarían «a partir desde esta fecha los contactos bilaterales o multilaterales (...) para el intercambio de información subversiva». Acordaron instaurar una «Oficina Coordinadora», así como programar una serie de reuniones en

Chile durante el año siguiente, a fin de desarrollar y extender este nuevo «Sistema de Coordinación» con el objetivo de combatir la subversión. Por último, «en homenaje al país sede», se aprobó por unanimidad la moción presentada por la delegación uruguaya para bautizar la organización con el nombre del gran carroñero de los Andes, el ave nacional chilena. De este modo quedó constituida de forma oficial la Operación Cóndor. (Véase el documento 2).

Los informes ultrasecretos de la CIA la describirían, de forma despreocupada, «como un empeño colectivo por parte de los servicios de espionaje y seguridad de varios países sudamericanos para combatir el terrorismo y la subversión». Sin embargo, a mediados de la década de 1970, la organización se convirtió, de hecho, en la red de terrorismo de Estado más siniestra del Hemisferio Occidental, cuando no del mundo. Entre sus víctimas no solo se encontraban miembros de movimientos guerrilleros del Cono Sur, como el Ejército Revolucionario del Pueblo argentino (ERP), los Tupamaros uruguayos y el MIR chileno, sino que también figuras políticas de la región y dirigentes latinoamericanos exiliados en Europa y Estados Unidos. El total alcanza varias centenas, por cuanto las naciones integrantes colaboraron en operaciones de búsqueda y captura —lo que implicaba seguir la pista de sus oponentes, vigilarlos, secuestrarlos, torturarlos, interrogarlos y deshacerse de ellos— sin las limitaciones propias de las divisiones fronterizas.

Algunos habitantes de la región desaparecieron sin más, en tanto que muchas víctimas fueron secuestradas y asesinadas mientras vivían en el exilio en Argentina. Otros fueron interrogados por equipos multilaterales de la Operación Cóndor tras caer presos en un país determinado, para ser enviados después de forma clandestina a su país de origen, donde acababan con su vida tras someterlos a más vejaciones. De aquellos a quienes seleccionaban como objetivo especial se encargaba la «fase tres» de la operación, tal como lo expone la DIA en un informe secreto:

> La tercera fase de la Operación Cóndor, altamente secreta, en teoría, supone la formación de equipos especiales por parte de los países que la integran para llevar a término acciones entre las que se incluyen asesinatos (...) [S]e enviaría, en tal caso, a un equipo especial con

> órdenes de localizar y vigilar al sujeto elegido (...) y (...) un segundo equipo pondría en práctica la acción contra él. Estos equipos, compuestos por individuos de una o varias de las naciones que componen la operación, recibirían documentación falsa proporcionada por ellas (...) [L]os miembros de los equipos no serían oficiales ni suboficiales de las Fuerzas Armadas, sino que más bien «agentes especiales».[1]

Este iba a ser el modus operandi empleado por el régimen de Pinochet para perpetrar la misión de más infausta memoria de cuantas se emprendieron en el marco de la Operación Cóndor: el coche bomba que asesinó, el 21 de septiembre de 1976, a Orlando Letelier y Ronni Karpen Moffitt en la capital de Estados Unidos.

Operaciones precursoras

La convención de noviembre de 1975 que dio origen a la Operación Cóndor no hizo, en esencia, sino conferir carácter formal a las acciones coordinadas que habían emprendido las naciones del Cono Sur desde poco después de que Pinochet se hiciera con el poder. Aislada de inmediato por la opinión pública internacional en su calidad de régimen paria, la Junta Militar se dirigió a los países vecinos de filiación similar, en particular a Argentina, en busca de respaldo y colaboración frente a los que Pinochet llamaba la «campaña marxista internacional». Mucho antes de que se creara oficialmente la Operación Cóndor, estaban casi perfeccionados sus métodos para compartir información y coordinar sus actos de vigilancia, represión multilateral y asesinato.

El asesinato de Prats

La primera colaboración importante destinada a eliminar a un destacado oponente en potencia no tuvo por víctima a un cabecilla guerrillero de izquierda, sino que al predecesor del propio Pinochet en el cargo de comandante en jefe del Ejército de Chile, el general Carlos Prats. Tras el

golpe de Estado, al que se había opuesto hasta que lo obligaron a abandonar el mando militar para sustituirlo por Pinochet, Prats y su esposa se exiliaron voluntariamente en Buenos Aires, donde vivían de forma discreta entre una comunidad cada vez más nutrida de chilenos en su misma situación.

Dos meses después de tomar el poder, Pinochet envió a Argentina al general Sergio Arellano Stark, famoso por la inflexibilidad con que hacía acatar las órdenes del régimen, para que cumpliera una «misión especial». En Buenos Aires, según las fuentes con que contaba la CIA entre los militares chilenos, tendría el siguiente cometido:

> Discutir con el estamento militar argentino cualquier información de que dispongan respecto de las actividades del general (retirado) Carlos Prats. Arellano tratará, asimismo, de lograr un acuerdo para que los argentinos vigilen de cerca a Prats y mantengan a los chilenos al corriente de sus actividades.[2]

La puesta en común de información sobre Prats y otros exiliados chilenos se hallaba bajo la dirección del «Servicio Exterior» de la Dina en Buenos Aires. Durante la primavera chilena de 1974, Contreras encomendó a Enrique Arancibia Clavel, antiguo miembro de Patria y Libertad transformado en agente de la Dina, la tarea de establecer en secreto la primera base exterior de operaciones de la Dirección de Inteligencia Nacional. Arancibia, que había huido a Argentina en tiempos del gobierno de Allende por su participación en el asesinato del general René Schneider, actuaba desde una oficina situada en el piso 13 del edificio que tenía el Banco Nacional de Chile en el número 845 de la avenida Córdoba, en el centro de Buenos Aires. Se hacía pasar por empleado de la sucursal bancaria con el nombre falso de Luis Felipe Alemparte. Además, la Dina disponía de un segundo agente, el coronel Víctor Hugo Barría-Barría, agregado militar de la embajada chilena.

Arancibia estableció múltiples vínculos con agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado de Argentina (SIDE) y el Departamento de la Policía Federal, que supervisaba los escuadrones de la muerte de agresivos grupos parapoliciales como la Alianza Anticomunista Argentina (AAA o Triple A), y se contactó también con integrantes de los servicios de inteligencia de otros países del Cono Sur, con la intención de vigilar las

actividades de los exiliados chilenos en contra de la Junta Militar. En el caso de Prats, sin embargo, no se halló indicio alguno de oposición abierta al régimen de Pinochet. El antiguo comandante «llevaba una vida tranquila en Buenos Aires», según un informe de la CIA redactado tras su muerte. «No se le permitía comparecencia ni declaración pública alguna y había cumplido fielmente las restrictivas órdenes que se le habían impuesto junto con su exilio».[3]

No obstante, Pinochet consideraba que Prats era una amenaza mucho mayor que cualquier político o guerrilla, pues, en calidad de constitucionalista respetado y declarado de las Fuerzas Armadas chilenas, el general exiliado era la única persona que podía, llegado el caso, influir de veras entre los rangos altos y medios del Ejército de Chile, la base del poder del dictador. Cuando la Dina supo por los servicios argentinos de inteligencia que estaba escribiendo sus memorias de la época de Allende y había solicitado un visado con la intención de emigrar a un lugar más seguro en Europa, el régimen lo convirtió en el primero de los exiliados de relieve que debían ser asesinados.[4]

Estando cerca el primer aniversario del golpe de Estado, Contreras ordenó al director de la brigada de la Dirección de Inteligencia Nacional en Argentina matar a Prats en colaboración con grupos paramilitares de su país de acogida, y, al ver que este plan no progresaba con la rapidez que él hubiese deseado, encomendó a Michael Townley, a quien no hacía mucho que había reclutado, la tarea de completar la primera misión homicida de importancia puesta en marcha por la Brigada Exterior de la Dina. En la declaración que ofreció ante los tribunales, sobre cuyos pormenores sigue pesando el secreto de sumario, Townley aseguró haber recibido órdenes del subdirector de Contreras, el coronel Pedro Espinoza, en agosto de 1974. Según su testimonio, se le informó que Prats era una de las personas que podían formar un «gobierno en el exilio» y, por lo tanto, «suponía un peligro para Chile».[5]

Townley se dirigió en avión a Buenos Aires para llevar a término un breve reconocimiento y regresó de nuevo a la capital argentina el 10 de septiembre de 1974 con un pasaporte falso a nombre de Kenneth Enyart. Pasó tres semanas vigilando los movimientos de Prats en espera de que se

presentase la oportunidad de matarlo. Lo hizo en colaboración —tácita, al menos— con miembros de un grupo paramilitar autóctono y con el Departamento de Asuntos Exteriores de la Policía Federal —organismo que, de hecho, se hallaba al mando del destacamento de seguridad al que se le había asignado la protección del domicilio de Prats—. En cierta ocasión, Townley siguió a Prats hasta un parque y llegó a sacar una pistola, pero no se atrevió a disparar, según declaró, porque había demasiada gente alrededor. En lugar de eso, fabricó, con dos cartuchos de C-4 y tres detonadores, una bomba con control remoto en la habitación del hotel en que se alojaba y creó así el arma que constituiría su firma de terrorista internacional. El 29 de septiembre logró entrar sin ser notado en el garaje del edificio de apartamentos que habitaba el general y colocó el explosivo bajo el chasís del pequeño Fiat 1600 del matrimonio.[6]

El 30 de septiembre, Prats y su esposa, Sofía, regresaron al edificio a las 00:50 tras una velada con algunos amigos y en el momento en que él bajó del vehículo para abrir la puerta de la cochera estalló la potente bomba, que lo lanzó a la acera de cemento, situada a cuatro metros, e incendió el automóvil.[7] El general murió en el acto, en tanto que su esposa, tal como describió la horripilante escena del crimen un cablegrama remitido al Centro Nacional de Mando Militar estadounidense, «quedó atrapada en el vehículo y murió carbonizada».

El régimen de Pinochet negó de forma enérgica tener algo que ver con el crimen, aunque la prensa argentina y las emisiones de Radio Moscú no se equivocaron al señalar a la Dina en cuanto responsable y sugerir que el gobierno de Chile temía que Prats pudiese captarse la lealtad de los militares que no sentían ningún apego por una dictadura cada vez más severa. Las fuentes con que contaba la CIA en Argentina dieron a conocer también su convencimiento de que «el asesinato del general Carlos Prats ha sido obra de los chilenos», según expone un informe de la Agencia, que fundamenta tal afirmación «en el hecho de que la bomba empleada en el atentado fuese mucho mayor que las que se usan por lo común en Argentina, así como en que el crimen no se haya cometido del modo como acostumbran perpetrar este tipo de actos terroristas los grupos argentinos».[8]

La embajada estadounidense, sin embargo, se negó a aceptar la posibilidad de que la policía secreta de Pinochet se hallase tras el ataque. «A nuestro entender, tal cosa no tiene sentido alguno», aseguraba David Popper en un cablegrama enviado a Washington, el primero de muchos en los que el embajador hacía la vista gorda ante la implicación de Chile en acciones de terrorismo internacional. «Tampoco entendemos qué interés puede tener en asesinar a Prats algún otro de los grupos chilenos con capacidad para hacerlo».[9] El régimen de Pinochet acababa de sentar un precedente en lo tocante a los atentados internacionales, cuyas manifestaciones afectarían en el futuro a Washington D.C., y el gobierno de Estados Unidos no parecía estar dispuesto a esforzarse en lo más mínimo por investigar o denunciar —en público o en privado— un asesinato del que la CIA había incluido acertadamente en su informe de situación semanal sobre terrorismo internacional.[10]

La Operación Colombo

El éxito de la colaboración bilateral que hizo posible asesinar a Prats alentó a chilenos y argentinos a ampliar sus perspectivas al ámbito multilateral. Dos semanas después de la muerte del general retirado, en un informe relativo a las Fuerzas Armadas argentinas, Arancibia comunicó al cuartel central de la Dina la intención expresada por algunos de formar un servicio de inteligencia anticomunista para todo el continente, y aseguró que no faltaban miembros de los ejércitos uruguayo y argentino interesados en tratar con Chile esta cuestión.[11] El mismísimo general Pinochet promovió esta idea durante uno de los escasos viajes que efectuó al extranjero durante la primera mitad de 1974, que lo llevó a Brasil, Bolivia y Paraguay. Sus repetidas advertencias de la amenaza que suponía el comunismo internacional dieron pie a frecuentes planteamientos de la creación de «un eje anticomunista de gobiernos militares del sur de Latinoamérica», tal como lo describió el embajador estadounidense en Asunción. Los periodistas no dudaron en preguntar a Pinochet si pensaba constituir un bloque antimarxista y él respondió que todo era posible.

La cooperación de chilenos y argentinos para radicalizar el alcance de la represión creció de forma significativa hacia finales de 1974. En noviembre, la policía secreta argentina ayudó a la Dina en el descarado secuestro de Guillermo Beausire, corredor de bolsa chileno de origen británico, llevado a cabo en pleno aeropuerto bonaerense de Ezeiza mientras hacía escala de camino a Londres.[12] En diciembre, el personal de los servicios de inteligencia proporcionó a Arancibia una relación de antiguos integrantes de la Unidad Popular de Allende que se hallaban matriculados en la Universidad Nacional de Buenos Aires. En abril de 1975, Arancibia informó a Luis Gutiérrez —nombre en clave de la Brigada Exterior de la Dina— del arresto de una serie de universitarios chilenos antipinochetistas, detenidos gracias a la «coordinación federal» y considerados, en aquellos momentos, «RIP» (referencia codificada, aunque muy poco sutil, a los desaparecidos y asesinados). Hacia mediados de 1975, la Dina logró que el Servicio de Inteligencia del Ejército argentino (SIE) se comprometiera a suministrarle los archivos referentes a todos los inmigrantes chilenos que hubiesen entrado en el país desde la fecha del golpe.[13]

Además de cometer no pocos actos de represión bilateral, los oficiales de los servicios de información chilenos y argentinos comenzaron a colaborar en la segunda mitad de 1975 para encubrir estos crímenes. Esta operación, que recibió el nombre en clave de Colombo, se convirtió en uno de los proyectos más maquiavélicos y siniestros de los tramados para ocultar las violaciones de los derechos humanos que se estaban produciendo.

La operación vio la luz en respuesta a las cada vez más frecuentes expresiones internacionales de condena ante las atrocidades perpetradas por las fuerzas de seguridad de Pinochet, de las que los desaparecidos constituían la manifestación más evidente. La práctica de hacer desaparecer a cientos de chilenos sin dejar rastro alguno de sus cuerpos se hizo más marcada durante la segunda mitad de 1974 y hasta 1976, cuando la policía secreta persiguió y detuvo de forma sistemática a los miembros del MIR, el Partido Socialista y el Partido Comunista chileno para después deshacerse de ellos. Cuando los familiares reclamaron el derecho de habeas corpus de los detenidos y el principal grupo chileno de defensa de los derechos humanos, el Comité de Cooperación para la Paz, comenzó a pedir, junto con

una serie de organismos internacionales, como la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas, explicaciones al respecto, el gobierno chileno aseguró sin más que los desaparecidos eran en su totalidad militantes de izquierda que habían huido del país. Quienes los calificaban de víctimas de la represión formaban parte, en opinión de la Junta Militar, de una campaña marxista decidida a confundir al mundo en lo tocante al régimen de Pinochet.

La CDH de la ONU solicitó llevar a cabo una investigación sobre el terreno en Chile a fin de determinar qué había sido de los detenidos... y la Dina respondió con una tosca operación clandestina de desinformación —para la que dispusieron de la ayuda de funcionarios y unidades de la policía secreta de Argentina— con el objetivo de eludir cualquier responsabilidad por sus muertes. El comandante Raúl Iturriaga Neumann, director de la división internacional de la Dina, viajó a Buenos Aires para dar órdenes a Arancibia de poner en marcha la Operación Colombo. La primera misión de Arancibia consistió en organizar el supuesto hallazgo en Argentina del cadáver de David Silberman, chileno desaparecido. En mayo de 1975 se encontró en una acera de Buenos Aires un cuerpo decapitado y sin manos. En uno de sus bolsillos llevaba un documento de identidad chileno medio destruido en el que podía leerse el número de identificación de Silberman.[14] En una nota que llevaba prendida podía leerse: «Dado de baja por el MIR».

Propiciar la reaparición de desaparecidos, por el método de colocar en suelo argentino cadáveres imposibles de reconocer pertenecientes a supuestos chilenos, fue una de las actividades propias de la Operación Colombo.[15] A esta seguía la inserción de noticias en la prensa que aseguraran que las víctimas habían muerto asesinadas, mientras actuaban fuera de Chile, a manos de sus correligionarios de izquierda o en el transcurso de enfrentamientos armados. Sin embargo, en el caso de Silberman, el factor propagandístico no llegó a materializarse: los cablegramas enviados por Arancibia a sus superiores reflejan sus protestas ante la falta de iniciativa de los contactos de que disponía en los medios de comunicación argentinos. De cualquier modo, solicitó nuevos documentos de identidad para proseguir la operación.

El 12 de julio, la policía de Pilar, ciudad de la provincia de Buenos Aires, descubrió otros dos cadáveres, mutilados y quemados, con las manos y los rostros tan desfigurados que resultaba imposible reconocerlos. Los documentos que llevaban consigo los identificaban como dos chilenos desaparecidos: Luis Alberto Guendelman Wisniak y Jaime Robotham Bravo.[16] En la capital se encontró un tercer cuerpo, atribuido a Juan Carlos Perelman. Todos llevaban notas que rezaban: «Dado de baja por el MIR», con lo que, tal como expuso The New York Times, se daba a entender que «habían pertenecido al Movimiento de Izquierda Revolucionaria» y «habían muerto a consecuencia de un conflicto interno».[17]

En esta ocasión, la Dina abandonó todo empeño por obtener la atención de los principales medios de comunicación y se limitó a inventar la propaganda inicial con la ayuda de sus colaboradores argentinos. Tres días después de la aparición de los cadáveres, Lea, una desconocida revista bonaerense, publicó una relación de sesenta chilenos que, según el autor anónimo, «han sido eliminados en los últimos tres meses por sus propios compañeros de lucha», quienes habían emprendido un implacable programa de venganza y purga política. El artículo daba a entender que todos habían perdido la vida en altercados intestinos propiciados por diferencias políticas o disputas por dinero, así como que tales asesinatos se habían cometido en Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, México y Francia.

Una semana más tarde, la prensa de Chile informó de una segunda lista de conciudadanos publicada en un oscuro diario de Curitiba (Brasil) llamado Novo O Dia. El artículo en cuestión, que carecía de firma y fecha, daba a conocer la muerte de noventa y cinco «agitadores marxistas chilenos» durante un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad argentinas en la provincia septentrional de Salta.

Los diarios de más renombre de Chile se hicieron eco, sumisos, de lo que se conocería como «las listas de los 119». La Segunda volvió a publicar la relación del Novo O Dia con el título: «Exterminan como ratas a miristas», en tanto que El Mercurio sacó un editorial que bien podría haber sido redactado por miembros de la Dina:

> Los políticos y periodistas extranjeros que tantas veces se preguntaron por la suerte de estos miembros del MIR y culparon al gobierno de la desaparición de muchos de ellos, tienen ahora la explicación que rehusaron aceptar. Víctimas de sus propios métodos, exterminados por sus propios camaradas.[18]

El escrito presentaba a quienes conformaban las listas como víctimas de la violencia y el terror que ellos mismos habían provocado.

Con todo, los depravados esfuerzos de la Dirección de Inteligencia Nacional por ocultar el rastro de sus atrocidades no tardaron en quedar al descubierto. En cuestión de días, el Comité de Cooperación para la Paz en Chile, organismo patrocinado por la Iglesia católica, publicó un extenso informe en el que ofrecía de modo detallado una serie de pruebas incontestables que daban fe de que setenta y siete de los integrantes de las listas habían sido detenidos en Chile por el personal de los servicios de seguridad antes de desaparecer, así como indicios del arresto oficial de otras veintisiete personas. De hecho, en las listas de Lea y el Novo O Dia había cuatro personas cuya detención habían reconocido oficialmente por escrito las autoridades pinochetistas. A los periodistas de The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal, Newsweek y Time no les costó descubrir que Lea ni siquiera existía antes —ni tampoco después— de que surgiese, de forma harto misteriosa, la edición del 15 de julio en los puestos de periódicos bonaerenses: los ejemplares se habían editado en una imprenta industrial dirigida por José López Rega, ministro del gobierno derechista argentino. De un modo similar, el Novo O Dia era una publicación irregular no oficial, mimeografiada por un particular. Asimismo, los periodistas pudieron comprobar que la lista aparecida en este último se había distribuido a los diarios chilenos, por mediación de un asesor de propaganda de la Junta Militar —que el reportero estadounidense John Dinges identificó con el columnista de derecha Álvaro Puga—, varios días antes de que se publicara en Brasil.[19] Por último, no existía el menor rastro de que hubiese tenido lugar un enfrentamiento armado en la población argentina de Salta, tal como afirmaba el diario brasileño, ni se tenía noticia de víctima alguna ni pudieron hallarse cadáveres o tumbas.

Tampoco los cuerpos mutilados «descubiertos» en Argentina pertenecían en realidad a los tres chilenos desaparecidos. Cuando las familias de Perelman, Robotham —integrantes ambos de la lista del Novo O Dia— y Guendelman llegaron a Buenos Aires para recuperar los restos carbonizados de sus seres queridos, encontraron que los documentos de identidad de las víctimas no pasaban de ser burdas falsificaciones, y que los rasgos físicos de los cadáveres no coincidían en absoluto con los de las personas con que se habían identificado.[20]

La prensa estadounidense no dejaba escapar ningún detalle de lo que estaba sucediendo en Chile, y llegó un momento en que la embajada no pudo seguir haciendo caso omiso de lo que llamó «atropellada historia de muertes y desapariciones». En un principio, el embajador Popper no parecía tener muy claro si debía creer la versión oficial, que aseguraba que habían sido «los propios movimientos extremistas» los que habían inventado las pruebas de los arrestos y desapariciones, o admitir lo que resultaba obvio. «Parece que no faltan motivos para sospechar que el GC, o al menos sus órganos de seguridad, está tratando de echar tierra a los casos de ciudadanos muertos mientras se encontraban detenidos», comunicó la embajada a Washington el 26 de julio. «La embajada dispone de pruebas independientes que demuestran que las fuerzas de seguridad del GC han llevado a cabo arrestos y retenciones sin justificación alguna, y que algunos de los detenidos han muerto en prisión. Podemos dar por hecho, además, que algunos de los “desaparecidos” se encuentran, en realidad, bajo tierra. Sea como fuere, lo cierto es que la prensa extranjera no va a tardar en hacerse eco de estos hechos, y va a ser muy difícil evitar que el GC quede en muy mal lugar».[21]

A principios de agosto, sin embargo, tras examinar múltiples teorías sobre quién se hallaba detrás de la elaboración de las listas, la embajada llegó a la conclusión de que el régimen de Pinochet «bien podría haberse visto impelido a hacer que se publicasen». Popper resumió la situación en un cablegrama enviado el 8 de agosto con el título de «Análisis de muertes y desapariciones de extremistas chilenos»:

> La explicación más plausible que hemos sido capaces de reconstruir para algo que, probablemente, nunca dejará de ser un misterio es que

> fueron las fuerzas de seguridad chilenas las que, directamente o a través de terceros, hicieron aparecer una serie de informes en oscuras publicaciones con la intención de justificar de algún modo la desaparición de un buen número de izquierdistas violentos. Cabe la posibilidad de que las fuerzas de seguridad del GC hayan matado a algunos de estos, si no a todos.[22]

Más adelante, el documento recoge el primer reconocimiento por parte de la embajada de la cooperación clandestina que se estaba dando en el Cono Sur, al señalar: «Por otra parte, también resulta verosímil la idea de que las fuerzas de seguridad de Argentina o algunos grupos de extrema derecha de este país, como la AAA o los hombres de López Rega, hayan colaborado, cuando menos de forma tácita, con el GC en este asunto».

Chile como base del terrorismo internacional

Estando aún Allende en el poder, los servicios de inteligencia estadounidenses buscaron indicios que pudiesen delatar a Chile como posible sede del terrorismo internacional. No obstante, fue el régimen de Pinochet el que transformó al país en base y protector activo de violentos grupos terroristas de todo el mundo. Bajo los auspicios de la Dina, Chile forjó, a mediados de la década de 1970, alianzas secretas con algunas de las organizaciones terroristas más famosas de Estados Unidos y Europa, a las que no solo ofreció refugio, adiestramiento y financiación, sino que también les solicitó misiones diversas que iban desde el reconocimiento fotográfico hasta el atraco a un banco o el asesinato de un exiliado político, operaciones que definieron en lo sucesivo el terrorismo internacional de patrocinio estatal.

La Dina se alió de forma especialmente enérgica con los grupos de exiliados cubanos anticastristas en Estados Unidos. En diciembre de 1974, tres de los dirigentes de estos, Orlando Bosch, Guillermo Novo y Dionisio Suárez, viajaron a Santiago para ofrecer sus servicios al régimen de Pinochet y, al mismo tiempo, solicitar su respaldo. Bosch —que no ha dejado de ser el más renombrado de los terroristas en el exilio y que, ya entonces, gozaba de una amplia experiencia en el empleo de bazucas contra

embarcaciones cubanas y el envío de paquetes bomba a las embajadas de su país de origen— colaboraría con los chilenos en un intento de asesinato en Costa Rica antes de dirigir la colocación de dos bombas en un avión de pasajeros de la Cubana de Aviación que cayó al mar cerca de Barbados en octubre de 1976, lo que provocó la muerte de los setenta y tres ocupantes, incluida la tripulación.[23] Novo encabezaba la sección de Nueva Jersey del Movimiento Nacionalista Cubano, que los informes del FBI que se han dado a conocer al público describen como «un grupo terrorista anticastrista».

La Dirección de Inteligencia Nacional aceptó el ofrecimiento de los cubanos. A principios de febrero de 1975, Contreras envió a Michael Townley a Miami con la misión de recabar la ayuda del MNC para otra importante misión de terrorismo internacional. El agente llevaba consigo los nombres de los más destacados dirigentes chilenos en el exilio que iban a asistir, en México, al encuentro de la Comisión Internacional de Investigación de los Crímenes de la Junta Militar en Chile, así como órdenes de «eliminar a todos los de la lista».[24] Townley, su esposa y un miembro del MNC llamado Virgilio Paz recorrieron, fingiendo haber salido de acampada, los seis mil kilómetros que separan Nueva Jersey de México D.F. en una autocaravana cargada de explosivo plástico.[25] Sin embargo, llegaron a su destino mucho después de clausurada la conferencia. Acto seguido, Townley y Paz tomaron un avión a Madrid con la intención de seguir la pista a miembros de relieve de la comunidad chilena exiliada en Europa.

El primer nombre que figuraba en su lista era el de Carlos Altamirano, secretario general del Partido Socialista de Chile, a quien los agentes del régimen de Pinochet llevaban meses tratando de asesinar. «Al general Contreras lo obsesionaba hasta extremos ilógicos la idea de matar a Altamirano», según refirió cierto confidente al FBI. «Para lograrlo, había dado órdenes a todos los agentes de la Dina que operaban en el exterior de asesinarlo en el acto si lo veían». El 3 de agosto de 1974, el capitán Raúl López, jefe de la misión naval de Chile en Londres, convocó a todos los agregados militares chilenos en Europa y les ordenó que informasen de los movimientos de Altamirano, así como de cualquier actividad contra la Junta Militar que se emprendiese en el país en el que se hallaba destinado cada

uno de ellos. «El gobierno chileno está tratando de localizar y asesinar a dirigentes de izquierda como Carlos Altamirano», señala un informe de la CIA. «Parece que la Junta Militar quiere a Altamirano muerto o secuestrado».[26]

Townley tenía órdenes de acabar con el dirigente socialista y ponerse en contacto con el mayor número posible de grupos anticomunistas con base en Europa y presentar a la Dina como el principal bienhechor de la guerra internacional contra el marxismo. «Townley comenzó entonces un recorrido por todo el entorno fascista europeo», tal como lo describen Dinges y Landau en Assassination on Embassy Row. Entre los grupos e individuos con que entabló relación se hallaban la recién constituida Internacional Fascista, la Hermandad Corsa, el famoso terrorista francés Albert Spaggiari —que en cierta ocasión había tratado de asesinar a Charles de Gaulle— y la Avanguardia Nazionale, organización neofascista italiana encabezada por Stefano Delle Chiaie, Il Bombardiere Nero.

En julio, durante su estancia en Frankfurt, Townley conoció a Delle Chiaie —al que se refería con el nombre en clave de Alfa en las comunicaciones mantenidas con la Dina— y lo reclutó para que participase en la violenta campaña clandestina emprendida por Chile en contra de la izquierda. El régimen de Pinochet se ofreció a proporcionarle un refugio seguro, una base de operaciones y el adiestramiento necesario a cambio de que la Avanguardia Nazionale espiase las actividades de los exiliados chilenos en Italia y otras partes de Europa. Respaldado por sus superiores, Townley logró también que Alfa se embarcara en la mortífera misión de asesinar a Bernardo Leighton, democristiano chileno tan popular como activo que vivía exiliado en Roma.

La noche del 6 de octubre, un asesino a sueldo solitario disparó, a bocajarro y por la espalda, una Beretta de nueve milímetros contra Leighton y su esposa, Anita, cuando volvían de cenar por una callejuela de barrio. Una de las balas alcanzó a Leighton en la parte posterior de la cabeza, en tanto que otra atravesó la columna vertebral de su cónyuge. Ambos sobrevivieron al ataque, aunque él sufrió graves lesiones cerebrales permanentes y ella quedó paralítica.

La Dina consideró que la operación se había desarrollado con éxito: habían hecho callar a Leighton al tiempo que enviaban una terrible advertencia a la comunidad chilena exiliada en Europa. Después del intento de asesinato, Townley se dirigió a Nueva Jersey y a Miami para reunirse con Novo y Paz, con quienes acordó que el MNC podía atribuirse el mérito de la operación. El movimiento, en consecuencia, hizo público un comunicado con las iniciales B. L. superpuestas a un gran cero, cifra que empleaba a modo de nombre de guerra.[27] Algunas semanas más tarde, en otro escrito similar enviado a la Associated Press, el Comando Cero describía el atentado usando detalles, desconocidos para el público, que Townley se había encargado de proporcionarle. Este subterfugio no solo hizo que la atención se desviase de la Dina, según explicó Townley al FBI en 1978; además, contribuyó al objetivo de promover alianzas firmes que se había fijado la Dirección de Inteligencia Nacional. El agente dijo haber confiado a Paz los pormenores de la operación «con el fin de dejar que el MNC (...) ostentase el mérito del intento de asesinato [para que] prosperase como organización terrorista internacional viable».[28]

La operación emprendida contra Leighton fortaleció los lazos de la Dina con esta organización de exiliados cubanos y también con la Avanguardia Nazionale. La policía secreta chilena ofreció a los miembros del MNC refugio en Santiago, así como adiestramiento especial en misiones clandestinas de inteligencia. Contreras accedió a garantizar protección y respaldo a la Avanguardia Nazionale a cambio de que Delle Chiaie dirigiese una serie de operaciones de espionaje contra Perú y Argentina. En noviembre de 1975, cuando Contreras y Pinochet viajaron a Madrid con la intención de asistir al funeral del dictador español Francisco Franco, el cabecilla de la Dina se reunió personalmente con el dirigente neofascista italiano y recibió de este un informe completo sobre la capacidad de su organización para poner en práctica operaciones de espionaje, sabotaje y terrorismo tanto en Europa como en Latinoamérica.

A fin de sellar esta colaboración, Contreras organizó una reunión privada entre Delle Chiaie y el general Pinochet. En las cartas que escribió desde la cárcel, Townley dejaba constancia de este encuentro mantenido por el presidente chileno y el Mamo Contreras con Alfa en España, lo que da fe de la implicación personal del primero de estos en los hechos.[29] «El problema

con los italianos es serio, muy serio: Mamo se casó con ellos hace algún tiempo y se casó de manera mucho más indisoluble que con los cubanos», escribió Townley a un colaborador de la Dina en referencia a las operaciones clandestinas, todavía desconocidas, ejecutadas por la Avanguardia Nazionale en nombre de la Dirección de Inteligencia Nacional. «Quizá con el tiempo, Alfa pueda ser mucho más embarazoso para Mamo y el gobierno que los cubanos», agregó Townley.

Creación del consorcio de la Operación Cóndor

A principios de 1975 comenzó a circular en Europa cierto panfleto izquierdista que anunciaba la formación de una Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR) por parte de los grupos militantes del Cono Sur. El MIR chileno y el ERP argentino tenían la intención de aunar esfuerzos con el ELN de Bolivia y los Tupamaros uruguayos para derrocar los regímenes militares instaurados en Sudamérica.

La noticia apenas atrajo atención alguna en el ámbito internacional y, al cabo, resultó ser más el ruido que las nueces. Durante el primer año de existencia de la organización, los servicios de inteligencia de Estados Unidos no supieron de ninguna actividad paramilitar, insurgente o terrorista de relevancia auspiciada por ella. «Los representantes de la JCR en Europa occidental prestan ayuda a los seguidores que residen allí y publican propaganda contra los gobiernos del Cono Sur», informó la INR del Departamento de Estado en junio de 1976. «Según los datos de que disponemos, no han patrocinado allí ninguna operación de importancia».[30] Sea como fuere, lo cierto es que la creación de la JCR supuso un motivo de preocupación para la Dina y la SIDE. De hecho, fue la posterior captura de un mensajero de la organización, un sociólogo chileno perteneciente al MIR llamado Jorge Isaac Fuentes Alarcón, lo que sirvió de acicate inmediato para la institución formal de la Operación Cóndor.

Fuentes fue detenido, junto con Amílcar Santucho, hermano del máximo dirigente del ERP argentino, el 16 de mayo de 1975, mientras trataba de llegar a Paraguay desde Argentina con un pasaporte costarricense falso. La suerte que corrió demuestra hasta qué punto había evolucionado a esas

alturas la colaboración entre las distintas fuerzas de seguridad del Cono Sur. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación ha puesto de relieve la implicación de organismos de diversos países en estos actos de represión:

> Ambos fueron detenidos por la policía paraguaya y trasladados a Asunción. (...) De los antecedentes se desprende que en la captura del dirigente del MIR participaron tanto los servicios de inteligencia argentinos, que dieron los datos del pasaporte falso de Jorge Fuentes; personeros de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, que mantenían informada a la Policía de Investigaciones de Chile del resultado de los interrogatorios, y la policía paraguaya, que permitió el traslado clandestino del detenido [a la Dina].[31]

«Paraguay arrestó a un mirista llamado Fuentes y lo entregó a Contreras», confirmaría más tarde Robert Scherrer, agregado del FBI en Buenos Aires, al periodista John Dinges. «Lo torturaron y lo mataron».[32]

Fue precisamente Scherrer quien mantuvo al tanto a la policía militar chilena de la información relativa a la JCR proporcionada por Fuentes. Tres semanas después de su arresto, el agente especial del FBI transmitió al máximo representante de la Dirección General de Investigaciones de Pinochet los resultados iniciales del brutal interrogatorio al que lo sometió la policía secreta de Paraguay. En una carta oficial con el membrete de la embajada remitida al general chileno Ernesto Baeza fechada el 6 de junio, Scherrer comunicó que el FBI había sabido «que el sujeto citado es ciudadano chileno y miembro [del] MIR».[33] Y continuaba:

> Según información suministrada por el sujeto durante various [sic] interrogatorios por parte de la policía de la capital en Asunción, él admitió que es miembro de la Junta Coordinadora [Revolucionaria] y [que] estuvo actuando como correo para dicha agrupación.

La libreta de direcciones que Fuentes llevaba consigo —y que sus interrogadores paraguayos mostraron a Scherrer— recogía los nombres y las direcciones de tres personas que vivían, respectivamente, en Tejas, Nueva York y Puerto Rico. El mismo día que escribió al general Baeza, Scherrer cablegrafió a la oficina central del FBI en Washington para

informar de la situación. El comunicado, muy censurado para su desclasificación, concluía en estos términos: «Se solicita a la oficina que ordene a los agentes de Dallas, Nueva York y San Juan que lleven a cabo la investigación pertinente». En la carta enviada a Chile, facilitaba los mismos nombres y domicilios hallados en el cuaderno de Fuentes y hacía constar un ofrecimiento que da fe de la activa colaboración de Estados Unidos en la violenta campaña emprendida por el régimen de Pinochet contra sus oponentes: «El FBI inició una investigación en Estados Unidos concerniente a las personas y direcciones mencionadas arriba. Le informaré [de] los resultados de la misma tan pronto los tenga en mi poder».

Los datos de la JCR obtenidos mediante tortura por la policía paraguaya impulsaron, al parecer, la decisión de Contreras de formar una red internacional de seguridad anticomunista. En la segunda mitad de 1975, el coronel emprendió un recorrido por distintos países con la intención de establecer las bases sobre las que se construiría la Operación Cóndor. Su primer destino fue Washington, donde se reunió con el subdirector de la CIA, Vernon Walters, por segunda vez en menos de dos meses. El 27 de agosto, Contreras llegó a Caracas, donde tenía previsto encontrarse con funcionarios de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip). Según testificaría más tarde su subdirector, Rafael Rivas Vásquez, ante un jurado en Washington D.C., el coronel chileno había asegurado estar realizando una serie de viajes con la intención de mostrar su buena voluntad y recabar el respaldo de diversos servicios de espionaje latinoamericanos. El objetivo de este grandioso proyecto, según él, era crear un organismo tan amplio como poderoso capaz de proporcionar información de todo el mundo.[34] En el transcurso de reuniones semejantes por todo el Cono Sur, Contreras invitó a sus interlocutores a acudir a Santiago en noviembre.

El 25 de noviembre de 1975, el director de la Dina convocó el primer congreso de la Operación Cóndor, en el que se discutiría la expansión, formalización y modernización del respaldo mutuo entre las distintas policías secretas. Los representantes de Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia informaron, en sesiones de mañana y tarde, acerca de la «situación de subversión» que se daba en sus respectivos países, así como de las estructuras y mecanismos de que se servía cada uno de sus cuerpos

de seguridad con el fin de combatir a la izquierda. Los delegados, según lo programado, pasaron entonces a tratar la creación de un sistema de seguridad regional que se construiría en torno a lo que el coronel Contreras identificó como tres elementos básicos: 1) Una base de datos centralizada de información sobre los oponentes de sus regímenes militares; 2) un sistema de comunicaciones moderno y ágil, dotado de códigos especiales y máquinas criptográficas que permitiesen el intercambio rápido y seguro de datos, y 3) reuniones de trabajo multilaterales y sistemáticas con el objetivo de aumentar la capacidad y coordinación de los métodos aplicados contra la subversión.[35]

Al final de la reunión, según el acta de clausura, los participantes acordaron crear de forma progresiva un sistema avanzado de coordinación con la ayuda de una serie de acciones futuras:

• Adscripción de personal de los servicios nacionales de inteligencia o agentes similares de las embajadas de los países integrantes para labores de enlace directo.

• Creación de un sistema cifrado de comunicación, conocido como Condortel, que implicaba el uso de máquinas criptográficas, con vistas a la instauración de un sistema de comunicaciones de alta velocidad para el intercambio de información.

• Establecimiento de contactos rápidos y directos en caso de producirse la expulsión de individuos sospechosos del país o la salida de estos por cualquier otra causa, a fin de alertar a los servicios de inteligencia pertinentes.

• Publicación de propaganda dirigida a atacar los movimientos de subversión.

• Suministro de información a un equipo técnico con el objetivo de crear una base de datos central y modernizada de elementos subversivos.

• Organización de un «Proyecto de Factibilidad» en lo tocante al desarrollo de la coordinación de los servicios de inteligencia.

Los delegados acordaron que los directores de la policía secreta de sus respectivos regímenes militares debían ratificar las conclusiones de la reunión, de modo que la Operación Cóndor se hiciese efectiva el 30 de enero de 1976. Más adelante ese mismo año se programaría otra reunión de dicha coordinación en Chile.

«Teseo»: El Club Cóndor del Asesinato

El 31 de mayo de 1976, el régimen de Pinochet convocó a la segunda convención de la Operación Cóndor en Santiago. Representantes de los cinco países que la integraron originalmente, a los cuales se sumó Brasil, pasaron revista a lo que habían logrado y discutieron la forma de ampliar en términos operativos su colaboración. Este encuentro de carácter crucial generó varias decisiones: para sus comunicaciones clandestinas, los países de Cóndor recibirían designaciones numéricas, dadas por el orden alfabético entre ellos; Argentina sería Cóndor 1; Bolivia sería Cóndor 2; Chile sería Cóndor 3, etc. Brasil se uniría oficialmente a la Operación Cóndor, convirtiéndose en su sexto miembro. La Dina mantendría un banco de datos computadorizado sobre opositores conocidos, y otros sospechosos de serlo, de los regímenes militares del Cono Sur. Y Chile, Argentina y Uruguay crearían un escuadrón de la muerte especial, de alcances multinacionales, cuyo objetivo serían militantes que vivieran en Europa Occidental, particularmente en Francia.

La unidad de asesinatos internacionales de la Operación Cóndor tendría el nombre en clave de «Teseo» —bautizado así en honor a Teseo, el mítico rey de Atenas que mató heroicamente al Minotauro, entre otros adversarios, en la mitología griega—. La misión de «Teseo», en conformidad con los informes de inteligencia de la CIA, era «realizar atentados físicos contra agentes subversivos» en el exterior, particularmente miembros de la JCR y otros militantes izquierdistas latinoamericanos en Europa (véase el documento 3). La CIA sabía exactamente cómo serían llevadas a cabo las operaciones de «Teseo» porque la propia Agencia se las arregló para conseguir, en septiembre de 1976, el «texto de acuerdo de los países de [la Operación] Cóndor que regulaba sus operaciones contra objetivos subversivos» —un documento de exhaustiva planificación del

financiamiento, la dotación de personal, la logística, el entrenamiento y la selección de objetivos, que revela tanto los detalles banales como más dramáticos de la organización e implementación de las operaciones del escuadrón de la muerte «Teseo» dentro de la Operación Cóndor (véase el documento 4)—.

Según el acuerdo, la base de operaciones de «Teseo» estaría «en Cóndor 1 (Argentina).» Cada país miembro debería donar 10.000 dólares para gastos operacionales; se pagaría una cuota de 200 dólares «antes del 30 de cada mes» para gastos de mantención del centro de operaciones. Los costos de los agentes en misiones de asesinato se estimaron en 3.500 dólares por persona durante diez días, «con una cifra adicional y única de 1.000 dólares a serles asignada la primera vez para subsidiar la adquisición de vestuario».

Los individuos a eliminar, decía el acuerdo Cóndor, serían propuestos por los servicios miembros del acuerdo, con una «selección final (...) por votación y simple mayoría». Como explicaba una sección escalofriante con el título de «Ejecución del objetivo»: «Esta es responsabilidad del equipo operativo, que deberá a) interceptar al objetivo, b) realizar la operación y c) escapar».

Para prepararse para las misiones de «Teseo», a finales de septiembre de 1976 el sistema Cóndor inauguró un curso especial de adiestramiento de dos meses de duración en el centro bonaerense de operaciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado para agentes de Chile, Uruguay y Argentina. La formación incluía técnicas de búsqueda y aniquilación urbanas concebidas para el seguimiento y posterior eliminación de personas en Europa occidental. Una vez concluido el curso en diciembre, se enviaría a París al menos a dos agentes uruguayos para realizar tareas cuya naturaleza no especifica el informe calificado como secreto que aborda la cuestión. El agregado estadounidense de Defensa en Buenos Aires señaló en una comunicación que los argentinos habían organizado también sus propios «equipos especiales» de agentes, «estructurados de una forma muy similar a los grupos de fuerzas especiales de Estados Unidos, con un médico, un experto en demoliciones, etc.», con el fin de estar «preparados para la acción que requiere la tercera etapa» de la Operación Cóndor.

Sin embargo, hubo dos factores que impidieron que esta extendiese sus operaciones asesinas al continente europeo. En primer lugar, el miembro más reciente de la organización, Brasil, se opuso a ello, lo que retrasó la puesta en práctica de estos planes. Los servicios de inteligencia militar brasileños eran más partidarios de circunscribir su participación a operaciones en el Cono Sur, y en particular a las relacionadas con la obtención e intercambio de datos relativos a movimientos de subversión. Posteriormente, Brasil proporcionó parte del equipo necesario para la red de comunicaciones Condortel y colaboró con otros países del sistema en el seguimiento y secuestro de extranjeros exiliados en territorio brasileño.

El segundo factor fue la interferencia de la CIA. Dados sus vínculos cercanos con las juntas militares gobernantes en Chile, Argentina y otros regímenes del Cono Sur, a los funcionarios de la Agencia les inquietaba seriamente que la responsabilidad de los complots de asesinato de Cóndor en naciones europeas le fuera atribuida a la propia Agencia. Había «posibles ramificaciones políticas y adversas para la Agencia si “Cóndor” se involucraba en asesinatos y otras violaciones flagrantes de los derechos humanos», advirtió en un informe el jefe de la división América Latina de la CIA, Ray Warren, a sus superiores poco después de que la Agencia supiera, a mediados de 1976, de las operaciones iniciales de «Teseo». «Ello plantea la pregunta de qué acciones podría efectivamente emprender la Agencia para prevenir actividades ilegales de esta índole», escribió Warren en otra advertencia. «A la vez, debe tomarse toda clase de precauciones para garantizar que la Agencia no sea erróneamente acusada de formar parte de esta clase de actividades».

Cuando agentes de la CIA interceptaron inteligencia relativa a una misión chileno-argentina encubierta para asesinar a Carlos, «El Chacal», y dos periodistas chilenos que trabajaban en Europa, la Agencia dio algunos pasos efectivos para desbaratar la trama de Cóndor. «La CIA advirtió a los gobiernos de los países en los que podían producirse los asesinatos», declaró más tarde un informante de la Agencia a cierto subcomité especial del Senado sobre operaciones internacionales. A su vez, los gobiernos en cuestión (Francia y Portugal) «pusieron sobre aviso a las posibles víctimas y entablaron contacto con representantes de los países vinculados a la Operación Cóndor para disuadirlos de tal empresa».[36] De hecho, en

septiembre, los agentes franceses de seguridad hicieron saber a la embajada chilena en París que Francia conocía «la existencia de la Operación Cóndor, así como de algunos de sus objetivos», tal como indicó más tarde la CIA. En consecuencia, se canceló la misión homicida, en la que participaban dos agentes chilenos y dos argentinos, amén del principal asesino a sueldo de que disponía la Dina, Michael Townley, y su esposa, Mariana Callejas.[37] Según una exposición ultrasecreta de la INR fechada a finales de noviembre, el personal del servicio de seguridad argentino o chileno «informó a sus homólogos franceses que la Operación Cóndor actuaría en Europa, pero no en Francia».[38]

Este contratiempo coincidió con el período que siguió al atentado contra Orlando Letelier y Ronni Moffitt en Washington. Sin embargo, ni uno ni otro pareció hacer desistir al sistema de colaboración de su afán por poner en práctica las espectaculares operaciones relacionadas con la «tercera fase». En diciembre de 1976, el coronel Espinoza, subdirector de la Dina, dio órdenes a Townley de ir a Madrid, infiltrarse en un importante congreso internacional del Partido Socialista y tratar —una vez más— de asesinar a Carlos Altamirano. «¡Mátalo! ¡Mátalo!», exclamó cuando Townley lo llamó para informar de las fuertes medidas de seguridad adoptadas en torno al congreso.[39] La policía secreta chilena continuó urdiendo, con Uruguay y Argentina, planes homicidas en todo el mundo, incluido Estados Unidos.

Pese a que disponían de pruebas sustanciales de conspiraciones respaldadas por los diversos gobiernos con el objetivo de llevar a cabo ataques terroristas, no hay documento alguno que demuestre que los gabinetes de Ford o Carter los instasen a poner fin a la Operación Cóndor. De hecho, las naciones que formaban parte de esta siguieron reuniéndose, e incluso se aumentó el número de participantes para desarrollar su guerra sucia de represión coordinada. Entre el 13 y el 16 de diciembre, los países integrantes volvieron a celebrar un encuentro, esta vez en Buenos Aires, con la intención de estudiar planes futuros. El punto más importante del orden del día, tal como informó a la CIA con posterioridad un miembro del servicio secreto paraguayo, era «la discusión y planificación de operaciones de guerra psicológica coordinada contra los grupos izquierdistas y radicales de varios de los países miembros».[40] En 1977 se programó otra reunión

más, que habría de celebrarse en Paraguay, para discutir técnicas de guerra psicológica contra terroristas y extremistas de izquierda.

A principios de 1978 se unieron dos nuevos países a la Operación Cóndor. En enero, Ecuador se convirtió en Cóndor Siete. La CNI chilena invitó a cuatro oficiales ecuatorianos a asistir, sin coste alguno, a una escuela de adiestramiento para agentes secretos en Santiago. En marzo, fue Perú el que se sumó al grupo. Cierto memorando interno de la CNI, que llevaba el sello de secreto, da fe de que el servicio chileno de espionaje solicitó permiso para infiltrar a un agente de la Operación Cóndor en la embajada de Chile en Lima en calidad de «agregado civil». Según este documento, el director peruano de inteligencia telefoneó al de la CNI para informarlo de que no había impedimento alguno para este nombramiento.[41]

Por entonces, tal como sugieren los documentos internos chilenos, Argentina se había convertido en la secretaría de la operación y en la base de la red interestatal de comunicaciones conocida como «sistema Cóndor». En octubre de 1978, sin embargo, un funcionario paraguayo informó al embajador estadounidense Robert White de que el nudo central de este sistema se encontraba en la base militar que poseía Estados Unidos en la zona del canal de Panamá. Refiriéndose a los países integrantes de la Operación Cóndor, White escribió en un cablegrama de difusión restringida lo siguiente:

> Están en permanente contacto gracias a la instalación estadounidense de comunicaciones de la zona del canal de Panamá [que] se emplea asimismo para coordinar los datos proporcionados por los servicios de inteligencia de los distintos países del Cono Sur. Estos mantienen el carácter confidencial de sus comunicaciones a través de las instalaciones estadounidenses de Panamá mediante el uso de códigos bilaterales.

«No tengo constancia de que esto sea cierto», concluía el embajador White, si bien añadía que, en caso de serlo, «sería recomendable revisar este acuerdo».[42]

Sigue sin estar claro cuándo se disolvió la Operación Cóndor, y otro tanto puede decirse del número total de sus víctimas. Entre 1975 y 1977, durante

el apogeo de sus actos de terrorismo de patrocinio estatal, los regímenes del Cono Sur coordinaron la muerte de docenas de víctimas, muchas de ellas en Argentina. Tras el golpe de Estado de marzo de 1976, unos quince mil exiliados procedentes de otros países de la región que habían llegado a Argentina huyendo de la represión se encontraron atrapados por un sistema de colaboración cada vez mejor coordinado en lo tocante a secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos. Entre los ejemplos de hasta dónde llegaron en Argentina las atrocidades de la Operación Cóndor cabe destacar:

- 10 abril 1976: El personal de seguridad de Chile y Argentina secuestra y hace desaparecer en Buenos Aires a Edgardo Enríquez, miembro destacado del MIR, junto con otros militantes chilenos y Maria Regina Marcondes, de nacionalidad brasileña. Tras retener a Enríquez en Argentina, lo entregan a la Dina. Esta lo traslada a Villa Grimaldi, donde es torturado antes de desaparecer.

- 21 de mayo de 1976: Zelmar Michelini y Luis Héctor Gutiérrez, miembros destacados del Congreso uruguayo exiliados en Argentina, mueren por arma de fuego en plena calle en Buenos Aires.

- 4 de junio de 1976: Juan José Torres, antiguo presidente de Bolivia, aparece muerto a tiros en su apartamento bonaerense.

- 11 de junio de 1976: Veintitrés ciudadanos chilenos y uno de Uruguay, refugiados bajo protección de las Naciones Unidas en Buenos Aires, son secuestrados por cuarenta encapuchados armados y retenidos durante más de un día en un lugar sin revelar. Allí los interroga y los tortura un equipo de agentes de seguridad argentinos, uruguayos y chilenos, que los conminan a abandonar Argentina en el plazo de cuarenta y ocho horas si quieren seguir con vida. La operación, según comunicó la embajada estadounidense en Buenos Aires, hacía pensar en «una estrecha coordinación entre las fuerzas de seguridad del Cono Sur concebida para erradicar lo que consideran actos subversivos y aterrorizar a los refugiados».[43]

- 24-27 septiembre 1976: Agentes de la SIDE y miembros del servicio de inteligencia militar de Uruguay participan en lo que cierto informe

de la DIA calificó de «operación conjunta» contra integrantes del OPR33, grupo guerrillero uruguayo, en Buenos Aires. Durante la redada mueren, al parecer, más de treinta personas.

• 16 de mayo de 1977: Tres exiliados del Partido Comunista chileno y cinco argentinos del Comité de Solidaridad con Chile de Buenos Aires sufren arresto en una operación conjunta argentino-chilena y luego desaparecen.

El «sistema Cóndor» actuó también en otros países de la organización. En Paraguay, el correo de la JCR Jorge Fuentes Alarcón fue el primero de los muchos chilenos, uruguayos y argentinos que cayeron víctimas de esta «multinacional del crimen organizado». Los documentos hallados en los «archivos del terror» paraguayos proporcionan no pocas pruebas de sesiones de tortura llevadas a cabo por equipos de agentes de seguridad de Paraguay, Uruguay y Argentina, así como de la entrega clandestina de individuos secuestrados en Asunción a la policía secreta de sus respectivos países.[44] Cierto informe paraguayo describía el «buen trabajo» de los brasileños que hicieron desaparecer a varios ciudadanos argentinos detenidos en Brasil. En Bolivia, durante los años en que estuvo activa la Operación Cóndor, se detuvo y devolvió a las autoridades de su país de origen a tres chilenos, y se secuestró a seis argentinos para después repatriarlos. También en Perú comenzaron a desaparecer personas una vez que su policía secreta se unió a dicha coordinación.

De hecho, una de las últimas acciones de la organización de que hay constancia tuvo lugar, el 12 de junio de 1980, en Lima. Los miembros de un escuadrón argentino de la muerte conocido como Batallón de Inteligencia 601 secuestraron, en colaboración con el servicio de inteligencia militar peruano, a cuatro supuestos dirigentes del movimiento Montoneros. Uno de aquellos hizo saber a cierto funcionario de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, el 16 de junio, que se retendría «a los cuatro argentinos en Perú para después expulsarlos a Bolivia, desde donde serán repatriados (...) Una vez en Argentina, serán interrogados para desaparecer después sin dejar rastro».[45] En los documentos que se han hecho públicos no consta que la embajada hiciese esfuerzo significativo alguno por librar a ninguno de ellos de la suerte a la que estaban destinados. Tres de ellos

desaparecieron por completo, en tanto que más tarde apareció en un apartamento de Madrid, como si de una grotesca resurrección de la Operación Colombo se tratara, el cadáver de la cuarta víctima, Noemí Esther Gianetti. Según declaró el ministro argentino de Asuntos Exteriores, este hecho constituía una prueba suficiente de falsedad de la campaña emprendida contra Argentina y Perú en torno a los cuatro detenidos.

El asesinato de Letelier y Moffitt

De todas las atrocidades de que fue responsable la Operación Cóndor, la más atroz y de más infausta memoria fue el atentado con coche bomba que, el 21 de septiembre de 1976, acabó con la vida del antiguo diplomático chileno Orlando Letelier y Ronni Karpen Moffitt, compañera de trabajo estadounidense. Hasta el día en que los hombres de Osama bin Laden secuestraron el vuelo 77 de la compañía American Airlines y lo estrellaron contra el Pentágono, el 11 de septiembre de 2001, el asesinato de Letelier y Moffitt constituyó el acto de terrorismo internacional más desvergonzado cometido en la capital de Estados Unidos.

El objetivo del ataque, Orlando Letelier, era a la sazón el portavoz más respetado y eficiente de la campaña internacional promovida para condenar y aislar la dictadura de Pinochet. Había cultivado una larga amistad con Salvador Allende y había sido nombrado primer embajador del gobierno de la Unidad Popular en Washington, cargo que había ejercido hasta que, en mayo de 1973, regresó a Santiago para asumir el de ministro de Relaciones Exteriores. En agosto, coincidiendo con el agravamiento de la confusión social y política, Allende lo nombró ministro de Defensa, puesto que, en teoría, lo convertía en superior de Pinochet y el resto del cuerpo de oficiales chilenos. De hecho, el general solía llevarle el maletín a Letelier, tal como recordaría más tarde Isabel Morel, viuda de este último.

Tras el golpe de Estado, Pinochet ordenó que lo confinasen, junto con otros muchos altos cargos del gobierno de Allende, en un campo de concentración frío y desolado situado en la isla de Dawson, en el estrecho de Magallanes. Una campaña concertada de presión internacional obligó a la Junta Militar a liberarlo tras un año de reclusión. Tras ser expulsado del

país, Letelier viajó a Washington para trabajar en el Instituto de Estudios Políticos, distinguido grupo de expertos de carácter progresista.

Letelier ya era célebre en los círculos políticos de Washington. Durante la década de 1960 se había desempeñado como economista de alto nivel en el Banco Interamericano de Desarrollo, y se lo consideraba bien relacionado, refinado y activo en extremo. «Orlando estaba en todas partes», rememoró el senador James Abourezk en una entrevista. El ahínco con que instó al Congreso a actuar ante las violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno chileno, y a la ONU y las naciones europeas a condenar al régimen militar, lo convirtió en el más temible oponente político de Pinochet en el exilio, así como en el centro de atención de los servicios de inteligencia de Chile y Estados Unidos.

La CIA comenzó a seguir de cerca los movimientos de Letelier en mayo de 1960, cuando acompañó a Salvador Allende a un congreso en La Habana. Durante los dieciséis años que siguieron a esta fecha, los agentes elaboraron un archivo personal (el número 0881118), con reseñas biográficas, perfiles de personalidad, informes de sus movimientos y material procedente de fuentes clandestinas. Los documentos relativos a su nombramiento en calidad de embajador de Allende en Washington lo describen como «un hombre grato y sociable», «un demócrata razonable y maduro» con «conocimientos útiles y precisos de Estados Unidos». Los informes de la CIA daban cuenta también de las actividades y salud de su esposa y sus cuatro hijos, así como de sus respectivos estilos de vida e intereses. El personal de la Agencia llegó incluso a recoger datos sobre «Alfie, su perro ovejero inglés».[46] Después de que Letelier regresara a Washington exiliado, los agentes de la CIA espiaron su participación en las iniciativas internacionales contra la dictadura de Pinochet. Según informaron, había tenido «un gran éxito a la hora de hacerse con un respaldo político considerable para la causa de oposición a la Junta Militar».[47]

El éxito de Letelier indignó a los militares chilenos, y en particular al mismísimo general Pinochet. De hecho, cuando este se reunió con Henry Kissinger el 8 de junio de 1976, acusó intencionadamente a Letelier de difundir en Washington información falsa acerca de la actuación del régimen respecto de los derechos humanos. «Los democristianos nos están

atacando constantemente», se quejó ante el secretario de Estado, según la transcripción desclasificada de su conversación. «Su opinión tiene mucho peso en Washington. (...) También la de Letelier. (...) Letelier tiene acceso al Congreso. Sabemos que están dando información falsa».[48] Semanas después de este encuentro, Pinochet y Contreras pusieron en marcha la misión concebida para acallarlo para siempre.

A finales de junio, el director de la Dina encomendó a su subordinado inmediato, el coronel Pedro Espinoza, la organización de la operación que acabaría con la vida de Letelier. Espinoza, por su parte, ordenó a Townley viajar a Asunción junto con el teniente coronel Armando Fernández Larios, también agente de la Dina, para obtener visados estadounidenses y pasaportes falsos. Después debían dirigirse a Washington «para ejecutar el asesinato».[49] El 17 de julio, el coronel Contreras envió un cablegrama al director de la policía secreta de Paraguay, Benito Guanes, por mediación del sistema de teletipo criptográfico de la red de comunicaciones establecida por la Operación Cóndor. En él comunicaba la inminente llegada de dos agentes de la Dina que iban a solicitar respaldo para una misión.[50]

Townley y Fernández llegaron a Asunción algunos días después. Cuando los funcionarios del servicio de inteligencia paraguayo quisieron saber el motivo de su misión, recurrieron al pretexto de que viajaban con el fin de vigilar a empleados de la sede neoyorquina de la compañía estatal chilena de cobre (Codelco), a los que se suponía filiación de izquierda. Según aseguraron, la operación contaba con el visto bueno del director de la CIA en Santiago. Al final, se les dieron pasaportes paraguayos falsos con los nombres que habían elegido: Alejandro Romeral Jara (Fernández Larios) y Juan Williams Rose (Townley).

El consulado estadounidense, sin embargo, tardó ocho días en entregar los visados a los chilenos. El embajador George Landau solo accedió a facilitar los documentos después de que Conrado Pappalardo, mano derecha del presidente Alfredo Stroessner, lo hubiese engatusado tras no pocas llamadas telefónicas y entrevistas cara a cara. Pappalardo informó a Landau que Stroessner había recibido una llamada del propio Pinochet, quien le había solicitado el favor de que expidiese los pasaportes y los visados. Asimismo, Pappalardo garantizó que los dos empleados de la Dina se reunirían con el

general Vernon Walters, subdirector de la CIA, a su llegada a Estados Unidos. Landau se hubo de enfrentar, en consecuencia, a un dilema diplomático: por un lado, extender, con conocimiento de causa, visados a dos agentes chilenos que empleaban identidad, nacionalidad y pasaporte falsos le parecía una operación arriesgada, amén de ilegal; por el otro, tampoco estimaba conveniente entorpecer por descuido una misión secreta que contaba con el beneplácito de la CIA. Finalmente ordenó al consulado que entregase los visados, no sin antes hacer copia de los pasaportes, incluidas las páginas destinadas a las fotografías, para enviarla, el 27 de julio, al general Walters.

El 4 de agosto, el subdirector de la CIA respondió que no sabía nada de los agentes chilenos, lo que hizo aumentar las sospechas relativas a la verdadera naturaleza de su misión. Landau cablegrafió entonces al vicesecretario Shlaudeman para ponerlo sobre aviso de la «treta paraguaya», que, en su opinión, tenía «ciertos aspectos problemáticos», y lo instó a prohibir la entrada al país de los poseedores de los citados documentos.[51] «Si aún hay tiempo y existe la posibilidad de parar los pies a este plan descabellado», respondió de inmediato Shlaudeman, «está usted autorizado a regresar [ante los funcionarios paraguayos] e insistir en que se convenza a los chilenos de no hacer, de ninguna manera, ese viaje. Repito: de ninguna manera». De cualquier modo, a esas alturas, la Dina había abandonado cualquier intento de hacer que Townley y Fernández viajasen a Estados Unidos vía Paraguay, y ambos habían recibido órdenes de regresar a Chile.

Tras aguardar tres semanas para ver si se había malogrado la misión, la Dina envió a Washington, el 26 de agosto, una avanzadilla (formada por Fernández, con el pseudónimo de Armando Faúndez Lyon, y Liliana Walker) con el cometido de realizar la vigilancia preliminar de los movimientos de Letelier. El 9 de septiembre llegó Townley, tras entrar en el país con un pasaporte oficial chileno a nombre de Hans Petersen Silva. Se reunió con Fernández en el aeropuerto Kennedy de Nueva York y fue informado enseguida del paradero de la víctima, su dirección y el modelo de su coche. Entonces se dirigió a Union City (Nueva Jersey), uno de los baluartes del sector duro de la resistencia cubana anticastrista en el exilio,

para encontrarse con Guillermo Novo, dirigente del MNC, y solicitar la ayuda del movimiento.

El equipo encargado de cometer el asesinato se reunió en Washington la mañana del 15 de septiembre, cuando llegaron de Nueva Jersey Townley y Virgilio Paz, a quienes más tarde se unió Dionisio Suárez, agente del MNC. Pasaron dos días vigilando a Letelier —tomando nota de a qué hora salía de su casa para trabajar, qué recorrido seguía y qué hacía por el día y por la noche—. Townley adquirió en Radio Shack y Sears los componentes que le faltaban para la fabricación de una bomba de control remoto, y la construyó en su habitación de un motel de la cadena Econo-Lodge. Entrada la noche del 18 de septiembre, los tres se dirigieron en automóvil a la residencia de Letelier en Bethesda. Protegido por la oscuridad, Townley se acercó al Chevrolet Chevelle de aquel, aparcado en el camino de entrada, y colocó el artefacto en el chasís, bajo el asiento del conductor.

La mañana del 21 de septiembre, cuando Letelier tomó el coche junto con sus compañeros Michael y Ronni Moffitt para acudir al trabajo, Paz y Suárez lo siguieron por la avenida de Massachusetts. Cuando el Chevelle rodeó la plaza conocida como Sheridan Circle, una vez pasadas la residencia del embajador de Pinochet y la embajada turca, Suárez presionó el botón de un localizador electrónico e hizo explotar la bomba. Michael Moffitt, sentado en la parte trasera, salvó la vida al no recibir el impacto de forma directa, pero a su esposa la alcanzó un trozo de metralla en la yugular y, al lado del automóvil, sobre el bordillo, se ahogó a causa de una hemorragia interna que le llenó de sangre los pulmones sobre el bordillo. Letelier, con las piernas cercenadas, murió poco después en el hospital de la Universidad George Washington.

Este ataque terrorista sin precedentes tuvo lugar a catorce manzanas de la Casa Blanca. De hecho, la explosión pudo escucharse desde el Departamento de Estado, situado a menos de un kilómetro de allí. El público en general y el mundo de la política reaccionaron de inmediato y de un modo espontáneo. Pocos minutos después del atentado, amigos y colegas se reunieron frente a la residencia del embajador chileno, al otro lado de Sheridan Circle, gritando: «¡Pinochet, asesino!». Cuando la noticia del doble asesinato llegó al Capitolio, no fueron pocos los miembros de la

Cámara de Representantes y los senadores —entre ellos Tom Harkin, de los primeros, y Edward Kennedy, de los segundos— que se pusieron en pie para elogiar al político fallecido. «La tragedia no acaba, ni mucho menos, en el asesinato de Orlando Letelier y Ronni Moffitt», declaró el senador James Abourezk, «pues significa que la tiranía de la dictadura se ha extendido (...) a Estados Unidos».[52]

El régimen de Pinochet no dudó en tomar la ofensiva y presentarse como la víctima del crimen que había cometido. El embajador de Chile, Manuel Trucco, se personó entrada la tarde del 21 de septiembre en el Departamento de Estado para reunirse con William Luers, ayudante del vicesecretario para América Latina, y expresarle la repulsión de su gobierno ante «este acto de terrorismo tan espantoso como indignante» y rogar al Departamento que no hiciese «declaraciones que pudieran poner en duda a nadie».[53] En Chile, el ministro de Relaciones Exteriores hizo público un documento en el que dejaba entrever que la responsabilidad del asesinato recaía sobre la izquierda y aseguraba que el gobierno chileno había adoptado una postura firme y abierta contra el terrorismo. Según su alegato, este acto criminal era el resultado de un plan frío y cruel de los que solo podían concebir quienes instigaban el odio llevados por un fanatismo salvaje. En el cuartel central de la Dina, el coronel Espinoza informó al agente Armando Fernández Larios que el asesinato había sido cometido por la «oposición» al gobierno de Pinochet con la intención de desacreditar a su régimen días antes de que su ministro de Relaciones Exteriores hablase, esa misma semana, ante la ONU. Al menos, eso fue lo que le dijeron a Fernández que debía decir.[54]

En el primero de los cablegramas que envió a Washington tras el atentado, el embajador Popper señaló que «no podía haberse perpetrado en un momento más estratégico para atraer la atención de la asamblea general de la ONU» y predijo que el régimen no dudaría en negar toda responsabilidad y asegurar «que se trata de una provocación izquierdista concebida para dañar al GC». Cosa que, al parecer de Popper, «no resulta inconcebible», y agregó:

> Por motivos evidentes, sin embargo, la sospecha recaerá en primer lugar en la Dirección de Inteligencia Nacional chilena (Dina). Letelier

> era uno de los principales enemigos políticos de la Junta Militar y no había abandonado su actividad en el exilio. Haciéndolo callar, disuadirían a otros exiliados de hablar, escribir o confabular en contra de la Junta.

El cablegrama, marcado por una credulidad y un afán por hacer la vista gorda idénticos a los que marcaban los informes que había facilitado la embajada con anterioridad sobre el asesinato de Prats y la Operación Colombo, seguía diciendo: «No obstante, no hemos observado nunca indicio alguno de que la Dina se encuentre activa, de ningún modo, en territorio estadounidense y nos resulta difícil creer que ni siquiera sus dirigentes más fanáticos estén dispuestos a exponerse a las consecuencias que acarrearía el que los relacionasen con un acto terrorista perpetrado en Washington».[55]

Algunos sectores destacados de los servicios de inteligencia estadounidenses adoptaron la misma posición. La CIA, por ejemplo, filtró a la prensa un buen número de historias que daban a entender que la Dina no estaba implicada en el caso. La DIA, célebre por la exactitud y firmeza de sus evaluaciones, hizo público un informe inicial, escrito por el encargado de la sección chilena, R. Denk, en el que se descartaba la posibilidad de que el régimen de Pinochet se hallase detrás del atentado:

> Resulta difícil atribuir la responsabilidad al gobierno de Chile por varias razones. El radio de acción de la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile (Dina), que algunos han presentado como culpable, no alcanza, con el 80 por ciento de probabilidad, a Estados Unidos. Por otra parte, la imagen de Chile ha recibido un tremendo revés con este crimen, algo que quienes lo planearon debían haber previsto y sopesado. Además, el asesinato ha tenido lugar, al igual que otros dos intentos previos, durante la reunión de la asamblea general de la ONU en Nueva York: mal momento para un atentado cometido por Chile.[56]

Aun así, el FBI ofreció datos mucho más exactos. Una semana después de que estallase el coche bomba, su agregado legal en Buenos Aires, Robert Scherrer, remitió a Washington un informe calificado como secreto de cuatro páginas basado en la información de un confidente dentro del aparato

de Cóndor —el doctor Arturo Horacio Poire—, quien, según el informe de Scherrer, «participaría posiblemente en la tercera fase de la "Operación Cóndor"». El cablegrama, denominado «Chilbom», afirmaba que era posible que el asesinato fuese obra de la Operación Cóndor, cuyo centro, según recordaba, era precisamente Chile. «La tercera fase de la Operación Cóndor, la más secreta, comporta la formación de equipos especiales, constituidos por agentes de los países miembros (...) con el objetivo de llevar a cabo castigos entre los que se incluye el asesinato». Scherrer llega, por lo tanto, a la siguiente conclusión: «No está fuera de lo posible que el reciente asesinato de Orlando Letelier en Washington D.C. pueda formar parte de esta tercera etapa de la Operación Cóndor» (véase el documento 5).

La Operación Cóndor: Crónica de un terrorismo anunciado

Durante veinte años, el cablegrama enviado por Scherrer el 28 de septiembre de 1976, denominado «Chilbom», fue el único documento sobre la Operación Cóndor que había visto la luz pública. Su contenido hacía suponer que los servicios de inteligencia estadounidenses no habían sabido de la existencia de esta red de terrorismo internacional sino una semana después del atentado de Washington.[57] Sin embargo, lo cierto es que el gobierno de Ford —y en particular el gabinete de Henry Kissinger y la CIA — tenía un amplio conocimiento de la Operación Cóndor y sus actividades criminales mucho antes del asesinato de Letelier y Moffitt. Con todo, el complejo relato de la acción —inacción, más bien— de Estados Unidos en respuesta a esta información se ocultó de forma deliberada a las familias y al público general, e incluso a los representantes del Departamento de Justicia que investigaban el atentado terrorista.

En una fecha tan temprana como el 30 de septiembre de 1974, época en que la Dina asesinó en Buenos Aires al general Carlos Prats, los servicios estadounidenses de inteligencia tenían constancia de que los países del Cono Sur que estaban aliados con Estados Unidos mantenían en torno a ciertos actos de terrorismo una colaboración que, tal como admitió más tarde la CIA, puede considerarse «la precursora de la Operación Cóndor». Según el informe especial CIA Activities in Chile, presentado ante el Congreso, «antes de que hubiese pasado un año del golpe de Estado, la CIA

y otros órganos del gobierno de EE.UU. tenían conocimiento de la cooperación bilateral establecida entre los servicios de inteligencia de la región con el fin de seguir la pista de las actividades de sus oponentes políticos y, al menos en varios casos, acabar con sus vidas». Los informes de la CIA daban cuenta también de los empeños del estamento militar chileno por localizar y asesinar en 1974 incluso a miembros de la oposición exiliados en Europa. Antes aún de que el régimen de Pinochet instituyese formalmente la Operación Cóndor, los servicios secretos estadounidenses poseían documentación relativa a su capacidad —y disposición— para cometer atrocidades más allá de sus fronteras.

Los documentos de la CIA admiten un conocimiento inicial del «plan Cóndor» en marzo de 1976, cuando sus agentes informaron que el director de la Dina, Manuel Contreras, había «dado comienzo a un programa de cooperación» entre los organismos de inteligencia del Cono Sur. La Agencia Central de Inteligencia no carecía de datos concretos acerca de la segunda convención de los miembros de la Operación Cóndor, celebrada dos meses más tarde, a finales de mayo, en Santiago. «El tema central del encuentro fue la amplia colaboración establecida entre los servicios secretos de los países participantes», afirmaba un informe posterior de la CIA, «aunque las cuestiones que se trataron iban mucho más allá del intercambio de información».

Llegada la fecha de este segundo encuentro, había ya pruebas suficientes de la naturaleza de la citada colaboración: el secuestro en Argentina del dirigente del MIR Edgardo Enríquez en abril de 1976, su traslado a Chile y su posterior asesinato; los asesinatos, en mayo, de los parlamentarios uruguayos; la muerte del antiguo presidente de Bolivia en junio, y el secuestro en masa, el interrogatorio y la tortura de refugiados de Chile y Uruguay hacían pensar en la existencia de operaciones internacionales conjuntas cada vez más descaradas.

Este rosario de atrocidades cometidas en Argentina dio pie a no pocas expresiones de indignación en el Capitolio y preocupó a cierto número de altos funcionarios del Departamento de Estado que permanecían ajenos a los datos de los que disponía la CIA en torno a la Operación Cóndor. No faltaba quien conjeturase que los países del Cono Sur estaban «cooperando

en algún tipo de “multinacional del crimen organizado”» o, tal como lo describe un informe redactado para Henry Kissinger por la Oficina de Inteligencia e Investigación el 4 de junio, un posible «programa homicida intergubernamental». Ese mismo día, el organismo del Departamento de Estado encargado de los asuntos latinoamericanos envió un cablegrama de «acción inmediata» a las embajadas del Cono Sur firmado por Kissinger, en el que trataban las «posibles implicaciones internacionales de las muertes violentas de figuras políticas en el extranjero». El texto planteaba dos preguntas fundamentales:[58]

> • ¿Creen ustedes que las muertes de refugiados políticos de su país en el extranjero pueden haber sido organizadas por su nación anfitriona por mediación de vínculos institucionales con grupos, gobiernos, etc. del país en el que se han producido las muertes?
>
> (...)
>
> • ¿Tienen pruebas que respalden o desmientan las acusaciones que hablan de la existencia de acuerdos intergubernamentales dirigidos a la puesta en práctica de tales asesinatos o ejecuciones?

El embajador Charles Hill no tardó en responder desde Buenos Aires que la embajada creía que las fuerzas de seguridad argentinas se hallaban implicadas en la mayor parte de los asesinatos y que algunos de estos se habían cometido «a modo de favor» prestado a otros servicios de seguridad de la región, aunque no tenía pruebas concretas de la existencia de una conspiración. La embajada de Estados Unidos en Santiago contestó que, pese a no poder demostrar que se estuviese dando una colaboración formal, creía probable que hubiera acuerdos de este tipo, así como «que los agentes chilenos hayan estado implicados en asesinatos en el extranjero, tal vez en connivencia con gobiernos foráneos».[59]

Mientras se hallaba de viaje por Latinoamérica tras el Congreso de la OEA celebrado en Santiago de Chile, Kissinger supo que los informes proporcionados por las embajadas llegaban a la siguiente conclusión: «No hay pruebas disponibles que hagan pensar en la existencia de una conspiración entre los gobiernos del Cono Sur concebida para seguir el rastro y [asesinar] a destacados refugiados que habiten en estos países».

Pese a lo incorrecto de esta evaluación, había otros dos documentos analíticos de la Oficina de Inteligencia e Investigación que coincidían con ella. El del 4 de junio, redactado por el analista James Buchanan, reconocía que las fuerzas de seguridad de la región «coordinaban sin duda las actividades dirigidas a evitar actos subversivos en lo que respecta a los intercambios de información», si bien atribuía los asesinatos a «la obra de grupos de derecha de los que algunos integrantes pertenecen al personal de seguridad» de Argentina. El segundo informe, fechado el 18 de julio, contenía muchos más detalles acerca de la colaboración de los diversos cuerpos de policía secreta del Cono Sur. Con todo, la INR infería que «las pruebas no establecen de forma concluyente la existencia de una coordinación formal de alto nivel entre las fuerzas de seguridad de la región con el propósito expreso de eliminar a los exiliados».

La CIA, no obstante, sí disponía de pruebas concretas de una conspiración formal y coordinada destinada expresamente a eliminar a los exiliados mediante asesinatos políticos cometidos en todo el mundo. A partir de los datos obtenidos de fuentes del ámbito del servicio de espionaje latinoamericano que habían asistido al segundo encuentro de la Operación Cóndor, los agentes secretos informaron en junio que los regímenes del Cono Sur estaban extendiendo sus actividades y planeaban «emprender “acciones ejecutivas” fuera del territorio de los países que integran el sistema». De cualquier modo, la CIA solo se decidió a compartir tal información a finales de julio, cuando el Departamento de Estado llevaba casi dos meses tratando de determinar si sus aliados latinoamericanos estaban coordinando de veras operaciones homicidas. El día 30 de ese mes, en el transcurso de la reunión semanal de la Agencia con la ARA, un integrante de aquella informó al Departamento de Estado de lo que llamó «acontecimientos preocupantes en lo referente a [la] actitud operacional» de los países del sistema Cóndor. Chile y las demás naciones habían asumido un «papel de activistas» que consistía en «identificar, localizar y “golpear” a los cabecillas guerrilleros» sin importar dónde pudiesen encontrarse.[60]

El secretario de Estado Kissinger recibió esta espectacular información el día 3 de agosto, cuando le fue remitida una exposición de catorce páginas clasificada de secreta y titulada «La “Tercera Guerra Mundial” y

Sudamérica», en la que Harry Shlaudeman lo ponía al corriente de la existencia de la Operación Cóndor y sus objetivos:

> Se está produciendo una amplia cooperación por parte de los servicios de seguridad e inteligencia de seis gobiernos: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Sus respectivas policías secretas mantienen encuentros formales para planear la «Operación Cóndor», que incluye extensos intercambios de información de carácter semejante a los del FBI en torno a sospechosos. Existen planes relativos a una red especial de comunicaciones. Los detalles de estos asuntos siguen siendo secretos, aunque no puede decirse lo mismo del alto grado de colaboración en materia de seguridad.[61]

Los regímenes militares del Cono Sur estaban «aunando esfuerzos para erradicar la "subversión", término con el que se designan, cada vez con más frecuencia, las discrepancias no violentas provenientes de los grupos de izquierda y centroizquierda», escribió Shlaudeman, con lo que daba a entender que las víctimas de la Operación Cóndor no eran solo los insurgentes izquierdistas. Las fuerzas de seguridad «mantienen en estos momentos una coordinación muy precisa de las actividades de espionaje» y operan en los distintos países «a la caza de "elementos subversivos"». Asimismo, colaboraban «para encontrar y matar a los terroristas (...) en sus propios países y en Europa».

El informe de Shlaudeman exponía cierto número de consideraciones relativas a la política exterior con la intención de que Kissinger las evaluara. La primera era la posibilidad de que la violencia terrorista se extendiera más allá del Cono Sur hasta alcanzar Europa occidental y aun Estados Unidos, «contingencia que acarrearía serios problemas a escala mundial», tal como lo presentó Shlaudeman. Si la Operación Cóndor emprendía «acciones antiterroristas en Europa», las víctimas podrían responder atacando embajadas y demás intereses de los regímenes del Cono Sur. «Las democracias industriales», predijo, «se convertirían, en tal caso, en el campo de batalla» de un conflicto similar al que libraban la OLP e Israel.

Aún más preocupante resultaba la posibilidad de que la «cooperación policial» evolucionase hacia «la formación de un bloque político».[62] En el

contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos sería el «beneficiario en apariencia» de una alianza de la derecha sudamericana. Sin embargo, Washington tenía un problema de imagen, tal como exponía Shlaudeman: «En el ámbito internacional consideran que los generales latinoamericanos son amigos nuestros. En especial, se nos identifica con Chile, y eso no puede hacernos ningún bien». A largo plazo, estos países dejarían de responder ante la influencia estadounidense, causarían profundas divisiones en el Hemisferio Occidental y se harían aún más propensos a la violencia internacional de lo que ya eran.

El informe remitido a Kissinger recomendaba adoptar «una perspectiva estratégica a largo plazo» para evitar la formación de un bloque regional de derecha. Shlaudeman ofrecía varias opciones poco definidas, entre las que se hallaban la de despolitizar la cuestión de los derechos humanos haciendo más débil la presión estadounidense o tratar de «atraer de nuevo a los potenciales miembros del bloque a nuestro universo cognitivo por medio de intercambios sistemáticos», por ejemplo, de información sobre movimientos subversivos en la región.

Por sorprendente que pueda resultar, el informe de Shlaudeman no contenía recomendación alguna de acción inmediata para frustrar las pretensiones homicidas de la Operación Cóndor. Sin embargo, durante las tres semanas siguientes de agosto, los altos funcionarios del Departamento de Estado, entre quienes se encontraban Kissinger, el vicesecretario de Estado de asuntos políticos Philip Habib, Shlaudeman y sus subordinados William Luers y Hewson Ryan, así como algunos miembros de la CIA sin identificar, deliberaron sobre cómo debía responder Washington en lo político —si es que debía hacerlo— ante la amenaza del terrorismo del Cono Sur. Tanto Luers como Ryan instaron la adopción de medidas enérgicas para poner fin a la Operación Cóndor. En una entrevista, el segundo recordaría más tarde cómo intentaron «que la séptima planta [el despacho de Kissinger] autorizase el envío de un cablegrama para ordenar a nuestros embajadores que se dirigieran a los jefes de Estado (...) y les advirtieran que sus acciones constituían una ofensa a los pilares mismos de la sociedad civilizada».

A la vez que se discutían estas cuestiones, los mismos funcionarios estadounidenses que participaban en el debate estaban confrontando, sin advertirlo, las pruebas evidentes de que la Operación Cóndor pretendía asesinar a Orlando Letelier. Así, el 5 de agosto, Shlaudeman recibió el alarmante despacho transmitido por el embajador George Landau desde Paraguay con el que le informaba que dos agentes de la policía secreta chilena pretendían viajar subrepticiamente a Washington con pasaportes paraguayos falsos. Poco después, la CIA le hizo llegar las copias de tales documentos, que Landau había enviado a Vernon Walters, subdirector de la Agencia.

Si bien los estadounidenses tomaron medidas para frustrar tan sospechosa misión, en los archivos que han salido a la luz no hay indicio alguno de que relacionasen la turbia historia de los dos chilenos que trataban de entrar de forma ilícita en Estados Unidos con la información obtenida por la CIA en torno a los planes homicidas de la Operación Cóndor. Todo apunta a que el gabinete de Kissinger no pidió a la Agencia Central de Inteligencia que investigara el caso, esta no ordenó al centro de operaciones santiaguino que buscase una explicación al respecto y el Departamento de Estado no preguntó a la embajada sobre las operaciones que el régimen de Pinochet pudiera estar tramando en Estados Unidos.

El 23 de agosto, el Departamento de Estado decidió por fin expresar el enojo estadounidense con respecto a los actos coordinados de terrorismo que estaban auspiciando los regímenes del Cono Sur. El secretario de Estado aprobó y firmó un cablegrama de difusión restringida y muy medida expresión («Asunto: Operación Cóndor») dirigido a los embajadores de Estados Unidos en todos los países implicados.[63]

«No ignoran ustedes la existencia de una serie de informes [de la CIA] relativos a la “Operación Cóndor”», rezaba el despacho. «La coordinación de datos obtenidos por los servicios de seguridad e inteligencia puede resultar comprensible. Sin embargo, los asesinatos concebidos y dirigidos por el gobierno dentro y fuera del territorio de los países miembros tiene serias implicaciones a las que debemos hacer frente de un modo directo y sin mayor dilación».

El cablegrama ordenaba a los embajadores estadounidenses en Chile, Argentina y Uruguay —los países que la CIA consideraba implicados de un modo más activo en las tramas homicidas— que se pusieran en contacto con «el funcionario de posición más elevada posible (el jefe de Estado, preferentemente)» de sus respectivos países y les comunicasen, midiendo bien sus palabras, lo siguiente:

> El gobierno de EE.UU. está al tanto (...) de la existencia de cierto grado de coordinación e intercambio de información (...) con respecto a las actividades subversivas. Hasta aquí, nos parece una iniciativa útil. (...) Sin embargo, existen asimismo rumores de que esta colaboración puede extenderse más allá del intercambio de datos para abarcar planes de asesinato de elementos subversivos, políticos y figuras destacadas tanto dentro de la frontera nacional de ciertos países del Cono Sur como en el extranjero. (...) [N]os sentimos obligados a participarles nuestra honda preocupación al respecto. Si hay siquiera un asomo de verdad en estos rumores, podrían ser causa de un serio conflicto moral y político.

El principal problema que se citaba en el documento era que «actividades como estas no harían sino exacerbar aún más las críticas internacionales con respecto a los gobiernos implicados».

Chile fue el instigador de la Operación Cóndor: la Dina había actuado como anfitriona de las dos reuniones de Cóndor para establecer la siniestra colaboración transnacional y organizar los complots de «Teseo». En consecuencia, comunicar a Pinochet lo expuesto en el despacho de Kissinger parecía ser la acción que más urgía emprender si se pretendía poner freno a estos actos delictivos. De hecho, Chile era tan importante que Kissinger ordenó al embajador David Popper: «Discuta [con el director del puesto en Santiago, Stuart Burton] la posibilidad de que se entreviste, de forma paralela», con el jefe de la Dina.

Al recibo del cablegrama, Popper se puso de inmediato en contacto con Burton y el subdirector Thomas Boyatt. Sin embargo, ambos rechazaron la idea de hablar directamente con Pinochet, dado que, en su opinión, el general se mostraría tan agraviado que la advertencia no surtiría efecto alguno. «Dudo seriamente que dirigirse al presidente Pinochet sea lo más

apropiado», respondió el embajador al Departamento de Estado el 24 de agosto. «A mi entender, habida cuenta de la susceptibilidad con que acoge Pinochet cualquier intento de presión por parte del gobierno de EE.UU., no sería impensable que tomase como un insulto cualquier teoría que lo vincule a tales operaciones homicidas».

En cambio, Popper secundaba la idea de enviar al director del puesto en Santiago para que hablase con el coronel Manuel Contreras. Aseguró que Burton creía que este sería «el modo más eficaz de hacer llegar el mensaje a su destino sin complicaciones poco deseables». Con todo, el embajador se cuestionaba la necesidad de hacerlo de manera urgente, y preguntaba si el Departamento de Estado había recibido «alguna información que pueda hacer sospechar la inminencia de actividades homicidas», sin tener la menor noción de que Contreras había puesto ya en marcha la operación que acabaría con la vida de Letelier. El cablegrama terminaba con la siguiente petición: «Ruego que me mantengan informado», con lo que Popper se refería a sus sugerencias de actuación.[64]

La respuesta del embajador dio pie, en los niveles más altos del Departamento de Estado, a toda una controversia en torno a si debían desestimarse o respaldarse sus objeciones. El 27 de agosto, durante la reunión semanal de los funcionarios de la CIA y el Departamento de Estado encargados de América Latina, el vicesecretario Shlaudeman declaró que no tenían «intención de exponer a Pinochet la situación, porque tal cosa sería inútil por completo». Las actas, mutiladas profusamente por la censura, hacen pensar que debatieron sobre el acercamiento de la CIA a la Dina, si bien no queda claro que se tomase decisión alguna respecto de ordenar tal acción al director del puesto santiaguino.

Popper no fue el único embajador de Estados Unidos que objetó la entrega de la nota diplomática relativa a la Operación Cóndor. En Montevideo, el embajador Ernest Siracusa desobedeció sus instrucciones, arguyendo que su propia vida correría peligro a manos de los militares uruguayos si él los presionaba para que no se involucraran en asesinatos en el exterior. Su resistencia obligó al secretario adjunto Shlaudeman a recurrir a una nueva autorización de Kissinger para entregar la nota diplomática. «Lo que estamos tratando de interceptar es una serie de asesinatos a nivel

transnacional que causarán grave daño al estatus y prestigio internacional de los países involucrados», afirmó el mismo Shlaudeman en un memorando del 30 de agosto de 1976 dirigido a Kissinger, titulado «Operación Cóndor» y que delineaba varias opciones para entregar la nota diplomática a los uruguayos.

En lugar de ello, Kissinger decidió rescindir la nota diplomática y abortar su entrega a todos los regímenes involucrados en Cóndor. En cuanto al memorando «Operación Cóndor» para Uruguay, un cable dirigido a Shlaudeman desde Lusaka, donde Kissinger estaba de viaje, decía: «El secretario [Kissinger] declinó aprobar el mensaje a Montevideo y ha dado instrucciones de que no se sigan más acciones en este asunto».[65] Cuatro días después, el 20 de septiembre, Shlaudeman ordenó a su adjunto William Luers que transmitiera otro cable a Chile, Uruguay y Argentina e «instruyera sencillamente a los embajadores de que no dieran ningún paso adicional, indicando que habían transcurrido ya algunas semanas sin indicios de que el plan Cóndor fuera a ser activado».

Lo cierto es que «el plan Cóndor» ya estaba en funcionamiento. A finales de agosto y principios de septiembre habían llegado a Washington dos integrantes de la Dina —los mismos que habían intentado viajar vía Paraguay—. El principal agente terrorista de la Dina, Michael Townley, había fijado ya la bomba bajo el vehículo de Letelier la noche del 18 de septiembre y, cuando no habían transcurrido siquiera dieciséis horas desde el envío del cablegrama en el que Shlaudeman ordenaba no emprender «acción alguna» contra el terrorismo de la Operación Cóndor, Orlando Letelier y Ronni Moffitt fueron asesinados a pocas manzanas de la Casa Blanca.

Este acto terrorista sin precedentes en la capital de Estados Unidos conmovió a la burocracia de Washington, y en particular a los funcionarios que tenían conocimiento de la Operación Cóndor y eran conscientes de la humillante falta de prevención que había hecho posible que se produjera el doble asesinato. Aun así, el Departamento de Estado seguía mostrando una actitud vacilante y ofuscada. La tarde misma del atentado, el informe vespertino de la INR —documento de contenido altamente secreto remitido a la Casa Blanca para ayudar al asesor de Seguridad Nacional a preparar la

sesión informativa diaria del presidente— hablaba de la Operación Cóndor, aunque solo en lo que atañía a la promoción, por parte de Chile, de un bloque político y económico constituido por varios países sudamericanos. La síntesis, destinada al general Scowcroft, la describía como «la red antiterrorista del Cono Sur inspirada por Chile y concebida para promover el intercambio de información y la eliminación clandestina de elementos subversivos». Del asesinato de Letelier y Moffitt no se decía una sola palabra.[66]

El 4 de octubre, doce días después del doble crimen y casi seis semanas después del 24 de agosto, fecha en que el embajador Popper solicitó órdenes en relación con las gestiones diplomáticas relativas a Chile, Shlaudeman redactó por fin una respuesta de difusión restringida en la que decía:

> Estamos de acuerdo en que nuestro objetivo podrá ser alcanzado con mayor facilidad a través de una entrevista [de la base santiaguina de la CIA] con Contreras, así como que el asunto no debe plantearse ni repetirse ante Pinochet. [El director de la base] recibirá órdenes de consultar con usted el modo y el momento más apropiados para efectuar dicho acercamiento.

En el singular memorando secreto que acompañaba a la copia enviada al subdirector de operaciones de la INR, William McAfee, Shlaudeman escribió que tenía «permiso de arriba para esto» (el destinatario dio por hecho que se refería a Kissinger) y que «agradecería no tener que mostrar la autorización».[67] Esta petición era por lo demás insólita, según recordó más tarde McAfee, dado que, de hecho, no hacía sino proteger a los funcionarios que habían dado su consentimiento a Shlaudeman para que enviase el cablegrama. Sus órdenes, asimismo, impedían que se mostrase el despacho a nadie más del Departamento de Estado.[68]

Dos días después del recibo de estas instrucciones, la base de la CIA en Santiago obtuvo cierta información acerca del coche bomba que hacía responsable del atentado al régimen de Pinochet. El propio general, según el confidente, había tachado de inaceptable la vehemente actitud crítica adoptada por Letelier con respecto al régimen. Según el informe, redactado

el día 6 de octubre, el confidente «cree que el gobierno chileno se encuentra implicado de forma directa en la muerte de Letelier, y está convencido de que la investigación del incidente confirmará su teoría».[69]

Cuando el director del puesto santiaguino se reunió con Contreras, no obstante, este negó que el gobierno hubiese participado en asesinato alguno. Según el resumen de la reunión elaborado por la CIA, el director de la Dina «confirmó la existencia de la Operación Cóndor, pero desmintió que tuviese algo que ver en alguna muerte extrajudicial».[70]

Ya en los primeros estadios de la investigación, la CIA disponía de suficientes pruebas de peso para demostrar que Contreras faltaba a la verdad. La Agencia sabía de buena tinta que la Dina había acabado con la vida de otros oponentes políticos en el extranjero con el mismo modus operandi empleado en el caso Letelier. También tenía en su poder datos sustanciales sobre la Operación Cóndor y la implicación de Chile en actos homicidas contra enemigos políticos residentes en Europa. De hecho, en el momento en que sucedió el asesinato de Letelier y Moffitt, la Agencia había alertado a las autoridades francesas para que frustrasen una de sus misiones, que se llevaría a cabo en París. Por otra parte, la CIA —y también el Departamento de Estado— tenía los nombres —y aun las fotografías— de dos agentes de la Dina que habían tratado de viajar a Washington vía Paraguay pocas semanas antes del doble crimen.

Ni la Agencia Central de Inteligencia ni el Departamento de Estado revelaron lo que sabían a los investigadores del Departamento de Justicia de un modo inmediato. La CIA sugirió a Luers que «revisase» el archivo sobre la «treta paraguaya», pero la oficina para América Latina esperó todo un mes para entregar al FBI los cablegramas, las fotocopias de los pasaportes y las fotografías. Durante ese tiempo, los funcionarios del Departamento de Estado debatían, al parecer junto con los de la CIA, si debían o no «corregirlas» con el fin de «ocultar información» acerca de la Agencia contenida en los cablegramas, según atestiguan los memorandos que han salido a la luz. «Si se hiciese público que hemos retenido de forma intencionada información relativa a la investigación de la muerte de Letelier, quedaríamos expuestos a todo un aluvión de críticas», escribió, el 15 de octubre, Robert Driscoll, miembro de la sección chilena del

Departamento de Estado, quien recomendaba que se entregase todo el archivo al FBI.[71] Los fiscales del Departamento de Justicia no conocieron todos los datos que tenían la CIA y el Departamento de Estado hasta que hubo transcurrido cierto tiempo desde los asesinatos.

En lugar de tratar de colaborar con la investigación de forma activa, señalan John Dinges y Saul Landau en Assassination on Embassy Row, hubo funcionarios de los servicios de inteligencia, cuyos nombres quedan en el anonimato, que trataron de desviar la atención lejos de Chile y promovieron la llamada «teoría del martirio» —el estereotipado argumento de Pinochet, según el cual el crimen fue cometido por militantes de izquierda con la intención de crear un mártir y poner al régimen en un aprieto—. El 11 de octubre, poco después de que los agentes de la Agencia Central de Inteligencia hablasen con Contreras, la revista Newsweek informó lo siguiente: «La CIA ha llegado a la conclusión de que la policía secreta de Chile no está implicada en la muerte de Orlando Letelier, y se basa para ello en el hecho de que la bomba era demasiado tosca para ser obra de expertos y en el de que un asesinato cometido en el preciso instante en que los dirigentes chilenos están tratando de granjearse el apoyo de Estados Unidos no puede sino resultar perjudicial para el régimen de Santiago». Al día siguiente, The New York Times citaba a «funcionarios de los servicios de inteligencia» que aseguraban que el FBI y la CIA habían «descartado casi por completo la idea de que el Sr. Letelier fuese asesinado por agentes de la Junta Militar chilena» y estaban «investigando la posibilidad de que quienes han acabado con la vida del Sr. Letelier hayan sido extremistas de izquierda». Por su parte, The Washington Post afirmaba el 1 de noviembre que, según la CIA, «ningún agente de la actual Junta Militar chilena tomó parte en el asesinato de Letelier (...) El director de la CIA, George H.W. Bush, ha expresado esta opinión en una entrevista mantenida a finales de esta semana con el secretario de Estado Kissinger».[72]

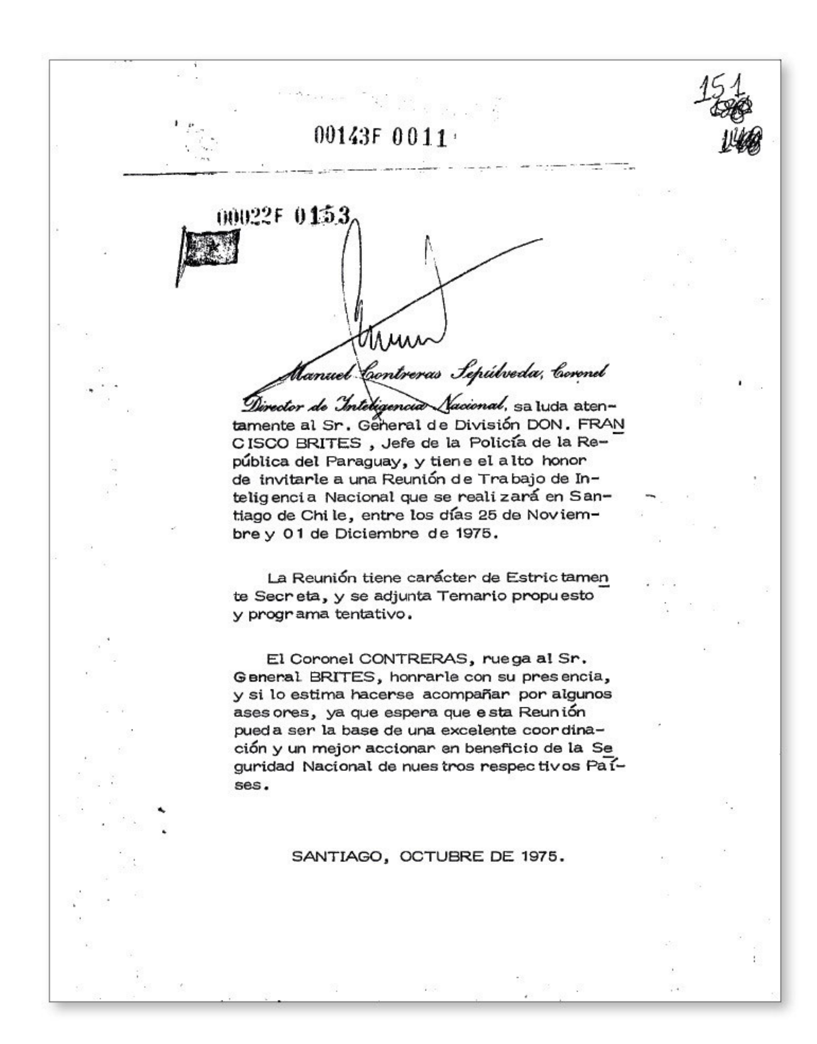
***

La información de que disponían acerca de la capacidad y las intenciones de la Operación Cóndor constituía una razón más que suficiente para que los funcionarios de la CIA, Kissinger y su gabinete pensasen de otro modo. Las filtraciones a la prensa sirvieron para desviar la atención de los

verdaderos terroristas y encubrir un hecho tan sencillo como vergonzoso: no se había emprendido ninguna de las acciones oficiales que podían —y debían— haber evitado el doble asesinato de Letelier y Moffitt. De hecho, las preguntas suscitadas a causa del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 (si se contaba con la información suficiente para haber actuado de tal forma que se impidiesen los atentados y, en tal caso, por qué no se habían tomado las correspondientes medidas preventivas) podrían contestarse de un modo más sencillo en relación con el coche bomba del 21 de septiembre de 1976. La documentación existente al respecto, que durante años se mantuvo en secreto, demostraba que los funcionarios del gobierno estadounidense tenían en su poder los datos necesarios —y estaban bastante preocupados por lo que sabían— para iniciar acciones antiterroristas que, al cabo, nunca llegaron a ponerse en práctica. La política de respaldo a Pinochet y cordialidad para con su régimen adoptadas por Estados Unidos, su condescendencia ante los actos de represión que había consumado y los que planeaba emprender, el miedo a suscitar su ira o la de los demás regímenes militares del Cono Sur y la aversión que profesaba su burocracia a las posturas diplomáticas activas parecen haber desempeñado un papel importante en el fracaso del gobierno de Ford a la hora de evitar un crimen que muchos preveían. «Actuamos con negligencia», fue la conclusión a la que llegó el vicesecretario segundo Hewson Ryan.

> Mostramos demasiados escrúpulos en lo tocante a adoptar una postura firme en público, y también en privado en algunos casos, como el de los asesinatos de Chile. Sabíamos con suficiente antelación que los países del Cono Sur planeaban algunos actos homicidas en el extranjero durante el verano [boreal] de 1976. Si, en caso de haber entrado en acción, habríamos sido capaces de evitarlo o no, es algo que no puedo decir. Pero lo cierto es que no lo intentamos.[73]

Documento 1. Dina, Carta de invitación del coronel Manuel Contreras a la primera reunión de la Operación Cóndor en Santiago, octubre de 1975.



151

00143F 0011

00022F 0153

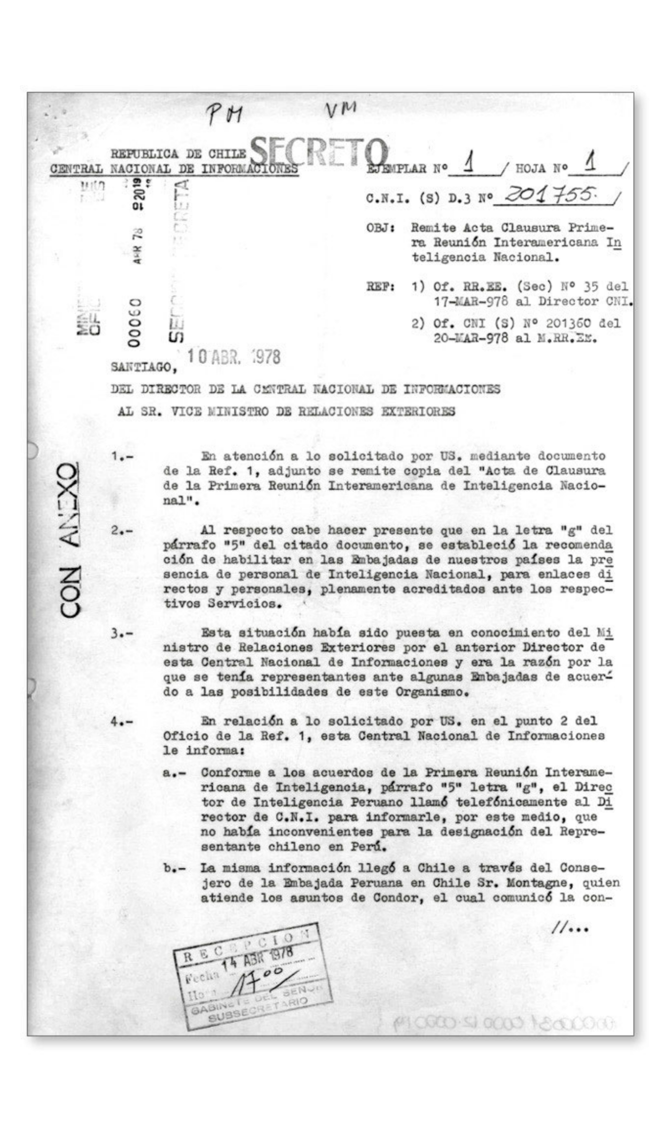
Manuel Contreras Sepúlveda, Coronel
Director de Inteligencia Nacional, saluda atentamente al Sr. General de División DON. FRANCISCO BRITES, Jefe de la Policía de la República del Paraguay, y tiene el alto honor de invitarle a una Reunión de Trabajo de Inteligencia Nacional que se realizará en Santiago de Chile, entre los días 25 de Noviembre y 01 de Diciembre de 1975.

La Reunión tiene carácter de Estrictamente Secreta, y se adjunta Temario propuesto y programa tentativo.

El Coronel CONTRERAS, ruega al Sr. General BRITES, honrarle con su presencia, y si lo estima hacerse acompañar por algunos asesores, ya que espera que esta Reunión pueda ser la base de una excelente coordinación y un mejor accionar en beneficio de la Seguridad Nacional de nuestros respectivos Países.

SANTIAGO, OCTUBRE DE 1975.

Documento 2. Dina, secreto: Resumen «Acta de clausura de la Primera Reunión Interamericana de Inteligencia Nacional», 28 de noviembre de 1975. (Documento enviado por la CNI al viceministro de RR.EE.). (6 páginas)



PM VM

SECRETO

REPUBLICA DE CHILE
CENTRAL NACIONAL DE INFORMACIONES

EJEMPLAR Nº 1 / HOJA Nº 1 /

C.N.I. (S) D.3 Nº 201755. /

OBJ: Remite Acta Clausura Primera Reunión Interamericana Inteligencia Nacional.

REF: 1) Of. RR.EE. (Sec) Nº 35 del 17-MAR-978 al Director CNI.
2) Of. CNI (S) Nº 201360 del 20-MAR-978 al M.RR.EE.

00060 APR 78

CON ANEXO

SANTIAGO, 10 ABR. 1978

DEL DIRECTOR DE LA CENTRAL NACIONAL DE INFORMACIONES

AL SR. VICE MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

1.- En atención a lo solicitado por US. mediante documento de la Ref. 1, adjunto se remite copia del "Acta de Clausura de la Primera Reunión Interamericana de Inteligencia Nacional".

2.- Al respecto cabe hacer presente que en la letra "g" del párrafo "5" del citado documento, se estableció la recomendación de habilitar en las Embajadas de nuestros países la presencia de personal de Inteligencia Nacional, para enlaces directos y personales, plenamente acreditados ante los respectivos Servicios.

3.- Esta situación había sido puesta en conocimiento del Ministro de Relaciones Exteriores por el anterior Director de esta Central Nacional de Informaciones y era la razón por la que se tenía representantes ante algunas Embajadas de acuerdo a las posibilidades de este Organismo.

4.- En relación a lo solicitado por US. en el punto 2 del Oficio de la Ref. 1, esta Central Nacional de Informaciones le informa:

a.- Conforme a los acuerdos de la Primera Reunión Interamericana de Inteligencia, párrafo "5" letra "g", el Director de Inteligencia Peruano llamó telefónicamente al Director de C.N.I. para informarle, por este medio, que no había inconvenientes para la designación del Representante chileno en Perú.

b.- La misma información llegó a Chile a través del Consejero de la Embajada Peruana en Chile Sr. Montagne, quien atiende los asuntos de Condor, el cual comunicó la con-

//...

RECEPCION
Fecha 14 ABR 1978
Hora 17:00
GABINETE DEL SEÑOR SUBSECRETARIO

SECRETO EJEMPLAR Nº 1 / HOJA Nº 1 /

formidad sobre la designación de nuestro Representante en Lima.

c.- Esta misma información llegó también a través del Sistema Condor, vía Buenos Aires (Argentina), país que hace las veces de Secretaría de la Comunidad.

d.- Esta conformidad para acreditar ante el Gobierno Peruano un Agregado Civil a la Embajada de Chile en Lima, fue confirmado a US. por el Oficio de la Ref. 2.

5.- Conocimiento y fines.

Saluda a US.,

POR ORDEN DEL SR. DIRECTOR

REPUBLICA DE CHILE ★ CENTRAL NACIONAL DE INFORMACIONES

JERÓNIMO L. PANTOJA HENRIQUEZ
Coronel
Jefe del Estado Mayor de C.N.I.

A Subsecretario

14 ABR. 1978

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Vice - Ministro

Jefe Gab.

Archivo Secreto

SECRETO

F.- ACTA DE CLAUSURA DE LA PRIMERA REUNION INTERAMERICANA DE INTELIGENCIA NACIONAL

En Santiago de Chile a veintiocho días del mes de Noviembre de mil novecientos setenta y cinco, se procede a clausurar la PRIMERA REUNION INTERAMERICANA DE INTELIGENCIA NACIONAL, con la participación de las Delegaciones de los Países de ARGENTINA, BOLIVIA, CHILE, PARAGUAY y URUGUAY, quienes acuerdan efectuar las siguientes recomendaciones para su accionar futuro.

RECOMENDACIONES.

1.- Iniciar a partir desde esta fecha los contactos bilateral o multilateral, a voluntad de los respectivos países aquí participantes, para el intercambio de información subversiva, abriendo propios o nuevos Kardex de antecedentes de los respectivos Servicios.

2.- Recomendamos, la formación de una Oficina Coordinadora, destinada a proporcionar antecedentes de personas y organizaciones conectadas con la Subversión.

3.- Recomendamos, se estudie la proposición de establecer un Sistema de contacto periódico entre los Servicios de Inteligencia mediante la aprobación o modificación de lo propuesto para normalizar este tipo de encuentros.

4.- Recomendamos, establecer el Sistema de Coordinación mediante tres etapas para su activación

5.- LA PRIMERA ETAPA: Que recomendamos es la siguiente:

a.- Establecer un Directorio completo con los nom

//..

bres y direcciones de aquellas personas que trabajen en Inteligencia para solicitar directamente los antecedentes de personas y organizaciones conectadas directa o indirectamente con el Marxismo.

b.- Recomendamos, que los Servicios de Seguridad atiendan con prioridad las peticiones de antecedentes de los Servicios involucrados en el Sistema.

c.- Recomendamos, el contacto muy rápido e inmediato cuando se expulse del país un individuo (s) o viaje un sospechoso, para alertar a los Servicios de Inteligencia.

d.- Recomendamos, el uso del Sistema de Criptografía que se pondrá a disposición de los países en los próximos 30 días, en el bién entendido que presenta vulnerabilidades, y será reemplazado a futuro por máquinas criptográficas que serán seleccionadas de común acuerdo.

e.- Recomendamos, estudiar los modelos de fichas que se propone, comunicándose las modificaciones necesarias.

f.- Recomendamos, colocar a disposición del Equipo de Técnico los antecedentes que posean los Servicios de Inteligencia sobre: Telex; Microfilm; Computación; Criptografía; para completar lo que falte; aprovechar lo que hay y proponer nuevos elementos.

g.- Recomendamos la habilitación en las Embajadas de nuestros países, la presencia de personal de Inteligencia Nacional o similares

para enlaces directos y personales, plenamente acreditados ante los Servicios.

h.- Recomendamos, recibir a las personas que estudiaron los temas teóricos del Sistema referidos al Banco de Datos y Transmisiones de Antecedentes.

i.- Recomendamos, la utilización de los medios de enlaces ajenos a los países del Sistema, especialmente extra continentales para obtener antecedentes sobre la Subversión.

j.- Recomendamos, facilitar los medios para publicar informaciones destinadas a atacar a la Subversión y que digan relación con nuestros países.

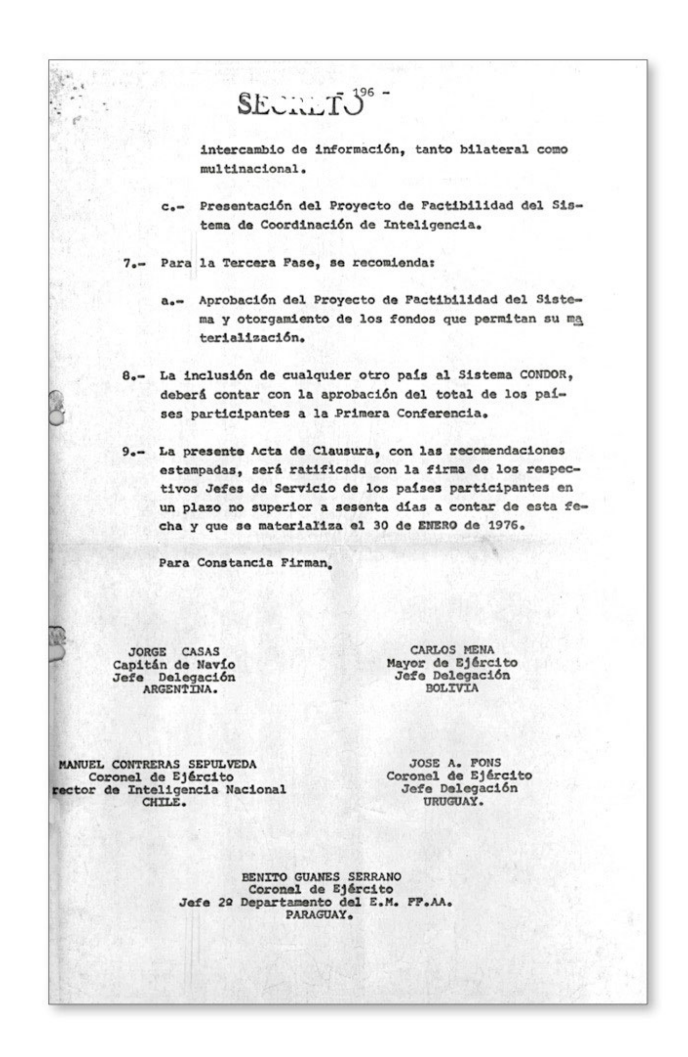
k.- Recomendamos, realizar la próxima Conferencia, una semana antes a la Reunión de Comandantes en Jefe del Ejército, teniendo como país Sede Chile y a la cual cada país se hará representar por no más de tres delegados.

l.- El presente Organismo se denominará CONDOR, aprobado por unanimidad, conforme a la moción presentada por la Delegación de Uruguay en homenaje al país Sede.

6.- Para la Segunda Fase, se recomienda:

a.- Evaluar los resultados de la Primera Fase y proponer antecedentes que faciliten la elaboración del Proyecto de factibilidad del Sistema en discusión.

b.- Incrementación de los Sistemas de Comunicación y enlaces que permitan agilizar los



SECRETO - 196 -

intercambio de información, tanto bilateral como multinacional.

c.- Presentación del Proyecto de Factibilidad del Sistema de Coordinación de Inteligencia.

7.- Para la Tercera Fase, se recomienda:

a.- Aprobación del Proyecto de Factibilidad del Sistema y otorgamiento de los fondos que permitan su materialización.

8.- La inclusión de cualquier otro país al Sistema CONDOR, deberá contar con la aprobación del total de los países participantes a la Primera Conferencia.

9.- La presente Acta de Clausura, con las recomendaciones estampadas, será ratificada con la firma de los respectivos Jefes de Servicio de los países participantes en un plazo no superior a sesenta días a contar de esta fecha y que se materializa el 30 de ENERO de 1976.

Para Constancia Firman,

JORGE CASAS
Capitán de Navío
Jefe Delegación
ARGENTINA.

CARLOS MENA
Mayor de Ejército
Jefe Delegación
BOLIVIA

MANUEL CONTRERAS SEPULVEDA
Coronel de Ejército
rector de Inteligencia Nacional
CHILE.

JOSE A. FONS
Coronel de Ejército
Jefe Delegación
URUGUAY.

BENITO GUANES SERRANO
Coronel de Ejército
Jefe 2º Departamento del E.M. FF.AA.
PARAGUAY.

Documento 3. CIA, secreto: Reporte «Acuerdo de países de Cóndor en mayo de 1976 para formar una unidad para operar en contra de izquierdistas en Francia», 16 de febrero de 1977. (2 páginas)

3.5(c)

[redacted]

3.5(c)

3.5(c)

SECRET
(classification)

[redacted]

1. DURING A CONDOR CONFERENCE HELD IN SANTIAGO, CHILE, IN LATE-MAY 1976, CONDOR PROPOSED THE ESTABLISHMENT OF A UNIT DESIGNED TO CONDUCT PHYSICAL ATTACKS AGAINST MEMBERS OF THE REVOLUTIONARY COORDINATING JUNTA (JCR) AND JCR SUPPORTERS IN FRANCE. ALL CONDOR COUNTRIES AGREED TO PARTICIPATE IN THE NEW UNIT, WHICH WAS GIVEN THE CODE NAME "TESEO." HOWEVER, BOLIVIA LATER DECLINED TO PARTICIPATE IN TESEO. ([redacted] COMMENT: BOLIVIA PROBABLY WITHDREW AS A RESULT OF A LACK OF FUNDS FOR CONTRIBUTION TO TESEO AND BECAUSE OF THE FACT THAT THE PRINCIPAL LEFTIST TARGETS OF CONCERN TO BOLIVIA ARE LOCATED IN PERU RATHER THAN FRANCE. IT IS NOT KNOWN IF ANY OF THE OTHER CONDOR COUNTRIES LATER WITHDREW THEIR SUPPORT FROM TESEO.) ([redacted] COMMENT: IN MID-SEPTEMBER 1976 [redacted] BOLIVIA WOULD NOT JOIN TESEO BECAUSE OF THE ADVERSE INTERNATIONAL REACTION THAT MIGHT RESULT IF SOME VIOLENT ACTIVITIES WERE TRACED BACK TO CONDOR COUNTRIES. BOLIVIA HAD BEEN ASKED TO CONTRIBUTE A SUM OF MONEY TO THE TESEO PROJECT WHICH WAS WELL WITHIN BOLIVIA'S MEANS HAD IT WISHED TO PARTICIPATE.) ([redacted] COMMENT: [redacted] AT A MEETING OF OPERATION CONDOR FROM 31 MAY TO 2 JUNE 1976 IN SANTIAGO, URUGUAY AGREED TO OPERATE COVERTLY IN PARIS WITH THE ARGENTINES AND THE

3.3(b)(1) 3.3(b)(1) 3.3(b)(1)

3.5(c)

[redacted]

3.5(c)

[redacted]

3.5(c)

SECRET
(classification) [redacted]

THIS DOCUMENT IS <u>NOT</u> TO BE REPRODUCED 3.3(b)(1)

CHILEANS AGAINST THE JCR AND OTHER TERRORISTS. [redacted]

3.3(b)(1) 2. EACH CONDOR COUNTRY WHICH AGREED TO PARTICIPATE IN TESEO WAS TO CONTRIBUTE MONEY FOR THE PROJECT AND SEND TWO REPRESENTATIVES TO ARGENTINA IN SEPTEMBER 1976 FOR TWO MONTHS TRAINING. UPON COMPLETION OF THEIR TRAINING, A TEAM WAS TO BE SENT TO FRANCE TO CONDUCT OPERATIONS FOR ABOUT ONE MONTH. ([redacted] COMMENT: [redacted] 3.3(b)(1) [redacted] THE TESEO TRAINING DID TAKE PLACE IN ARGENTINA. HOWEVER, 3.3(b)(1) THE PARTICIPATING COUNTRIES ARE UNKNOWN AND IT IS NOT KNOWN IF THE TEAM WAS ACTUALLY SENT TO FRANCE TO CONDUCT OPERATIONS.) [redacted] COMMENT: [redacted] A TRAINING COURSE WAS TO BE GIVEN IN BUENOS AIRES FOR THOSE CONDOR OFFICERS WHO WERE TO BE ASSIGNED TO EUROPE.)

[redacted]

3.5(c)
3.3(b)(1)

Documento 4. CIA, secreto: Reporte de inteligencia: «Texto del acuerdo de los países de [la Operación] Cóndor que regula sus blancos subversivos», 16 de agosto de 1977. (6 páginas)

DIRECTORATE OF OPERATIONS

Intelligence Information Report

WARNING NOTICE
SENSITIVE INTELLIGENCE SOURCES AND METHODS INVOLVED

Classified by [illegible] Impossible to determine date of automatic declassification.

FURTHER DISSEMINATION AND USE OF THIS INFORMATION SUBJECT TO CONTROLS STATED AT BEGINNING AND END OF REPORT.

THIS IS AN INFORMATION REPORT, NOT FINALLY EVALUATED INTELLIGENCE

3.5(c)

~~SECRET~~

REPORT NO. [redacted]

DATE DISTR. 16 AUGUST 1977

REPORT CLASS ~~SECRET~~--WARNING NOTICE-
SENSITIVE INTELLIGENCE SOURCES AND METHODS INVOLVED [redacted]

3.5(c)
3.5(c)

[redacted]

COUNTRY : LATIN AMERICA [redacted]

[redacted] 3.3(b)(1)

SUBJECT : TEXT OF THE AGREEMENT BY CONDOR COUNTRIES REGULATING THEIR SUBVERSIVE TARGETS.

[redacted]

3.3(b)(1)

SUMMARY: THE TEXT OF THE AGREEMENT BY CONDOR COUNTRIES REGULATING THEIR OPERATIONS AGAINST SUBVERSIVE TARGETS IS DATED SEPTEMBER 1976. IT PROVIDES GENERAL GUIDELINES FOR OVERALL PLANNING OF THOSE OPERATIONS TO BE UNDERTAKEN, A STAFFING OUTLINE, FINANCING, LOGISTICS, SELECTION OF TARGETS, COMMUNICATION AND LIAISON, TRAINING AND COMPARTMENTATION. END SUMMARY.

~~SECRET~~

3.5(c)

[redacted] (For Field Distribution see final paragraph)

3792167 - 7

FULL TEXT COPY DO NOT RELEASE

~~265~~ (270)

WARNING NOTICE
SENSITIVE INTELLIGENCE SOURCES AND METHODS INVOLVED

3.5(c)

FURTHER DISSEMINATION AND USE OF THIS INFORMATION SUBJECT TO CONTROLS STATED AT BEGINNING AND END OF REPORT.

[redacted]

~~SECRET~~

3.3(b)(1) 1. [redacted] COMMENT: IT IS NOT KNOWN WHETHER THE DOCUMENT DESCRIBED BELOW, WHICH IS DATED SEPTEMBER 1976, IS STILL CURRENT OR WHETHER IT IS NOW OBSOLETE. CONDOR IS THE NAME GIVEN TO A COOPERATIVE ARRANGEMENT OF INTELLIGENCE SERVICES WHICH INCLUDES CHILE, ARGENTINA, PARAGUAY, URUGUAY, AND TO SOME EXTENT BOLIVIA AND BRAZIL.)

2. THE FOLLOWING IS THE TEXT OF A CONDOR DOCUMENT, DATED SEPTEMBER 1976, ENTITLED "TESEO REGULATION, OPERATIONS CENTER:"

" I. MISSION:

OVERALL PLANNING FOR THE EXECUTION OF THOSE OPERATIONS TO BE UNDERTAKEN.

1. DETERMINE THE TARGETS IN ACCORDANCE WITH THE REQUESTS SUBMITTED BY INTERESTED PARTIES, GIVING PRIORITY AND OPPORTUNITIES AS APPROPRIATE.

2. DETERMINE WHAT INSTRUCTIONS ARE TO BE GIVEN TO BOTH THE INTELLIGENCE AND OPERATIONAL TEAMS.

3. ADMINISTER AVAILABLE MATERIAL AND HUMAN RESOURCES WITH COMPLETE FREEDOM.

4. FORMULATE THE NECESSARY OPERATIONAL REQUIREMENTS WHICH WILL RECEIVE PRIORITY ATTENTION FROM MEMBER SERVICES.

5. REPRESENTATIVE SERVICES WILL, UPON REQUEST, PUT WHATEVER MEANS ARE AVAILABLE TO THEM AT THE DISPOSAL OF THE OPERATIONS CENTER FOR USE ABROAD.

II. PERSONNEL:

THE PERSONNEL MAKING UP OPERATION TESEO WILL BE COMPOSED OF THE FOLLOWING:

1. THE OPERATIONS CENTER: WITH HEADQUARTERS AT CONDOR 1 (ARGENTINA) WHICH IS MADE UP OF PERMANENT REPRESENTATIVES FROM EACH PARTICIPATING SERVICE.

2. INTELLIGENCE TEAMS: MADE UP FROM PERSONNEL FROM MEMBER COUNTRIES.

3. OPERATIONAL TEAMS: MADE UP FROM PERSONNEL FROM

3.5(c)

4. RESERVE TEAMS: MADE UP FROM PERSONNEL FROM PARTICIPATING COUNTRIES.

WITH THE EXCEPTION OF THE PERMANENT REPRESENTATIVES TO THE OPERATIONS CENTER, THE PERSONNEL COMPRISING THE INTELLIGENCE, OPERATIONAL AND RESERVE TEAMS WILL ONLY COME TO THE CENTER UPON REQUEST OF THE LATTER.

THE MINIMUM NUMBER OF PEOPLE FURNISHED BY EACH REPRESENTATIVE SERVICE WILL, WHERE POSSIBLE, BE FOUR INDIVIDUALS, WITH A FEMALE EVENTUALLY BEING INCLUDED. EACH COUNTRY SHOULD HAVE A SIMILAR TEAM IN RESERVE READY TO COVER ANY UNFORESEEN SITUATION THAT MIGHT ARISE.

III. FINANCES:

THE FUNDS FOR OPERATION TESEO WILL BE ADMINISTERED BY THE OPERATIONS CENTER WHICH WILL DETERMINE HOW THEY ARE TO BE USED. AS SUCH, THE FOLLOWING IS ESTABLISHED:

1. THE ADMINISTRATION OF EXPENSES INCURRED BY THE OPERATIONS CENTER WILL BE THE RESPONSIBILITY OF THE HEADQUARTERS COUNTRY.

2. A COMMON FUND COMPOSED OF $10,000 DONATIONS FROM EACH MEMBER COUNTRY IS ESTABLISHED FOR THE PURPOSE OF OFFSETTING OPERATIONAL EXPENSES. THIS FUND WILL BE REPLENISHED IN EQUAL PARTS AT THE END OF EACH OPERATION DURING A PERIOD NOT TO EXCEED 15 DAYS.

3. A MONTHLY DUES OF $200 MONTHLY IS ESTABLISHED BEGINNING 30 SEPTEMBER 1976, PAYABLE MONTHLY BY EACH OF THE PARTICIPATING SERVICES, PRIOR TO THE 30TH OF EACH MONTH FOR THE PURPOSE OF MEETING FUNCTIONAL AND MAINTENANCE EXPENSES OF THE OPERATIONS CENTER.

4. OPERATIONAL COSTS ABROAD ARE ESTIMATED AT $3,500 PER PERSON FOR TEN DAYS, WITH AN ADDITIONAL $1,000 THE FIRST TIME OUT FOR CLOTHING ALLOWANCE.

5. THE ACCOUNTING FOR EXPENSES INCURRED WILL BE THE RESPONSIBILITY OF THE HEADQUARTERS COUNTRY WHO WILL PRESENT SAME TO THE MEMBER COUNTRIES FOR THEIR APPROVAL.

6. THE PERMANENT REPRESENTATIVES TO THE OPERATIONS CENTER WILL BE RESPONSIBLE FOR APPROACHING THEIR RESPECTIVE SERVICES FOR THE REPLENISHMENT OF OPERATIONAL FUNDS EXPENDED AS WELL AS FOR THOSE NECESSARY TO COVER FUNCTIONAL AND MAINTENANCE EXPENSES OF THE OPERATIONS CENTER.

7. AT THE END OF EACH OPERATION, EACH TEAM INVOLVED IN THE OPERATION WILL RENDER AN ACCOUNTING OF ALL EXPENSES INCURRED.

IV. MEANS:

THE MEANS NECESSARY FOR THE DEVELOPMENT OF OPERATIONS WILL BE FURNISHED BY THE OPERATIONS CENTER. IN THE EVENT THE LATTER IS UNABLE TO DO SO, MEMBER SERVICES WILL BE ASKED TO PUT THESE MEANS AT THE DISPOSAL OF THE CENTER. IF THE SERVICES ARE UNABLE TO COME UP WITH THEM, THE NECESSARY FUNDS TO PURCHASE THEM WILL BE OBTAINED FROM EACH SERVICE IN EQUAL PARTS. THE MEANS CONCERNED WOULD BE:

A. ARMS AND AMMUNITION
B. EXPLOSIVES AND ACCESSORIES
C. DOCUMENTATION
D. CLOTHING AND OTHER APPAREL
E. ELECTRONIC EQUIPMENT
F. COMMUNICATIONS EQUIPMENT
G. MISCELLANEOUS.

V. SYSTEM OF WORK:

1. THE WORK TEAMS WILL BE MADE UP OF MEMBERS OF ONE OR MORE SERVICES AND IN ACCORDANCE WITH THEIR EXPERIENCE, PARTICULAR QUALIFICATIONS AND THE CHARACTERISTICS OF THE OBJECTIVE.

2. THE SYSTEM OF WORK AS FAR AS TARGETS ARE CONCERNED IS AS FOLLOWS:

3.5(c)

~~SECRET~~

- DETERMINATION OF THE TARGET AND OPPORTUNITY: THIS IS THE RESPONSIBILITY OF THE OPERATIONS CENTER.

IDENTIFICATION OF THE TARGET: THIS IS THE RESPONSIBILITY OF THE INTELLIGENCE TEAM WHICH SHOULD IDENTIFY HIM, LOCATE HIM, MONITOR HIM, COMMUNICATE WITH THE OPERATIONS CENTER, WITHDRAW (ALL EXCEPT ONE WHO WILL MAKE CONTACT WITH THE OPERATIONAL TEAM), AND WITHDRAWAL OF THE CONTACT MAN ONCE THE TARGET HAS BEEN IDENTIFIED TO THE OPERATIONAL TEAM.

EXECUTION OF THE TARGET: THIS IS THE RESPONSIBILITY OF THE OPERATIONAL TEAM WHICH WILL (A) INTERCEPT THE TARGET, (B) CARRY OUT THE OPERATION, AND (C) ESCAPE. WITH THE EXCEPTION OF THE TEAM LEADERS, THE MEMBERS OF THE INTELLIGENCE AND OPERATIONAL TEAMS SHOULD NOT KNOW EACH OTHER FOR SECURITY AND FUNCTIONAL REASONS.

VI. COMMUNICATIONS AND LIAISON:

1. THE CONDORTEL COMMUNICATIONS SYSTEM WILL BE THE NET USED BY THE OPERATIONS CENTER IN ITS COMMUNICATIONS WITH EACH PARTICIPATING SERVICE.

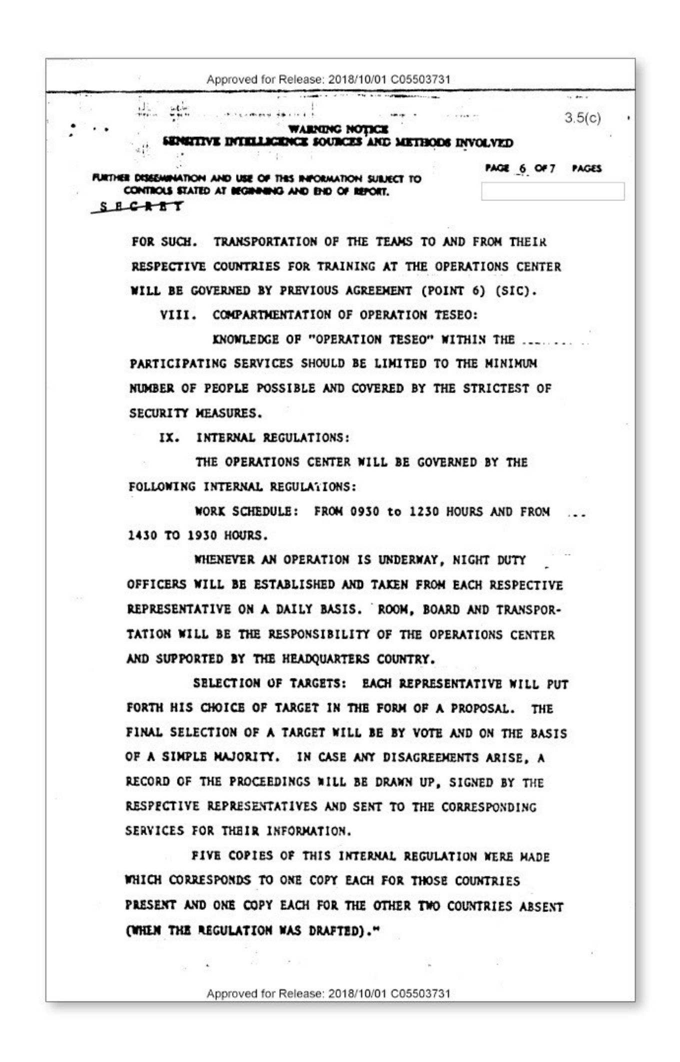
2. COMMUNICATIONS FROM ABROAD WILL BE EITHER TELEPHONIC OR CABLE IN A PREVIOUSLY AGREED UPON LANGUAGE.

3. EXPENSES INCURRED FOR SAME WILL BE CHARGED TO THE OPERATIONS CENTER.

4. ANY LIAISON NECESSARY BETWEEN THE PARTICIPATING COUNTRIES FOR THE FURNISHING OF DOCUMENTATION AND OTHER MATERIAL WILL BE EITHER VIA DIPLOMATIC POUCH OR SELECTED DELEGATES WHO WILL EMPLOY MAXIMUM SECURITY MEASURES AND COVER FOR SUCH CONTACT.

VII. TRAINING OF THE TEAMS:

THE PROGRAMMING OF TRAINING FOR BOTH THE INTELLIGENCE AND OPERATIONAL TEAMS IS THE RESPONSIBILITY OF THE OPERATIONS CENTER WHICH WILL REQUIRE, IN ACCORDANCE WITH THE CAPABILITY OF EACH PARTICIPATING SERVICE, THAT THE LATTER [illegible] INSTRUCTORS, FUNDS, AND THE NECESSARY INSTALLATIONS


Approved for Release: 2018/10/01 C05503731

3.5(c)

WARNING NOTICE
SENSITIVE INTELLIGENCE SOURCES AND METHODS INVOLVED

PAGE 6 OF 7 PAGES

FURTHER DISSEMINATION AND USE OF THIS INFORMATION SUBJECT TO CONTROLS STATED AT BEGINNING AND END OF REPORT.

S E C R E T

FOR SUCH. TRANSPORTATION OF THE TEAMS TO AND FROM THEIR RESPECTIVE COUNTRIES FOR TRAINING AT THE OPERATIONS CENTER WILL BE GOVERNED BY PREVIOUS AGREEMENT (POINT 6) (SIC).

VIII. COMPARTMENTATION OF OPERATION TESEO:

KNOWLEDGE OF "OPERATION TESEO" WITHIN THE PARTICIPATING SERVICES SHOULD BE LIMITED TO THE MINIMUM NUMBER OF PEOPLE POSSIBLE AND COVERED BY THE STRICTEST OF SECURITY MEASURES.

IX. INTERNAL REGULATIONS:

THE OPERATIONS CENTER WILL BE GOVERNED BY THE FOLLOWING INTERNAL REGULATIONS:

WORK SCHEDULE: FROM 0930 to 1230 HOURS AND FROM 1430 TO 1930 HOURS.

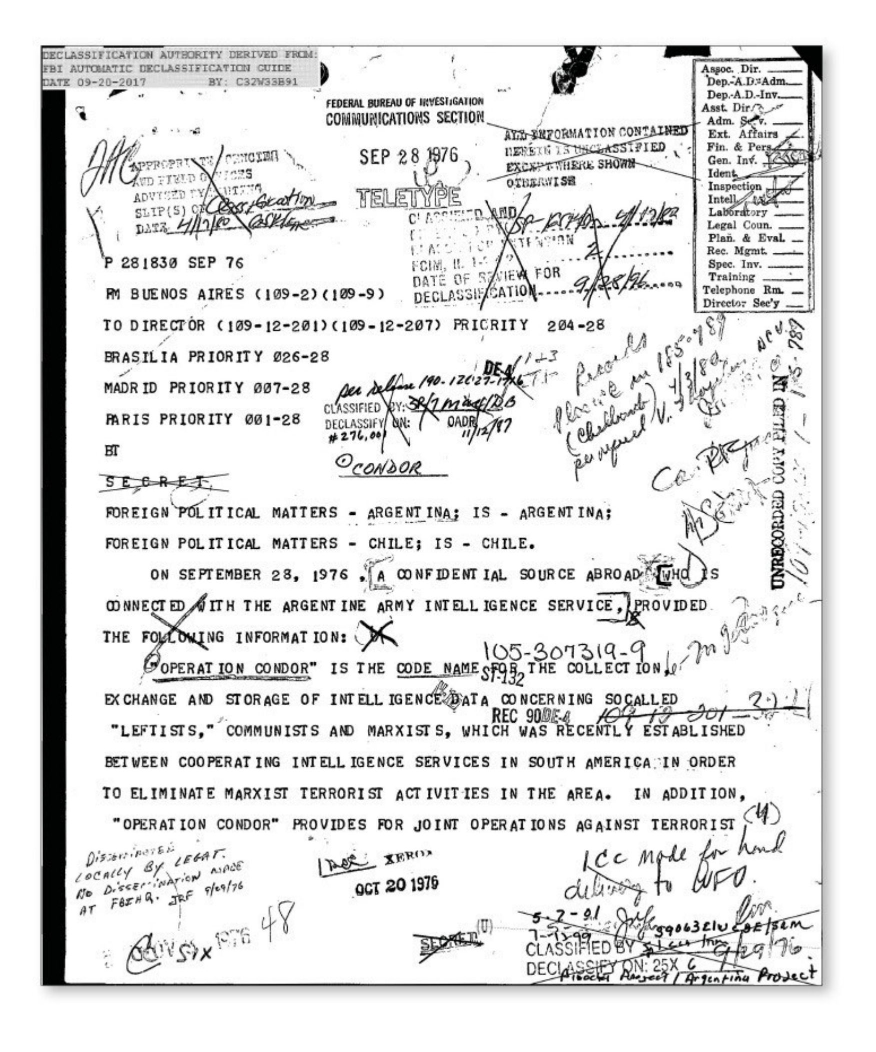
WHENEVER AN OPERATION IS UNDERWAY, NIGHT DUTY OFFICERS WILL BE ESTABLISHED AND TAKEN FROM EACH RESPECTIVE REPRESENTATIVE ON A DAILY BASIS. ROOM, BOARD AND TRANSPORTATION WILL BE THE RESPONSIBILITY OF THE OPERATIONS CENTER AND SUPPORTED BY THE HEADQUARTERS COUNTRY.

SELECTION OF TARGETS: EACH REPRESENTATIVE WILL PUT FORTH HIS CHOICE OF TARGET IN THE FORM OF A PROPOSAL. THE FINAL SELECTION OF A TARGET WILL BE BY VOTE AND ON THE BASIS OF A SIMPLE MAJORITY. IN CASE ANY DISAGREEMENTS ARISE, A RECORD OF THE PROCEEDINGS WILL BE DRAWN UP, SIGNED BY THE RESPECTIVE REPRESENTATIVES AND SENT TO THE CORRESPONDING SERVICES FOR THEIR INFORMATION.

FIVE COPIES OF THIS INTERNAL REGULATION WERE MADE WHICH CORRESPONDS TO ONE COPY EACH FOR THOSE COUNTRIES PRESENT AND ONE COPY EACH FOR THE OTHER TWO COUNTRIES ABSENT (WHEN THE REGULATION WAS DRAFTED)."

Approved for Release: 2018/10/01 C05503731

Documento 5. FBI, Cablegrama secreto sobre el asesinato de Orlando Letelier y la «tercera fase» de la Operación Cóndor: «Chilbom», 28 de septiembre de 1976. (4 páginas)



DECLASSIFICATION AUTHORITY DERIVED FROM:
FBI AUTOMATIC DECLASSIFICATION GUIDE
DATE 09-20-2017 BY: C32W33B91

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
COMMUNICATIONS SECTION

SEP 28 1976

TELETYPE

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
EXCEPT WHERE SHOWN
OTHERWISE

APPROPRIATE AGENCIES
AND FIELD OFFICES
ADVISED BY ROUTING
SLIP(S) OF Classification
DATE 4/17/80 ask/tom

CLASSIFIED AND ...
DATE OF REVIEW FOR
DECLASSIFICATION 9/28/96

Assoc. Dir.
Dep.-A.D.-Adm.
Dep.-A.D.-Inv.
Asst. Dir.:
Adm. Serv.
Ext. Affairs
Fin. & Pers.
Gen. Inv.
Ident.
Inspection
Intell.
Laboratory
Legal Coun.
Plan. & Eval.
Rec. Mgmt.
Spec. Inv.
Training
Telephone Rm.
Director Sec'y

P 281830 SEP 76

FM BUENOS AIRES (109-2)(109-9)

TO DIRECTOR (109-12-201)(109-12-207) PRIORITY 204-28

BRASILIA PRIORITY 026-28

MADRID PRIORITY 007-28

PARIS PRIORITY 001-28

BT

CLASSIFIED BY:
DECLASSIFY ON: OADR

(U) CONDOR

~~SECRET~~

FOREIGN POLITICAL MATTERS - ARGENTINA; IS - ARGENTINA;

FOREIGN POLITICAL MATTERS - CHILE; IS - CHILE.

ON SEPTEMBER 28, 1976, A CONFIDENTIAL SOURCE ABROAD WHO IS CONNECTED WITH THE ARGENTINE ARMY INTELLIGENCE SERVICE, PROVIDED THE FOLLOWING INFORMATION:

"OPERATION CONDOR" IS THE CODE NAME FOR THE COLLECTION, EXCHANGE AND STORAGE OF INTELLIGENCE DATA CONCERNING SOCALLED "LEFTISTS," COMMUNISTS AND MARXISTS, WHICH WAS RECENTLY ESTABLISHED BETWEEN COOPERATING INTELLIGENCE SERVICES IN SOUTH AMERICA IN ORDER TO ELIMINATE MARXIST TERRORIST ACTIVITIES IN THE AREA. IN ADDITION, "OPERATION CONDOR" PROVIDES FOR JOINT OPERATIONS AGAINST TERRORIST

105-307319-9

REC 90

UNRECORDED COPY FILED IN

DISSEMINATED LOCALLY BY LEGAT. NO DISSEMINATION MADE AT FBIHQ. JRF 9/29/76

XEROX
OCT 20 1976

ICC made for hand delivery to WFO.

~~SECRET~~ (U)

CLASSIFIED BY
DECLASSIFY ON: 25X 6
Pinochet Project / Argentina Project

TARGETS IN MEMBER COUNTRIES OF "OPERATION CONDOR." CHILE IS THE CENTER FOR "OPERATION CONDOR" AND IN ADDITION TO CHILE ITS MEMBERS INCLUDE ARGENTINA, BOLIVIA, PARAGUAY, AND URUGUAY. BRAZIL ALSO HAS TENTATIVELY AGREED TO SUPPLY INTELLIGENCE INPUT FOR "OPERATION CONDOR." MEMBERS OF "OPERATION CONDOR" SHOWING THE MOST ENTHUSIASM TO DATE HAVE BEEN ARGENTINA, URUGUAY AND CHILE. THE LATTER THREE COUNTRIES HAVE ENGAGED IN JOINT OPERATIONS, PRIMARILY IN ARGENTINA, AGAINST THE TERRORIST TARGET. DURING THE WEEK OF SEPTEMBER 20, 1976, THE DIRECTOR OF THE ARGENTINE ARMY INTELLIGENCE SERVICE TRAVELED TO SANTIAGO, CHILE, TO CONSULT WITH HIS CHILEAN COUNTERPARTS WITH RESPECT TO "OPERATION CONDOR." (U) (X)

A THIRD AND MOST SECRET PHASE OF "OPERATION CONDOR" INVOLVES THE FORMATION OF SPECIAL TEAMS FROM MEMBER COUNTRIES WHO ARE TO TRAVEL ANYWHERE IN THE WORLD TO NON-MEMBER COUNTRIES TO CARRY OUT SANCTIONS UP TO ASSASSINATION AGAINST TERRORISTS OR SUPPORTERS OF TERRORIST ORGANIZATIONS FROM "OPERATION CONDOR" MEMBER COUNTRIES. FOR EXAMPLE, SHOULD A TERRORIST OR A SUPPORTER OF A TERRORIST ORGANIZATION FROM A MEMBER COUNTRY OF "OPERATION CONDOR" BE LOCATED IN A EUROPEAN COUNTRY, A SPECIAL TEAM FROM "OPERATION CONDOR" (U)



WOULD BE DISPATCHED TO LOCATE AND SURVEIL THE TARGET. WHEN THE LOCATION AND SURVEILLANCE OPERATION HAS TERMINATED, A SECOND TEAM FROM "OPERATION CONDOR" WOULD BE DISPATCHED TO CARRY OUT THE ACTUAL SANCTION AGAINST THE TARGET. SPECIAL TEAMS WOULD BE ISSUED FALSE DOCUMENTATION FROM MEMBER COUNTRIES OF "OPERATION CONDOR" AND MAY BE COMPOSED EXCLUSIVELY OF INDIVIDUALS FROM ONE MEMBER NATION OF "OPERATION CONDOR" OR MAY BE COMPOSED OF A MIXED GROUP FROM VARIOUS "OPERATION CONDOR" MEMBER NATIONS. TWO EUROPEAN COUNTRIES, SPECIFICALLY MENTIONED FOR POSSIBLE OPERATIONS UNDER THE THIRD PHASE OF "OPERATION CONDOR" WERE FRANCE AND PORTUGAL. (U)

A SPECIAL TEAM HAS BEEN ORGANIZED IN ARGENTINA MADE UP OF MEMBERS OF THE ARGENTINE ARMY INTELLIGENCE SERVICE AND THE STATE SECRETARIAT FOR INFORMATION (SIDE) WHICH ARE BEING PREPARED FOR POSSIBLE FUTURE ACTION UNDER THE THIRD PHASE OF "OPERATION CONDOR." (X)

~~CLASSIFIED BY 5931 XGDS-2 INDEFINITE.~~

Arg.

ADMINISTRATIVE - SOURCE IS DR. ARTURO HORACIO POIRE, WHO IS A MEMBER OF THE ARGENTINE SPECIAL GROUP, WHICH WILL POSSIBLY PARTICIPATE IN THE THIRD PHASE OF "OPERATION CONDOR." S



COORDINATED LOCALLY. (U)

IT SHOULD BE NOTED THAT NO INFORMATION HAS BEEN DEVELOPED INDICATING THAT SANCTIONS UNDER THE THIRD PHASE OF "OPERATION CONDOR" HAVE BEEN PLANNED TO BE CARRIED OUT IN THE UNITED STATES; HOWEVER, IT IS NOT BEYOND THE REALM OF POSSIBILITY THAT THE RECENT ASSASSINATION OF ORLANDO LETELIER IN WASHINGTON, D. C. MAY HAVE BEEN CARRIED OUT AS A THIRD PHASE ACTION OF "OPERATION CONDOR." AS NOTED ABOVE, INFORMATION AVAILABLE TO THE SOURCE INDICATES THAT PARTICULAR EMPHASIS WAS PLACED ON THE THIRD PHASE ACTIONS OF "OPERATION CONDOR" IN EUROPE, SPECIFICALLY FRANCE AND PORTUGAL. THIS OFFICE WILL REMAIN ALERT FOR ANY INFORMATION INDICATING THAT THE ASSASSINATION OF LETELIER MAY BE PART OF "OPERATION CONDOR" ACTION. (U)

BT

(U)

7

El ocaso del dictador: Del terrorismo a la transición

Todos los generales son perfectamente conscientes de que las pruebas que tengamos contra Contreras incriminarán también a Pinochet, con quien desayunaba a diario y a quien debía de tener, sin duda, informado de cuanto hacía.

Memorando ultrasecreto de la Casa Blanca, junio de 1978.

Plan para perturbar el plebiscito de Chile: Nos consta, por informes serios de los servicios de inteligencia, que ciertos miembros del estamento militar chileno pueden, valiéndose del pretexto de la violencia, tratar de anular el plebiscito que se celebrará el miércoles en caso de que Pinochet parezca ir perdiendo.

Informe vespertino de la INR a Ronald Reagan, octubre de 1988.

El asesinato de Letelier y Moffitt dominaría las relaciones entre Estados Unidos y Chile durante más de un decenio. Ligado al final de la época de Nixon, Ford y Kissinger y a la elección de un «presidente pro derechos humanos» como Jimmy Carter, el atentado supuso el inicio de una larga transformación de la política estadounidense con respecto al régimen de

Pinochet. Carter, que durante su campaña criticó con dureza al gabinete de Ford por derrocar «un gobierno elegido democráticamente y ayudar a la instauración de una dictadura militar», concedió una gran importancia a los derechos humanos en cuanto elemento de peso en la política exterior de Estados Unidos, si bien no hizo responder al régimen por las atrocidades cometidas en Washington. El gobierno de Reagan trató de recuperar las relaciones cordiales con el gobierno militar y topó con que la política de Estados Unidos se encontrara atrapada por la realidad del acto de terrorismo perpetrado por Pinochet en suelo norteamericano y, al mismo tiempo, cada vez más amenazada por el afán con que buscaba el general perpetuarse en el poder. Durante los diez años que transcurrieron entre 1978, año en que se presentaron cargos de forma oficial contra los chilenos por el asesinato, y 1988, cuando el pueblo decidió en las urnas acabar con el régimen militar de forma pacífica, la actitud de Washington evolucionó de forma lenta hacia un rechazo inequívoco de la dictadura chilena, que en ningún momento había dejado de dar muestras de una sangrienta violencia.

El Watergate de Pinochet

Más de un año después de su ejecución, parecía que el régimen de Pinochet lograría salir impune del acto terrorista más atroz cometido en Washington en el siglo XX. Pocos días después del doble asesinato, los confidentes de la CIA señalaron a Pinochet como responsable, en tanto que el FBI identificó a la Dina y la Operación Cóndor como principales sospechosos. No obstante, en septiembre de 1977, el gobierno de Carter invitó al general chileno a asistir a la capital estadounidense para firmar, junto con otros dirigentes latinoamericanos, el tratado del canal de Panamá. En el transcurso de una famosa reunión celebrada por ambos en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos evitó mencionar el caso Letelier y Moffitt, y solo presionó levemente a su invitado en lo tocante a la cuestión de los derechos humanos. Según un memorando de conversación titulado «Encuentro bilateral de los presidentes Carter y Pinochet», Carter aseguró que no quería que nada enturbiase «la amistad tradicional de Estados Unidos y Chile». Pinochet, por su parte, regresó a Santiago «aliviado y encantado por lo vivido en Washington», en palabras de Thomas Boyatt,

subdirector de la embajada. «La reunión bilateral de los presidentes ha sido de gran ayuda para Pinochet».

Las autoridades estadounidenses necesitaron casi diecisiete meses para llevar la investigación del caso a territorio chileno. La colaboración de la CIA, el organismo que más pruebas guardaba en sus archivos de las operaciones de terrorismo internacional llevadas a cabo por Chile, fue, cuando menos, ambivalente. En octubre de 1976, la Casa Blanca solicitó al director de la CIA, George H.W. Bush, que recopilara «la información necesaria de los servicios de espionaje y contraespionaje en el extranjero» a fin de respaldar la investigación criminal. En el curso de los dos años siguientes, la CIA reunió inteligencia que establecía que Pinochet era el autor intelectual de un acto de terrorismo internacional en la capital de Estados Unidos. «Una revisión de nuestros archivos sobre el asesinato de Letelier ha aportado lo que consideramos evidencia convincente de que el presidente Pinochet ordenó personalmente a su jefe de inteligencia que llevara a cabo el asesinato», concluía más adelante un análisis secreto —«El rol de Pinochet en el asesinato de Letelier y el subsecuente encubrimiento»— de la Dirección de Inteligencia Nacional dentro de la CIA. «A su vez, tales archivos establecen claramente que, cuando la investigación posterior de las autoridades estadounidenses demostró que los responsables eran altos oficiales del Ejército y la inteligencia chilenos, Pinochet decidió aplicar el cerrojo al caso para ocultar su involucramiento en él y, en última instancia, para velar por su permanencia a la cabeza del país».

Las pesquisas en torno al asesinato de Orlando Letelier y Ronni Moffitt (caso conocido con el nombre en clave de «Chilbom») aparecen detalladas en Assassination on Embassy Row, de John Dinges y Saul Landau, y Laberinto, escrito por Taylor Branch y el fiscal encargado de esta causa, Eugene Propper. Baste aquí un breve resumen: durante el primer año, la investigación se centró en la comunidad de exiliados anticastristas residentes en Miami, grupo que el FBI conocía bien por su violencia terrorista. Finalmente, sin embargo, los agentes supieron, por mediación de sus confidentes, que el Movimiento Nacionalista Cubano había cometido el crimen a petición del régimen de Pinochet. El Departamento de Justicia planteó una serie de preguntas al gobierno chileno a mediados de 1977, y

hubo de esperar varios meses a que este nombrara a un investigador especial —ajeno a todo lo sucedido— encargado de buscar las respuestas. Por último, en febrero de 1978, el Departamento remitió una comisión rogatoria al régimen chileno por la que le rogaba formalmente que enviase las pruebas relativas a los contactos mantenidos con terroristas cubanos en el exilio y tratase de interrogar a los dos agentes chilenos que habían pedido en Paraguay visados estadounidenses para viajar a Washington en julio de 1976, antes de que se produjera el asesinato. Los funcionarios norteamericanos acompañaron la comunicación con sendas reproducciones de las fotografías que aparecían en los pasaportes de Juan Williams y Alejandro Romeral —nombres falsos de Michel Townley y Armando Fernández Larios—, fotocopiadas por George Landau cuando ocupaba el cargo de embajador estadounidense en Asunción.

El momento decisivo para el proceso llegó el 3 de marzo de 1978, cuando el FBI filtró dichas fotografías al periodista Jeremiah O'Leary y este las publicó en la primera plana de The Washington Star.[1] La prensa chilena no dudó en publicarlas también poco después, de tal manera que, llegado el día 6, fueron multitud las fuentes que habían identificado a Williams con un estadounidense afincado en Santiago llamado Michael Vernon Townley.

Los funcionarios del Departamento de Justicia solicitaron de inmediato la custodia de Townley en calidad de ciudadano norteamericano sospechoso de haber cometido un acto de terrorismo en Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades chilenas negaron tener conocimiento de su existencia y su paradero, al mismo tiempo que le proporcionaban refugio en su propio domicilio.[2] Los agentes del FBI y el fiscal Eugene Propper viajaron a Santiago para conminar a las autoridades chilenas a buscar al acusado. Los servicios de inteligencia del régimen acabaron por reconocer, tras una intensa presión diplomática, que Townley pertenecía a la Dina y se hallaba bajo custodia de su gobierno. Después de muchas maniobras dilatorias, el régimen accedió por fin a expulsarlo del país si Estados Unidos anunciaba públicamente que las autoridades estaban colaborando en la investigación y firmaba un acuerdo formal por el que se comprometía a emplear la información proporcionada por Townley solo en el proceso criminal relativo al caso Letelier y Moffitt.[3]

El 8 de abril, el régimen hizo que Townley subiera a un avión de las líneas aéreas ecuatorianas con destino a Miami acompañado por dos agentes del FBI. Durante el interrogatorio, facilitó a las autoridades estadounidenses y al investigador especial designado por los militares chilenos, el general Héctor Orozco, pruebas detalladas de la conspiración homicida. «El Sr. Townley ha implicado a los funcionarios de mayor graduación de la Dina, quienes, según su testimonio, ordenaron el asesinato del Sr. Letelier», comunicó Propper en un memorando secreto remitido al embajador Landau el 25 de abril. Su confesión llevó a Estados Unidos a presentar cargos contra tres oficiales de alto rango de la policía secreta de Chile —Contreras; su subordinado inmediato, Pedro Espinoza, y Fernández Larios— y cinco miembros del MNC el 1 de agosto de 1978.[4] A principios de septiembre, Washington solicitó formalmente la extradición de los tres miembros de la Dina.

La revelación de la complicidad del régimen en el asesinato de Letelier y Moffitt dio pie a una crisis extraordinaria en las relaciones entre Estados Unidos y Chile, así como a un grave escándalo en suelo chileno. «Estos espectaculares acontecimientos han provocado conjeturas acerca de la supervivencia del presidente Pinochet», escribieron los analistas de la CIA en el memorando secreto «Chile: Consecuencias del caso Letelier».[5] La amenaza que gravitaba sobre el gobierno pinochetista no procedía de la oposición popular, sino que se debía más bien a la disensión existente al interior de la base de poder del dictador: los militares chilenos. Muchos de los que formaban parte del gobierno despreciaban a Contreras por su enorme influencia y por el daño que estaba haciendo a la imagen del país, y estaban convencidos de que, si Pinochet conocía el complot, debía ser derrocado. Por otra parte, un grupo de militares estrechamente ligados a la Dina se oponía también a Pinochet por no dar pleno apoyo a Contreras, quien, a pesar de haber cesado en la dirección de la policía secreta, seguía siendo el consejero militar más cercano al dictador. El escándalo amenazaba con convertirse, para Pinochet, en un Watergate chileno.

El general era muy consciente de lo precario de su situación. En un brindis pronunciado ante numerosos embajadores durante una cena diplomática que organizó el 23 de junio de 1978, aludió sin circunloquios a la posibilidad de que lo obligasen a dimitir. En un informe de aquella velada titulado

«Conversación con Pinochet: Habla de irse», en el que el embajador Landau refería la charla privada de veinticinco minutos que mantuvo con él entrada la noche, podemos leer:

> Pinochet, que por lo común bebe muy poco, tomó dos vasos de whisky con soda. A medida que avanzaba la conversación, su cara se iba poniendo más roja y al final se mostró algo agresivo. Tenía el aspecto de un hombre abrumado por las preocupaciones, y el temor de ser sustituido por otros oficiales del Ejército parecía ofuscarle la mente.

Cuando, varios días después, lo hicieron regresar a Washington, Landau alertó al Consejo para la Seguridad Nacional que estaba cerca «el final de las relaciones entre Estados Unidos y Chile. El Ejército no va a tardar en darse cuenta de que el único modo de mejorar las relaciones de Chile con el resto del mundo es reemplazar a Pinochet».[6] Con todo, sus predicciones acerca de la caída del dictador demostraron ser prematuras.

Durante la segunda mitad de 1978, el general Pinochet puso en práctica una meditada estrategia sostenida por cuatro pilares y diseñada para encubrir los actos de terrorismo internacional perpetrados por su régimen y proteger a sus autores. El plan, según pudo saber la CIA, consistía en:

> a) Proteger al general Manuel Contreras de ser procesado y condenado por el asesinato de Letelier, toda vez que la supervivencia política de Pinochet depende de su futuro.
>
> b) Responder con evasivas cualquier nueva petición del gobierno de Estados Unidos que pueda servir para instruir un proceso contra Contreras u otros militares.
>
> c) Seguir «presionando» a los magistrados de la Corte Suprema para asegurarse de que se rechazan las solicitudes de extradición de ciudadanos chilenos cursadas tras la presentación anticipada de cargos.
>
> d) Seguir explotando el nacionalismo chileno con una campaña encubierta concebida para presentar la investigación del asesinato de Letelier como un acto político, un pretexto más para desestabilizar su régimen.[7]

La supervivencia de Pinochet dependía de que supiese distanciarse de Manuel Contreras, que a un tiempo era su consejero más próximo y la persona que podía vincularlo de forma directa al acto terrorista que puso fin a la vida de Letelier. Solo él sabía hasta qué punto estaba implicado el general en la autorización e instigación de dicho asesinato. Muy pocos ponían en duda (y la mayoría daba por hecho) que, si Contreras había dado el visto bueno a este crimen, había sido con su aprobación explícita. Un informe de la CIA advertía ya en mayo de la situación:

> Lo que oscurece el futuro de Pinochet es la posibilidad de que se relacione directamente al antiguo director de espionaje, el general Manuel Contreras, con el crimen. Es muy difícil que, en caso de que se revele públicamente su participación (bien porque él mismo la admita, bien porque salga a la luz ante un tribunal), Pinochet no se vea envuelto y, en consecuencia, su credibilidad quede dañada de forma irreparable ante el estamento militar. Ninguno de los que se han mostrado críticos con su gobierno y muy pocos de entre sus seguidores estarán dispuestos a creerse que Contreras actuó sin el beneplácito presidencial. Por todos es sabido que el antiguo director de la policía secreta le informaba directamente de [las] actividades [de la Dina], de las que el presidente tenía la responsabilidad exclusiva.

La lealtad a Pinochet no constituía, en opinión de quienes redactaron este informe, «garantía alguna de que Contreras vaya a ocultar detalles delicados en relación con las operaciones autorizadas por el presidente, más aún si piensa que lo van a usar de chivo expiatorio». Pinochet sabía, como dijo otro informante a la CIA, «que Contreras había entregado a un amigo cercano un maletín con documentos muy sensibles que hacían constar la responsabilidad del asesinato en el presidente, con instrucciones de hacerlos públicos si algo le sucedía al propio Contreras».

De hecho, las fuentes que poseía la Agencia Central de Inteligencia al interior de los círculos militares chilenos habían informado muy pronto que Contreras había empezado a tomar medidas para garantizar su propia inmunidad —y salvaguardar la de Pinochet— y estaba recogiendo los archivos de la Dina que implicaban al general para sacarlos en secreto del país. El 20 de abril, por ejemplo, embarcó, según un confidente, «un buen

número de valijas» que, se rumoreaba, contenían documentos de la Dirección de Inteligencia Nacional en el carguero Banndestein, que zarpó de Punta Arenas en dirección a un lugar no identificado de Europa.[8] Otra fuente distinta notificaría más tarde al personal militar estadounidense que Contreras había adoptado «precauciones extremas para evitar que el presidente Pinochet pudiese ser acusado de disponer o autorizar de forma directa» los actos de terrorismo internacional protagonizados por Chile. En un cablegrama titulado «Tentáculos de Contreras», la DIA señalaba lo siguiente:

> Todos los documentos gubernamentales relacionados con el asesinato de Letelier y Moffitt, cometido en 1976 en Washington, así como con la muerte del general Carlos Prats, predecesor de Pinochet en el puesto de comandante en jefe del Ejército, y su esposa en Buenos Aires, y con el atentado contra la vida del opositor al régimen Bernardo Leighton en Roma, en 1975, desaparecieron de los archivos de la Dina por obra de Contreras. (...) Tras hacer dos copias de cada documento, envió una a Alemania y otra a Paraguay para que se guardasen en un lugar seguro, en tanto que él conservaba los originales en su poder, almacenados en el sur de Chile.[9]

Contreras empleó estas pruebas para guardarse las espaldas, aun cuando Pinochet trataba de desligar su gobierno del antiguo director de la Dina. Ante la colosal presión que lo llevó a intentar apaciguar las críticas procedentes de dentro y fuera del país, el general había dispuesto el 21 de marzo la precipitada dimisión de aquel de las Fuerzas Armadas. El Ejército chileno hizo pública una declaración superficial en la que aseguraba que Contreras se había retirado voluntariamente del servicio activo. De cualquier modo, era evidente que este había hecho un pacto secreto con el general: este lo protegería de ser perseguido y Contreras, a cambio, guardaría para sí lo que sabía del papel desempeñado por Pinochet y colaboraría para ocultarlo todo.

Esta operación de encubrimiento comenzó a funcionar en serio después de que el general Héctor Orozco, investigador militar chileno, regresara a Santiago después de tomar declaración a Townley en Washington, en los primeros meses de 1978. Espinoza y Fernández Larios le confirmaron el

testimonio de Townley, y Orozco no dudó en presentar a Contreras las pruebas de la implicación de la Dina en el atentado. El 23 de junio, el mismo día que Pinochet aseguró al embajador Landau que su gobierno estaba haciendo cuanto estaba en sus manos para llegar al fondo del asesinato de Letelier, las fuentes de la CIA describieron así lo sucedido:

> Contreras admitió su culpabilidad, pero amenazó con declarar que se había limitado a cumplir órdenes de Pinochet en caso de que lo procesaran. También aseguró tener escondida a buen recaudo la documentación necesaria para respaldar su testimonio. El chantaje funcionó: como era de esperar, Orozco recibió órdenes de Pinochet para que aceptase la versión propuesta por Contreras (es decir, que había enviado a Townley y al capitán Armando Fernández Larios a Estados Unidos con el único cometido de investigar las actividades de Orlando Letelier y que el primero, obviamente, se había extralimitado a la hora de acatar las órdenes). (...) En consecuencia, se optó por ocultar los hechos.[10]

Desde ese momento, el general Orozco abandonó su investigación para convertirse en el coordinador del encubrimiento. En octubre, destruyó los testimonios de Espinoza y Fernández Larios y les ordenó que mintiesen a la Corte Suprema de Chile en su declaración del 17 de octubre.

Pinochet se aseguró personalmente de que dicho Tribunal denegara la solicitud de extradición cursada por Estados Unidos. En una fecha tan temprana como la del 31 de mayo de 1978, la CIA había obtenido información ultrasecreta acerca de la «Intercesión de Pinochet en la Corte Suprema a fin de evitar la extradición de funcionarios de su gobierno en relación con el caso Letelier».[11] En junio, el puesto de operaciones de la Agencia en Santiago hizo saber: «Pinochet ha manipulado, por mediación de su asesor legal, Hugo Rosende, a los jueces de la Corte Suprema y ahora puede estar seguro de que este desestimará la extradición de cualquier acusado chileno».

La participación personal del general a la hora de obstaculizar la acción de la justicia incluyó también la intimidación de los testigos. Así, cuando Fernández Larios, que había espiado a Letelier para obtener datos útiles

para su asesinato, decidió viajar a Washington y confesar ante las autoridades estadounidenses, Pinochet lo llamó al Ministerio de Defensa y lo conminó a guardar silencio. Le hizo saber que estaba informado de su deseo de ir a Estados Unidos y lo instó a ser «un buen soldado» y permanecer en su puesto. Le aseguró que, si esperaba y mantenía el tipo, aquel problema tendría un final feliz. Después de que Fernández Larios desertara a Estados Unidos a principios de 1987 y aportara evidencia incriminatoria contra su comandante en jefe, Pinochet lo definió como «un desertor» y barajó opciones homicidas para sostener el encubrimiento de su papel como cerebro maestro en un acto de terrorismo internacional en Washington. «[C]reemos que Pinochet puede estar buscando protegerse él mismo a cualquier costo», informó la CIA en una evaluación de carácter absolutamente confidencial, «posiblemente eliminando a Contreras».[12]

El intento de chantaje de Contreras

El plan de ocultación incluía también una amplia campaña de propaganda nacionalista destinada a convencer a los ciudadanos chilenos, tal como indicaron los confidentes de la CIA, de que Washington estaba «empleando la investigación relativa al asesinato de Orlando Letelier como medio para desestabilizar el gobierno chileno».[13] Con el objetivo de atraerse el respaldo del pueblo, el mismísimo Pinochet emprendió una serie de viajes políticos para denunciar a Washington por interferir en los asuntos internos de Chile. La campaña no se limitaba a acusar a Estados Unidos de intervencionismo, sino que también pretendía incluso culparlo del asesinato.

A pesar de que cada vez eran más las pruebas que demostraban la implicación de la Dina, Contreras consiguió que la prensa chilena se hiciese eco de la idea de que había sido la CIA, y no el gobierno de Chile, la autora del atentado. Desde mediados de 1978, él, sus abogados y otros altos funcionarios del país presentaron a Townley en repetidas ocasiones como un agente de la CIA con órdenes de infiltrarse en la Dina y poner al régimen en una situación comprometida. De igual modo, proporcionaron a los periodistas siniestros indicios sobre un «embajador extranjero» que había facilitado a Townley la entrada a Washington.

Estos argumentos cobraron fuerza gracias a varios hechos muy oportunos. Townley era estadounidense y había intentado, en efecto, formar parte de la CIA. Por otra parte, la embajada de Estados Unidos en Paraguay le había suministrado, al igual que a Armando Fernández Larios, un visado para viajar a Washington y visitar, supuestamente, a Vernon Walters, subdirector de la Agencia.[14] El hecho de que el embajador que había firmado estos documentos, George Landau, estuviese destinado en Santiago en el momento del escándalo facilitó aún más a Contreras su plan de confundir al público chileno.[15] «Contreras pretende basar su defensa en la afirmación de que Michael Townley y los exiliados cubanos envueltos en el crimen se encontraban bajo órdenes de la CIA y que esta había dispuesto el asesinato de Letelier con la intención de culpar a Pinochet y derrocarlo. También piensa implicar en este plan al embajador Landau», advirtió un informe de la oficina central de la Agencia. «Pese a que no hay nada de cierto, claro está, en su defensa, esta puede resultarnos muy embarazosa».[16]

En Washington, el personal del gobierno estadounidense dedicó un tiempo considerable a discutir el problema de Contreras. En una reunión celebrada el 21 de agosto por integrantes del Departamento de Justicia, la CIA y el Departamento de Estado, el fiscal Eugene Propper expuso «tres puntos esenciales por los que preocuparse: la relación de Contreras [con la CIA], el visado de pasaportes paraguayos por parte de Estados Unidos (...) y la relación de la Operación Cóndor con el caso».[17] El mismo grupo de funcionarios volvió a congregarse al día siguiente en la oficina del consejo general de la Agencia para estudiar sendos breves informes que había preparado esta acerca de la Operación Cóndor y la historia —mantenida en el mayor de los secretos— de las relaciones de enlace de la CIA con Contreras y su colaboración con la Dina.[18]

Llegados a este punto, el antiguo director de la Dirección de Inteligencia Nacional chilena, no contento con tratar de implicar en público a la Agencia Central de Inteligencia, amenazó en privado con revelar lo que sabía de las operaciones secretas conjuntas de la CIA y la Dina que tenían por objetivo a países vecinos de Latinoamérica. La noche del 23 de agosto hizo una llamada telefónica al domicilio del director del centro de operaciones de la Agencia en Santiago, Comer “Wiley” Gilstrap —o al de su subordinado

inmediato— con el fin de tratar «un asunto urgente», y el funcionario de la CIA accedió a recibir en su casa a Álvaro Puga, «confidente» de Contreras.

Puga sugirió la posibilidad de que Humberto Olavarría y Sergio Miranda, dos de los abogados de Contreras, viajasen a Washington a finales de agosto para «negociar» un acuerdo con la CIA, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia en torno al caso Letelier. Cuando el funcionario del puesto santiaguino relató la conversación al embajador Landau, «surgió la sospecha de que se trataba de un chantaje».

> En caso de tener que defenderse [—declaró Puga refiriéndose a Contreras—], se vería obligado a revelar detalles [dos líneas tachadas]. El que esta información se hiciese de dominio público le beneficiaría tan poco a él como a Chile, a o a otros países; pero, por desgracia, no le quedaba otra opción. En consecuencia, esperaba poder llegar a un entendimiento con Washington que permitiese evitar la necesidad de solicitar extradiciones y efectuar las subsiguientes audiencias públicas. [19]

El chantaje, según rememoró más tarde cierto funcionario estadounidense familiarizado con estas comunicaciones, consistía, en resumidas cuentas, en que, si el gobierno de Carter profundizaba en el caso Letelier, Contreras revelaría las operaciones de espionaje llevadas a cabo por la CIA en cierto país en colaboración con la Dina.[20] Pocas semanas más tarde, la embajada supo que su plan incluía «revelar los estrechos lazos que habían unido a la Dina y la CIA en el pasado, con nombres y pruebas».[21]

De cualquier modo —y eso es algo que los honra—, ninguno de los funcionarios del Departamento de Estado o la Agencia Central de Inteligencia se dejó intimidar por esta maniobra. «Dije: “Que Pinochet se vaya al carajo”», recordaría más tarde Francis McNeil, el funcionario de la ARA que mayor responsabilidad tuvo en el caso del asesinato de Letelier y Moffitt en 1976.[22] Con el beneplácito de la CIA, redactó un cablegrama dirigido a la embajada y concebido para que lo empleara la base en Santiago en su respuesta a Contreras. «Les hemos dicho a las claras que no pensamos dejarnos chantajear», comunicó McNeil al Ministerio de Defensa, consciente de que Contreras iba a tratar de abordar a los militares

estadounidenses destacados en Chile, «y que ningún representante del Departamento de Estado ni de la CIA va a reunirse con los representantes de Contreras».[23] Este podía decir lo que quisiera, aseguró McNeil al letrado Propper; «pero vamos a ir por él».

Respuesta tibia al terrorismo

El 21 de septiembre de 1978 —cuando se cumplían dos años del atentado con coche bomba—, el Departamento de Justicia estadounidense presentó al gobierno chileno seiscientas páginas de documentación diversa que formaban parte de la solicitud formal —en virtud del tratado de extradición firmado con Chile en 1902— de la entrega a Estados Unidos de Contreras y sus subordinados. Los hombres de Carter poseían una cantidad abrumadora de pruebas de la responsabilidad y complicidad del régimen. Tampoco faltaban, por otra parte, documentos secretos que pusieran de relieve que Estados Unidos conocía las intenciones del régimen de «subvertir los procedimientos legales chilenos», obstruir a la justicia y evitar la extradición de los integrantes de la Dina. Para reparar un acto de terrorismo cometido en Washington, Estados Unidos tendría que vencer el afán del régimen de Pinochet por responder con evasivas a cualquier investigación y encubrir su implicación en el crimen.

Sin embargo, la reacción de Washington ante el asesinato de Letelier y Moffitt fue débil y ambigua, lo que contrasta sobremanera con la enérgica respuesta provocada por los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. La política antiterrorista del gobierno de Carter fue víctima de grandes divisiones en el ámbito burocrático, así como de una falta general de convicción a la hora de buscar justicia y hacer que el régimen pinochetista pagase un precio elevado por haber cometido semejante atentado en la capital de la nación.

No fueron pocos los funcionarios del sector medio del escalafón del Departamento de Estado y el Departamento de Justicia que ejercieron una presión considerable en pos de una respuesta amplia y firme. Ya el 30 de octubre de 1978, McNeil presentó al vicesecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Viron Vaky, un rosario de medidas concebidas, según sus

propias palabras, «para conceder la máxima prioridad al caso Letelier y Moffitt en interés de la justicia y con el objetivo de disuadir a otros órganos de espionaje extranjeros de cometer asesinatos similares».[24] No obstante, los altos funcionarios se decantaron por una vía menos comprometida, y optaron por aguardar hasta que la Corte Suprema de Chile se pronunciara al respecto, con la falsa esperanza de que, en caso de que el régimen no se mostrase dispuesto a extraditar a los integrantes de la Dina, accedería al menos a juzgarlos en Santiago.

El 13 de mayo de 1979, Israel Bórquez Montero, presidente de la Corte Suprema, hizo público el fallo, determinado de antemano, que denegaba la solicitud de extradición cursada por Estados Unidos. Dictaminó que la confesión de Townley era una «acusación a sueldo», ya que formaba parte de un acuerdo táctico entre la fiscalía y la defensa para agilizar los trámites judiciales. Por consiguiente, desestimó todas las pruebas provenientes de aquella. En esencia, la resolución exoneraba a la Dina de toda culpabilidad en el asesinato de Letelier y Moffitt, si bien Bórquez mencionó la necesidad de estudiar con mayor detenimiento las sospechas de que los funcionarios de la Dirección de Inteligencia Nacional hubiesen podido presentar falso testimonio ante un tribunal militar chileno.

«Este fallo es mucho peor que cualquiera de los que habíamos previsto», advirtió el especialista del CSN en Latinoamérica Robert Pastor a Zbigniew Brzezinski, principal asesor del presidente en materia de seguridad. La política adoptada por Estados Unidos respecto de Chile estaba «llegando», señaló en un informe, «a su punto más delicado en lo que tiene que ver con Letelier».[25] De hecho, en Washington, la sentencia dio pie enseguida a un escándalo considerable en el seno del Poder Ejecutivo, la prensa y el Congreso. Este último protagonizó cierta iniciativa, encabezada por Henry Reuss, presidente del comité de la Cámara de Representantes encargado de cuestiones bancarias, que abogaba por retirar la tabla de salvamento que suponían para la economía del régimen los préstamos procedentes de entidades privadas estadounidenses —cuyo importe ascendía a más de mil millones de dólares— hasta que se extraditase a los agentes de la Dina. A fin de dejar constancia de su descontento en el plano diplomático, el 16 de mayo, el Departamento de Estado hizo acudir a Washington al embajador Landau, con quien pretendían consultar los siguientes pasos que debían

seguir al tiempo que disuadían al Congreso de aprobar, de forma prematura, sanciones contra el régimen de Pinochet.

El gabinete de Carter, sin embargo, adoptó una actitud prudente y relativamente pasiva. El Departamento de Estado se limitó a recurrir la sentencia de Bórquez ante la Corte Suprema y cumplimentar una diligencia diplomática para advertir de las serias consecuencias que podía tener para las relaciones entre Estados Unidos y Chile que este último país no revocara el fallo. El debate político interno, por otra parte, se centró en los términos y el tono en que debía expresar el embajador Landau la consternación estadounidense. En una reunión presidida, el 24 de mayo, por el subsecretario de Estado, Warren Christopher, en la que participaban diversos organismos, el fiscal Eugene Propper se mostró partidario de una actuación mucho más enérgica. «Entendemos su postura», le aseguró David Newsom, tercero en importancia al interior del Departamento de Estado, «pero usted tiene que entender, a su vez, que debemos tratar este asunto en el contexto general de nuestras relaciones bilaterales con Chile». La respuesta de Propper constituía un claro reflejo de su incredulidad ante tan pasiva reacción frente al terrorismo internacional: «El caso Letelier es nuestras relaciones con Chile».[26]

No cabe duda de que las instrucciones recibidas por Landau estaban redactadas en un estilo enérgico. El 2 de junio, cuando regresó a Santiago desde Washington, el embajador dirigió la siguiente reprimenda al régimen una vez llegado al aeropuerto:

> No debería perderse de vista que en este caso se ha violado la soberanía del pueblo estadounidense, y no de palabra, sino de obra. No hemos de olvidar que en pleno centro de la capital de nuestra nación murieron asesinadas a sangre fría dos personas: un antiguo diplomático extranjero y una ciudadana estadounidense. Si este acto de terrorismo no constituye una violación de nuestra soberanía, no sé cómo calificarlo. No podemos dejar que atentados como este queden impunes.

Las relaciones entre Chile y Estados Unidos «se acercan a una encrucijada», advirtió. Si no se revocaba la sentencia y los funcionarios de la Dina acusados quedaban en libertad, se haría responsable al gobierno

chileno de «ofrecer refugio a terroristas internacionales», con todo lo que ello implicaba. «Si esos hombres siguen en la calle», concluía la declaración, «les aseguro que la reacción de mi gobierno, del Congreso y del pueblo estadounidense será inexorable».[27]

Lo cierto, no obstante, es que cuando, el 1 de octubre de 1979, la Corte Suprema al completo confirmó la decisión de Bórquez y, para colmo, desestimó su recomendación de que el tribunal militar emprendiese una investigación por el posible perjurio cometido por Contreras y Espinoza, la reacción del gabinete de Carter fue más bien vacilante. Lejos de mostrar su indignación porque semejante acto de terrorismo de Estado quedase sin castigo alguno, los organismos gubernamentales estadounidenses, a los que les interesaba mantener los lazos militares, económicos y diplomáticos con Chile, se lanzaron a una frenética carrera para impedir que su zona de influencia burocrática fuese objeto de cualquier clase de sanción. En la Casa Blanca, Brzezinski y el secretario de Defensa, Harold Brown, se pronunciaron en contra de lo que llamaron «acciones punitivas sin propósito». Pese a que las pruebas acumuladas habían servido ese mismo año para declarar culpables a tres terroristas cubanos en un tribunal de distrito estadounidense, no faltaron funcionarios del gobierno que pusieran en tela de juicio la solidez del pleito entablado por el Departamento de Justicia contra los funcionarios de la Dina. Y el resultado de todo esto fue toda una serie de sanciones, simbólicas en su mayoría, que apenas perjudicaron al régimen de Pinochet.

La Oficina de Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios del Departamento de Estado, presidida por la vicesecretaria Patricia Derian y su subordinado inmediato, Mark Schneider, se encontró, así, librando en solitario la batalla en favor de un castigo severo. El día que se cumplieron tres años del crimen, Derian envió al vicesecretario Warren Christopher un memorando secreto en el que exponía numerosas propuestas relativas a las sanciones que podían aplicarse y que iban desde acciones simbólicas —como retirar de Chile al Cuerpo de Paz—* hasta medidas realmente drásticas —tales como «persuadir a los bancos privados con los que tiene préstamos concertados a cortar el flujo de las ayudas»—. La reacción estadounidense debía, en su opinión, ser lo bastante severa «para hacer ver, sin lugar a duda alguna, que los gobiernos que se hallan involucrados en

actos de terrorismo internacional y los que acogen a quienes los cometen recibirán el castigo que merecen».[28] En un memorando elaborado el 12 de octubre para poner al día al secretario de Estado, Cyrus Vance, Derian reiteró la necesidad de emplear sanciones «enérgicas» con la intención de evitar más «asesinatos respaldados por el gobierno y dejar constancia de nuestra indignación ante tamaña violación de la soberanía estadounidense». A esto añadió que, si no tomaban medidas, solo conseguirían «fortalecer a Pinochet y a quienes se oponen a que se restablezca en breve la democracia».[29]

Con todo, la Oficina de Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado se mostró contraria a cualquier sanción de relieve. Su director, el vicesecretario Viron Vaky —la misma persona que había tratado disuadir a Kissinger, ocho años antes, de emprender acciones encubiertas contra Allende—, prefirió no comprometer las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Chile, y se negó a aceptar la idea de que los agentes de la Dina fuesen culpables. «Me preocupa la predisposición y la facilidad con que asumimos que los acusados son culpables de terrorismo y hablamos de negligencia judicial», escribió en un memorando secreto remitido el 12 de octubre a Vance, secretario de Estado, en el que recogía una relación de diecinueve acciones que podían emprenderse contra Chile. «En vez de alardear de superioridad moral y dar tantas muestras de indignación, deberíamos conducirnos con precaución y comedimiento. (...) [D]eberíamos reaccionar de un modo frío y no como un ángel vengador, por más que esta última postura pueda hacer que nos sintamos mejores».

En el Consejo para la Seguridad Nacional había alguien que compartía las ideas de Vaky a este respecto: Robert Pastor. «Nunca me he sentido cómodo con la forma en que ha manejado el Estado el caso Letelier», había escrito a Brzezinski tras recibir el borrador de una lista de sanciones el 11 de octubre. «He sido incapaz de comprender la transformación que ha experimentado Estados Unidos, de gobierno a fiscal, y de fiscal a juez, que es la posición en la que nos hallamos en estos momentos». Pastor, a quien habían dejado al margen de forma deliberada los integrantes del Departamento de Justicia y el Departamento de Estado, informó a Brzezinski que esta última entidad no había llegado a justificar su rechazo del fallo emitido por la Corte

Suprema de Chile. «No digo que no existan argumentos», escribió, «sino que aún no los conozco, y eso que los he pedido muchas veces».[30]

En una reunión celebrada el 15 de octubre por integrantes de varios organismos para debatir las sanciones que se aplicarían a Chile, Pastor volvió a preguntar: «¿Tan seguros estamos de las pruebas que hemos presentado que podemos decir sin temor a equivocarnos que la decisión de la Corte Suprema de Chile es de verdad la equivocada?». Esta vez planteó la pregunta directamente al fiscal Lawrence Barcella, y este, que repartió entre los asistentes fotografías de la autopsia de las víctimas para recordar a los burócratas la dimensión humana del crimen, respondió que los testimonios eran irrefutables.[31] «Tenemos pruebas inequívocas», comunicó a Pastor y a los otros treinta miembros del gobierno que se hallaban presentes, «del acto de terrorismo político más execrable que se haya cometido jamás en la capital de nuestra nación. Hemos demostrado que quienes lo perpetraron eran agentes de una potencia extranjera, de la misma potencia extranjera que ha denegado ahora de forma descarada la petición que le hemos hecho para tratar de que se haga justicia, y corresponde a quienes nos hallamos hoy en esta sala responder de un modo adecuado».[32]

El 19 de octubre, el secretario Vance transmitió al presidente Carter —a través de un canal especial— las recomendaciones finales del Departamento de Estado en lo referente a las sanciones contra Chile. Las opciones se habían reducido de diecinueve a seis, entre las que se contaban anular la venta de equipo militar por valor de siete millones de dólares; poner fin al programa de la Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero (que no había intervenido en Chile desde 1970); suspender los créditos del Banco de Exportaciones e Importaciones; cancelar la aprobación de las licencias de exportación que permitirían la compra de material por parte de los militares chilenos, y retirar a los cuatro miembros del MilGroup estadounidense apostados en Santiago. Se había prescindido, por lo tanto, de lo que Vance denominó «medidas extremas», tales como la suspensión de los préstamos procedentes de bancos privados o la retirada definitiva del embajador estadounidense en Chile. «Iniciativas como estas», escribió al presidente, «harían un flaco servicio a nuestros intereses en Chile y en cualquier otro país».[33]

La Casa Blanca decidió reducir aún más la lista de sanciones. Así, el 26 de octubre, el presidente Carter aprobó cuatro de las seis propuestas.[34] Asimismo, modificó la recomendación de hacer regresar a todo el grupo militar para dejarla en una sencilla reducción de sus miembros a dos.[35] (A principios de 1980, se añadiría un castigo simbólico adicional, consistente en la cancelación de la participación de Chile en las maniobras navales UNITAS). El presidente, según expuso Brzezinski en una memoria secreta dirigida a Vance y titulada «El caso Letelier y Moffitt y la política estadounidense con respecto a Chile», había determinado que estas acciones «constituirían una sólida reafirmación de nuestra determinación de resistir al terrorismo internacional y una fuerza disuasoria ante quienes se sientan tentados de cometer actos similares dentro de nuestro país».

Con todo, el accidentado recorrido de estas sanciones no acabó aquí. Los funcionarios del gobierno retrasaron casi cinco semanas el anuncio de la respuesta estadounidense. En un principio se pretendía con ello evitar que influyese de forma negativa en la aprobación por parte del Congreso de un conjunto de medidas destinadas a ayudar a Latinoamérica. Entonces, el 4 de noviembre, el país sufrió un nuevo acto de terrorismo cuando los fundamentalistas iraníes ocuparon la embajada de Estados Unidos en Teherán, tomaron como rehenes a los miembros del personal del edificio y exigieron al gobierno de Carter el regreso del Sha, quien había viajado a Norteamérica para someterse a un tratamiento médico. Vance volvió a aplazar el citado anuncio por temor a que las represalias contra Chile pudiesen ser empleadas en favor de la solicitud de extradición del Sha por parte de los secuestradores. «El problema chileno no va a desaparecer, y, cuanto más se prolongue la crisis iraní, mayores serán las probabilidades de que el público comience a hacer comparaciones entre ambos casos», advirtió Pastor a Brzezinski el 19 de noviembre. En un memorando confidencial titulado «El caso Letelier: Es el momento de reconsiderar», aquel le recomendaba que hablase «con el presidente para que recapacite acerca de las decisiones adoptadas respecto de Chile a la luz de la crisis de Irán».

Las sanciones no volvieron a examinarse, si bien se modificó el estilo empleado para anunciarlas. Así, en lugar de vincularlas al hecho de que Chile no tuviese intención alguna de extraditar a los terroristas de la Dina,

el gobierno hablaba de la «negativa [del régimen de Pinochet] a emprender una investigación exhaustiva y justa en torno a este crimen». En una rueda de prensa celebrada el 30 de noviembre, dos meses después del pronunciamiento de la Corte Suprema chilena, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Hodding Carter, anunció las medidas y aseguró que el régimen había «consentido, en efecto, este acto de terrorismo internacional». Al final de su declaración, el portavoz presidencial señaló que los medios de comunicación habían comparado el caso Letelier con el asunto, aún sin resolver, de los rehenes que habían tomado los iraníes. «Solo hay un punto en común entre ambas situaciones», concluyó: «las dos constituyen actos atroces de terrorismo internacional, y, en una y en otra, nuestra reacción responde a la determinación de no ceder ante tales hechos, ocurran donde ocurran».

Reagan y Pinochet

Las sanciones impuestas por Estados Unidos a Chile duraron aproximadamente un año.[36] Poco después de su investidura, Ronald Reagan tuvo su primer gesto político para con Latinoamérica al rescindir, según anunció su gabinete, todas las medidas restrictivas adoptadas por Jimmy Carter con respecto al régimen de Pinochet. Al mismo tiempo, el nuevo equipo de política exterior comenzó a trabajar entre bastidores para restablecer las relaciones cordiales entre ambos gobiernos. «En cuanto a su pregunta sobre nuestra política en Chile», escribió Alexander Haig, secretario de Estado del recién nombrado presidente, en un memorando secreto fechado el 16 de febrero de 1981, al presidente Reagan, «he de decirle que en los próximos días tengo la intención de levantar la prohibición que le impide recibir financiación del Banco de Exportaciones e Importaciones y aprobar una lista de invitados a las maniobras navales UNITAS de este año, elaborada por el Ministerio de Defensa, en la que estará incluido Chile. Estos son los dos aspectos más molestos de la situación actual que el Poder Ejecutivo tiene potestad para resolver. Dentro de un mes, aproximadamente, tendremos un estudio completo elaborado en colaboración con otros órganos del gobierno que nos permitirá decidir sobre futuros ajustes».[37]

Por irónico que parezca, Reagan había llegado al Despacho Oval encabezando una oleada de indignación pública hacia los actos terroristas. «Ya es hora de que las naciones civilizadas del planeta dejen bien claro que no hay lugar en él para el terrorismo», declaró la víspera de su elección. En lo tocante a Chile, sin embargo, la Casa Blanca dejó claro que, a la postre, sí se podía hacer un hueco. De hecho, el nuevo presidente formaba parte de una reducida camarilla de ideólogos de derecha que, con gran descaro, habían dado a la víctima el papel del malo de la película y habían ayudado a divulgar la engañosa «teoría del mártir» que defendía el régimen, según la cual habían sido los izquierdistas los autores del atentado. En 1978, Reagan se había servido de la difusión nacional de su programa de radio para acusar a Letelier de ser un «agente extranjero encubierto» vinculado a «grupos marxistas y terroristas internacionales». El futuro presidente dijo a sus oyentes: «Vale la pena preguntarse si no habrán sido sus propios superiores quienes han asesinado a Letelier: vivo, podría verse comprometido; muerto, podría convertirse en un mártir».[38] Frente al Congreso, el general Vernon Walters, nuevo embajador itinerante de Reagan, trató de ofrecer una explicación racional al atentado contra Letelier y Moffitt, que presentó como «un error» comparable al fusilamiento del duque D'Enghien por orden de Napoleón. Walters resumió con una frase la postura adoptada al respecto por el gobierno recién elegido: «No podemos estar restregándoselo toda la vida».[39]

En el contexto de las prioridades políticas del presidente Reagan y sus consejeros, el ávido anticomunismo de Pinochet tenía mayor importancia que las violentas atrocidades de su régimen. El que este hubiese patrocinado un acto de terrorismo en las calles de Washington no lo hacía, según ellos, menos favorable a Estados Unidos. De hecho, el general personificaba para ellos la imagen del «autócrata moderado, amigo de los intereses norteamericanos», de acuerdo con la descripción de los jefes militares «autoritarios» que ofrecía la nueva embajadora ante la ONU, Jeane Kirkpatrick, en su famoso artículo «Dictaduras y doble moral», aparecido en la revista Commentary, en el que criticaba la política seguida por Jimmy Carter en el ámbito de los derechos humanos.[40] Los chilenos podían ser considerados aliados ideológicos en la batalla contra el influjo soviético en el hemisferio y un apoyo para la política militarista de mano dura seguida por Estados Unidos para reprimir los alzamientos revolucionarios surgidos

en Centroamérica en la década de 1980. Además, el gabinete de Reagan veía en Chile un modelo para el plan de economía monetarista y de libre mercado que trataba de poner en práctica. «El gobierno de Reagan», declaró Kirkpatrick a mediados de 1981, «comparte las convicciones de los artífices de la política económica chilena, pues el enfoque de libre mercado resultará más eficaz a la hora de restablecer por entero la fortaleza económica de Estados Unidos».

Después de cuatro años de tensas relaciones con el gobierno de Carter, el general Pinochet interpretó el respaldo que le volvía a brindar Washington como una reivindicación y una ratificación de su régimen. Los altos funcionarios chilenos tenían la esperanza de que la era Reagan augurase el final del aislamiento internacional del país y su condición de nación paria. En una declaración hecha dos meses después de las elecciones estadounidenses, Pinochet señaló que, mientras que, siete años antes, Chile se hallaba solo en su firme oposición al imperialismo soviético y su decidido respaldo al sistema socioeconómico de la libre empresa, ahora formaba parte de una clara tendencia mundial; y no era Chile, subrayaba el dictador, el que había cambiado.

El gabinete del nuevo presidente de Estados Unidos puso enseguida manos a la obra para dejar clara su adhesión al régimen y hacer que volviesen a la normalidad las relaciones bilaterales entre los dos países tras la separación que habían supuesto los cuatro años del gobierno de Carter. Así, se hicieron frecuentes las declaraciones públicas de amistad por parte de los norteamericanos. En julio de 1981, el Ejecutivo comenzó a votar en favor de la concesión de préstamos multilaterales a Chile, lo que constituía una desdeñosa violación de la Ley de Instituciones Financieras Internacionales de 1977, que hacía preceptivo el voto en contra de la concesión de créditos a gobiernos que vulnerasen de forma constante los derechos humanos.[41] De igual manera, en las Naciones Unidas, Kirkpatrick se mostró en contra de emprender una investigación especial sobre los abusos cometidos en Chile.

Los intercambios diplomáticos, insólitos desde que la Junta Militar había dejado de contar con el cálido respaldo de Henry Kissinger, también aumentaron de un modo significativo. A finales de febrero de 1981, Reagan

mandó a su enviado especial, el general Walters, a ver a Pinochet. El estadounidense transmitió al dictador un mensaje privado de parte del secretario de Estado Haig y lo puso al corriente de las operaciones de contrainsurgencia efectuadas por Estados Unidos en El Salvador. «Hablamos como viejos amigos», informó Walters en un memorando secreto. «Saltaba a la vista que estaba encantado de verme. Me ofreció todo su apoyo y me aseguró que haría todo lo que estuviese en sus manos por ayudarnos en El Salvador».[42] En agosto, fue la embajadora Kirkpatrick quien viajó a Santiago para encontrarse con los dirigentes militares y empresariales al tiempo que evitaba cualquier contacto con grupos en favor de la democracia y defensores de los derechos humanos. «Un té muy agradable», refirió la diplomática a la prensa después de reunirse en privado con Pinochet. «El propósito fundamental de mi conversación con el presidente era solo el de expresarle el deseo del gobierno al que represento de normalizar las relaciones con Chile». En una reseña de su visita, la embajada en Santiago cablegrafió a Washington que el general había «respondido de un modo inmediato y efusivo al contenido básico de sus declaraciones en torno al deseo estadounidense de restablecer los lazos de colaboración equitativos». En resumidas cuentas, aseveró la representación diplomática, «la visita de la embajadora Kirkpatrick ha resultado valiosa en extremo para acelerar el regreso de las relaciones de cooperación».

Derogación de la Enmienda Kennedy

Normalizar las relaciones requería levantar las prohibiciones legislativas impuestas al respaldo militar y económico a Chile. En consecuencia, a lo largo de 1981, el gobierno ejerció tanta presión como le fue posible para revocar la Enmienda Kennedy. Jesse Helms, el mayor aliado con que contaba Pinochet en el Senado estadounidense, fue quien dirigió el ataque, desestimando para ello el argumento de que Washington no debía brindar ayuda militar a un gobierno terrorista. Sin aportar la menor prueba para demostrarlo, aseguró que Letelier era «un agente del terrorismo», y trató de justificar su asesinato ante el resto de los senadores. «Quien a hierro mata», concluyó, «a hierro muere».[43]

Finalmente se aprobó la derogación de la enmienda, aunque no sin significativas condiciones a la renovación del respaldo militar a Pinochet. La legislación definitiva, que revelaba la influencia de los defensores de los derechos humanos que formaban parte de la Cámara de Representantes, establecía que, para cualquier venta de armas y equipo militar por parte de Estados Unidos, sería necesario que el presidente Reagan certificase que el gobierno de Chile:

- había avanzado de forma considerable en el respeto a los derechos humanos reconocidos por los organismos internacionales;

- no estaba secundando de modo alguno actos de terrorismo internacional, y

- había emprendido las medidas necesarias para colaborar en el procesamiento de los acusados por los asesinatos de Orlando Letelier y Ronni Moffitt.

El gobierno de Reagan no tuvo problema alguno a la hora de certificar el buen hacer de Chile en lo referente a los derechos humanos, a pesar de que las espeluznantes atrocidades del régimen seguían estando a la orden del día. Así, por ejemplo, el 25 de febrero de 1982, los agentes de la CNI asesinaron de forma brutal al dirigente sindicalista más célebre de Chile, Tucapel Jiménez, quien estaba organizando un frente obrero para oponerse a la represión económica y política del régimen, y a quien encontraron con disparos en la cabeza y degollado. Con todo, solo dos semanas después viajó a Santiago el vicesecretario para Asuntos Interamericanos, Thomas Enders, para reunirse con funcionarios del gobierno chileno y, según cierto cablegrama, reiterar «que la cuestión de los derechos humanos no era algo que nos preocupase de manera inmediata».

De cualquier manera, lo cierto es que la cláusula relativa al caso Letelier y Moffitt sí fue objeto de preocupación, toda vez que tanto el FBI como el Departamento de Justicia se opusieron de forma activa a certificar la cooperación por parte del gobierno de Pinochet, y no dudaron en decirlo públicamente. «No han movido un dedo», declaró a The Washington Post el fiscal Lawrence Barcella. «De hecho, todo han sido maniobras dilatorias y obstruccionistas». Barcella y sus colegas elaboraron un catálogo

confidencial de doce páginas en el que exponían la falta de colaboración del régimen y su negativa a llevar a cabo una investigación propia, así como sus múltiples intentos de obstaculizar las pesquisas de Estados Unidos, incluida la falsificación de pruebas. En privado, el FBI y el Departamento de Justicia advirtieron al Departamento de Estado que estaban dispuestos a testificar ante el Congreso para confirmar el carácter infundado y falso de cualquier certificación por parte de la presidencia.

«No sé si estará al corriente de que el Departamento de Justicia y el FBI parecen oponerse de manera enérgica a la certificación relativa al caso Letelier», advirtió entonces el vicesecretario de Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios, Elliott Abrams, en un memorando secreto enviado a Lawrence Eagleburger, uno de los subordinados inmediatos del secretario de Estado Haig. «Me parece que la certificación va a ser imposible, ya que para ello el GC tendría que mandar a la cárcel a la mitad de su plantilla». Por otra parte, señalaba que presionar al Departamento de Justicia para que cambiase de postura resultaría desastroso de cara a las relaciones públicas. «No sé si habrá algo que puedan hacer los chilenos para que cumplamos las exigencias (estúpidas) del Congreso. De lo que estoy seguro es de que existe una oposición considerable en el seno del Departamento de Justicia, y de que cualquier acción que emprendamos en contra de este va a hacer que proliferen en las primeras planas de los periódicos noticias muy dañinas para nosotros».[44]

La de Abrams se sumaba así a toda una serie de oficinas dependientes del Departamento de Estado que exponían a Haig lo perjudicial que podía resultar que el presidente certificara a Chile y Argentina, tal como había planeado el secretario de Estado en marzo de 1982. Haig, de hecho, recibió una memoria confidencial elaborada por siete de sus consejeros y vicesecretarios con la intención de enumerar las distintas opciones posibles. Llevaba por título «Resoluciones presidenciales en torno a la autorización del respaldo en temas de seguridad y la venta de armas a Argentina y Chile», y advertía que la certificación de Chile sería «un acto particularmente controvertido». Sus autores recordaban que, en lo tocante a los derechos humanos, no había habido mejora alguna desde 1979, y reconocían que el caso Letelier y Moffitt no hacía sino plantear más problemas. Garantizar que Chile había cooperado para que se hiciese

justicia era algo «extremadamente difícil de sostener y defender». A algunos organismos del Departamento de Estado, por otra parte, les resultaba preocupante que la certificación presidencial menoscabare «nuestra campaña de rechazo al terrorismo internacional».

Con todo, quienes se oponían a la certificación de Chile tenían una preocupación aún mayor: la posibilidad de que resultara perjudicial para la empresa más importante emprendida por Reagan en materia de política exterior; es decir, las operaciones, cada vez más numerosas, de contrainsurgencia acometidas en Centroamérica. Para mantener la intervención militar estadounidense en la región, el gobierno ya había presentado una engañosa certificación de El Salvador ante un Congreso cada vez más escéptico y estaba preparando otra. «La reciente certificación de El Salvador resultó ser mucho más difícil y conflictiva de lo que habíamos previsto», recordaron a Haig los autores del memorando. La de Chile, y en particular la cláusula dedicada al caso Letelier y Moffitt, haría mermar la credibilidad del Legislativo y redundaría en detrimento de futuras propuestas:

> Conviene plantearse si conceder la certificación a Chile no va a dañar nuestra credibilidad en lo referente a los derechos humanos hasta el punto de hacer que la oposición [del Congreso] haga causa común, lo que tendría un efecto muy perjudicial sobre la política que estamos siguiendo en El Salvador y desacreditaría las acciones que piensa emprender el presidente en el Caribe.

Este argumento fue decisivo para que la Casa Blanca aplazase la certificación de Chile. Sin embargo, para cuando el gobierno hubo logrado por fin en el Congreso el consenso necesario para llevar a cabo una amplia intervención en Centroamérica en 1986, los acontecimientos habían superado el interés político que tenía Estados Unidos en brindar ayuda militar y vender armas al régimen de Pinochet, de tal modo que existía una postura más severa en contra de tal certificación. Según señalaba cierto memorando interno del Departamento de Estado, «no creemos que Chile cumpla los requisitos necesarios».

La Contra y Chile

Por irónico que pueda resultar, uno de los motivos que llevaron al gobierno de Reagan a tratar de proporcionar ayuda militar a Chile era lograr que Pinochet apoyara a Estados Unidos en sus enredos centroamericanos. En 1980 y 1981, el régimen adiestró y proporcionó asesoramiento táctico a las despiadadas fuerzas militares de El Salvador (ayuda que hizo que, en mayo de 1981, el Alto Mando salvadoreño concediese al general Pinochet el premio José Matías Delgado). En lo que respecta a Nicaragua, Chile estaba considerado un aliado en potencia de la campaña paramilitar en contra del gobierno sandinista promovida por el Consejo para la Seguridad Nacional, sobre todo después de que, en octubre de 1984, el Congreso estadounidense dejara de financiar el respaldo que brindaba la CIA a la guerrilla contrarrevolucionaria, o Contra.

Los memorandos de la Casa Blanca que han salido a la luz revelan que, a finales de 1984, el teniente coronel Oliver North, oficial del CSN encargado de apoyar a los contras después de que el Congreso prohibiese la participación de la CIA, recurrió en secreto al régimen de Pinochet para solicitar un arma fundamental: el misil Blowpipe, de fabricación británica. Los sandinistas estaban atacando las posiciones de la Contra con modernos helicópteros Hind proporcionados por los soviéticos, por lo que, según los consejeros de North, los «contras» necesitaban estos proyectiles antiaéreos portátiles. En un memorando remitido al asesor presidencial de seguridad nacional, Robert McFarlane, con fecha 20 de diciembre y sello de ultrasecreto, North escribió que estaba al corriente de que en Chile podían conseguirse «misiles tierra-aire Blowpipe (...) para ayudar a la FDN [Fuerza Democrática Nicaragüense, el grupo más numeroso de la Contra] a defenderse de los helicópteros Hind. Esta información se ha hecho llegar, a través de un medio seguro y protegido por nuestras fuentes, a Adolfo Calero [dirigente de la guerrilla], que ha emprendido enseguida viaje a Santiago».

Las anotaciones de los cuadernos de North dan fe de que Calero y su delegación estuvieron en Chile entre el 7 y el 17 de diciembre de 1984. El día 17, North tomó nota de la siguiente conversación telefónica que mantuvo con él:[45]

Llamada de Barnaby [nombre en clave de Calero]:

- ha vuelto de [Chile]
- 48 Blowpipe: gratis
- 8 lanzamisiles: 25.000 c/u (total: 200.000)
- hay que informar a los brit[ánico]s
- 8-10 pers[onas] para adiestram.: inic. 2 enero
- habrá que comprar otros artículos a [los chilenos], algo más caros
- transporte por mar (con especialistas) a f. de enero

Los chilenos, tal como advirtió North a McFarlane, habían ofrecido cuarenta y ocho misiles, lanzamisiles y adiestramiento «para diez equipos de tres hombres de la FDN sin ningún coste». Calero «enviará a Chile a los que van a aprender a manejarlos el 23 de diciembre».

Sin embargo, había un inconveniente: en un memorando redactado el 20 de diciembre y titulado «Información proporcionada a Thatcher sobre el terrorismo y Centroamérica», North comunicó que los chilenos habían dicho necesitar «permiso de los británicos para efectuar la entrega» de los misiles, y propuso que el presidente Reagan pidiera con discreción a la primera ministra del Reino Unido que intercediera en nombre de la Contra.

Esta no fue la única dificultad a la que tuvo que enfrentarse el primer intento de obtener misiles a través de los chilenos. El 3 de enero de 1985, según la entrada del cuaderno de North correspondiente a ese día, Calero lo informó de que el régimen de Pinochet quería incluir en el trato proyectiles de mortero y otras municiones que resultaban «demasiado caros», por lo que había puesto fin al acuerdo. Sin embargo, durante los quince meses siguientes volvieron a hacerse intentos de reanudar las negociaciones. Los cablegramas en clave y los mensajes secretos de correo electrónico que se intercambiaron North y el almirante John Poindexter, sucesor de McFarlane, demuestran que, durante la primera mitad de 1986, los miembros del CSN trataron de obtener del Reino Unido un permiso de reexportación para que Chile pudiese disponer «la entrega rápida de 6-10 BP [Blowpipe]». Su elaborado plan implicaba, entre otras cosas, persuadir a Short Brothers, la empresa de Belfast que fabricaba los misiles, a que facilitase el suministro de las armas por parte de Chile a las fuerzas contrarrevolucionarias, a través de El Salvador, mediante el empleo de certificados de usuario final —documento necesario para la venta de

armamento militar— falsificados. En una enigmática entrada manuscrita, correspondiente a mayo de 1986, del debe del libro mayor de quien suministraba a North las armas para la Contra se lee: «Blowpipe 1.000.000 $ Chile», lo que da a entender que se esperaba realizar un desembolso considerable relacionado con los misiles. «[E]stamos tratando de hallar un modo de obtener de Chile 10 lanzamisiles y 20 misiles Blowpipe a través del representante de Short Brothers», hizo saber North a McFarlane mediante un mensaje electrónico en clave el 26 de marzo. Y añadía:

> El vicepresidente de Short Brothers se puso en contacto conmigo hace unos meses y me he vuelto a reunir con él. (...) Short Brothers, el fabricante del Blowpipe, está deseoso de cerrar el trato, dirigir el adiestramiento e incluso enviar «representantes técnicos» del Reino Unido si es que llegamos a un acuerdo. Dick Secord ya ha pagado el 10% y tenemos un certificado de usuario final de [país tachado] susceptible de ser aceptado por Chile.

Sin embargo, las atrocidades cometidas por el régimen de Pinochet contra los derechos humanos volvieron a escena para hacer fracasar esta operación ultrasecreta. El Departamento de Estado, que desconocía estas negociaciones encubiertas con el régimen pinochetista, echó a perder, sin proponérselo, el trato. «Por desgracia», seguía diciendo North, «la misma semana en que todo iba a quedar atado, decidimos sacar adelante [una resolución de las Naciones Unidas por la que se condenaban las violaciones de los derechos humanos perpetradas por el régimen»] (referencia tachada a la decisión tomada por el Departamento de Estado el 12 de marzo). Los hombres de Pinochet vieron esta iniciativa como una traición del gobierno de Reagan.

«Se ha aplazado el acuerdo», comunicó North a McFarlane, «y estamos buscando un modo de hacer saber a los chilenos que estaríamos encantados de volver a negociar».[46] [47]

El dictador se queda solo

El respaldo prestado por el gobierno de Reagan a la resolución de la ONU que criticaba la actuación de Chile con respecto a los derechos humanos señaló el comienzo de un lento distanciamiento de su inicial adhesión al régimen. Tal vez parezca irónico, pero en el mismo momento en que los representantes de North en los grupos contrarrevolucionarios nicaragüenses trataban de obtener en secreto ayuda militar desde Santiago, el Departamento de Estado emprendió una relevante revisión interna de la política estadounidense para con el gobierno chileno. El 13 de diciembre de 1984, Langhorne A. Motley, vicesecretario para Asuntos Interamericanos, celebró la primera de las tres reuniones que mantuvo con el Grupo Interagencias Restringido (RIG, por su sigla en inglés) —un grupo formado por miembros selectos del Departamento de Estado, la CIA, el Ministerio de Defensa y el CSN— con el objetivo de conseguir la autorización necesaria para reanudar la política de colaboración con Chile. El 20 de diciembre —el mismo día que North presentó su solicitud para lograr la ayuda de Reagan con la intención de que los británicos respaldasen el envío de misiles desde Chile—, Motley presentó una propuesta al subordinado inmediato del secretario de Estado en la que exponía las líneas generales de «una intervención activa, aunque gradual, para tratar de propiciar una transición pacífica hacia la democracia en Chile».[48]

Esta revaluación se debió en gran medida a la creciente inestabilidad del país, que no dejaba de inquietar al sector burocrático responsable de la seguridad nacional, ya obsesionado con la agitación de Centroamérica. El documento de Motley, decía:

> La mejor manera que tiene Pinochet de favorecer los intereses de Estados Unidos consiste en dirigir una transición real y pacífica hacia la democracia. Sin embargo, cada vez resulta más evidente que no está dispuesto a hacerlo, y su intransigencia, que a corto plazo beneficia, en apariencia, a los intereses anticomunistas de Estados Unidos, está creando en Chile una estabilidad muy perjudicial para nuestro país.

La promoción de un centro moderado en la política chilena sería fundamental a la hora de proteger los intereses a largo plazo de los estadounidenses, tal como se encargó de repetir Motley hasta la saciedad. El objetivo del nuevo enfoque debía ser el de «fortalecer a los elementos

moderados [chilenos], sumidos en estos momentos en la desorganización, y, en concreto, alejarlos de la izquierda radical».

La prolongada crisis de poder de Pinochet hizo reaccionar a Estados Unidos. Tal como resumieron la situación los analistas de la CIA en un sucinto informe secreto de 1984 que llevaba por título «Pinochet bajo presión», los últimos dos años habían hecho cambiar «de manera irreversible, en nuestra opinión», el panorama político de Chile:

> • La actitud del pueblo con respecto a las políticas de libre mercado del gobierno se ha agriado a causa de la recesión económica.
>
> • El resurgimiento de los sindicatos y partidos ha propiciado la reactivación de la vida política chilena.
>
> • Los radicales de izquierda se han vuelto más activos en lo político, hasta el punto de organizar mítines y participar en debates informales con partidos moderados, en tanto que el Partido Comunista chileno ha extendido su organización por todo el país de un modo que solo supera el Partido Demócrata Cristiano.
>
> • El número, sofisticación y audacia de los atentados terroristas de la izquierda radical han escalado de manera dramática en los últimos diez meses, propiciando (...) un aumento en los atentados de extremistas de ultraderecha contra figuras de la oposición política.
>
> • La identificación de los militares con Pinochet ha comenzado a resquebrajarse debido a las diferencias sobre cómo actuar ante la disensión política y en torno al programa de restauración del gobierno civil.

Los problemas del régimen militar comenzaron a mediados de 1982, cuando el país sufrió la peor recesión económica desde los tiempos de la Gran Depresión. El producto nacional bruto cayó en picado 14 por ciento y el desempleo aumentó hasta alcanzar el 30 por ciento. La deuda externa de Chile alcanzó los diecinueve mil millones de dólares, con lo que se convirtió en la mayor del mundo en relación con el número de habitantes del país. Quedó así desacreditado el «milagro económico» creado por los

discípulos de Milton Friedman, gurú de la economía de libre mercado y asesor del régimen, formados en la Universidad de Chicago.

La crisis económica infundió fortaleza a quienes se oponían a Pinochet, entre quienes se incluía un grupo cada vez más nutrido de conservadores de clase media alta a los que habían perjudicado seriamente las pérdidas financieras. Todos los sectores de la sociedad —partidos políticos, organizaciones de derechos humanos, sindicatos y grupos religiosos— se embarcaron en la ardua tarea de poner en marcha una coalición nacional para acabar con la dominación militar y restablecer la democracia.[49] El 11 de mayo de 1983, la oposición organizó el primer «día de protesta nacional», que El Mercurio presentó como el desafío más serio al que se había enfrentado el gobierno en poco menos de diez años. A partir de entonces, se hicieron frecuentes las grandes manifestaciones y otras muestras de descontento organizadas por el pueblo. Al mismo tiempo, el Partido Comunista chileno (PCCh) inició una amplia campaña diseñada para reagrupar y reactivar a sus seguidores. El ala más militante del partido llegó incluso a crear una facción armada, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que, además de acometer ataques contra algunas instalaciones gubernamentales, el 7 de septiembre de 1986 protagonizó una audaz intentona de emboscar y asesinar al general Pinochet.

El régimen respondió a estas manifestaciones de la oposición tratando de desviar a los dirigentes civiles moderados al mismo tiempo que desataba el aparato militar de represión. Entre mayo y septiembre de 1983, acabó con la vida de ochenta y cinco personas y detuvo a cinco mil. Asimismo, Pinochet reorganizó su gabinete y nombró ministro del Interior a Sergio Onofre Jarpa, célebre conservador moderado a quien autorizó a entablar diálogos con partidos moderados en torno a la Constitución de 1980, documento que había hecho aprobar la Junta Militar para legitimar a Pinochet y darle la oportunidad de extender su dictadura personal casi hasta el cambio de siglo.

La Constitución de Pinochet hablaba de una futura transición «protegida» y «segura» hacia la democracia. Sus artículos recogían el derecho de celebrar un plebiscito en 1989 para que los votantes se manifestaran a favor o en contra de que el candidato propuesto por la Junta —el propio Pinochet— presidiera la nación hasta 1997. En el caso, improbable en extremo, de que

ganase el NO, el documento establecía que Pinochet había de permanecer en el poder durante otros diecisiete meses hasta la celebración de comicios controlados para la elección de un presidente y un gobierno civiles. A partir de ese momento, él se mantendría en el puesto de comandante en jefe del Ejército hasta 1997. En el nuevo Senado habría una serie de escaños reservados para los militares, que seguirían dominando las directrices políticas por mediación de un consejo de seguridad nacional dotado de amplios poderes.

La oposición, incluidos los partidos de centro, rechazó la Constitución de 1980 por considerarla ilegítima, toda vez que había sido redactada por el estamento militar y refrendada en un plebiscito muy manipulado que distó mucho de ser libre y justo. Tal como reconoció la CIA en un extenso informe, el régimen no había escatimado recursos para garantizar que se aprobaba la Constitución: «intimidación de los grupos opositores, adopción de medidas arbitrarias para frustrar los empeños de quienes abogaban por el voto en contra y algún que otro fraude durante la votación y el recuento de las papeletas».[50] Durante los diálogos mantenidos por Jarpa con una coalición de partidos no comunistas llamada Alianza Democrática, los dirigentes de la oposición instaron la pronta restauración de la democracia y pidieron la dimisión de Pinochet y la disolución de la policía secreta. El régimen se negó a acceder a ninguna de estas exigencias y el diálogo acabó por desmoronarse. A finales de 1984, Pinochet decretó un estado de sitio durante el que la CNI intensificó sus brutales asesinatos políticos de dirigentes de izquierda y, en febrero de 1985, relevó a Jarpa y acabó así con todo atisbo de negociación con las fuerzas favorables a la transición.

El gobierno de Reagan se enfrentó entonces a un problema similar al que hubo de encarar su predecesor en Irán y Nicaragua: cómo manejar una dictadura estancada, agresiva y aislada que se había convertido en un estorbo y hasta en un peligro cada vez mayor para los intereses políticos e internacionales de Estados Unidos. Para Washington, las complicaciones de la situación iban más allá de Santiago para extenderse a Centroamérica, Europa y el Capitolio.

En lo tocante a las relaciones del Ejecutivo con el Congreso, Chile se había convertido en un verdadero incordio. El régimen de Pinochet había puesto

en ridículo las declaraciones de Reagan según las cuales la «diplomacia discreta», unida a una relación de amistad, demostraría ser efectiva a la hora de promover la causa de los derechos humanos. Los resultados no hicieron sino minar la credibilidad de los argumentos similares que exponían los portavoces del gobierno una semana tras otra al hablar de El Salvador o Guatemala. Además, la política de Chile —y esto es, si cabe, más importante aún— puso en evidencia la descarada hipocresía de la administración al instar al Congreso a aprobar el suministro de decenas de millones de dólares para respaldar a la guerrilla contrarrevolucionaria nicaragüense en nombre de la democracia al mismo tiempo que no hacía nada por presionar a Pinochet para que devolviera el poder a un gobierno civil. No fueron pocos los miembros del Congreso —así como cierto número de aliados europeos preocupados por la política que estaba poniendo en práctica Estados Unidos tanto en Centroamérica como en Chile— que destacaron esta «doble moral» en las relaciones de Reagan con el general chileno. Habría que esperar a la caída de otros dos regímenes que habían estado largo tiempo bajo protección de Estados Unidos —el de Marcos en Filipinas y el de Duvalier en Haití— para que, en marzo de 1986, el presidente jurara oponerse «a la tiranía en cualquiera de sus formas, sea de izquierda o de derecha».

De cualquier modo, el hecho que encabezaba la lista de preocupaciones políticas era que la intransigencia de Pinochet con la oposición de centro había promovido la inestabilidad y la insurrección, y había propiciado el resurgimiento de las fuerzas de izquierda que el régimen, con ayuda de Estados Unidos, había tratado de erradicar de forma brutal. Los funcionarios del Departamento de Estado encargados de analizar la actuación política estadounidense no dudaron en subrayar este hecho:

> El fracaso de los grupos favorables a la transición en el seno del GC, tanto militares como civiles, y el de los grupos de opositores favorables a la negociación a la hora de llegar a un entendimiento en los últimos quince meses ha creado las condiciones más propicias para que el PCCh trate de provocar en Chile una insurrección armada semejante a la de los Tupamaros o la de los Montoneros. El continuo aplazamiento de un acuerdo así solo logrará alentar a la oposición violenta a Pinochet por parte del PCCh.

Durante un viaje de cuatro días a Santiago realizado a mediados de febrero de 1985, el vicesecretario Motley dijo en privado al dictador chileno que, «de haber escrito un guion para los comunistas, no le habría salido mejor». [51]

La visita de Motley estaba concebida como la primera fase de un nuevo intento de apremiar a Pinochet para que encontrase puntos en común con la oposición no comunista en los que poder basarse para negociar una transición. Sin embargo, el efusivo respaldo al régimen que demostró en público el vicesecretario eclipsó cualquier presión que pudiese haber ejercido en privado en nombre de Washington. En una entrevista concedida a El Mercurio declaró que el mundo había contraído con Chile «una deuda de gratitud» por derrocar a Allende, en tanto que, durante la rueda de prensa celebrada en el aeropuerto antes de su partida, observó que «el futuro de Chile está en manos chilenas y, por lo que he visto, son buenas manos». El viaje de Motley, según una evaluación posterior del Departamento de Estado, «ha beneficiado, probablemente, a Pinochet, mientras que no ha influido en absoluto en lo que tiene que ver con la transición».

En el informe que elaboró para el secretario de Estado, George Shultz, Motley no expuso más que una serie de conclusiones superficiales. En su opinión, el general era «uno de los jefes de gobierno más imponentes a los que nos enfrentamos en este hemisferio»; «Pinochet no responde a ninguna presión externa»; «Chile y, en consecuencia, nuestros intereses van a tener serios problemas a largo plazo». Por lo demás, apenas ofrecía vagas «ideas sobre cómo podemos, quizá, ejercer nuestro influjo sobre la situación, de forma discreta y desde dentro». En calidad de responsable de la ARA, su deber era seguir empleando la «diplomacia discreta» para incitar sin brusquedades a Pinochet y el resto del estamento militar. En el memorando remitido a Shultz, Motley se quejaba de que las críticas que había recibido del vicesecretario de Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios, Elliott Abrams, no estuviesen «en consonancia con la política que hemos acordado seguir» y afirmaba que no conseguirían «otra cosa que agravar la situación».[52]

En cuestión de pocos meses, sin embargo, Abrams sustituyó a Motley en el cargo de vicesecretario para Asuntos Interamericanos. Él también asumió un papel fundamental en las operaciones ilegales de reabastecimiento de la

Contra nicaragüense y se centró de un modo más resuelto en los elementos que podían presionar al gobierno militar para promover la transición. A fin de poner al régimen sobre aviso, Washington comenzó a abstenerse en las votaciones relativas a la concesión de préstamos bancarios multilaterales de desarrollo, táctica que consiguió que Pinochet levantara el estado de sitio en junio de 1985 (o, al menos, de eso se jactaba Abrams en los memorandos internos). Al mismo tiempo, y a través de un número creciente de contactos y comunicaciones, Washington trató de separar a los democristianos de la oposición de izquierda para inducirlos a colaborar con los intereses políticos civiles de la derecha. Los estadistas norteamericanos consiguieron que la central sindical estadounidense AFL-CIO respaldase a los sindicatos chilenos no marxistas. El gobierno de Estados Unidos recurrió también al Reino Unido, Alemania y el Vaticano para coordinar la influencia y la presión que podían ejercer sobre los militares chilenos y los políticos de centro y centroderecha.

En una reunión celebrada en el Despacho Oval el 6 de septiembre de 1985, el secretario de Estado Shultz puso a Reagan al corriente de la política que se estaba poniendo en práctica en su nombre. Según el memorando elaborado para el encuentro, aseguró al presidente que no pretendían «derrocar a Pinochet; sin embargo, cada vez hay más pruebas de que se está convirtiendo en un obstáculo para la evolución gradual de la política chilena, en consonancia con nuestros intereses, hacia una transición pacífica y la elección de un gobierno civil». La intransigencia de Pinochet desembocaría en una nación «cada vez más polarizada», lo que, tal como explicó a Reagan, no haría sino «beneficiar a los comunistas». Estados Unidos, en consecuencia, iba a «seguir buscando la cooperación, el diálogo y las negociaciones, pero cada vez existen más tensiones entre el interés que tiene nuestra nación en una transición pacífica y el aparente deseo de Pinochet de aferrarse al poder de forma indefinida».[53]

En la segunda mitad de 1985, el gobierno de Reagan aprovechó el nombramiento de un nuevo embajador estadounidense en Chile, Harry Barnes, para declarar de forma más abierta y enérgica que Estados Unidos secundaba el regreso a un gobierno civil. Cuando Barnes presentó sus credenciales a Pinochet a mediados de noviembre, comentó de forma intencionada: «El mejor modo de curar los males de la democracia es con

más democracia». Luego, entregó al general una carta personal de Ronald Reagan en la que le recordaba el respaldo y la cooperación brindados por su gobierno desde 1981, y señalaba que la colaboración posterior estaría, sin embargo, condicionada a la existencia de un avance incuestionable hacia la transición democrática. «Al igual que, en Centroamérica, el pleno ejercicio de las libertades personales y políticas ha ayudado a la lucha contra la subversión política, el progreso en Chile cumplirá funciones comparables», escribió el presidente de Estados Unidos. «Estoy más convencido que nunca de que Chile necesita avanzar de forma clara hacia la democracia».

Rodrigo Rojas

La muerte del chileno Rodrigo Rojas, quemado vivo cuando apenas había dejado atrás la adolescencia, desencadenó la ruptura final entre Washington y el régimen de Pinochet. Rojas residía de forma legal en Estados Unidos, a cuya capital había llegado en 1977, a los diez años, en calidad de refugiado, como su hermano menor y su madre, Verónica de Negri, quien había sido víctima de torturas y había sufrido encarcelamiento por motivos políticos tras el golpe de Estado. Pasó sus años de formación infantil en el seno de la comunidad de activistas chilenos exiliados en Washington D.C. y creció participando en numerosas actividades en favor de los derechos humanos y en contra del régimen de Pinochet. Con el tiempo se aficionó a la fotografía, actividad que practicó con gran entusiasmo y no menos habilidad, y sentía una gran fascinación por el Jane's Defense Weekly y las enciclopedias de armamento militar. Era un gran amigo mío.[54] Era un muchacho inteligente y seguro de sí mismo; curioso, aunque algo gallito, y muy impulsivo, como es habitual en los adolescentes. A medida que crecía, lo fue inquietando cada vez más la idea de volver a su patria.

En mayo de 1986 dejó los estudios antes de terminar el último semestre de la escuela de secundaria Woodrow Wilson con la intención de regresar a Chile para trabajar de fotógrafo por cuenta propia y participar en la cada vez más marcada oposición al régimen. El 2 de julio se unió a una manifestación celebrada en el barrio de Los Nogales a fin de dejar constancia de la protesta con su cámara. A él y a otra activista, Carmen Quintana, los detuvo una patrulla militar. La embajada relató así lo ocurrido

a partir de la información proporcionada por los médicos que los atendieron:

> Los soldados los rodearon y comenzaron a golpearlos. Dicen que la paliza fue violenta y que Rojas trató de proteger a Quintana. Los soldados los rociaron con líquido inflamable y les prendieron fuego. Después los envolvieron en mantas, los lanzaron al interior de un vehículo militar, los llevaron al municipio de Quilicura, al norte de Santiago y los arrojaron a una cuneta. Allí los vio un transeúnte.[55]

Tanto Rojas como Quintana habían sobrevivido a los golpes y las quemaduras. Los llevaron a una modesta clínica, la Posta Central, donde recibieron un tratamiento «arcaico e insuficiente». El director del centro, intimidado por los militares, impidió que fueran trasladados a la unidad de quemados de un hospital mejor equipado. En consecuencia, tras cuatro días de cuidados inadecuados, Rodrigo Rojas murió con diecinueve años el 6 de julio a las 15:50.[56]

La horrible naturaleza del crimen y el hecho de que Rojas residiera en Washington transformaron esta atrocidad en un escándalo internacional de derechos humanos. El «Caso Quemados» provocó la indignación de todo el planeta, y su «onda expansiva», tal como reconocieron los memorandos secretos del Departamento de Estado, alcanzó al Capitolio y confirió mayor fuerza a los argumentos de quienes censuraban al régimen. El suceso acaparó hasta tal punto la atención de los medios de comunicación que incluso el presidente Reagan fue informado de su desarrollo. Por una reseña de las que elaboraban sus asesores al final de la jornada, clasificada como secreto en el más alto grado, supo que Pinochet había tildado a Rojas y Quintana de terroristas «víctimas de sus propios cócteles molotov», a pesar de que el mismísimo servicio de inteligencia chileno había «señalado que era evidente la implicación del personal militar» (véase el documento 1).[57] La investigación interna emprendida por Carabineros reveló enseguida la culpabilidad de la patrulla del Ejército y su comandante, el teniente Pedro Fernández Dittus, según las fuentes de la embajada. Sin embargo, cuando el jefe de Carabineros, el general Rodolfo Stange, le presentó a Pinochet un informe con evidencias de la culpabilidad del Ejército, este último lo rechazó. «El presidente Pinochet dijo al general Stange que no creía en el

informe y se negó a recibirlo», informó la embajada de EE.UU. a Washington en un cable confidencial.[58] Su régimen no dudó en intimidar a todos los testigos que pudiesen identificar a los soldados. Uno de ellos «fue secuestrado por un breve período, durante el cual le vendaron los ojos y lo conminaron a cambiar su declaración», informó la DIA en un cablegrama que llevaba, entre otros, el sello de alto secreto. «Algunos miembros del gobierno seguirán, con casi total seguridad, amenazando a los testigos para que alteren su testimonio y exculpen así a los militares».

En un gesto simbólico de protesta contra el régimen, el embajador Barnes y su esposa acompañaron a Verónica de Negri durante el funeral de su hijo, celebrado el 11 de julio. De camino al cementerio, el diplomático y las otras cinco mil personas que conformaban el cortejo fúnebre fueron atacados por una serie de unidades policiales que, con cañones de agua y con gas lacrimógeno, obligaron a la multitud a dispersarse. Para mayor escarnio, el gobierno hizo aparecer, después de los hechos, notas de prensa que acusaban a Barnes de haber incitado con su presencia a la rebelión a quienes participaban en las exequias. En mitad del revuelo causado por el incidente, Pinochet se mofó aún más de Washington al anunciar públicamente que pretendía permanecer en el poder hasta que el siglo tocase a su final.

Con el caso de Rojas, la ruptura de las relaciones políticas entre Estados Unidos y el dictador chileno llegaron a un punto del que era imposible regresar. El 10 de julio, el vicesecretario Abrams participó en el programa «Nightline», de la cadena de televisión ABC, y dirigió al régimen las críticas más severas que hubiera hecho hasta entonces ningún alto cargo del gobierno de Reagan. «En esencia, lo más importante que debemos decir es que no se trata de un gobierno elegido por el pueblo», dijo a Ted Koppel. «Creo que hay razones de peso para que nos mostremos muy escépticos ante la idea de que el presidente Pinochet desee algún tipo de transición. (...) No queremos que suceda durante el próximo milenio: esperamos que ocurra un poco antes». El fallido intento de asesinar a Pinochet, realizado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez dos meses después, convenció a los funcionarios de la administración Reagan de que el anhelo implacable de Pinochet de aferrarse al poder estaba radicalizando a la izquierda chilena

y dejando al margen a los chilenos moderados. Era hora de dar algunos pasos proactivos para poner término a su dictadura.

El 18 de noviembre de 1986, el Consejo para la Seguridad Nacional celebró una reunión especial para convencer al presidente Reagan de que su administración debía expulsar a Pinochet del poder. Había «amplias evidencias», se le informó a Reagan, de que «[Pinochet] pretende quedarse en el poder el mayor tiempo posible». «No creo que solo podamos intentar la persuasión», aconsejó el secretario de Estado Shultz al presidente. «Tenemos que aplicar algo de músculo o él mismo no va a cambiar su postura».

Pero Reagan se resistía a ello, aludiendo a su admiración por el dictador en virtud de su anticomunismo y su política económica neoliberal. «Salvó a su país», dijo el propio Reagan. «Si hubiera alguna forma en que pudiéramos aparecer como no oponiéndonos a él, indicar que respetamos lo que ha hecho, pero al mismo tiempo decir que queremos ayudar a Chile por el bien de Chile...». Cuando Reagan sugirió que podía invitar a Pinochet a Washington en una «visita de Estado» para hablar cara-a-cara, Shultz le replicó: «De ninguna forma. Este hombre tiene las manos llenas de sangre...».

Solo seis días después de la reunión del CSN estalló en Washington el escándalo Irán-Contra, desviando el foco de atención de la administración Reagan a otros asuntos aparte de Chile. Con todo, después de que un miembro del equipo de la Dina que asesinó a Letelier, el mayor Armando Fernández Larios, desertó a Estados Unidos e informó al FBI de los esfuerzos personales de Pinochet por silenciarlo, el secretario Shultz renovó a principios de 1987 sus esfuerzos para obtener de Reagan la autorización de suspender todo apoyo de Estados Unidos al régimen de Pinochet. El secretario de Estado solicitó entonces un informe analítico de la CIA sobre el papel de Pinochet en el atentado con un coche bomba contra Letelier y Moffitt, y después lo empleó para meterle presión al presidente (véase el documento 2).

A menos de un año del plebiscito, Pinochet estaba decidido a permanecer en el poder, según le informó Shultz a Reagan en un extraordinario memorando de carácter secreto fechado en octubre de 1987 y titulado

«Pinochet y los asesinatos de Letelier y Moffitt: Implicancias para la política de EE.UU.» (véase el documento 3). La continuación de su dictadura «resultaría altamente peligrosa para Chile y toda la región», argumentaba Shultz, conduciendo a la polarización de la sociedad chilena y el fortalecimiento del Partido Comunista Chileno. Incluso peor, Pinochet era un terrorista internacional. La CIA había llegado a la conclusión de que Pinochet «ordenó personalmente» el asesinato de Letelier y Moffitt en las calles de Washington D.C. «Nunca hasta aquí, la CIA había establecido y presentado su conclusión acerca de esa contundente evidencia disponible respecto a su papel a la cabeza de este acto de terrorismo», informaba Shultz.

En vez de seguir apoyando a Pinochet, Estados Unidos debía considerar la posibilidad de procesarlo por sus crímenes terroristas. «No es claro si podríamos acusar a Pinochet o es solo un deseo que barajamos», sugirió Shultz. «Sin embargo, este es un ejemplo flagrante del involucramiento directo de un jefe de Estado en un acto de terrorismo de Estado, y uno singularmente perturbador, porque ocurrió en nuestra capital y porque su gobierno ha sido generalmente considerado amistoso».

Por estas razones, era hora de terminar con todo apoyo de Estados Unidos a la dictadura y apoyar de manera activa un retorno a un gobierno civil. «Pienso que, por su propia naturaleza, las conclusiones de la CIA y nuestros propios juicios acerca del involucramiento directo de Pinochet han de afectar tanto a nuestra política general hacia Chile, como al marco conceptual general dentro del cual tomamos decisiones relativas a este país», concluía el memorando, que fue mantenido en secreto durante casi treinta años. «Lo que sabemos del papel jugado por Pinochet en esos asesinatos es de la mayor gravedad y añade aún más ímpetus a la necesidad de trabajar en pro de una completa democratización de Chile», agregaba.

Fin de juego para Pinochet: El régimen no supera el plebiscito

El 2 de febrero de 1988, diecisiete de las agrupaciones políticas de Chile anunciaron una coalición conjunta: la Concertación de Partidos por el NO. Su objetivo primordial consistía en derrotar a Pinochet en el referéndum

que, tal como estipulaba la Constitución pinochetista de 1980, debía celebrarse en una fecha no muy lejana. La oposición, sin embargo, no lo tenía nada fácil: los militares controlaban los medios de comunicación y las urnas, y ejercían un enorme poder coercitivo sobre la población chilena. A pesar del panorama de dirigentes políticos arrestados, mítines de la oposición disueltos por la fuerza y oficinas de la coalición incendiadas, y a despecho de que las normas que regían la campaña y la votación habían sido escritas, impuestas con violencia y controladas por el régimen, el plebiscito seguía suponiendo la mejor oportunidad para librar a Chile de forma pacífica de una dictadura que casi había cumplido ya los quince años.

La iniciativa de unirse en torno a un objetivo común marcó un momento histórico de cooperación entre los dirigentes políticos de derecha, centro e izquierda de Chile, históricamente divididos y enfrentados. El Partido Comunista y algunas facciones radicales del Partido Socialista quedaron excluidos de la coalición, aunque no faltaron dirigentes marxistas que apremiaran a sus votantes a organizarse en apoyo de lo que vino a conocerse como el «Comando por el NO». Ricardo Lagos, antiguo colaborador de Allende y futuro presidente del Partido por la Democracia (PPD), se convirtió en uno de los más eminentes defensores del NO.[59] Por su parte, el democristiano Patricio Aylwin fue designado portavoz del Comando por el NO, en tanto que Genaro Arriagada, también del PDC, se encargó de dirigir de forma brillante las actividades electorales de la oposición. Esta organizó una amplia campaña de inscripción de votantes que produjo unos resultados extraordinarios, ya que tuvo registrado a más del 92 por ciento del electorado disponible para el 30 de agosto de 1988. El Comando por el NO reclutó también observadores para los veintidós mil colegios electorales y estableció un sistema informático secreto para garantizar que, el 5 de octubre —día clave para las fuerzas democráticas chilenas—, se transmitiera de forma inmediata a Santiago el escrutinio de votos para efectuar allí un recuento independiente.

El gobierno de Reagan proporcionó dinero a la oposición a través de la Fundación Nacional para la Democracia (la NED, por su sigla en inglés, es una entidad semigubernamental concebida para complementar públicamente la financiación clandestina ofrecida por la CIA a los grupos que luchaban por derrocar al gobierno sandinista en Nicaragua), la central

sindical AFL-CIO y el Instituto Democrático Nacional. Cerca de 1,6 millones de dólares se destinaron a sufragar la campaña de inscripción, la formación de votantes y las encuestas de opinión, así como para contratar a expertos en medios de comunicación y organizar con la mayor rapidez posible el recuento paralelo el día de las elecciones. El embajador Harry Barnes apoyó de forma tan enérgica como abierta a las organizaciones cívicas que asumieron gran parte del trabajo de reunir el respaldo electoral necesario para el NO. La prensa favorable a Pinochet comenzó a referirse a él como “Harry el Sucio”. De igual modo, en la campaña que emprendió para extender su dictadura hasta 1997, el general Pinochet denunció en repetidas ocasiones la intervención en Chile del «imperialismo yanqui».

Las iniciativas más importantes desarrolladas por Washington durante este período fueron sin duda las operaciones diplomáticas y de espionajes destinadas a descubrir y frustrar los planes de Pinochet para anular el plebiscito. Ya en mayo de 1988, según pudo saber la CIA, los miembros del Ejército chileno habían llegado a la conclusión de que no podían permitir la victoria del NO. Lo que más les preocupaba, tal como informó el centro santiaguino de operaciones en un cablegrama muy mutilado por la censura titulado «La creciente determinación de los militares de evitar la subida al poder de un gobierno civil en Chile», eran los actos de terrorismo y violación de los derechos humanos cometidos por el régimen. Se había extendido «el marcado temor a que el gobierno civil esté dispuesto a colaborar con Estados Unidos para hacer justicia con respecto al asesinato del ex ministro de Relaciones Exteriores Orlando Letelier», señaló la CIA, «y otros abusos cometidos por los militares, en claro perjuicio del Ejército chileno».

A finales de septiembre, las encuestas indicaban que la campaña por el NO ganaba cada vez más adeptos a medida que los chilenos comenzaban a convencerse de que factores como la asistencia de cientos de observadores internacionales iban a garantizar el carácter no fraudulento de las elecciones. «El público tiende a identificar cada vez más al NO con el ganador», comunicó la embajada el 29 de septiembre. Sin embargo, al día siguiente, Barnes envió a Washington el primer cablegrama en el que alertaba de la «clara posibilidad de un nuevo golpe de Estado» en caso de que la votación no fuese favorable a Pinochet.

Tanto la CIA como la DIA facilitaron pruebas evidentes de lo que el embajador Barnes llamó la «determinación de Pinochet para emplear la violencia con la intensidad que fuera necesaria para mantenerse en el poder», en un informe secreto enviado a Elliott Abrams, subordinado inmediato del secretario de Estado, en el que resumía así las intenciones del general:

> El plan de Pinochet es sencillo: a) si gana el SÍ, perfecto; b) si la lucha resulta estar muy reñida, recurrirá al fraude y los métodos coercitivos, y c) si parece que los votantes se decantan claramente por el NO, empleará la violencia y el terror para poner fin al proceso. Para ayudar a crear la atmósfera de represión necesaria, la CNI se encargará de protagonizar ciertos actos violentos antes del 5 de octubre y durante la jornada de las elecciones. Sabemos que los consejeros más cercanos a Pinochet se están dando cuenta de que tiene muchas posibilidades de perder, por lo que creemos muy probable que se ponga en práctica la tercera opción, lo que comportaría una pérdida considerable de vidas. [60]

Los confidentes con que contaban los servicios estadounidenses de espionaje en puestos elevados del Ejército chileno proporcionaron detalles adicionales al respecto. Un informe de la DIA, clasificado de alto secreto, señalaba lo siguiente (véase documento 4):

> Se dice que los seguidores más allegados a Pinochet tienen planes de contingencia para hacer fracasar el plebiscito mediante la incitación y puesta en práctica de actos de violencia que, según esperan, provocarán represalias por parte de la oposición radical y darán origen a revueltas y desórdenes. Estos planes cuentan con la intervención enérgica de las fuerzas de seguridad gubernamentales y pretenden emplear los daños sufridos por el proceso y las instalaciones electorales como pretexto para declarar el estado de emergencia. En ese momento se suspenderán las elecciones, se declararán nulas y se pospondrán de forma indefinida.

El gobierno de Reagan —y eso es algo que hay que reconocer en su favor— actuó de forma rápida y decisiva para hacer frente a estas amenazas. Su actitud contrasta claramente con las dilaciones del gabinete de Ford a la

hora de tomar las medidas que hubiesen evitado el asesinato de Letelier y la débil respuesta que dio el de Carter al encubrimiento de este crimen. Los hombres de Reagan trataron de garantizar por todos los medios el buen desarrollo del plebiscito. Se realizaron declaraciones diplomáticas ante una gran variedad de altos oficiales del régimen pertenecientes al Ministerio de Relaciones Exteriores y al del Interior, el Ejército y la Junta Militar, así como ante el propio Pinochet, para advertir a las autoridades de que no debían «emprender ni permitir iniciativa alguna que proporcione un pretexto para cancelar, suspender o anular el plebiscito». Los funcionarios estadounidenses estaban autorizados a emplear un lenguaje inflexible en sus encuentros con el gobierno chileno: «Quiero advertirle que la puesta en práctica de un plan semejante dañará seriamente las relaciones con Estados Unidos y destruirá la reputación de Chile a nivel mundial». El cablegrama enviado por el Departamento de Estado a la embajada en Santiago es en este sentido rotundo: «Debe hacerse saber al presidente Pinochet que nada podría arruinar de forma tan duradera su imagen en Chile y el mundo entero como el autorizar o permitir actos de extrema violencia o iniciativas ilegales que conviertan en una farsa su promesa solemne de un referéndum libre y justo».[61]

Entre bastidores, el director del puesto de operaciones de la CIA en Santiago recibió instrucciones de disuadir con severidad a los agentes de la policía secreta chilena de acometer tales acciones, en tanto que los oficiales militares del Comando Sur estadounidense hicieron advertencias semejantes a sus contactos del Ejército chileno. Washington pidió también al gobierno de Margaret Thatcher —gran amiga de Pinochet— que presionase al régimen en privado. El 3 de octubre, el Departamento de Estado lo hizo en público, al expresar durante la rueda de prensa del mediodía su preocupación acerca de los planes que albergaba el gobierno chileno «de cancelar el plebiscito presidencial del miércoles o declarar nulos sus resultados».

Aquel mismo día, por la tarde, se puso al presidente Reagan al corriente de las intenciones de Pinochet, así como de los empeños de Estados Unidos en evitar que las pusiese en práctica. Al día siguiente, el embajador Barnes se reunió con el ministro chileno de Relaciones Exteriores para discutir con él la delicada información que poseían los servicios estadounidenses de

inteligencia acerca del plan del general, con la intención de ganarse un aliado en el seno del régimen. Así, le advirtió que Pinochet decidiría dar al traste con el plebiscito la tarde del día de las elecciones y, en caso necesario, haría que la CNI fomentase situaciones de violencia. «Nuestra información procede de oficiales de alta graduación del Ejército», aseguró al ministro según el memorando secreto en que se recogió la información, tras lo cual le garantizó que no se trataba de «una fanfarronada del gobierno estadounidense».

El 5 de octubre fue un día histórico tanto para los chilenos como para las relaciones entre Chile y Estados Unidos. El Comando por el NO fue capaz de congregar a toda una multitud: casi el 98 por ciento de los chilenos con derecho al voto acudió a las urnas. Los resultados escrutados a primeras horas de la tarde, según el director de campaña de la coalición, Genaro Arriagada, daban la victoria a la oposición, con el 62 por ciento de los votos frente al 37 por ciento de Pinochet, lo que suponía una sensacional ventaja. El recuento final arrojó casi cuatro millones de votos en contra de la continuidad de su dictadura, versus algo más de tres millones para el SÍ, lo que supuso 54,7 por ciento para el NO, frente al 43 por ciento de quienes votaron por la permanencia de Pinochet.

El día de los comicios, Estados Unidos se puso en marcha para seguir la pista de los votos y de las acciones del régimen de Pinochet. La embajada estableció un centro de operaciones en Santiago de Chile y comenzó a enviar un informe de situación cada hora. En el Departamento de Estado se destinó una oficina de comunicaciones, la TF-1, a un grupo de trabajo especial encargado de observar la situación, mantenerse en contacto telefónico con la embajada a través de líneas seguras y exclusivas, y responder a los acontecimientos.

Llegadas las 21:00 horas comenzaron a manifestarse las maquinaciones de Pinochet. El gobierno anunció que el SÍ iba ganando al NO por diez mil votos al mismo tiempo que el Comando por el NO, que hablaba de un escrutinio mayor, aseguraba llevar una ventaja de ciento treinta mil. El régimen empezó entonces a omitir la información del recuento que debía ofrecer cada hora. «Es obvio que el GC está callando los resultados de la votación», cablegrafió la embajada en su cuarto informe de situación. Este

hecho, según supo la CIA a través de un confidente militar de alto rango, formaba parte de un maquiavélico plan, concebido por Pinochet y sus principales ayudantes, que consistía en lo siguiente: el Ministerio del Interior tenía órdenes de «retrasar el anuncio de los resultados a fin de agitar a la oposición, anunciar después resultados preliminares favorables al SÍ y hacer luego salir a la calle a quienes habían votado por el SÍ para celebrar su supuesta victoria. Esto haría reaccionar con ímpetu a la oposición, lo que provocaría conflictos callejeros y obligaría a hacer intervenir al Ejército para restablecer el orden, al tiempo que proporcionaba la excusa perfecta para suspender el plebiscito».[62]

No obstante, el intento pinochetista de llevar el caos y la violencia a las calles de Chile fracasó cuando Carabineros se negó a acatar las órdenes de levantar el cordón policial destinado a evitar cualquier manifestación en la capital. Tal como señaló el confidente de la CIA, el comandante de la guarnición de Santiago, el brigadier general Jorge Zincke, se negó también a permitir cualquier celebración o protesta, incluidas las de quienes respaldaban el SÍ.[63] Agazapado en el palacio presidencial junto con sus consejeros, Pinochet tramaba un nuevo plan violento para frustrar el referéndum. Como el atrincherado dictador dijo a sus asesores, «yo no me voy a ir, sin importar la razón» (ver el documento 5).

A las 00:08 llegó a La Moneda la Junta Militar —el general de la Fuerza Aérea Fernando Matthei; el general Rodolfo Stange, jefe de Carabineros; el general Humberto Gordon, representante del Ejército, y el almirante José Merino— para reunirse con el presidente. En una calculada declaración que resultaría fundamental, Matthei hizo saber a los periodistas que esperaban en el exterior que, a su parecer, había ganado el NO, y que la Junta iba a deliberar sobre el particular en esos momentos. Esta intervención, según el informe de la DIA, parecía «concebida de forma deliberada para limitar las opciones del general Pinochet».

Los miembros de la Junta se reunieron poco antes de la una con Pinochet, a quien, según uno de ellos, el giro de los acontecimientos lo había dejado en un estado cercano a la apoplejía.[64] «El presidente de Chile y comandante en jefe de su Ejército, Augusto Pinochet, estaba dispuesto a invalidar los

resultados del plebiscito la noche del 5 de oct.», informó la DIA. Según las descripciones de quienes asistieron a la reunión,

> estaba hecho una furia e insistía en que la Junta Militar debía otorgarle poderes extraordinarios para hacer frente a la crisis de la derrota electoral. De hecho, tenía listo un documento para que lo autorizasen con sus respectivas firmas. (...) Pinochet habló de emplear estos poderes extraordinarios para hacer que las Fuerzas Armadas tomasen la capital. En ese momento, Matthei se puso de pie para hacerse oír y comunicó a Pinochet que no tenía la menor intención de prestarse para tal cosa. (...) [H]abía tenido su oportunidad en calidad de candidato oficial y había perdido. Entonces, Pinochet hizo la misma petición a los demás, pero todos la rechazaron.[65]

Tal como describe la DIA el final de la dictadura, «sin el respaldo de la Junta para anular el voto por el NO, a Pinochet no le quedó otra alternativa que aceptar la victoria de aquel».

La euforia entre quienes se oponían al dictador y sus muchas víctimas no se hizo esperar. Miles de chilenos salieron en tropel a las calles la madrugada del 6 de octubre cantando y gritando consignas, y no faltan descripciones de transeúntes abrazando a agentes de Carabineros. Decenas de miles de personas peregrinaron una semana después a la ciudad argentina de Mendoza para asistir a un concierto de Amnistía Internacional en el que participaron Bruce Springsteen, Sting y Tracy Chapman, entre otros, a fin de conmemorar el cuadragésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En un cablegrama titulado «Notas acres para el gobierno de Chile en el concierto de Mendoza en favor de los derechos humanos», un funcionario de la embajada estadounidense aseveró que «el acontecimiento se convirtió en un verdadero mitin multitudinario por el NO», en el que se recordó una y otra vez «que el presidente Pinochet había sido derrotado en el plebiscito y que había esperanza para Chile».[66]

Durante el período que siguió a esta aplastante derrota, el general acarició públicamente la idea de violar su propia Constitución y volver a presentar su candidatura en las elecciones presidenciales que, como disponía aquella, debían celebrarse en diciembre de 1989. La derecha chilena, sin embargo,

organizada entonces en torno a una coalición empresarial y preparada para competir en el sistema político que surgiría tras la caída del régimen, rechazó esta táctica por considerarla esperpéntica. «Sin respaldo de los partidos de la derecha», comunicó la embajada estadounidense, «y sin el apoyo del Ejército, su candidatura está condenada al fracaso. Ha luchado por obtener una oportunidad que le permitiese legitimar su gobierno en el largo plazo y ha perdido, y la misma Constitución que elaboró para perpetuarse en el poder se ha convertido en su propia jaula de hierro».

En cambio, las fuerzas conservadoras de Chile eligieron a su joven ministro de Hacienda, Hernán Büchi, en cuanto protegido y candidato político del régimen. El empresario millonario Francisco Javier Errázuriz surgió también como aspirante a la presidencia por parte de la derecha. Por su parte, la oposición, organizada entonces en torno a una coalición de partidos de centro e izquierda llamada la Concertación de Partidos por la Democracia (conocida luego como Concertación), acordó que la lista de 1989 estaría encabezada por un democristiano, tras lo cual se abría como una opción que el candidato para los comicios presidenciales de 1993 pudiera ser un socialista. Con todo, la cordialidad del pacto comenzó a resquebrajarse cuando los democristianos empezaron a dudar sobre cuál de sus miembros de más edad optaría a la presidencia por la Concertación. Finalmente, el elegido fue Patricio Aylwin, el portavoz del Comando por el NO. Fue él quien, el 14 de diciembre de 1989, logró la victoria definitiva al derrotar a los dos candidatos de derecha con el 55,17 por ciento de los votos.

Entre el plebiscito del 5 de octubre de 1988 y la investidura de Aylwin, en marzo de 1990, el régimen de Pinochet hizo alarde de su poder para garantizar la impunidad de los militares tras la transición hacia un gobierno civil. El general se negó a abandonar el cargo de comandante en jefe del Ejército y satisfacer de este modo a quienes le pedían este gesto de reconciliación nacional. Para salvaguardar la policía secreta, Pinochet hizo que la CNI pasase a formar parte del servicio de espionaje militar, con lo que seguiría subordinada a él. Además, para protegerse y proteger a sus oficiales de futuros cargos legales, sobornó a seis viejos magistrados de la Corte Suprema de Chile para que dimitiesen y nombró de por vida a nueve jueces nuevos. Sus generales conminaron a las nuevas autoridades a

abstenerse de manipular la Constitución que preservaba el poder de Pinochet si no querían que Chile recordase el «ejemplo» del 11 de septiembre de 1973.

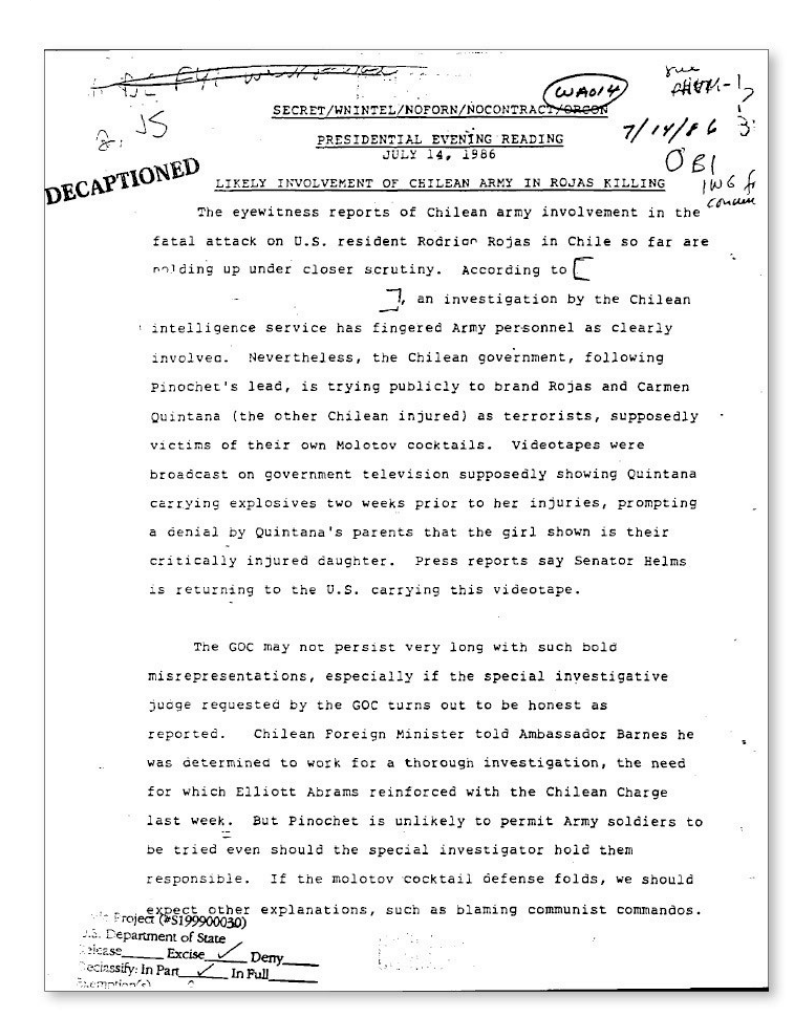
Para subrayar esto último, en una de sus últimas decisiones en calidad de dictador, Pinochet dispuso que la investidura de Aylwin se celebrase el día 11 de marzo. Durante la ceremonia, el general se encontró rodeado de figuras políticas chilenas a las que había torturado, encarcelado, enviado al exilio y hasta tratado de asesinar en el transcurso de los últimos diecisiete años. Pretendía ser aclamado en cuanto salvador de su país, pero tuvo que abandonar el poder de un modo muy poco noble. Cuando salió, acompañado de una compleja escolta militar, «los integrantes del destacamento de seguridad tuvieron que protegerlo», según informó la embajada de Estados Unidos, «con paraguas y con sus propios cuerpos de los tomates, huevos y otros restos de basura que arrojaba el pueblo al desfile de automóviles descubiertos».

***

Aún quedaba un último enfrentamiento con Estados Unidos. El día de la investidura, Pinochet actuó de anfitrión en una reunión celebrada en su residencia con el vicepresidente, Dan Quayle, quien encabezaba la delegación estadounidense, y el vicesecretario para Asuntos Interamericanos, Bernard Aronson. A su llegada, quienes respaldaban al general, ataviados con perlas y vaqueros de marca, e iracundos por el apoyo prestado por Washington al regreso de un gobierno civil, profirieron insultos contra los norteamericanos y aporrearon su limusina. Se suponía que el encuentro debía ser una visita de cortesía al presidente saliente, pero Quayle tenía órdenes secretas de instar a Pinochet «a someterse a la autoridad del gobierno de Aylwin» y «hacer hincapié en el firme respaldo brindado por Estados Unidos al proceso democrático en Chile».[67] Años más tarde, Aronson recordaría el mensaje que transmitieron al general en lo tocante a sus intentos de socavar el afán de Chile por reconstruir su democracia: «Le dijimos que se fuese sin molestar; que no se le ocurriera meter las narices».


* Organización de voluntarios estadounidenses que colabora con países en vías de desarrollo. (N. del T.)

Documento 1. Casa Blanca, secreto, Informe vespertino presidencial: «Posible involucramiento del Ejército chileno en el asesinato de [Rodrigo] Rojas», 14 de julio de 1986.



WA014

SECRET/WNINTEL/NOFORN/NOCONTRACT/ORCON

7/14/86

PRESIDENTIAL EVENING READING
JULY 14, 1986

DECAPTIONED

LIKELY INVOLVEMENT OF CHILEAN ARMY IN ROJAS KILLING

The eyewitness reports of Chilean army involvement in the fatal attack on U.S. resident Rodrigo Rojas in Chile so far are holding up under closer scrutiny. According to [ ], an investigation by the Chilean intelligence service has fingered Army personnel as clearly involved. Nevertheless, the Chilean government, following Pinochet's lead, is trying publicly to brand Rojas and Carmen Quintana (the other Chilean injured) as terrorists, supposedly victims of their own Molotov cocktails. Videotapes were broadcast on government television supposedly showing Quintana carrying explosives two weeks prior to her injuries, prompting a denial by Quintana's parents that the girl shown is their critically injured daughter. Press reports say Senator Helms is returning to the U.S. carrying this videotape.

The GOC may not persist very long with such bold misrepresentations, especially if the special investigative judge requested by the GOC turns out to be honest as reported. Chilean Foreign Minister told Ambassador Barnes he was determined to work for a thorough investigation, the need for which Elliott Abrams reinforced with the Chilean Charge last week. But Pinochet is unlikely to permit Army soldiers to be tried even should the special investigator hold them responsible. If the molotov cocktail defense folds, we should expect other explanations, such as blaming communist commandos.

Project (#S199900030)
U.S. Department of State
Release____ Excise ✓ Deny____
Declassify: In Part ✓ In Full____

Documento 2. CIA, secreto, Reporte: «Rol de Pinochet en el asesinato de Letelier y su posterior encubrimiento», 1 de mayo de 1987. (6 páginas)

EO 13526
3.3(b)(1); 3.5(c)

[redacted]

Central Intelligence Agency



Washington, D.C. 20505

DIRECTORATE OF INTELLIGENCE

1 May 1987

Pinochet's Role in the Letelier Assassination and Subsequent Coverup

Summary

A review of our files on the Letelier assassination has provided what we regard as convincing evidence that President Pinochet personally ordered his intelligence chief to carry out the murder. These files also make clear that when the subsequent investigation by US authorities established that senior Chilean military and intelligence officers were responsible, Pinochet decided to stonewall on the case to hide his involvement and, ultimately, to protect his hold on the presidency. As the result of the recently revived US interest in the case, Pinochet is now seeking new ways to contain the potential threat to his political survival in the face of armed forces pressure to clear up the Letelier affair. In our view, however, none of the several options he apparently has considered--ordering a Chilean court trial for the culprits in the murder, blaming another Army officer for the coverup, or even the elimination of his former intelligence chief--is likely to protect Pinochet from any further embarrassing revelations that ensure. Moreover, they will be unable to satisfy the military's concern that Pinochet take effective steps to repair the damage already done to the armed forces' reputation. [redacted]

* * *

This typescript was prepared by [redacted] South American Division, Office of African and Latin American Analysis. It was coordinated with the Directorate of Operations. This typescript was requested by Mr. Robert Gelbard, Deputy Assistant Secretary, Department of State. Comments and queries are welcome and may be directed to the Chief, South America Division, ALA, on [redacted]

ALA M 87-20024X

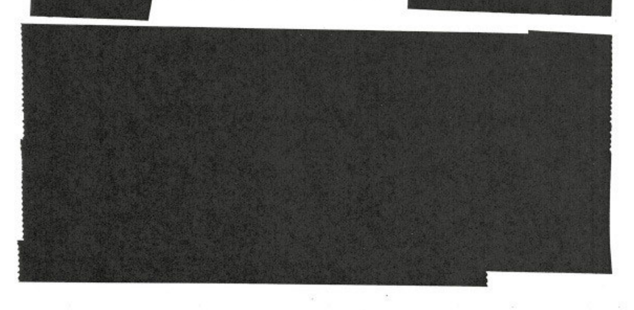
Copy 3 of 9

CL BY: 195040
DECL: OADR
DRV FM: COL 4-82 OADR

SECRET
[redacted]

Recent revelations by Army Major Armando Fernandez Larios that senior Chilean military officers planned the assassination of former Foreign Minister Orlando Letelier in Washington in September 1976 have caused an uproar in Chile and revived speculation that President Pinochet himself ordered the killing. In his formal statement to a US court in February 1987, Fernandez Larios claimed that Pinochet tried to cover up the extent of Chilean government involvement in the assassination during an investigation conducted by the Chilean military in the mid-1970s and personally forbade him to leave the country. Fernandez Larios admitted, however, that he did not know if Pinochet was involved in planning the killing. [redacted]

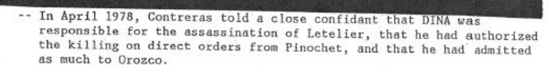
To our knowledge, no credible reporting concerning Pinochet's role in the Letelier affair became available before mid-1978, when the US investigation was nearing completion and Chilean officials realized that Washington would indict three active duty officers and request their extradition to the US. In June 1978, the senior US intelligence officer in Santiago submitted a special appraisal of the Chilean government's strategy on the Letelier case. He reported that Pinochet moved quickly to limit the damage from the confession by Michael Townley--a dual citizen whom Santiago expelled to the US in response to charges by the Justice Department that he was one of the assassins--that put the onus for the crime directly on former Chilean intelligence (DINA) chief, retired Army General Manuel Contreras. According to the senior intelligence officer, Pinochet was determined to protect Contreras from prosecution for Letelier's murder because he knew that his own political survival depended on Contreras' fate. Therefore, the President decided to stonewall on all further US requests that might have helped solidify the case against Contreras and others implicated in Letelier's murder. He also made plans to ensure that the Chilean Supreme Court would reject requests for the extradition of Chileans in response to anticipated indictments in a US court. [redacted]



[redacted]

[redacted]

[redacted]



-- In April 1978, Contreras told a close confidant that DINA was responsible for the assassination of Letelier, that he had authorized the killing on direct orders from Pinochet, and that he had admitted as much to Orozco.

-- During the same month, Orozco stated that Pinochet had learned that Contreras had given a close friend a briefcase with very sensitive documents placing responsibility for the assassination on the President, with instructions to make them public if anything happened to Contreras.

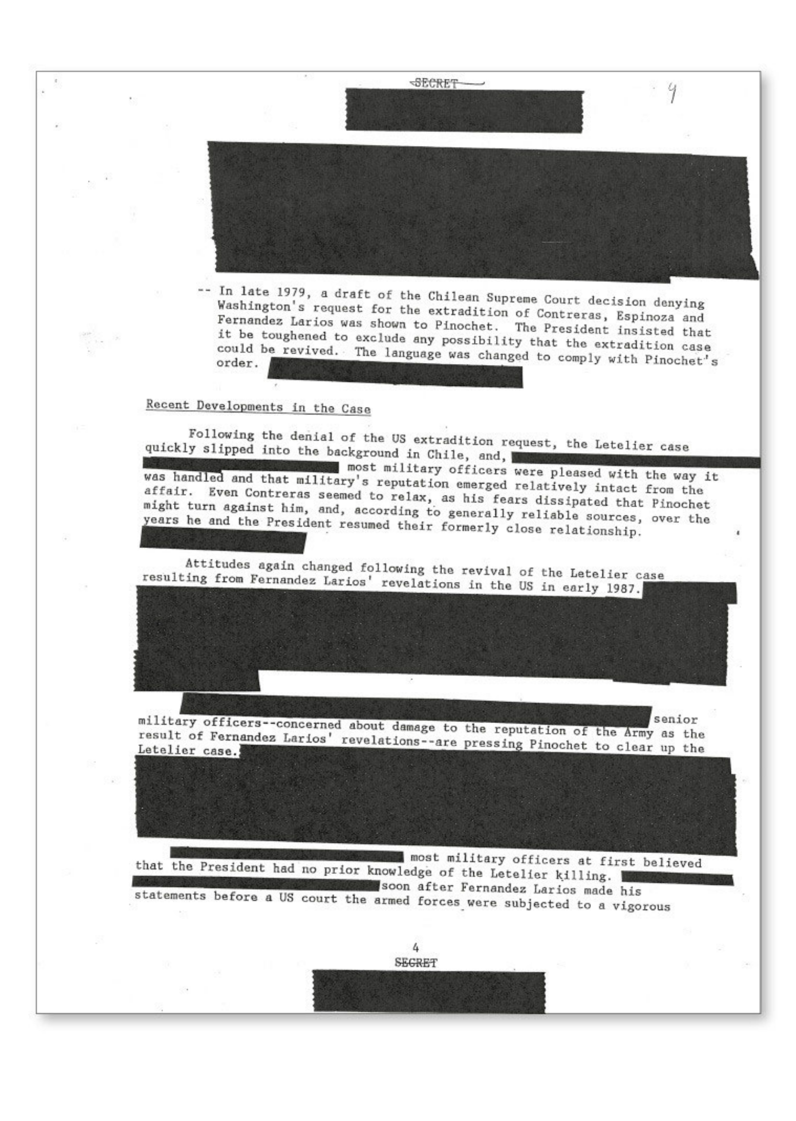
[redacted]

-- In August 1978, Pinochet met with the President of the Chilean Supreme Court--whom he had appointed in May in order to lessen chances that the Court might find legal cause for the extradition of officers implicated in the killing--to urge him not to extradite Contreras. Pinochet stated that he had promised the Army's generals that Contreras would not be extradited because of the negative impact on the Army's reputation. The Court President promised Pinochet that he would do everything possible to see that the Court complied with his request.

-- Over time, Contreras became increasingly anxious about whether Pinochet in the end might bow to US pressure and either extradite him or have him tried in Chile. He consequently renewed his threats to expose Pinochet if the President went back on their agreement. [redacted]

~~SECRET~~

[redacted]



[redacted]

-- In late 1979, a draft of the Chilean Supreme Court decision denying Washington's request for the extradition of Contreras, Espinoza and Fernandez Larios was shown to Pinochet. The President insisted that it be toughened to exclude any possibility that the extradition case could be revived. The language was changed to comply with Pinochet's order. [redacted]

Recent Developments in the Case

Following the denial of the US extradition request, the Letelier case quickly slipped into the background in Chile, and, [redacted] most military officers were pleased with the way it was handled and that military's reputation emerged relatively intact from the affair. Even Contreras seemed to relax, as his fears dissipated that Pinochet might turn against him, and, according to generally reliable sources, over the years he and the President resumed their formerly close relationship. [redacted]

Attitudes again changed following the revival of the Letelier case resulting from Fernandez Larios' revelations in the US in early 1987. [redacted]

[redacted] senior military officers--concerned about damage to the reputation of the Army as the result of Fernandez Larios' revelations--are pressing Pinochet to clear up the Letelier case. [redacted]

[redacted] most military officers at first believed that the President had no prior knowledge of the Letelier killing. [redacted] soon after Fernandez Larios made his statements before a US court the armed forces were subjected to a vigorous

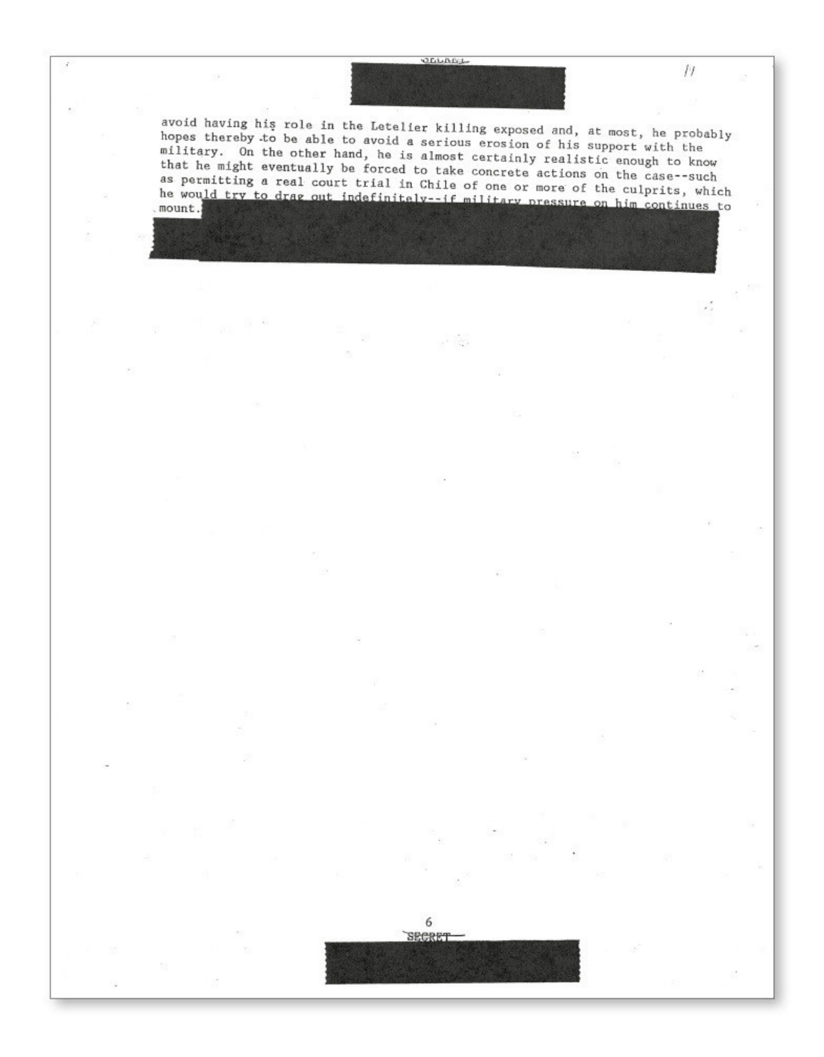
presidentially inspired campaign to denigrate the Major--branding him a deserter--and portray the whole affair as an effort by Washington to destabilize the Pinochet government. [redacted]

As a consequence of this campaign, [redacted] officers in all of the services have closed ranks behind their commanders and Pinochet and have become very guarded about commenting on the case. Nevertheless, [redacted] the government's campaign has not overcome the conviction of at least some officers that the Letelier assassination probably was planned and approved by the highest levels of the Chilean military. Moreover, an untested source reports that as of late April Army field grade officers thought that Fernandez Larios' revelations could affect Pinochet's support among middle grade officers and that many officers have become "privately skeptical" about Pinochet's role in the assassination of Letelier--which we believe means they now suspect he ordered the murder. In addition, we believe that despite the government campaign to blacken Fernandez Larios' reputation, many military officers are still seriously concerned about his revelations and their negative implications for the armed forces' reputation. We also believe that reporting to date provides only glimpses of how seriously they view this matter and of what they are prepared to do about it. [redacted]

Consequently, we judge that Pinochet [redacted] --is worried that his standing with the Army might be damaged if he merely stonewalls on the case while continuing to criticize Fernandez Larios and the US Government. At the same time, we believe that he is in a quandary over what steps would satisfy the military's concern because, above all, he fears that former DINA operations chief Colonel Espinoza, General Orozco, and especially General Contreras, would reveal his role in the murder if he moved against them. Although we have no reports that Contreras has made new threats to expose Pinochet's role in the murder, we believe that Pinochet may be seeking to protect himself at all costs, possibly even by eliminating Contreras. [redacted]

Outlook

Interest in the Letelier case in Chile is unlikely to dissipate soon, and Pinochet clearly knows this. He is probably very concerned about possible new damaging revelations on the case or actions by Washington that would cause further embarrassment for him with the Chilean military. Nevertheless, in our view, Pinochet has little recourse but to continue stonewalling in order to


SECRET
[redacted]

11

avoid having his role in the Letelier killing exposed and, at most, he probably hopes thereby to be able to avoid a serious erosion of his support with the military. On the other hand, he is almost certainly realistic enough to know that he might eventually be forced to take concrete actions on the case--such as permitting a real court trial in Chile of one or more of the culprits, which he would try to drag out indefinitely--if military pressure on him continues to mount. [redacted]

6
SECRET
[redacted]

Documento 3. Departamento de Estado, secreto, Memorando para el presidente: «Pinochet y los asesinatos de Letelier y Moffitt: Implicancias para la política de EE.UU. [hacia Chile]», 6 de octubre de 1987. (2 páginas)

SECRET

10/6/87 KX030a

DENY

RELEASE IN FULL

THE SECRETARY OF STATE
WASHINGTON

R Q
C-, AWG
JUJ
CIA
I

MEMORANDUM FOR THE PRESIDENT

FROM: George P. Shultz

SUBJECT: Pinochet and the Letelier-Moffitt Murders: Implications for US Policy

We are heading into an extremely difficult 12-18 month period with Chile. President Augusto Pinochet is determined to succeed himself as President by whatever means will ensure success. He has ruled out the possibility of a free and open election and instead intends to proceed with a yes/no plebiscite involving a single candidate--himself. The consequences of his staying in office would be highly dangerous for Chile and the region as a whole; inevitably, it would lead to serious polarization of the Chilean population and a significant strengthening of the large (and growing, thanks to Pinochet,) Moscow-dependent communist party. As events develop over the coming months I would like to discuss the overall situation with you.

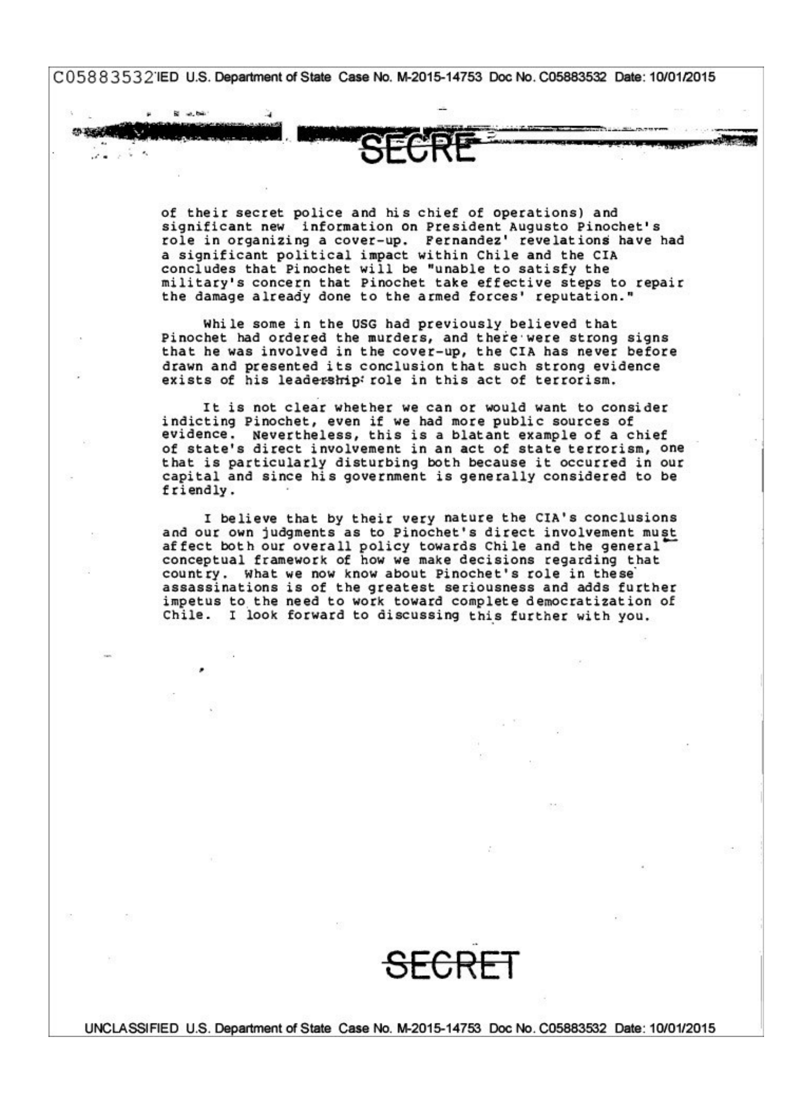
In the midst of this, I have been particularly struck by a recent report prepared by the CIA analyzing the events surrounding the assassination by car-bombing in Washington in 1976 of Orlando Letelier, a former Chilean Foreign Minister and Ronni Moffitt, an American citizen. The CIA concludes that its review provides "what we regard as convincing evidence that President Pinochet personally ordered his intelligence chief to carry out the murders." It also confirms that "Pinochet decided to stonewall on the US investigation to hide his involvement" and continues to do so, including by considering "even the elimination of his former intelligence chief."

We have long known that the Chilean secret police/intelligence service was behind this brutal act, perhaps the only clear case of state-supported terrorism that has occurred in Washington, D.C. In 1978, the Chilean Government handed over to us one of the responsible people, a dual US-Chilean national. Then, earlier this year, we persuaded another of the indictees, Chilean Major Armando Fernandez, to come to Washington and give himself up, in spite of the Chilean Government's prolonged attempts to prevent him from doing so.

Fernandez provided strong corroborative information concerning the roles of the two previously indicted senior Chilean Army officials who planned the murders (the former head

SECRET

Chile Project (#S199900030)
U.S. Department of State
Release ____ Excise ____ Deny X
Declassify: In Part ____ In Full ____
Exemption(s) B5, 7A



C05883532 IED U.S. Department of State Case No. M-2015-14753 Doc No. C05883532 Date: 10/01/2015

[redacted] SECRE

of their secret police and his chief of operations) and significant new information on President Augusto Pinochet's role in organizing a cover-up. Fernandez' revelations have had a significant political impact within Chile and the CIA concludes that Pinochet will be "unable to satisfy the military's concern that Pinochet take effective steps to repair the damage already done to the armed forces' reputation."

While some in the USG had previously believed that Pinochet had ordered the murders, and there were strong signs that he was involved in the cover-up, the CIA has never before drawn and presented its conclusion that such strong evidence exists of his leadership role in this act of terrorism.

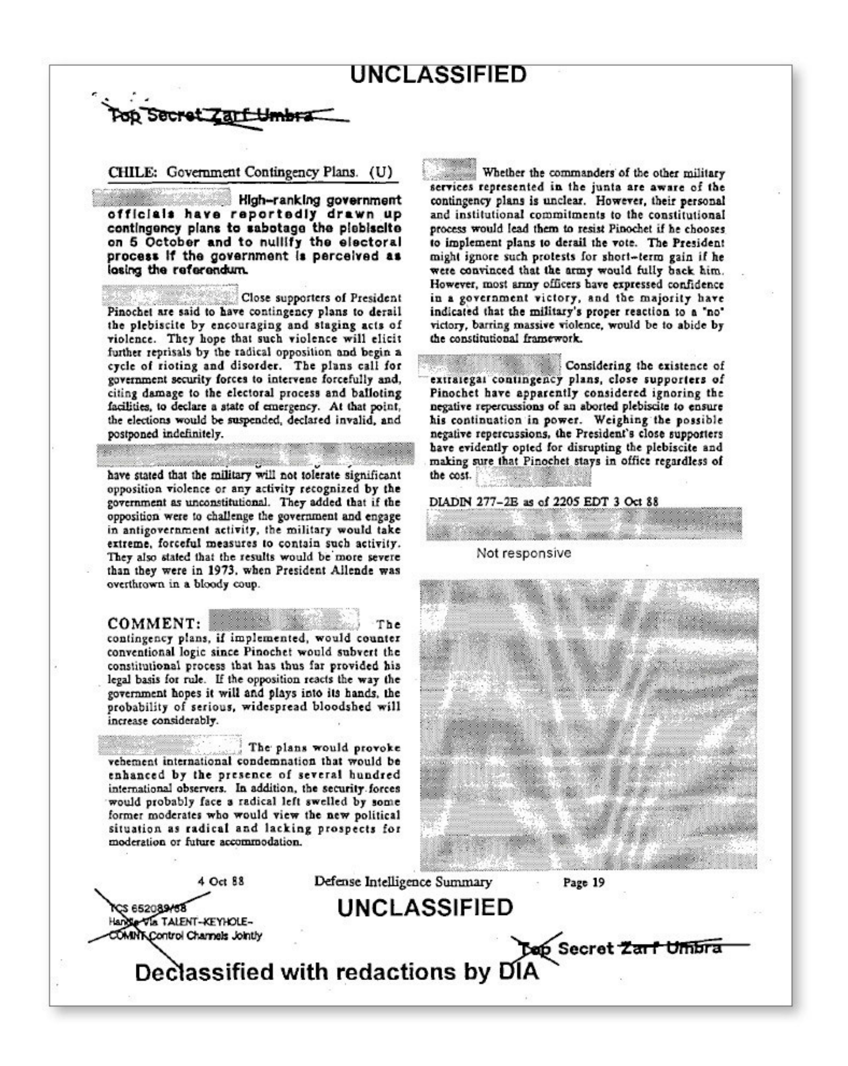
It is not clear whether we can or would want to consider indicting Pinochet, even if we had more public sources of evidence. Nevertheless, this is a blatant example of a chief of state's direct involvement in an act of state terrorism, one that is particularly disturbing both because it occurred in our capital and since his government is generally considered to be friendly.

I believe that by their very nature the CIA's conclusions and our own judgments as to Pinochet's direct involvement must affect both our overall policy towards Chile and the general conceptual framework of how we make decisions regarding that country. What we now know about Pinochet's role in these assassinations is of the greatest seriousness and adds further impetus to the need to work toward complete democratization of Chile. I look forward to discussing this further with you.

SECRET

UNCLASSIFIED U.S. Department of State Case No. M-2015-14753 Doc No. C05883532 Date: 10/01/2015

Documento 4. Agencia de Inteligencia de Defensa, alto secreto zarf umbra: Reporte «Planes de contingencia del gobierno de Chile [para interrumpir el plebiscito]», 4 de octubre de 1988.



UNCLASSIFIED

Top Secret Zarf Umbra

CHILE: Government Contingency Plans. (U)

[redacted] **High-ranking government officials have reportedly drawn up contingency plans to sabotage the plebiscite on 5 October and to nullify the electoral process if the government is perceived as losing the referendum.**

[redacted] Close supporters of President Pinochet are said to have contingency plans to derail the plebiscite by encouraging and staging acts of violence. They hope that such violence will elicit further reprisals by the radical opposition and begin a cycle of rioting and disorder. The plans call for government security forces to intervene forcefully and, citing damage to the electoral process and balloting facilities, to declare a state of emergency. At that point, the elections would be suspended, declared invalid, and postponed indefinitely.

[redacted] have stated that the military will not tolerate significant opposition violence or any activity recognized by the government as unconstitutional. They added that if the opposition were to challenge the government and engage in antigovernment activity, the military would take extreme, forceful measures to contain such activity. They also stated that the results would be more severe than they were in 1973, when President Allende was overthrown in a bloody coup.

COMMENT: [redacted] The contingency plans, if implemented, would counter conventional logic since Pinochet would subvert the constitutional process that has thus far provided his legal basis for rule. If the opposition reacts the way the government hopes it will and plays into its hands, the probability of serious, widespread bloodshed will increase considerably.

[redacted] The plans would provoke vehement international condemnation that would be enhanced by the presence of several hundred international observers. In addition, the security forces would probably face a radical left swelled by some former moderates who would view the new political situation as radical and lacking prospects for moderation or future accommodation.

[redacted] Whether the commanders of the other military services represented in the junta are aware of the contingency plans is unclear. However, their personal and institutional commitments to the constitutional process would lead them to resist Pinochet if he chooses to implement plans to derail the vote. The President might ignore such protests for short-term gain if he were convinced that the army would fully back him. However, most army officers have expressed confidence in a government victory, and the majority have indicated that the military's proper reaction to a "no" victory, barring massive violence, would be to abide by the constitutional framework.

[redacted] Considering the existence of extralegal contingency plans, close supporters of Pinochet have apparently considered ignoring the negative repercussions of an aborted plebiscite to ensure his continuation in power. Weighing the possible negative repercussions, the President's close supporters have evidently opted for disrupting the plebiscite and making sure that Pinochet stays in office regardless of the cost. [redacted]

DIADIN 277-2B as of 2205 EDT 3 Oct 88

[redacted]

Not responsive

[redacted]

4 Oct 88 Defense Intelligence Summary Page 19

TCS 652089/88
Handle Via TALENT-KEYHOLE-COMINT Control Channels Jointly

UNCLASSIFIED

Top Secret Zarf Umbra

Declassified with redactions by DIA

Documento 5. Oficina de Inteligencia e Investigación, secreto/exdis: «Chile: Plebiscito avanza mientras Pinochet aparentemente pierde», 6 de octubre de 1988.

CHILE: PLEBISCITE GOES FORWARD AS PINOCHET APPARENTLY ~~LOSES~~

Air Force junta leader Matthei, entering the presidential palace at 1:00 am Santiago time (midnight EDT) for a junta meeting, told reporters that it was clear to him that the "no" vote had won and that the junta would now have to "analyze" the situation, according to Embassy Santiago. One hour later, Interior Ministry Subsecretary Cardemil announced the "no" led the "si" 53-44 percent, with 71 percent of the vote in. Later, Interior Minister Fernandez and said "we accept the results". The Committee for Free Elections, sampling approximately ten percent of the voting tables, projected the final vote would be 55.3 percent "no" and 42.7 percent "si", with the balance being null and blank ballots. The Christian Democrat Party (PDC), doing its own parallel count, had the opposition leading Pinochet by 59-41 percent with 45 percent of the vote counted. The "No Command" vote had the opposition leading 56-41 percent, with 70 percent of ballots counted. The "Independents for the Si", a government-connected group, struck a discordant note by reporting Pinochet ahead by a narrow 50.3 to 49.6 percent margin, based on 30 percent of the vote. Voting was heavy (over 90 percent of the 7.4 million registered), largely peaceful and clean. Meanwhile, the Foreign Minister told Ambassador Barnes that US allegations that the plebiscite would be nullified were "offensive", according to Embassy Santiago. A similar message was passed to an Embassy officer by a secret police official, who also made a veiled threat that Barnes would be declared persona non grata. An Air Force General close to Matthei said on October 4 that Pinochet still planned to do whatever was necessary to stay in power, according to Embassy Santiago. Pinochet reportedly told advisors, "I'm not leaving, no matter what." The Air Force officer believes US actions in raising concerns about contingency plans to overturn the plebiscite helped to stay Pinochet's hand, but it was possible he could mount a coup after October 5.

Comment Though the government did not announce final results, it will be hard for the regime not to recognize its loss later today. Many of the missing votes are from Santiago, and would likely widen the opposition's lead. Pinochet's apparent choice not to implement contingency plans to overturn the plebiscite was likely influenced by junta importunings, publicity about the plan, and concern over the costs of acting contrary to the wishes of much of the military. Pinochet's manuevers suggest he will continue scheming to hold power, though he may have difficulty in doing so over the long-term and might find himself increasingly boxed in as time wears on. The opposition will follow up its victory by seeking talks with the military on amending the constitution and moving up the date of the December 1989 presidential and congressional elections. Initially, at least, the military may be resistant to these changes. Pinochet's defeat will lead to calls for his immediate retirement, though moderates will tread lightly on this subject, lest they worry the military. The far left, however, will push for Pinochet leaving and a provisional government and also try to undercut any accomodation moderates may seek with the government through demonstrations (perhaps as early as today), armed violence and sabotage.

8

Crímenes atroces y responsabilidad:

El largo epílogo del caso Pinochet

El torturador, igual que los piratas de antaño,
es hostis humanis generis, «enemigo de toda la humanidad».

Notable fallo de la justicia estadounidense sobre los derechos de las víctimas de tortura, 1980.

Quien trata de propiciar un golpe de Estado puede considerarse responsable de las consecuencias naturales y probables de tal acto.

Philip Buchen, consejero de la Casa Blanca, a la CIA, 24 de junio de 1975.

El 16 de octubre de 1998, el juez británico Nicholas Evans firmó la orden de detención de Augusto Pinochet. El documento pedía a «todos y cada uno de los agentes de la Policía Metropolitana» de Londres «detener al acusado y hacerlo comparecer ante el Tribunal de Bow Street» (véase el documento 1). Aquella noche, dos detectives de la brigada de Scotland Yard contra el crimen organizado llegaron en coche al selecto hospital privado en que convalecía Pinochet de una intervención en la espalda. Una vez allí, le presentaron un «mandato judicial de prioridad alta» —enviado por España a través de la Interpol— por el que se exigía la búsqueda y captura del general por crímenes de genocidio y terrorismo.

La detención de Pinochet pasará a los anales de la historia como un momento crucial para el movimiento internacional de defensa de los derechos humanos y un acto de reivindicación y gran trascendencia para las víctimas y sus familias. «Cuando leí que habían apresado al general Pinochet», recuerda Murray Karpen, padre de Ronni Karpen Moffitt, «lo primero que me dije fue: "Dios existe"». Su detención confirió autoridad al principio de jurisdicción universal —la potestad de la comunidad internacional para perseguir a dictadores, torturadores y genocidas fuera de sus países de origen—. Y pese a que la prolongada historia de los más de dieciséis meses de arresto domiciliario que vivió Pinochet en Londres acabaría con su regreso final a Santiago de Chile, su caso sentó un precedente —el precedente Pinochet— que atañe a quienes han cometido y a quienes cometerán violaciones contra los derechos humanos, así como a los empeños legales e históricos en responsabilizarlos, a ellos y a sus cómplices, de crímenes de lesa humanidad. Asimismo, en Estados Unidos, su detención propició de forma directa el levantamiento del secreto que pesaba, desde hacía ya muchos años, sobre gran parte de los archivos relacionados con las brutalidades de Pinochet y el papel que desempeñaron en ellas las autoridades estadounidenses que apoyaron a su régimen.

La iniciativa española

La génesis de la pasmosa aprehensión del general Pinochet se remonta al mismo día en que se hizo con el poder. El 11 de septiembre de 1973, cuando los militares chilenos comenzaron a asaltar el Palacio de La Moneda, Salvador Allende exhortó a uno de sus asesores políticos, el abogado español Joan Garcés, a escapar del edificio y «contar al mundo lo que ha ocurrido». Después de pasar dos décadas escribiendo libros y artículos acerca del gobierno de Allende y la dictadura de Pinochet, Garcés centró su atención en hacer que la justicia castigara al general por las atrocidades cometidas contra Chile y su gente, movido, según sus propias explicaciones, por el hecho de sentirse testigo de un crimen que había tenido por víctima a todo un pueblo y en el que se habían exterminado, de forma deliberada, las estructuras democráticas de una nación.[1]

A mediados de 1996, Garcés contactó al fiscal español Carlos Castresana, quien, en tanto miembro de una unidad de procesamientos especiales dentro de la judicatura española, había ya abierto casos únicos de derechos humanos contra antiguos miembros de la Junta Militar argentina. Valiéndose del modelo legal que Castresana había establecido, se inició un empeño judicial contra Pinochet y sus comandantes por la muerte ocurrida en Chile después del golpe de algunos ciudadanos españoles.[2] Con el apoyo de Castresana, Garcés presentó una demanda de «acción del pueblo», para lo cual se sirvió de una serie de vacíos legales del sistema judicial español que reconoce la jurisdicción universal para delitos tales como el genocidio, la detención ilegal y el terrorismo. La Audiencia aceptó este pleito, así como otro entablado contra los militares argentinos por violaciones de los derechos humanos, y los asignó a sendos «superjueces»: Baltasar Garzón, quien se centró en las atrocidades cometidas en Argentina y extendió su labor a los crímenes de la Operación Cóndor, y Manuel García Castellón, quien se encargó de la causa contra Pinochet y sus comandantes.

A petición de Garcés, la investigación concerniente a Chile se amplió más allá de las víctimas españolas, para convertirse en un litigio en nombre de los derechos humanos de todas las víctimas del régimen. Así, por vez primera, los chilenos, y las familias de los fallecidos de otras nacionalidades, dispusieron de una posible solución legal con la que romper el escudo de impunidad que había creado Pinochet para sí mismo y para sus generales. Con la ayuda de Garcés, el juez García Castellón tomó declaración a cientos de víctimas y testigos e identificó a no menos de treinta y ocho miembros del régimen a los que podría procesar... y entre los que se hallaba el propio general Pinochet.

Detención de Pinochet

Durante dos años, los equipos jurídicos españoles impulsaron estas causas pioneras en el ámbito de la legislación internacional tocante a los derechos humanos. Para ello hubieron de afrontar la intromisión de su propio gobierno, la tensión de las relaciones entre su país y Chile y la renuencia de la administración estadounidense a procurar las pruebas documentales

necesarias para procesar a los militares chilenos. El reto más difícil que se les planteó, no obstante, fue lograr la comparecencia del objeto de su investigación. La ley española prohíbe la celebración de juicios en ausencia del procesado y, a pesar de que España tiene un tratado de extradición con Chile, resultaba impensable que la Corte Suprema de este último, repleta de jueces nombrados por Pinochet, se prestara a hacerlo salir del país para que lo juzgaran en el extranjero.

A finales de septiembre de 1998, tras las celebraciones del vigésimo quinto aniversario de su tristemente célebre golpe de Estado, Pinochet se trasladó con su esposa a Londres. Durante su estancia, concedió una entrevista a Jon Lee Anderson para la biografía sin precedentes que se publicaría en The New Yorker. Esta apareció cuatro días después de su detención y, por irónico que parezca, representó el inicio de la campaña de relaciones públicas con que el antiguo dictador esperaba mejorar su imagen internacional y obtener la «bendición de la historia».[3] El reportaje incluía la fotografía de un anciano de apariencia venerable vestido con traje de paisano —«como el abuelo elegante de cualquiera de nosotros», en palabras de Anderson—, tomada el 25 de septiembre en el lujoso Hotel Park Lane de Londres, ciudad en la que, según exponía el artículo, Pinochet tenía previsto obtener ayuda médica.

Para cuando apareció en los quioscos la entrevista de The New Yorker, ya había llegado a la sede británica de Amnistía Internacional la noticia de que Pinochet estaba en Inglaterra. Federico Andreu, uno de los asesores legales de la asociación, informó de su presencia a Joan Garcés, que se hallaba en Madrid, y este comenzó entonces a hacer gestiones en los tribunales españoles para que se interrogara, retuviera y extraditara al general. A fin de lograr cuanto antes la colaboración del Reino Unido, España recurrió a la Convención Europea para la Supresión del Terrorismo, un tratado de cooperación mutua que obliga a los firmantes a identificar, localizar y atrapar a los sospechosos de terrorismo internacional. El 14 de octubre, el juez Baltasar Garzón hizo llegar a Scotland Yard la petición inicial de detener a Pinochet.[4] El auto (resolución judicial) que la siguió, que también se centraba en la función desempeñada por el general en la Operación Cóndor, lo acusaba de impulsar la creación de una organización internacional que concibió, desarrolló y ejecutó un plan sistemático de

detenciones ilegales (secuestros), torturas, desplazamientos forzosos de personas, asesinatos y/o desaparición de numerosas personas, incluyendo ciudadanos de Argentina, España, Reino Unido, Estados Unidos, Chile y otros Estados, en diferentes países con la finalidad de alcanzar los objetivos políticos y económicos de la conspiración, exterminar a la oposición política y a múltiples personas por razones ideológicas...[5]

La detención de Pinochet —hecho espectacular y sin precedentes— marcó el principio de una larga historia de poco más de dieciséis meses que acaparó la atención de todo el planeta. Nunca antes se había arrestado a un antiguo jefe de gobierno fuera de su país para extraditarlo a un tercer Estado, y a esto hay que sumar las nada despreciables implicaciones legales, políticas, morales e históricas que comportaba el hecho de enjuiciar a uno de los violadores de los derechos humanos más conocidos del mundo. Sin embargo, mientras España trataba de conseguir su extradición, el gobierno chileno, intimidado por la ira del estamento militar y las muestras de indignación nacionalista de los acaudalados empresarios de la derecha, instó a las autoridades británicas a ponerlo en libertad. Durante el período en el que permaneció bajo arresto domiciliario en una finca cuyo alquiler era de dieciséis mil dólares mensuales, su caso se transformó en el modelo que debía tenerse en cuenta para hacer crecer la legislación moderna sobre derechos humanos, así como en el objeto de una disputa política internacional tan larga como enconada.

En un primer momento, los tribunales británicos dictaminaron que, dado su «derecho a la inmunidad en calidad de antiguo soberano», el general no podía ser procesado ni, por ende, detenido o extraditado. En consonancia con lo dispuesto por el vetusto «derecho divino de los reyes», el presidente del Tribunal Superior de Justicia, lord Thomas Bingham, determinó que «un antiguo jefe de Estado goza de total inmunidad frente a los actos criminales cometidos durante el ejercicio de sus funciones públicas». El argumento que presentaron en noviembre los abogados de Pinochet, pertenecientes al prestigioso bufete de Kingsley Napley, ante la Cámara de los Lores fue, cuando menos, insólito: la tortura, el asesinato y el terrorismo formaban parte, de hecho, de las «funciones públicas» oficiales del gobierno, desempeñadas por entidades oficiales del Estado bajo el mando de Pinochet. Todas estas atrocidades, según adujeron, se habían cometido «en

el seno de la autoridad gubernamental y bajo órdenes dictadas a los militares o las fuerzas del gobierno». Tal como aseguró el principal abogado del general, Clive Nicholls, en la declaración más memorable del proceso, la Ley de Inmunidad Estatal del Reino Unido estaba elaborada en términos tan amplios que «habría protegido al mismísimo Hitler» de ser enjuiciado en Londres.[6]

«La tortura es una acción que ningún Estado busca defender», respondió en su intervención ante los cinco magistrados de la Cámara Christopher Greenwood, el eminente abogado pro derechos humanos que representaba a España. Por lo tanto, dado que sobrepasa las funciones legítimas de un Estado, no puede ser considerada un acto oficial protegido por la legislación británica en torno a la inmunidad. «Las autoridades españolas», declaró Alun Jones, resumiendo los argumentos en favor de la extradición, «concluyen que los crímenes salvajes y bárbaros perpetrados en Chile y en el territorio de otros países, entre los que se incluyen Estados Unidos, España e Italia, no se encuentran dentro de las funciones de un jefe de Estado en la legislación inglesa ni en la de ninguna otra nación, incluido Chile».

Los lores magistrados se mostraron de acuerdo. El 25 de noviembre (el día que Pinochet cumplía ochenta y tres años) dictaminaron, por votación de tres contra dos, que el genocidio y la tortura no constituían «una conducta aceptable por parte de nadie», y menos aún por parte de un jefe de Estado. Sin embargo, la decisión de permitir su extradición a España no tardó en quedar anulada cuando los abogados del general arguyeron que uno de los magistrados tenía un conflicto de intereses.[7] En marzo de 1999, una segunda comisión de magistrados reafirmó que Pinochet podía ser extraditado, aunque solo en virtud de los crímenes contra los derechos humanos cometidos después de septiembre de 1988, fecha en que el Reino Unido firmó la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas.

No obstante, las diligencias políticas hechas entre bastidores por el gobierno chileno con la intención de inducir al Ejecutivo de Blair a permitirle regresar a su patria —llevadas a cabo por el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Gabriel Valdés, y su principal ayudante, Alberto van Klaveren— acabaron por frustrar los empeños legales de España y Gran

Bretaña en aplicar la jurisdicción universal y hacer comparecer ante la justicia a un conocido criminal internacional. Incapaces de obtener su liberación por cauces legales, el ministro chileno y sus hombres mantuvieron numerosas reuniones privadas con altos funcionarios de la administración británica a fin de negociar un acuerdo que permitiese la puesta en libertad de Pinochet. Por su parte, el gobierno de Eduardo Frei hijo y los seguidores del general emprendieron una campaña pública conjunta en los medios de comunicación para solicitar su perdón por motivos humanitarios. Mariano Fernández, subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile, recordó, tras visitar al general, su condición de enfermo y octogenario, a lo que su antiguo compinche Miguel Schweitzer añadió, ante la prensa, que se trataba de un anciano enfermo, que usaba marcapasos y padecía diabetes y una dolencia crónica de la columna vertebral. Después de una dilatada entrevista cara a cara concedida en julio a The Telegraph, en la que, al parecer, se mostró «agudo y calculador», sus consejeros evitaron cualquier aparición de Pinochet en los medios de comunicación. Desde entonces, los periódicos y la televisión solo mostraron imágenes del general en silla de ruedas. A principios de octubre, uno de sus médicos anunció que había sufrido una serie de pequeñas apoplejías que lo habían dejado «desorientado». Sus abogados no dudaron en interponer un rosario de apelaciones legales contra la extradición, para lo cual alegaban que la salud mental del antiguo dictador le impedía participar en su propia defensa, en tanto que el ministro británico del Interior, Jack Straw, insinuó la posibilidad de dejarlo en libertad por «compasión».

El 11 de enero de 2000, Straw anunció que, «dado el reciente deterioro de la salud del senador Pinochet», no era conveniente que se lo sometiera a un juicio. Basó su decisión en un controvertido informe médico elaborado por cuatro especialistas británicos que examinaron al general, aunque invocó su «derecho a la intimidad» para no hacer público el documento. Tras otra ronda de apelaciones, presentadas por Bélgica —nación que, junto con Suiza y Francia, había solicitado también la extradición— y seis asociaciones de defensa de los derechos humanos, el gobierno británico se vio obligado a revelar el contenido del informe, que hablaba de una leve demencia senil, acorde con la edad de Pinochet, y de un «déficit de memoria respecto de acontecimientos recientes y remotos». El 2 de marzo de 2000, Straw hizo público el fallo definitivo: Pinochet «no está, en estos

momentos, mentalmente capacitado para participar en un proceso legal», por lo que no sería extraditado a España.

Acto seguido, el general y quienes lo acompañaban se dirigieron a una base militar situada en las afueras de Londres, donde lo esperaba un reactor de la Fuerza Aérea chilena con el depósito lleno de combustible y listo para despegar. La mañana del 3 de marzo aterrizó en el aeropuerto de Pudahuel, en Santiago, con lo que, en apariencia, se puso fin a la odisea de su posible procesamiento por violación de los derechos humanos. Los militares chilenos, encabezados por el general Ricardo Izurieta, sucesor de Pinochet en el cargo de comandante en jefe del Ejército, organizaron en su honor una recepción en la que no faltó siquiera la alfombra roja, un acto que suponía toda una provocación a la comunidad internacional y quebrantaba el acuerdo alcanzado con el gobierno entrante de Ricardo Lagos, según el cual no habría ceremonia pública alguna tras su regreso. Con la música de fondo que proporcionaba una banda militar, Pinochet, sonriente y ágil, se levantó de la silla de ruedas y caminó por la pista para estrechar la mano a los generales que tanto habían influido en la decisión que lo puso en libertad y le permitió volver a su país.

Chile después de Pinochet (1991-2000)

El país al que regresó Pinochet no era el mismo que había dejado al partir. Hasta marzo de 1998, fecha en que cesó en el cargo de comandante en jefe del Ejército para asumir el título de «senador vitalicio», que le garantizaba la inmunidad total ante sus crímenes, Pinochet se había servido del poder que le confería su posición en el estamento militar para convertir al gobierno civil en rehén de la violencia del pasado. Comandados por él, los militares blandieron sus sables cada vez que se daba un paso importante para que rindieran cuentas ante la ley de su conducta criminal. Tal como advirtió en 1989 al gabinete civil del nuevo gobierno: «El día que toquen a alguno de mis hombres, se acaba el Estado de derecho».

Esta escueta intimidación surtió el efecto deseado sobre el gobierno civil entrante de Patricio Aylwin. Antes aún de llegar al poder, este último confió a altos cargos de la administración estadounidense que estaba considerando

la posibilidad de resignarse a la Ley de Amnistía dictada por Pinochet, que prohibía sancionar atrocidades cometidas entre 1973 y 1978, aunque dejaba expresamente fuera el crimen de Letelier y Ronni Moffitt. En el transcurso de un discreto encuentro celebrado en Buenos Aires en julio de 1989, Aylwin comunicó al vicesecretario de Asuntos Interamericanos, Bernard Aronson, que el primer gobierno que se instaurase tras el régimen de Pinochet necesitaría hacer justicia sin organizar una caza de brujas ni crear un conflicto con los militares.

En su discurso de investidura, que no por casualidad se pronunció en el Estadio Nacional, escenario de tantas muertes, Aylwin dejó bien claro que su elección no representaba sino un retorno parcial al poder civil. «Pero nuestra satisfacción en este día», afirmó, «no puede impedirnos advertir con claridad las numerosas limitaciones, trabas y pies forzados que, en su afán de prolongarse, nos deja el régimen hasta ayer imperante». Reconoció que las condiciones que había impuesto Pinochet a la transición eran estrictas y que el nuevo gobierno no había tenido otra opción que aceptarlas; pero zanjó la cuestión con la siguiente pregunta: «¿Deberíamos, para evitar aquellas limitaciones, haber expuesto a nuestro pueblo al riesgo de nuevas violencias, sufrimientos y pérdida de vidas?».[8]

Dados los obstáculos mencionados por el nuevo presidente, el pueblo podía aspirar a que saliera a la luz la verdad de las violaciones cometidas por Pinochet contra los derechos humanos, pero no a que se hiciera justicia. En consecuencia, en abril de 1990, Aylwin estableció la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, presidida por Raúl Rettig, que tenía el cometido de «contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos» perpetradas durante la dictadura militar. A este equipo de investigadores se le dieron menos de doce meses para investigar diecisiete años de abusos y elaborar al respecto un extenso informe, que, además, debía limitarse a exponer la suerte corrida por las múltiples víctimas sin identificar a aquellos que las habían torturado y asesinado. «La comisión nombró a las víctimas», señaló José Zalaquett, uno de sus miembros, «pero no a los perpetradores».[9]

Hasta la fecha en que fue detenido Pinochet, la elite política de Chile adoptó lo que los politólogos llaman una «conspiración de consenso» con la

intención de enterrar, en esencia, el pasado y fingir que el informe de la Comisión había llevado la «reconciliación» a la sociedad chilena. Se erigieron monumentos a las víctimas; se celebraron ceremonias como la inhumación oficial de Salvador Allende en el Cementerio General de Santiago, y Chile experimentó de forma periódica lo que Alexander Wilde ha descrito como «irrupciones de memoria» en las que quedaba al descubierto una nación que aún sufría por las heridas del pasado.[10] De cualquier manera, hasta que Pinochet dejó, en marzo de 1998, el cargo de comandante en jefe del Ejército, sus militares actuaron con impunidad, protegidos en gran medida por el escudo de inmunidad que los protegía.

Con todo, hubo una excepción digna de mención: el caso Letelier y Moffitt. En cuanto acto de terrorismo internacional perpetrado en Estados Unidos, este doble asesinato fue objeto de una presión política cada vez más evidente por parte de Washington. Las condiciones impuestas por la Enmienda Kennedy —que prohibía el restablecimiento de la ayuda militar a Chile si el presidente no certificaba que el país estaba colaborando para lograr que se juzgase a los culpables—, unidas a la astuta insistencia mostrada ante el Congreso y el Ejecutivo por las familias Letelier, Moffitt y Karpen, imposibilitaban la total normalización de las relaciones de Estados Unidos con el Chile posterior a Pinochet si no se hacía antes justicia en relación con las muertes de Orlando Letelier y Ronni Moffitt.

En 1987, Washington había instado de nuevo a las autoridades chilenas a hacer legalmente responsables a los autores del atentado, después de que uno de ellos, Armando Fernández Larios, huyera de Chile —ayudado en secreto por el FBI y el Departamento de Estado— y accediese a declararse culpable y testificar a cambio de protección en Estados Unidos. En una sesión informativa confidencial, Fernández proporcionó abundantes detalles acerca del papel desempeñado en la conspiración homicida por Manuel Contreras y Pedro Espinoza, e implicó de forma directa a Pinochet en el posterior encubrimiento de la participación de la Dina en el atentado con coche bomba.

El 11 de mayo de 1987, Estados Unidos usó la confesión de Fernández para volver a solicitar formalmente a Chile la extradición de Contreras y Espinoza. El régimen de Pinochet rechazó la petición e hizo otro tanto

cuando, el 17 de julio, el gobierno de Reagan envió una nueva nota diplomática para exigir que juzgasen en Santiago a los dirigentes de la Dina. El único paso que llegó a darse en relación con la causa fue el fallo de un tribunal militar por el que se modificaba la situación de la investigación interna que, supuestamente, se estaba efectuando en torno a la falsificación de los pasaportes paraguayos y que pasó de «cerrada» a «suspendida». Washington aprovechó este diminuto resquicio para respaldar una serie de apelaciones legales interpuestas por Fabiola Letelier, hermana de Orlando, para hacer avanzar el «caso de los pasaportes». Sin embargo, la presión ejercida por Estados Unidos para obligar a los tribunales militares de Pinochet a recuperar la única posibilidad legal de procesar a los altos mandos de la Dina no tuvo efecto alguno.

Además de exhortar a que se enjuiciara a los militares, el gobierno de Reagan hizo suyas las reclamaciones de las familias de ambas víctimas, que exigían una indemnización por sus muertes. En 1979, los familiares habían entablado un pleito por muerte por negligencia contra el régimen de Pinochet y, tras examinar con detenimiento las pruebas que obraban en su poder, un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito de Columbia determinó, el 5 de noviembre de 1980, que el gobierno chileno era responsable de los asesinatos, por lo que condenó al régimen a pagar daños y perjuicios por un valor total de 5,3 millones de dólares. Este hizo caso omiso del fallo, y los familiares de las víctimas trataron entonces de hacer que se ejecutase la sentencia proponiendo que se retuviera un avión de pasajeros perteneciente a las aerolíneas estatales LAN Chile que descansaba en el aeropuerto Kennedy. Sin embargo, los tribunales resolvieron que no podían embargarse los activos de dicha compañía, por lo que a los demandantes no les quedó otra cosa que lo que las autoridades judiciales llamaron «un derecho sin remedio».

Con el propósito de buscar ese «remedio», el único superviviente del ataque, Michael Moffitt, y el enérgico abogado de las familias Moffitt y Letelier, Samuel Buffone, acometieron una campaña conjunta en el Congreso para que se reformase la Ley de Inmunidad de Soberanos Extranjeros (FSIA, por su sigla en inglés), a fin de facilitar la confiscación de bienes del gobierno chileno. El gabinete de Reagan, sin embargo, se negó a modificarla por razones diplomáticas. A cambio, ofreció la

posibilidad de que el Departamento de Estado «respaldar[a] las reclamaciones» de las familias y transmitirlas al gobierno chileno. El 28 de julio de 1987, Elliott Abrams, ayudante del secretario de Estado, presentó ante el embajador de Chile en Washington la primera de varias notificaciones diplomáticas por las que solicitaba al régimen el pago de doce millones de dólares en compensación por «los daños nacionales y personales [causados por] la participación del gobierno chileno en el asesinato de Letelier y su posterior encubrimiento».[11] El 27 de agosto, en la nota diplomática número 07731, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile reiteró que su país «no tuvo ninguna participación en los crímenes que tuvieron como consecuencia las muertes del señor Letelier y la señora Moffitt» y «rechaza cualquier interpretación de los derechos que pretenda involucrar a la República en las muertes».

Con la derrota sufrida por Pinochet en el plebiscito de 1988, comenzó a acercarse a su final la larga historia de mentiras y obstrucción a la justicia que había protagonizado el régimen. Al referéndum siguió un período de intensa actividad. El general Contreras, temeroso de que el gobierno civil entrante tratara de entregarlo a los estadounidenses, intentó, una vez más, chantajear a Washington. «Da la impresión de que ya no se siente seguro escondido tras las evasivas del gobierno», comunicó al Departamento de Estado la embajada en un cablegrama con fecha 10 de febrero de 1989 titulado «Oferta/amenaza de Manuel Contreras». La embajada informó que el militar chileno aseguraba haber llegado, con cuatro altos funcionarios «gringos», a sendos «acuerdos» por los que Estados Unidos no revelaría ninguna información que pudiese resultarle perjudicial a él y, a cambio, él no haría públicos datos que pudiesen minar la reputación del nuevo presidente de Estados Unidos, George Bush, quien ocupaba el puesto de director de la CIA cuando se produjeron los asesinatos. Contreras, según señalaba el despacho, «considera que las recientes iniciativas adoptadas por nuestro gobierno han quebrantado los mencionados “acuerdos” y que, a menos que se alcance un nuevo arreglo antes de que acabe el mes de febrero, tiene la intención de emprender una serie de acciones que no especifica, pero que, asegura, serán perjudiciales para Estados Unidos».

Todo hacía pensar que estas «acciones» no serían sino rimbombantes declaraciones con las que trataría de culpar a la Agencia Central de

Inteligencia del atentado con coche bomba. «De cualquier modo», concluía la embajada, «lo cierto es que Contreras es el hombre más peligroso de Chile [y] se encuentra, en estos momentos, sometido a una presión colosal (...) y no podemos descartar la posibilidad de que incite algún acto terrorista». El personal de Washington, sin embargo, no se mostró impresionado en absoluto ante esta información. «Me sorprendería en grado sumo que cualquier miembro de nuestro gobierno pueda haber hecho un trato semejante con esa mierdecilla de perro», escribió Michael Kozak, ayudante segundo del secretario de Estado, en el memorando que elaboró en respuesta a la amenaza. «Deberíamos [estudiar el modo como] podemos servirnos de este hecho para presionar aún más a Contreras: la mejor defensa podría ser un ataque».[12]

Durante el período de transición al poder civil, Washington acometió una serie de iniciativas en diversos frentes destinadas a impedir, de una vez por todas, que el caso Letelier y Moffitt pudiese socavar en el futuro las relaciones entre ambos países. El embajador Charles Gillespie recomendó ponerse en contacto, entre bastidores, con los sectores de mayor relevancia del Ejército chileno a fin de convencerlos de lo beneficioso que sería para ellos, desde el punto de vista institucional, extraditar a Contreras. «Deberíamos alentarlos haciéndoles ver que Estados Unidos considera el caso Letelier uno de los principales obstáculos que impiden que reanudemos las relaciones que manteníamos con ellos», escribió en un cablegrama secreto. «Chile se beneficiaría de forma evidente si nuestros contactos militares recuperasen la normalidad y Estados Unidos está dispuesto a hacer cuanto sea necesario para llegar hasta el final. No pensamos renunciar; así que más les vale afrontar la situación».[13] El gobierno de Bush comenzó asimismo a establecer contactos confidenciales con Patricio Aylwin y sus colaboradores. Antes incluso de que se instituyera su gobierno civil, en marzo de 1990, los emisarios estadounidenses habían elaborado un calendario estratégico para establecer una comisión especial en torno a la indemnización que debían recibir los familiares, introducir en el Parlamento chileno la legislación necesaria para transferir el «caso de los pasaportes» de un tribunal militar a uno civil y nombrar a un fiscal especial que procesara a Contreras y a Espinoza.

Algunos sectores del gabinete de Bush contaban con hacer que las relaciones con Chile volviesen a la normalidad antes de que el país sudamericano hiciese progresos concretos en la resolución del caso. «Es de vital importancia que adoptemos una postura unificada», hizo notar el director de la sección del Departamento de Estado responsable del Cono Sur en una memoria fechada el 4 de mayo de 1990, «y definamos de un modo preciso lo que queremos que haga el GC antes de concederle nuestra certificación». Los intereses de Washington diferían de los del nuevo gobierno civil de Santiago, tal como señaló el director de la sección, Keith Smith, en otro memorando:

> Ellos quieren resolver el caso con el objetivo de normalizar las relaciones con EE.UU., pero de tal modo que se reduzca al mínimo el coste financiero y político. Aylwin desea evitar un enfrentamiento con los militares en torno al caso Letelier. EE.UU., por otra parte, debe considerar varios factores (incluidos el Congreso estadounidense y los familiares de Letelier y Moffitt) que exigen una resolución completa y satisfactoria del caso, en sus vertientes civil y criminal, antes de la normalización de las relaciones con Chile.

Los familiares emprendieron lo que los documentos confidenciales del Departamento de Estado describían como una «búsqueda implacable de justicia», que comportaba el procesamiento de los funcionarios chilenos responsables y una indemnización civil. Encabezados por Michael Moffitt y Sam Buffone, lograron el respaldo estratégico del Congreso para que el gobierno de Bush no derogara de forma prematura la Enmienda Kennedy antes de que comenzase el juicio de los agentes de la Dina, así como para evitar que el Ejecutivo ofreciese a Chile una posición comercial preferente por medio del sistema generalizado de preferencias (GSP, por su sigla en inglés). «Quieren que primero haya comenzado el proceso», según un informe oral proporcionado por vía telefónica a la embajada después de que el personal del Departamento de Estado se reuniese con Moffitt y Buffone el 19 de abril de 1990. «Han dicho que no deberíamos subestimar la facilidad con que pueden estropearnos los planes (no solo en lo referente a la Enmienda Kennedy, sino que también en lo que respecta al GSP). Tal vez pretendan tratar otra vez de modificar la Ley de Inmunidad de Soberanos Extranjeros».[14] Cuando el vicesecretario de Estado, Lawrence

Eagleburger, viajó a Santiago en mayo, comunicó sin ambages a los funcionarios chilenos que el Congreso de Estados Unidos estaba dispuesto a oponerse a la normalización de las relaciones económicas y militares si aún estaba pendiente una resolución en lo tocante al doble asesinato.

Lo cierto, sea como fuere, es que Washington no esperó a dicha resolución. El gobierno no dejó escapar la oportunidad que le brindaba el éxito inicial para conceder a Chile la certificación necesaria en diciembre de 1990, con motivo de la visita oficial del presidente Bush a Santiago. Durante el brindis que hizo en su honor, el presidente Aylwin se comprometió a garantizar que se haría justicia, promesa que el gobierno chileno acabaría por cumplir —si bien con cierta lentitud—, sometido como estaba a una enorme presión.

El 11 de junio de 1990, los gobiernos de Bush y Aylwin habían firmado un acuerdo formal por el que se establecería una comisión internacional encargada de determinar la cantidad de las indemnizaciones. Aún hizo falta un año más para que las dos cámaras del Parlamento chileno ratificasen el acuerdo y otros seis meses más para que la comisión fijase una cifra. En mayo de 1992, Chile accedió a pagar 2,6 millones de dólares a los familiares de Orlando Letelier y Ronni Moffitt.

El proceso criminal contra Contreras y Espinoza se llevó a cabo de forma más o menos paralela: el 16 de enero de 1991, movido por la insistencia de Aylwin, el Congreso chileno aprobó por fin una ley que ponía el caso de los pasaportes a disposición de los magistrados civiles. Aylwin pidió de inmediato a la Corte Suprema de Chile que eligiese a un fiscal especial para la causa, nombramiento que recayó posteriormente en Adolfo Bañados, la primera persona designada por él para formar parte del Tribunal. Cuando se cumplía el decimoquinto aniversario del atentado, Bañados tramitó la acusación contra Contreras y Espinoza y ordenó su comparecencia ante la Corte en calidad de imputados. «Es la primera vez que Contreras y Espinoza son detenidos de resultas de una acción judicial chilena independiente», comunicó la embajada.

El enjuiciamiento sin precedentes de estos dos altos cargos de la Dina durante la segunda mitad de 1993 se convirtió, en lo que respecta a su resonancia en los medios de comunicación, en el equivalente chileno del juicio celebrado contra O. J. Simpson en Estados Unidos. Todos los días, la

nación entera ponía sus cinco sentidos en las emisiones televisivas que informaban de la presentación de las abrumadoras pruebas existentes contra Contreras y Espinoza. Para muchos chilenos, la retransmisión del juicio constituía su primer contacto con información sobre las operaciones sórdidas y crueles de la Dina que no hubiera sido manipulada de alguna manera; para las víctimas y sus familias, el ver a Contreras rindiendo cuentas ante un tribunal por un crimen perpetrado en el extranjero suponía un acto —mínimo— de justicia por los miles de abusos atroces cometidos como jefe de la policía secreta de Pinochet.

El 12 de noviembre de 1993, Contreras y su subordinado inmediato fueron declarados culpables. Lo insignificante de las sentencias (siete y seis años, respectivamente) constituyó un claro reflejo de las limitaciones de que adolecía el sistema judicial chileno a la hora de hacer pagar a los militares pinochetistas por los crímenes cometidos. De hecho, cuando, en mayo de 1994, se agotaron sus apelaciones legales, los militares chilenos ayudaron a Contreras a evadir el encarcelamiento trasladándolo por aire al amparo de una base militar y, más tarde, a un hospital de la Armada en Talcahuano, donde él y los médicos militares que lo atendían declararon que sufría diversas enfermedades que harían peligrar su vida en caso de ingresar en prisión. Las Fuerzas Armadas protegieron a Contreras durante más de un año y dieron pie con ello a la crisis más relevante en las relaciones entre las autoridades civiles y militares desde que Pinochet había dejado el poder.

Finalmente, debido a la intensa presión ejercida entre bastidores por el gobierno de Clinton, el nuevo presidente, Eduardo Frei hijo, logró convencer al Ejército de que el hecho de dar refugio a alguien que había sido condenado por terrorismo internacional no redundaría precisamente en beneficio del estamento militar. Así, en octubre de 1995, Contreras se unió al coronel Espinoza en Punto Peuco, hotel-prisión construido para alojarlos durante sus breves condenas. A principios de 2002, ambos estaban de nuevo en libertad, actuando a su antojo en Santiago... al menos durante un tiempo, hasta que fueron acusados de otros crímenes cometidos por la Dina y los volvieron a arrestar.[15]

El retorno de Pinochet

El 11 de septiembre de 1998, vigésimo quinto aniversario del golpe de Estado, supuso para la sociedad chilena una oportunidad excelente para comenzar a reexaminar de forma abierta y enérgica su pasado aún doloroso y sin resolver. La aparición de toda una serie de libros, artículos y documentales de radio y televisión acaparó la atención del público y dio lugar a un número insólito de debates. Diez días después de esta fecha, Pinochet y su familia viajaron a Londres con la intención de pasar unas vacaciones y efectuar algunas compras. A mediados de octubre, cuando el general fue detenido y sus abusos se hicieron protagonistas de los periódicos de todo el mundo, Chile experimentó una «erupción» nacional de memoria.

Durante los quinientos tres días espectaculares que permaneció Pinochet bajo arresto domiciliario en Londres, en su país se dispararon los debates relativos a la relevancia y conveniencia de su detención. Las encuestas de opinión revelaban que una minoría, pequeña pero poderosa, de los chilenos —más o menos el 25 por ciento— pensaba que debía ser puesto en libertad, en tanto que el 69 por ciento opinaba que debía ser encausado, bien en Chile, bien en España. Por su parte, los militares reprochaban al gobierno civil de Eduardo Frei que no hubiese sido capaz de encontrar un modo de hacer que lo liberasen y facilitar su regreso, en tanto que sus seguidores más fanáticos financiaban su defensa legal y su estancia en Londres, así como una campaña propagandística de gran envergadura que presentaba al general como un hombre inocente y su detención, como una violación de la soberanía nacional de Chile. Sin embargo, la reacción más importante ante su arresto fue la que protagonizaron quienes habían sufrido, de un modo u otro, las torturas, desapariciones y asesinatos perpetrados por su régimen, que se pusieron manos a la obra para exigir acciones legales contra el antiguo dictador. Cuando regresó al país, el 3 de marzo de 2000, se habían presentado contra él más de setenta causas judiciales, que, además, había aceptado para investigar el juez Juan Guzmán Tapia.

No hay duda de que Pinochet y sus seguidores estaban convencidos de que volvería al refugio patrio para recuperar su posición en calidad de «senador vitalicio» con inmunidad parlamentaria. Sin embargo, setenta y dos horas después de que aterrizase su avión, el juez Guzmán presentó una petición ante las Cortes de Apelaciones de Chile para que se anulara este privilegio y

Pinochet pudiera ser juzgado por las desapariciones vinculadas a la Caravana de la Muerte (véase el capítulo 3). El 23 de mayo, este último Tribunal sorprendió al país al desaforar al general, decisión que ratificó la Corte Suprema por trece votos contra nueve el 5 de junio, con lo que dejó el camino expedito para un procesamiento histórico del antiguo dictador.

Al no poder impedir que se encausara a Pinochet apelando a su inmunidad, sus abogados adoptaron la misma táctica que habían empleado en Londres: declarar al general, que a la sazón contaba ya ochenta y cinco años, incapaz de sentarse ante un tribunal por razones de salud mental. No se cansaron de solicitar a los magistrados que ordenaran someter a su defendido a los exámenes médicos pertinentes antes de hacer avanzar la causa, si bien el juez Guzmán optó por acelerar el proceso y obviar las estrategias diseñadas para socavarlo. El 1 de diciembre de 2000 protagonizó una acción histórica e inesperada al presentar cargos contra el general Pinochet como autor intelectual de la Caravana de la Muerte. Ante la sorpresa de todo el país, el acusado hubo de sufrir un nuevo arresto domiciliario y el 24 de enero fue sometido, por vez primera, a un interrogatorio oficial sobre las atrocidades cometidas durante su estancia en la jefatura de Estado.

Clinton y el proyecto de Desclasificación de Chile

El arresto de Pinochet en Londres a petición de las autoridades españolas hizo recaer sobre Washington una responsabilidad histórica: dada la larga historia de la implicación de Estados Unidos en Chile, la nación era poseedora de toda una serie de archivos, tan extensos y detallados como secretos —decenas de miles de páginas de informes confidenciales de la CIA, análisis de la DIA, conversaciones interceptadas por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por su sigla en inglés) y cablegramas del Departamento de Estado en los que no quedaba sin tratar un solo aspecto de los crímenes contra los derechos humanos cometidos por el general, desde la Caravana de la Muerte hasta la Operación Cóndor—, que podían proporcionar las pruebas que necesitaba España en la causa entablada contra él. Sin embargo, si Estados Unidos tenía mucho que ofrecer a la hora de hacer comparecer al exdictador ante la justicia, no era menos lo que tenía que ocultar. Enjuiciar a Pinochet, tal como lo expresó para The New York

Times un antiguo alto funcionario de los servicios de inteligencia, equivaldría a «abrir la caja de Pandora» de la historia secreta de las relaciones chileno-estadounidenses.

Durante casi dos años, el gobierno de Clinton había logrado sortear las peticiones procedentes de España, cuyos jueces buscaban pruebas de sus archivos que pudiesen hacer avanzar la insólita causa emprendida contra Augusto Pinochet. En febrero de 1997, las autoridades españolas invocaron un Tratado de Ayuda Legal Mutua (MLAT, por su sigla en inglés) bilateral firmado con Estados Unidos —un acuerdo que rige la cooperación internacional y la reciprocidad en el ámbito de las investigaciones criminales— y pidieron al gobierno norteamericano que les procurase los documentos que guardaran relación con la Operación Cóndor y otras violaciones de los derechos humanos cometidas por las dictaduras chilena y argentina. Para agilizar los trámites, el juez García Castellón, que se había encargado en un principio del caso de Chile, viajó en enero de 1998 a Washington, donde recibió un trato cordial por parte de los miembros del gobierno estadounidense. «Les garantizo», escribió al Congreso el presidente Clinton en abril, «que seguiremos respondiendo de un modo tan detallado como nos sea posible a las peticiones de ayuda provenientes del gobierno de España».[16]

En realidad, la administración de Clinton estuvo más de un año contestando con evasivas antes de suministrar cuatro cajas de «archivos» a España. Una de ellas contenía mil páginas de recortes de periódicos chilenos que el juez español no había solicitado; en otra había documentos del Pentágono referentes a una serie de acciones contrarrevolucionarias efectuadas en Honduras y llamadas «Cóndor», si bien no tenían relación alguna con la operación homónima, y las otras dos estaban llenas de miles de páginas de archivos legales relativos al procesamiento de los cubanos anticastristas que habían participado en el asesinato de Letelier y Moffitt. Ninguno de los expedientes incluía material de valor testimonial alguno para juzgar a Pinochet.

Tras la detención del 16 de octubre de 1998, la Casa Blanca se vio sometida a una intensa presión por parte de la opinión pública, que le exigía que se pronunciase al respecto. Diez días después, The New York Times publicó

una copia del informe biográfico elaborado por la DIA acerca de Pinochet —que el gobierno había accedido a hacer público, no sin antes censurar su contenido por entero— a modo de muestra del tipo de documentación que Washington podía ofrecer pero prefería seguir encubriendo.[17] Treinta y seis miembros del Congreso, encabezados por George Miller, pidieron entonces a Clinton que procurase a España el «material y los testimonios que el gobierno de Estados Unidos ha estado ocultando hasta ahora». Por su parte, Kenneth Roth, director general de Human Rights Watch, recordó al presidente que «Pinochet está buscado por crímenes contra ciudadanos estadounidenses e incluso por crímenes cometidos en suelo norteamericano», y lo instó «a defender sin tapujos el procesamiento de un tirano como él». Los familiares de Ronni Moffitt, Orlando Letelier y Charles Horman tampoco callaron, y pidieron a Clinton y a la fiscal general, Janet Reno, que abriesen los archivos y cooperasen con la investigación española. «Debemos respetar la idea que defendemos de que los terroristas no pueden parapetarse tras la legislación nacional o internacional para evitar ser juzgados», escribió al presidente Michael Moffitt, único superviviente del coche bomba que acabó con la vida de su esposa y su compañero de trabajo. «El gobierno de Estados Unidos tiene el deber de colaborar con las iniciativas que pretendan hacer que Pinochet pague por sus crímenes».

En el seno del gobierno, toda esta presión dio pie a un intenso debate en torno a cuál era la respuesta más apropiada. «Se está librando una verdadera batalla campal», reconoció en privado cierto asesor de la Casa Blanca poco después de la detención de Pinochet. «Este asunto ha resultado ser objeto de insólitas divisiones en el Departamento de Estado y el Consejo para la Seguridad Nacional».[18] Lo cierto es que el hecho de encausar a Pinochet estaba en consonancia con la llamada que había hecho el presidente a la comunidad internacional para que adoptase una actitud mucho más comprometida en la lucha contra el terrorismo. En un importante discurso pronunciado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas pocas semanas antes de la aprehensión de Pinochet —curiosamente el día que se celebraba el aniversario del doble asesinato de Letelier y Moffitt—, Clinton exhortó a todas las naciones a «negar a los terroristas todo tipo de respaldo y refugio (...) a trabajar codo a codo para hacer más frecuentes las extradiciones y los enjuiciamientos». Los funcionarios de la Oficina de

Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios del CSN, así como los del organismo análogo del Departamento de Estado, encontraban positivo el hecho de que Estados Unidos ayudase a España en este particular. Sin embargo, hubieron de enfrentarse a la renuencia de dos integrantes del CSN: Jamie Baker, asesor legal del consejo, quien no estaba dispuesto a que se sentase un precedente que permitiera futuras consultas en los archivos secretos de Estados Unidos con el fin de satisfacer peticiones que se acogieran al MLAT, y el consejero presidencial del CSN especializado en Latinoamérica, James Dobbins, quien prefería que Pinochet regresara a Santiago antes que verlo comparecer ante un tribunal en Madrid. Tal como definió la postura del gobierno uno de sus integrantes: «No queremos trastornar la democracia chilena; queremos ayudar a Frei».

A finales de noviembre, la secretaria de Estado, Madeleine Albright, convocó a sus principales asesores para determinar qué debía hacer Estados Unidos. Ninguno de los que asistieron a la reunión, según los participantes, apoyó la idea de secundar a España para hacer que Pinochet rindiese cuentas ante la justicia. La opinión que prevaleció fue, por el contrario, que sentar un «precedente Pinochet» en la legislación internacional no beneficiaría en absoluto los intereses de Estados Unidos y que Washington tenía el deber, por el bien de la estabilidad y la soberanía de Chile, de respetar el afán de su gobierno por hacer que liberasen a Pinochet y lo dejaran regresar a su patria. Por otra parte, no podían obviarse las exigencias del Congreso y los familiares de las víctimas estadounidenses del general. Más que suministrar los documentos a España de forma directa, el nuevo director de la Oficina de Planificación Política del Departamento de Estado, Morton Halperin, sugirió la posibilidad de que la administración se embarcara sin más en un proyecto general de desclasificación —como los que había autorizado Clinton en el caso de El Salvador, Honduras y Guatemala durante su primer mandato— y que pusiera los documentos a disposición de estadounidenses, chilenos y españoles —y, en general, de toda la comunidad internacional— al mismo tiempo. La secretaria Albright recomendó esta propuesta durante una conversación telefónica que mantuvo con Sandy Berger, asesor de seguridad nacional de Clinton, y, en consecuencia, ambos decidieron «revelar todos los documentos que nos sea posible, de tal modo que no puedan decir que no hemos colaborado». El 1 de diciembre, el portavoz del Departamento de Estado, James Rubin,

anunció que el país iba a «hacer pública cuanta información sea posible revelar de acuerdo con la legislación estadounidense y los intereses de la seguridad nacional y la aplicación de la ley».[19]

Durante las ocho semanas que siguieron a esta declaración, los funcionarios del Consejo para la Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y la CIA acordaron, no sin esfuerzo, los términos en que redactarían la «hoja de trabajo» presidencial; es decir, el documento que establecería las pautas y el calendario por los que habría de regirse el «proyecto de Desclasificación de Chile». Los archivos que se iban a hacer públicos debían «arrojar luz» sobre tres categorías principales: «las violaciones de los derechos humanos, el terrorismo y otros actos de violencia política cometidos en Chile». Los documentos abarcarían veintitrés años de historia, desde 1968 hasta 1991. En un principio, los estadistas trataron de reducir el proyecto a los diecisiete años que duró la dictadura de Pinochet (1973-1990); pero el director de la sección encargada de Chile de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental alegó que, a fin de evitar que se pensara que «solo vamos tras la derecha», según recordó uno de quienes estuvieron presentes en aquella reunión, Estados Unidos debería sacar a la luz, asimismo, documentos relativos a los supuestos abusos cometidos durante la presidencia de Allende —decisión que, de modo inadvertido, propició la difusión de testimonios referentes a la intervención encubierta del gobierno norteamericano y el afán de este por promover la violencia política con el objetivo de derrocar la democracia chilena—.[20] El proyecto de Desclasificación de Chile estaría coordinado por William Leary, director de los archivos del CSN. Leary presidía un grupo de trabajo formado por miembros de diversos organismos que tenía por misión supervisar y poner en práctica la revisión de los documentos y la publicación de los que se considerasen oportunos. La primera reunión se celebró en la sala 208 del complejo de oficinas anejo a la Casa Blanca conocido como Edificio Eisenhower (u Old Executive Office Building).

«En nombre del presidente», se lee en la hoja de trabajo del CSN, distribuida el 1 de febrero de 1999 a todos los órganos nacionales de seguridad, «les rogamos que colaboren en la labor de compilar y revisar para su posterior publicación todos los documentos que puedan arrojar luz sobre «las violaciones de los derechos humanos, el terrorismo y otros actos

de violencia política cometidos en Chile durante el régimen de Pinochet y en el período anterior a este».[21] A fin de ayudar en la búsqueda en ordenadores y archivos, las directrices de desclasificación —redactadas en su mayoría por Theodore Piccone, subordinado inmediato de Halperin— incluían una relación de contexto, una lista de casos clave de crímenes contra los derechos humanos y otra de aquellos de quienes se sabía que los habían cometido. El objetivo de este colosal proyecto, según la hoja de trabajo, era el de «ayudar a crear un consenso al interior de Chile que estimule su proceso de verdad y reconciliación en cuestiones como la suerte corrida por los desaparecidos». La investigación respondía también «a los deseos expresos de los familiares de los estadounidenses que han sido víctimas de la violación de los derechos humanos, así como a las peticiones de numerosos miembros del Congreso». Por recomendación de John O'Leary, embajador de Estados Unidos en Chile, los documentos se publicarían de manera simultánea en ambos países y se expondrían en la página del Departamento de Estado en internet, a fin de garantizar su consulta inmediata desde cualquier parte del mundo.

La publicación de todos estos documentos clasificados en su momento como secretos necesitaba, según determinó el grupo de trabajo, llevarse a cabo en diversas fases. En consecuencia, entre junio de 1999 y junio de 2000 se ofrecieron al público tres entregas diferentes a las que habían puesto el nombre de «porciones» (tranches):

> Porción I: Cinco mil ochocientos documentos revelados el 30 de junio de 1999.[22] En ellos se recogen los cinco primeros años del régimen de Pinochet, desde el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 hasta 1978; es decir, el período de mayor represión de la dictadura. Los volúmenes encuadernados contienen unos cinco mil cablegramas, memorandos e informes del Departamento de Estado que se centran en la pésima actuación del régimen en lo tocante a los derechos humanos. Por el contrario, la CIA apenas si sacó a la luz unos cuantos centenares de informes, valoraciones de la información obtenida por medio del espionaje y cablegramas que dan fe de las deliberaciones internas y las operaciones de represión del régimen. Brillaban por su ausencia los miles de documentos que exponían la labor realizada por la Agencia en respaldo de la dictadura tras el golpe de Estado.

Porción II: Unos mil cien documentos hechos públicos el 8 de octubre de 1999. Pertenecen al período comprendido entre 1968 y 1973, y revelan información relativa a la política adoptada por Estados Unidos en lo tocante a la elección de Allende y su gobierno. En esta sección debían haberse recogido los testimonios relacionados con la intervención clandestina de la CIA en Chile entre 1970 y 1973, incluidos los que empleó el Comité Church para elaborar su informe a mediados de la década de 1970. Sin embargo, ninguno de estos salió a la luz.

Porción III: Publicación especial, efectuada el 30 de junio de 2000, de unos mil novecientos documentos, en su mayoría pertenecientes al Departamento de Estado, referentes a los casos de estadounidenses a los que habían hecho desaparecer tras asesinarlos: Charles Horman, Frank Teruggi y Boris Weisfeiler.

En un principio, los documentos contenidos en esta última entrega debían formar parte de una ingente publicación final programada para abril de 2000. Sin embargo, la Casa Blanca alegó un retraso en la tramitación para cambiar la fecha a junio. Llegado este mes, solo se presentaron los archivos tocantes a Horman, Teruggi y Weisfeiler, y el grupo de trabajo volvió a aplazar la revelación de otros dieciséis mil documentos hasta noviembre de ese año.[23] El retraso se debió a una seria batalla librada entre bastidores por la Casa Blanca, de un lado, y la CIA, del otro, en torno a la decisión adoptada por el director de la Agencia, George Tenet, de no acceder a desclasificar los documentos relativos a las operaciones efectuadas en Chile.

La historia como rehén

La recalcitrante actitud de la CIA en lo tocante al proyecto de Desclasificación de Chile amenazó con transformar un ejercicio de franqueza que sentaría precedente en un encubrimiento más de la historia. Desde un principio, la actitud comprometida de que hizo alarde la Agencia resultó, cuando menos, sospechosa. En una serie de reuniones iniciales celebradas con el director de Planificación Política del Departamento de

Estado, Morton Halperin, el consejo general de la CIA prometió cumplir lo que establecía la hoja de trabajo; es decir, hacer públicos los documentos relacionados con la violación de los derechos humanos, el terrorismo y la violencia política. Al mismo tiempo, los abogados de la Agencia insistieron en que se introdujese en la directiva del CSN una frase que aclarara que los diversos organismos debían «recuperar y revisar todos los documentos destinados a hacerse públicos de conformidad con la FOIA», una referencia velada a la excepción, prevista en la ley, que permitía a la CIA no tener que revelar ciertos archivos referentes a sus operaciones.[24] En una conversación mantenida con el autor a mediados de 1999, un funcionario de la Agencia defendió la postura de que esta no estaba «obligada por la ley» a rebuscar entre los archivos que recogían información de sus operaciones clandestinas por el simple hecho de que estas «nunca se habían reconocido de forma oficial».[25] Durante las reuniones del grupo de trabajo, los representantes de la CIA, entre quienes se encontraban David Kamerling y Walter Hazlett, sorprendieron al resto de los asistentes al argüir que los documentos relativos a la intervención encubierta en Chile —destinada a destruir a Allende y, más tarde, a brindar apoyo a Pinochet— no tenían «relevancia alguna» de acuerdo con lo especificado en la hoja de trabajo. Ni siquiera el golpe de Estado encajaba con su definición de «acto de violencia política».[26] La CIA no facilitó una sola página acerca de la ayuda fundamental que había prestado al régimen ni de las relaciones de enlace que había mantenido con la Dina para su publicación, en junio de 1999, como parte de la porción I de los documentos revelados. Asimismo, sus miembros hicieron saber que la oficina central de Langley no tenía intención alguna de facilitar informes sobre operaciones secretas para la porción II, programada para octubre de ese año, que abarcaba los años que iban de 1970 a 1973, período en que se pusieron en marcha las operaciones clandestinas destinadas a derrocar a Allende.

A las reivindicaciones de la CIA se unieron las de la Agencia de Seguridad Nacional, que también determinó que mantendría en secreto mucha de la información relevante de que disponía, si no toda. Durante su investigación inicial, la NSA encontró más de seiscientos sesenta documentos que se ajustaban a las características de los solicitados por la hoja de trabajo. Muchos eran transcripciones de las comunicaciones entre militares chilenos interceptadas durante el golpe de Estado y después de este, mientras que

otros estaban relacionados con el caso de Horman.[27] Sin embargo, en un informe del 6 de abril de 1999 titulado «Memoria relativa a la desclasificación de documentos referentes a los actos de violación de los derechos humanos cometidos en Chile», el Departamento de Defensa señaló: «Toda la documentación identificada como pertinente en potencia consiste en informes secretos de comunicaciones confidenciales cuya revelación pondría en evidencia las fuentes y los métodos de los servicios de espionaje, por lo que la NSA desea que no se recomiende la publicación de ninguno de estos materiales».

Para consternación de los servicios de inteligencia, la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA, por su sigla en inglés) descubrió copias de varios centenares de reveladores documentos de la CIA y la NSA en los fondos secretos de las bibliotecas presidenciales de Nixon y Ford, y los remitió al grupo de trabajo para que los sometiese a una revisión final. En el transcurso de una «sesión conjunta de desclasificación», celebrada a principios de agosto de 1999 en el edificio de la NARA, los representantes de los dos organismos afectados se limitaron a anunciar que tendrían que llevar los documentos a sus respectivos cuarteles generales a fin de evaluarlos a fondo —con lo que quebrantaron los procedimientos establecidos para el proyecto de Desclasificación de Chile—.[28] Una vez en posesión de los documentos, la CIA y la NSA se negaron a estudiarlos para revelar su contenido.

Cuando se hizo evidente para el público general la obstrucción de la Agencia Central de Inteligencia al proyecto, quienes defendían la iniciativa la acusaron de encubrir datos históricos. «La retención de esos documentos», escribió en septiembre a la Casa Blanca Thomas Blanton, director general del Archivo de Seguridad Nacional, «va a ser considerada de inmediato, aquí y en el extranjero, una ocultación del pasado y un intento, por parte de Washington, de protegerse ante cualquier responsabilidad histórica en lo tocante a lo sucedido en Chile a principios de la década de 1970».[29] «La CIA está ocultando documentos fundamentales», señaló un editorial de The New York Times aparecido el 6 de octubre. «La Agencia Central de Inteligencia tiene que entender que la revelación total del papel representado por Washington [en Chile] no hará sino redundar en beneficio de Estados Unidos».[30] «Lo instamos a levantar

sin mayor dilación el secreto que pesa sobre el resto de los documentos referentes a Pinochet que guardan los archivos de la CIA», decía el escrito remitido por seis miembros de la cámara de representantes a George Tenet, director de la Agencia. Aun el presidente Clinton, asesorado por su gabinete, hizo saber a la Agencia que había llegado la hora de atenerse a lo acordado y hacer público cuanto fuera posible. «En mi opinión, tienen ustedes derecho a saber lo que sucedió en aquella época», dijo durante una rueda de prensa celebrada a principios de octubre, cuando le preguntaron sobre la CIA y el proyecto de Desclasificación de Chile, «y también cómo sucedió».

Al verse enfrentada a la presión de la ciudadanía y el presidente, la CIA no tardó en retroceder. El 7 de octubre, su portavoz, Mark Mansfield, anunció públicamente que la Agencia reconocía «su obligación de sacar a la luz los documentos relativos a la intervención clandestina en Chile» y prometió que lo haría en la última entrega del proyecto, que entonces estaba programada para mediados de 2000. El director Tenet, por su parte, distribuyó al interior de su organización una serie de pautas para que se buscasen en los archivos de la Dirección de Operaciones todos los documentos relacionados con la intervención efectuada en Chile entre 1962 y 1975. Durante los nueve meses siguientes, un equipo de analistas de la CIA se encargó de reunir, revisar y preparar cerca de ochocientos testimonios, entre cablegramas, propuestas, presupuestos, memorandos de conversaciones, actas de reuniones y memorias, que daban fe de decenas de campañas encubiertas, relacionadas sobre todo con la conspiración golpista y las operaciones de desestabilización puestas en práctica entre 1970 y 1973. Cada uno de esos documentos se marcó entonces con un sello que decía: «Desclasificado: aprobada su publicación. Julio 2000».

Con todo, a medida que se acercaba la fecha límite, la cúpula de la CIA parecía más dispuesta a cumplir sus promesas. En junio, George Tenet ordenó al nuevo jefe de la Dirección de Operaciones, James Pavitt, que preparase «un estudio sobre la revelación propuesta del material de 1962-1975 y su posible influencia sobre actuales acciones operativas». A pesar de que el contenido de la mayor parte de los documentos se había dado a conocer al Senado y se citaba largamente en los informes elaborados por este en torno a Chile veinticinco años antes, Pavitt llegó a la conclusión de

que revelaban demasiada información acerca de los métodos básicos empleados por la CIA para minar la estabilidad de gobiernos extranjeros. En julio, cuando estaba previsto que la Agencia entregase sus archivos al Departamento de Estado, Tenet comunicó al CSN su intención de conservar varios centenares de los documentos operativos que se había comprometido a aportar para la publicación final, aplazada ya para el 14 de septiembre de 2000. «No estamos tratando, en absoluto, de retener información que pudiera resultar comprometedora al gobierno estadounidense», aseguró Tenet para justificar su polémica decisión. «Lo único que nos mueve a tomar tal medida es el hecho de que, en conjunto, este material revela los métodos que emplea en todo el mundo el servicio de inteligencia».[31]

Tanto dentro como fuera del gobierno, todo aquel que tenía relación alguna con el proyecto de Desclasificación de Chile —miembros del grupo de trabajo, familiares de las víctimas estadounidenses y partidarios en general de la transparencia del Poder Ejecutivo— comprendió enseguida que la postura de la CIA amenazaba con echar por tierra la credibilidad de todo el programa. El cambio de actitud de última hora protagonizado por la Agencia enturbió la misión del proyecto, que consistía en ofrecer una relación histórica, sincera y exacta, de los abusos cometidos por Pinochet, así como de la función desempeñada por Estados Unidos en su llegada al poder y su consolidación. El afán de la CIA por ocultar los aspectos más turbios de la intervención estadounidense en Chile aportaba tintes de hipocresía a un proyecto que, en gran medida, estaba concebido con la intención de ayudar a Chile en su búsqueda de la verdad y la reconciliación. Asimismo, el querer encubrir los aspectos más sórdidos y violentos de la participación de Estados Unidos ponía en peligro los fundamentos morales de las iniciativas diplomáticas emprendidas, en el ámbito internacional, con respecto a Alemania y Suiza a fin de reconocer y reparar por entero el lado oscuro de sus respectivas historias nacionales durante el Holocausto. Por último, la actitud rebelde de la CIA suponía un desafío directo a la prerrogativa de que gozaba el presidente a la hora de determinar y defender el derecho a la información de los ciudadanos. El conflicto generado por estos documentos no era otra cosa que la batalla clásica entre el carácter intocable de los secretos de Estado y el principio de transparencia gubernamental en materia de política exterior.

Los miembros del grupo de trabajo, que habían consagrado, literalmente, miles de horas al proyecto de Chile, comenzaron un nada despreciable esfuerzo entre bastidores con la intención de obligar a la CIA a cumplir con lo pactado. Las secciones más importantes del Departamento de Estado instaron a Madeleine Albright a que hiciese llegar a la Casa Blanca su preocupación al respecto. Además, sus integrantes se pusieron en contacto, con gran discreción, con John Carlin, archivero de la nación, para que escribiese una severa protesta al asesor de seguridad nacional, Sandy Berger. En una carta de la NARA fechada el 30 de julio, Carlin lo advertía de que «este giro de última hora solo conseguirá socavar la integridad general del proyecto y dará lugar a una colección de documentos muy incompleta de tan trascendental acontecimiento histórico». En consecuencia, encarecía a la Casa Blanca que hiciese cuanto estuviese en su poder «por persuadir a la CIA de cumplir su promesa».

Berger se reunió con Tenet el 27 de julio, y lo exhortó a permitir que se revisasen, fuera del ámbito de la Agencia, cientos de documentos de la Dirección de Operaciones. Durante el mes siguiente, un miembro del CSN y otro del Departamento de Estado acometieron la labor de leer de cabo a rabo los polémicos testimonios —profusamente censurados— que había entregado la CIA.[32] A excepción de los que giraban en torno a las operaciones políticas clandestinas puestas en práctica entre 1962 y 1968, que no estaban incluidas en el período establecido por la hoja de trabajo del presidente, y una veintena aproximada de documentos delicados en extremo que versaban sobre una operación secreta en particular, ambos llegaron a la conclusión de que los archivos de la Agencia Central de Inteligencia podían y debían ser desclasificados. Alrededor del 11 de septiembre, si no ese mismo día, Berger volvió a entrevistarse con Tenet para ponerlo al corriente de que la Casa Blanca había desestimado su decisión de mantener en secreto cientos de documentos reveladores. Su publicación, sin embargo, volvió a posponerse para que la Agencia tuviera tiempo de prepararlos. Posteriormente, se programó la divulgación de la porción IV, la última, para el 13 de noviembre de 2000.

El informe Hinchey

La renuencia mostrada por la CIA a la hora de revelar datos históricos acabó por obligarla, por irónico que resulte, a divulgar secretos mucho más sensacionales de lo que pretendía acerca de Chile. La determinación de mantener escondidos los documentos a mediados de 2000 la forzó, después de aprobada cierta enmienda de la Ley de Autorización de Actividades de Inteligencia, a informar por extenso al Congreso de la intervención de la CIA en Chile antes y después del golpe de Estado. Según este texto legal, aprobado en noviembre de 1999, aquella tenía nueve meses para presentar un informe en el que se describan la totalidad de las actividades de los funcionarios, agentes secretos y empleados de todos los elementos del servicio de inteligencia con respecto a los siguientes acontecimientos ocurridos en la República de Chile:

1. El asesinato del presidente Salvador Allende en septiembre de 1973.

2. El ascenso del general Augusto Pinochet a la presidencia de la república.

3. Las violaciones de los derechos humanos cometidas por oficiales o agentes del expresidente Pinochet.

Esta enmienda, patrocinada por Maurice Hinchey, diputado por Nueva York, se convirtió en un medio legal eficaz para compeler a la CIA a mostrarse comunicativa en lo tocante al papel desempeñado en el golpe de Estado y el respaldo brindado al régimen de Pinochet. Con ella, según comunicó al resto de miembros de la Cámara de Representantes, Hinchey pretendía forzar a la Agencia a suministrar las pruebas que necesitaba España para procesar a Pinochet, amén de hacer que el pueblo estadounidense conociera la conducta ilegítima de su propio gobierno. «Tengo la esperanza de que este informe ayude a esclarecer lo que sucedió realmente en Chile en 1973, así como cuál fue la participación de Estados Unidos en el derrocamiento de un gobierno elegido democráticamente por el pueblo», declaró. «Es imprescindible que dispongamos de una relación completa y pública de la implicación del gobierno estadounidense en tan vergonzoso capítulo de la historia».[33]

En un principio, Tenet había llegado a un discreto acuerdo con Porter Goss, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes —y

antiguo funcionario de la CIA—, según el cual la Agencia Central de Inteligencia renunciaría a redactar el informe que se le solicitaba para limitarse a procurar documentos relativos a las cuestiones que se planteaban en el texto de la enmienda, destinados, por lo demás, a hacerse públicos a través del proyecto de Desclasificación de Chile impulsado por Clinton. Sin embargo, cuando la CIA decidió retener los papeles, el acuerdo se vino abajo. A principios de agosto de 2000, Tenet fue obligado a designar a dos analistas del Consejo Nacional de Inteligencia (NIC, por su sigla en inglés) para que redactasen enseguida un informe basado en los centenares de documentos que ya habían sido centralizados. La noche del 18 de septiembre, la Agencia presentó al Congreso un estudio de veintiuna páginas mecanografiadas a espacio sencillo titulado CIA Activities in Chile (véase el documento 2).[34]

La Agencia reconoció por vez primera, con este informe, la amplitud y los detalles de su larga historia de acción clandestina en el país sudamericano. La exposición iba mucho más allá de los tres ámbitos de investigación que recogía la enmienda de Hinchey, toda vez que, al repetir datos que ya se habían hecho públicos en los informes del Comité Church, daba cuenta de las operaciones políticas secretas puestas en práctica en la década de 1960 para respaldar a los democristianos chilenos y las concebidas para evitar que Allende se hiciera con la presidencia en 1970. Además, el informe proporcionaba detalles tan nuevos como comprometedores sobre los vínculos que unían a la Agencia con los conspiradores golpistas chilenos que asesinaron al comandante en jefe del Ejército René Schneider, así como un resumen de los intentos de desestabilizar el gobierno de Allende que desembocaron en el golpe de Estado. Sin embargo, a la hora de abordar la cuestión de si se había ayudado a Pinochet a hacerse con el poder, el informe se tornaba esquivo y eludía los detalles de un buen número de operaciones secretas que habían ayudado al régimen a consolidar su represivo gobierno. «Ni los oficiales de la CIA ni los del resto de los servicios de inteligencia», aseguraba el documento, «estuvieron implicados en la ascensión de Pinochet a la presidencia ni en la consolidación de su poder en calidad de dirigente supremo».[35]

El informe Hinchey, no obstante, facilitó datos significativos e inéditos referentes al conocimiento que tenía la Agencia del aparato de represión del

Estado chileno y a sus relaciones con él. «No cabe duda alguna de que algunos de los contactos de la CIA estuvieron implicados de forma activa en la perpetración y el encubrimiento de serias violaciones de los derechos humanos», admitían los autores del documento. «Los organismos políticos y la CIA reconocen que estas relaciones pueden llevar a que se identifique a la Agencia con las operaciones internas de sus servicios de enlace que implicaban crímenes contra los derechos humanos, aunque también determinan que tal contacto era necesario para que la CIA pudiese llevar a término su misión».[36] En una asombrosa sección titulada «Relación con Contreras», la Agencia confesaba detalles desconocidos de los lazos que la unían al director de la Dina, el criminal más despiadado del estamento militar chileno.

«Durante el período que fue de 1974 a 1977, la CIA mantuvo contacto con Manuel Contreras Sepúlveda», sostiene el informe. Contreras, hombre «tristemente célebre» por sus atrocidades, constituía «el principal obstáculo» que impedía al régimen mejorar su actuación con respecto a los derechos humanos. La CIA supo también, en 1974, que estaba implicado en actos homicidas cometidos en el extranjero. Con todo, en una muestra de reconocimiento voluntario sin precedentes, el informe revelaba que la Agencia lo había incluido, al menos de forma temporal, en su nómina.[37] Y continúa:

> En mayo y junio de 1975, ciertos miembros de la CIA recomendaron establecer una relación remunerada con Contreras a fin de obtener la información única que podría proporcionar, dados su posición privilegiada y su acceso a Pinochet. Esta propuesta fue desestimada en virtud de la política gubernamental estadounidense, que no tenía entre sus supuestos las relaciones clandestinas con un jefe de policía secreta famoso por violar los derechos humanos. Sin embargo, debido a un error de coordinación, llegó a hacérsele un único pago.

Estas revelaciones no tardaron en saltar a las primeras planas de los periódicos de Estados Unidos, Chile y el resto del mundo. De hecho, la publicación del informe Hinchey supuso un notable aumento de la atención prestada por el público internacional a la revelación final de documentos. El 13 de noviembre, la presión ejercida por la Casa Blanca obligó a la CIA a

divulgar 1.550 documentos, los que, aunque censurados, exponían, al menos de forma parcial, la larga lista de escandalosas operaciones secretas concebidas para minar la democracia y beneficiar a la dictadura en Chile.[38] Como era de esperar, sin embargo, muchos de los controvertidos documentos ultrasecretos citados en el informe Hinchey —entre los que se encontraban cablegramas, memorandos, resguardos de ingresos bancarios, etc. relacionados con la inclusión (y posterior exclusión) de Contreras en la nómina de la CIA, así como informes sobre los pagos satisfechos a los asesinos de Schneider— no llegaron a publicarse.

¿Cargos contra Pinochet?

En la cuarta y última publicación de documentos relativos a Chile, el gobierno de Clinton sacó a la luz más de dieciséis mil escritos procedentes del Departamento de Estado, el Pentágono, la CIA, el CSN y el Departamento de Justicia. En total, el proyecto de Desclasificación de Chile reveló unos veinticuatro mil testimonios que se habían mantenido en secreto hasta entonces: más de ciento cincuenta mil páginas de registros históricos que ayudaban a esclarecer los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la era Pinochet, y más de veinte años de operaciones, manifiestas y encubiertas, emprendidas por Estados Unidos para determinar, manipular, dirigir e influir el futuro de Chile.

Pese a toda la documentación que pasó, desde entonces, a ser de dominio público, el número de testimonios que permanece en secreto, inaccesible para el pueblo, es aún incontable. La CIA se negó a entregar cientos de escritos relevantes, y ni siquiera proporcionó una relación de los documentos que había decidido no sacar a la luz. A estos hay que sumar los descubiertos en las secciones secretas de las bibliotecas presidenciales, que también se cuentan por centenas y que, tras ser enviados para que los revisase el grupo de trabajo, volvieron a su lugar de origen, aún sellados, por haber sido denegada su desclasificación. Entre ellos había docenas de cablegramas de la Agencia de Seguridad Nacional con fecha del 11, 12 y 13 de septiembre de 1973, amén de numerosos informes de la CIA y memorandos dirigidos al presidente.[39] Los investigadores del proyecto tampoco pudieron acceder a las transcripciones de las conversaciones

telefónicas de Henry Kissinger grabadas entre 1970 y 1976, todo un tesoro oculto que el secretario de Estado se llevó consigo cuando dejó el cargo finalizado el mandato de Ford; ni a las cintas que recogieron el contenido de las reuniones y llamadas telefónicas de Nixon desde 1972 hasta 1974.[40] Por otra parte, el contenido del expediente de la CIA que recoge la información personal sobre Pinochet —donde se incluyen datos altamente confidenciales referentes al dictador— también sigue clasificado como secreto.

Tal vez los materiales más importantes de los archivos de Pinochet excluidos de la desclasificación fueran varios centenares de documentos que ponen de relieve su participación en el asesinato de Letelier y Moffitt. Los diversos organismos que participaron en el proyecto los recopilaron, los separaron del resto y los reservaron para que el Departamento de Justicia pudiese emplearlos como prueba en una posible causa criminal contra Pinochet. El Departamento de Estado anunció tras la publicación de la porción I, a finales de junio de 1999, que estos archivos seguirían siendo confidenciales por la relación que guardaban con «una investigación actual del Departamento de Justicia en torno al asesinato de Ronni Moffitt y Orlando Letelier».

Al igual que todo el proyecto de Desclasificación de Chile, esta investigación criminal era fruto de la enérgica presión pública propiciada por la detención de Pinochet en Londres. En el transcurso de una rueda de prensa, tan conmovedora como llena de fuerza, organizada el 7 de diciembre de 1998 por el Instituto de Estudios Políticos, entidad para la que trabajaban las dos víctimas del atentado, los familiares de ambos dirigieron un llamamiento al gobierno de Clinton para que reabriera el caso. Si España tenía razones para pedir la extradición de Pinochet, las de Estados Unidos eran, en opinión de ambas familias, aún más sólidas. En un acerado artículo de opinión aparecido en The Washington Post el 6 de diciembre, el antiguo fiscal del caso, Lawrence Barcella Jr., desafió al gobierno a entrar en acción: el doble asesinato constituía «el único acto de terrorismo de patrocinio estatal que se ha concluido con la pérdida de vidas humanas en la capital de la nación», escribió. «Si no hacemos nada, estaremos diciendo a los terroristas que no hay razón alguna para que dejen de matar aquí a nuestros conciudadanos». No faltaron políticos que se mostraran de acuerdo

con sus afirmaciones. Tal como señalaron al presidente treinta y seis miembros de la Cámara de Representantes más de un año antes de los ataques perpetrados por Al-Qaeda contra el World Trade Center y el Pentágono: «Creemos que debemos prestar una mayor atención a este caso y perseguir a los culpables con el mismo vigor que empleamos con otros terroristas, como es el caso de Bin Laden».

Durante la primera mitad de 1999, la fiscal general, Janet Reno, autorizó una investigación del Departamento de Justicia y el FBI «con el propósito de determinar si se dispone de un número suficiente de pruebas dignas de crédito que indiquen la implicación criminal en este acto de terrorismo perpetrado en suelo estadounidense de una o más personas diferentes de las ya condenadas por este hecho». No obstante, hubo que esperar hasta septiembre para que Justicia elaborase e hiciera llegar al gobierno chileno una comisión rogatoria y así conseguir asistencia legal. Estados Unidos solicitó permiso para enviar a Chile a un equipo especial de investigadores y pidió a la Corte Suprema chilena que permitiera el interrogatorio de más de cuarenta personas, entre testigos y cómplices del crimen. En marzo de 2000 llegó a Santiago el citado equipo, encabezado por John Beasley, director de la División de Crímenes Internacionales del Ministerio Público, y conformado por agentes especiales del FBI, fiscales y otros funcionarios del Departamento de Justicia y el Departamento de Estado, para pasar un mes en la capital chilena recogiendo pruebas de la implicación de Pinochet. «No hemos encontrado ninguna prueba concluyente e irrefutable por sí sola», observó cierto miembro de la unidad de investigación; «pero, en conjunto, las que poseemos parecen apuntar a la participación de Pinochet». [41]

En agosto de 2000, el equipo dio por terminado un resumen de las pruebas, supervisado y firmado por Beasley, que concluía con la espectacular recomendación de presentar cargos contra Pinochet como autor último del atentado terrorista cometido en Washington el 21 de septiembre de 1976. Este informe fundamental, no obstante, «se perdió en un agujero negro» del interior de la división criminal del Departamento de Justicia, según un funcionario del gobierno que participaba en la investigación.[42] El posible enjuiciamiento del antiguo dictador permaneció olvidado en un cajón de la burocracia hasta que acabó aquel año, y los altos funcionarios de la Fiscalía

no volvieron a ocuparse de él hasta después de la elección de George W. Bush. En enero de 2001, en pleno período de transición entre el gobierno saliente de Clinton y el gabinete entrante de Bush, uno de los ayudantes de Janet Reno se reunió con Barcella y el abogado de los familiares de Letelier y Moffitt, Samuel Buffone, para comunicarles que la fiscal general había decidido delegar en su sucesor, John Ashcroft, la decisión referente al procesamiento de Pinochet.

El nuevo gobierno garantizó a ambas familias que el caso seguiría su curso. «Pueden estar seguros de que la investigación se ha acometido de un modo enérgico, minucioso y oportuno», escribió al Instituto de Estudios Políticos uno de los colaboradores de Ashcroft en abril de 2001, «y de que este Departamento hará que tan relevante asunto tenga un final justo».[43] Sin embargo, la idea de instruir un proceso contra el general quedó relegada al olvido, incluso después de que el gobierno de Bush se embarcara en una agresiva guerra contra el terrorismo tras los atentados sufridos el 11 de septiembre en Nueva York y Washington.

De hecho, a pesar de la determinación de «emplear todos los medios que estén a nuestro alcance» para derrotar al terrorismo expresada por el presidente, la acusación contra el general Pinochet permanecía dormida en el despacho del fiscal general. El caso ofrecía al gobierno de Bush un modo relativamente sencillo de demostrar al mundo que no hay prescripción para los actos terroristas cometidos en suelo estadounidense y que Washington no dejaría de perseguir a quienes estuviesen implicados en acciones de este tipo, pasadas, presentes o futuras. Sin embargo, a comienzos de 2003 —cuatro años después de que los investigadores comenzasen a recoger pruebas de la implicación de Pinochet—, se había hecho evidente que el gobierno no tenía intención alguna de encausar al que había sido su aliado anticomunista. Con todo, el gabinete de Bush se sirvió del pretexto de que la investigación seguía en curso para negarse a levantar el secreto que pesa sobre los centenares de documentos que demuestran la participación del general en un ataque terrorista perpetrado en Washington.

El escándalo del Riggs Bank[44]

El caso Letelier y Moffitt parecía representar la última esperanza de que pudiera declararse a Pinochet responsable legal por al menos uno de sus crímenes de Estado. En Chile, la Corte Suprema había sobreseído el largo proceso legal formado contra él al considerar que sufría «una enajenación mental conocida como demencia vascular» que lo incapacitaba para responder ante un tribunal por haber autorizado cincuenta y siete asesinatos y dieciocho desapariciones por parte de la Caravana de la Muerte en octubre de 1973. El fallo del 1 de julio de 2002 daba al traste con todos los empeños que se habían hecho para juzgar al antiguo dictador.

Tres días más tarde, creyendo concluida su odisea legal, Pinochet envió una carta formal —y bastante coherente para alguien que decía tener mermadas las facultades intelectuales— al Senado chileno por la que anunció que abandonaba la vida política y en la que aseguraba lo siguiente: «Tengo la conciencia tranquila y la esperanza de que el día de mañana se valore mi sacrificio de soldado». Poco antes había afirmado: «La obra realizada por mi gobierno será juzgada por la historia».[45]

Y parece que la historia, junto con el público y los tribunales de Chile, iban a juzgar su obra y su supuesto «sacrificio de soldado» mucho antes de lo que él había esperado. Mientras él disfrutaba de su retiro en Santiago, en Washington, la investigación emprendida por el Senado de Estados Unidos en torno a los bancos de la nación que no habían tomado las medidas de protección necesarias para evitar el blanqueo de dinero por parte de potenciales terroristas tras el 11-S tropezó con el secreto mejor guardado de Pinochet. El Subcomité Permanente de Investigaciones, dirigido por el senador Carl Levin, sacó a la luz «la red, extensa y en gran medida subrepticia, de cuentas bancarias y de valores» que poseía en Estados Unidos: más de ciento veinticinco, que contenían un total de veintiséis millones de dólares. Las pesquisas revelaron que Pinochet las había abierto de forma fraudulenta al identificarse con pasaportes y nombres falsos en una serie de entidades bancarias, entre las que destacaba el Riggs National Bank. El personal de este era cómplice de algunos de sus actos de corrupción y había conspirado para eludir el mandato judicial por el que las autoridades españolas pedían la congelación de todas las cuentas del antiguo dictador tras su detención en Londres. El Riggs Bank había retenido ante los investigadores federales información relativa a las propiedades de

Pinochet y, además, había hecho las gestiones necesarias para transferirle de manera encubierta unos ocho millones de dólares después de que regresara a Chile en mayo de 2000. El primero de los dos informes publicados por el subcomité, Money Laundering and Foreign Corruption: Enforcement and Effectiveness of the Patriot Act, concluía lo siguiente:

> El Riggs Bank ayudó a Augusto Pinochet, expresidente de Chile, a eludir acciones legales relacionadas con las cuentas que poseía en dicha entidad e impidió la supervisión [federal] de estas, a pesar de existir señales de alarma en lo referente a la procedencia de los bienes del señor Pinochet, diligencias legales pendientes respecto de la congelación de sus activos y denuncias públicas de delitos de gravedad cometidos por su cliente[46] (véase el documento 3).

Los informes del Senado exponían la prolongada relación que se había dado entre el Riggs y el régimen de Pinochet desde mediados de la década de 1970, cuando la Dina abrió una serie de cuentas clandestinas en Washington. Después de que las destapase la investigación sobre el asesinato de Letelier y Moffitt emprendida por el FBI, el régimen trasladó sus operaciones bancarias a Canadá. Sin embargo, en 1986, el director general del Riggs, Joseph L. Allbritton, viajó a Chile para reunirse con el dictador y rogar a los militares chilenos con el fin de tenerlos de nuevo como clientes. Entre aquel año y 2002, los altos representantes del Riggs Bank celebraron al menos otros seis encuentros con funcionarios de las Fuerzas Armadas y el gobierno chilenos. En cuatro de ellos trataron personalmente con Pinochet. «[V]isitamos al general Pinochet para expresarle nuestra gratitud por volver a traer al Riggs las cuentas del Ejército de Chile que tenía en el Bank of Nova Scotia», aseveraba un memorando interno del vicepresidente encargado de operaciones latinoamericanas después de un viaje efectuado a mediados de 1994. «También le ofrecimos nuestros servicios financieros personales y le hicimos saber que estaríamos encantados de ponerlos también a disposición de los oficiales del Ejército chileno».[47]

A principios de 1996, el director general Allbritton regresó a Chile acompañado de su esposa. Ambos almorzaron con Pinochet en la Escuela de Caballería de Quillota, en donde disfrutaron de un espectáculo ecuestre

especial. El visitante transmitió por carta su agradecimiento al general en estos términos:

> Como entusiasta de la hípica, sus jóvenes oficiales, sus caballos y la soberbia exhibición que ofrecieron me parecieron excelentes. (...) Chile es, sin duda, un país impresionante al que se le presenta un futuro extraordinario gracias a su excelencia y a las medidas y reformas que instauró.[48]

A continuación, lo invitaba a prolongar su asociación personal y financiera: «Quisiera agradecerle los magníficos gemelos que me ha obsequiado y hacerle saber que mi esposa, Barby, y yo estaremos encantados de recibirlo en nuestra casa de Middleburg, en Virginia, en donde criamos nuestros purasangres de carreras».[49]

Aunque era impensable que Pinochet pudiese viajar a Estados Unidos, el banco siguió adulándolo; así, el día de su octogésimo tercer cumpleaños, el general recibió una tarjeta del presidente, Timothy Coughlin, que decía: «Todos sus amigos y partidarios del Riggs Bank le transmiten su reconocimiento y su enhorabuena por cuanto ha hecho por Chile. Le rogamos acepte nuestros mejores deseos de éxito en su continuado servicio a Chile en 1998».[50]

Tanta solicitud dio su fruto: unos años después, las veintiocho cuentas de Pinochet se hallaban en el cuarto puesto en volumen del exclusivo departamento financiero privado del Riggs.[51] El general poseía siete cuentas personales, cuatro de ellas abiertas con diversas variantes de su nombre (Augusto Ugarte o José Ramón Ugarte, por ejemplo) y otras tres con sendos pseudónimos (véanse los documentos 4 y 5). El Riggs creó también para él dos sociedades instrumentales en el extranjero (Ashburton Company Ltd. y Althorp Investment) y ocultó su identidad al referirse al beneficiario de las cuentas como «un cliente de relieve de la banca privada internacional».[52] También había cuentas a nombre de su esposa, Lucía Hiriart, y de varios subordinados militares a los que los registros de la entidad se refieren como «testaferros» del general. «Todo apunta a que el Riggs hizo cuanto estuvo en sus manos por ocultar a los inspectores la relación del banco con Pinochet», al decir de los investigadores del Senado.

Después de su detención en Londres y de la orden de congelación de sus activos, el Riggs aseguró no haber podido localizar cuenta alguna perteneciente al antiguo dictador. Sin embargo, dicha entidad financiera había hecho posible a Pinochet, con discreción, la retirada de 1,6 millones de dólares, cantidad que le permitió costearse un servicio dispendioso de abogados y el alquiler por 16.000 dólares mensuales de una amplia residencia en las afueras de Londres mientras cumplía arresto domiciliario. A su regreso a Chile, el banco envió de forma regular un representante encargado de entregarle personalmente en su vivienda cheques de caja por valor de 50.000 dólares cuyo total asciende a 1,9 millones de dólares. «Se anexa una orden del cliente para emitir 10 cheques por un total de 500.000 dólares», se lee en un memorando de la vicepresidenta del Riggs Carol Thompson con fecha del mes de mayo de 2001. «Se ruega que se extiendan cheques individuales de 50.000 dólares, pagaderos a María Hiriart o a Augusto P. Ugarte». En total, el Riggs transfirió de manera ilegítima casi ocho millones de dólares al general después de que los tribunales mandaran embargar sus cuentas.[53]

El escándalo del Riggs Bank arruinó casi por completo su imagen de oficial militar honrado e incorruptible entre sus compatriotas, incluidos los pinochetistas. Asimismo, la revelación de que, además de las manos manchadas de sangre inocente, tenía presuntamente los bolsillos llenos de fondos estatales robados avivó las acciones legales contra él: el hecho de que se las ingeniase para recibir docenas de cheques de 50.000 dólares del Riggs al mismo tiempo que alegaba no estar capacitado mentalmente para responder ante un tribunal no pasó inadvertido a los jueces, abogados y víctimas chilenos, ni tampoco a los funcionarios del Departamento de Investigación de Delitos Tributarios del Servicio de Impuestos Internos, quienes no dudaron en emprender una indagación de relieve sobre evasión fiscal y fraude.

A la vuelta de dos meses, este último organismo presentó una querella contra Pinochet por falsificación en la declaración de la renta. La causa se remitió al juez Sergio Muñoz, que ya había puesto en marcha una investigación por fraude, malversación y soborno ante los cargos presentados por los letrados chilenos Carmen Hertz y Alfonso Insunza.[54] En noviembre de 2004, el magistrado destapó otros cuatro millones de

dólares en bienes ocultos que situaban en treinta millones la fortuna secreta del antiguo dictador. Cuando Muñoz interrogó a este y a su esposa acerca de la procedencia de dicho dinero, ambos aseguraron, sin ofrecer prueba alguna, que constituían donaciones de partidarios del régimen.

El 7 de junio de 2005, la Corte de Apelaciones de Santiago despojó a Pinochet de su inmunidad procesal por cuatro delitos financieros vinculados al escándalo del Riggs Bank. Cuando la Corte Suprema de Chile ratificó el fallo en octubre, se hizo probable que juzgaran al imputado por cuatro cargos: 1) obstrucción a la justicia; 2) uso de pasaportes falsos; 3) modificación y uso de certificados de la Subsecretaría de Guerra, y 4) perjurio cometido presuntamente en una declaración de 1989 relativa a sus bienes. El juez Muñoz acusó entonces a otros integrantes de la familia Pinochet. El 10 de agosto de 2005, el antiguo dictador estaba presente cuando la policía llegó a su mansión para detener a su esposa y trasladarla detenida al Hospital Militar. Su hijo Marco Antonio Pinochet Hiriart sufrió arresto por complicidad en los delitos de evasión de impuestos, malversación y fraude.

Poco después de estas detenciones, Pinochet hizo pública una declaración redactada en estos términos: «Asumo toda la responsabilidad por los hechos que investiga el ministro señor Muñoz y niego toda participación que en ellos pueda corresponder a mi cónyuge, mis hijos y mis colaboradores más próximos». Sus palabras resultaron doblemente dañinas: en primer lugar, porque con ellas admitía ser responsable de los delitos en cuestión, y, además, porque la coherencia que desplegaban contradecía el argumento de sus abogados defensores referente a la merma de sus facultades mentales. Por si fuera poco, no hizo nada por impedir que las autoridades formulasen más cargos contra sus familiares.

De hecho, el 23 de enero de 2006 se acusó a su esposa y su hijo Marco Antonio de otros delitos relacionados con las cuentas del Riggs y se les puso bajo arresto domiciliario junto a dos de sus tres hijas. La mayor, Inés Lucía Pinochet Hiriart, logró eludir la detención y huyó a Argentina para embarcar en un vuelo con destino al aeropuerto internacional Dulles de Washington. Una vez allí, solicitó asilo, alegando que su familia estaba sufriendo persecución política en Chile. Los funcionarios de Aduanas y

Fronteras de Estados Unidos la pusieron bajo custodia durante tres días mientras evaluaba las opciones que se le presentaban: la encarcelación indefinida en un centro de internamiento de inmigrantes mientras se daba curso a su engañosa petición o el regreso inmediato a su país.

El 27 de aquel mes, la primogénita del exdictador renunció a la solicitud de asilo político y volvió a Chile. En el aeropuerto de Santiago la aguardaba el juez Carlos Cerda, que recibió a la fugitiva con las siguientes palabras: «Señora Lucía, bienvenida, pase conmigo de inmediato. Tenemos que conversar (...) [L]a voy a notificar».[55]

Juicio por crímenes contra los derechos humanos. Otra vez

Las causas por corrupción ayudaron a reavivar los empeños legales en hacer responder a Pinochet por los crímenes que había cometido contra los derechos humanos, pues tanto sus argucias financieras como sus respuestas legales y sus esfuerzos por defender a su familia permitían atribuirle un grado considerable de agudeza mental. «Lo que cambió en este caso con el escándalo del Riggs es que Pinochet fue interrogado por un juez con la aquiescencia de sus propios abogados, que de ese modo admitieron de forma implícita que su cliente es perfectamente capaz de participar en un proceso judicial», señaló el abogado y activista Eduardo Contreras al renovar sus intentos de procesar a Pinochet por las atrocidades vinculadas a la Operación Cóndor.[56]

Pinochet había minado la imagen de senilidad que con tanto esmero había creado sobre sí mismo en noviembre de 2003, al conceder una entrevista a María Elvira Salazar, periodista cubano-estadounidense de la WDLP TV Canal 22, emisora de Miami que transmite en español. El antiguo dictador tuvo la osadía de referirse a sí mismo como «un ángel» al responder con lucidez a las preguntas que le hacía la señora Salazar. Con gran diplomacia, atribuyó a sus subordinados la responsabilidad de todo atropello a los derechos humanos, aduciendo haber estado demasiado ocupado en sus labores de cabeza de Estado para saber de tamañas monstruosidades, y más aún para supervisarlas. Se expresó con claridad y hasta trató de ganarse la

compasión de su auditorio. «Nunca me quejo, jamás lloro. Las penas se llevan por dentro», aseveró con calma el general.[57]

El programa originó en Chile todo un aluvión de protestas procedentes de las víctimas de Pinochet y los abogados de estas e intensificó el afán por revisar el fallo ofrecido por la Corte Suprema en julio de 2002, según el cual el antiguo dictador no poseía las facultades cognitivas necesarias para someterse a un proceso legal. El juez Juan Guzmán, que había visto sobreseída por tal motivo la causa que había presentado contra él en relación con la Caravana de la Muerte, decidió presentar nuevas acusaciones de desaparición y homicidio ligados a la Operación Cóndor (véase el capítulo 6). El 26 de agosto de 2004, la Corte Suprema determinó, aunque con un margen escaso, que el acusado no era inmune a ser juzgado por dichos crímenes y dio así luz verde a nuevos procesamientos por violación de los derechos humanos.

Guzmán decidió entonces abordar la cuestión de la competencia mental de Pinochet. En un principio se convenció de que el general permanecería fuera del alcance de la justicia debido a la incapacidad alegada. No obstante, en un esbozo manuscrito de su dictamen quiso asegurarse de que, al menos, lo juzgase la historia. La decisión de no presentar cargos contra él, según escribió,

> no implica que Pinochet Ugarte no sea responsable, de forma directa o indirecta, de los crímenes que se describen con detalle en la primera reflexión del presente veredicto (...) [H]a presidido un sistema perverso y cruel de secuestros, tortura brutal, asesinatos ignominiosos y desapariciones forzosas, tanto de ciudadanos nacionales como extranjeros, para lo cual empleó agentes estatales y deshonró unas Fuerzas Armadas célebres con anterioridad por su respecto a la Constitución y el derecho, y empleó de forma abusiva un sistema legal en apariencia a fin de encubrir tanto dolor y tanto horror.[58]

Al final, sin embargo, Guzmán reconsideró la cuestión de las facultades mentales del exdictador. En una entrevista ofrecida al autor del presente libro, el magistrado recordó haber reunido a un equipo de neurólogos y psiquiatras a fin de que estudiasen el programa del Canal 22 y evaluaran sus

procesos mentales. Los expertos determinaron que la aptitud cognitiva que ponía de relieve en su intervención televisada en lo tocante al razonamiento, la argumentación y la defensa y descripción de su propia persona contradecía la exposición de sus carencias intelectuales que habían hecho los letrados encargados de su defensa.

El 13 de diciembre de 2004 convergieron en el Palacio de Justicia del centro de Santiago docenas de víctimas de Pinochet y de periodistas en espera del dictamen del juez Guzmán. Este compareció en el gran vestíbulo del recargado edificio tras dar por terminado el papeleo necesario y anunció que «se declaró apto mentalmente al general Pinochet para estar sujeto a un juicio criminal en Chile con todas sus etapas, declaraciones indagatorias, careos, etc., y esta resolución tiene una segunda parte: se lo somete a proceso como autor de nueve secuestros permanentes y un homicidio calificado».[59] Hizo ponerlo bajo arresto domiciliario. Esto provocó un verdadero caos —del que fue testigo el autor de estas líneas— cuando las hijas y esposas de los desaparecidos y las víctimas de tortura acosaron al juez para colmarlo de agradecimientos, y los periodistas, para entrevistarlo. Los nuevos cargos ocuparon las primeras planas de los diarios de todo el mundo.

Las relativas a la Operación Cóndor serían las primeras de toda una serie de imputaciones. De hecho, los últimos dieciocho meses de su existencia, Pinochet hubo de hacer frente a un enjuiciamiento tras otro por acusaciones que iban de la evasión de impuestos y el fraude financiero a los actos de desaparición y homicidio cometidos contra ciudadanos de dentro y fuera del país. El 7 de junio de 2005, la Corte de Apelaciones de Santiago lo despojó de inmunidad frente a las investigaciones relativas a las cuentas bancarias ocultas del Riggs. Un mes más tarde, perdió la que lo protegía de ser juzgado por la Operación Colombo, la macabra campaña que emprendió su régimen para encubrir el asesinato y desaparición de unos 119 ciudadanos chilenos. El 8 de julio, el citado tribunal lo declaró apto, física y mentalmente, para ser procesado por dos muertes provocadas por los agentes de su régimen militar tras el golpe de Estado de 1973, y en noviembre, para responder de la desaparición de seis disidentes en 1974. En octubre de 2006 se le imputaron 36 cargos de secuestro, 23 de tortura y uno de homicidio por las torturas y desapariciones de Villa Grimaldi, campo de

concentración de infausta memoria. Aquel mismo mes lo acusaron haber ordenado la muerte de uno de sus antiguos secuaces, el bioquímico de la Dina Eugenio Berríos, desaparecido en Uruguay en 1992, a fin de evitar que testificase en los juicios por violación de los derechos humanos. Su cuerpo, sometido a tormento, fue hallado años más tarde enterrado en una playa. Fue la última víctima de la era de represión que vivió Chile.

Llegado el 25 de noviembre de 2006, día en que cumplía noventa y un años, se enfrentaba a no menos de media docena de procesamientos, así como a un buen número de investigaciones por delitos financieros y crímenes de lesa humanidad. Viejo y achacoso, entonó un último mea culpa en una declaración leída por su esposa, Lucía, por la que asumía «la plena responsabilidad» de las atrocidades cometidas durante los diecisiete años de su régimen: «Hoy, cerca del final de mis días, quiero manifestar que no guardo rencor a nadie, que amo a mi patria por encima de todo y que asumo la responsabilidad política de todo lo obrado».[60] Sus supuestas muestras de remordimiento cayeron en saco roto por lo que a la judicatura chilena respecta: dos días después volvieron a encausarlo y ponerlo bajo arresto domiciliario por acusaciones relativas a la ejecución de dos guardaespaldas de Salvador Allende. Todo apuntaba a que la parca era la única que podía librarlo de sus cuentas con la justicia.

Muerte del dictador

El general Augusto Pinochet murió el 10 de diciembre de 2006 —el Día Internacional de los Derechos Humanos, curiosamente— a causa de las complicaciones derivadas de un ataque al corazón. Frente al Hospital Militar de Santiago de Chile se congregaron unos dos mil pinochetistas a llorarlo y cantar. Entre tanto, en la céntrica plaza Italia y sus aledaños, una multitud aún más nutrida de detractores repetía a voz en cuello: «¡Es carnaval, es carnaval! ¡Se murió el general!».[61] Para muchos activistas de los derechos humanos, sin embargo, aquel hecho representó el último acto de evasión de la justicia por parte del general. «Este criminal», se lamentaba Hugo Gutiérrez, abogado de algunas de sus muchas víctimas, «se

ha ido de este mundo sin haber conocido una sentencia condenatoria por todos sus actos horrorosos y criminales durante su dictadura».[62]

El gobierno chileno le negó un funeral de Estado por las atrocidades cometidas durante su régimen y los procesos criminales a los que se enfrentaba en el momento de su defunción. Fue, por tanto, el Ejército el que se encargó de la organización de sus exequias, que se celebraron en la Escuela Militar de Chile. Asistieron algunos políticos de relieve, hombres de negocios y antiguos ministros y subsecretarios del régimen militar; pero no hubo pompa oficial alguna. «Siento que, la verdad, violenta la conciencia de los chilenos rendir honores a una persona que ha estado involucrada no solo en temas de derechos humanos, sino incluso en temas de uso de dineros fiscales», declaró la presidenta Michelle Bachelet, quien también se cuenta entre las víctimas de los atropellos cometidos por la dictadura.[63]

Era inevitable que las honras fúnebres a Pinochet se convirtieran en un espectáculo nacional. La ceremonia militar atrajo a miles de partidarios, varios de los cuales aparecen ante las cámaras haciendo el saludo nazi ante el exdictador muerto. Sin embargo, entre los asistentes hubo dos, representantes de lados opuestos de la amarga herencia del finado, que causaron un revuelo considerable. Un nieto del general, Augusto Pinochet Molina —o Augusto III—, militar también, pronunció un discurso de alabanza en el que justificaba los diecisiete años de dictadura de su abuelo y elogiaba el heroísmo de aquel hombre que, a su decir, «derrotó en plena Guerra Fría al modelo marxista que pretendía imponer su modelo totalitario no mediante el voto, sino más bien derechamente por el medio armado».[64] De igual manera, denostó a los jueces que lo habían perseguido hasta el día mismo de su muerte, de quienes dijo que «buscaban más renombre que justicia».[65] Dado que había transgredido las directrices impuestas por el gobierno en lo referente a las intervenciones del funeral, dos días después de pronunciado el panegírico, el Ejército chileno expulsó a Augusto III.

Con todo, no fue el único nieto que protagonizó titulares tras el sepelio, si bien en este caso la forma de despedida fue radicalmente distinta. Tras infiltrarse en la fila de chilenos militaristas que aguardaban para presentar sus últimos respetos al difunto, Francisco Cuadrado Prats, descendiente del

general Carlos Prats y Sofía Cuthbert, asesinados por agentes de la Dina en Buenos Aires en 1974, se aproximó al féretro abierto y escupió sobre el cristal que cubría el rostro de Pinochet. «Lo escupí como un acto de desprecio», afirmó el joven Prats, quien aseguró que fue un gesto espontáneo, «porque asesinó a mis abuelos y porque me chocó ver todos los honores recargados que recibió del Ejército».[66] Los pinochetistas, furiosos, atacaron y golpearon a Prats, quien fue detenido a continuación por su conducta sacrílega. Con todo, tanto esta como la de Augusto III se convirtieron en una coda emblemática del régimen de Pinochet, muy representativa del enfrentamiento relativo a su herencia y las perennes divisiones que se dan en la sociedad chilena casi tres décadas después del regreso de la democracia.

A fin de evitar más profanaciones, la familia del general decidió renunciar a darle sepultura de forma tradicional: sus restos desaparecieron sin más y fueron incinerados horas después. Sin embargo, el difunto se las compuso para hablar por última vez al pueblo de Chile desde sus cenizas y, así, el 25 de diciembre, cierta organización fundada con el propósito de promover su legado hizo pública una carta de seis páginas que había escrito antes de su muerte y en la que pretendía exponer una justificación última a sus actos. «Había, pues», aseveraba en sus líneas, «que actuar con el máximo rigor y sostenidamente hasta conjurar cualquier extensión del conflicto que se anunciaba» durante su régimen. Asimismo, declaraba que ninguna de las violaciones cometidas contra los derechos humanos había sido fruto de «un plan institucional».[67] A esto añadía: «¡Cómo quisiera que no hubiese sido necesaria la acción del 11 de septiembre de 1973!».[68] Pese a este empeño final en evadir su responsabilidad en las atrocidades que quedarían asociadas para siempre a su nombre, Pinochet parecía reconocer que su posición de paria —así en vida como en la muerte— había hecho mella en su alma. «Mi destino», declaraba, «es un tipo de destierro y soledad que jamás hubiera pensado, y menos deseado».[69]

Historia y responsabilidad

Si la muerte había permitido a Pinochet evitar tener que dar la cara a sus numerosas víctimas en los tribunales, el veredicto de la historia coincidirá sin duda en la condena más severa a Pinochet y su régimen. A pesar de la imagen de santo salvador de su patria que había presentado de sí mismo el general, la odisea de su detención resquebrajó a un tiempo la impunidad de su poder y la inmunidad de su legado. El arresto domiciliario sufrido en Inglaterra alentó a los supervivientes de sus violaciones de los derechos humanos a abrir camino por entre la conspiración de silencio en que se hallaba sumido el pasado oscuro y sin resolver de Chile. Sus voces, unidas a los testimonios desenterrados por los documentos que habían visto la luz en Estados Unidos, se convirtieron en un alegato histórico que nunca más podría ser negado. El drama del caso de Pinochet llevó a los defensores de los derechos humanos, de Chile y del resto del mundo, a movilizarse en pos de la verdad y la justicia con la intención de resolver y desagraviar los crímenes que él y sus subordinados habían cometido.

De hecho, aunque Pinochet logró eludir la acción de la justicia, muchos de sus lugartenientes, intocables en otro tiempo, hubieron de enfrentarse a acusaciones, juicios y penas de cárcel. En Chile surgió una nueva generación de magistrados resueltos a presentar acusaciones contra oficiales militares retirados y en activo por crímenes de lesa humanidad que antes no podían siquiera cuestionarse. A principios de 2013, la justicia chilena había encarcelado a 62 de los militares de Pinochet y condenado a otros 176 por crímenes contra los derechos humanos, en tanto que el número de subordinados suyos que aún estaban respondiendo ante los tribunales era de 549.[70] Entre los procesos más notables se encontraban los instruidos contra:

- Manuel Contreras: Tras cumplir una condena de siete años por el asesinato de Letelier y Moffitt, el antiguo jefe de la Dina sufrió arresto domiciliario a mediados de 2002, mientras se formaba contra él un proceso judicial por la desaparición de los prisioneros de Villa Grimaldi, centro de detención de triste memoria. El 25 de febrero de 2003, el juez Alejandro Solís lo acusó de dirigir el primer crimen internacional perpetrado por la Dina: el atentado con coche bomba que acabó con la vida del general retirado Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, en Buenos Aires. A mediados de abril de 2003, Contreras

fue declarado culpable de las atrocidades cometidas en Villa Grimaldi y condenado a quince años de prisión. En noviembre de 2004 sufrió detención, condena y prisión por segunda vez. El 30 de junio de 2008, el juez Alejandro Solís le impuso pena de cadena perpetua tras declararlo culpable de la muerte de Carlos Prats y Sofía Cuthbert. Asimismo, recibió una condena de veinte años por asociación ilícita. Eventualmente, sería condenado por más de cincuenta y cinco atrocidades cometidas en el tema de derechos humanos y sentenciado a más de quinientos años de cárcel. Contreras murió a los 86 años, el 7 de agosto del 2015.

• Brigadier general Raúl Iturriaga Neumann, antiguo director de la Brigada Exterior de la Dina: El 25 de febrero de 2003 fue acusado y arrestado, junto con su hermano Jorge Iturriaga, quien actuaba en calidad de agente civil de la Dina, por su participación en el asesinato de Prats. En junio de 2007 se dio a la fuga a fin de evadir una condena de cinco años por la desaparición del antiguo militante político Luis Dagoberto San Martín y a principios del mes de agosto del mismo año lo prendieron en la ciudad turística de Viña del Mar.

• Brigadier general Pedro Espinoza: El 25 de febrero de 2003, el subdirector de la Dina fue acusado también del asesinato de Carlos Prats y Sofía Cuthbert. En junio de 2008 recibió varias condenas de entre quince y veinte años por su participación en dicho crimen.

• General Sergio Arellano Stark: Sicario del régimen y representante designado en el caso de la Caravana de la Muerte. El 8 de junio de 1999, el juez Juan Guzmán lo puso bajo arresto domiciliario y lo acusó del delito de «secuestro calificado» por la desaparición de dieciocho víctimas a manos del escuadrón de la muerte que él dirigía. El 25 de septiembre de 2000 se presentaron cargos adicionales contra él por «asesinato calificado». En octubre de 2008, la Corte Suprema chilena ratificó la pena de seis años por su implicación en la Caravana de la Muerte, aunque más tarde se le suspendió la condena por el estado precario de su salud.

• Carlos Herrera Jiménez: Matón de la CNI sobre el que recayó la tarea de asesinar al dirigente sindicalista Tucapel Jiménez. En agosto de

2002, el juez Sergio Muñoz lo sentenció a cadena perpetua. Por esta misma muerte recibieron condenas más leves otros 27 oficiales del Ejército de Tierra, de la Fuerza Aérea y de Carabineros, entre los que se incluía el general Fernando Torres Silva.

• General de la Fuerza Aérea Patricio Campos: Arrestado en octubre de 2002 por obstrucción a la justicia mediante la destrucción de pruebas militares que debían haberse presentado ante la «Mesa de diálogo», comisión mixta de civiles y militares cuya misión era determinar la suerte que habían corrido mil cien desaparecidos chilenos.

• Comandantes del Ejército retirados Jaime Torres y Arturo Silva: Acusados en octubre de 2002 de la ejecución, perpetrada por los procedimientos propios de la Operación Cóndor, de Eugenio Berríos, agente desertor de la Dina, cuyo cadáver apareció en una playa de Uruguay en 1995 con dos orificios de bala en la espalda. Torres ejercía de guardaespaldas del general Pinochet. En junio de 2004, él y Silva fueron acusados de secuestro y asesinato.

• Cinco pilotos de la Fuerza Aérea de Chile: En noviembre de 2003, el juez Juan Guzmán los condenó por su participación en la desaparición de entre cuatrocientos y quinientos presos políticos. La investigación del magistrado desveló los macabros detalles de la «Operación Puerto Montt», nombre asignado por la policía secreta al procedimiento empleado para transportar en helicóptero a los cadáveres de los campos de tortura a la costa, metidos en sacos de lona y atados a trozos de riel, para arrojarlos al océano Pacífico.

• Rafael González: Antiguo agente del servicio secreto de la Fuerza Aérea. El 10 de diciembre de 2003, el hombre que había destapado el caso de Charles Horman fue el primero en ser acusado y detenido por complicidad en su muerte. González reconoció haber ejercido de interrogador para el servicio de información militar de Chile después del arresto de Horman, y no solo de intérprete, tal como había asegurado en 1976, cuando habló por vez primera con la prensa para revelar la ejecución del periodista estadounidense tras el golpe de Estado. También admitió haber inventado la historia que había contado

a periodistas de Estados Unidos diciendo que había visto a Horman en la oficina del general Lutz con un estadounidense allí presente.

El 7 de diciembre de 2009, el juez Alejandro Madrid dejó anonadado al público chileno al dictaminar que la muerte del expresidente Eduardo Frei, ocurrida en 1982, se había debido a envenenamiento por parte de la policía secreta de Pinochet. Entre los seis acusados se incluían un agente del servicio secreto y un médico vinculado a la Dina.[71] Y en diciembre de 2012, en una de las causas sin resolver más emblemáticas y espectaculares en relación con la violación de derechos humanos en Chile, el magistrado chileno Miguel Vásquez imputó a siete antiguos oficiales del Ejército y a un exrecluta por la ejecución del cantautor de fama internacional Víctor Jara. En la documentación presentada se ofrecían detalles desconocidos hasta entonces sobre dicha muerte y los 44 disparos que recibió la víctima en el Estadio Chile los días siguientes al golpe de Estado. Después del regreso de la democracia, el edificio recibió el nombre de Estadio Víctor Jara.

Hubo otros países de todo el mundo que presentaron cargos contra los oficiales chilenos responsables de crímenes de lesa humanidad. En España prosiguieron las causas criminales contra más de tres docenas de subordinados de Pinochet. En Argentina detuvieron, juzgaron, declararon culpable y condenaron a cadena perpetua a Enrique Arancibia Clavel, antiguo director del centro de operaciones de la Dina en Buenos Aires, por su participación en la muerte de Prats en septiembre de 1974. En 2007 fue liberado con gran discreción y en mayo de 2011 lo encontraron apuñalado en su apartamento bonaerense.

En Francia, el magistrado Roger Le Loire envió a la Interpol autos de procesamiento para catorce oficiales chilenos, incluidos siete miembros destacados de la Dina, por la desaparición de ciudadanos de Chile de ascendencia francesa en tiempos del golpe en el marco de las operaciones Colombo y Cóndor. En consecuencia, el 13 de septiembre de 2002 fue detenido en Argentina el general Luis Ramírez Pineda, antiguo comandante del regimiento Tacna. El 13 de enero de 2003 fue acusado en Chile, junto con otros siete oficiales del Ejército, del secuestro y la desaparición de doce miembros del gobierno de Allende apresados por los militares en el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973 y a los que nadie volvió a ver

después de que los llevasen al regimiento. Tanto Chile como Francia solicitaron la extradición de Ramírez.

Estados Unidos se unió a estas naciones al presionar para que se hiciese justicia en relación con los tres ciudadanos estadounidenses asesinados y desaparecidos en Chile. Tras una serie de conversaciones mantenidas entre los familiares de estos y la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Empleo del Departamento de Estado, la secretaria de Estado Albright remitió, en abril de 2000, una nueva nota diplomática al gobierno chileno a fin de «renovar esfuerzos para resolver los casos de Horman, Teruggi y Weisfeiler». El embajador John O'Leary recibió instrucciones de recurrir a «las más altas esferas» del gobierno de Ricardo Lagos para instar una nueva investigación. «Hay tres familias estadounidenses que han pasado todos estos años sin conocer los detalles de la desaparición y muerte en Chile de sus seres queridos», rezaba el documento en el que se exponían los puntos que debía tratar. «Ni siquiera saben con certeza quién es el responsable de estos crímenes».[72]

Era la primera vez —y la última— que Estados Unidos identificaba el asesinato de dos compatriotas y la desaparición de otro como delitos sancionables de los que debía responder el gobierno de Chile. Según otra nota diplomática, la administración estadounidense pidió a «las autoridades competentes de Chile que acometan una investigación minuciosa y enérgica destinada a revelar los hechos y juzgar a los responsables de acuerdo con la ley chilena». Washington tenía la intención de facilitar documentos secretos que acababan de hacerse públicos, a fin de respaldar la investigación criminal en torno a estos casos. Sin embargo, aquellos no podían «equipararse con una investigación completa que dé cuenta de la desaparición de estas personas», algo que «solo puede hacer el gobierno de Chile».

Los documentos revelados por Estados Unidos desempeñaron, en verdad, un papel relevante a la hora de hacer avanzar estas causas en el complejo sistema legal chileno. En la segunda mitad de 2000, la familia Weisfeiler se sirvió de la nueva documentación para solicitar con éxito que se transfiriese su caso de los tribunales locales a las manos del fiscal encargado de la causa contra Pinochet, el juez Juan Guzmán. En diciembre, Joyce Horman viajó a

Chile y pidió asimismo al magistrado que asumiese el caso de su esposo y el de Teruggi, que formaban parte de una investigación criminal más amplia en torno a la brutal matanza de prisioneros políticos llevada a cabo por los militares en el Estadio Nacional. Las pesquisas de Guzmán hicieron que ambos casos cobrasen importancia en los medios de comunicación. En abril de 2002 viajó a la Colonia Dignidad con una orden de registro, decidido a buscar pruebas relacionadas con Boris Weisfeiler, y en mayo de ese año celebró una audiencia acerca del caso de Horman y de la falta en que había incurrido la embajada de Estados Unidos al omitir brindar protección a sus compatriotas detenidos en el Estadio Nacional. Guzmán volvió a llamar la atención del público cuando hizo llegar al antiguo secretario Kissinger una serie de preguntas relativas a la respuesta brindada por Estados Unidos ante el golpe de Estado. Al no recibir contestación alguna de su parte transcurridos varios meses, el juez chileno sugirió que podía estar cometiendo desacato a la Corte.[73]

Sin embargo, después de volver a imputar al exdictador en diciembre de 2004, el juez Guzmán dejó la judicatura y puso en manos de otros magistrados los procesos contra Pinochet y los relativos a la muerte de Weisfeiler y de Horman y Teruggi. El juez Jorge Zepeda asumió los que afectaban a estadounidenses, pero las ruedas de la justicia giraban con gran lentitud y, así, transcurrieron poco menos de siete años sin que apenas ocurriese nada, a despecho de la presión ejercida por las familias —incluidas las visitas anuales de Olga, la hermana de Boris, a Santiago— para que la embajada de Estados Unidos exigiese una resolución judicial. A petición de los familiares, el personal de esta se reunió de forma periódica con el magistrado a fin de informarse de la evolución del proceso, en particular en lo tocante a la suerte que corrió Boris Weisfeiler. «En los diversos encuentros mantenidos con el juez Zepeda en los últimos meses hemos hecho hincapié en la importancia que reviste el caso de Weisfeiler para su familia, su embajada y el gobierno de Estados Unidos», escribió el cónsul general estadounidense en un cablegrama de diciembre de 2005.[74]

El paradero de Boris Weisfeiler seguía sin determinarse veintisiete años después de que hubiese desaparecido a manos de los cuerpos de seguridad de Chile, pero el 21 de agosto de 2012 el juez Zepeda anunció al fin un avance legal en la investigación. Citando pruebas obtenidas de documentos

estadounidenses salidos a la luz, imputó a ocho militares y policías retirados los cargos de secuestro con agravantes y complicidad en la desaparición de Weisfeiler. En el auto afirmaba que las fuerzas de seguridad chilenas habían puesto la mira en él por la semejanza que guardaba su atuendo de excursionista con los uniformes paramilitares que cabría esperar de un guerrillero de la izquierda. Aun así, no se ofrecía indicio alguno de lo que habían podido hacer con Weisfeiler las autoridades, lo que difícilmente podía brindar a sus familiares sensación alguna de que el caso estuviera cerca de su culminación.[75] Para complementar esa injusticia, el juez Zepeda cerró el caso en marzo del 2016, fallando que Weisfeiler no fue víctima de violaciones a los derechos humanos, sino que más bien de un «crimen ordinario» que había prescrito hacía largo tiempo. Los cargos contra todos los acusados fueron desestimados. «Lo peor de todo», como dijo Olga Weisfeiler en reacción con el fallo, Zepeda «no ha respondido a la pregunta que sigue rondando mi mente: ¿Dónde está mi hermano?».

A esas alturas, el juez Zepeda había publicado también una inculpación relativa al homicidio de Charles Horman y Frank Teruggi que protagonizó no pocos titulares en la prensa. El 29 de noviembre de 2011 acusó al brigadier general Pedro Espinoza, quien ya cumplía pena de cárcel por numerosos crímenes de lesa humanidad perpetrados mientras ocupaba el puesto de subdirector de la dina, de complicidad en las ejecuciones de estos dos estadounidenses tras el golpe de Estado. Para sorpresa de todos, el magistrado incluyó en la imputación al capitán Ray Davis, antiguo jefe del grupo militar estadounidense, de cuyos contactos con Charles Horman y con su esposa, Joyce, mantenidos antes y después de su desaparición respectivamente, da cuenta Missing (Desaparecido), película ganadora de un Oscar. En la solicitud presentada ante la Corte Suprema de Chile a fin de que autorizase su extradición, Zepeda alega que Davis era responsable de la recopilación de información secreta sobre ciudadanos estadounidenses residentes en Chile. Cabía presumir que el MilGroup había remitido a los servicios chilenos de espionaje tras el golpe de Estado informes en los que se calificaba de «extremistas» a Horman y Teruggi y se indicaba el domicilio de este último en Santiago, circunstancia que, al decir de Zepeda, permitió su detención el 20 de septiembre de 1973.

Aunque, tal como se hace ver en Desaparecido, se suele dar por supuesto que Horman debió su suerte a que topó de forma involuntaria con pruebas de la participación de Estados Unidos en el golpe de Estado, la investigación de Zepeda proponía una explicación diferente: el Ejército chileno creía que se hallaba implicado en la colaboración «subversiva» con la productora cinematográfica estatal Chile Films, que estaba siendo vigilada por su labor en pro de Allende. La declaración más escalofriante de la imputación aseveraba que el capitán Davis se encontraba en posición de hacer desistir a los militares chilenos de su empeño en ejecutar a Horman y prefirió no hacerlo.

El 18 de octubre de 2012, la Corte Suprema de Chile falló que los argumentos legales de Zepeda bastaban para aprobar la solicitud formal a Washington de la extradición del capitán Davis. (De hecho, a la muerte de Davis el 30 de abril de 2013, se reveló que había estado viviendo apaciblemente en el hogar de ancianos de un barrio acomodado en Santiago, a pocos kilómetros de los tribunales chilenos). La prensa dio a entender que se hallaba en una residencia de ancianos de Florida aquejado de alzhéimer y que era poco probable que compareciera alguna vez en una sala de justicia chilena. Sin embargo, la espectacular imputación de un oficial estadounidense y las pruebas que la sustentaban volvieron a centrar la atención de todo el planeta en la función desempeñada por el gobierno de Estados Unidos en la ejecución de dos de sus ciudadanos y en el mismísimo golpe de Estado militar del 11 de septiembre de 1973.

En junio del 2014, Zepeda emitió una resolución definitiva con la conclusión de que Davis y el Grupo Militar de Estados Unidos en Chile habían contribuido a las muertes de Charles Horman y Frank Teruggi, al traspasar a oficiales de inteligencia chilenos información que los estigmatizaba.

Responsabilidad de Estados Unidos

El 10 de septiembre de 2001, cuando habían pasado más de tres décadas del asesinato del general chileno René Schneider, dos de sus hijos entablaron un pleito de homicidio por negligencia contra Henry Alfred Kissinger y

Richard Helms, antiguo director de la CIA.[76] La acusación, que se basó sobre todo en documentación estadounidense desclasificada, presentó un resumen detallado de la vía II, incluidas las decisiones tomadas por la Casa Blanca y las operaciones clandestinas que desembocaron en lo que se describió durante el juicio como «la ejecución sumaria, tortura, trato degradante, cruel e inhumano, detención arbitraria, amenazas y lesiones físicas, abandono, provocación intencionada de daños emocionales y homicidio negligente del general Schneider». Entre las actividades de Kissinger y Helms se incluía «la organización e instigación de un golpe de Estado en Chile que exigía la eliminación del general René Schneider, padre de los querellantes, René y Raúl Schneider». Los acusados, según se dijo en el juicio, «sabían o debían haber sabido que sus actos y omisiones culminarían en la muerte del general Schneider».

El 13 de noviembre de 2002 se entabló una segunda demanda civil contra Kissinger y el gobierno de Estados Unidos, esta vez por parte de once víctimas del período posterior al golpe y sus familiares. También en este caso se citaron documentos que no hacía mucho que habían salido a la luz. Según lo visto durante el juicio, estos demostraban lo siguiente:

> Con la ayuda práctica y el aliento de Estados Unidos (...) el aparato chileno de terror fue responsable de torturas sistemáticas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, detenciones ilegales o arbitrarias, muertes por negligencia, ejecuciones sumarias, lesiones, desapariciones forzadas, crímenes de lesa humanidad, violencia contra las mujeres, provocación intencionada de angustia emocional y otras violaciones de la legislación nacional e internacional de las que han sido víctimas los demandantes o sus familiares.[77]

Estos procesos ponían en evidencia que cada vez eran más los chilenos convencidos de la responsabilidad de Estados Unidos en las actividades del régimen. Ya en 1975, cuando se hicieron públicos los detalles relativos a la conspiración golpista de la vía II y los medios de comunicación se hicieron eco por vez primera de la participación de la CIA en el asesinato de Schneider, los abogados de la Agencia y la Casa Blanca reconocieron el peligro que corría Estados Unidos —desde los funcionarios de los distintos departamentos hasta el presidente— en relación con la responsabilidad legal

de su intervención en Chile. El 24 de junio de 1974, Philip Buchen, quien poco después sería consejero general de la Casa Blanca del presidente Ford, recibió un informe de la CIA que giraba en torno a las órdenes emitidas por Nixon el 15 de septiembre de 1970 para fomentar un golpe de Estado. «Buchen se ha mostrado preocupado ante el contenido del documento, que vincula de forma directa al presidente a la conspiración golpista», comunicó el principal abogado de la CIA en un memorando de conversación secreto. «Tal como lo ha expresado Buchen, quien trata de propiciar un golpe de Estado puede considerarse responsable de las consecuencias naturales y probables de tal acto» (la cursiva es mía).[78]

Dado el precedente sentado por el caso de Pinochet en relación con la internacionalización de la justicia en los crímenes de lesa humanidad, parecía inevitable que las víctimas chilenas tratasen de hacer que Estados Unidos y sus representantes respondiesen de sus actos. Sin duda fueron los militares chilenos quienes aplicaron los electrodos, apretaron el gatillo y cavaron las tumbas secretas durante la dictadura, pero a los ojos de muchas de sus víctimas, así como de no pocos observadores de todo el planeta, Estados Unidos actuó de cómplice activo o tácito en el desmoronamiento de la democracia chilena y en la consolidación de la dictadura de Pinochet. Los documentos estadounidenses que han salido a la luz ponen de relieve toda una serie de detalles —ocultos durante mucho tiempo— de la relación entre ambos países que no puede sino reforzar aquella opinión, y más aún por lo que respecta al papel crucial desempeñado en este sentido por Henry Kissinger entre 1970 y 1976.

Es quizá un acto de justicia poética el que el oscuro pasado de la política adoptada por Estados Unidos con respecto a Chile regrese para atormentar al estadista que más responsabilidad tuvo en lo tocante a las decisiones y las acciones en torno a las que se ha ido construyendo esta historia. Pues fue Kissinger, más que ningún otro funcionario estadounidense, quien hubo de soportar la carga de las controversias, aún sin resolver, que pueblan el caso chileno. Su actuación en Chile —o en Vietnam o Camboya— se convirtió en el talón de Aquiles de su carrera política, o, más bien, en un lastre que hubo de arrastrar mientras trataba de zafarse de los ataques de los medios de comunicación y las acciones legales emprendidas contra él en todo el mundo.

De hecho, Kissinger se convertiría en el primer funcionario del gobierno estadounidense «pinocheteado»; es decir, perseguido en un país y en otro por la amenaza de los procesos legales.[79] En el transcurso de un viaje de negocios que lo llevó a París en mayo de 2001, cierto letrado francés hizo llegar a su hotel una citación para testificar sobre las desapariciones de ciudadanos chilenos tras el golpe de Estado. (Kissinger no dudó en salir corriendo del país). En junio de ese mismo año, el juez Guzmán le remitió la nutrida lista de preguntas acerca del caso de Horman de la que ya hemos hablado, y, en agosto, un magistrado federal de Argentina —país que visitaba a menudo— solicitó formalmente ayuda a Estados Unidos para interrogar al antiguo secretario de Estado sobre lo que sabía de la Operación Cóndor. En septiembre, la familia Schneider entabló un proceso legal contra su persona en Estados Unidos. Por si fuera poco, en febrero de 2002 se vio obligado a abandonar toda idea de viajar a São Paulo para recibir un prestigioso galardón brasileño de manos del presidente Fernando Cardoso cuando le hicieron saber que su visita había provocado no pocas protestas callejeras y que corría el riesgo de que lo hiciesen declarar con respecto a la implicación de Estados Unidos y Brasil en la Operación Cóndor.[80]

En suelo estadounidense, la revelación de los documentos sobre Chile llevó a los medios de comunicación a examinar de nuevo la actuación del gobierno y el papel desempeñado por Kissinger. No había un solo programa de relevancia —desde los de la CNN hasta «News Hour», de la PBS, o «60 Minutes», de la CBS— que no dedicase alguna sección a las cuestiones históricas que quedaban pendientes en lo que concernía a la mala conducta de Estados Unidos en Chile. Ni siquiera durante la campaña de promoción del último volumen de sus memorias, Years of Renewal, pudo Kissinger bajar la guardia. «¿Qué derecho tenía Estados Unidos a tratar de derrocar al presidente de otro país, señor secretario de Estado?», le preguntaron en el noticiario «Crossfire», de la CNN.[81] «¿Por qué no probó a decirle: “Está usted violando los derechos humanos, matando gente; déjelo ya”?», quisieron saber en «News Hour». Él se mantuvo impenitente y respondió a Elizabeth Farnsworth: «Los derechos humanos no eran entonces una cuestión internacional en el mismo grado en que lo son ahora». Cualquier razonamiento que implicase que Washington tenía que reparar algún entuerto, según añadió, «está dando por sentado que nuestra actuación fue inmoral o algo peor, y eso no puedo aceptarlo».[82]

Tanto para la nueva clase gobernante chilena como para las víctimas de la represión de Pinochet, la actitud de Kissinger dejaba cierto resentimiento acre en las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Quienes habían sufrido lo indecible en la época del régimen militar estaban persuadidos de que los altos funcionarios como él debían responder ante los tribunales por las actitudes que habían contribuido a la terrible represión que habían tenido que soportar tantos chilenos. Otros pedían a Estados Unidos que reconociese las descaradas ofensas infligidas a la soberanía chilena y la indiferencia mostrada ante el carácter inviolable de las vidas de los chilenos y que pidiese perdón. A mediados de 2000, cierto comité de senadores de Chile hizo una moción para pedir al gabinete del presidente Ricardo Lagos que protestase por medios formales por la violación de la soberanía y dignidad del pueblo de Chile. Por su parte, los miembros del Ministerio chileno de Asuntos Exteriores dejaban bien claro, en público y en privado, que el gobierno de Clinton debería admitir los hechos que habían contribuido a cambiar el curso de la historia del país. Tal como indicó a la prensa estadounidense el antiguo ministro de Relaciones Exteriores Juan Gabriel Valdés, entonces embajador ante las Naciones Unidas: «Pienso que la posición de mi gobierno es, ahora como en su momento, que junto con los documentos desclasificados nos habría gustado ver cierta actitud de remordimiento». Durante una aparición en público en Washington, el 5 de septiembre de 2001, el embajador lo expresó de un modo aún más claro: «Una disculpa sería lo más apropiado».[83]

Explicación sin implicación

El 8 de marzo de 1977, cuando el gobierno de Jimmy Carter, cuya política se orientaba en favor de los derechos humanos, apenas llevaba unas semanas de andadura, uno de los integrantes del Departamento de Estado, un desconocido llamado Brady Tyson, trató de ofrecer una disculpa oficial por la intervención estadounidense en Chile. Tras tomar la palabra en un encuentro de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU celebrado en Ginebra en busca de una resolución condenatoria para el régimen de Pinochet, señaló:

> La delegación de Estados Unidos no sería sincera, ni haría otra cosa que engañar a su pueblo y a sí misma, si no expresase, en cualquier debate en torno a la situación de Chile, su más profundo arrepentimiento por la función desempeñada por algunos funcionarios y organismos del gobierno estadounidense, así como por ciertos grupos privados, en la subversión del anterior gobierno chileno elegido democráticamente, que fue derrocado por el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Reconocemos que este arrepentimiento, por sincero que sea, no puede contribuir de forma significativa a enmendar el sufrimiento y el terror vividos por el pueblo de Chile. Solo podemos decir que la gran mayoría del pueblo estadounidense ha creído siempre en la democracia, la justicia y la libertad como bienes universales, y rechaza estos actos y a sus responsables.[84]

La declaración de Tyson era sincera y directa, y sus superiores del Departamento de Estado y la Casa Blanca no dudaron en repudiarla en público y retractarse de ella. Lo hicieron volver de Ginebra a Estados Unidos, donde lo esperaba un buen rapapolvo. En opinión de sus superiores, sus comentarios habían pecado de improcedentes e inexactos, y no contaban con ninguna autorización previa.

Hubo que esperar a la siguiente generación para que cierto grupo de funcionarios del Departamento de Estado considerase de nuevo la posibilidad de reconocer de forma oficial la culpa de Estados Unidos en la tragedia chilena. La última entrega de los documentos desclasificados estaba programada para noviembre de 2000, y la Oficina de Planificación Política juzgó que esta constituiría una oportunidad inmejorable para dar un paso necesario hacia la superación de un capítulo vergonzoso y plagado de escándalos de la política exterior estadounidense. En octubre, el director Morton Halperin propuso que la declaración oficial que acompañaría a la publicación de los documentos incluyese un párrafo en el que se admitiera de forma directa la participación del país en el golpe de Estado y expresase oficialmente el arrepentimiento de Estados Unidos. «Algunos de nosotros pensábamos que les debíamos una disculpa sincera», señaló con posterioridad. Theodore Piccone, subdirector del organismo, redactó una declaración sencilla y muy concisa, que decía en esencia: «Estados Unidos reconoce su responsabilidad y desea expresar sus disculpas por los

acontecimientos que contribuyeron a que se hicieran realidad el golpe de Estado y las subsiguientes violaciones de los derechos humanos». Para conferir al escrito el peso político que merecía, Halperin y él ejercieron cuanta presión les fue posible para que la declaración llevase el sello de la Casa Blanca y la firma del presidente Bill Clinton.[85]

La iniciativa contaba con un precedente: en mayo de 1999, tras la revelación de documentos secretos que demostraban que Washington había ayudado a los brutales militares de Guatemala, Clinton pronunció un discurso en la capital de dicho país en el que reconoció que Washington había «errado al brindar respaldo a las fuerzas militares o las unidades de espionaje y a los violentos métodos represivos que adoptaron», y aseguró que Estados Unidos no repetiría tamaño error. Sin embargo, otras entidades del Departamento de Estado, los servicios de inteligencia y el CSN se opusieron a que se hiciese algo similar con Chile. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, representada por Curt Struble, alegó que algo así era ir demasiado lejos y no haría sino propiciar un verdadero alboroto en Chile. El embajador de Estados Unidos en Santiago, John O'Leary, también opinaba que debía suavizarse. Los asesores legales del Departamento de Estado se opusieron a cualquier admisión de «arrepentimiento», tal como recordaría más tarde uno de los que participaron en el debate, porque «podía crear problemas de responsabilidad legal» a los antiguos hombres de Estado.

La redacción definitiva de un párrafo constituido por dos únicas frases que pretendían expresar el arrepentimiento de Estados Unidos al tiempo que evitaban toda referencia a mala conducta alguna recayó en el asesor especial del presidente en lo tocante a Latinoamérica, Arturo Valenzuela, de origen chileno. Este encontró varias soluciones lingüísticas que le permitieron ampliar y suavizar el mensaje. Así, el término minar, referido a las tradiciones democráticas chilenas, fue sustituido por afectar, en tanto que en lugar de admitir directamente que Washington había «socavado» la causa de los derechos humanos, la declaración dejaba al lector de los documentos que lo determinase por cuenta propia. Tras un dilatado debate y un ingente intercambio de mensajes de correo electrónico entre la Casa Blanca y el Departamento de Estado, la redacción final, quizá algo retorcida, quedó así:

Uno de los objetivos del proyecto es el de poner a disposición del público los documentos originales a fin de que pueda juzgar por sí mismo en qué medida socavaron las acciones de Estados Unidos la causa de la democracia y la de los derechos humanos en Chile. Las acciones aprobadas por el gobierno estadounidense agudizaron la polarización política y afectaron la larga tradición de elecciones democráticas y respeto por el orden constitucional y el Estado de derecho de Chile.[86]

En lugar de llevar el imprimatur del presidente, al final la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca emitió simplemente una declaración sin firma.

***

Era de esperar que, dada su naturaleza de documento último, simbólico, del proyecto de Desclasificación de Chile emprendido por el gobierno de Clinton, el comunicado admitiese la contribución de la política exterior estadounidense al horror humano vivido por los chilenos —un reconocimiento necesario para que estos, y también los estadounidenses, pudiesen pasar por fin una dolorosa página de la historia—. Al levantar el secreto que pesaba sobre los documentos publicados, Estados Unidos había ofrecido una explicación a los hechos, pero no había llegado a aceptar su implicación en ellos.

De cualquier modo, lo cierto es que la citada explicación comportó la elaboración de un nutrido archivo histórico, una inestimable colección de pruebas que informaría para siempre de los hechos a los ciudadanos de Chile, Estados Unidos y el resto del mundo, así como a los tribunales que, cincuenta años después del golpe de Estado de Pinochet, siguen emprendiendo acciones legales contra las atrocidades perpetradas por su régimen militar. La documentación contribuyó de manera significativa a lo que los investigadores de los derechos humanos en Chile han llamado «el poder purificador de la verdad», al ofrecer la responsabilidad de una memoria histórica colectiva allí donde no parecía suficiente la responsabilidad judicial. Y tal como expresó con sencilla elocuencia una superviviente de los campos de tortura de Pinochet: «Si por último no logras tú que haya en este momento un juicio para quienes son responsables, por lo menos la memoria... lo que sí hace es el juicio histórico

de quienes son responsables».[87] Pinochet y los estadistas norteamericanos que respaldaron a su régimen no recibirán nunca el veredicto de un tribunal; sin embargo, los documentos desclasificados ayudarán a la historia a pronunciar el suyo propio.

Documento 1. Corte de Bow Street: Orden para el arresto de Augusto Pinochet, 16 de octubre de 1998.

IN THE INNER LONDON AREA

BOW STREET MAGISTRATES' COURT

To each and all of the Constables of the Metropolitan Police Force

There being evidence that

Augusto Pinochet Ugarte

(hereinafter called the defendant) is accused
~~is alleged to be unlawfully at large after conviction~~
of the offence(~~s~~) of

between the 11th September 1973 and the 31st. December 1983 within the jurisdiction of the Fifth Central Magistrates Court of the National Court of Madrid did murder Spanish Citizens in Chile.
within the jurisdiction of the Government of Spain

And there being information that the defendant is or is believed to be in or on way to the United Kingdom:

and it appears to me that the conduct alleged would constitute an extradition crime:

And I have been supplied with such information as would justify, in my opinion, the issue of a warrant for the arrest of a person accused ~~alleged to be unlawfully at large after conviction~~ of an offence within the Inner London Area:

You are hereby required to arrest the defendant and bring the defendant before a Metropolitan Magistrate sitting at Bow Street Magistrates' Court.

Date: 16th October 1998

Nicholas Evans
Metropolitan Magistrate

Provisional Warrant
Convention Countries
Section 8(1)(b)
Extradition Act 1989

91

Documento 2. CIA, Reporte: «Actividades de la CIA en Chile», 18 de septiembre de 2000 [Extractos]. (6 páginas)

SUBJECT: CIA Activities in Chile

September 18, 2000

Summary of Sources/Methodology

To respond to Section 311 of the Intelligence Authorization Act for Fiscal Year 2000 (referred to hereafter as the Hinchey Amendment), the Intelligence Community (IC), led by the National Intelligence Council, reviewed relevant CIA records of the period predominantly from recent document searches; studied extensive Congressional reports regarding US activities in Chile in the 1960s and 1970s; read the memoirs of key figures, including Richard Nixon and Henry Kissinger; reviewed CIA's oral history collection at the Center for the Study of Intelligence; and consulted with retired intelligence officers who were directly involved.

This broad information base has given us high confidence in our responses to the three questions, which are answered directly below. The body of the report, however, provides much greater detail in an effort to tell the story of CIA involvement and put the answers into their proper historical context. The Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities—the Church Committee—conducted in 1975 a thorough document review and interviews, and produced a report that still stands as a comprehensive analysis of CIA actions in Chile during the period from 1963 to 1973.

CIA's response to the Hinchey amendment should be viewed as a good-faith effort to respond in an unclassified format to the three questions, not as a definitive history of US activities in Chile over the past 30 years.

<u>Summary of Response to Questions</u>

1. **Q.** All activities of officers, covert agents, and employees of all elements of the Intelligence Community with respect to the assassination of President Salvador Allende in September 1973.

   A. We find no information—nor did the Church Committee—that CIA or the Intelligence Community was involved in the death of Chilean President Salvador Allende. He is believed to have committed suicide as the coup leaders closed in on him. The major CIA effort against Allende came earlier in 1970 in the failed attempt to block his election and accession to the Presidency. Nonetheless, the US Administration's long-standing hostility to Allende and its past encouragement of a military coup against him were well known among Chilean coup plotters who eventually took action on their own to oust him.

2. **Q.** All activities of officers, covert agents, and employees of all elements of the Intelligence Community with respect to the accession of General Augusto Pinochet to the Presidency of the Republic of Chile.

A. CIA actively supported the military Junta after the overthrow of Allende but did not assist Pinochet to assume the Presidency. In fact, many CIA officers shared broader US reservations about Pinochet's single-minded pursuit of power.

3. **Q.** All activities of officers, covert agents, and employees of all elements of the Intelligence Community with respect to violations of human rights committed by officers or agents of former President Pinochet.

   A. Many of Pinochet's officers were involved in systematic and widespread human rights abuses following Allende's ouster. Some of these were contacts or agents of the CIA or US military. The IC followed then-current guidance for reporting such abuses and admonished its Chilean agents against such behavior. Today's much stricter reporting standards were not in force and, if they were, we suspect many agents would have been dropped.

Support for Coup in 1970. Under "Track II" of the strategy, CIA sought to instigate a coup to prevent Allende from taking office after he won a plurality in the 4 September election and before, as Constitutionally required because he did not win an absolute majority, the Chilean Congress reaffirmed his victory. CIA was working with three different groups of plotters. All three groups made it clear that any coup would require the kidnapping of Army Commander Rene Schneider, who felt deeply that the Constitution required that the Army allow Allende to assume power. CIA agreed with that assessment. Although CIA provided weapons to one of the groups, we have found no information that the plotters' or CIA's intention was for the general to be killed. Contact with one group of plotters was dropped early on because of its extremist tendencies. CIA provided tear gas, submachine-guns and ammunition to the second group. The third group attempted to kidnap Schneider, mortally wounding him in the attack. CIA had previously encouraged this group to launch a coup but withdrew support four days before the attack because, in CIA's assessment, the group could not carry it out successfully.

Awareness of Coup Plotting in 1973. Although CIA did not instigate the coup that ended Allende's government on 11 September 1973, it was aware of coup-plotting by the military, had ongoing intelligence collection relationships with some plotters, and—because CIA did not discourage the takeover and had sought to instigate a coup in 1970—probably appeared to condone it. There was no way that anyone, including CIA, could have known that Allende would refuse the putchists' offer of safe passage out of the country and that instead—with La Moneda Palace under bombardment from tanks and airplanes and in flames—would take his own life.

Knowledge of Human Rights Violations. CIA officers were aware of and reported to analysts and policymakers in 1973 that General Pinochet and the forces that overthrew the Allende Government were conducting a severe campaign against leftists and perceived political enemies in the early months after the coup. Activities of some security services portended a long-term effort to suppress opponents. In January 1974, CIA officers and assets were tasked to report on human rights violations by the Chilean government.

Liaison with Chilean Security Services. The CIA had liaison relationships in Chile with the primary purpose of securing assistance in gathering intelligence on external targets. The CIA

offered these services assistance in internal organization and training to combat subversion and terrorism from abroad, not in combating internal opponents of the government. The CIA also used these relationships to admonish these services concerning human rights abuses in Chile. The policy community and CIA recognized that the relationships opened the CIA to possible identification with the liaison services' internal operations involving human rights abuses but determined that the contact was necessary for CIA's mission.

Propaganda in Support of Pinochet Regime. After the coup in September 1973, CIA suspended new covert action funding but continued some ongoing propaganda projects, including support for news media committed to creating a positive image for the military Junta. Chilean individuals who had collaborated with the CIA but were not acting at CIA direction assisted in the preparation of the "White Book," a document intended to justify overthrowing Allende. It contained an allegation that leftists had a secret "Plan Z" to murder the high command in the months before the coup, which CIA believed was probably disinformation by the Junta.

Knowledge of "Operation Condor." Within a year after the coup, the CIA and other US Government agencies were aware of bilateral cooperation among regional intelligence services to track the activities of and, in at least a few cases, kill political opponents. This was the precursor to Operation Condor, an intelligence-sharing arrangement among Chile, Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay established in 1975.

Violations of Human Rights Committed by Officers or Covert Agents and Employees of the CIA

In January 1974 CIA issued a directive to all CIA staff to collect clandestine information on torture in Chile; this message directed CIA staff to work through all available agents and channels of influence to induce the Chilean Government to modify repressive measures, particularly to eliminate torture. CIA actively used its contacts, especially with members of services notorious for human rights abuses, to emphasize that human rights abuses were detrimental to the government's credibility within their own country, damaging to their international reputation, and unacceptable to the US Government. In some cases, such contacts enabled the CIA to obtain intelligence on human rights abuses that would not have otherwise been available.

Given the wide variety and nature of CIA contacts in Chile, the issue of human rights was handled in various ways over the years. Some examples:

- Before the 1973 coup, the issue of human rights was not addressed in liaison contacts and intelligence reporting.
- One CIA contact was known to be involved in an abortive coup attempt on 29 June 1973, and another was involved in the successful 11 September 1973 coup.
- In October 1973, the CIA had credible information that a high-level contact was involved in specific human rights abuses; contact was severed.
- Although the CIA had information indicating that a high-level contact was a hard-liner and therefore more likely to commit abuses, contact with him was allowed to continue in the absence of concrete information about human rights abuses.

- CIA maintained indirect contact with a source in close contact with human rights violators. There was no evidence that the source engaged in abuses, but he almost certainly knew about the practice. The intelligence value of the contact was sufficiently important that the contact was not dropped.

- In the case of an individual about whom the CIA had information concerning a corruption issue that may have been related to human rights issues, a decision was made to seek contact given his position and potential intelligence value.

- In more than one case, in light of the contacts' service affiliation and position, it seemed likely that they were involved in, knew about or covered up human rights abuses. However, because such contacts allowed the CIA to accomplish its intelligence reporting mission and maintain a channel through which to voice concerns about human rights abuses, contact was continued.

- In a few cases, although the CIA had knowledge that the contact represented a service with a known history of human rights abuses, contact was continued because refusing such contact would have had a negative impact on the CIA intelligence collection mission.

- In some cases careful checks of contacts' human rights records were not conducted, and a deliberate risk-versus-gain decision was not made. In such cases, if a contact was deemed to have intelligence value, continuing contact was authorized.

- Information concerning human rights abuses of then current and former CIA contacts was disseminated to the intelligence and policy communities.

Relationship with Contreras

During a period between 1974 and 1977, CIA maintained contact with Manuel Contreras Sepulveda, who later became notorious for his involvement in human rights abuses. The US Government policy community approved CIA's contact with Contreras, given his position as chief of the primary intelligence organization in Chile, as necessary to accomplish the CIA's mission, in spite of concerns that this relationship might lay the CIA open to charges of aiding internal political repression. From the start, the CIA made it clear to Contreras was that it would not support any of his activities or activities of his service which might be construed as "internal political repression." In its contacts with Contreras, the CIA urged him to adhere to a 17 January 1974 circular, issued by the Chilean Ministry of Defense, spelling out guidelines for handling prisoners in a manner consistent with the 1949 Geneva Convention.

The relationship, while correct, was not cordial and smooth, particularly as evidence of Contreras' role in human rights abuses emerged. In December 1974, the CIA concluded that Contreras was not going to improve his human rights performance. However, Contreras' assistance in the first quarter of 1975 in gaining the release of some PDC members who had been arrested and mistreated by another Chilean security service offered small hope that he would use his influence to end abuses. In retrospect, however, Contreras' role in this effort probably reflected interservice rivalry and Contreras' personal efforts to control the entire Chilean intelligence apparatus.

By April 1975, intelligence reporting showed that Contreras was the principal obstacle to a reasonable human rights policy within the Junta, but an interagency committee directed the CIA to continue its relationship with Contreras. The US Ambassador to Chile urged Deputy Director of Central Intelligence Walters to receive Contreras in Washington in the interest of maintaining good relations with Pinochet. In August 1975, with interagency approval, this meeting took place.

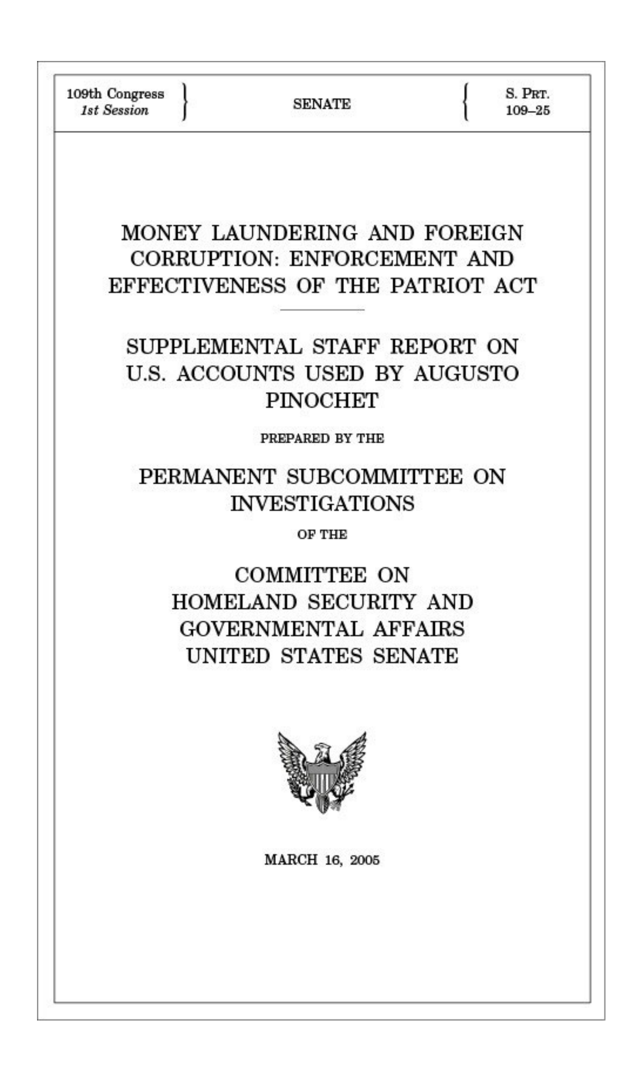
In May and June 1975, elements within the CIA recommended establishing a paid relationship with Contreras to obtain intelligence based on his unique position and access to Pinochet. This proposal was overruled, citing the US Government policy on clandestine relations with the head of an intelligence service notorious for human rights abuses. However, given miscommunications in the timing of this exchange, a one-time payment was given to Contreras.

In addition to information concerning external threats, CIA sought from Contreras information regarding evidence that emerged in 1975 of a formal Southern Cone cooperative intelligence effort —"Operation Condor"— building on informal cooperation in tracking and, in at least a few cases, killing political opponents. By October 1976 there was sufficient information that the CIA decided to approach Contreras on the matter. Contreras confirmed Condor's existence as an intelligence-sharing network but denied that it had a role in extra-judicial killings.

Former Allende cabinet member and Ambassador to Washington Orlando Letelier and his American assistant, Ronni Moffit, were killed in a car bombing in Washington on 21 September, 1976. Almost immediately after the assassination, rumors began circulating that the Chilean government was responsible. CIA's first intelligence report containing this allegation was dated 6 October 1976. During October 1976, the Department of Justice and the CIA worked out how the CIA would support the foreign intelligence (FI) aspects of the legal investigation. At that time, Contreras' possible role in the Letelier assassination became an issue.

By the end of 1976, contacts with Contreras were very infrequent. During 1977, CIA met with Contreras about half a dozen times; three of those contacts were to request information on the Letelier assassination. On 3 November 1977, Contreras was transferred to a function unrelated to intelligence so CIA severed all contact with him.

Documento 3. Senado de Estados Unidos, Subcomité Permanente de Investigaciones del Comité para la Seguridad Nacional y los Asuntos Gubernamentales: «Lavado de dinero y corrupción extranjera: Aplicación y efectividad de la Ley Patriota», reporte suplementario sobre las cuentas estadounidenses utilizadas por Augusto Pinochet, 16 de marzo de 2005.


109th Congress
1st Session

SENATE

S. PRT.
109–25

MONEY LAUNDERING AND FOREIGN CORRUPTION: ENFORCEMENT AND EFFECTIVENESS OF THE PATRIOT ACT

SUPPLEMENTAL STAFF REPORT ON U.S. ACCOUNTS USED BY AUGUSTO PINOCHET

PREPARED BY THE

PERMANENT SUBCOMMITTEE ON INVESTIGATIONS

OF THE

COMMITTEE ON HOMELAND SECURITY AND GOVERNMENTAL AFFAIRS UNITED STATES SENATE

MARCH 16, 2005

Documento 4. Imágenes de los pasaportes falsos de Augusto Pinochet utilizados para abrir cuentas bancarias secretas.

2

REPUBLICA DE CHILE

DATOS PERSONALES
PERSONAL DESCRIPTION

Cédula Nacional de Identidad
National Identity Card

Redacted by the
Permanent Subcommittee
on Investigations

Nacionalidad
Nationality
CHILENA

Fecha de Nacimiento
Date of Birth
07·NOVIEMBRE·1914

Estado Civil
Marital Status
CASADO

Profesión
Profession
EMPLEADO FISCAL

Domicilio
Address
CAMINO SN. PEDRO S/N
MELIPILLA.

Observaciones
Notes
AUTORIZACION DE VIAJE
CONFORME

3

REPUBLICA DE CHILE

NOMBRE DEL TITULAR
NAME OF BEARER

JOSE RAMON

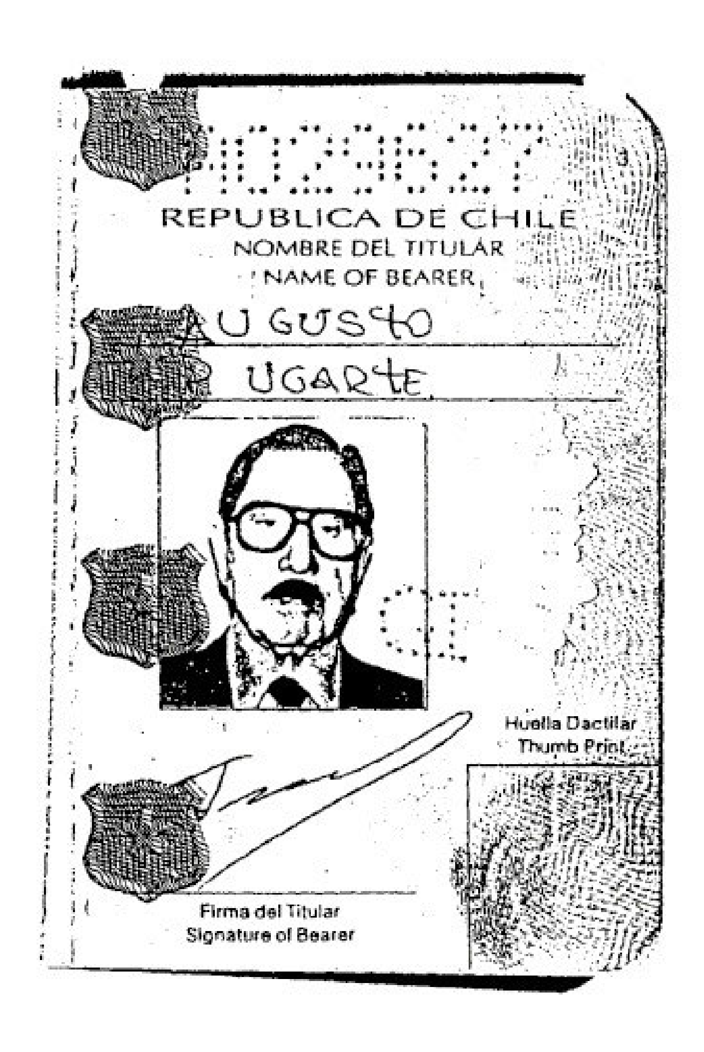
UGARTE



Huella Dactilar
Thumb Print

J. Ramon Ugarte

Firma del Titular
Signature of Bearer



Documento 5. Lista de variantes de nombres y alias de Augusto Pinochet utilizados para abrir cuentas bancarias secretas.

Disguised Pinochet Account Names

Given Name: Augusto Jose Ramon Pinochet Ugarte

-Augusto P. Ugarte

-A. Ugarte

-A.P. Ugarte

-Jose Pinochet

-Jose P. Ugarte

-Jose Ugarte

-Jose Ramon Ugarte

-J. Ramon Ugarte

-Jose R. Ugarte

-Daniel Lopez

Prepared by the Permanent Subcommittee
on Investigations, Minority Staff

Permanent Subcommittee on Investigations
APPENDIX #2

Agradecimientos

El 12 de septiembre de 1973, una compañera chilena de la escuela secundaria Pioneer de Ann Arbor (Michigan) llegó con lágrimas en sus ojos a la clase que teníamos a primera hora. Ella y los suyos habían pasado la noche en vela, tratando de ponerse en contacto telefónico con sus familiares en Santiago de Chile, mientras oían las noticias relativas al golpe de Estado en una emisora de onda corta. El profesor le preguntó qué estaba sucediendo en su país y ella describió una situación tan grave como desesperada: el presidente, Salvador Allende, había muerto; los militares habían tomado el poder, y la gente moría a balazos en las calles. El futuro de su hermosa nación se estaba viniendo abajo.

A aquella muchacha de 15 años, Eliana Teresa Loveluck, debo gran parte de mi interés por Chile durante los últimos cincuenta años, así como la labor que he realizado durante todo ese tiempo. Gracias a ella conocí el sufrimiento de miles de chilenos ante tamaña pérdida humana y nacional, así como la esperanza y la tenacidad política con que se dispusieron a combatir contra el general Pinochet y sus atrocidades. Fue a través de su experiencia, y gracias a la estrecha amistad que con ella compartía, que entendí que era responsabilidad mía, y de mi país, analizar y tratar de reparar lo que había hecho en Chile nuestro gobierno, que orquestó una campaña para tratar de impedir la llegada de Allende al poder y luego para desestabilizarlo, y que más tarde apoyó sin miramientos a la Junta Militar golpista que lo derribó, hasta bien entrados los ochenta.

En el camino me he encontrado con muchas personas cuya dedicación, coraje y compromiso me han ayudado a seguir adelante en la tarea de elaborar una historia completa del papel desempeñado por Estados Unidos en Chile. Todas forman parte de una vasta comunidad de activistas, figuras políticas y víctimas del régimen de Pinochet que se aglutinan en torno a las demandas por los derechos humanos y la restauración de la democracia en Chile.

Quienes sufrieron en primera persona la represión y el terrorismo pinochetistas, y aun así tuvieron fuerzas para levantarse y luchar por la justicia, la paz y la dignidad en Chile, han sido al mismo tiempo héroes y maestros para mí. Michael Moffitt me tomó bajo su protección en el Instituto de Estudios Políticos, donde me enseñó buena parte de lo que sé sobre investigación y escritura, así como sobre el valor de dedicarse al estudio de los asuntos de interés público. Isabel Letelier fue para mí un modelo de dignidad, gracia y fortaleza, consagrada como estaba, por entero, a la causa de los derechos humanos. Murray e Hilda Karpen se convirtieron en verdaderos profesores de la compasión y el compromiso con la justicia que compartían con su hija, Ronni. Verónica de Negri me enseñó el coraje por la dedicación más pura a la memoria de su hijo, mi joven amigo Rodrigo Rojas; Joyce Horman me mostró el verdadero significado de la resistencia y el amor de sus cincuenta años consagrados a resolver el asesinato de su esposo, Charles. De un modo similar, Olga Weisfeiler dio un giro nuevo a la palabra tenacidad en la búsqueda de su hermano desaparecido, Boris. Ha sido todo un honor haber pasado décadas aprendiendo y trabajando con personas tan notables.

He tenido la suerte de contar con muchos mentores durante el largo camino que ha supuesto la escritura de este libro. En el Instituto de Estudios Políticos, organización digna de encomio que nos hizo crecer, a mí y a otros muchos jóvenes, en lo político y lo profesional, el inimitable Saul Landau me encomendó el primer escrito que hice sobre Chile y se aseguró de que entendiese la necesidad de «agitar las aguas», como diría él. Robert Borosage me demostró —en muchísimas ocasiones— la paciencia que requiere la estrategia política cuando se pretende decir la verdad ante el poder. Richard Barnet me enseñó, de forma muy sencilla, el modo de reducir una historia compleja a una página con un estilo fácil de leer. Otros que también han compartido conmigo su sabiduría y su experiencia, educándome por medio de colaboraciones y encargos o escribiendo obras fundamentales sobre Chile que me han servido de guía son John Dinges, Joseph Eldridge, Seymour Hersh, Sam Buffone, Michael Tigar, Lynn Bernabei, Lawrence Barcella Jr., Taylor Branch, Patricia Derian, Mark Schneider, Robert Scherrer, George Lister, Abraham Lowenthal, James Petras, Morris Morley, Richard Fagen, Patricia Fagen, Richard Feinberg, Roger Burbach, Patricia Flynn, Steve Volk, Naúl Ojeda, Ariel Dorfman,

Enrique Kirberg, Sofía y María Angélica Prats, Juan Pablo Letelier, Sergio Bitar, Carlos Portales, Alicia Frohmann y José Zalaquett. Ellos, y muchos otros que me perdonarán por no mencionarlos acá, son los verdaderos pioneros de los trabajos publicados acerca de los derechos humanos en Chile y la política adoptada por Estados Unidos con respecto a Pinochet. He tratado de seguir sus pasos y les estaré eternamente agradecido por la fuerza de su obra.

Hay dos personas especiales que, a su manera, han hecho posible el presente volumen. La primera es Joan Garcés, abogado español, antiguo ayudante de Salvador Allende y tenaz defensor de la justicia, cuyos singulares empeños para lograr que Augusto Pinochet respondiese por sus crímenes hicieron posible su inesperada detención en Londres, en octubre de 1998. Garcés marcó el camino para todos los deseosos de que se haga justicia y que no se pierda la memoria; de no haber sido por su afán por hacer responsables de sus atrocidades a todos los que cometieron en Chile crímenes de lesa humanidad, Pinochet nunca habría sido arrestado, ni la administración Clinton se habría sentido obligada a levantar el secreto que pesaba sobre miles de documentos relativos a Chile. La segunda de estas dos personas es el director general del Archivo de Seguridad Nacional, Tom Blanton. Al generoso gesto de concederme el tiempo que necesitaba para poner punto final a este libro, añado el respaldo que me brindó en todo momento, y en especial cuando el proyecto debió aplazarse por la enfermedad que acabó con la vida de mi padre. Siempre agradeceré su infinita paciencia, así como la inquebrantable fe en el resultado de mi obra, mucho antes de que estuviese su redacción definitiva.

Fundado por el genio creativo de Scott Armstrong, bajo la astuta dirección de Tom, el Archivo de Seguridad Nacional se ha convertido en un extraordinario conjunto de historiadores forenses. Un equipo consagrado a exhumar la historia oculta de la política exterior de Estados Unidos, para ponerla a disposición del público y el debate informado, en calidad de prueba. Mis compañeros del Archivo merecen todo el reconocimiento del mundo, por su valiosa labor y por haber creado una maravillosa organización, un lugar de trabajo estupendo. Mi gratitud es mayor, si cabe, para aquellos que han contribuido a la elaboración de este libro: Bill Burr, que compartió conmigo los documentos que poseía sobre Henry Kissinger;

Carlos Osorio, cuya asistencia ha sido esencial para desvelar los secretos de la Operación Cóndor; Kate Martin, cuyo trabajo entre bastidores ha propiciado que se hiciesen públicos muchos documentos; Joshua Frens-String, Carly Ackerman, Marian Schlotterbeck, Rafael Cohen, Carla Humud, que me ayudaron con la investigación, y Sue Bechtel, que siempre sabía dónde estaba todo.

Asimismo, debo agradecer la ayuda de muchas otras personas en el transcurso de los últimos años. Pascale Bonnefoy me ha hecho beneficiario de una impagable colaboración al investigar desde Chile, facilitarme las traducciones de muchos documentos y ofrecerme su consejo. William LeoGrande dedicó buena parte de su tiempo a leer el original y comentarlo conmigo. Stacie Jonas y Sarah Anderson, del Instituto de Estudios Políticos, me ayudaron a encontrar escritos, recortes de periódicos y archivos de gran importancia. Reed Brody, David Sugerman y Richard Wilson me proporcionaron documentos relativos a la legislación internacional y al caso Pinochet, y me ayudaron a interpretarlos. Katrina vanden Heuvel me envió a Londres para informar a The Nation de los acontecimientos relativos al caso del dictador chileno, y David Corn, además de dejar que hiciese frecuentes incursiones en sus archivos en busca de documentos relacionados con la CIA y Chile, me acicateó para que acabase mi labor de una vez por todas.

Esta sección no estaría completa sin mi agradecimiento al gobierno de Bill Clinton por la gran cantidad de documentos que se sometieron al proyecto de Desclasificación de Chile. El presidente, su asesor de Seguridad Nacional, Sandy Berger, y su secretaria de Estado, Madeleine Albright, merecen un reconocimiento especial, y otro tanto puede decirse de Morton Halperin, miembro de la Oficina de Planificación Política, que promovió la idea de la entrega especial, y su ayudante Ted Piccone, que elaboró la hoja de trabajo de la Casa Blanca. Todos los integrantes del grupo de trabajo que puso en práctica las instrucciones del presidente en lo tocante al proyecto son dignos de nuestro reconocimiento por los miles de horas de trabajo que dedicaron a buscar, revisar y preparar los documentos para hacerlos públicos. Muchas, muchísimas gracias a su director, William Leary, y a Arturo Valenzuela, Peter Higgins, Hal Eisner, Robert Ward, Milton Charlton, Brad Weigmann, Carol Keeley, Nancy Smith, Gary Stern, Diana

Valderrama, Curtis Struble, David Kamerling, Paolo DiRosa, John Bellinger, Frank Machak, Normon Bouton, Lee Strickland y John Hamilton, así como a aquellos cuyos nombres desconozco, y a los funcionarios jubilados que, como Robert Steven y Frederick Smith, se reincorporaron de forma temporal para examinar muchos archivos. El embajador John O'Leary merece aparecer aquí por recomendar que el material quedara al alcance del público en un sitio web especial del Departamento de Estado. No menos puede decirse del diputado Maurice Hinchey, que instó a la CIA a divulgar información inédita sobre su actuación en Chile. Cada una de estas personas, y también los autores del informe Hinchey de la CIA, cuya identidad sigue siendo secreta, es digna de elogio por su patriótica contribución a la historia de la política externa de Estados Unidos y de los crímenes cometidos por Augusto Pinochet.

Vaya para la Fundación Ford mi más sincero agradecimiento por haber respaldado y alentado durante años el Proyecto de Documentación sobre Chile del Archivo de Seguridad Nacional. Pocas semanas antes de la detención del exdictador chileno, el entonces director de la oficina de la Fundación en Santiago, Alexander Wilde, concedió a nuestro proyecto una beca destinada a crear un sitio web para publicar los documentos desclasificados. Augusto Varas y Martín Abregú financiaron nuestra campaña destinada a lograr la revelación de estos y a gestionarlos una vez sacados a la luz. El apoyo de la Fundación Arca, sumado al de la Ford, ha hecho posible este trabajo. Y la Fundación Coyote tiene mi gratitud eterna por apoyar el trabajo para esta nueva edición por los 50 años del golpe de Estado.

He de quitarme el sombrero ante los profesionales de The New Press, cuya labor hace realidad estos libros. André Schiffrin y mi editora, Diane Wachtell, tuvieron una paciencia infinita ante los retrasos en la entrega del original. Beth Slovic y Sarah Fan se encargaron de todo el proceso de producción del libro; Jay Crowley y Kelly Too hicieron posible la reproducción de los documentos, y Brian Lipofsky y Andrew Hudak ultimaron el texto en Westchester Book Composition. También agradezco la labor de Julie McCarroll, quien se encargó de los aspectos relacionados con la mercadotecnia del libro.

Ahora tengo que agradecer a Editorial Catalonia y Un día en la vida, y a Andrea Insunza y Javier Ortega por ayudarme a cumplir un sueño final de mi carrera: una edición chilena de Pinochet desclasificado para la conmemoración de los cincuenta años del golpe de Estado de 1973. Su talento, paciencia y compromiso han sido un tesoro para mí. Es, además, un gran honor contar con las palabras de la prestigiosa periodista Mónica González Mujica en la presentación de esta edición, como ha sido un honor y un placer colaborar con ella en las décadas pasadas.

Gracias a David León Gómez por haber traducido estos textos.

Por último, me gustaría dar un fuerte abrazo escrito a mi familia por el inigualable apoyo que me ha ofrecido durante los últimos años. Mi queridísima compañera, Gabriela Vega, cedió la mesa de su comedor y la de su cocina para que pudiera trabajar este libro. Gracias a ella, mi vida ahora es mucho más amplia y completa que cuando salió la edición inicial de este trabajo hace veinte años. Muchas gracias también a mi madre, Joyce Kornbluh, cuyos firmes pasos de historiadora han guiado mi trabajo. A mis hermanas, Jane y Kathe; a mis tíos Sol y Betty Kornbluh, por ser tan amables y generosos durante la evolución de esta obra. Y a mi primo Martin, por su curiosidad e interés en mi trabajo.

Este libro se ha inspirado, en muchos sentidos, en mi maravilloso hijo, Gabriel Kornbluh, en quien se aúnan, dada su condición de medio chileno, los acervos respectivos de los dos países que dominan un libro que, en el fondo, he escrito para él. Gabe, tómalo como mi contribución personal a tu educación en la historia de las dos naciones de las que formas parte y que, a su vez, forman parte de ti. Vas a desempeñar un papel importante en el futuro de ambas, un futuro que, con un poco de suerte, será mucho más positivo que el pasado.

Originalmente, este libro estaba dedicado a mi padre, Hyman Kornbluh, que murió el 25 de mayo de 2001, mientras yo aún lo estaba escribiendo. Resulta difícil expresar con palabras el modo como me condujo, durante mi época de formación y mi edad adulta, al lugar en que se hizo posible este libro. Sin él, no habrían formado parte de mi trabajo la conciencia, el compromiso, la indignación ni la percepción de la injusticia.

Esta vez, quiero dedicar esta edición chilena del libro a la mujer que me entreabrió la puerta al horror de lo que ocurría en su patria el día después del golpe, hace casi justo medio siglo. Es gracias al impacto personal y profesional de Eliana Loveluck en mi vida que llevo a Chile en mi corazón, así como a ella y a tantos otros hijos extraordinarios de esta tierra. Ahora y siempre.

Santiago de Chile.

27 de enero de 2023

Notas

1. La «fórmula del caos»: El Proyecto FUBELT

[1] CIA, memorando, «Genesis of Project FUBELT», 16 septiembre 1970.

[2] CIA, informe con el sello de «Secreto», «[Deleted] Situation Report # 1», 17 septiembre 1970.

[3] Según informó Kissinger a Nixon, establecer un «destacamento especial de acción» era una de las necesidades prioritarias para sortear el obstáculo de la «resistencia burocrática», y en especial la que pudiese ofrecer un Departamento de Estado apocado. Véase el memorando para el presidente «Chile», 17 septiembre 1970.

[4] FU era el nombre en clave que había asignado a Chile la CIA, en tanto que belt («cinturón») parece aludir a las operaciones de estrangulamiento político y económico que trataba de efectuar la Agencia para asegurarse de que Allende no se hiciera nunca con el cargo de presidente de Chile. En 1975, cuando se mostró el documento al Comité Church, el nombre en clave seguía clasificado como secreto.

[5] Abigail McCarthy describe los preparativos del encuentro en su libro Private Faces, Public Places, Doubleday, Nueva York, 1972.

[6] CIA Activities in Chile, p. 3.

[7] Véase U.S. Congress, Senate, Select Committee to Study Government Operations with Respect to Intelligence Activities, Covert Action in Chile, 1963-1973, GPO [Government Printing Office], Washington, 4 diciembre 1975, p. 15.

[8] House Committee on Foreign Affairs, Subcommittee on National Security Policy and Scientific Development, Report of the Special Study Mission to Latin America, Washington D.C., 1970, p. 31.

[9] La carta de Korry se reproduce en U.S. Congress, Senate, Select Committee to Study Government Operations with Respect to Intelligence Activities, op. cit., p. 118.

[10] Conversación telefónica de Kissinger con Donald Kendall, 14 septiembre 1970. Este documento es parte del Archivo de Kissinger, colección Telcon. Fue obtenido por mi organización, el Archivo de Seguridad Nacional, amparado en la Ley de Libertad de Información.

[11] Id., Alleged Assassination Plots Involving Foreign Leaders, GPO, Washington, 20 noviembre 1975, p. 228.

[12] Este cablegrama aún no ha salido a la luz pública; el embajador Korry puso el texto a mi disposición en 1978.

[13] El informe de Korry llevaba fecha del 11 de agosto de 1970 y tenía a John Crimmins por destinatario.

[14] Las conclusiones del Memorando 97 aparecen citadas en Alleged Assassination Plots, op. cit., p. 229.

[15] Este anexo secreto no lleva fecha, pero debió de escribirse alrededor del 9 o el 10 de agosto de 1970.

[16] Al citar las «graves» desventajas de este «recurso extremo», los miembros del Departamento de Asuntos Interamericanos recomendaron al vicesecretario U. Alexis Johnson que se opusiera a «la adopción [tachado], habida cuenta de las pocas posibilidades de éxito y los riesgos tan elevados a que se expone». Véase Charles Meyer a Alexis Johnson, «NSSM 97: Extreme Option—Overthrow Allende», 17 agosto 1970.

[17] CSN, minuta de una reunión secreta, «Minutes of the Meeting of the 40 Committee, 8 September 1970», 9 septiembre 1970.

[18] Embajada de Estados Unidos, cablegrama secreto: «Ambassador's Response to Request for Analysis of Military Option in Present Chilean Situation», 12 septiembre 1970.

[19] CIA, cablegrama secreto del cuartel general (órdenes iniciales para examinar la posibilidad de un golpe de Estado militar), 9 septiembre 1970.

[20] No hubo de pasar mucho antes de que pidiesen a Hecksher que se guardara sus opiniones acerca de la trama del golpe de Estado. A finales de septiembre, le ordenaron que se retirase a la oficina central de la CIA y abandonara toda objeción. El 7 de octubre recibió una notificación en la que el jefe del destacamento especial, David Atlee Phillips, declaraba que los cablegramas del centro de operaciones en Santiago «no deberían contener análisis y argumentaciones, sino tan solo informes relativos a las acciones llevadas a cabo».

[21] Este memorando enviado a William Broe demuestra que al menos uno de los analistas de la CIA comprendió los diversos matices de la realidad política de Chile y el resto de América Latina, y así lo comunicó a los altos funcionarios. Véase «Chilean Crisis», 29 septiembre 1970.

[22] Vaky a Kissinger, memorando de acción del CSN, «Chile—40 Committee Meeting, Monday—September 14», 14 septiembre 1970.

[23] El vicesecretario para Asuntos Interamericanos, John Crimmins, se opuso a esta idea por considerarla arriesgada e innecesaria según la relación cronológica establecida por la CIA en «Policy Decisions Related to Our Covert Action Involvement in the September 1970 Chilean Presidential Election». Korry insistió, y el 22 de junio escribió en un cablegrama remitido al Departamento de Estado: «Si [Allende] se hiciese con el poder, ¿qué respuesta daríamos a quienes nos preguntasen qué hemos hecho?».

[24] Korry consideraba que fomentar de forma directa un golpe de Estado podría comportar graves riesgos diplomáticos para Estados Unidos. Si el elemento militar iba a actuar, prefería que fuese «una sorpresa» para Estados Unidos. Con todo, excluirlo de la trama de la vía II dio lugar a otros contratiempos. Así, por ejemplo, cuando Hecksher quiso servirse de su

ayuda para hacer llegar a Frei un mensaje relativo a una solución militar, la oficina central le advirtió que tal acción «equivaldría a hacer[lo] actuar en calidad de agente involuntario para llevar a efecto la vía II, de la que no es ni debe ser conocedor».

[25] Los diarios e informes de situación del destacamento especial permanecieron en secreto treinta años más, hasta que, en noviembre de 2000, vieron la luz algunos de ellos gracias al proyecto de Desclasificación de Chile, si bien es cierto que están muy censurados.

[26] CIA, cablegrama, 29 septiembre 1970.

[27] Véase CIA, «Special Military Situation/Analysis Report», 7 octubre 1970.

[28] CIA, cablegrama secreto del cuartel general (anteproyecto para fomentar el clima propicio para un golpe de Estado), 27 septiembre 1970.

[29] Véase Departamento de Estado, «Suggestions that Require Action. Made by Ambassador Korry on September 24», sin fecha.

[30] Véase el informe del Subcomité sobre Empresas Multinacionales: Subcommittee of Multinational Corporations, The International Telephone and Telegraph Company and Chile, 1970-1971, GPO, Washington, 1973, p. 9.

[31] Este documento es uno de los que fueron revelados al columnista Jack Anderson en 1972 y dieron a conocer por vez primera las operaciones secretas efectuadas por la CIA en colaboración con la ITT contra Allende. El descubrimiento dio pie a la primera investigación del Congreso de Estados Unidos en torno a la intervención encubierta del país en Chile, dirigida por el Subcomité sobre Empresas Multinacionales del senador Frank Church. Este organismo elaboró un extenso informe en 1973: Subcommittee of Multinational Corporations, The International Telephone and Telegraph Company and Chile, op. cit. Todos los papeles de la compañía fueron publicados por The Bertrand Russell Peace Foundation,

The ITT Memos, Subversion in Chile: A Case Study of U.S. Corporate Intrigue in the Third World, Spokesman Books, Nottingham, 1972.

[32] Véase «Memcons of Meetings between the President and Heath, Brosio», memorando de Winston Lord a Henry Kissinger que deja claro que la transcripción de esta conversación está «tomada de sus cintas [de usted]», con lo que se refiere a las grabaciones que Kissinger hacía, al parecer, en un dictáfono después de cada uno de los encuentros que mantenía con el presidente.

[33] Todos estos pasos aparecen recogidos en un cablegrama confidencial de Alexis Johnson transmitido el 10 de octubre de 1970 y destinado exclusivamente al embajador Korry.

[34] CIA, cablegrama secreto del cuartel general (anteproyecto para fomentar el clima propicio para un golpe de Estado), 27 septiembre 1970.

[35] Estas indicaciones provocaron una respuesta de incredulidad por parte del director de la base en Santiago. «Nos resulta imposible coincidir con el razonamiento del cuartel gral., según el cual puede urdirse en el ámbito público un clima que se aproxime a una situación pregolpista mediante la prensa [tachado] o a través de rumores, sea cual fuere el método de propagación». Pese a estas protestas, Phillips ordenó a Hecksher que siguiera adelante.

[36] CIA, informe secreto de situación, «Track II», 10 octubre 1970.

[37] CIA, cablegrama secreto (directrices urgentes del director Helms para estimular una solución militar), 7 octubre 1970.

[38] Hecksher a oficina central, «[Solución Viaux]», 10 octubre 1970. Durante una prolongada reunión celebrada con un miembro poderoso del cuerpo nacional de policía chileno el 8 de octubre, Hecksher había manifestado que, una vez que los militares abandonaran su postura constitucionalista, «se armará un revuelo terrible de soldados luchando contra soldados». El oficial preguntó al director de la base de la CIA en Chile si tal situación era deseable, y Hecksher contestó que «al gobierno de

Estados Unidos le daba igual, siempre que el caos resultante impidiera a Allende hacerse con la presidencia».

[39] CIA, cablegrama 628, 8 octubre 1970, según se cita en el informe senatorial Alleged Assassination Plots, op. cit., p. 241.

[40] CIA, cablegrama de Broe a Hecksher, 10 octubre 1970.

[41] Phillips y Broe a base chilena, 13 octubre 1970.

[42] Hasta ahora no se había dado a conocer la fecha de este encuentro. Cuando se redactó el informe del Comité Church, en 1975, se negó a los investigadores del Senado el acceso a los registros de visitas del Despacho Oval de Nixon y Karamessines no recordaba qué día se reunió con el presidente —ni pudo proporcionar documentación alguna al respecto—. Para la elaboración de este libro, se me ha permitido consultar el diario de Nixon y el registro de visitas del despacho.

[43] El embajador Korry me habló por vez primera de su sensacional reunión con el presidente Nixon en mayo de 1978, cuando lo entrevisté para la tesis de un compañero. También refirió la anécdota a Seymour Hersh, quien la publicó en The Price of Power: Kissinger in the Nixon White House, Summit Books, Nueva York, 1983. De forma más reciente, en agosto de 2001, repitió la historia en una larga entrevista para 60 Minutes y con el realizador alemán de documentales Willi Huisman.

[44] CIA, informe secreto, «The Coup that Failed: The Effects on Allende and his Political Posture, with Special Emphasis on his Stance Before U.S. Positions, Moderate or Tough», 15 octubre 1970.

[45] CIA, cablegrama secreto de la oficina central (política firme y continua de derrocar a Allende por medio de un golpe de Estado), 16 octubre 1970.

[46] Kissinger hizo que un secretario presenciase cada una de sus conversaciones telefónicas y tomase notas para después transcribirlas. Cuando dejó el puesto a principios de 1977, se llevó consigo todas las «telcons» que habían dejado constancia de su actuación en calidad de asesor

de Seguridad Nacional y secretario de Estado, y se justificó afirmando que formaban parte de sus papeles privados. En 2001, la organización a la que pertenezco, el Archivo de Seguridad Nacional, entabló una demanda contra el Departamento de Estado y los Archivos Nacionales por negligencia ante la incapacidad de recuperar los documentos gubernamentales que obraban en poder de Kissinger. El resultado del pleito lo obligó a devolverlos al Ejecutivo, aunque en junio de 2003 aún no se había levantado el secreto que pesaba sobre ellos. Con todo, cierta fuente que ha tenido acceso a ellos me ha revelado el contenido de la conversación mantenida por Kissinger el 15 de octubre con Nixon.

[47] Este documento, el primero de la estrategia de Estados Unidos para desestabilizar al gobierno de la Unidad Popular de Allende, se describe de forma más detallada en el capítulo 2 (véase nota 1).

[48] CIA, cablegrama secreto de la base en Santiago (informe relativo al plan de secuestrar al general René Schneider e iniciar un golpe de Estado militar), 19 octubre 1970.

[49] En la oficina central de la CIA creían sin duda en la inminencia de un golpe de Estado. El 19 de octubre, Broe y Phillips cablegrafiaron a Hecksher para ordenarle que de ningún modo pusiese al corriente del «inminente golpe» a Wimert o al embajador Korry. «En caso de que se lleve a cabo, Hecksher, director de la base en Santiago, debe parecer sorprendido y negarse a contestar todas las preguntas que se le formulen».

[50] CIA, cablegrama secreto de la oficina central (envío de metralletas a la base en Santiago para el plan de secuestro), 18 octubre 1970.

[51] La descripción del asesinato de Schneider está basada en informes de la policía chilena y apareció publicada por vez primera por Seymour Hersh en op. cit., p. 290.

[52] En el primer informe especial relativo a la muerte de Schneider, la CIA señalaba: «Por su propia seguridad personal, el grupo de Valenzuela tendrá que seguir adelante con su plan, aunque Frei se resista a sus empeños». El segundo informe, redactado al día siguiente, observaba que, desde ese

momento, los conjurados no podrían permitir que Allende llegase a la presidencia, porque, a la postre, este hecho se traduciría en el arresto de todos ellos. «Hasta el momento, nadie había considerado en serio el asesinato [de Allende], pero lo cierto es que la muerte de Schneider parece no haber dejado muchas alternativas. Los conspiradores están desesperados, y pueden tratar de cometer esta acción aun sin disponer de la pericia necesaria». Véase «Machine Gun Assault on General Schneider», 22 octubre 1970, y «A Miscellaneous Thought», 23 octubre 1970.

[53] La existencia de estas listas se desconocía antes de que se levantara el secreto que pesaba sobre su contenido el 13 de noviembre de 2000. Todavía están muy censuradas, y los nombres de casi todos los agentes estadounidenses y personal militar chileno aparecen tachados. Si en algún momento se decide revelarlas por entero, se proporcionará un documento muy completo acerca de los contactos mantenidos con los conspiradores golpistas chilenos durante los últimos meses de 1970.

[54] Wimert refirió a Seymour Hersh que fue al domicilio del general Valenzuela para recuperar los cincuenta mil dólares que había facilitado para la operación y, cuando el militar chileno se negó a devolverle los fondos, tal como se describe en la extraordinaria escena revelada por Hersh en The Price of Power, sacó su pistola y le asestó «un solo golpe con ella, tras lo cual fue a buscarlos». Véase Hersh, op. cit., pp. 289 y 293.

[55] Korry, de hecho, preguntó a Heckshер si la Agencia había estado «envuelta en actividades de algún tipo» que justificasen «las acusaciones de que [Wimert] está implicado en el asesinato de Schneider». Acatando las órdenes de mentir al embajador estadounidense, Heckshер respondió, según el informe fechado el 26 de octubre que hizo llegar a Langley, que «sin duda podrían hacerse acusaciones, pero ya que el puesto de operaciones en Santiago no tiene nada que ver en el asunto, el director de esta no creía que pudiese demostrarse nada».

[56] Mientras repasaba los documentos relativos a la vía II después de que estallara el escándalo, Kissinger parecía muy consciente de que la orden que había dictado a la CIA se refería específicamente al abandono de la conspiración de Viaux, más que al de toda la vía II. Según la transcripción

secreta de cierta conversación, elaborada por la Casa Blanca el 9 de julio de 1975 y revelada en fecha reciente, Kissinger aseguró en privado al presidente Gerald Ford que no se hallaban en mala situación «en este asunto chileno. Existe un documento que demuestra que puse fin a los contactos que manteníamos con el grupo vinculado al secuestro».

[57] A la declaración de Kissinger, que aún está clasificada como secreta, se hace referencia en Alleged Assassination Plots, op. cit., pp. 247-252.

[58] Conversación telefónica de Kissinger con Nixon, 23 octubre 1970. Este documento es parte del Archivo de Kissinger, colección Telcon. Fue obtenido por mi organización, el Archivo de Seguridad Nacional, amparado en la Ley de Libertad de Información.

[59] Durante la declaración secreta que hizo ante el Comité Church el 15 de agosto de 1975, Haig dejó bien claro que se había visto obligado a compartir con Kissinger toda la información relativa a la vía II con que contaba la CIA. «En aquel momento —atestiguó— consideré que no tenía libertad ninguna para hacer otra cosa que transmitirle lo que me había sido dado». Véase Alleged Assassination Plots, op. cit., p. 250.

[60] CIA, cablegrama secreto de la base en Santiago (informe relativo al plan de secuestrar al general René Schneider e iniciar un golpe de Estado militar), 19 octubre 1970.

[61] Una entrada anterior del diario de la vía II, fechada el 7 de octubre de 1970, señalaba que Viaux «ha estado en contacto con cierto número de oficiales del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y de Carabineros de cuyo respaldo se había beneficiado supuestamente.

[62] CIA, memorando secreto de John Horton acerca de la conversación mantenida con un agente de bandera falsa, «Conversation with Bruce MacMaster—Chile Operations», 18 febrero 1971.

[63] Los documentos de la CIA que dan fe de este pago —solicitudes, autorizaciones y justificantes de transferencias bancarias, así como la identidad de los asesinos que recibieron el dinero— siguen siendo secretos.

[64] Departamento de Estado, informe para Henry Kissinger, «Message to Chilean President Frei on Attempted Assassination of Army Commander», 22 octubre 1970.

2. Desestabilización de la democracia: Estados Unidos y el gobierno de Allende

[1] Casa Blanca, memorando secreto de conversación, «NSC Meeting—Chile (NSSM 97)», 6 noviembre 1970.

[2] Kissinger a Nixon, memorando secreto de acción, «Chile—Immediate Operational Issues», 18 octubre 1970. El borrador es obra de Viron Vaky, ayudante de Kissinger, quien lo redactó en la fecha citada para remitirlo poco después al presidente, y se debió a la acuciante necesidad de que Nixon tomase ciertas decisiones acerca de las recomendaciones del embajador Korry, quien apuntó la conveniencia de comunicarse con los miembros entrantes del gobierno de Allende —medida a la que se opuso el presidente aconsejado por Kissinger—.

[3] El texto que recoge las observaciones de Ford se publicó en The New York Times, 17 septiembre 1974. De él se habla por extenso en el capítulo 4.

[4] El secretario de Estado, de hecho, se las arregló para cambiar la reunión del CSN de la fecha inicial del 5 de noviembre al día siguiente, con la intención de tener tiempo para presionar a Nixon. La redacción original del informe que ofreció al presidente, obra de Viron Vaky, no incluía ninguna referencia a estas presiones a fin de que el Consejo para la Seguridad Nacional entendiese que la coexistencia resultaba inaceptable. En una segunda redacción, Kissinger hizo que Vaky añadiese los pasajes que recalcaban la importancia de la decisión a la que se enfrentaba Nixon y la necesidad de evitar la «deriva» hacia el modus vivendi. Véase la transmisión original del «texto del memorando destinado al presidente para la reunión del CSN», efectuada por Vaky y enviada a Kissinger, 3 noviembre 1970.

[5] «HAK Puntos de Charla sobre Chile, Reunión NSC—jueves, 6 de noviembre», p. 4.

[6] Véase el memorando informativo elaborado para el encuentro que mantuvo sobre Chile el CSN el jueves 5 de noviembre de 1970 por el director en funciones de la ARA, Robert Hurwitch, y Arthur Hartman, de la Oficina de Coordinación de Políticas.

[7] CSN, Memorando 93 sobre Seguridad Nacional (ultrasecreto), «Policy Towards Chile», 9 noviembre 1970.

[8] El general George Lincoln, director de la Oficina de Preparación para Emergencias, advirtió al presidente que deshacerse de las reservas de cobre de Estados Unidos contravendría la ley a menos que se hiciese para estabilizar, y no para desestabilizar, su precio en el mercado.

[9] Memorando de Haig a Tom Huston, 22 octubre 1970.

[10] Véase el informe secreto redactado por Kissinger para el presidente, que llevaba adjunto el Memorando 93. El documento no está datado, pero fue escrito poco después del 9 de noviembre, fecha en que se puso fin al Memorando.

[11] Véase Covert Action in Chile, op. cit., p. 35.

[12] Las estadísticas económicas relativas al descenso experimentado por la ayuda y los préstamos destinados a Chile se recogen en Covert Action in Chile, op. cit., pp. 33-34.

[13] «Status Report on Chile», 9 noviembre 1970, p. 4.

[14] Departamento del Tesoro, John Connally a Nixon, «Memorandum for the President» (secreto), 15 enero 1972 [con anotaciones de Richard Nixon, de quien aparecen consignadas las iniciales].

[15] CIA, «Covert Action Program in Chile», 17 noviembre 1970.

[16] Este análisis de dos páginas procedente de la división secreta de la CIA tiene fecha del 21 de octubre, víspera del asesinato de Schneider, y ponía de relieve otros dos puntos fundamentales: en primer lugar, Allende no trataría de «hacer de Chile un satélite de los soviéticos (…) o someterlo a su dominación; en segundo lugar, su subida al poder tendría un influjo nada desdeñable y posiblemente positivo sobre la insurrección revolucionaria latinoamericana, ya que socavaría la temida influencia de la Cuba castrista. «Lo más probable es que la elección de Allende resulte en detrimento del prestigio de quienes emplearon medios revolucionarios para obtener el poder en Cuba y China», observaba su autor.

[17] Véase «Minutes of the Meeting of the 40 Committee, 13 November 1970», con fecha del 17 de noviembre de 1970. Broe respondió que había «comenzado la adquisición».

[18] CSN, acta secreta, «Minutes of the Meeting of the 40 Committee, 19 November 1970/Chile-Covert Action Program», 10 diciembre 1970.

[19] En la versión de estas minutas de la reunión del Comité 40 redactada por la CIA aparece borrada la mayor parte de la sección d. Sin embargo, en la que conservaba el Departamento de Estado, idéntica por lo demás, el pasaje citado se da sin censura alguna, a excepción de la cantidad de escudos en que consistían los fondos de contingencia.

[20] Véase el cablegrama especial de Korry, destinado al director de la División del Hemisferio Occidental de la CIA, William Broe, y al vicesecretario Meyer, basado en las conversaciones mantenidas con «oficiales clave» del PDC y fechado el 4 de diciembre de 1970.

[21] Las fechas y descripciones de lo que aprobó el Comité 40 pueden consultarse en «Chronology of 40 Committee Action on Chile», documento sin datar que vio la luz junto con otros archivos de la National Archives and Records Administration (NARA) el 13 de noviembre de 2000.

[22] Covert Action in Chile, op. cit., p. 31.

[23] CSN, memorando secreto de acción para Henry Kissinger, «40 Committee Meeting, September 9, 1971—Chile», 8 septiembre 1971.

[24] Las discusiones relativas a la financiación de El Mercurio aparecen recogidas en la relación cronológica de la actuación en Chile del Comité 40, bajo la entrada correspondiente al 9 de septiembre de 1971.

[25] Una lectura detenida de los documentos de la Casa Blanca que han sido revelados demuestra que el Comité 40 otorgó en octubre de 1971 una segunda asignación a El Mercurio. Por razones que nadie ha explicado, la cuantía y los detalles de esta se hallan sometidos a una censura total. De cualquier modo, es posible que la financiación encubierta de la cual se benefició el diario alcanzase una cifra cercana a los dos millones de dólares.

[26] Véase Shackley a Helms, «Request for Additional Funds for El Mercurio», 10 abril 1972. Shackley sustituía a William Broe, a quien habían ascendido nada menos que a inspector general de la CIA. Para una extensa biografía de la legendaria trayectoria protagonizada por Shackley en la Agencia, incluida su implicación en el período de operaciones secretas en Chile que nos ocupa, véase David Corn, Blond Ghost: Ted Shackley and the CIA's Crusades, Simon & Schuster, Nueva York, 1994.

[27] El desglose de los conceptos a los que se destinarían estos 965.000 dólares aparece tachado por entero en los documentos de la CIA y en un memorando del CSN remitido a Kissinger con fecha del 10 de abril de 1972. Sin embargo, un segundo memorando, calificado de alto secreto, procedente de su ayudante Peter Jessup y fechado el mismo día, «Chile—Request for Additional Funds for El Mercurio», describe el modo como se iban a repartir los fondos.

[28] CSN, memorando de acción, «40 Committee Meeting—Chile», 10 abril 1972. Este documento secreto de Jorden a Kissinger llevaba el sello de «Canal externo» para evitar que pudiese ser distribuido a archivos que no fuesen el del secretario de Estado.

[29] Véase el documento 4 del capítulo 4.

[30] Véase el cablegrama del director de la base de la CIA en Santiago al de la División del Hemisferio Occidental, «Limitations in Military Effort», 12 noviembre 1971. La oficina central dejó bien claro que, dado el trágico final de Schneider, la base santiaguina no disponía aún del permiso para tratar de impulsar de forma directa un golpe de Estado.

[31] CIA, informe secreto especial de inteligencia, «Preliminary Planning for an Eventual Military Move Against the Chilean Government», 9 noviembre 1971.

[32] Véase el comunicado del director del FBI a Henry A. Kissinger, «Foreign Political Matters—Chile», 29 marzo 1972.

[33] CIA, cablegrama secreto (cena con el general Pinochet), 6 agosto 1971.

[34] CIA, cablegrama secreto (opinión del general Pinochet sobre Allende), 27 septiembre 1972.

[35] CIA, acta secreta, «Meeting on Current Chilean Situation at Department of State, 1630–1830, 17 October 1972», 18 octubre 1972, pp. 1-3 (de un total de 5).

[36] James Gardner, uno de los integrantes de la Oficina de Información e Investigación del Departamento de Estado que asistieron a la reunión, redactó un detallado memorando que recoge los datos aquí censurados. Según anotó, los funcionarios estadounidenses consideraban poco probable que se solicitase a Estados Unidos «ayuda para preparar o ejecutar un golpe de Estado». Con todo, parecía más fácil «que, ante la perspectiva de una acción así, nos pidan garantías de que brindaremos nuestro respaldo al nuevo régimen una vez instaurado en el poder». En el transcurso de la reunión, tal como recogió Gardner, los representantes de la CIA declararon que «el grado y la calidad del apoyo estadounidense serían tan importantes para [los militares chilenos] que [estos] considerarían esencial cualquier promesa generosa y específica de ayuda por parte de EE.UU.». Véase «U.S. Reaction to Possible Approach by Chilean Coup Plotters», 30 octubre 1972.

[37] Este extraordinario «memcom», «Meeting with President Emilio Garratuzu Medici of Brazil on Thursday, December 9, 1971, at 10:00 AM in the President's Office», fue desclasificado inicialmente por el Departamento de Estado como parte de la serie Relaciones exteriores de Estado Unidos. El Archivo de Seguridad Nacional publicó este documento en su website el 16 de agosto de 2009 y lo compartió con los principales medios de comunicación en Chile, Brasil y Estados Unidos. Ver «Brazil Conspired with U.S. to Overthrow Allende» at: https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB282/index.htm.

[38] Véase Roberto Simon, El Brasil de Pinochet, LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2023. El libro también ha sido publicado en portugués con el título O Brasil Contra A Democracia: A Dictadura, O Golpe No Chile E A Guerra Fria Na America Do Sul.

[39] Véase la publicación especial del Archivo de Seguridad Nacional sobre el libro de Simon: https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/chile/2021-04-01/brazil-aided-abetted-overthrow-salvador-allende-chile.

[40] Véase la publicación del Archivo de Seguridad Nacional «Brazil Conspired with U.S. to Overthrow Allende» en: https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB282/index.htm.

[41] Los registros del Servicio Secreto de Inteligencia de Australia sobre Chile fueron obtenidos tras las persistentes solicitudes de información pública realizadas por Clinton Fernandes, ex analista de inteligencia del Ejército australiano y profesor de estudios políticos internacionales en la Universidad de Nueva de Gales del Sur, en Canberra. El gobierno australiano se negó a publicar cualquier documento operativo sobre las actividades de espionaje del MO9 en Chile o sobre sus comunicaciones con la CIA, pero un tribunal liberó algunos de los registros más burocráticos sobre la instalación y el cierre de la estación en Santiago de la inteligencia australiana. El profesor Fernandes le entregó estos registros a mi oficina a mediados de 2021 y el Archivo de Seguridad Nacional los publicó por primera vez para el 48.o aniversario del golpe de Estado en Chile. Véase «Australian Spies Aided and Abetted CIA in Chile», 10 septiembre 2021.

https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/chile/2021-09-10/australian-spies-aided-and-abetted-cia-chile.

[42] National Security Archive, «Australian Spies Aided and Abetted CIA in Chile», 10 septiembre 2021. https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/chile/2021-09-10/australian-spies-aided-and-abetted-cia-chile.

[43] Jack Anderson, «Memos Bare ITT Try for Chile Coup», The Washington Post, 21 marzo 1972, p. B13.

[44] Un antiguo miembro del Comité me ha proporcionado algunos de sus documentos internos.

[45] Véase Subcommittee of Multinational Corporations, op. cit.

[46] Las catorce páginas de que se componía la transcripción de la rueda de prensa celebrada por el Departamento de Estado el 23 de marzo circularon en forma de cablegrama con el título de «Noon Briefing Session re Chile-ITT Allegations».

[47] Esta conversación, aparecida en las cintas de Nixon que se han hecho públicas y que se encontraban en los Archivos Nacionales del College Park, en Maryland, me ha sido proporcionada por el archivero John Powers. En la época en que salieron a la luz los documentos de la ITT, el personal que trabajaba a las órdenes de Kissinger se hallaba preocupado en extremo por la posibilidad de que Korry tirase el mantel después de abandonar la embajada en Santiago a mediados de 1971. En un memorando secreto remitido a Kissinger, Haig lo advertía de que el secretario de estado William Rogers estaba considerando la idea de despedir a Korry y obligarlo a retirarse del servicio en el extranjero. Este hecho, tal como hacía notar Haig, podía suponer un problema: «Conoce muchos secretos, incluidas las órdenes, de carácter en extremo delicado, que le comunicó el presidente tanto de forma directa como a través de usted. No se me ocurre nada que pueda ser más embarazoso para el gobierno que hacer salir al mundo exterior sin un medio de vida a un antiguo columnista que se ha apartado del presidente y de usted (…) Esto solo puede desembocar en revelaciones susceptibles de ser utilizadas por una oposición democrática sedienta hasta

límites que nunca hemos llegado a imaginar siquiera». En consecuencia, aconsejaba a Kissinger que intercediera a fin de asegurarse de que ofrecían a Korry otro puesto que «garantizase» su lealtad. Véase Haig a Kissinger, «Ambassador Korry», 10 marzo 1971.

[48] En abril de 1972, el presidente de la OPIC, Bradford Mills, preguntó a la CIA si las actividades llevadas a cabo en Chile por la ITT se debían a una petición de la Agencia y si esta sabía lo que aquella había hecho «para evitar que Allende llegara al poder y conformase gobierno en 1970». Estas cuestiones se discutieron con el director de la CIA, Richard Helms, quien autorizó una serie de respuestas tan poco ciertas que rayaban en el descaro: «La ITT no hizo nada a petición nuestra. No sabemos qué actividades [emprendió la compañía para obstruir a Allende]». Estos engaños están recogidos en un memorando hecho público que estaba dirigido al asesor legal de la CIA y tenía por título «CIA's Replies to Queries from the Overseas Private Investment Corporation in Connection with the International Telephone and Telegraph Insurance Claim», 31 octubre 1974.

[49] Véase el memorando de la conversación de Hanke, «Meeting with Hal Hendrix», 11 mayo 1972. David Corn, que descubrió este documento, lo publicó por vez primera en Blond Ghost, op. cit. p. 245.

[50] El Departamento de Justicia presentaría más tarde contra Gerrity y Berellez cargos de perjurio, conspiración y obstrucción a la justicia. Antes del juicio, sin embargo, ambos amenazaron con revelar secretos relativos a las operaciones de la CIA en Chile si se les procesaba y lograron así que el fiscal general del gobierno de Carter, Griffin Bell, retirase los cargos que pesaban contra ellos.

[51] Al final de su comparecencia, el senador Church tenía la sospecha de que Meyer no había sido sincero. «Espero que no tome esto como una ofensa personal», le espetó, «pero, habida cuenta de las declaraciones que se han prestado bajo juramento ante nosotros, resulta evidente que alguien está mintiendo. Debemos tomar en consideración, muy seriamente, la posibilidad de que se esté cometiendo perjurio». La declaración completa de Meyer está recogida en U.S. Congress, Senate, Committee on Foreign Relations, Subcommittee on Multinational Corporations, Multinational

Corporations and United States Foreign Policy, 1ª parte, 93er Congreso (20 marzo-4 abril 1973), GPO, Washington, 1973, pp. 398-428.

[52] Helms era consciente de que los artículos de Anderson iban a crear serios problemas a la CIA. Cuando supo que su publicación era inminente, se las ingenió para reunirse en secreto con el autor el 17 de marzo, a fin de «disuadir al Sr. Anderson de publicar cierta información clasificada como secreta», según unas anotaciones relativas al proceso por perjurio contra Helms escritas por el abogado del Departamento de Justicia Robert Andary.

[53] Al parecer, Helms provocó la ira de Nixon al no mostrarse demasiado dispuesto a emplear a la CIA para obstruir la investigación sobre el caso Watergate.

[54] Levison a Fulbright, «Helms Executive Session, 2/7/73».

[55] Para un extenso estudio de Helms y el proceso por perjurio instruido contra él, véase Richard Harris, «Secrets», en The New Yorker, 10 abril 1978.

[56] Véanse las minutas del encuentro de la ARA y la CIA celebrado el 14 de septiembre de 1973 a las 11:00.

[57] Base en Santiago a la oficina central, cablegrama relativo a los resultados de los comicios y el período postelectoral, 14 marzo 1973.

[58] Véase el memorando de la CIA «Policy Objetives for Chile», 17 abril 1973.

[59] Durante un encuentro de la CIA y la ARA celebrado el 30 de mayo de 1974, los representantes del Departamento de Estado plantearon la siguiente pregunta: «¿Queremos seguir involucrándonos en este tipo de asuntos, dados sobre todo la atmósfera nacional de EE.UU. y el recelo del gobierno chileno ante la posibilidad de que estemos implicados en actividades de esta índole?». En relación con los interrogatorios del Comité Church en torno a la ITT, el vicesecretario segundo John Crimmons recomendó mantener el respaldo clandestino a los partidos políticos chilenos, aunque «señaló que

debemos reconocer, no obstante, que nuestra ayuda se encuentra, en estos momentos, en una situación más vulnerable que antes», así como que «hemos de tener muy claro cuál es el riesgo que estamos asumiendo». Por su parte, Jack Kubisch, recién nombrado vicesecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, hizo constar su «inclinación» a «poner fin al programa [de la CIA] en lugar de favorecer su continuación».

[60] Cablegrama de la CIA, 2 mayo 1973.

[61] CSN, Henry Kissinger al presidente Nixon, informe secreto de situación, «Attempted Coup in Chile», 29 junio 1973.

[62] CSN, Henry Kissinger al presidente Nixon, informe secreto de situación, «Attempted Chilean Rebellion Ends», 29 junio 1973.

[63] CIA, memorando secreto de William Colby, «Proposed Covert Financial Support of Chilean Private Sector», 25 agosto 1973.

[64] Véase el informe del puesto de operaciones en Santiago «[Tachado] Progress Report—1 April-30 June 1973».

[65] El 16 de septiembre de 1973, cierta fuente situada en la cúpula del Ejército chileno facilitó a la CIA una exposición detallada de la evolución del plan golpista. En lo tocante a la función de Pinochet, su información se contradice con las que dan a entender que uno de los principales conspiradores, el coronel Arellano Stark, dio a conocer por primera vez a Pinochet de la conjura el 8 de septiembre.

[66] DIA, informe ultrasecreto, «Chile», 8 septiembre 1973.

[67] Vernon Loeb, periodista de The Washington Post, entrevistó a Winters con la intención de redactar una biografía de Jack Devine, que apareció, bajo el título de «Spook Story» («Una historia de espías»), en la sección de moda de la edición del 17 de septiembre de 2000.

[68] CIA, memorando secreto de David A. Phillips a Henry Kissinger, «Possible Request for U.S. Government Aid from Key Officer of Chilean

Military Group Planning to Overthrow President Allende», 11 septiembre 1973.

[69] Véanse las actas de la reunión celebrada el 7 de septiembre de 1973, a las 11:00, por la ARA y la CIA, fechadas el 11 de septiembre de 1973.

[70] Las circunstancias que rodearon a la muerte de Allende han sido objeto de controversia tanto en el ámbito de lo político como en el de lo histórico. En el informe de situación elaborado por el teniente coronel Patrick Ryan se aseguraba que «se había quitado la vida colocándose una metralleta bajo la barbilla y apretando luego el gatillo. Un método algo sucio, pero efectivo». Michael Townley, el agente fugitivo de Patria y Libertad, dijo tras el golpe al funcionario del Departamento de Estado David Stebbing que «Allende no se suicidó», sino que murió a consecuencia de varias «heridas mortales» en el pecho y el estómago, causadas con toda probabilidad por el bombardeo al Palacio de La Moneda. El agregado militar chileno en Venezuela, por su parte, comunicó a la DIA que Allende había accedido a rendirse, tras lo cual lo había ejecutado su propia guardia por cobarde. Durante mucho tiempo, quienes se oponían al golpe de Estado habían dado por hecho que Allende había muerto a manos de los soldados que asaltaron su despacho. Una vez reinstaurado el gobierno civil en 1990, su familia accedió a dirimir la discusión y autorizar, para ello, la autopsia de su cadáver. Según concluyó el examen científico, en lugar de rendirse, el presidente había puesto fin a su propia vida al ver su despacho rodeado por las fuerzas militares.

[71] CIA, memorando secreto de William Colby a Henry Kissinger, «CIA’s Covert Action Program in Chile Since 1970», 13 septiembre 1973.

[72] Testimonio de Karamessines, citado en Alleged Assassination Plots, op. cit., p. 254.

[73] Transcripción de telcon de Kissinger, 16 septiembre 1973. Nixon seguía teniendo claro que el «pueblo» no se dejaría convencer por «los embustes de los liberales» acerca de la inmoralidad del apoyo estadounidense al derrocamiento de Allende. La conversación seguía así:
Nixon:Saben que es un gobierno procomunista y que no hay más vuelta de hoja.

Kissinger: Exacto, y procastrista.
Nixon: Vamos a olvidarnos de lo de procomunista: Era un gobierno antiestadounidense en toda regla.

3. Pinochet en el poder: La construcción de un régimen de represión

[1] En realidad, no hubo un recuento completo de las víctimas del período posterior al golpe hasta después de que Pinochet abandonase el cargo en 1990 y el nuevo gobierno civil nombrase una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (conocida como la «Comisión Rettig») para investigar los nombres de todas las víctimas de su régimen y las circunstancias en que murieron.

[2] El primer ministro chino Zhou Enlai fue quien instó la redacción de este informe. En una reunión privada mantenida en Pekín, el 13 de noviembre de 1973, según un memorando secreto de conversación, Zhou se quejó ante Kissinger de la matanza que estaba perpetrando Pinochet. «¿Podría usted influir de algún modo en Chile?», quiso saber. «No deberían aficionarse a matanzas como esas. Ha sido terrible (…) [D]el estadio han salido cientos de cadáveres». El secretario de Estado norteamericano respondió: «Hemos influido en buena medida, y creemos que, tras la primera fase, una vez consolidado el poder, no ha habido ejecuciones. Al menos, no tenemos noticia de que continúen en estos momentos. Volveré a estudiar la cuestión cuando regresemos [a Washington] y lo mantendré informado». Entonces ordenó a su subordinado inmediato, Winston Lord, «hacer que [el vicesecretario Jack] Kubisch lo compruebe».

[3] CIA, informe secreto de inteligencia (ejecuciones en Chile desde el golpe de Estado), 27 octubre 1973.

[4] Ibid. La CIA señalaba que el régimen había decidido limpiar de prisioneros el estadio «para dar tiempo a los preparativos del partido de fútbol entre Chile y la URSS que debe disputarse allí a finales de noviembre».

[5] Véase el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación conocido como «Informe Rettig» (edición inglesa: University of Notre Dame Press, Notre Dame [Indiana], 1993; original en español: Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Secretaría de Comunicación y Cultura, Santiago de Chile, 1991), p. 104.

[6] Para una relación completa de los casos de Horman y Teruggi, véase el capítulo 5, «Víctimas estadounidenses».

[7] El Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación proporcionó un recuento detallado y analizó en profundidad las atrocidades perpetradas contra los derechos humanos durante la dictadura.

[8] Citado en Genaro Arriagada, Pinochet: The Politics of Power, Unwin Hyman, Boston, 1988, p. 9. (Original en castellano: La política militar de Pinochet, Imprenta Salesianos Santiago de Chile, 1985).

[9] En un análisis secreto del 21 de marzo de 1974, «Aspects of the Situation in Chile», la CIA informó que Pinochet y su Ejército habían decidido no compartir el liderazgo de la Junta Militar con el resto de las Fuerzas Armadas.

[10] Durante el proyecto de Desclasificación de Chile, la CIA se negó de manera intencionada a levantar el secreto que pesa sobre el archivo «201» de Pinochet, donde se encuentran los informes de espionaje de más alto nivel en torno a su personalidad y sus acciones, así como sobre la relación que mantenía con él el gobierno de Estados Unidos.

[11] DIA, datos biográficos confidenciales sobre el general Augusto Pinochet, enero 1975.

[12] Embajada de Estados Unidos, cablegrama, «Conversation with Pinochet», 12 octubre 1973.

[13] Davis abandonó Chile poco después de este encuentro para ser sustituido en el cargo de embajador por David Popper.

[14] Los acompañantes del general Arellano, implicados en las ejecuciones, eran el teniente coronel Sergio Arredondo, el coronel Pedro Espinoza, el capitán Marcelo Moren Brito, el teniente Armando Fernández Larios y el teniente Juan Chiminelli Fullerton. El helicóptero estaba pilotado por el capitán Sergio de la Mahotiere.

[15] La periodista de investigación Patricia Verdugo dedica un capítulo a cada una de las matanzas en su libro Caso Arellano: Los zarpazos del Puma, Santiago, CESOC, 1989.

[16] Lagos conservó el informe original que había escrito y trece años después se convirtió en uno de los principales testigos en los procesos relativos a la Caravana de la Muerte. En julio de 1986 presentó una declaración jurada durante las primeras iniciativas legales para hacer responder a Pinochet de sus atrocidades. Asimismo, prestó testimonio ante quienes investigaban estos crímenes en España en 1998. El hecho de que catorce de las víctimas de la Caravana no hayan sido halladas jamás permitió a sus familias iniciar una causa contra los generales Arellano y Pinochet basándose en las pruebas proporcionadas por Lagos, toda vez que las desapariciones no están recogidas en las leyes de amnistía que el dictador había decretado para garantizar a los militares la inmunidad con respecto a los crímenes de lesa humanidad perpetrados entre 1973 y 1978, pues deberían considerarse más bien secuestros sin resolver y, por lo tanto, delitos en curso. Esta nueva interpretación del decreto de amnistía hizo que Arellano se convirtiese en el primer general chileno de relieve arrestado por violación de los derechos humanos en Chile.

[17] Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, op. cit., p. 146.

[18] Esta información procede del informe biográfico de Arellano elaborado por la Dina con fecha del 5 de enero de 1975.

[19] DIA, «Official Decree on the Creation of the National Intelligence Directorate (Dina)», 2 julio 1974.

[20] Véase Mary Helen Spooner, Soldiers in a Narrow Land: The Pinochet Regime in Chile, University of California Press, Berkeley, 1999, p. 115, donde se recoge la reacción inicial a la propuesta de Contreras descrita por alguien que se hallaba presente.

[21] La Sendet quedó constituida de manera oficial a finales de diciembre de 1973, tal como comunicó la DIA varias semanas después («National Executive Secretariat for Detainees, Establishment of», 21 enero 1974).

[22] Véase Hon a la DIA, «Dina and Cecifa, Internal and the Treatment of Detainees», 5 febrero 1974.

[23] Véase Hon a la DIA, «Dina, Its Operations and Power», 8 febrero 1974.

[24] Ibid.

[25] Véase el capítulo 4, donde se tratan a fondo las relaciones entre la CIA y la Dina.

[26] Este documento es posterior al cese de Contreras en calidad de director de la Dina. Véase Departamento de Defensa, «Brigadier General Juan Manuel Contreras Sepúlveda, Chilean Army—Biographic Report», 28 febrero 1978.

[27] Las despiadadas prácticas de Tejas Verdes se convirtieron en un espantoso modelo para otros campos de detención y tortura creados por la Dina. Hasta sus instalaciones se transportaba a los prisioneros encerrados en camiones refrigerados que los militares habían expropiado a la industria pesquera y en cuyo interior eran retenidos a menudo. Las sesiones de tortura se llevaban a cabo bajo la supervisión de médicos encapuchados con el fin de garantizar que la víctima —hombre o mujer— no falleciese antes de acabado el interrogatorio. Tal como señaló la Comisión Rettig, fueron muchos los que murieron allí o fueron sacados del recinto para hallar la muerte en el exterior (véase Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, op. cit., p. 134).

[28] La descripción de estas instalaciones se basa en lo expuesto ibid., pp. 483-490.

[29] El lugar en que se encontraba Villa Grimaldi fue transformado en un «Parque por la Paz» después de que Pinochet dejara el cargo. Sus edificios fueron derruidos y sus restos se emplearon para erigir monumentos a las atrocidades allí cometidas. En abril de 1999, el autor hizo una visita al recinto guiado por un antiguo prisionero, Pedro Alejandro Matta. Llevado por el deseo de «transformar la historia en memoria» y asegurarse de que lo que sucedió en Villa Grimaldi no caiga en el olvido, Matta ha escrito y publicado una guía del lugar: Villa Grimaldi: a Walk Through a 20th Century Torture Center.

[30] Véase la descripción que ofrece Pedro Matta de este método, ibid., p. 14.

[31] Las desapariciones se convirtieron en un monstruoso sello distintivo de la represión ejercida en todo régimen militar del Cono Sur durante mediados y finales de la década de 1970. El testimonio de una mujer argentina que perdió de este modo a su esposo, sus cuatro hijas y dos yernos puede dar una idea del sufrimiento inigualable que provocan tales métodos. «La desaparición de una persona deja a quienes la aman una sensación de angustia permanente e irreversible», hizo saber Elsa Oesterheld a The New York Times. «Aun cuando se tenga la convicción de que están muertos, no lo están en realidad para una, porque no hay prueba alguna. Hasta la fecha, no he visto un solo certificado de defunción». Véase «Argentine Default Reopens “Dirty War” Wounds», The New York Times, 12 marzo 2002.

[32] Véase el informe ultrasecreto de la CIA «Latin American Trends, Annex, Staff Notes», 11 febrero, 1976, p. 2.

[33] Rogers hizo este comentario tras una sesión informativa sobre la visita de Contreras a la CIA. Véanse las actas de la reunión semanal de la ARA y la CIA del 11 de julio de 1975, fechadas el 14 de julio.

[34] Véase The Sunday Telegraph, Londres, 18 julio 1999.

[35] Cuando el coronel Hon, agregado de Defensa, preguntó a su fuente de información por qué respondía la Dina solo ante Pinochet en lugar de hacerlo ante toda la Junta Militar, como debía ser en un principio, este respondió que se trataba de una cuestión demasiado delicada para confiársela siquiera a él. Véase DIA, «Dina & Cecifa», 5 febrero 1974.

[36] Véase el informe de la embajada «Chile’s Government After Two Years: Political Appraisal», 14 octubre 1975.

[37] El 30 de septiembre de 1975, el puesto de operaciones de la CIA en Santiago redactó un extenso informe sobre las reuniones y decisiones que culminaron en los decretos promulgados por Pinochet para ampliar el poder de la Dina.

[38] DIA, informe, «Directorate of National Intelligence (Dina) Expands Operations and Facilities», 15 abril 1975.

[39] En 1979, la CIA puso a un Subcomité del Senado sobre Operaciones Internacionales al corriente de las actividades de la Dina y compartió con él datos confidenciales relativos a la intención de Chile de establecer bases en el extranjero, y en particular en Miami. El informe secreto del Subcomité, titulado «Staff Report on Activities of Certain Intelligence Agencies in the United States», sigue clasificado como secreto. Sin embargo, me ha sido posible obtener una transcripción mecanografiada de la parte dedicada a Chile.

[40] Para una exposición extraordinariamente detallada de la vida de Townley hasta su ingreso en la Dina, véase el capítulo 4, «Condor’s Jackal», de John Dinges y Saul Landau, Assassination on Embassy Row, Pantheon Books, Nueva York, 1980 (hay trad. esp.: Asesinato en Washington: El caso Letelier, Lasser Press Mexicana, México, 1982).

[41] El director de la Oficina de Seguridad de la CIA, Robert Gambino, presentó en la causa de Letelier y Moffitt una declaración jurada (9 noviembre 1978) sobre la historia del interés de la CIA en Townley.

[42] Véase el cablegrama de la embajada «Dina, Human Rights in Chile, and Chile's Image Abroad», 7 abril 1976.

[43] Véase Dinges y Landau, op. cit., p. 132.

[44] John Dinges y Saul Landau consiguieron el manuscrito de sesenta páginas de Mariana Callejas y lo emplearon con profusión en los capítulos 4 y 5 de su libro Assassination on Embassy Row, op. cit. (véase, para esta cita, la p. 130).

[45] FBI, memorando de William Webster (proyecto Andrea: programa chileno de fabricación de gas nervioso), 9 diciembre 1981.

[46] En las cartas escritas desde la prisión, Townley se refería a «Andrea» y expresaba el temor de que los investigadores pudiesen llegar a tener noticia de su laboratorio bacteriológico. En una de ellas, fechada el 2 de septiembre de 1979, escribió al contacto que tenía en la Dina acerca de un investigador que le había preguntado si conocía a una muchacha llamada Andrea. «Me encogí de hombros», le dijo. «Siempre había sabido que llegaría este momento. Como había pasado tanto tiempo, creí que tal vez [el Proyecto Andrea] había pasado inadvertido; pero parece que no he tenido esa suerte». Véase Taylor Branch y Eugene Propper, Labyrinth, Nueva York, 1982, pp. 317-318. (Hay trad. esp.: Laberinto, Javier Vergara, Buenos Aires, 1990).

[47] Townley aseguró al FBI haber rechazado la solicitud a causa del «carácter inestable» de los representantes del MNC, Guillermo Novo y Virgilio Paz.

[48] La introducción de un gas tan nocivo en dos vuelos de LAN Chile puso en peligro las vidas de cientos de pasajeros. En 1982, la Administración Federal de Aviación (FAA, por su sigla en inglés) investigó el empleo de las aerolíneas por parte de la Dina para el transporte de materiales peligrosos contra lo establecido por las leyes de la aviación internacional. Sin embargo, no se impuso multa alguna a la compañía, a pesar de que sus pilotos facilitaron, con conocimiento de causa, las operaciones de la Dina en el extranjero al llevar a distintos países piezas con las que fabricar bombas.

[49] DIA, cablegrama, «Dina Dissolved», 13 agosto 1977.

[50] Véase DIA, «Covert Countersubversive Activities in Chile», 29 noviembre 1977.

[51] CIA (título tachado), 9 noviembre 1977.

[52] Para una exposición detallada sobre la CNI, véase Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, op. cit., pp. 635-645.

4. Consolidación de la dictadura: Estados Unidos y el régimen de Pinochet

[1] Departamento de Estado, cablegrama, «USG Attitude Toward Junta», 13 septiembre 1973.

[2] El interés de Pinochet en que se celebrara esta reunión fue transmitido a Washington por la CIA la mañana del 12 de septiembre y formaba parte de un informe de situación sobre el desarrollo del golpe. Para el memorando de la conversación entre el general y Urrutia, véase «Gen. Pinochet's Request for Meeting with MILGP Officer», 12 septiembre 1973.

[3] Cablegrama del Departamento de Estado, «Continuation of Relations with GOC and Request for Flares and Helmets», 18 septiembre 1973.

[4] Cablegrama secreto a la oficina de estrategia de la Casa Blanca, «FMS Sales to FACh», 15 septiembre 1973.

[5] Ibid.

[6] «Chilean Request for Detention Center Advisor and Equipment», 28 septiembre 1973.

[7] Véase «Secretary's Staff Meeting», 1 octubre 1973. Al día siguiente, según la transcripción correspondiente al 2 de octubre, Kissinger y su equipo bromearon sobre el modo como acogerían los demás diplomáticos

latinoamericanos la presencia del nuevo ministro de Relaciones Exteriores de la Junta Militar, el almirante Ismael Huerta, en el banquete que estaba organizando para ellos en Washington. El vicesecretario Kubisch le advirtió que «el modo como se conduzca con respecto a él no pasará inadvertido a los otros, deseosos como están de saber si el recién instaurado régimen chileno posee su aprobación o solo está siguiendo usted el protocolo». La conversación seguía así:

Kissinger: ¿Y cómo van a examinarme? ¿En qué van a basarse?

Kubisch: Supongo que si los ven dándose calurosos abrazos [en español en el original], sentados uno al lado del otro y haciéndose arrumacos en un rincón, no dudarán en informar a sus gobiernos.

Risas

Kissinger: ¡Lo que tiene que hacer el secretario de Estado por el interés de la nación!

[8] Departamento de Estado, acta secreta de la reunión del Grupo de Acción Especial de Washington, «Chile», 20 septiembre 1973.

[9] Véase el memorando secreto de la conversación, «Secretary’s Meeting with Foreign Minister Carvajal», 29 septiembre 1975, p. 8.

[10] En Lars Schoultz, Human Rights and United States Policy toward Latin America, Princeton University Press, Princeton (Nueva Jersey), 1981, pp. 185-186, obra de gran influencia, puede hallarse un estudio del respaldo económico prestado por Estados Unidos a Pinochet.

[11] «Secretary’s Meeting with Foreign Minister Carvajal», op. cit., p. 5.

[12] El análisis, de veintiséis páginas, se titula «The Situation in Chile and the Prospects for U.S. Policy». Véanse las pp. 19-20.

[13] Las solicitudes de armas letales por parte de los militares chilenos aparecen descritas en un memorando del vicesecretario para Asuntos Interamericanos Jack Kubisch, «Supply of Lethal Military Items to Chile», 5 diciembre 1973.

[14] Schoultz, op. cit., p. 186. Véase también The New York Times, 16 octubre 1977.

[15] Cablegrama de la oficina central de la CIA, 18 septiembre 1973.

[16] Las direcciones de los miembros de la CIA que se hacían pasar por funcionarios de la embajada de Estados Unidos están sacadas del listín telefónico del edificio en Santiago de Chile, edición de octubre de 1971.

[17] Cablegrama de la CIA, 3 octubre 1973. Phillips aconsejó a Warren que, en esa ocasión, ingeniara «alguna historia verosímil con materiales que no estén disponibles».

[18] De la compra de estos medios —tal vez una cadena de emisoras de radio— se trata en varios documentos de la CIA y el Departamento de Estado con fecha de octubre de 1973 que han salido a la luz.

[19] Informe Comité Church, p. 40.

[20] Véase el memorando redactado por la División del Hemisferio Occidental para su director: «[Tachado] Project», 9 enero 1974.

[21] Enrique Krauss, que en la fecha del golpe ocupaba un escaño en el Congreso, se convirtió más tarde en el primer ministro del Interior durante la presidencia de Patricio Aylwin, quien sucedió a Pinochet en calidad de jefe de Estado. Hamilton era senador y procedía de Valparaíso, en tanto que Pedro Jesús Rodríguez había sido ministro de Justicia del gabinete de Frei.

[22] Memorando de la CIA, «Project [tachado] Amendment N° 1 for FY 1973 and Renewal for FY 1974», 29 noviembre 1973.

[23] Véase «Request for [US$ 160.000] for Chilean Christian Democratic Party (PDC)», sin fecha.

[24] El memorando de Gardner, clasificado de secreto, tiene el título de «Covert Assistance to the PDC in Chile» y fecha, escrita a mano, de febrero de 1974.

[25] «Request for [US$ 160.000] for Chilean Christian Democratic Party», 7 enero 1974, p. 6.

[26] Véase el cablegrama de Popper «Assistance to the Christian Democratic Party», 27 febrero 1974. En él, sin embargo, el embajador hacía hincapié en que, de producirse una ruptura entre los socialdemócratas y Pinochet, Estados Unidos se pondría del lado del general. «Existe la posibilidad de que la relación se torne abiertamente antagónica en algún momento del futuro. En tal caso, lo último que desearemos será que se nos vincule al PDC en ningún momento del período posterior al golpe, ni siquiera por acciones emprendidas en el pasado» (la cursiva es mía).

[27] Departamento de Estado, memorando de conversación, «ARA-CIA Weekly Meeting, 23 November 1973», 27 noviembre 1973.

[28] Popper a Kubisch, a través de un canal de la CIA, 3 mayo 1974.

[29] Casa Blanca, memorando secreto de acción para Henry Kissinger, «Termination of Chile Account», 11 junio 1974.

[30] Según un memorando relativo a esta «liquidación» remitido por David Atlee Phillips al subdirector asociado de la CIA responsable de las operaciones, el último pago efectuado a los socialdemócratas no se hizo efectivo hasta el 20 de agosto de 1974. Véase «Project [tachado] Amendment N° 1 for FY 1974 and Termination», 25 abril 1975.

[31] Entrevista con el autor.

[32] Fue el periodista brasileño Roberto Simon quien obtuvo el informe secreto de Walters a Kissinger acerca de su reunión con el general Pinochet y es quien lo cita en su libro El Brasil de Pinochet, publicado por LOM Ediciones en Chile.

[33] CIA, memorando secreto de información (almuerzo del coronel Contreras en el cuartel general de la Agencia), 4 marzo 1974.

[34] Covert Action in Chile, 1963-1973, p. 40.

[35] Véase Lucy Komisar, «Into the Murky Depths of Operation Condor», Los Angeles Times, 1 noviembre 1998.

[36] CIA, memorando secreto de información (Pinochet propone una reunión de Contreras con el subdirector Vernon Walters), circa 1 julio 1975.

[37] El encargado de informar de las actividades de la CIA en las reuniones mantenidas con la ARA proporcionó a los funcionarios del Departamento de Estado una detallada relación del encuentro mantenido por Contreras y Walters, durante la reunión semanal de ambos organismos.

[38] La CIA, que mantiene aún en secreto los detalles de esta reunión, ha impedido que se haga pública la totalidad de la página adjunta a este memorando.

[39] Fimbres tomó nota de lo discutido en el encuentro en un extenso memorando que llevaba por título las cuestiones de las que trataron: «UNGA [Asamblea General de las Naciones Unidas], Economic Situation; the Disappeared 119; the GOC [gobierno de Chile] Image Abroad; Willoughby», 24 agosto 1975.

[40] Memorando del Departamento de Estado, «Contreras-Salzberg Conversation», 26 agosto 1974. El coronel dijo a su interlocutor que la Dina «efectúa ya unas cuantas detenciones al día, y es ahora el único organismo que arresta e interroga a los prisioneros políticos», como si este hecho representara una mejora en la situación en que se hallaban los derechos humanos en Chile.

[41] En una entrevista realizada en 1979 por el FBI, Walters apenas ofreció información relativa al propósito de estos encuentros. Declaró que «parte de sus funciones en calidad de subdirector de la CIA consistía en coordinar y dirigir los enlaces extranjeros de la Agencia, y que este hecho justifica que hubiese recibido al coronel Contreras en 1975». En otra, concedida por Contreras al periodista chileno Rodrigo Frey en 1999, durante su reclusión en la cárcel, el coronel se mostró más elocuente. Aseguró que Walters había propuesto colocar a agentes de la CIA al interior de la Dina, al igual que tenía miembros cubano-estadounidenses trabajando en el servicio

venezolano de inteligencia (la Disip). Este hecho, a su parecer, explicaba el viaje que hizo de Washington a Caracas a finales de agosto de 1975. También afirmó que Walters había recomendado contratar a cinco senadores supuestamente jubilados para que ejercieran presión en el Congreso en favor de Chile al precio de dos millones de dólares anuales. Hasta tanto que no se saque a la luz la transcripción de estas conversaciones, no hay modo alguno de evaluar por completo estas afirmaciones, que por lo demás no dejan de resultar dudosas.

[42] Entrevista con el autor. En el transcurso de varios encuentros, este mismo informante repitió que Burton tenía un proyecto particular para el que se consideraba imprescindible la colaboración de Contreras.

[43] Carta de Townley a Gustavo Echavere, 29 junio 1979. Townley la escribió para su contacto con la Dina desde una prisión estadounidense después de haber sido entregado al FBI por las autoridades chilenas por su participación en el asesinato de Letelier y Moffitt. Toda su correspondencia fue copiada por el secretario de su abogado antes de ser echada al correo. Finalmente, se hicieron con ella Taylor Branch y Eugene Propper, quienes la emplearon para su libro Labyrinth, op. cit., en el que tratan de la muerte de Letelier.

[44] Entrevista con el autor.

[45] La fecha en que se hizo este depósito hace probable que se tratase, de hecho, del pago de la CIA a Contreras. El ingreso del 21 de julio de 1975 constituyó la única transacción sustancial efectuada a favor de la cuenta en casi diez años. Sin embargo, después de que Estados Unidos descubriese su participación en el asesinato de Letelier y arrestara a los exiliados cubanos terroristas que colaboraron con la Dina, Contreras transfirió veinte mil dólares de la cuenta en Nueva York de una misteriosa correduría panameña llamada Sudhi S.A. a su cuenta privada en Washington. Dos meses más tarde, en diciembre de 1978, lo dispuso todo para que el marido de una empleada de LAN Chile residente en Florida retirara de ella veinticinco mil dólares en metálico. Pasado el tiempo, los investigadores del FBI dijeron a John Dinges y Saul Landau estar convencidos de que el dinero se empleó para costear la defensa de sus compañeros cubanos de conspiración.

[46] Entrevista con el autor. En realidad, el informante no reveló en ningún momento la identidad de Warren, que se obtuvo de manera independiente. La CIA se ha negado a hacer público ninguno de los cablegramas o documentos administrativos relacionados con la inclusión de Contreras en su plantilla, su exclusión y el único pago que se le hizo, a mediados de 1975.

[47] Véase The Washington Post, «CIA Had Covert Tie to Letelier Plotter; Contreras Masterminded Bombing», 20 septiembre 2000.

[48] «ARA/CIA Weekly Meeting, 25 July 1975», 29 julio 1975.

[49] El testimonio de Colby aún no ha sido revelado como tal. Véase U.S. Congress, House, Special Subcommittee on Intelligence, Inquiry into Matters Regarding Classified Testimony Taken on April 22, 1974 Regarding the CIA and Chile, 93er Congreso, 2ª sesión, 25 septiembre 1974, pp. 31-37.

[50] El memorando sobre perjurio oficial, titulado «Subcommittee Hearings —ITT & Chile and Report of Colby Testimony before the Nedzi House Subcommittee», fue redactado a principios de septiembre de 1974, circuló por el Comité Senatorial de Relaciones Exteriores y acabó por filtrarse a The Washington Post, donde los artículos de Lawrence Stern suscitaron un gran escándalo público y una controversia no menor entre bastidores en el Capitolio. Church advirtió por teléfono a Levinson que el secretario de Estado Kissinger se había puesto en contacto con el dirigente de la minoría senatorial, Hugh Scott, para exigir su despido. Hasta la publicación del artículo de Seymour Hersh, «nadie quiso tocar el asunto», recuerda Levinson. «¡Nadie! Nunca he entendido por qué se mostraba el Congreso más preocupado por las filtraciones que por las mentiras, ni por qué sigue haciéndolo».

[51] Véase Kissinger, Years of Renewal, Simon & Schuster, Nueva York, 1999, pp. 313 y 320.

[52] Casa Blanca, memorando de conversación, «Cabinet Meeting—September 17, 1974—11:00 AM».

[53] En un memorando con fecha del 31 de octubre de 1975 titulado «Background on Covert Operations in Chile», Marsh adjuntó una transcripción de la rueda de prensa ofrecida por Ford el 16 de septiembre y destacó el pasaje en que negaba toda implicación estadounidense en el golpe de Estado. Asimismo, le pidió que revisara el apéndice A. Sin embargo, cuando la biblioteca de Gerald Ford entregó a la CIA el apéndice para que lo estudiase como parte del proyecto de Desclasificación de Chile en 1999, esta decidió mantener en secreto la totalidad del documento.

[54] El informe al que se refiere Kissinger era algo semejante a las «joyas familiares» de la CIA, una recopilación de 693 episodios de operaciones encubiertas ilícitas e ilegales de setenta páginas de extensión compilada por orden de James Schlesinger, que había precedido a Colby en el cargo. El documento llegó a manos de Hersh y sirvió de fundamento a buena parte de sus extraordinarios artículos en torno a las operaciones de espionaje nacional y de asesinato emprendidas por la CIA. La conspiración que acabó con la vida de Schneider no se hallaba en el informe, aunque cierto miembro de la Agencia en México había presentado en la oficina central, a petición de Schlesinger, varios memorandos relativos a los lazos que unían a la CIA con este caso.

[55] Kissinger, op. cit., p. 313.

[56] «Lo que importa es el reconocimiento oficial», escribió Rogers a Kissinger. «Podemos sobrevivir, si bien en una situación un tanto incómoda, con revelaciones sin corroborar. (…) Los latinoamericanos, de cualquier modo, ya han oído historias como estas de boca de los marxistas. Sin embargo, cuando el Congreso exponga las intervenciones efectuadas en el pasado y el Poder Ejecutivo lo admita, aquellos no podrán menos de responder con sobrecogimiento y recelo». Véase Rogers a Kissinger, «CIA Investigations and Latin America», 28 febrero 1975.

[57] Véase «The Secretary’s Principals’ and Regionals’ Staff Meeting, Monday, July 14, 1975, 8:00 am», p. 36. En el transcurso de la reunión, Kissinger insistió en que no podían «entregar todos los cablegramas relativos a un asunto concreto a ningún comité del Congreso», porque sentaría «un precedente muy poco deseable».

[58] Véase la extensa relación de Johnson, A Season of Inquiry: The Senate Intelligence Investigation, University of Kentucky Press, Lexington (Kentucky), pp. 46-47.

[59] Memorando de decisión de la Casa Blanca, «Senate Select Committee Plans for Open Hearing on Covert Actions in Chile», 1 noviembre 1975.

[60] Véanse las declaraciones hechas ante el Comité de Investigación para el Estudio de Operaciones Gubernamentales Relacionadas con Actividades de Inteligencia, 94º Congreso, 1ª sesión; Covert Action in Chile, op. cit., 4-5 diciembre 1975, pp. 1-2.

[61] Véase Kissinger, op. cit., p. 411.

[62] Conversación con el presidente Pinochet, 3 enero 1975.

[63] La primera de estas publicaciones, «Chile: Key Target of Soviet Diplomacy», fue escrita por James Theberge, a quien Ronald Reagan nombraría embajador en Chile en 1982.

[64] La información relativa a la historia y las prácticas ilegales del CCN procede de las pruebas obtenidas del despacho de Liebman por los agentes del Departamento de Justicia y presentadas ante los tribunales el 18 de diciembre de 1978. Véase también The Washington Post, «Justice Department Says Group Illegally Lobbies for Chile Dictator», 19 diciembre 1978.

[65] Lars Schoultz atribuye esta actitud a Kissinger en su detallada exposición de la resistencia mostrada por el gabinete de Ford a las limitaciones impuestas a la ayuda militar a Chile. Véase su Human Rights and United States Policy…, op. cit., p. 255.

[66] La biblioteca presidencial de Gerald Ford hizo públicas las notas relativas a este encuentro, redactadas por Scowcroft, el 20 de febrero de 2002 a petición del autor. Los documentos llevan el encabezamiento de «P/K», que alude al presidente y a Kissinger, y una anotación marginal de Scowcroft que dice: «¿Podemos hacer algo con Chile?», seguida de la

siguiente respuesta, supuestamente de Kissinger: «Hagan todo lo que esté en sus manos» (subrayado en el original).

[67] «The Secretary's Principals' and Regionals' Staff Meeting, Friday, December 20, 1974, 8:00 am», p. 31.

[68] «The Secretary's Principals' and Regionals' Staff Meeting, Monday, December 23, 1974, 8:00 am», pp. 30-31.

[69] Ibid.

[70] Véase el cablegrama de Popper «Conversation with President Pinochet», 3 enero 1975.

[71] Véase el memorando de conversación «Secretary's Meeting with Foreign Minister Carvajal», 29 septiembre 1975, p. 1.

[72] Véase la transcripción del desayuno de Kissinger con Carvajal, 8 mayo 1975.

[73] Véase el documento de la embajada «Country Analysis and Strategy Paper, Chile 1976, 77», 18 mayo 1975, p. 5.

[74] Departamento de Estado, «FY 1976–77 Country Analysis and Strategy Paper for Chile, U.S. Policy Toward Chile—An Alternative», 18 mayo 1975.

[75] Memorando de acción del CSN, «Disarray in Chile Policy», 1 julio 1975.

[76] Departamento de Estado, memorando, «Ambassador Popper's Policy Paper», 11 julio 1975.

[77] Véase el cablegrama de Boyatt, «Secretary's Travel to OASGA [asamblea general de la OEA]», 21 abril 1976.

[78] Véase el cablegrama secreto de Popper, «Biographic Sketch—General Augusto Pinochet Ugarte», 27 mayo 1976.

[79] Rogers a Kissinger, «Overall Objectives for Your Visit to Santiago», 26 mayo 1976.

[80] Henry Kissinger, op. cit., p. 758.

5. Víctimas estadounidenses

[1] El periodista de la CBS News Frank Manitzas grabó, junto con Joanne Omang, corresponsal de The Washington Post en el Cono Sur, las entrevistas mantenidas con González. En agosto, Manitzas entregó la cinta al Departamento de Estado, donde la transcribieron como «The Second Interview, Tuesday, June 8, 1976, in the Italian Embassy». El artículo de Omang apareció en su diario el 10 de junio de 1976. Diez días después se publicó, también en The Washington Post, la continuación: «The Man who Knew too Much». Los comentarios de González se citan también en el extenso libro de Thomas Hauser sobre el caso: The Execution of Charles Horman: An American Sacrifice, publicado por Harcourt, Brace, Jovanovich en 1978 y reeditado en rústica con el título de Missing. (Hay trad. esp.: Desaparecido, trad. de Hernán Sabaté, Martínez Roca, Barcelona, 1982).

[2] Desaparecido, basada en el libro de Hauser y dirigida por Costa-Gavras, se estrenó en febrero de 1982. Fue candidata al Oscar por la mejor película y recibió el del mejor guion. En enero del año siguiente, el antiguo embajador Nathaniel Davis, el cónsul Fred Purdy y el agregado militar Ray Davis entablaron una demanda contra Hauser, Costa-Gavras y la Universal Pictures, y reclamaron ciento cincuenta millones por difamación. En julio de 1987 se desestimó la causa después de que el juez que instruía el caso determinase que la acusación no tenía base legal alguna y la Universal y Costa-Gravas accediesen a hacer una declaración conjunta en la que aseguraban que la película «no pretende dar a entender que Nathaniel Davis, Ray Davis o Frederick Purdy cursaran o aprobaran la orden de que se acabase con la vida de Charles Horman, ni desea que los espectadores la interpreten de este modo».

[3] «Murió fusilado en el estadio. Lo siento: estas cosas no deberían ocurrir», dijo a Ed Horman un oficial chileno el 19 de octubre. Véase «Victim’s Father is Bitter at U.S. Handling of Case», The New York Times, 19 noviembre 1973. Los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores de Pinochet negaron más tarde haber reconocido nunca ser responsables de la muerte de Charles Horman.

[4] Rudy Fimbres a Harry Shlaudeman, «The Charles Horman Case», 15 julio 1976.

[5] Cierta memoria con fecha del 26 de octubre de 1978 enviada por Francis McNeil al vicesecretario Viron Vaky señala que los abogados del Departamento de Estado deseaban mantener en secreto la conclusión de que los militares chilenos habían ejecutado a Horman con la intención de respaldar la defensa legal de los antiguos funcionarios estadounidenses demandados por la familia Horman por homicidio negligente. McNeil recomendó enérgicamente al gobierno «cumplir con nuestra responsabilidad respecto de esos ciudadanos estadounidenses» y declaró de forma oficial que «hay pruebas que dan a entender que murieron mientras se hallaban bajo custodia» de los militares chilenos. En realidad, esta declaración no vio nunca la luz pública. Los abogados se negaron asimismo a que se levantase el secreto que pesaba sobre la sugerencia de que los agentes de la CIA o el Departamento de Defensa podían haber tenido algo que ver con la muerte de Horman por el hecho de que se trataba de una simple opinión conjetural. En una memoria fechada el 28 de diciembre de 1978, McNeil apuntaba: «El Departamento de Estado haría mejor si revelase todo lo que pueda ahora, antes de que lo obliguen a hacerlo en un futuro y dé la impresión de haber estado “encubriéndolo”. Por último, he de señalar que estamos hablando de conjeturas espontáneas que han acudido a la mente de casi todo aquel que tiene algún tipo de relación con el caso», añadió. «Tal vez hagan montar en cólera a parte de la CIA y el Ejército, pero existen y están también en boca del público en general. (Por otra parte, la intención de satisfacer a la CIA y al Departamento de Defensa no es razón para hacer caso omiso de la FOIA [Ley de Libertad de Información])». Las autoridades desestimaron su propuesta y dispusieron que se tachasen los fragmentos en cuestión, de modo que la familia hubo de esperar veintiún años más para conocerlos.

[6] Departamento de Estado, memorando secreto, «Charles Horman Case», 25 agosto 1976.

[7] Véase el documento relativo a la reunión del Grupo de Acción Especial de Washington celebrada el 20 de septiembre de 1973 en torno a Chile.

[8] El padre Doherty entregó más tarde a los funcionarios del Departamento de Estado el diario en el que recogió con todo detalle descripciones de los abusos y torturas a que se vieron sometidos los chilenos y los extranjeros de no menos de veinticinco nacionalidades diferentes que compartían con él confinamiento en el Estadio Nacional. En él habla, por ejemplo, del pasillo que formaban los soldados frente a su celda. «Hacían a los presos pasar por él y, mientras obedecían, los golpeaban con las culatas de sus fusiles. Uno cayó al suelo a causa del golpe y un soldado le disparó en el pecho (…) [M]urió cinco minutos después. El soldado que había disparado sopló el extremo de su fusil y se echó a reír». Asimismo, decía haber oído disparos de ametralladora y pistola durante una hora en el extremo opuesto del estadio el 20 de septiembre, entre las 4:00 y las 5:00. «Di por hecho que estaban ejecutando a personas, y que después les daban el tiro de gracia a quienes no morían».

[9] Horman interpretó el comentario de Creter como un reconocimiento de la implicación de Estados Unidos en el golpe de Estado. Según el testimonio de Terry Simon, le dijo aquella noche: «Hemos topado con algo muy importante». Sin embargo, la embajada y Creter insistieron en que Horman se refería a la misión de ingeniería naval que habían llevado a término en Chile, algo que, en caso de ser verdad, resultaba mucho más trivial. Lo cierto es que Creter había recibido semanas antes un cablegrama del capitán Ray Davis, comandante del grupo militar estadounidense en Chile, enviado con fecha del 21 de agosto de 1973 al fuerte Amador, en la zona del canal de Panamá. En el cable le pedía que estuviese listo para «ayudar a la Armada chilena» en labores que incluían «la producción de su propio CO_2 para recargar los extintores de a bordo» y el asesoramiento en la «instalación de fluorescentes en los compartimentos de todas las embarcaciones chilenas destinados a ser habitados». En una entrevista concedida al escritor Thomas Hauser varios años después, Creter reconoció que esas tareas aún no se habían dado por terminadas cuando se topó con

Charles y Terry en Viña del Mar. Hauser se acogió a la Ley de Libertad de Información y obtuvo, por otra parte, una ficha del consulado relativa a Charles Horman en la que se indicaba que Creter había pedido y proporcionado a la embajada información sobre la visita de Horman a la población costera. En ella podía leerse: «Art Creter: 15ª D[ivisión] N[aval] / 2 registros en Hotel Miramar, hab. 315, 23:00 [horas], 10 sept. / usada dirección Paul Harris 425 / "escritor", salida 15 sept.». Hauser preguntó a Creter acerca de este extraño documento, y observó: «Normalmente, uno no se imagina a un "ingeniero naval" hojeando los libros de registro de un hotel, y Creter no tiene explicación alguna para justificar tal conducta». Véase The Execution of Charles Horman, op. cit., p. 234.

[10] Véase «Resume of Naval Mission Contacts with Charles Horman and Terry Simon during the Period 11 September-15 September 1973 Valparaíso, Chile), firmado por Patrick J. Ryan, de la Infantería de Marina.

[11] Simon refirió este episodio a Thomas Hauser y escribió sobre él en un breve artículo para la revista Senior Scholastic. Véanse Hauser, op. cit., p. 94, y «American Girl in Chile's Revolution», Senior Scholastic, 6 diciembre 1973.

[12] Uno de los aspectos más peculiares del caso de Horman es el hecho de que Joyce y Charles se hubiesen mudado a su domicilio el 7 de septiembre, cuatro días antes del golpe de Estado, lo que supone muy poco tiempo para que las autoridades chilenas o estadounidenses conociesen su nueva dirección. (Por razones que aún no están claras, Charles Horman empleó su antigua dirección cuando se registró en el Hotel Miramar de Viña del Mar). Ninguno de sus antiguos vecinos habló de nadie que estuviera buscando al matrimonio antes del 17 de septiembre. Cabe dentro de lo posible que, al igual que sucedió con otros estadounidenses detenidos, la mudanza del día 7 llamara la atención de quienes vivían en su mismo vecindario y respaldaban los planes golpistas. En tal caso, estos debieron de denunciarlos a las nuevas autoridades militares en calidad de extranjeros, lo que se tradujo en una redada por parte de las fuerzas del orden.

[13] La hija de una de las vecinas de Horman, que salía para visitar a su madre en el preciso instante en que se lo llevaban los militares, siguió con

su coche al camión hasta el estadio y, según refirió más tarde a Joyce Horman, vio el vehículo franquear las puertas del recinto.

[14] Frederick Smith Jr., «Death in Chile of Charles Horman», p. 3. La vecina en cuestión era una mujer valiente llamada Isabella Carvajal. Su esposo, Mario Carvajal, afirmó en una declaración en español que el oficial del SIM se había referido a Horman como «norteamericano» y que acabó la conversación telefónica amenazándola de muerte en caso de que lo que le había dicho sobre Charles resultase no ser cierto.

[15] Carlotta Manosa —amiga íntima de los Horman, que alojó a Joyce el 18 de septiembre, después de que esta encontrara su domicilio patas arriba y sin Charles— pidió a un familiar que trabajaba en la embajada que informase a Purdy de la llamada de teléfono del SIM.

[16] Véase «Victim’s Father is Bitter at U.S. Handling of Case», The New York Times, 29 noviembre 1973.

[17] Hall era uno de los distintos vicecónsules que había en la embajada. La conversación que mantuvo con Joyce aparece recogida en Hauser, op. cit., pp. 117-118. Cuando ella pidió pasar la noche en el consulado, le contestó: «No tenemos alojamiento».

[18] El capitán Ray Davis tomó apuntes de lo que se habló durante el encuentro y los incluyó en una relación cronológica de seis páginas en torno a sus contactos con Charles y Terry, así como a su aparente empeño en ayudar a Joyce.

[19] Hauser, op. cit., p. 133. Joyce dijo al autor que el embajador había preguntado: «¿Qué es lo que quiere usted que hagamos exactamente? ¿Buscar debajo de todas las gradas?», a lo que ella respondió: «Eso es exactamente lo que quiero que hagan, y no sé qué tiene de extraño».

[20] Véase Kessler a Rudy Fimbres, «Diuguid Article on Horman Case», 19 julio 1976, así como la carta que envió a Frederick Purdy y que, aunque está sin datar, fue escrita poco después.

[21] Hauser, op. cit., p. 217.

[22] Después de que apareciese el cuerpo de Horman, el 18 de octubre, y de que el régimen inventara la excusa de que le habían disparado en la calle el 18 de septiembre, el ministro de Relaciones Exteriores se retractó de lo dicho el 3 de octubre y calificó de «error» su declaración.

[23] En un cablegrama enviado a Washington para refutar los hechos, Davis escribió que Purdy y el agregado militar estadounidense, el coronel Hon, no recordaban así su comentario. «Según ellos, el embajador no dijo nunca "que, en opinión de la embajada, lo más probable era que Charles estuviese escondido". Pudo haberlo mencionado como una posibilidad». El propio Davis no ofreció opinión alguna acerca de lo que él mismo había dicho.

[24] Anderson escribió esta «memoria para archivar» el 17 de octubre.

[25] Dolguin vivía al lado de Lovell S. Jarvis. Cuando habló de aquel a Horman, el empleado de la Fundación Ford dijo que se trataba de cierto funcionario de una embajada de habla inglesa con el que jugaba al tenis.

[26] Embajada de Estados Unidos, cablegrama, «W/W Deaths; Charles Charles E. Horman», 18 octubre 1973.

[27] La declaración de Purdy forma parte de un borrador redactado, sin circunloquios, como respuesta a la carta que había escrito Edmund Horman al Congreso a finales de octubre para quejarse por el modo como había manejado la embajada el caso de su hijo. El borrador, fechado el 17 de noviembre de 1973, se rehízo con posterioridad y se envió, a modo de refutación de la carta de Horman, con firma del subdirector de la embajada, Herbert Thompson. Véase «Senator Javits' Interest in Horman Case», 18 noviembre 1973.

[28] Departamento de Estado, cablegrama confidencial, «Approach to Foreign Office on Missing American Citizens Horman and Teruggi», 3 octubre 1973.

[29] El embajador Davis envió a Washington un cablegrama que resumía esta conversación. Véase «Kubisch Meeting with Minister Huerta», 24 febrero 1974.

[30] Cita extraída de la carta que remitió Horman a Charles Anderson, de la Oficina de Servicios Consulares Especiales, 27 marzo 1974.

[31] En un cablegrama con fecha del 27 de octubre de 1973 titulado «Disposition of Remains», la embajada informó que los responsables sanitarios le advertían que «no puede autorizar el envío, dado el estado en que se encuentra el cadáver, y que las únicas soluciones posibles son incinerarlo (y enviar las cenizas) o reducirlo al esqueleto (y enviar los huesos). Sanidad nos ha hecho saber que no hay exención posible». Dos meses después de expuesto este argumento, el general Bonilla, ministro del Interior, comunicó a la embajada que había retrasado la autorización para trasladar los restos de Horman con el objetivo de esperar el momento más oportuno para Chile, aquel en el que fuese menor el alboroto levantado por tal hecho entre los medios de comunicación estadounidenses y la opinión pública.

[32] Smith Jr., op. cit., p. 6.

[33] Departamento de Estado, cablegrama, «Disposition of Human Remains», 23 marzo 1974.

[34] Fragmento de la carta de Ed Horman a Charles Anderson, miembro de la Oficina de Servicios Consulares Especiales, 27 marzo 1974. En un escrito informativo remitido a la viuda de Charles Horman el 4 de abril, Larry Lane, director de la División de Reclamaciones de Propiedad, Herencias y Documentación Legal del Departamento de Estado, la puso al corriente de que «el Congreso no dispone de fondos destinados a los gastos derivados de la muerte de ciudadanos estadounidenses particulares en el extranjero, por lo que deben sufragarse necesariamente con los bienes del fallecido o por miembros de su familia».

[35] Ministerio de Defensa, informe relativo a Frank Teruggi, «Deceased United States Citizen», 15 octubre 1973.

[36] Departamento de Estado, «Chronology of Information Relevant to Frank Randall Teruggi», 5 octubre 1973. El médico forense chileno que examinó el cadáver fue, al parecer, capaz de identificarlo gracias a las huellas dactilares de Teruggi que figuraban en la solicitud que había rellenado para obtener el documento de identidad chileno.

[37] Hathaway llamó a Volk cuando se disponía a salir de Chile para pedirle que volviese a examinar el cadáver por si podía identificarlo. Entonces, Volk, que a la sazón ejercía de profesor de Historia en el Oberlin College, se dirigió al consulado para hablar con James Anderson. «No sé lo que contó Hathaway a Volk. A mí me dijo que aquel no era Teruggi, y no hay más que hablar», exclamó Purdy. Anderson hizo saber a Volk que no iban a volver al depósito de cadáveres, dado que «no queremos presionar al nuevo gobierno pidiéndole demasiados favores». Al día siguiente, Purdy cambió de idea.

[38] Departamento de Estado, memorando para el archivo del coronel W. M. Hon, agregado de Defensa, 16 octubre 1973.

[39] Ibid.

[40] Hauser, op. cit., p. 244. Según aseguró al autor, Sandoval suponía que el expediente procedía de «la CIA de ustedes» o del Departamento de Estado.

[41] Carta de la CIA a Edna Selan Epstein, «Re: Freedom of Information Act Request of Frank F. Teruggi for Information Concerning his Son Frank Randall Teruggi», 7 mayo 1976.

[42] FBI, memorando de Legat Bonn al director en funciones, «[Borrado] SM-Subversive», 28 noviembre 1972.

[43] FBI, memorando secreto, «Frank Teruggi», 25 octubre 1972.

[44] Citado en Hauser, op. cit., pp. 192 y 195.

[45] Rudy Fimbres a Harry Shlaudeman, «The Charles Horman Case», 15 julio 1976.

[46] Véase doc. 3. En 1979, cuando se puso en conocimiento de la familia Horman parte del contenido del memorando redactado por Fimbres, Driscoll y Robertson el 25 de agosto de 1976, también se censuró este párrafo referente a la actitud poco sincera de la CIA.

[47] En octubre de 1999 entrevisté a Smith e hice que se reuniera con Joyce Horman por vez primera. Dejó bien claro que no consideraba que su informe constituyera una investigación a fondo del caso de Horman. El documento no tiene fecha, pero fue redactado entre noviembre y diciembre de 1976, y Shlaudeman lo recibió cuando el año llegaba a su fin.

[48] Este párrafo estaba tachado cuando se entregó por vez primera el informe de Smith a la familia de Horman a principios de 1980, ya que, según se alegó, contenía «ideas destinadas a deliberaciones internas del Departamento de Estado», tal como atestiguan las actas judiciales.

[49] Años después, cuando Joyce Horman reveló a Sandoval las conclusiones del Departamento de Estado, este aseguró no tener hermanos. El coronel Sandoval Velásquez, a quien localizó un investigador para la televisión estadounidense en 2000, también negó ser hermano de aquel o su confidente. En 2003, Sandoval reconoció al fin que su fuente había sido su hermano, antiguo abogado castrense.

[50] Fimbres al embajador David Popper, 4 agosto 1976.

[51] Hauser, op. cit., p. 217.

[52] Véase el memorando que preparó Smith acerca del informe presentado a Shlaudeman, «Further Steps in the Case of Charles Horman», 26 diciembre 1976.

[53] Véase la carta de Popper a Fimbres tocante a la ampliación de las averiguaciones relativas al caso Horman, 17 agosto 1976.

[54] David Dreher, «Subject: Charles Horman Case», 11 marzo 1987.

[55] Véase el memorando de Dreher al subdirector de la embajada con fecha 20 de abril de 1987, que tiene el título tachado.

[56] Al coronel Pedro Espinoza, condenado como uno de los miembros de la Dina que organizaron el asesinato de Letelier y Moffitt, nunca han llegado a relacionarlo con las atrocidades cometidas en el Estadio Nacional. Y si bien es posible que tuviese algo que ver, también lo es que su nombre se haya confundido con el del comandante encargado del estadio, Jorge Espinoza Ulloa. También cabe la posibilidad de que el informante los confundiese en sus comentarios o Dreher asumiera sin más que el Espinoza al que se refería era Pedro y lo hiciera constar así en el informe que elaboró en torno a la conversación.

[57] Dreher al subdirector de la embajada, título tachado, 20 abril 1987.

[58] Id., título tachado, 24 abril 1987.

[59] Esta información se recoge en un cablegrama secreto de la embajada, «Horman Case: Embassy Views on Credibility of Source», 15 junio 1987. El despacho señala también que, durante uno de sus viajes a la embajada, el confidente dejó «un documento escrito» en manos de la cónsul general, Jayne Koblisha: cuatro páginas mecanografiadas en las que se narra lo sucedido en septiembre y octubre de 1973 y se detalla lo que sabía de lo sucedido a Horman. Este texto trascendental, sin embargo, no se incluyó en los archivos sobre el caso de Horman que se desclasificaron.

[60] Llegados a este punto, los miembros del Departamento de Estado decidieron informar a Joyce Horman de este nuevo acontecimiento. En el transcurso de una breve llamada de teléfono, un funcionario llamado Peter DeShazo le comunicó que la validez de la información compartida con el confidente «era difícil de determinar», así como que este «pretendía lograr ciertos favores monetarios del gobierno de Estados Unidos, lo que oscurece sus motivos para ampliar la información proporcionada, cuando no toda la historia».

[61] La Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad, popularmente conocida como Colonia Dignidad, fue fundada en 1961 por Paul Schäfer,

quien en 1961 huyó de Alemania para escapar de múltiples acusaciones de abuso sexual de menores. Durante años se habló de la entidad como de una secta germánica a la que se acusaba de maltratar a los residentes, y en especial a los niños. «Han circulado, con una frecuencia que resulta tentadora, rumores que hablan de trabajos forzados, torturas y asesinatos», puede leerse en los documentos que han sido publicados, «así como de la complicidad de algunos integrantes de las Fuerzas Armadas de Chile». El artículo «Chile Sect Thrives Despite Criminal Charges», publicado en The New York Times el 30 de diciembre de 2002, constituye el estudio más reciente acerca de la colonia y su poder para evadir toda supervisión legal.

[62] Embajada de Estados Unidos, plano dibujado por investigador estadounidense de la desaparición de Boris Weisfeiler, circa febrero 1985.

[63] Embajada de Estados Unidos, plano dibujado por el confidente chileno «Daniel» en el que se representa la detención, el interrogatorio y el traslado a Colonia Dignidad de Boris Weisfeiler, circa junio 1987.

[64] Cablegrama de la embajada, «Case of Boris Weisfeiler, Colonia Dignidad—New Information», 23 julio 1987.

[65] Entrevista con Jayne Koblisha, 30 abril 2002. La cónsul recordó que su antecesor, Fred Purdy, había sido acusado de no haber sabido manejar el caso de Horman, algo que, en su opinión, había dado al traste con su carrera profesional. «El asunto nos impresionó a todos», dijo. «Nadie quería que lo dejasen en la estacada».

[66] Informe de la embajada, «Review of w/w case of Boris Weisfeiler», 30 junio 1987.

[67] Los carabineros aseguraron a la embajada que López se había suicidado, abatido porque su novia lo había dejado por otro.

[68] Una de las cosas que preocupaban a Koblisha era que el abogado al que el estado de Pensilvania había encargado el caso de Weisfeiler se hubiese acogido a la FOIA para solicitar los documentos relativos al caso. La cónsul temía que se levantara el secreto que pesaba sobre ellos por dos razones:

«Perderemos el control sobre el caso y, con toda probabilidad, se nos acusará de indolencia si no hacemos algo enseguida».

[69] Informe de la embajada, «Review of w/w case of Boris Weisfeiler», 30 junio 1987.

[70] Daniel se negó a dar su verdadero nombre o cualquier tipo de identificación. En un primer momento se dirigió a la Vicaría de la Solidaridad, organización eclesiástica de defensa de los derechos humanos. Los trabajadores sociales de esta le presentaron a Max Pacheco, toda una institución en este campo, quien grabó su confesión y la llevó a la embajada estadounidense. Finalmente, Daniel accedió a encontrarse con los funcionarios de esta en el despacho de Pacheco en varias ocasiones. La última entrevista, mantenida con Larry Huffman, funcionario del consulado, tuvo lugar el 19 de agosto de 1987 al interior de un coche aparcado en una plaza pública. El confidente proporcionó entonces una lista de nombres de los integrantes de la unidad de Carabineros que, junto con su patrulla, había buscado y encontrado a Weisfeiler el 5 de enero de 1985. Asimismo, aseguró tener acceso al archivo que guardaba la CNI sobre el caso, en el que, según su declaración, se hacía constar que Boris había sido contratado por un cazador de nazis israelí para que siguiese la pista de fugitivos nacionalsocialistas que hubieran buscado refugio en la colonia.

[71] Al igual que sucedió con el informante del caso Horman, la embajada sopesó la posibilidad de que el testimonio de Daniel fuese una pista falsa, «algún tipo de retorcida estratagema, detallada en extremo, para engañar y avergonzar a la embajada». No obstante, a diferencia de lo sucedido con aquel, el personal de la embajada señaló: «No se nos ocurre qué puede querer ganar con esto el gobierno chileno». Véase el cablegrama de la embajada «Case of Boris Weisfeiler, Colonia Dignidad—New Information», 23 julio 1987.

[72] Cablegrama del Departamento de Estado, «Case of Missing American in Chile», 31 julio 1987.

[73] Véase la nota diplomática Nº 250, fechada el 5 de agosto de 1988.

[74] Bill Barkell a George Jones, «Recommendation to Request Court to Re-open Weisfeiler Case», 3 enero 1989.

[75] Embajada de Estados Unidos, cablegrama, «Request for Approval of Legal Services (W/W Case—Weisfeiler, Boris)», 6 octubre 1989.

[76] Embajada de Estados Unidos, memorando de la Oficina de Presupuestos y Finanzas, 6 febrero 1990.

[77] Embajada de Estados Unidos, cablegrama, «Anonymous Report Regarding 1985 Missing Amcit Boris Weisfeiler », 28 octubre 1997.

6. La Operación Cóndor: Terrorismo de Estado internacional

[1] DIA, informe secreto sobre la Operación Cóndor, «Special Operations Forces», 1 octubre 1976.

[2] Véase el informe de la CIA fechado el 27 de noviembre de 1973.

[3] Véase CIA, «Assassination of Former Chilean General Carlos Prats», Weekly Situation Report on International Terrorism, 2 octubre 1974.

[4] Después del asesinato, según informó la CIA, la hija de Prats regresó a Chile con el texto original de su autobiografía, que vio la luz once años más tarde con el título de Memorias. Testimonio de un soldado (Pehuén Editores, Santiago de Chile, 1985).

[5] En 1998, el Departamento de Justicia estadounidense autorizó a la jueza argentina Servini de Cubría para que viajase a Washington y entrevistara en secreto a Townley en relación con el asesinato de Prats. Durante el juicio a Arancibia, se citaron en sesión pública fragmentos selectos de su declaración, cuyo contenido íntegro se custodia en Argentina, clasificado aún de secreto.

[6] Véase «Testimonio secreto de Michael Townley», en la página web del periódico La Tercera.

[7] Según la declaración secreta de Townley, él y su esposa, Mariana Callejas, también agente de la Dina, hicieron explotar la bomba con un control remoto desde su propio vehículo, situado a poca distancia de la entrada al edificio de apartamentos en que vivía el matrimonio Prats.

[8] CIA, informe secreto de espionaje (asesinato del general Carlos Prats), 25 octubre 1974.

[9] Véase el cablegrama del Departamento de Estado «Assassination of General Prats», 24 octubre 1974.

[10] CIA, Weekly Situation Report on International Terrorism, «Assassination of Former Chilean General Carlos Prats», 2 octubre 1974.

[11] Los cablegramas enviados por Arancibia a la DINA con el nombre falso de Luis Felipe Alemparte se resumen en un extenso documento argentino llamado «Poder Judicial de la Nación».

[12] Beausire, joven adinerado, no tenía filiación política alguna: la única razón por la que lo buscaba la Dina era la intención de obligar a su hermana Mary Ann, casada con el dirigente del MIR Andrés Pascal Allende, a entregarse. Al saber de la detención de su madre y otros familiares, Beausire decidió abandonar Chile y regresar a Gran Bretaña. En el aeropuerto argentino, y a instancias de la Dina, los empleados de las instalaciones le anunciaron por megafonía que tenía una llamada, tras lo cual lo introdujeron, metido en una caja de madera, en el siguiente avión con destino a Santiago de Chile. Se cree que lo torturaron de forma brutal en Villa Grimaldi para obtener información del paradero de su hermana —dato que él desconocía— antes de hacerlo desaparecer.

[13] Los cablegramas de Arancibia, fechados el 11 de abril y el 27 de agosto, proceden del documento argentino «Poder Judicial de la Nación».

[14] Silberman, antiguo gerente general de la compañía Cobre-Chuqui, había desaparecido, en Chile, el 4 de octubre de 1974, fecha en la que se lo llevaron los hombres de la Dina de la prisión en que lo había confinado el régimen. Después, lo torturaron hasta acabar con su vida, con la intención,

al parecer, de hacer que revelase el paradero de los fondos de la empresa que, según se creía de manera errónea, se había apropiado tras el golpe. Cuando se acusó a los agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional de haberlo secuestrado, estos ingeniaron una elaborada justificación según la cual los responsables habían sido militantes del MIR que se habían hecho pasar por oficiales del Ejército.

[15] Se cree que los cadáveres, que nunca fueron identificados, pertenecían a las víctimas de los escuadrones de la muerte de los grupos paramilitares argentinos, y en especial de la AAA.

[16] Los agentes de la Dina arrestaron a Guendelman en su domicilio de Santiago el 2 de septiembre de 1974 y, según los testimonios de quienes estaban presos con él, fue visto por última vez en el recinto de detención de la Dina conocido como Cuatro Álamos.

[17] Véase The New York Times, «Chile's Version of Leftists' Fate Doubted», 3 agosto 1975.

[18] El Mercurio, 25 julio 1975.

[19] Dinges fue el primer periodista extranjero que desveló la historia de la Operación Colombo, al proporcionar a la revista Time detalles relativos a «las listas de los 119». También escribió acerca de semejante escándalo del ámbito de los derechos humanos con el pseudónimo de Ramón Marsano en National Catholic Reporter, «Anatomy of a Cover-up», 3 octubre 1975.

[20] Al verdadero Luis Alberto Guendelman le faltaba parte de la cadera, extraída durante una operación a la que se había sometido siendo niño. Sin embargo, el cadáver encontrado tenía intacta esa zona. Por su parte, el cuerpo atribuido a Jaime Robotham era cuatro dedos más bajo que el desaparecido. Además, la foto del documento de identidad hallado con el cadáver —tomada cuando este aún no había superado la adolescencia— era la misma que había proporcionado su madre a un supuesto investigador militar después de que lo secuestrasen, la Nochevieja de 1974, varios agentes armados.

[21] Cablegrama del Departamento de Estado, «Chilean Extremists Reported Killed or Disappeared Abroad», 26 julio 1975.

[22] Embajada estadounidense, cablegrama secreto, «Analysis of Deaths and Disappearances of Chilean Extremists», 8 agosto 1975.

[23] Tras brindarle durante meses un refugio seguro, la Dina envió a Bosch a principios de 1976 a Costa Rica con la misión —fallida— de acabar con la vida del dirigente socialista Pascal Allende. Finalmente, Bosch se dirigió a Venezuela e hizo de cerebro del ataque terrorista del 6 de octubre de 1976. Entre las víctimas del atentado aéreo se encontraban los veinticuatro miembros del equipo olímpico cubano de esgrima.

[24] Véase Branch y Propper, op. cit., p. 243.

[25] Ibid., p. 244. Según Taylor Branch y Eugene Propper, el explosivo se hallaba oculto en cajas de gofres que guardaban en la nevera del vehículo.

[26] CIA, informe secreto (planes para asesinar a exiliados políticos chilenos en Europa), 20 agosto 1974. Este informe constituye la prueba más temprana de que la CIA estaba al corriente de los asesinatos que estaba tratando de cometer el gobierno de Chile en el ámbito internacional.

[27] Véase Branch y Propper, op. cit., p. 310.

[28] FBI, informe de interrogatorio, «Attempted Assassination of Bernardo Leighton, October 6, 1975, Rome, Italy», 9 abril 1980.

[29] Véase la nota 43 del cap. 4.

[30] Departamento de Estado, Oficina de Inteligencia e Investigación, «South America: Southern Cone Security Practices», 19 julio 1976, p. 3.

[31] Véase Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, op. cit., vol. 2, p. 614.

[32] Dinges descubrió la conexión existente entre el arresto de Fuentes y el nacimiento de la Operación Cóndor en una serie de documentos de los «archivos del terror» paraguayos. Véase el amplio estudio que ofrece en The Condor Years, New Press, Nueva York, 2004. (Hay trad. esp.: Los años del Cóndor, Debate, 2021).

[33] FBI, carta de Scherrer al general Baeza, 6 junio 1975.

[34] Rivas Vásquez refirió los detalles de la visita de Contreras ante un jurado federal estadounidense el 29 de junio de 1978 como parte de la investigación relativa al asesinato de Letelier y Moffitt. La escena aparece descrita en Dinges y Landau, op. cit., pp. 156-157.

[35] En los archivos militares de Paraguay se encontró un programa pormenorizado de la Primera Reunión de Trabajo de Inteligencia Nacional con fecha del 29 de octubre de 1975.

[36] El subcomité, presidido por George McGovern, redactó, el 29 de octubre de 1975, un informe que sigue estando clasificado de altamente secreto y que llevaba por título «Staff Report on Activities of Certain Intelligence Agencies in the United States». Algunos fragmentos de este documento, que incluía una sección dedicada a las operaciones de la Dina, fueron filtrados en agosto de 1979 al columnista Jack Anderson, autor del primer artículo en torno a las actividades de la Operación Cóndor: «Condor: South American Assassins», The Washington Post, 2 agosto 1979.

[37] La participación de Townley en esta operación aparece revelada en Branch y Propper, op. cit., p. 324. Los objetivos de la misión eran dos periodistas chilenos, de los cuales uno tenía tal vez algún tipo de conexión con Carlos, El Chacal, quien estaba tratando de montar un periódico panamericano que sirviese de portavoz a una coalición de izquierda. Todo apunta a que los miembros de la Operación Cóndor tenían la intención de perturbar el congreso del Partido Socialista que se estaba celebrando en Portugal y socavar cualquier intento de establecer en Europa un frente unificado de relevancia capaz de aumentar la presión internacional a que estaban sometidos los regímenes del Cono Sur. Según Townley, la misión se desarrolló a finales de noviembre. Sin embargo, según los servicios de

inteligencia estadounidenses, fue en septiembre cuando se advirtió a Francia sobre la operación, lo que hace pensar que el otoño europeo no estaba tan avanzado.

[38] Departamento de Estado, informe vespertino de la INR, 23 noviembre 1976.

[39] A él asistieron personalidades tan destacadas como Willy Brandt, canciller de la República Federal de Alemania, y el dirigente socialista francés François Mitterrand. La misión de Townley se detalla en Branch y Propper, op. cit., pp. 324-325.

[40] Véase el cablegrama de la CIA fechado el 17 de abril de 1977.

[41] Este memorando, dirigido por un alto mando de la CNI, el coronel Jerónimo Pantoja, al viceministro de Relaciones Exteriores, reconsidera las comunicaciones con los funcionarios peruanos sobre el envío a Lima de un oficial de inteligencia. Tiene fecha del 14 de abril de 1978 y procede de fuentes chilenas.

[42] En una entrevista con el autor, White negó haber recibido nunca respuesta alguna del Departamento de Estado en relación con tan pasmosa información. Véase el cable que envió en torno a la reunión que había mantenido con uno de los principales ayudantes del general Stroessner, Alejandro Fretes Dávalos, jefe de Estado Mayor: «Second Meeting with Chief of Staff re: Letelier Case», 13 octubre 1978.

[43] Véase Departamento de Estado, «Aftermath of Kidnapping of Refugees in Buenos Aires», 15 junio 1976.

[44] Véase Stella Calloni, Los años del lobo: Operación Cóndor, Ediciones Continente, Buenos Aires, 1999, cap. 10. Calloni fue la primera especialista que cribó los documentos de Paraguay en busca de pruebas de las actividades de la Operación Cóndor.

[45] Véase el memorando de conversación «Meeting with Argentine Intelligence Service», archivado por James Blystone el 19 de junio de 1980.

Este documento constituye la única prueba de que se tiene conocimiento que demuestre que el gobierno conocía con anticipación la desaparición planeada.

[46] Cierta reseña biográfica elaborada por el Servicio Central de Referencia de la CIA, en coordinación con la Oficina de Inteligencia Actual, la Oficina de Investigación Económica y el Servicio Clandestino, después de que Letelier hubiese sido nombrado embajador de Chile en Washington, señalaba que «la familia tiene un perro ovejero inglés que atiende al nombre de Alfie y al que renunciarán cuando deban trasladarse a la residencia de la embajada». La fuente que confió a la CIA esta relevante información sigue siendo un misterio histórico.

[47] Informe de la CIA, «Subject: Plans of Chilean Leftists in Exile to Hold another Joint Meeting to Discuss Anti-Junta Strategy», 18 noviembre 1975. El último documento que añadió la Agencia al archivo de características individuales de Letelier tiene fecha 16 de septiembre de 1976, a tan solo cinco días de su muerte. El informe, que se entregó a las familias de ambas víctimas del atentado en 1980, está demasiado censurado para permitir determinar qué razón llevó a la CIA a dar cuentas de las actividades de Letelier en aquel preciso momento.

[48] Kissinger no respondió a las quejas planteadas por Pinochet en torno a Letelier. La transcripción se reproduce en el cap. 4.

[49] Véase Departamento de Estado, «The Letelier Case: Background and Factual Summary», enero 1989, p. 3. El memorando, de veinticuatro páginas, fue redactado con el fin de poder perseguir a quienes habían cometido el crimen después de que Pinochet entregase el poder a un gobierno civil.

[50] Ibid.

[51] Shlaudeman actuó de inmediato de acuerdo con la recomendación de Landau. Así, envió al Servicio de Inmigración y Nacionalización una memoria, a la que adjuntó las fotocopias de los pasaportes, y pidió que interrogasen a Romeral y a Williams si trataban de entrar en el país. Sin

embargo, el 22 de agosto llegaron a Miami dos oficiales chilenos con esos nombres, con pasaporte oficial de Chile, y no los detuvieron a pesar de figurar en la lista de quienes tenían que ser vigilados. En realidad, no eran sino señuelos enviados por la Dina para confundir a los funcionarios estadounidenses, pues Contreras estaba convencido de que buscaban a Townley y Fernández. En el momento del asesinato, ambos se hallaban formando parte de la comisión militar chilena en Washington.

[52] La cita de Abourezk procede del Congressional Record, 21 septiembre 1976, p. 31.464.

[53] Luers preparó un resumen informativo del encuentro destinado a Kissinger, quien se hallaba fuera de la ciudad. Véase «Briefing Memorandum: Ambassador Trucco and Orlando Letelier», 22 septiembre 1976.

[54] Fernández refirió esta conversación con su oficial superior durante la presentación de pruebas que efectuó ante el Departamento de Justicia estadounidense cuando huyó de Chile y se declaró culpable en 1987. Aparece citado en el historial de enero de 1989 del Departamento de Estado, «The Letelier Case: Background and Factual Summary», p. 7.

[55] Embajada de Estados Unidos, cablegrama, «Assassination of Orlando Letelier», 21 septiembre 1976.

[56] DIA, informe secreto, «Letelier Assassination Aftermath», 28 septiembre 1976.

[57] El cablegrama de Scherrer se hallaba adjunto a una comisión rogatoria por la que el Departamento de Justicia pedía información al Ministerio de Justicia chileno en 1978. Se publicó por vez primera en Dinges y Landau, op. cit.; más tarde se suspendió su carácter confidencial, con lo que se convirtió, hasta 1999, en el único documento disponible que demostraba que el Departamento de Estado tenía constancia de la existencia de la Operación Cóndor. El cablegrama enviado por la DIA desde Buenos Aires que se recoge aquí como documento 5 reproduce casi palabra por palabra el remitido por Scherrer.

[58] Departamento de Estado, cablegrama de acción, «Possible International Implications of Violent Deaths of Political Figures Abroad», 4 junio 1976.

[59] Cablegrama de la embajada, «Possible International Implications of Violent Deaths of Political Figures Abroad», 7 junio 1976.

[60] Departamento de Estado, actas secretas, «ARA-CIA Weekly Meeting—30 July 1976, Operation Condor», 3 agosto 1976.

[61] Departamento de Estado, informe secreto a Henry Kissinger acerca de la Operación Cóndor, «ARA Monthly Report (July): The "Third World War" and South America», 3 agosto 1976.

[62] Más allá del carácter compatible de sus ideologías militares, los regímenes del Cono Sur compartían, tal como informó Shlaudeman a Kissinger, «la sospecha de que incluso EE.UU. ha abandonado su voluntad de luchar con firmeza contra el comunismo después de la guerra de Vietnam y la distensión y degradación sociales». Por otra parte, tenían en común cierto «resentimiento por las críticas recibidas en torno a la cuestión de los derechos humanos, que a menudo se toma por un signo más de la acción envolvente de los rojos». Véase el «ARA Monthly Report (July): The "Third World War" and South America», p. 10.

[63] Departamento de Estado, cablegrama secreto de difusión restringida, «Operation Condor», 23 agosto 1976.

[64] Embajada de Estados Unidos, cablegrama secreto de difusión restringida enviado por el embajador David Popper, 24 agosto 1976.

[65] Departamento de Estado, cablegrama secreto del vicesecretario Harry Shlaudeman, «Operation Condor», 20 septiembre 1976.

[66] Véase el informe vespertino de la INR del 21 de septiembre de 1976: «Latin America: Political and Economic Cooperation in the Southern Cone».

[67] Departamento de Estado, cablegrama secreto del vicesecretario Harry Shlaudeman, con memorando «Operation Condor», 4 octubre 1976.

[68] «El 99 por ciento de los documentos de difusión restringida no era como este», aseguró McAfee en una entrevista mantenida con el autor. La forma de expresión de Shlaudeman «daba a entender que quien se hallaba detrás era la más alta autoridad del Departamento de Estado». Toda vez que la INR era responsable de la transmisión de este tipo de cablegramas, la única autorización que se mostró fue la del propio McAfee. A petición de Shlaudeman, el documento se envió a poco más de un puñado de oficinas: las de Kissinger, Habib, Shlaudeman, McAfee y administración. Entrevista con William McAfee, 15 diciembre 2001.

[69] CIA, cablegrama secreto (asesinato de Orlando Letelier), 6 octubre 1976. Cuando se hizo público por vez primera este documento y se entregó a las familias de Letelier y Moffitt en 1980, tras la demanda que entablaron acogiéndose a la Ley de Libertad de Información, se tacharon todas las referencias a Pinochet y al convencimiento expresado por el confidente de que el general era responsable del crimen. El cablegrama volvió a desclasificarse en noviembre de 2001, pero aún permanece muy mutilado.

[70] Este resumen del informe de la base sobre el encuentro aparece citado en el informe de Hinchey, CIA Activities in Chile, en la sección «Relationship with Contreras».

[71] Se ha puesto en entredicho la información de los archivos que indicaba que los dos agentes de la Dina pretendían viajar a Washington para encontrarse con el general Vernon Walters, subdirector de la CIA. «El general es perro viejo», escribió Robert Driscoll: «sabe cuidarse solo». Véase «The Paraguayan Caper», 15 octubre 1976.

[72] Estos artículos se citan en Dinges y Landau, op. cit., pp. 243-244.

[73] Hewson Ryan, entrevistado el 27 de abril de 1988 por Richard Nethercut para el Proyecto de Historia Oral de los Asuntos Exteriores de la Association for Diplomatic Studies and Training.

7. El ocaso del dictador: Del terrorismo a la transición

[1] El título del artículo de Jeremiah O'Leary, que ocupaba todo el ancho de la plana, era «U.S. Threatening to Sever Chilean Relations» (The Washington Star, 3 marzo 1978).

[2] Los militares chilenos fingieron en varias ocasiones estar buscando a Townley. Antes de llegar a su domicilio, lo ponían sobre aviso con el fin de que tuviera tiempo de esconderse. Para ello, solía servirse de un depósito de agua vacío situado en el tejado. Véase Branch y Propper, op. cit., p. 464.

[3] El acuerdo, firmado el 7 de abril de 1978, recibió el nombre de Silbert-Montero, dado que quienes lo suscribían eran el fiscal estadounidense Earl Silbert y Enrique Montero, miembro del Ministerio del Interior chileno.

[4] Los cinco cubanos eran los hermanos Guillermo e Ignacio Novo, Alvin Ross, Virgilio Paz y Dionisio Suárez. Los Novo y Ross fueron detenidos de inmediato, en tanto que Paz y Suárez lograron escapar y estuvieron huidos durante más de diez años antes de que los aprehendieran.

[5] CIA, informe secreto, «Chile: Implications of the Letelier Case», mayo 1978.

[6] Tras reunirse con Landau, Robert Pastor, especialista en Latinoamérica del CSN, puso a Zbigniew Brzezinski al corriente del encuentro en un memorando titulado «Conversation with our Ambassador to Chile, George Landau—June 28, 1978». El documento demuestra que los más altos funcionarios estadounidenses sabían que, si Contreras era responsable de la explosión del coche bomba, Pinochet debía de haberla autorizado.

[7] CIA, informe secreto, «[Deleted] Strategy of Chilean Government with Respect to Letelier Case, and Impact of Case on Stability of President Pinochet», 23 junio 1978.

[8] Informe sin título de la CIA, 24 mayo 1978.

[9] DIA, «Contreras Tentacles», 1 enero 1989.

[10]1 CIA, informe secreto, «[Deleted] Strategy of Chilean Government with Respect to Letelier Case, and Impact of Case on Stability of President Pinochet», 23 junio 1978.

[11] Este cablegrama de la CIA aparece recogido en una extensa relación de documentos que elaboró la Agencia para el proyecto de Desclasificación de Chile. Al lado del título aparece la frase: «Negada solicitud del FBI». El documento, que contiene pruebas de la implicación personal de Pinochet en la obstrucción de la justicia con respecto al caso Letelier, formaba parte de los cientos de testimonios escritos de los que se sirvieron el FBI y el Departamento de Justicia para investigar el papel desempeñado por el dictador en el asesinato. En el epílogo del presente volumen se tratan en profundidad estos textos.

[12] En 1987, once años después del asesinato, Fernández Larios huyó de Chile con la ayuda secreta del FBI y, en el transcurso de un interrogatorio de más de diez horas, reveló el afán de Pinochet por impedir que ofreciese su testimonio tras los asesinatos. Véase el informe secreto del Departamento de Estado sobre el caso Letelier, 26 enero 1987.

[13] CIA, cablegrama informativo, «Government Sponsored Propaganda Campaign Re US Interference in Chile», 26 mayo 1978.

[14] Véase el capítulo 6, donde se recoge una descripción de los empeños de Contreras en obtener visados estadounidenses en Asunción con el objetivo de ocultar la función de Chile en la misión homicida, así como del papel desempeñado por el embajador Landau al fotocopiar los pasaportes y las fotografías.

[15] En una entrevista telefónica con el autor desde su oficina de Florida, el embajador Landau declaró que ni él ni el Departamento de Estado habían relacionado el afán de los agentes chilenos por obtener los visados en Paraguay con el asesinato de Letelier y Moffitt hasta principios de 1978. «Si lo hubiésemos hecho», dijo, «nunca me habrían destinado a Chile tras dejar mi puesto en la embajada de Paraguay».

[16] CIA, memorando sin título, 24 agosto 1978.

[17] Véase la memoria elaborada por la CIA el 21 de agosto de 1978 acerca del encuentro mantenido con miembros del Departamento de Estado y el de Justicia en torno al caso Letelier.

[18] La CIA no ha querido aún hacer público este informe, que tal vez constituya el resumen más amplio de la relación que mantenía con Contreras. Incluso su título permanece en secreto.

[19] Embajada de Estados Unidos, cablegrama secreto, «Letelier/Moffitt Assassination Case: Manuel Contreras», 24 agosto 1978.

[20] Entrevista con el autor.

[21] Id. Véase también el memorando confidencial de conversación fechado el 22 de septiembre de 1978 y sin titular, escrito por el oficial de la embajada Félix Vargas y basado en una charla con el periodista que habló con Miranda.

[22] Entrevista con el autor. Véase también Branch y Propper, op. cit., p. 584. Esta versión sitúa el episodio entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre de 1978. Sin embargo, los cablegramas que han salido a la luz dejan bien claro que Contreras emprendió su intento de chantaje el 23 de agosto, día en que envió a Puga en calidad de intermediario entre él y el personal de la CIA en Santiago.

[23] Véase McNeil a Michael Armacost, «Possible Approach by Chilean Representatives of General Contreras to DOD Officials», 29 agosto 1978.

[24] Véase la memoria de McNeil «Letelier Case», 30 octubre 1978.

[25] Pastor a Brzezinski, «U.S. Policy to Chile—Reaching the Crunch Point on Letelier», 25 mayo 1979.

[26] La conversación se describe en Branch y Propper, op. cit., p. 594.

[27] De la declaración de Landau quedó constancia en el cablegrama del Departamento de Estado «Instructions Re U.S. Reaction to Outcome of Letelier Case», 1 junio 1978.

[28] Derian a Christopher, secreto, «Letelier Case», 21 septiembre 1979.

[29] Derian a Vance, secreto, «Letelier-Moffitt—ARA Memorandum of October 12, 1979», 12 octubre 1979.

[30] Los antiguos integrantes del Departamento de Estado y del de Justicia entrevistados para la elaboración del presente volumen admitieron que se mantuvo a la Casa Blanca en general, y a Pastor en particular, al margen de toda noticia relativa a la investigación de los asesinatos. La poca inclinación a compartir esta información se debió al afán de que dio muestras el fiscal Eugene Propper por mantener la causa criminal lejos de toda politización y evitar posibles filtraciones. «Para informar a la Casa Blanca tendríamos que haber pasado sobre su cadáver», señaló uno de los funcionarios del Departamento de Estado al recordar la postura de Propper. De cualquier manera, los memorandos de Pastor dan fe de que en mayo de 1979 estaba al corriente de la existencia de «pruebas de peso de la injerencia de Pinochet en el tribunal». En la memoria enviada a Brzezinski el 25 de mayo de 1979 escribió: «Yo no he seguido este caso de cerca, pero [el vicesecretario] Christopher sí, y no puedo menos de sorprenderme de lo que opinan él y otros miembros del Departamento de Estado y del carácter ilegítimo de la decisión adoptada por Chile». Llegado el 11 de octubre, sin embargo, pensaba que debía darse respuesta a tres preguntas fundamentales antes de que Estados Unidos pudiese aplicar las sanciones: 1) «¿Qué justifica nuestro disentimiento en relación con la decisión de la Corte Suprema de Chile?». 2) «¿Qué derecho tiene el Departamento de Estado a juzgar las leyes y actuaciones jurídicas de otro gobierno?». Y 3) «¿Cuáles son nuestros objetivos en lo tocante al caso Letelier y las relaciones de Estados Unidos con Chile?». Véase Pastor a Brzezinski, «Reaction to Chile's Decision on Letelier», 11 octubre 1979.

[31] El Departamento de Justicia redactó, el 15 de octubre, un memorando en el que se exponían las pruebas que demostraban, fuera de toda duda, la implicación de Chile en el asesinato con el objetivo de acabar con el

escepticismo de Pastor y Vaky. «El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene, de un modo persuasivo, que no deberá basarse acción futura alguna en la idea de que las pruebas presentadas por la nación puedan pecar de inconcluyentes».

[32] Barcella me ha descrito el horror que le produjo esta cuestión, así como lo sucedido en aquella reunión, durante cuyo transcurso reparó en que las sanciones no iban a ser proporcionales al crimen cometido. Las citas están recogidas en Branch y Propper, op. cit., p. 598.

[33] Departamento de Estado, informe de Cyrus Vance para poner al presidente Carter al corriente de las diversas opciones que se le presentan, «Letelier/Moffitt Case», 19 octubre 1979.

[34] El secretario de Defensa, Harold Brown, trató por todos los medios de evitar que se retirase de Chile al MilGroup. En una memoria secreta remitida a Vance y Brzezinski con fecha 9 de octubre de 1979, alegó que la situación existente en Nicaragua y El Salvador, las relaciones poco prósperas con Argentina y el peligro de conceder a los soviéticos «una nueva oportunidad en Chile» aconsejaban no clausurar la oficina de enlace militar estadounidense en el país. Pastor desechó estos temores, que calificó de «burocráticamente interesados» y «poco sensatos». Sin embargo, Brzezinski se decidió por la solución intermedia, que comportaba reducir el número de los integrantes del grupo para evitar cerrarlo por completo.

[35] Carter desestimó la recomendación número 5: «Anular la aprobación de las licencias de exportaciones con destino a las Fuerzas Armadas chilenas», medida que habría implicado el uso de controles a la exportación para evitar que el régimen de Pinochet adquiriera bienes procedentes de las empresas estadounidenses por valor de varios millones de dólares. Había una séptima opción, pero no se centraba en las sanciones, sino en la declaración oficial por la que se darían a conocer.

[36] El estamento burocrático solo necesitó dos meses para comenzar una campaña concebida para rescindir o limitar las sanciones, empezando por la concerniente a las maniobras UNITAS. En febrero de 1980, Thomas Thorton, uno de los ayudantes de Brzezinski, le escribió acerca de aquellas:

«La cuestión que hay que plantearse es si queremos seguir castigando a los chilenos por este hecho. ¿Queremos que sea una acción de tiempo limitado o debe convertirse, por el contrario, en un factor semipermanente de las relaciones entre Estados Unidos y Chile? En mi opinión, deberíamos dejar pasar este asunto (y en este sentido la decisión relativa a las maniobras UNITAS sería la última que tomamos bajo su influencia) y juzgar las cuestiones que surjan en un futuro en las relaciones chileno-estadounidenses según los méritos de Chile y su comportamiento general». Robert Pastor se opuso enérgicamente a esta postura, y eso es algo que lo honra. En un memorando que envió a Brzezinski el 20 de febrero de 1980 para comentar lo expuesto por Thorton, declaró que «resultaría embarazoso en extremo para el presidente que actuemos como si no hubiese ocurrido nada, tal como sugiere la participación chilena en las maniobras UNITAS cuatro meses después de haber anunciado una postura firme y decidida». Pastor observó también que el antiguo ayudante de Patricia Derian, Mark Schneider, se hallaba dirigiendo la campaña de Edward Kennedy para las elecciones primarias, en las que se disputaba con Jimmy Carter la candidatura para las presidenciales. «Kennedy aprovechará cualquier oportunidad», señaló, «y puede usted estar seguro por completo de que la decisión de dejar atrás la "fase Letelier" y proseguir con los ejercicios multinacionales UNITAS no va a pasar inadvertida».

[37] Departamento de Estado, memorando secreto de Alexander Haig para el presidente Reagan, «Our Policy Toward Chile», 16 febrero 1981.

[38] Transcripción de una emisión radiofónica sin fecha. Reagan basó sus comentarios en un informe redactado por el sector de extrema derecha del Consejo para la Seguridad Interamericana. Al parecer hizo caso omiso de las pruebas reunidas por el FBI, que demostraban la culpabilidad del régimen de Pinochet, y atribuyó esta a «los grupos izquierdistas y su afán por hacer que nuestro gobierno culpase al de Chile».

[39] Walters hizo esta declaración durante una audiencia celebrada el 10 de marzo de 1981 para determinar ante el Subcomité de Relaciones Interamericanas y el Subcomité de Política Económica Internacional si debían levantarse las sanciones.

[40] El artículo de Kirkpatrick proporcionó la base teórica necesaria para las críticas que vertió Reagan en su campaña presidencial al enfoque adoptado por el gobierno de Carter en lo tocante a los derechos humanos. Una vez en el poder, Reagan no dudó en nombrarla embajadora ante las Naciones Unidas. Véase «Dictatorships and Double Standards», Commentary, vol. 68, Nº 5 (noviembre 1979). Para una refutación del artículo en lo relativo al régimen de Pinochet, véase Robert Kaufman y Arturo Valenzuela, «Authoritarian Chile: Implications for American Foreign Policy», en Richard Newhouse (ed.), Gunboats and Diplomacy, Democratic Policy Committee, Washington, 1982.

[41] El gobierno de Carter, siguiendo lo estipulado por la ley, votó ocho veces consecutivas en contra de la concesión de préstamos a Chile, en tanto que el de Reagan se limitó a negar que el régimen pinochetista violara de forma reiterada los derechos humanos y cumpliera, por lo tanto, «las condiciones que requerirían un voto negativo».

[42] Cablegrama confidencial de Walters a Haig, «Chile/El Salvador», 27 febrero 1981.

[43] Helms hizo estos comentarios durante el debate senatorial acerca de la derogación de la Enmienda Kennedy, celebrado el 22 de octubre de 1981. El autor se hallaba presente en calidad de espectador. Para las actas completas del debate, véase Congressional Record, 22 octubre 1982, pp. 11.894-11.917.

[44] Abrams a Eagleburger, 13 marzo 1982.

[45] CSN, apuntes de Oliver North (misiles chilenos para los contrarrevolucionarios de Nicaragua), 17 diciembre 1984.

[46] CSN, correo electrónico de Oliver North a Robert McFarlane acerca de los intentos de organizar la entrega de armas chilenas a las fuerzas contrarrevolucionarias, «Anything New?», 26 marzo 1986.

[47] Estados Unidos siguió tratando de obtener clandestinamente armas de Chile hasta que, en noviembre de 1986, surgió el escándalo Irán-Contra,

que costó el puesto a North. Para una relación completa del papel desempeñado por Chile en las operaciones que lo provocaron, véase Peter Kornbluh, «The Chilean Missile Caper», The Nation, 18 mayo 1988.

[48] Departamento de Estado, memorando secreto de acción, «U.S. Policy Toward Chile», 20 diciembre 1984.

[49] Los empeños de la oposición por organizarse en contra del régimen se recogen de forma amplia en Mark Ensalaco, Chile Under Pinochet: Recovering the Truth, University of Pennsylvania Press, Filadelfia, 2000, capítulos 6 y 7. (Hay trad. esp.: Chile bajo Pinochet: La recuperación de la verdad, Alianza, Madrid, 2002).

[50] Véase CIA, «Chile: How Authoritarian is Pinochet's Constitution?», 17 mayo 1988.

[51] Citado en Spooner, op. cit., p. 202. Véase también The New York Times, 16 mayo 1986.

[52] Motley a Shultz, «Chile and My Visit», 21 febrero 1985. Abrams se opuso a la tendencia de Motley —compartida por el CSN— a no expresar en público las críticas al régimen. En un memorando enviado el 27 de diciembre de 1984 a Kenneth Dam, ayudante del secretario de Estado, alegó: «Si renunciamos a censurar en público la represión chilena (…) no haremos sino provocar la reacción del Congreso, lo que acabará por atarnos las manos y echar por tierra nuestros planes políticos. No creo que la actitud de no criticar al régimen en público que propone el CSN sea sensata, porque estoy convencido de que tenemos que dejar bien clara nuestra posición en favor de los derechos humanos ante el pueblo de Chile y, lo que es aún más importante, el de Estados Unidos».

[53] Departamento de Estado, memorando de George Shultz para el presidente Reagan, «U.S. Policy Seeks Peaceful Transition in Chile Based on Broad National Consensus», 3 septiembre 1985.

[54] Yo conocía a Rodrigo y a su familia, y pasé mucho tiempo con él durante su etapa de crecimiento en Washington. En cierto momento, me

invitó a dar una charla en la escuela Wilson, durante su clase de Educación Cívica, acerca de la intervención de Estados Unidos en el golpe de Estado y las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de Pinochet; aunque tampoco era extraño que hiciese la cimarra para pasar el rato en mi despacho. Algunos meses antes de acabar su último curso decidió dejar los estudios y volver a Chile. La que era entonces mi esposa, Eliana Loveluck, y yo salimos con él a comer y tratamos de hacerle ver que, si asistía a clase solo unas semanas más, lo iba a agradecer el resto de sus días y podría regresar a Chile con el título de Secundaria. Sin embargo, Rodrigo era un joven testarudo y rebelde, y, aunque nos escuchó, decidió, de todos modos, seguir con sus planes. Muchas veces me he dicho que, si hubiésemos logrado persuadirlo a acabar sus estudios y aplazar su viaje hasta las vacaciones de 1986, tal vez no habría ido a la manifestación en Santiago aquel trágico día de julio.

[55] Departamento de Estado, cablegrama, «W/W: Case of Rodrigo Rojas de Negri», 8 julio 1986.

[56] Carmen Quintana sobrevivió de forma milagrosa. Las decididas quejas ante lo inadecuado de los cuidados recibidos que tramitaron John Constable, médico del Hospital General de Massachusetts, y la madre de Rojas, Verónica de Negri, quienes habían viajado en avión a Santiago, lograron que Quintana fuese trasladada a la unidad de quemados del Hospital del Trabajador pocas horas después de la muerte de Rodrigo. De allí la llevaron a Canadá, donde la sometieron a operaciones de reconstrucción facial e injertos de piel en el transcurso de varios años. Finalmente, pudo regresar a Chile una vez restaurado el gobierno civil.

[57] Reagan recibió también información de que el senador Jesse Helms, que se encontraba a la sazón en Santiago, estaba ayudando al gobierno a difamar a las víctimas y exonerar al régimen. Helms se reunió en privado con Pinochet durante dos horas y se convirtió en cómplice del encubrimiento del crimen. «La habéis cagado: tú y los de Washington», dijo Helms a Barnes durante una reunión privada en el hotel santiaguino Crowne Plaza. Según una memoria de la conversación que ha salido a la luz, el senador «aseguró no ser un apologista acérrimo de Pinochet, pero que este, a pesar de sus defectos, era mejor que lo que, según todos los indicios,

llegaría tras él». En sus declaraciones públicas, el senador acusó a Rojas de «terrorista comunista» y a Barnes, de «enarbolar la bandera estadounidense en medio de una actividad comunista», y apremió a Reagan para que lo hiciese volver a Washington. Para un extenso relato del empeño de Helms en proteger a los responsables de este crimen, véase Jon Elliston, «Deadly Alliance», The Independent Weekly, 23 mayo 2001.

[58] Cierta fuente fiable comunicó a la embajada que, el 10 de julio, el general Rodolfo Stange, general director de Carabineros y miembro de la Junta Militar, redactó para Pinochet un informe de una página en el que identificaba al personal del Ejército que prendió fuego a Rojas y a Quintana y se deshizo de ellos. Véase el cablegrama de la embajada «Information Regarding the Rodrigo Rojas Investigation», 22 julio 1986.

[59] Lagos dio un gran impulso a la campaña al aparecer en televisión, en abril de 1988, y dirigirse sin ambages a Pinochet en estos términos: «Y ahora, le promete [usted] al país otros ocho años con tortura, con asesinatos, con violación de derechos humanos». Véase Constable y Valenzuela, A Nation of Enemies, W. W. Norton, Nueva York, 1991, p. 306.

[60] Barnes a Abrams, 1 octubre 1988.

[61] Departamento de Estado, cablegrama a Santiago, «Chile—Trying to Deter Possible Government Action to Suspend or Nullify Plebiscite», 1 octubre 1988.

[62] El nombre del informante está tachado, pero los archivos de la DIA indican que se trataba del general de las Fuerzas Armadas y miembro de la Junta Fernando Matthei, que fue quien mostró una actitud más firme en contra de los propósitos de Pinochet.

[63] El general Zincke es, tal vez, el héroe olvidado en lo que concierne a los empeños por desbaratar los planes de Pinochet. El 30 de septiembre, durante una reunión con la directora de la asociación de educación cívica Civitas, uno de los grupos de información al votante que se beneficiaron del respaldo estadounidense, Zincke mencionó una conjura comunista destinada a fomentar la violencia para echar por tierra los comicios. «Las

personas con las que habló», indicó aquel día el embajador Barnes en un cablegrama enviado al Departamento de Estado, al vicesecretario Abrams, «están convencidas de que, por razones que desconocen, les estaba advirtiendo, en realidad, de lo que planeaba (…) el Ejército, y no los comunistas». Si bien no se sabe si el general Zincke proporcionó más tarde detalles de importancia de esta trama a los agentes de los servicios de espionaje estadounidenses, lo cierto es que, cuando menos, los incitó a ponerse en acción a fin de determinar la naturaleza de las maquinaciones de Pinochet para mantenerse en el poder.

[64] Este informe de la CIA tiene fecha del 18 de noviembre de 1988.

[65] DIA, informe, «Chilean Junta Meeting—The Night of the Plebiscite», 1 enero 1989.

[66] Embajada de Estados Unidos, cablegrama, «Mendoza Human Rights Concert Sounds Sour Note for Chilean Government», 24 octubre 1988. El funcionario de la embajada informó que el concierto —que duró en total diez horas— comenzó con «¿Por qué no se van?», canción que dedicaron a Pinochet y fue acogida con evidentes muestras de aprobación por parte de la multitud. El momento culminante de aquel acontecimiento fue, para el diplomático convertido en crítico de rock, la interpretación que hicieron Sting y Peter Gabriel de «La cueca sola» junto con mujeres de Chile y Argentina que habían perdido a sus seres queridos. Entre las que bailaron con Sting sobre el escenario se encontraba Verónica de Negri, madre de Rodrigo Rojas. La conclusión del cablegrama, no por obvia menos importante, era la siguiente: «La reacción producida por el concierto de rock de Mendoza da a entender que la situación vivida en Chile con respecto a los derechos humanos sigue siendo una cuestión emocional que persistirá a pesar de la apertura política». (Debo dar las gracias a Sarah Anderson y a Stacy Jonas, del Instituto de Estudios Políticos, que hicieron que prestase atención a este documento).

[67] Véase «Vice President Trip to Barbados, Venezuela, Chile, Paraguay, Argentina, and Brazil, March 9-16, 1990». En un informe confidencial en el que se exponían los hechos que debía tener en cuenta Quayle durante su encuentro con Pinochet, se le advertía que el general había «jurado

enfrentarse al gobierno civil si este trata de procesar a los oficiales del Ejército acusados de violar los derechos humanos o atacar la posición de los militares». Entre los asuntos que debía plantear se hallaba el de exhortar a Pinochet «a secundar nuestro afán por lograr que se haga justicia con los responsables de (…) cierto acto de terrorismo cometido en la capital estadounidense». «Estados Unidos insiste en que se alcance la resolución de este caso», debía decir Quayle, «y no normalizaremos nuestras relaciones hasta que se haya conseguido».

8. Crímenes atroces y responsabilidad: El largo epílogo del caso Pinochet

[1] Entrevista con el autor.

[2] Para hacer que Madrid exigiese el procesamiento de Pinochet, Garcés se sirvió en particular del caso del ciudadano español Carmelo Soria, economista que trabajaba en Chile para las Naciones Unidas con pasaporte diplomático. El 15 de julio de 1976 fue detenido por agentes de la Dina y llevado, según quienes investigaron los delitos cometidos contra los derechos humanos, al sótano de una cárcel clandestina de la Dirección de Inteligencia Nacional, donde le partieron el cuello durante una sesión de tortura. Entonces, los agentes de Pinochet derramaron alcohol sobre su ropa y escribieron una nota falsa de suicidio. Su coche y su cadáver aparecieron al día siguiente en una acequia.

[3] La hija de Pinochet lo había persuadido a hacer una entrevista sin precedentes para una revista estadounidense, convencida, según lo expresó su autor, Jon Lee Anderson, de que, «si la gente entendiese mejor a su padre, no lo calumniaría tanto».

[4] Véase «Spanish Request to Question General Pinochet», 14 octubre 1998, recogido más tarde en Reed Brody y Michael Ratner, The Pinochet Papers: The Case of Augusto Pinochet in Spain and Britain, Kluwar Law International, La Haya, 2000, p. 55.

[5] Citado en Peter Kornbluh, «Prisoner Pinochet», The Nation, 29 noviembre, 1998.

[6] Fui testigo de estas declaraciones ante la Cámara de los Lores entre el 3 y el 13 de noviembre de 1998. Las citas pueden encontrarse en mi artículo «Prisoner Pinochet», op. cit.

[7] Los abogados de Pinochet argumentaron con éxito que el juez Hoffmann, cuyo voto resultó decisivo, había omitido revelar que colaboraba con Amnistía Internacional, entidad para la que recaudaba fondos, y no podía, por ende, ser imparcial en aquella causa. En consecuencia, se programó, para mediados de enero de 1999, una segunda sesión de declaraciones.

[8] Para un análisis detallado del modo como manejó el gobierno la cuestión de los derechos humanos en Chile, véase Ensalaco, op. cit., cap. 8.

[9] Véase la introducción de Zalaquett a la edición inglesa de Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, op. cit., p. xxxii.

[10] Véase el provocador artículo de Wilde, «Irruptions of Memory: Expressive Politics in Chile's Transition to Democracy», Journal of Latin American Studies, vol. 31, 2ª parte, mayo 1999.

[11] Cuando Chile se negó a pagar una indemnización, el recién constituido gobierno de Bush invocó el Tratado para la Solución de las Dificultades que surgieren entre Chile y Estados Unidos de América, firmado en 1914 y conocido también como el Tratado Bryan. Este acuerdo proporcionaba los pilares necesarios para cimentar las negociaciones bilaterales en torno al asunto de la indemnización. Para una amplia exposición cronológica del modo como evolucionó el caso a finales de la década de 1980, véase Departamento de Estado, «The Letelier Case: Background and Factual Summary» (24 pp.), enero 1989.

[12] Kozak recomendó acudir al ministro de Relaciones Exteriores de Pinochet y garantizarle que Estados Unidos tenía la intención de hacer responsable al gobierno de todo lo que hiciese Contreras. El memorando

manuscrito no tiene fecha, pero se elaboró, sin duda, en respuesta al cablegrama enviado por la embajada el 10 de febrero.

[13] Véase el cablegrama de la embajada «Letelier-Moffitt Case: Pursuing it with the Armed Forces», 30 mayo 1989.

[14] Tal como aseguraron Moffitt y Buffone durante la reunión, lo que preocupaba a los familiares —incluidos los miembros de la familia de Letelier que residían en Santiago— era que el gobierno de Bush pudiese certificar que Chile estaba colaborando en el caso Letelier y Moffitt antes de que hubiera comenzado el proceso o se hubiera alcanzado un acuerdo en lo tocante a las indemnizaciones. Según un memorando de la conversación, tanto Moffitt como Buffone pidieron que se les presentase el calendario de las acciones que emprendería el gobierno chileno al respecto, y propusieron, como medida de presión, que la administración estadounidense volviese a iniciar las gestiones pertinentes para extraditar a los oficiales de la Dina. Pese a que no dejó de asegurarse a los familiares que el que se hiciera justicia en el caso seguía siendo una condición indispensable para abrogar la Enmienda Kennedy, los documentos secretos del Departamento de Estado demuestran que los funcionarios del gobierno estadounidense habían llegado a la conclusión de que el presidente concedería la certificación a Chile si Aylwin accedía a transferir el caso de un tribunal militar a uno civil y habían planeado que el presidente Bush anunciara tal decisión durante su viaje a Santiago.

[15] La lucha por que se hiciera justicia en el caso Letelier avanzó también en Estados Unidos. En 1990 y 1991 fueron detenidos y encarcelados los dos exiliados cubanos fugitivos, Dionisio Suárez y Virgilio Paz. El primero fue aprehendido en abril y condenado en julio, mientras que Paz, que fue quien apretó el detonador del coche bomba, fue apresado un día después de que se anunciase su participación en el doble asesinato en el programa televisivo de la Fox «America’s Most Wanted» («Los más buscados de Estados Unidos»). El 30 de julio de 1991 se declaró culpable de conspiración para asesinar a un funcionario extranjero con el objetivo de que le fuese anulada la imputación del atentado contra Letelier y Moffitt, con lo que la sentencia quedó en doce años de prisión.

[16] Véase Peter Kornbluh, «Prisoner Pinochet», The Nation, 11 diciembre 1998.

[17] DIA, bosquejo biográfico, «General Augusto Pinochet Ugarte», February 1983.

[18] Entrevista con el autor.

[19] Véase The Washington Post, 2 diciembre 1998.

[20] La persona con la que me entrevisté recordaba el argumento expuesto por el director de la sección chilena: «Si solo publicásemos lo relativo a los años de Pinochet, los chilenos pensarían que el proyecto es poco ecuánime; daría la impresión de que solo vamos tras la derecha. Por lo tanto, debería sacarse también a la luz el período de Allende».

[21] CSN, hoja de trabajo, «Declassifying Documents Related to Human Rights Abuses in Chile». February 1, 1999.

[22] La publicación de la porción I se retrasó varios días, ya que, cuando Henry Kissinger supo de lo que pretendía realizar el gobierno, hizo que su despacho se pusiera en contacto con el asesor de Seguridad Nacional Sandy Berger y le pidiera una copia de todos los documentos para examinarlos antes de que salieran a la luz.

[23] El CSN no se cansó de prometer a Joyce Horman que las revelaciones finales se producirían en abril, fecha en que saldrían a la luz todos los archivos que faltaban —y que incluían documentos de la CIA y el Pentágono que la familia llevaba mucho tiempo pidiendo—. Llegado el mes prometido, la fecha se aplazó para junio, y cuando la viuda de Charles Horman supo que volvería a retrasarse la publicación de los archivos solicitó a William Leary, presidente del grupo de trabajo, que entregase, tal como estaba programado, los que tenían relación con su caso. «La familia Horman han esperado pacientemente, al igual que muchas otras, para conocer el contenido de esos documentos. La CIA, el CSN, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y el Pentágono deberían haber levantado el secreto que pesa sobre los papeles que se refieren a nuestro caso a finales de

junio o a finales de octubre, y no deja de ser un hecho muy desafortunado el que no hayan sabido satisfacer la petición del presidente en las fechas previstas», escribió en mayo de 2000. La Casa Blanca accedió y publicó, a la vez, los documentos relativos a Teruggi y Weisfeiler.

[24] La Agencia contaba con una modificación introducida en la FOIA en 1984 y conocida como la Ley de Información de la CIA, que la eximía de la entrega de documentos operativos en tales casos. Sin embargo, la Ley de Información sobre Chile estipulaba de forma explícita que los documentos de este tipo que hubiesen sido con anterioridad objeto de investigación por parte del Congreso o los tribunales de justicia estaban sujetos a la FOIA y, dado que la Agencia se había visto obligada a compartir con el Departamento de Justicia casi todos sus archivos referentes a Chile en la investigación de los casos de Helms y Horman, así como a presentar muchos de los documentos de la Dirección de Operaciones ante el comité de investigación del Senado a mediados de la década de 1970, la ley no ofrecía a estos testimonios protección alguna frente a quienes solicitaban que fuesen revisados si debían formar parte del proyecto de Desclasificación de Chile.

[25] Esta conversación se encuentra recogida en «Still Hidden: A Full Record of What the U.S. did in Chile», The Washington Post, 24 octubre 1999.

[26] Entrevista con un miembro del grupo de trabajo.

[27] La Agencia de Seguridad Nacional mantiene aún en secreto seis documentos relativos al caso de Horman. En una carta enviada al autor el 1 de diciembre de 1999, este organismo declaró: «Los documentos, cuyas fechas van de septiembre de 1973 a febrero de 1974, no contienen información alguna que pueda servir para identificar a los responsables de la muerte del Sr. Horman o determinar las circunstancias en que esta se produjo. Los documentos dan a entender que el Sr. Horman fue detenido y liberado el 20 de septiembre de 1973 o un día cercano a este, aunque sugieren que su paradero era desconocido».

[28] En «IWG [grupo de trabajo conformado por diversos organismos] on Chile Documents», uno de los primeros memorandos internos que escribió acerca del proceso de desclasificación, William Leary hizo saber a la CIA, el Departamento de Justicia, el Departamento de Defensa, el FBI y el Departamento de Estado que «el CSN presidiría las sesiones conjuntas de desclasificación con el fin de facilitar su revisión a terceros organismos». La idea consistía en examinar de forma rápida y conjunta los documentos que tuviesen relación con más de una entidad —como, por ejemplo, informes presidenciales emitidos por la CIA— con el objetivo de determinar qué fragmentos debían ser censurados.

[29] La carta tiene fecha del 16 de septiembre de 1999. En ella se hacía ver que «si tenemos en cuenta que Estados Unidos está instando a países como Alemania, Suiza y Guatemala a reconocer y enmendar los errores del pasado, el empeño de la CIA por hacer que ocultemos nuestra propia historia no puede sino socavar la credibilidad de nuestra política». En una respuesta enviada a Blanton el 30 de noviembre, Berger escribió: «Me han asegurado que el material de la CIA revisado y revelado en la última fase (…) incluirá documentos operativos de relevancia (relacionados, por ejemplo, con la acción encubierta o con las declaraciones prestadas en 1975 ante el Comité Church) y archivos divulgados fuera de la Dirección de Operaciones».

[30] «Exposing America’s Role in Chile», The New York Times, 6 octubre 1999.

[31] Tenet incluyó esta declaración en una extensa carta remitida el 11 de agosto de 2000 al diputado George Miller, quien le había escrito para censurar su decisión de retener los documentos.

[32] El encargado de revisarlos en representación del CSN fue William Leary, en tanto que el Departamento de Estado encomendó esta labor a Adolf Hal Eisner. La densa redacción de muchos de los documentos de la CIA los llevó a quejarse de que era imposible determinar lo delicado de su contenido.

[33] Véase su rueda de prensa, «CIA Finally Responds to Hinchey Legislation, Report on U.S. Involvement in Pinochet Coup Due», 14 septiembre 2000.

[34] El 7 de septiembre, la CIA presentó una versión del informe clasificada como secreta al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Según las fuentes que han leído ambas versiones, la principal diferencia radica en que la confidencial citaba la cantidad de dinero recibida de la CIA por Manuel Contreras y nombraba a los dos oficiales del NIC autores del informe.

[35] CIA Activities in Chile, 18 septiembre 2000, p. 15. La enmienda de Hinchey pretendía, a todas luces, que la Agencia informase acerca de las acciones más generales emprendidas en respaldo de la consolidación del régimen en el poder. Sin embargo, la CIA prefirió interpretar que se le estaba preguntando si había ayudado a Pinochet a superar estratégicamente a otros militares para convertirse en el cabecilla de la Junta Militar y «presidente» de Chile.

[36] Ibid., p. 5.

[37] Véase el cap. 4, donde se recoge una amplia exposición de la interacción de la CIA con Contreras y la Dina.

[38] Casa Blanca, «Statement by the Press Secretary [on Final Chile Declassification Release]», 13 noviembre 2000.

[39] A principios de 2000 recurrí a la FOIA a fin de obtener de la NARA información sobre qué documentos de las bibliotecas presidenciales de Nixon, Ford, Carter y Reagan se habían entregado al proyecto de Desclasificación de Chile y cuáles no habían podido sacarse a la luz. En las listas de documentos denegados que me proporcionaron había más de trescientos títulos.

[40] El Archivo de Seguridad Nacional entabló con éxito una demanda contra el gobierno de Estados Unidos para recuperar la transcripción de las conversaciones de Kissinger. El primer juego de estas, grabadas cuando

ocupaba el cargo de asesor de Seguridad Nacional, debía hacerse público a mediados de 2003. Los historiadores del Departamento de Estado, por su parte, lograron también acceder a estos documentos, que emplearon en la serie Foreign Relations of the United States.

[41] Entrevista del autor. Uno de los aspectos en los que centraron su atención los investigadores fueron las pruebas relativas a los motivos que tenía Pinochet para asesinar a Letelier. Los documentos ultrasecretos de la CIA y la DIA a los que tuvo acceso el FBI daban fe de su participación en la decisión, tomada once días antes de su asesinato, de despojarlo de su nacionalidad chilena. Los investigadores estadounidenses entrevistaron en Chile a varios testigos que podían aclarar estos hechos y llegaron a la conclusión de que Pinochet estaba «obsesionado» con Letelier. Véase The Washington Post, 28 mayo 2000.

[42] Esta fuente habló con la reportera chilena Pascale Bonnefoy. Véase «FBI pide procesar a Pinochet, pero nadie mueve un dedo», El Periodista, 15 abril 2002. Yo, por mi parte, entrevisté también a un antiguo integrante del equipo de investigación que viajó a Santiago y participó en la redacción del texto que recomendaba el enjuiciamiento de Pinochet. Ambas historias coinciden. El informe fue enviado a la división criminal para revisarlo, y allí permaneció a pesar de los múltiples intentos que se hicieron para que se aprobase y se enviara a la fiscal general. Según mi fuente, el informe nunca llegó al despacho de Janet Reno, aunque sí parece que esta recibió informes al respecto antes de que Clinton y su gabinete abandonaran el poder.

[43] La carta, remitida a Marcus Raskin, quien había escrito al Departamento de Justicia en nombre de Murray Karpen, estaba firmada por Bruce Swartz, ayudante de Ashcroft. Su contenido está recogido en la hoja informativa del Instituto de Estudios Políticos en internet Pinochet Watch, Nº 35, 11 abril 2001.

[44] El autor agradece la contribución de Joshua Frens-String y Carly Ackerman en el proceso de investigación, elaboración y redacción de este apartado.

[45] «La carta de Pinochet al Senado», La Tercera, 4 julio 2002.

[46] Permanent Subcommittee on Investigations of the Committee on Governmental Affairs, United States Senate, 109º Congreso, 2ª sesión, S. HRG. 108-633, Money Laundering and Foreign Corruption: Enforcement and Effectiveness of the Patriot Act (15 julio 2004), GPO, 2004, p. 21. (En adelante: Senado 2004). Si el primer informe se centraba en el incumplimiento, por parte del Riggs Bank, de las leyes relativas al blanqueo de dinero, hay un segundo estudio, fechado el día 16 de mayo de 2005 (en adelante: Senado 2005), en el que se examinan todas las cuentas empleadas en Estados Unidos por Augusto Pinochet: una red de diez instituciones financieras de la que el Riggs era la más amplia.

[47] «RE: Business Meetings During Trip to Chile and Ecuador», en Senado 2005, p. 20.

[48] Senado 2005, p. 21.

[49] Ibid., p. 22. Estos no fueron los únicos halagos que recibió Pinochet en la correspondencia enviada por el personal del Riggs. Así, por ejemplo, Timothy Coughlin escribió en carta con fecha 10 de noviembre de 1997: «De los libros que me obsequió, estoy acabando ahora la lectura de El día decisivo. La objetividad fáctica con que trata su excelencia la historia del Chile de principios de la década de 1970 resulta tan fascinante como instructiva. La historia solo juzga con rectitud cuando se conocen los hechos verdaderos». En otro escrito del 14 de noviembre de 1997 señala con entusiasmo Joseph Allbritton: «Su excelencia ha librado a Chile de la amenaza de un gobierno totalitario y un sistema económico arcaico basado en la propiedad estatal y la planificación centralizada. Los estadounidenses y el resto del Hemisferio Occidental hemos contraído una deuda colosal con su excelencia, y estoy convencido de que su legado será el de crear un mundo más próspero y seguro para sus hijos y sus nietos». (Senado 2005, pp. 23-25).

[50] Ibid., p. 25.

[51] Senado 2004, p. 21.

[52] Senado 2005, p. 28.

[53] El Departamento de Justicia de Estados Unidos impuso una multa de dieciséis millones de dólares al Riggs en enero de 2005 por semejante proceder. En febrero del mismo año, el banco llegó a un acuerdo con el abogado Joan Garcés, quien exigía la devolución de los fondos entregados a Pinochet, y proporcionó ocho millones de dólares a la Fundación Presidente Allende, presidida por Garcés en Madrid. Allbritton pagó un millón más de sus fondos personales y Garcés se comprometió a redistribuir los nueve millones del total entre las víctimas chilenas de la represión pinochetista.

[54] Poco después, el 16 de septiembre de 2004, el magistrado español Baltasar Garzón añadió a los cargos de genocidio, terrorismo y tortura los de ocultación de bienes y blanqueo de capitales en conexión con las cuentas que tenía en el Riggs Bank.

[55] «Pinochet daughter is in custody in Chile», The New York Times, 29 enero 2006, p. 4.

[56] «New Spotlight on Pinochet: Probe Renews Push to Prosecute Ex-Dictator», The Washington Post, 25 agosto 2004.

[57] «Entrevista de Pinochet a canal de Miami desata pugna en familia del general (r)», La Tercera, 25 noviembre 2003, disponible en <http://www.icarito.cl/medio/articulo/0,0,3255_5664_44959735,00.html> (consulta: 12 marzo 2009).

[58] Entrevista con el juez Guzmán, 10 diciembre 2004.

[59] Carolina Valenzuela, «Caso Cóndor: Juez Guzmán procesa a Pinochet», El Mercurio (en línea), 13 diciembre 2004.

[60] «Pinochet takes responsibility for his regime’s actions», EFE News Services, 26 noviembre 2006.

[61] Ibid.

[62] «Former Chilean dictator Augusto Pinochet dies—News sparks violent clashes between opponents, police...», The Guelph Mercury, Ontario

(Canadá), 11 diciembre 2006.

[63] «Pinochet to be buried without state funeral, mourning...», Agence France-Presse, 11 diciembre 2006.

[64] «Bachelet calls on army to punish Pinochet grandson for remarks», Agence France-Presse, 13 diciembre 2006.

[65] «Army ousts Pinochet’s kin», The New York Times, 14 diciembre 2006, p. 27.

[66] «Pinochet grandson kicked out of military over funeral», Deutsche Press-Agentur, 14 diciembre 2006.

[67] «Pinochet’s plea from the grave», Herald Sun, Melbourne (Australia), 14 diciembre 2006. [El texto íntegro en español puede consultarse en <http://www.elmundo.es/elmundo/2006/12/24/internacional/1166976334.html> (N. del T.)].

[68] «Pinochet’s posthumous letter fails to impress», EFE News Service, 26 diciembre 2006.

[69] «Pinochet justifies coup from grave», The Yorkshire Post, Yorkshire (Inglaterra), 26 diciembre 2006.

[70] Datos tomados del sitio web de la principal base de datos sobre responsabilidad legal de Chile: Observatorio de Derechos Humanos. Véase <http://www.icso.cl/observatorio-derechos-humanos/cifras-causas-case-statistics/> (consulta: marzo 2013).

[71] «6 accused in 1982 death of Chilean leader», The New York Times, 7 diciembre 2009.

[72] Departamento de Estado, «Renewing Efforts to Resolve the Horman, Teruggi, and Weisfeiler Cases», 1 abril 2000.

[73] Más de un año después, en octubre de 2002, el Departamento de Estado envió por fin una extensa nota diplomática que respondía a las preguntas

planteadas por Guzmán a Kissinger.

[74] Embajada de EE.UU., «Consul General's meeting with Judge investigating Weisfeiler case», cablegrama, 5 diciembre 2005.

[75] En el sitio web creado por Olga Weisfeiler, <www.boris.weisfeiler.com> se recoge información detallada sobre la causa de su hermano.

[76] Helms murió en noviembre de 2002 a la edad de ochenta y nueve años. El abogado de la familia Schneider, Michael Tigar, modificó y volvió a entablar el pleito el 12 de noviembre de 2002. Las citas están extraídas de este último, archivado como Civil Action Nº 1: 01-CV-01902.

[77] Este pleito fue entablado por diez supervivientes chilenos y por familiares de víctimas de tortura, desaparición y homicidio, así como por la familia del economista español Carmelo Soria, a quien los agentes de la Dina torturaron en casa de Michael Townley hasta acabar con su vida. Este último fue llamado también a declarar, junto con Kissinger, en calidad de acusado. Véase el caso Nº 1: 02-CV-02240, p. 3, del Tribunal estadounidense del Distrito de Columbia. Michael Tigar volvió a ejercer aquí de abogado de la acusación.

[78] Véase el memorando enviado por John Warner al subdirector de la CIA, «Discussions with Phil Buchen and James Wilderotter and resulting requests», 25 junio 1975.

[79] A Sarah Anderson, integrante veterana del Instituto de Estudios Políticos, corresponde el mérito de haber acuñado el participio Pinocheyed, que ha pasado a formar parte del vocabulario del movimiento de defensa de los derechos humanos.

[80] Véase «Barrado no Brasil», Revista Época, abril 2002.

[81] Fue Bill Press, quien presentaba entonces el programa «Crossfire» junto con Rober Novak, quien planteó esta pregunta a Kissinger. Este respondió asegurando que nunca había sucedido tal cosa, tras lo cual atribuyó al

antiguo embajador Edward Korry la idea de frustrar la investidura de Allende. Con todo, Kissinger sabía muy bien que, tanto en los cablegramas que se habían intercambiado ellos dos y Nixon como en las reuniones que habían mantenido, el embajador se opuso siempre de plano a la posibilidad de un golpe de Estado militar, razón por la que lo habían mantenido al margen de la vía II durante los últimos meses de 1970. Véase el capítulo 1.

[82] Véase la transcripción de «News Hour» con Jim Lehrer, «Pursuing the Past», 20 febrero 2001.

[83] Valdés participó, invitado por el autor, en un grupo de expertos de la Asociación de Estudios Latinoamericanos en torno al proyecto de Desclasificación de Chile.

[84] Los comentarios de Tyson se recogieron en un cablegrama del Departamento de Estado, «Human Rights Commission: Agenda Item 5, Chile», 9 marzo 1977.

[85] Entrevista con Theodore Piccone, 9 junio 2002.

[86] Casa Blanca, «Statement by the Press Secretary», 13 noviembre 2000.

[87] Gabriela fue entrevistada por Patricio Guzmán para la película El caso Pinochet. Tal como declara al final del documental: «La fuerza de la memoria es algo que nos permitirá sanar; por eso es tan importante establecer la memoria colectiva: para poder vivir ahora y poder construir el futuro».